



UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA  
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO EN HISTORIA DE AMÉRICA LATINA

TRABAJO QUE PRESENTA Dº  
**ANTONIO RAMOS RAMÍREZ**  
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR EN HISTORIA DE AMÉRICA

**ATEP: DE LA ESCUELA A LAS CALLES. CONSTRUCCIÓN Y  
TRANSFORMACIONES DEL SINDICALISMO DOCENTE TUCUMANO,  
1949-1976**

**DIRECTOR: JUAN MARCHENA FERNÁNDEZ**

SEVILLA, 2015







*A la memoria de dos maestros:*

*F. Isauro Arancibia*  
*Eduardo Rosenzvaig*

Pobre el salario de aquel que enseña  
De donde viene la brasa y la leña;  
La historia se hace a fuego lento  
Y el pueblo sabe que el maestro es el viento

Jorge Giles, *Apuntes de lucha y esperanza*

## ÍNDICE GENERAL

Índice general.....	p.I
Índice de gráficos, tablas e ilustraciones .....	p.V
Lista de abreviaturas.....	p.VII
Agradecimientos .....	p.IX
Resumen .....	p.XI
Résumé .....	p.XII
Introducción .....	p.1

### **PARTE I:**

Estructura socioeconómica de Tucumán y análisis del colectivo de los trabajadores de la educación .....	p.16
---	------

#### **Capítulo 1. Tucumán: de los inicios azucareros al primer gobierno peronista. p.17**

1.1. Acerca de las especificidades socioeconómicas de Tucumán .....	p.17
1.2. El escenario tucumano: consideraciones en torno al espacio provincial.....	p.19
1.3. Los inicios de la actividad azucarera en Tucumán .....	p.27
1.3.1. Trabajadores para el azúcar .....	p.30
1.4. La expansión del modelo y las primeras crisis .....	p.38
1.4.1. La vida y el trabajo en el ingenio .....	p.45
1.4.2. El azúcar tucumano como problema nacional .....	p.50
1.5. La fractura de 1930.....	p.53
1.5.1. El movimiento obrero tucumano antes del peronismo: 1935-1943.....	p.55
1.6. La “Revolución en junio” en Tucumán, 1943-1946.....	p.56
1.7. A modo de balance .....	p.57

#### **Capítulo 2. Análisis de la estructura educativa y del trabajo docente en Tucumán.....**

2.1. Hacia la construcción del objeto de estudio: los trabajadores de la educación como actor social en vías de proletarización .....	p.59
---	------

2.2. El estado de la cuestión .....	p.66
2.2.1. Las investigaciones desde la historia de la educación .....	p.67
2.2.2. Las investigaciones sobre el sindicalismo docente.....	p.70
2.3. La estructura del sistema educativo en Tucumán .....	p.72

## **PARTE II:**

<b>El sindicalismo docente tucumano: articulación, transformaciones y luchas de un actor social.....</b>	<b>p.80</b>
--	-------------

### **Capítulo 3. Los inicios del sindicalismo docente en Tucumán: ATEP en su etapa de formación (1949-1955).....**

3.1. Construcción y primeras experiencias del sindicalismo docente tucumano.....	p.81
3.2. Interpretaciones en disputa: algunas consideraciones acerca del peronismo .....	p.82
3.2.1. El peronismo como fenómeno de masas nacional.....	p.86
3.2.2. De conflictos y soluciones: el primer peronismo en Tucumán .....	p.90
3.3. La creación de ATEP y su primera comisión directiva (1949-1952) .....	p.94
3.3.1. La primera intervención gremial .....	p.98
3.3.2. Trámites, viajes y primeras críticas hacia la consolidación institucional..	p.102
3.4. Renovación de la dirigencia y continuidad en las estrategias .....	p.118
3.4.1. La concreción de algunos resultados .....	p.122
3.4.2. Primeras tentativas de integración oficialista .....	p.127
3.5. La consolidación de ATEP en los últimos años del peronismo (1954-1955) ....	p.131
3.5.1. Renovación parcial y disciplina interna.....	p.132
3.5.2. Algunos éxitos: Francisco Javier Herrera, secretario general .....	p.144

### **Capítulo 4. La década de la consolidación, 1955-1966 .....**

4.1. La “Revolución Libertadora” en Tucumán .....	p.152
4.2. Los años del letargo, 1955-1957.....	p.156
4.3. La vuelta a la “normalidad” .....	p.160
4.3.1. Retorno a la acción gremial .....	p.162



4.3.2. Desde abajo y apuntando arriba: elecciones y nueva directiva .....	p.166
4.3.3. El largo camino hacia la unificación docente .....	p.174
4.4. La ruptura de la tradición.....	p.178
4.4.1. Antecedentes de las huelgas .....	p.179
4.4.2. El desarrollo de los conflictos .....	p.183
4.4.2.1. Intervención militar y cambios de gobierno .....	p.190
4.4.2.2. Promesas incumplidas .....	p.202
4.4.3. Balance de los movimientos de fuerza .....	p.204
 <b>Capítulo 5. Los efectos de la crisis: solidaridad y unión sindical, 1966-1973.....</b>	<b>p.207</b>
5.1. El quiebre de la provincia.....	p.207
5.2. El cambio hacia la proletarización de los trabajadores de la educación.....	p.212
5.2.1. Fragmentación y renovación de la unidad docente .....	p.215
5.2.2. La radicalización del conflicto .....	p.217
5.3. El congreso de Tucumán y la unión de los docentes.....	p.234
5.3.1. De la CGERA a la CTERA .....	p.244
 <b>Capítulo 6. De la frágil esperanza al trágico final, 1973-1976 .....</b>	<b>p.260</b>
6.1. Acción gremial y politización .....	p.261
6.2. Las protestas contra la Ley de Educación .....	p.273
6.2.1. Los movimientos huelguísticos nacionales y su repercusión en Tucumán .....	p.286
6.3. El “Operativo Independencia” y el comienzo del terrorismo de Estado .....	p.305
6.4. El estallido de la violencia y las últimas horas .....	p.312
 <b>Conclusiones.....</b>	<b>p.315</b>
<b><i>Conclusion</i> .....</b>	<b>p.321</b>

## **Anexo I.**

Acta de reunión de la comisión directiva, Acta n° 1, 26/11/1949 .....	p.326
Acta de reunión de la comisión directiva, Acta n° 77, 18/03/1954 .....	p.327
Acta de reunión informativa celebrada en Aguilares, Acta n° 147, 28/06/1958 .....	p.330
Acta de reunión de la comisión directiva, Acta N° 46, 14/11/1962 .....	p.333
Acta de reunión de la comisión directiva, Acta n° 134, 28/06/1966 .....	p.334
Acta de reunión de asamblea extraordinaria, Acta n° 75, 11/06/1971 .....	p.335

## **Anexo II.**

<i>ATEP en Marcha</i> .....	p.336
-----------------------------	-------

## **Fuentes y bibliografía..... p.340**

<i>Fuentes inéditas</i> .....	p.340
<i>Censos, estadísticas y publicaciones oficiales</i> .....	p.340
<i>Documentos educativos</i> .....	p.341
<i>Publicaciones sindicales y de organizaciones políticas</i> .....	p.341
<i>Diarios provinciales</i> .....	p.341
<i>Diarios nacionales</i> .....	p.341
<i>Revistas</i> .....	p.342
<i>Entrevistas</i> .....	p.342
<i>Bibliografía citada y consultada</i> .....	p.344

## ÍNDICE DE GRÁFICOS, TABLAS E ILUSTRACIONES

### Gráficos:

1. Extensión de las provincias del NOA. El NOA en km<sup>2</sup> ..... p.22
2. Evolución de la población de Tucumán ..... p.36
3. Personal docente en educación primaria ..... p.73
4. Escuelas por dependencia: enseñanza primaria..... p.74
5. Establecimientos escolares por jurisdicción y dependencia: Tucumán..... p.75
6. Alumnos matriculados por dependencia..... p.75
7. Alumnos matriculados por dependencia y jurisdicción: Tucumán ..... p.76
8. Evolución del número de alumnos matriculados, número de establecimientos y ratio de alumnos/establecimientos en la educación primaria ..... p.76
9. Personal docente por dependencia..... p.77
10. Personal docente por jurisdicción: Tucumán ..... p.78
11. Personal docente por jurisdicción y dependencia: Tucumán ..... p.78

### Tablas:

1. Evolución del crecimiento de la población el Tucumán..... p.31
2. Población del NOA por provincias..... p.31
3. Porcentaje de la población tucumana en el NOA ..... p.32
4. Migraciones intrarregionales de nativos en el NOA. Participación porcentual por provincias según los destinos ..... p.33
5. Población y representación porcentual por áreas ..... p.34
6. Población de Tucumán por departamentos..... p.35

### Ilustraciones:

1. Mapa político: provincias de Argentina ..... p.21
2. División departamental de Tucumán..... p.23
3. Mapa físico: provincia de Tucumán ..... p.26
4. Francisco Isauro Arancibia en el acto de inauguración del Congreso Nacional de Educación, 11/10/1970 ..... p.241
5. Asamblea de delegados sindicales, 10/1970..... p.242
6. Rueda de prensa de la comisión directiva de ATEP, 25/03/1973 ..... p.263

7. Asistentes a la rueda de prensa, 25/03/1973.....	p.263
8. Encuentro entre los representantes de la comisión directiva de ATEP y gobierno provincial, 15/05/1974.....	p.283
9. Asistentes a manifestación convocada por ATEP, 07/06/1974.....	p.283
10. Reunión de delegados de ATEP, 02/08/1974.....	p.284
11. Votación en las elecciones para renovar la comisión directiva, 05/08/1974. p.	284
12. Celebración del día del maestro y homenaje floral a Sarmiento, 12/09/1974. p.	285
13. Manifestación, 19/09/1974 .....	p.285
14. Intervención de F. Isauro Arancibia, 25/06/1975 .....	p.308
15. Entrega de premios del concurso escolar, 30/10/1975 .....	p.309
16. Antonio D. Bussi dirigiéndose a la asamblea de maestros reunida con ocasión de la intervención de ATEP, 25/04/1976 .....	p.315

## LISTA DE ABREVIATURAS

AA	Archivo ATEP
ADA	Agremiación del Docente Argentino
AGET	Agrupación Gremial de Educadores de Tucumán
ALT	Archivo de la Legislatura de la Provincia de Tucumán
AND	Acuerdo de Nucleamientos Docentes
APEM	Agrupación de Profesores de Enseñanza Media (Tucumán)
ATEP	Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales
CAMYP	Confederación Argentina de Maestros y Profesores
CD	Comisión Directiva
CGERA	Confederación general de Educadores de la República Argentina
CGP	Confederación General de Profesionales
CGT	Confederación General del Trabajo
CGT-A	CGT de los Argentinos
CTERA	Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
CUDAG	Comité Unificador Docente de Acción Gremial
DIPBA	Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
FDT	Federación Docente de Tucumán
FOTIA	Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera
PEN	Poder Ejecutivo Nacional
UCIT	Unión de Cañeros Independientes de Tucumán
UDA	Unión Docentes Argentinos



## **AGRADECIMIENTOS**

Son muchas las deudas de gratitud que las líneas que siguen mantienen con quienes acompañaron en este viaje, y aún con el riesgo de caer en involuntarias omisiones, no se puede menos que intentar agradecerles en este momento.

Desde sus comienzos, esta investigación contó con el apoyo del Dr. Juan Marchena, quien dirigió e impulsó el trabajo durante todo el trayecto. Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide, donde se impartió el programa de Máster y Doctorado en Historia de América Latina: “Mundos Indígenas”, en el que se enmarca esta tesis doctoral, puso en mis manos todas las facilidades para poder llevar a término este propósito. Además, el Ministerio de Educación del Gobierno de España tuvo a bien incluirme como becario del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario, gracias al cual pude participar en actividades docentes y de investigación que no hubiera podido disfrutar de otro modo. Además de la formación académica recibida, quiero resaltar por encima de todo, la imborrable experiencia humana que supuso compartir aquellos meses con los compañeros y profesores que, en última instancia, acabaron por convertirse en compañeros de ruta.

En mis primeros años en la Universidad de Murcia fue donde, gracias a profesores como el Dr. Juan Andreo y el Dr. Alejandro García, se despertó una vocación que no ha dejado de reforzarse con el paso de los años. Una mención especial merece el Dr. Eduardo Rosenzvaig, quien me recibió en Tucumán allá por el año 2006. En él encontré quien me mostrara de primera mano las complejidades de esa sociedad que entonces me resultaba tan lejana. Además, su obra fue la que primero hizo justicia a la figura de Francisco Isauro Arancibia, con un trabajo pionero, germen indudable del interés por los sucesos que a continuación se contarán.

Como no podía ser de otra manera, mi deuda con Tucumán se extendió con el paso del tiempo. De este modo, quiero agradecer a Patricia Fernández, directora del Museo Casa Histórica de la Independencia, por haberme acogido en el Centro de Investigaciones Históricas que allí se aloja. Con ocasión de mi segunda estancia, fue la Dra. María Celia Bravo quien aprobó mi participación en el Instituto Superior de Estudios Sociales del CONICET, donde tuve ocasión de entrar en contacto con investigadores que compartían las mismas preocupaciones que me rondaban. Asimismo,

no puedo olvidar los muy provechosos encuentros mantenidos con el Dr. Roberto Pucci, quien además me acompañó en algunas de las entrevistas realizadas a antiguos miembros de la comisión directiva de ATEP. En este sentido, muy especialmente quiero expresar el entrañable recuerdo que mantengo de la desinteresada ayuda que me brindó Aurora Teresa Racedo de Silberstein, quien compartió conmigo su archivo personal y me obsequió con su afecto. Al Dr. Bernard Lavallé debo la oportunidad de haber pasado cuatro meses investigando en el CRIAL, de la Universidad Paris III-Sorbonne Nouvelle, experiencia ésta que fue complementada con los tres meses que la Universidad Pablo de Olavide me concedió para investigar en el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard.

Este recorrido excedió con mucho lo estrictamente académico y tengo el orgullo de poder decir que siempre conté con el apoyo de mis compañeros del Área de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Además, los amigos de Murcia, Sevilla, Tucumán y París siempre estuvieron presentes en esta empresa, lo supieran o no. A ellos, toda mi gratitud.

Estas palabras no alcanzan para reconocer suficientemente lo que me ayudó Carmen Martínez, compañera de vida, que compartió conmigo los buenos momentos y los que no lo fueron tanto, eso sí, derrochando siempre su paciencia y cariño que, a pesar de todo, espero no haber agotado.

Finalmente, el incondicional apoyo de mi familia es la razón última por la cual se explica que se haya podido hacer frente a este desafío. A mi hermana Marta le debo el uso que siempre hizo de su templanza, cuandoquiera que el autor parecía comenzar a desbarrar. A mis padres, Antonio y Juana, va dedicado este trabajo, porque sin ellos nada de lo bueno que he tenido ocasión de disfrutar habría tenido lugar.

París, 10 de julio de 2015.



## RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo presentar el análisis y la reconstrucción histórica de la trayectoria recorrida por ATEP (Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales), un sindicato de maestros primarios dependientes del sistema educativo de la provincia de Tucumán (Argentina), fundado a fines de 1949. Ante la escasez de estudios sobre organizaciones sindicales docentes, nuestra investigación quiere arrojar luz sobre el proceso de construcción y las transformaciones vividas en el seno de la entidad. En suma, en este trabajo pretendemos contribuir con un aporte historiográfico que complete lo que sabemos acerca de una fracción de la clase trabajadora argentina, subrayando la importancia del enfoque regional a la hora de plantear el problema investigativo.

Nuestra tesis parte de un análisis de las condiciones sociopolíticas existentes en el momento de la fundación de ATEP, impulsada por el peronismo desde el gobierno provincial. Los primeros años de ATEP se caracterizaron por su naturaleza heterónoma respecto del poder político establecido. Sin embargo, el análisis de esta primera etapa viene a demostrar que la acumulación de experiencia militante sentó las bases para la apertura del sindicato, a partir de 1958, a una dirigencia renovadora y de carácter combativo que fue capaz de movilizar a los trabajadores de la educación de manera inédita. La permanente tensión que se mantuvo con los sucesivos gobiernos provinciales y los escasos éxitos obtenidos, así como la creciente pauperización del resto de la clase trabajadora en Tucumán, aceleró el ritmo de mutación que en la autopercepción del colectivo docente se estaba operando y terminó de tejer los lazos de solidaridad con otros colectivos de trabajadores, alejándose de la tradicional idea que entendía la docencia como apóstoles civilizatorios con escasa identificación obrera.

En el seno de ATEP, la convulsa década de 1966-1976 estuvo marcada por la politización creciente de sus manifestaciones y actos públicos, así como por el aumento de la intensidad y frecuencia de los movimientos de fuerza. Asimismo, las luchas docentes se efectuaron, cada vez más a menudo, junto con otros sindicatos del sector, lo que cristalizó organizacionalmente en la fundación de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), a través de la cual se coordinaron las acciones de lucha a partir de 1973.

## **RÉSUMÉ**

Le présent travail de recherche a pour objectif de présenter l'analyse et la reconstruction historique du parcours l'ATEP (*Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales*), un syndicat de Professeurs des Ecoles Primaires fondé fin 1949, dépendant du système éducatif de la province de Tucumán (Argentine). Partant du constat d'un manque d'études sur les organisations syndicales des enseignants, notre recherche veut apporter un éclairage sur le processus de construction et les transformations vécues au sein de l'entité. En somme, dans ce travail, nous voulons contribuer à pallier à ce manque via un apport historiographique qui complète ce que nous savons déjà à propos de cette fraction de la classe ouvrière argentine, en soulignant l'importance de l'approche régionale au moment de poser le problème de notre recherche.

Notre thèse part d'une analyse des conditions sociopolitiques existantes au moment de la fondation de l'ATEP, stimulée par le péronisme depuis le gouvernement de la province de Tucumán. Les premières années de l'ATEP se sont caractérisées par sa nature hétéronome envers le pouvoir politique en place. Cependant, l'analyse de cette première étape vient démontrer que l'accumulation d'expériences militantes posa les bases de l'ouverture du syndicat, à partir de 1958, à un groupe de dirigeants rénovateurs et de caractère combatif, qui furent capables de mobiliser les travailleurs de l'éducation d'une manière inédite. La tension permanente qui persista avec les gouvernements successifs et le manque de succès obtenus, auxquels s'ajoutent la croissante paupérisation du reste de la classe ouvrière à Tucumán, accélérèrent le rythme de mutation de l'auto-perception du collectif des enseignants et finirent de consolider la solidarité avec d'autres collectifs de travailleurs, en s'éloignant de l'idée traditionnelle qui définissait les enseignants comme des apôtres de la civilisation sans identification ouvrière.

Au sein de l'ATEP, la décennie de 1966-1976 fut marquée par la politisation croissante de ses déclarations et actes publics, ainsi que par l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des mouvements de force. De la même manière, les luttes des enseignants se développèrent et furent de plus en plus fréquemment en collaboration avec d'autres syndicats du secteur, ce qui cristallisa au niveau organisationnel la formation de la CTERA (*Condeferación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina*), par le biais de laquelle s'organiseront les actions de lutte depuis 1973.

## INTRODUCCIÓN

*“Un lugar bisagra, entre lo que existe y lo que debe ser. Allí estaba colocado el maestro”<sup>1</sup>*

En un debate televisivo, celebrado en 1997, se encontraron cara a cara el ex dirigente sindical Alfredo Bravo<sup>2</sup> y el comisario y represor de la dictadura Miguel Etchecolatz<sup>3</sup>. En un momento del acalorado enfrentamiento, Etchecolatz se dirigió a Bravo de la siguiente manera: “Doctor...eh..., perdón, maestro Bravo...”<sup>4</sup>. Con manifiesta voluntad de vejar al docente, Etchecolatz pretendía degradar a Bravo por su condición de inferioridad con respecto a quienes son reconocidos por el superior tratamiento. Tan solo una muestra más entre muchas, aunque ésta particularmente hiriente, del rol que determinados actores sociales y políticos le atribuyen al colectivo de los trabajadores de la educación. La tensión del debate aumentó cuando, en una inaudita demostración de hipocresía criminal, Etchecolatz quiso obligar a Bravo a admitir que fue el almirante E. Massera quien le devolvió la libertad.

Tres lustros después, en su discurso de apertura del 130º periodo de sesiones del Congreso de la Nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un llamamiento a los docentes para que colaborasen y, sobre todo, reflexionaran sobre los valores de la escuela pública. En su alocución, la Presidenta argentina exhortó a los maestros a dejar de lado sus problemas salariales y a que reconocieran las inversiones

---

<sup>1</sup> Eduardo Rosenzvaig en el documental “Maestro del viento”, realizado por militantes de CTERA. Disponible en: <http://www.suteba.tv/video/reproductor/id/69>. Sobre su estreno véase este artículo del diario *Página 12*: <http://www.pagina12.com.ar/2001/01-05/01-05-22/pag12.htm> (Consultado el 04/07/2015).

<sup>2</sup> Nacido en la provincia de Entre Ríos en 1925, Alfredo Bravo fue docente, sindicalista, secretario gremial de CTERA, subsecretario de Educación con el gobierno de Raúl Alfonsín y diputado nacional. A causa de su militancia gremial, estuvo detenido-desaparecido entre los días 8 y 20 de septiembre de 1977, permaneciendo encarcelado hasta 1979. Falleció en mayo de 2003.

<sup>3</sup> Miguel Etchecolatz (1929), fue comisario de policía en la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires durante el período dictatorial de 1976-1983. Fue el primer represor condenado y reenviado a cumplir su pena en prisión común tras la derogación de la ley de obediencia debida. Véase: Diario *Página 12*, 24/06/2006, en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-68936-2006-06-24.html> (Consultado el 28/03/2012).

<sup>4</sup> De este enfrentamiento da cuenta una nota de prensa del diario Clarín que, sin embargo, no transcribe el detalle que mencionamos, que sí se puede observar en la grabación de la emisión. Véase: Diario *Clarín*, 30/08/1997, en: <http://edant.clarin.com/diario/1997/08/30/t-01802d.htm> (Consultado el 28/03/2012). Un fragmento del programa disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=183HgIpuVOs> (Consultado el 28/03/2012).

que el gobierno realizaba en materia de cultura y educación<sup>5</sup>. Los argumentos de Cristina Fernández reposaban sobre la concepción tradicional del docente abnegado y pertinentemente sometido a los superiores intereses que su actividad ha de aportar al país.

En virtud de estos ejemplos podemos señalar que estas manifestaciones no son tanto llamaradas aisladas entre sí, como episodios que, de ser leídos como parte del decurso histórico, apuntan a la existencia de un conflicto que se viene desarrollando desde hace décadas, cuyas resultantes aún no han terminado de cristalizar. La minusvaloración del ejercicio de la profesión docente, los beneficios de los que gozan en comparación con trabajadores del sector privado y el llamamiento a que este colectivo tenga más presente el compromiso con su labor que el ejercicio de su derecho a plantear movilizaciones dirigidas a reivindicar mejoras en las condiciones laborales, se han empleado tradicionalmente como argumentos para tratar de neutralizar los conflictos que históricamente el magisterio planteó.

La insistencia en el mantenimiento de esta construcción del imaginario social en la que se define al docente como un trabajador privilegiado, situado a medio camino entre la tarea intelectual y la de agente “civilizador” del Estado, da cuenta de la relación dialéctica existente frente a los integrantes del colectivo de trabajadores asalariados, que fundamentalmente desde el restablecimiento del gobierno civil en 1958, pugnaron por el reconocimiento como colectivo dentro del sistema productivo, a través de la participación en la militancia sindical. Esta idea va más allá de la elaboración de un argumento según el cual el docente caería súbitamente en la cuenta de que ya no

---

<sup>5</sup> Aclaramos que no es nuestra intención presentar equivalencia de ningún tipo entre quienes expresan estas posiciones sobre los trabajadores de la educación. Al contrario, el interés de esta comparación reside en exponer los elementos comunes que se pueden relevar a partir de dos personalidades que representan valores ciudadanos antagónicos. Este que sigue es un fragmento de la intervención donde la presidenta Fernández de Kirchner aborda la cuestión salarial de los docentes: “No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica le cierran la persiana y los echan; por el tiempo que también tienen de cuatro horas frente a la jornada laboral obligatoria de ocho horas para cualquier trabajador; frente a la suerte también, porque siempre fue así y está bien que sea así, de tres meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas; con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de *netbooks*. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes siempre tengamos que hablar de salarios y no hablemos de qué pasa con los pibes que no tienen clases. (Aplausos). Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Hemos repartido casi 2 millones de *netbooks*, en una inversión extraordinaria del Estado, a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos”. En: <http://www.presidencia.gov.ar/discursos/25724-apertura-del-130o-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-nacional-discurso-de-la-presidenta-de-la-nacion> (Consultado el 28/03/2012).

formaba parte de los sectores medios, sino que lo entendemos más bien como un proceso de aprendizaje donde los elementos autorreferenciales en el ámbito cultural se fueron transformando y progresivamente convergiendo con los del resto de trabajadores asalariados. La idea del docente como ajeno a los intereses de la clase trabajadora no nos parece acertada, por muy asentada que haya estado en las ciencias sociales<sup>6</sup>.

Si bien es cierto que este papel de “instructor público” tiene más que ver con las posibilidades de reproducción de las condiciones y relaciones socio-económicas de producción<sup>7</sup>, o dicho desde un enfoque epistemológico distinto, con la transmisión del capital simbólico<sup>8</sup>, los docentes atravesaron este período de conflictividad social incorporándose a las luchas de quienes hasta entonces parecían integrar en exclusividad la clase trabajadora en la Argentina<sup>9</sup>. De este modo, cuando hablemos de los docentes, utilizaremos de preferencia el término “clase trabajadora” ya que entendemos que así se puede evitar el estrechamiento de la categoría que provoca el empleo de “clase obrera”<sup>10</sup>.

¿Cómo explicar, pues, que los maestros dejaran de ser los decimonónicos “apóstoles laicos de la civilización” para convertirse en uno de los colectivos de

---

<sup>6</sup> Sirva como ejemplo, en un estudio sobre la clase obrera del norte de Inglaterra en los años 20 y 30, lo que R. Hoggart apunta como definición: “La mayoría de los habitantes que trabajan de empleados perciben un jornal, y no un sueldo, jornal que se les paga semanalmente y la mayoría carece de otra fuente de ingresos. [...] No es fácil distinguir a los trabajadores del resto por la cantidad de dinero que ganan, ya que hay una enorme variación de jornales entre la clase obrera. Muchos de los trabajadores del acero, por ejemplo, pertenecen a la clase obrera, pero ganan más que algunos maestros de escuela que no son de la clase obrera”. Véase: Hoggart, Richard, *La cultura obrera en la sociedad de masas*. Grijalbo, México, 1990. Extracto disponible en: [http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/hoggart.\\_quienes\\_constituyen\\_la\\_clase\\_obrera.pdf](http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/hoggart._quienes_constituyen_la_clase_obrera.pdf)

(Consultado el 28/03/2012).

<sup>7</sup> Althusser, Louis, *Ideología y aparatos ideológicos de Estado*. Nueva visión, Buenos Aires, 1974. Disponible en: [http://www.ucm.es/info/eurotheo/e\\_books/althusser/index.html](http://www.ucm.es/info/eurotheo/e_books/althusser/index.html) (Consultado el 28/03/2012).

<sup>8</sup> Bourdieu señala que, además, estos agentes están sometidos a la doble presión que ejerce el Estado acerca de la importancia de su desempeño, y los insuficientes medios que las instituciones ponen a disposición para que los objetivos proclamados puedan ser efectivamente alcanzados: “*Ces agents de l’État sont traversés par les contradictions de l’État, qu’ils vivent souvent, au plus profond d’eux-mêmes, comme des drames personnels: contradictions entre les missions, souvent démesurées, qui leurs sont confiées [...] comme celles qui résultent des espoirs et des désespoirs suscités par l’institution scolaire*”. Bourdieu, Pierre, “La démission de l’État”, en: Bourdieu, Pierre (Dir.), *La misère du monde*, Éditions du Seuil, París, 1993, p. 344.

<sup>9</sup> Respecto a la noción de clase, seguimos a E.P. Thompson cuando dice que “la clase es una formación tanto cultural como económica”. En: Thompson, E.P., *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Crítica, Barcelona, 1989, Tomo I, p. 17.

<sup>10</sup> No obstante, por cuestiones de estilo, y principalmente cuando evoquemos a los trabajadores de la industria azucarera, preferiremos la denominación de “clase obrera”, ya que la literatura científica emplea más frecuentemente ésta última.

trabajadores más movilizados de la Argentina? ¿Cuáles fueron las prácticas sindicales que conformaron la experiencia colectiva de estos trabajadores? ¿Se trató exclusivamente de acciones destinadas a mejorar las condiciones de la actividad laboral o bien se hicieron planteamientos que trascendieron ese ámbito, acabando por dirigirse contra las posiciones políticas que asumieron los sucesivos gobiernos? ¿Qué transformaciones tomaron forma al interior de este colectivo?

En un sentido amplio, los procesos de transformación de las estructuras económicas que se implementaron en Argentina desde el primer gobierno de Perón hasta el último golpe militar de 1976, marcaron las experiencias vividas por los sectores asalariados del país. En la memoria de los trabajadores argentinos, aunque sea expresarlo con trazo grueso, sobrevivió el recuerdo de los años peronistas como un período de avances y mejoras en sus condiciones de vida, gracias a las políticas redistributivas que alcanzaron a la clase trabajadora del país. Lo experimentado a partir de 1955, con alternancia de períodos de intervención militar y apertura formalmente democrática aunque tutelada y con el peronismo proscrito, se tradujo en la experiencia de los trabajadores como un proceso de disminución del poder adquisitivo otrora alcanzado, merma de las coberturas sociales y suspensión de libertades políticas. La combinación de estos factores, que no respondía sólo a percepciones, sino que su asidero argumental era, en verdad, más que sólido, provocó que el periodo dejara la sensación de haber obtenido un neto balance negativo. La movilización de los docentes, así como la reelaboración de su autopercepción como colectivo, tiene un asidero fundamental en el empeoramiento gradual de las condiciones materiales de subsistencia. En última instancia, la proletarización progresiva de sectores medios, tal y como fue el caso de los docentes, resultó un hecho patente durante los años 1955-1976, entendido este proceso bidireccionalmente, desarrollándose tanto en lo referente a las condiciones objetivas como en la construcción subjetiva del sujeto social<sup>11</sup>.

La conformación de la clase trabajadora, desde nuestro punto de vista, ha de ser analizada bajo el prisma de procesos sociales dinámicos que con su desarrollo acaban

---

<sup>11</sup> Empleamos aquí la noción propuesta por E.P. Thompson, quien considera imprescindible prestar atención a la dialéctica que existe entre ser social y conciencia social, al tiempo que advierte que no se debe caer en el error de sobreponer la economía a la cultura. Compartimos, por tanto, la siguiente idea: “los valores están situados en un contexto material, y las necesidades materiales están situadas en un contexto de normas y expectativas”. En: Thompson, E.P., *Agenda para una historia social radical*. Crítica, Barcelona, 2000, p. 11.

por articular realidades sociales alejadas de las que se ocupaban en el punto de partida, cuyos protagonistas desconocen el final de la senda que inician en un momento dado<sup>12</sup>. Desde esta óptica, y con el trabajo de bisturí que requiere la investigación histórica, el presente trabajo pretende arrojar luz sobre el proceso de construcción organizacional y transformación en tanto que actor social encarnados por los trabajadores de la educación.

Sumergirse en estos vericuetos exige cierto arrojo y no está exento de riesgos historiográficos, algo que se ha querido amortiguar en el curso de la investigación con la decidida intención de no intentar abarcar la multiplicidad de elementos que confluían en las realidades del sindicalismo de los docentes de todo el país. Es por esto que con nuestra elección se restringió el campo de estudio a una sola entidad sindical, ahora bien, tanto por la relevancia de la agrupación escogida, como por la voluntad de no ceñir nuestro análisis a una suerte de crónica localista de corto alcance, se primó la búsqueda de informaciones que certificaran el papel determinante que este sindicato jugó en la estructuración del sindicalismo docente de la Argentina. Por lo tanto, la investigación que aquí se presenta bajo el título *ATEP: de la escuela a las calles. Construcción y transformaciones del sindicalismo docente tucumano, 1949-1976*, ha pretendido que la reconstrucción del recorrido histórico de la Agrupación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) no constituyera tan sólo un fin en sí mismo, sino que sirviera para sumar una pieza más al campo de los estudios sobre la clase trabajadora argentina durante el tercer cuarto del siglo XX. Asimismo, entre los motivos por los que se decidió trabajar sobre esta organización, diremos también que la fuerza y número de la militancia sindical se convierten en una clave significativa. En agosto de 1973, el momento de fundación de la CTERA, ATEP contaba con 5.180 afiliados, lo que la situaba como la quinta mayor organización, de ámbito provincial, en el país<sup>13</sup>.

El problema que sirve como punto de partida a esta investigación se aloja en los mecanismos de transformación puestos en práctica por un colectivo de trabajadores

---

<sup>12</sup> Acha, Omar, *Las huelgas bancarias de Perón a Frondizi (1945-1962): contribución a la historia de las clases sociales en la Argentina*, Buenos Aires, Ediciones CCC, 2008, pp. 15 y ss.

<sup>13</sup> El Sindicato Argentino de Docentes Particulares era la organización más numerosa de la CTERA, sumando los 8.035 afiliados en todo el país. Las organizaciones de ámbito provincial que superaban en número a ATEP eran las siguientes: Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, 8.970; Asociación de Maestros de Buenos Aires, 7.217; Federación Única Sindical de Trabajadores de la Educación, 6.006, Confederación de Maestros de Capital Federal, 5.328. En: Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 127, legajo nº 217, tomo I, fs. 24-32.

quienes, mediante su incorporación a la vida de la entidad sindical, recorrieron un sinuoso camino. En su origen, la organización sindical docente tucumana formaba parte del entramado organizacional de naturaleza heterónoma impulsado por el gobierno peronista, resultando ser en sus primeros años una entidad adicta a los intereses del gobierno, tanto provincial como nacional, y prácticamente inmóvil en el plano de los planteamientos sindicales. Las transformaciones que estudiamos nos servirán para explicar cómo y por qué la organización se terminó por convertir en uno de los más destacados actores sociales, resistentes y combativos, que se enfrentaron al proceso de depauperación sufrido, no sólo por los trabajadores docentes, sino también por el resto de obreros de la provincia<sup>14</sup>. La intención de delinear los diversos perfiles de las etapas recorridas a lo largo de esta mutación constituyó, por tanto, el motor de arranque que impulsó la investigación que aquí se presenta.

En función de este objetivo se eligió una periodización de amplitud suficiente como para dar cuenta de que las posiciones ocupadas por el magisterio tucumano, a lo largo de más de veinticinco años de experiencia sindical, mutaron profundamente. El año 1949 se nos impone por ser el de la fundación de ATEP, promovido por el impulso que el gobierno peronista intentó dar al asociacionismo profesional, en un sector de trabajadores en el que no había logrado constituirse como referente político mayoritario. Como final de este proceso, se consideró que el asesinato de quien fue el máximo dirigente de ATEP durante más de veinte años, coincidente con el golpe del 24 de marzo de 1976, determinaba el violento final de una particular historia. Es así que, a partir de ese momento, se interrumpen las continuidades que se observan en el período precedente y se imprime sobre los militantes docentes el efecto cáustico que el gobierno militar se aplicó concienzudamente en imponer a los actores sociales y políticos.

Con el escenario planteado, llama la atención el silencio historiográfico acerca de la presencia de ATEP en el espacio público de Tucumán. En este sentido, la producción azucarera, determinante en la estructura económico-social provincial, ha convocado la

---

<sup>14</sup> A lo largo de este trabajo, se atenderá a las luchas protagonizadas por los trabajadores de la educación. Sobre el concepto de lucha, seguimos la propuesta de P. Berrotarán y P. Pozzi, que expresan en estos términos: "...¿siempre lucha la clase obrera? Depende de qué se quiere decir con 'lucha'. Si se entiende por esto batallas campales, puño en alto, con contenido implícitamente revolucionario, es evidente que no. Pero si por lucha se entiende toda aquella actividad (económica, social, cultural y política) que al definir la cohesión de una clase la contrapone a otra(s), entonces sí". En: Berrotarán, Patricia y Pozzi, Pablo (Comp.), *Estudios inconformistas sobre la clase obrera argentina*. Ediciones Letra Buena. Buenos Aires, 1994, p. 11.



mayor parte de los esfuerzos investigativos, reproduciéndose una imagen de Tucumán que aún alberga espacio para introducir nuevos estudios que completen el estado actual del conocimiento sobre el pasado de la provincia<sup>15</sup>.

El aporte historiográfico al que apunta la presente investigación se sostiene por motivos que apuntan a diversas direcciones. En primer lugar, la rica producción historiográfica sobre la Argentina no lo es tanto cuando se refiere a los espacios regionales, considerados periféricos en un Estado que acusa una macrocefalia estructural, que encuentra su correlación si se hace inventario de los análisis que las ciencias sociales han destinado a las provincias del interior. Si bien es cierto que desde hace algo más de una década la historiografía ha comenzado a ajustar su mirada a la escala regional, este trabajo pretende, siquiera parcialmente, contribuir a enmendar una visión tendente a identificar las dinámicas porteñas con las del resto del país. De este modo, el propósito que ha guiado la investigación ha sido el de situar el foco del microscopio de la reconstrucción histórica en un espacio que no debe ser entendido autónomamente, sino como conformador de una realidad histórica compleja, en la que se hace necesario atender a los modos de imbricación y los pliegues producidos por las capas que la componen.

Por otro lado, es necesario señalar que el sindicalismo docente en la Argentina adolece de estudios sistemáticos hasta la fecha, panorama aún más evidente en el particular caso tucumano<sup>16</sup>. Las investigaciones que abordaron el papel de los educadores en la historia argentina lo hicieron bien desde la perspectiva de la historia de la educación o, mucho más subsidiariamente, como parte de la historia de los trabajadores, a la que la literatura científica aún no ha terminado por incorporar. En el primer grupo podemos señalar la obra coordinada por A. Puiggrós, donde el volumen

---

<sup>15</sup> La mayor parte de estudios se han orientado hacia el análisis de las cuestiones fundamentales de la estructura productiva que necesitó el azúcar para su despegue en el siglo XIX, así como trabajos acerca de la política regional en la segunda mitad del siglo XIX. Más recientemente, la historiografía ha centrado sus intereses en las relaciones entre Estado e industriales azucareros, durante los momentos de crisis que se sucedieron, así como en el proceso de incorporación de los obreros azucareros al sindicalismo oficialista. A partir de 2010, han aparecido otros estudios que se han abocado a demostrar la existencia de un movimiento obrero tucumano previo al surgimiento del peronismo y, desde una perspectiva del estudio de los movimientos políticos, se han publicado estudios acerca del radicalismo en la provincia o el peso de los sectores católicos. En el capítulo 1 se hará una revisión pormenorizada de esta producción.

<sup>16</sup> Una muy citada excepción a esta norma es el trabajo pionero de: Vázquez, Silvia Andrea; Balduzzi, Juan, *De apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente, 1957-1973*, Buenos Aires, Ediciones CTERA, 2000. En el capítulo 2 se presenta un estado de la cuestión acerca de los estudios que han abordado el sindicalismo docente en Argentina.

que coincide con nuestra cronología aborda la cuestión del sindicalismo docente como parte del entramado que configura la convulsa realidad social provincial, pero sin detenerse en un análisis en profundidad<sup>17</sup>. El trabajo de S. A. Vázquez y J. Balduzzi, que ya hemos mencionado antes, es el primer intento de reconstrucción autónoma del movimiento sindical docente, investigación que se sigue manteniendo como referencia obligada, aún cuando desde el Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” de la CTERA, se siguen impulsando estudios que van en esta dirección.

Entendemos, por lo tanto, que la presente investigación presenta conclusiones pertinentes a distintos niveles. Por un lado, consideramos que la perspectiva de la historia regional en Argentina puede arrojar datos que complejicen los estudios sintéticos. En este sentido, se ajusta la escala de nuestro análisis, pero no así la voluntad de contribuir a un debate más amplio, donde la suma de los estudios de escala micro arroje un resultado mayor que el de la simple agregación de estudios parciales. Escapa a los objetivos de esta tesis, pero pensamos que su aporte puede ir en la línea de construir un sólido campo de estudio que identifique a los docentes como una fracción de la clase trabajadora que, sometida a un proceso de proletarización, acaba por superar las fracturas organizativas y se articula como un nuevo actor social a escala nacional. En este sentido, obligados por la cronología, queremos insistir sobre una evidencia observada: el discurso y las prácticas del sindicalismo docente tucumano trascendieron el espacio de las reclamaciones estrictamente vinculadas a su práctica profesional y tendieron a converger con el resto de sectores asalariados de la provincia. Por esto se prestará especial atención a la observación de los cambios que operaron a lo largo de este proceso.

En una investigación anterior, donde trabajamos acerca de los mecanismos de la represión y la violencia política ejercida durante el *Operativo Independencia* en Tucumán<sup>18</sup>, llamó poderosamente nuestra atención que a lo largo de los testimonios

---

<sup>17</sup> Suayter, María A.; Ferreyra de Vizgarra, María E.; Del Valle Ferreyra, Alba Noemí, “Historia de la educación pública en Tucumán, 1945-1985”, Puiggrós, Adriana (Coord.), *Historia de la educación en la Argentina*, Vol. VII. Buenos Aires, Editorial Galerna, 1997, pp. 429-470.

<sup>18</sup> En la documentación consultada, resulta interesante comprobar que a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta, la provincia de Tucumán se convierte en un problema nacional, de presencia constante en los medios de comunicación. Manifestaciones culturales de importancia como el *Tucumán Arde*, las movilizaciones de los obreros azucareros y el despliegue de Ejército Revolucionario del Pueblo (el ERP, brazo armado del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, que contaba con el salteño Mario Santucho a la cabeza), convirtieron a esta provincia del interior en la depositaria de un

recogidos, la figura de Francisco Isauro Arancibia<sup>19</sup>, presidente de ATEP, emergía como un referente constante entre los luchadores sociales. Su asesinato, junto con el de su hermano y también docente Arturo René, en la madrugada del 24 de marzo de 1976 y en la sede del propio sindicato, donde Isauro vivía, habían sido reconstruidos en el trabajo pionero de Eduardo Rosenzvaig, titulado “La oruga sobre el pizarrón”. La lectura de este trabajo, y las conversaciones con su autor, despertaron las primeras preguntas de la investigación. En un contexto donde las personalidades del sindicalismo azucarero habían tenido tanta relevancia, sirvan como ejemplo los dirigentes de FOTIA Atilio Santillán o Benito Romano, cómo se podía explicar que el presidente de un pequeño sindicato de maestros apareciera de forma tan frecuente en las reconstrucciones orales mientras que la historiografía no se había ocupado de estas cuestiones. En adelante, otra pregunta movió nuestro itinerario investigativo: ¿qué procesos sociales de fondo se habían dado en las décadas de los cincuenta y los sesenta para explicar que uno de los primeros objetivos del golpe militar en Tucumán fuera un sindicato de maestros?

La hipótesis de trabajo con la que arrancó la investigación consistía en proponer que este proceso sólo pudo ser protagonizado por los docentes gracias a la conformación de una organización sindical que hubiera demostrado su músculo reivindicativo a lo largo de todo el período. Asimismo, la participación de los docentes debía obligatoriamente pasar por un proceso de redefinición del lugar del docente en la estructura productiva, por parte de los trabajadores que conformaban el colectivo de los educadores. Además, entendimos que la defensa de los valores de la educación pública, obligatoria, laica y gratuita significaron, en la práctica, una propuesta política que combatió a los gobiernos autoritarios que se sucedieron en el período. Pensamos que, en un escenario donde las libertades se proscriben, la lucha por una escuela al servicio de los sectores populares tiene como consecuencia última la contraposición entre dictadura y democracia, conflicto en el cual los docentes tucumanos se significaron activamente.

---

persistente problema socio-económico para los gobiernos militares se sucedieron hasta 1973. Cuando la presidenta María Estela Martínez de Perón se sometió a las presiones de las FF.AA., en febrero de 1975, se suprimieron las libertades constitucionales en la provincia, con lo que se inauguró el terrorismo de Estado que se prolongó a partir del 24 de marzo de 1976. Un trabajo acerca de este momento de efervescencia política, social y cultural en: Orquera, Fabiola, *Ese ardiente jardín de la república*. Alción, Córdoba, 2010.

<sup>19</sup> Arancibia nació en la localidad de Monteros un 25 de marzo de 1926, en el seno de una familia que compartía su vocación por el magisterio. Cursó estudios en la Escuela Normal Nacional “Juan Bautista Alberdi” de la capital tucumana. Llegó a la presidencia de ATEP con poco más de treinta años, cargo que ocupó hasta el día de su asesinato, ocurrido un día antes de que cumpliera cincuenta años.

Aceptado este punto debimos comprobar si, en efecto, las prácticas del sindicato docente significaron una ruptura con la tradición previa. En este sentido, la acción colectiva apareció como elemento que puso de manifiesto el alto nivel de movilización social del colectivo durante todo el periodo de estudio, al tiempo que puso en funcionamiento dispositivos de unión entre los trabajadores de la educación y otros colectivos. Si bien es cierto que ATEP no se integró a ninguna central sindical, no debemos desdeñar la unión de voluntades de la que se participó con los cañeros y los obreros del surco y de la fábrica, lo que en la práctica expresaba una identidad de clase que, en este caso, no pasó por la incorporación a estructuras sindicales preexistentes. Nuestra pregunta inicial solo se pudo responder tras comprobar que las transformaciones vividas por el sindicalismo docente tucumano derivaron, a través de la lucha gremial y la acción colectiva, en una fuerte politización. Aunque en el seno de los docentes tucumanos no se explicitaron preferencias partidarias, la puesta en valor de ideas como “independencia”, “autodeterminación”, “soberanía”, “justicia social” y “democracia”, no hacía sino atacar la excepcionalidad institucional que la sucesión de gobiernos militares, que hurtaron la voluntad popular, impuso en repetidas ocasiones entre 1955 y 1976.

Otro de los elementos sobre los que se quiso centrar el análisis fue la particular relación que los trabajadores de la educación tuvieron, y tienen, que mantener con sus empleadores. Al contrario que en el caso de los asalariados del sector privado, la docencia cuenta con una “patronal pública” que, en teoría, no busca maximizar beneficios. De entrada, esta situación podría hacer pensar que la docencia no sufrió los intentos de racionalización económica aplicados en el sector privado, pero la experiencia nos demuestra que no fue el caso. Para comprender la trayectoria militante que atraviesa la docencia era necesario entender cómo reaccionaba la administración, provincial y nacional, ante las peticiones que sus trabajadores efectuaban. Sin especular sobre qué podría haber ocurrido si los hechos se hubieran dado de otro modo, no podemos evitar pensar que la decisión de los sucesivos gobiernos de oponerse sistemáticamente a las peticiones de los docentes, alimentó el caldo de cultivo que nutrió la beligerancia del sindicalismo docente. Nos parece, por tanto, que la actitud de permanente contingencia de los gobiernos de la época favoreció en buena medida la conclusión a la que llegaron los docentes en Tucumán: la única opción posible para

conseguir mejoras en el terreno económico, o en el desempeño de su profesión, era mediante la acción de fuerza colectiva.

Para tratar de dar respuesta a estas preguntas tuvimos que enfrentar el problema de las fuentes. Durante la investigación llevada a cabo en el marco de la tesis de maestría, tuvimos ocasión de recabar varios testimonios que, si bien no se circunscribían específicamente a nuestro objeto de estudio, nos sirvieron enormemente para comprender el “zeitgeist” en el que teníamos que zambullirnos. Esta operación, para un historiador de otro continente y sin más vínculos previos con la sociedad tucumana que los encontrados en los libros, no fue una cosa menor. Es por esto que, aunque los testimonios no son citados en el cuerpo del trabajo, hemos querido destacarlos en primer lugar. Con ocasión de las estancias de investigación llevadas a cabo en 2008 y 2009 tuvimos la inmensa suerte de poder compartir varias conversaciones con personalidades muy importantes en la vida de Francisco Isauro Arancibia. Queremos por eso subrayar que este trabajo debe mucho a las horas pasadas con Amalia, Italia y Gladis Arancibia, hermanas de Francisco Isauro y Arturo René, y muy especialmente las tardes pasadas con Aurora Teresa Racedo de Silberstein, quien conservaba cuidadosamente parte de la escasa documentación gremial que se pudo encontrar en el curso de la investigación.

Los testimonios son utilizados como fuentes orales después de haber aplicado la metodología propuesta por la historia oral, de fuerte arraigo en la historiografía argentina contemporánea<sup>20</sup>. De este modo, en la mayoría de encuentros se eligió el formato de entrevista con cuestionario abierto, mientras que en dos ocasiones, con reuniones en las que intervinieron más de un encuestado, se optó por la observación participante. Sin embargo, después del proceso de verificar la información obtenida con el resto de fuentes, se prefirió no emplear las entrevistas como material de cita, sino que nos sirvió para ayudar a construir la atmósfera de época en la que se ubica la investigación.

Como intuimos que será la norma en la mayoría de casos, este trabajo no estuvo exento de agradables sorpresas. La más importante de ellas fue la relativa a las fuentes

---

<sup>20</sup> En este sentido, es importante destacar la labor que viene realizando la Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA), con la celebración de encuentros periódicos de alcance nacional e internacional, siguiendo la estela de investigadores como Pablo Pozzi o los pioneros trabajos sobre la memoria de Elisabeth Jelin.

primarias, ya que gracias a la colaboración del personal de ATEP se pudo tener acceso a los libros de actas de reunión de la comisión directiva del sindicato desde su fundación en 1949 hasta 1968, así como del libro de actas de reunión de las asambleas ordinarias y extraordinarias de delegados escolares, entre 1962 y 1975. Este corpus documental constituye la fuente fundamental sobre la que se construye nuestro trabajo. La rara oportunidad de poder acceder a series completas de documentación interna sindical es una suerte que no muchos investigadores encuentran en el curso de sus pesquisas. El análisis de estos documentos nos ha permitido, por tanto, realizar un pormenorizado seguimiento de las actividades del sindicato, en el que nuestra función ha sido la de cribar los datos irrelevantes de cara a tratar de responder atinadamente nuestras preguntas de investigación. Además, dentro de lo que produjo el sindicato, también tuvimos ocasión de consultar algunos números del boletín *ATEP en marcha*, aunque la periodicidad de su publicación fue irregular.

Para cotejar y complementar estos datos elegimos la prensa como nuestra principal fuente de verificación. Se han podido analizar las series completas del diario tucumano *La Gaceta*, y para el último período, algunos números del diario vespertino *Noticias*. De igual modo se han podido consultar varios diarios y revistas de tirada nacional, con la doble intención de explorar acerca de la opinión publicada que se editaba respecto de los problemas tucumanos. Al mismo tiempo, esta revisión nos sirvió para consolidar otro de los ejes que hemos querido trabajar, este es, el de la participación en el proceso de construcción institucional del movimiento sindical a escala nacional. En estas ocasiones la mención de ATEP es infrecuente, pero la consulta de estas publicaciones nos resultó útil para construir una mirada nacional del problema.

Para indagar en la relación entre el sindicalismo docente y su “patronal pública” recurrimos al archivo de la Cámara de Diputados y Senadores de la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán. En este caso, estos documentos nos sirvieron tanto para hacer el seguimiento del ordenamiento jurídico sobre el que se asentaba el sistema educativo y el ejercicio de la profesión docente, como para comprobar que en el seno de la legislatura también existían sensibilidades contrapuestas respecto de los planteamientos del sindicalismo docente. En este repaso de las fuentes, no queremos obviar que para el estudio que realizamos en el capítulo 2, consultamos publicaciones

estadísticas oficiales desde las cuales pudimos extraer los datos necesarios para entender la estructura en la que se desenvuelve el colectivo de trabajadores que estudiamos.

La lectura crítica de la masa documental nos hizo reflexionar acerca de la estructura del trabajo aquí presentado. Como ya se ha señalado, nuestra intención es la de analizar el origen y las transformaciones de una fracción de la clase trabajadora a través de sus prácticas sindicales. Sin embargo, nos pareció evidente que el esquema necesario para dotar de sentido a esta hipótesis era de tipo diacrónico. De este modo, entendimos que la estructura argumentativa debía girar en torno a los hitos político-sociales del período. Hubiera resultado difícil entender un trabajo de esta naturaleza si las cesuras cronológicas no se hubieran situado en los momentos de ruptura institucional que, en prácticamente todos los casos, se hicieron extensivos a lo largo de todo el país, aunque para el caso del *Operativo Independencia*, la represión estatal sí que se ejecutó exclusivamente en la provincia tucumana.

El trabajo se ha dividido en dos partes, que suman seis capítulos en total. La primera parte, compuesta de dos capítulos, tiene como objetivo sentar las bases necesarias para acercarse al problema de investigación. Hemos incidido en que con nuestra investigación queremos resaltar la pertinencia de la perspectiva regional en la historiografía sobre la Argentina, por lo cual se decidió dedicar un primer capítulo a escrutar las características espaciales, demográficas, económicas y sociales de la provincia. Este recorrido, trazado gracias a los aportes investigativos clásicos, y con la ayuda de los de más reciente aparición, quiere hacer entender que la estructura productiva de Tucumán y su consecuente configuración social, tuvo importancia en el momento en el que ATEP apuesta por la convergencia con otros colectivos de trabajadores y empieza, del mismo modo, a dotar más intensamente de contenido político sus manifestaciones públicas. El segundo capítulo nos acerca al problema de los trabajadores como actores sociales. Para sustentar nuestra hipótesis construimos una perspectiva analítica según la cual los trabajadores docentes se encuentran inmersos en una estructura económica en vías de proletarización, lo que entendemos sirve para explicar los comportamientos que más adelante analizaremos pormenorizadamente.

La segunda parte del trabajo está compuesta por cuatro capítulos que recorren detalladamente la vida de la organización, divididos según el criterio cronológico ya

expuesto. El tercer capítulo abarca desde la fundación de ATEP, en noviembre de 1949, hasta la “Revolución Libertadora”. Además de lo evidente que resulta la fecha de inicio, el término de este capítulo viene impuesto porque durante la Libertadora se suspendió la actividad de los gremios y el silencio de las fuentes se impone. El cuarto capítulo arranca en 1957, cuando se retomó la actividad del sindicato y emerge la figura de quien será su líder histórico. La división interna del capítulo está marcada por los conflictos que enfrenta el gremio, entre ellos varias acciones de fuerza pero, de nuevo, entendemos que es el golpe de 1966 el momento en el que se fractura el sistema socio-económico tucumano y, por lo tanto, el punto desde el cual debemos interpretar de otro modo las actuaciones que seguirá ATEP, ya en un contexto de gobierno militar autoritario. Nuestro quinto capítulo corresponde al período en el que el gobierno nacional fue ocupado sucesivamente por los generales Onganía, Levingston y Lanusse, hasta la nueva convocatoria de elecciones, que tuvieron lugar en la primavera de 1973. En esta etapa cobrarán especial importancia los movimientos tendentes a lograr la unificación nacional del movimiento sindical docente, así como la integración en plataformas en defensa de la economía tucumana, maltrecha luego del cierre de once de los veintitrés ingenios azucareros que se contaban en la provincia. El último capítulo ocupa el breve espacio de tiempo en el que se volvió a la normalidad democrática, si bien es cierto que se hace prácticamente imposible hablar de normalidad en un contexto en el que la violencia política estaba enormemente presente en todos los sectores de la sociedad. La inestabilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón, a partir de julio de 1974, no hizo sino empeorar las condiciones del enfrentamiento, cediendo a las presiones de la extrema derecha, que le llevaron a aprobar el despliegue del ejército en Tucumán con el propósito declarado de “aniquilar la subversión”. Es en este capítulo donde las movilizaciones a escala nacional ocupan más espacio, ya que luego de la fundación de la CTERA, en septiembre de 1973, ATEP siempre adhirió a los movimientos de fuerza convocados por la confederación de los docentes.

El trabajo se cierra con una conclusión en la que se expondrán de modo sintético los aportes historiográficos que se han alcanzado con este estudio. Como ya se ha mencionado, esta tesis pretende demostrar que los educadores son trabajadores de la educación que, a fuerza de verse sometidos a un empeoramiento de sus condiciones materiales de subsistencia, optaron por la integración a una estructura orgánica que les



incorporó y que respondió con solvencia a sus demandas, aunque la consecución de sus objetivos concretos fuera limitada. Por último, cerramos el trabajo con un anexo documental en el que se seleccionan algunas actas que hemos considerado importantes reproducir en su integridad y con un segundo anexo en el que reproducimos algunas de las publicaciones sindicales que pudimos rescatar.

Está presente en todo el trabajo pero, no por casualidad, hemos intentado no poner el acento sobre una personalidad que debería ostentar un reconocimiento mayor que el que recibe en la sociedad argentina actual. El posicionamiento historiográfico de esta tesis, inserta en la historia social, otorga más importancia al colectivo que a la individualidad, pero no queremos olvidar que uno de los grandes artífices de lo que aquí se cuenta fue Francisco Isauro Arancibia. Este trabajo no es una biografía, aunque Isauro bien la merece, sin embargo, nos gustaría que estas líneas se entendieran como un modesto pero sincero homenaje a las personas que como él, dedicaron la vida a la empeñada convicción de que a través de la educación se puede aspirar a tener una sociedad mejor y, sobre todo, que merece la pena dar esa pelea.

## **PARTE 1**

### **Estructura socioeconómica de Tucumán y análisis del colectivo de los trabajadores de la educación**

## I. TUCUMÁN: DE LOS INICIOS AZUCAREROS AL PRIMER GOBIERNO PERONISTA

### 1.1. Acerca de las especificidades socioeconómicas de Tucumán

*“Es Tucumán...el país de los variados contrastes: llanuras relativamente bajas de un poco más de 200 metros y altas montañas de más de 5.000 metros, nieves y sol abrasador; torrentes impetuosos o secos, fuentes límpidas y aguas cenagosas; la vegetación lujuriente de los trópicos de la llanura y faldas de la sierra y las nieves eternas en las cumbres inaccesibles. Todos los accidentes del suelo, y todos los climas reunidos; en una palabra, la imagen reducida del mundo en 27.000 kilómetros cuadrados”<sup>1</sup>*

Las líneas que siguen a continuación tienen como propósito aportar algunos datos e interpretaciones que permitan ubicar al lector frente a las características geográficas, demográficas, económicas y sociales del espacio regional tucumano. Esta es una provincia singular por contraste con la configuración del resto del país y consideramos que la atención a sus particularidades servirá como base sobre la que asentar y edificar de nuestra hipótesis de investigación. Si la cuestión transversal que atraviesa nuestro trabajo no es otra que la construcción, desarrollo y transformación de un colectivo de trabajadores de la educación, no debemos olvidar que la dimensión provincial de ATEP define la naturaleza y el sentido de sus prácticas sindicales (aunque más adelante veremos cómo traspasó estas fronteras), así como el universo referencial en el que se desarrolló el sindicalismo docente tucumano. Es por esto que consideramos fundamental explicar, para una mejor comprensión posterior, el factor determinante que suponía la estructura económica basada en la agroindustria azucarera, alrededor de cuya masa social gravitarán el resto de movimientos políticos, sindicales y estudiantiles de la provincia, a lo largo de las décadas de que se ocupa nuestra investigación.

---

<sup>1</sup> Correa, Antonio, *Geografía general de la Provincia de Tucumán. Conteniendo todos los últimos datos oficiales*, Buenos Aires, UNT, 1927, p. 17. Cfr: Paterlini de Koch, Olga, *Pueblos azucareros de Tucumán*, Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Tucumán, 1987, p. 15.

Para lograr alcanzar esta meta, en primera instancia, se prestará atención al espacio geográfico tucumano que, como se probará, se nos muestra como un lugar donde el clima, la fertilidad de los terrenos y la composición hídrica propiciaron que se desarrollara vigorosamente una economía basada en las actividades agrícolas.

Posteriormente se realizará un acercamiento a la evolución recorrida por la economía provincial, donde se pondrá de relieve el impacto de la modernización de los sistemas de explotación agroindustrial en la reconfiguración de las relaciones sociales derivadas del particular modo de producción azucarero. Desde la implantación de los arcaicos trapiches, hasta el potente despegue de la segunda mitad del siglo XIX, la demanda de mano de obra y las dificultades para reclutar trabajadores, así como su compleja inserción en este engranaje socioeconómico de nuevo cuño, serán aspectos considerados en este capítulo.

A continuación, nuestro objetivo será el de señalar los cambios imprimidos sobre el suelo y las gentes que habitaban Tucumán en el tiempo en que la llegada del ferrocarril, el impulso del poder político central y el oxígeno financiero aportado por el fácil acceso al crédito, comenzaron a moldear la provincia con la forma del monocultivo azucarero.

Una vez definidos estos elementos, estructurales unos y coyunturales otros, nos acercaremos al período en el que la producción azucarera se convirtió en el blanco de las críticas que la acusan de ser mantenida artificialmente, fruto del proteccionismo estatal, con los problemas provocados por la sucesión de crisis de sobreproducción, así como por la caída del precio del producto en el mercado internacional.

Finalmente, en los años previos a la aparición en escena del peronismo, constataremos la creciente presencia de conflictos sociales, que a lo largo del siglo XX marcarán a la provincia de Tucumán. Los mecanismos de resolución de estos conflictos, antes del punto de inflexión que supuso la consolidación del movimiento peronista, constituirán el último punto tratado en este capítulo, donde abordaremos los mecanismos mediante los cuales el peronismo consiguió reformular la hegemonía política en la provincia, siendo el territorio donde el Partido Justicialista obtuvo la victoria electoral con mayor rotundidad.

## 1.2. El escenario tucumano: consideraciones en torno al espacio provincial

En un país donde las dinámicas de extensión del control espacial propiciaron la división administrativa del territorio nacional en extensas provincias, Tucumán aparece como una isla interior, rodeada del resto de regiones que componen el Noroeste argentino (en adelante NOA)<sup>2</sup>.

Si nos remontamos a finales del siglo XVII, el Tucumán colonial se extendía por más de 700.000 km<sup>2</sup>. En su interior se podían contar las ciudades de San Salvador de Jujuy, San Felipe de Lerma (en el valle de Salta), Nuestra Señora de Talavera o Esteco, Madrid de las Juntas, Todos los Santos de la Nueva Rioja, Córdoba de la Nueva Andalucía, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán (en ese tiempo a orillas del río Pueblo Viejo)<sup>3</sup>. No obstante, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Tucumán formó parte de la intendencia de Salta, que tenía por capital a esta ciudad<sup>4</sup>.

No fue sino hasta 1814, bajo el impulso del director Posadas<sup>5</sup>, cuando se creó la provincia de Tucumán, fruto de la división de la Intendencia de Salta en dos partes. El texto del decreto que así lo establecía dictaba que: “el territorio que comprenden los pueblos de Tucumán, Santiago del Estero y Valle de Catamarca, formarán desde hoy una provincia del Estado con la denominación de Provincia de Tucumán [...] sus límites serán las respectivas jurisdicciones de los respectivos pueblos”<sup>6</sup>. Del mismo modo, en este decreto se fijaba la capitalidad de la provincia y la residencia del Gobernador Intendente en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Más adelante, en la década de 1820, Santiago del Estero, en primer lugar, y Catamarca, posteriormente, se escindían

---

<sup>2</sup> Este espacio regional está integrado por las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y La Rioja, según la composición recogida en el *Censo Nacional de Población*, Tomo VII, Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Estado y Hacienda, Dirección Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, Buenos Aires, 1960.

<sup>3</sup> Para un análisis de la presencia de las órdenes religiosas en tiempos de la colonia y su influencia en los desplazamientos de las poblaciones indígenas locales véase: Marchena Fernández, Juan, “Señores de indios y pastores de almas. Encomenderos y frailes en el Tucumán del S. XVII”, *Revista Proyecto NOA*, N° 1, 1992, pp. 37-75.

<sup>4</sup> De Santamaría, Estela B.; Moreno, María A. y Setti, Enrique J., “El área jurisdiccional del Tucumán, su representación cartográfica y sus derroteros”, *Cuadernos de Humanitas*, N° 27, 1968, pp. 9-11.

<sup>5</sup> Gervasio Antonio de Posadas detentó, durante poco menos de un año, la concentración del poder ejecutivo que emanaba de su nombramiento como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

<sup>6</sup> De Santamaría, Estela B.; Moreno, María A. y Setti, Enrique J., “El área jurisdiccional del Tucumán...”, *op.cit.*, p. 11.

de la provincia de Tucumán, que permaneció con unos límites imprecisos en su extensión<sup>7</sup>.

Como resultado de esta indefinición en los límites territoriales, se ha podido constatar la existencia de diferencias significativas entre las medidas de la superficie del territorio tucumano ofrecidas desde diferentes instituciones. De este modo, el Anuario Estadístico de la Provincia de Tucumán estimaba una superficie de 27.000 km<sup>2</sup>, mientras que el Instituto Geográfico militar, así como el Comité Nacional de Geografía<sup>8</sup>, cifran esta extensión en 22.525 km<sup>2</sup>.

---

<sup>7</sup> Reproducimos a continuación la delimitación que apuntan De Santamaría *et al.* a este respecto: “A pesar de todas las actuaciones y trabajos realizados, hasta épocas muy recientes, los límites de la provincia de Tucumán, quedaron reducidos y reconocidos por la costumbre en forma que no satisface ni los antecedentes históricos ni los intereses de la misma de la siguiente manera:

Al Norte: desde un punto marcado por los 66°12' Oeste de Greenwich y 26°12' de Latitud Sur sobre el cerro del Cajón por una línea ondulada hasta llegar a las cumbres Calchaquíes por cuyos filos más elevados sigue en dirección Norte hasta las nacientes del río Tala, continuando su curso hasta el lugar denominados Santa Rita, luego por una línea convencional deslinde de propiedades hasta el curso del río de los Saucos o Infiernillo luego por el de del río Ureña hasta el cerro de El Remate.

Al Este: con la provincia de Santiago del Estero, desde las estibaciones del cerro El Remate y su unión con el río Ureña hasta los 65°5' Oeste de Greenwich y 26°56' Latitud Sur, se reconoce provisoriamente por límite una línea quebrada que forma en la mayor parte de su recorrido el deslinde de propiedades, no bien precisada. En esta dirección el límite en su porción Sur sigue un corto trecho el recorrido del río Salí hasta el Oeste de la localidad de Río Hondo y luego también un tramo del curso del río Marapa desde su unión con el Salí. Desde allí vuelve a seguir una línea quebrada, deslinde de propiedades, límite que tiene las mismas características en el Sur en donde las delimitaciones registradas en Catastro Provincial no se ajustan a los fijados en las representaciones cartográficas.

Al Sur y Oeste: con la provincia de Catamarca. Allí la línea limítrofe toma dirección Oeste siguiendo un corto trecho el antiguo cauce del río San Francisco y según algunas interpretaciones hasta el borde Sur de la pequeña sierra de Bajostiné o Potrerillo por cuya cumbre sigue dirección Norte hasta el Sur del cerro Quico, y desde allí atravesando el valle del Singuil hasta la sierra Higueritas, siguiendo por la parte más encumbrada de esta última sierra y luego por la de Narváez con dirección Norte hasta el valle del río Pucará y su unión con el río Potrero; según otras interpretaciones este límite llega hasta la sierra de Paquilingasta o Balcozna por cuyas cumbres llega hasta el valle del Singuil y desde allí hasta las cumbres de Narváez; siempre con dirección Norte el límite llega hasta el valle del río Pucará, continúa por el curso del río Potrero, Quebrada del Cazador hasta el Nevado de El Candado y por las cumbres del Aconquija”. En: De Santamaría, Estela B.; Moreno, María A. y Setti, Enrique J., “El área jurisdiccional del Tucumán...”, *op.cit.*, pp. 21-24.

<sup>8</sup> El dato del Comité Nacional de Geografía es referido al año 1942, mientras que entendemos que las otras dos instituciones toman por bueno el dato ofrecido en el Censo Nacional de 1960, mantenido hasta el último Censo Nacional consultado, del año 2010. En: De Santamaría, Estela B.; Moreno, María A. y Setti, Enrique J., “El área jurisdiccional del Tucumán...”, *op.cit.*, p. 25.

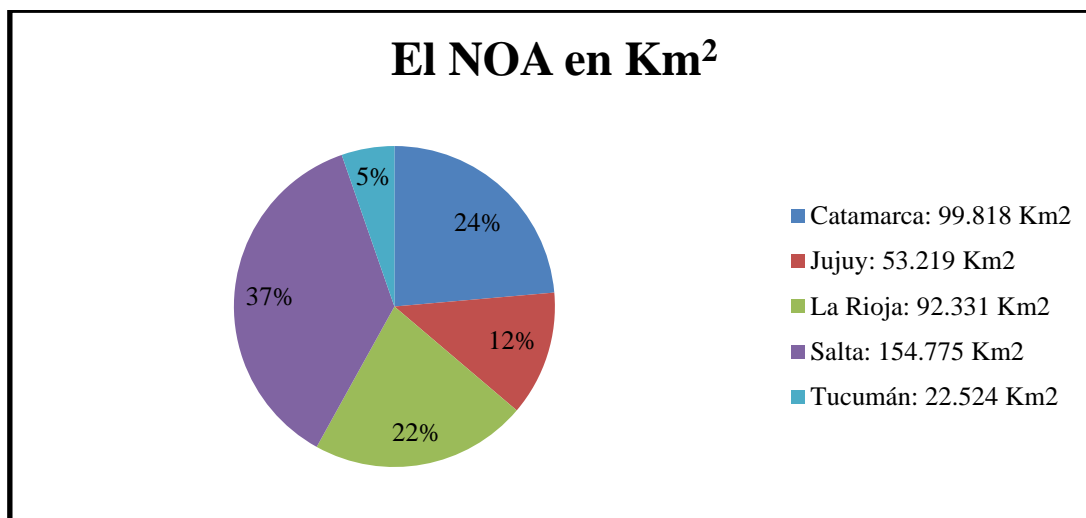
**Ilustración 1. Mapa político: provincias de Argentina<sup>9</sup>**



<sup>9</sup> Fuente: Instituto Geográfico Nacional (hemos suprimido de la ilustración los territorios de la Antártida para mejorar la visibilidad del mapa). Disponible en: <http://www.ign.gob.ar/images/mapasFisicos/mapaBicontinentalA4.jpg> ( Consultado el 23/03/2012)

Del mismo modo, tal como se observa en el Gráfico 1, si se atiende a la relevancia de territorial de la provincia tucumana en el ámbito del NOA, podemos confirmar que se trata de un territorio excepcional en su entorno, ya que sólo supone el 5,3% del total de la región nortea, que en su total alcanza los 422.667 km<sup>2</sup>.

**Gráfico 1. Extensión de las provincias del NOA<sup>10</sup>**



El primer mapa de la provincia de Tucumán del que tenemos constancia, reflejando casi exactamente sus límites actuales, fue publicado en el año 1888 con una escala de 1:3000.000. Su autor fue el ingeniero y geógrafo Antonio M. Correa, de quien también se publicaron, en los años 1907, 1921 y 1922, sendos mapas en escala 1:200.000, esta vez elaborados con normativas oficiales, llegando a ser validado por el servicio geográfico nacional en 1921. Aunque la división departamental no coincide con la actual<sup>11</sup>, su trabajo se convirtió en un referente para numerosas instituciones nacionales y provinciales que los continuaron empleando hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX<sup>12</sup>.

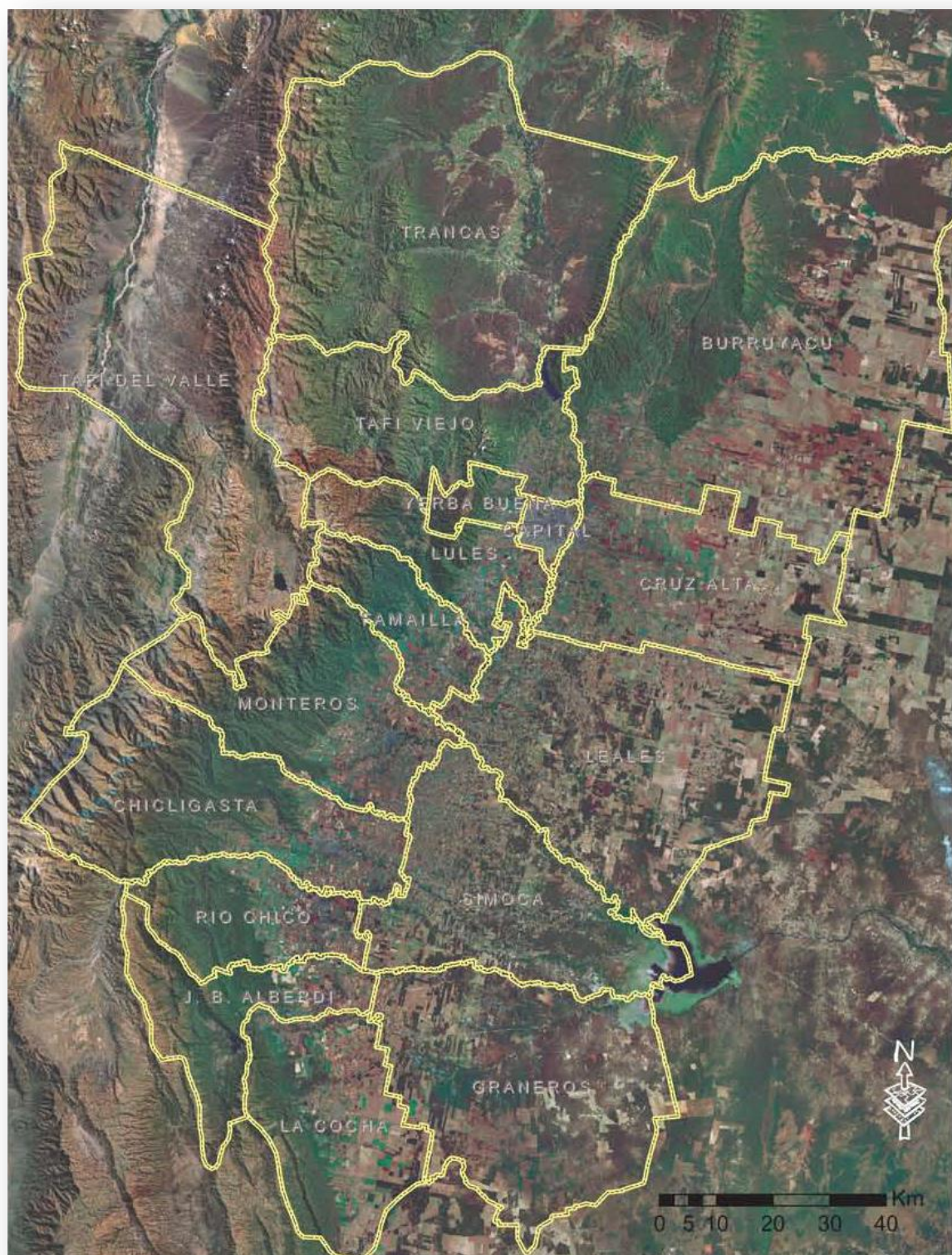
<sup>10</sup> Elaboración propia a partir del *Censo Nacional de Población*, 1960, p. 6.

<sup>11</sup> La provincia pasó de 11 a 17 departamentos en 1976. Véase: Natera Rivas, Juan José y Batista, Ana Ester, "Los cambios en el uso del suelo en el agro de Tucumán (1960-1990)", Bolsi, Alfredo (Dir.), *Problemas agrarios del Noroeste argentino (contribuciones para su inventario)*. Instituto de Estudios Geográficos, Facultad de Filosofía y Letras-UNT, Tucumán 1997, p. 49.

<sup>12</sup> De Santamaría, Estela B.; Moreno, María A. y Setti, Enrique J., "El área jurisdiccional del Tucumán...", *op.cit.*, pp. 42-44.



**Ilustración 2. División departamental de Tucumán<sup>13</sup>**



<sup>13</sup> Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Tucumán. Disponible en: <http://estadistica.tucuman.gov.ar/archivos/9Mapas/91provTucuman.pdf> (Consultado el 23/03/2008).

Si nos detenemos en la morfología del territorio provincial, se verá que está principalmente compuesto por una amplia llanura que se extiende entre los 300 y los 500 metros sobre el nivel del mar, junto con otra llanura deprimida comprendida en cotas inferiores a los 300 m.s.n.m. La principal característica de este territorio es la extensión del piedemonte del sistema del Aconquija y las Cumbres Calchaquies al oeste, así como el de las Sierras subandinas en el noreste. Asimismo, encontramos las playas onduladas del curso superior del río Salí al norte y la del valle Yocavil-Amaicha, una notoria superficie ocupada por altas montañas y montañas medias. Esta morfología posibilita la opción de aprovechar casi las dos terceras partes de la superficie total de la provincia, es decir, alrededor de 2.500.000 hectáreas<sup>14</sup>.

El paisaje tucumano ha sido precisado<sup>15</sup>, en términos físico-geográficos, como una cuenca de alimentación definida con un colector eje, el río Salí. Se trata, en cualquier caso, de una cuenca con estructura asimétrica, puesto que siendo numerosos sus afluentes en la margen derecha, son ciertamente escasos en el lado contrario, hechas las excepciones de los ríos Calera, Loro y Candelaria, así como algunas otras corrientes de poca relevancia que no consiguen sumar su caudal al colector eje<sup>16</sup>.

Esta llanura central, que extiende su recorrido paralela al río Salí, se halla enmarcada por series de montañas que tienen sus manifestaciones más elevadas en su marco occidental. El macizo principal de las montañas tucumanas se extiende desde los Nevados del Aconquija, con sus desprendimientos en el sur, hasta las Cumbres Calchaquies en el norte, donde existen cimas superiores a los 5.000 m.s.n.m. Estas montañas están acompañadas, en su sección septentrional, por sierras que se alternan con valles, también de dirección longitudinal, que van decreciendo en altura en dirección este, hasta dar con la parte más deprimida, donde se encuentra el río colector<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> En: Santillán de Andrés, Selva E., *Esquemas de la estructura socio-económica de la provincia de Tucumán*. UNT-Serie Monográfica, Tucumán, 1970, p. 14. La autora estima que para 1969 sólo un tercio de las hectáreas potencialmente productivas se encontraban en régimen de explotación.

<sup>15</sup> Para más detalles consúltese: García, I. Alicia y Rivas, Ana I., "Provincia de Tucumán: características de su hidrografía". Disponible en: <http://ecaths1.s3.amazonaws.com/geografiadetucuman/1514926265.HIDROGRAFIA2012.doc>

(Consultado el 13/06/2015)

<sup>16</sup> De Santamaría, Estela B.; Moreno, María A. y Setti, Enrique J., "El área jurisdiccional del Tucumán...", *op.cit.*, p. 25.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

La zona de la planicie húmeda se encuentra protegida por la elevación de la Sierra del Aconquija, quedando resguardada de los vientos húmedos y, por tanto, favoreciendo las precipitaciones, que en esta área oscilan entre los 600 y 1000 mm. anuales, siendo los meses de lluvia los comprendidos entre septiembre y marzo. En verano se alcanzan elevadas temperaturas, con máximas que pueden llegar a escalar hasta los 38° o 40°, aunque la media anual se fija en torno a los 20°, apareciendo infrecuentemente las heladas. Esta combinación de factores contribuye a la conformación de un suelo negro, rico en humus, con una textura entre media y gruesa, y ligeramente ácido<sup>18</sup>. Este espacio compone la región fértil de la provincia, abarcando la distancia comprendida entre el piedemonte del sistema del Aconquija hasta unos pocos kilómetros, entre 4 y 5, antes de llegar a la margen derecha del río Salí, y proyectada hacia el noreste por el piedemonte de las Sierras del Noreste, hasta su sección media, en una franja más estrecha que la anterior<sup>19</sup>.

Era en esta zona fértil, principalmente, donde se podían encontrar grandes propiedades, pertenecientes a ingenios azucareros y otro tipo de sociedades anónimas<sup>20</sup>. En algunas de estas grandes propiedades se roturaron tierras con plantaciones que diversificaron los cultivos, entre ellos los de cítricos y hortalizas pertenecientes, por lo general, a un mismo propietario que desarrollaba esta actividad en otras áreas al margen de la que estamos tratando. Las medianas propiedades y minifundios se presentaban escasamente en el área de la provincia con más alta productividad.

Si atendemos a las zonas de menor productividad, es decir, dirigiéndonos desde la zona fértil hacia el este hasta casi llegar a la margen derecha del río Salí en su curso medio, así como en el mismo sector de la margen izquierda, llegando hasta las poblaciones de La Ramada de Abajo y Benjamín Aráoz, los problemas de productividad son debidos al peor drenaje ocasionado por la existencia de una napa de agua superficial, con la consiguiente degradación salina que afecta a los suelos. No obstante, estos suelos siguen siendo cultivados muy mayoritariamente con caña de azúcar, junto

---

<sup>18</sup> Bravo, María Celia, "El campesinado tucumano: de labradores a cañeros", Gelman, Jorge; Garavaglia, Juan Carlos y Zeberio, Blanca, *Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX*. La Colmena, Buenos Aires, 1999, p. 205.

<sup>19</sup> Santillán de Andrés, Selva E., *Esquemas de la estructura...*, op.cit., p. 14.

<sup>20</sup> Estos latifundistas representarían tan sólo el 0,21% de los propietarios de la provincia, con alrededor 3.500.000 surcos de caña para los años 1968-69. En: Santillán de Andrés, Selva E., *Esquemas de la estructura...*, op.cit., p. 15.



con otros cultivos como el maíz, las plantas forrajeras, el arroz y el trigo, entre los cuales se intercala un bosque arbustivo bajo que convive con la ganadería extensiva. Conviene subrayar que, en esta área, las grandes propiedades se intercalan con los minifundios, que cuentan con una extensión media de entre 1 y 10 hectáreas<sup>21</sup>.

**Ilustración 3. Mapa físico: provincia de Tucumán<sup>22</sup>**



<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> Fuente: Instituto Geográfico Militar. Disponible en: <http://www.argentina.gov.ar/argentina/porta/documentos/tucuman.pdf> (Consultado el 23/03/2008).

Si atendemos a la distribución espacial de la población, ya desde época colonial, los habitantes se instalaron en cuatro áreas diferenciadas: la capital; la llanura fértil que abarcaba desde los pies del Aconquija y comprendía los departamentos de Famaillá, Monteros, Chiquiglasta, Río Chico y parte de Graneros; las llanuras semiáridas del norte y el este, con los departamentos de Trancas, Leales y Burruyacu; y por último, la zona montañosa de Tafí y Encalilla<sup>23</sup>.

Se puede decir, por tanto, que la geografía tucumana ofrecía las condiciones objetivas para el desarrollo agrícola, en especial en el área geográfica de mayor rendimiento potencial que ya se ha señalado. En el siguiente apartado atenderemos a la imbricación que tuvo lugar con el desarrollo del complejo agro-industrial azucarero, donde los componentes demográficos, económicos y sociales se entrelazaron para tejer este particular tapiz donde se ubican los principales escenarios de nuestra investigación.

### **1.3. Los inicios de la actividad azucarera en Tucumán**

La implantación de un modelo productivo que giraba en torno al azúcar fue un hecho que marcó profundamente el devenir de Tucumán. Desde mediados del siglo XIX, este complejo agro-industrial constituyó la principal actividad económica de la provincia, y la evolución sociopolítica del territorio respecto del resto del país fue medularmente articulada al calor de las relaciones sociales que se construyeron alrededor del sistema de plantaciones y procesamiento industrial de la caña de azúcar. Para comprender este proceso es preciso revisar la importante producción historiográfica al respecto, puesto que gracias a estos estudios podremos certificar la existencia de una realidad en la que cobra sentido la aparición de un caldo de cultivo social que generó sus consiguientes relaciones conflictuales.

Si nos remontamos a la etapa colonial, el espacio que hoy ocupa la provincia de Tucumán se caracterizó por su posición clave en los circuitos comerciales que conectaban desde el litoral rioplatense hasta la región del Alto Perú. Sin embargo, esta dedicación comercial, vinculada con actividades como la compraventa de mulas,

---

<sup>23</sup> Bravo, María Celia, “El campesinado tucumano...”, *op.cit.*, p. 206.

carretas, curtidurías, alcoholes, etc., se vio disminuida, entre otros factores, por la inestabilidad política experimentada durante los años de las guerras de Independencia<sup>24</sup>.

En este contexto de transformación de la actividad económica tradicional, destaca entre los precursores del impulso azucarero la figura de José Colombres<sup>25</sup>, a quien se le atribuye la decisión de introducir las variedades óptimas para el cultivo de caña en Tucumán<sup>26</sup>, habiendo sido tratado por la historiografía tradicional como el fundador de la industria azucarera<sup>27</sup>. No obstante, a pesar de que estos primeros impulsos resultarán tener una naturaleza fundacional en la estructura productiva provincial, hasta mediados del siglo XIX la principal actividad económica siguió siendo el comercio, aún ligado con el espacio económico peruano y, por tanto, no exclusivamente dependiente de las demandas exportadoras del ámbito porteño, como sí ocurrirá con posterioridad<sup>28</sup>.

En cualquier caso, el factor de inseguridad que desde ese momento acompañó a la actividad comercial redirigió, al menos parcialmente, los intereses de los actores económicos de la provincia, quienes se adaptaron a la nueva situación orientando sus inversiones hacia la adquisición de tierras<sup>29</sup>. El acceso a éstas se caracterizó por la

---

<sup>24</sup> Para más detalles sobre este proceso pueden consultarse: Balán, Jorge, “Una cuestión regional en Argentina. Burguesías provinciales y mercado nacional en el desarrollo agro-exportador”, *Desarrollo Económico*, N° 69, Vol. 18, 1978, pp. 49-87; Bliss, Horacio W., *Evolución económica del Tucumán*, Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas-UNT, Tucumán, 1972; Giménez Zapiola, Marcos, “El interior argentino y el desarrollo hacia afuera. El caso tucumano”, Giménez Zapiola, Marcos, *El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina (hasta 1930)*. Amorrortu, Buenos Aires, 1975, pp. 72-115; Halperín Dongui, Tulio, *Revolución y guerra*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.

<sup>25</sup> José Eusebio Colombres (1778-1859), hijo de una familia de la élite local, fue uno de los introductores de la caña de azúcar en la provincia y quien, en 1821, plantó en su propiedad este cultivo. Al final de su vida fue nombrado obispo de la diócesis de Salta. La prensa conservadora de Tucumán sigue, en la actualidad, reivindicando su figura como emprendedor del azúcar y evangelizador. Valga como ejemplo la editorial que le dedicó el diario *La Gaceta* titulado “El imperecedero ejemplo del obispo Colombres”, con ocasión del ciento cincuenta aniversario de su fallecimiento. Disponible en: <http://www.lagaceta.com.ar/nota/313372/opinion/imperecedero-ejemplo-obispo-colombres.html> (Consultado el 13/06/2015).

<sup>26</sup> “...es opinión generalmente acreditada [...] que el presbítero D. José Colombres, diputado al Congreso Constituyente de 1816, es el que la introdujo del Perú en 1821”. Groussac, Paul et al., *Memoria histórica y descriptiva de la provincia de Tucumán*. Imprenta Biedam, Buenos Aires, 1882, pp. 384. Disponible en: <http://ia700303.us.archive.org/12/items/memoriahistorica00grougog/memoriahistorica00grougog.pdf> (Consultado el 23/10/2010)

<sup>27</sup> En: Bolsi, Alfredo, “Población, azúcar e industria rural en Tucumán, Argentina”, *Geographicalia*, N° 38, 2000, pp. 96. Disponible en: <http://www.unizar.es/geografia/geographicalia/bolsi.pdf> (Consultado el 28/10/2010)

<sup>28</sup> Parolo, María Paula, “Categorías ocupacionales y actores económicos. Los sectores mercantiles en Tucumán (1800-1870)”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’*, N° 27, 2005, p. 79.

<sup>29</sup> Una hipótesis acerca del acceso a grandes propiedades de tierra es que la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 provocó la liberación de grandes latifundios en las zonas más productivas de la provincia. Véase: Campi, Daniel, “Notas sobre la gestación del mercado de trabajo en Tucumán (1800-1870)”,

escasa concentración de la propiedad y, en este sentido, ha sido demostrada la significativa participación de pequeños compradores durante la primera mitad del XIX. Asimismo, se puede afirmar que la mayoría de estos propietarios no ejercieron una dedicación exclusiva dentro del sector agrícola, sino que eran mayoritarios aquellos que al mismo tiempo continuaron con sus actividades comerciales, lo que refuerza la idea de que el acceso a la tierra se concibió como una manera segura de inversión ante los riesgos de la actividad comercial, pero que estos “nuevos campesinos” estaban lejos de abandonar las actividades comerciales de las que provenían<sup>30</sup>.

De esta manera, el particular modo de tenencia de la tierra coadyuvó para que no se integraran como una misma unidad productiva los espacios de cultivo cañero con los trapiches o ingenios donde se procesaba la caña, al contrario de lo que sucedió en las provincias de Salta y Jujuy<sup>31</sup>.

Entre los prerequisites necesarios para la puesta en funcionamiento de los ingenios azucareros se ha mencionado con especial insistencia el de la disponibilidad de “brazos”, que fueron obtenidos de entre los sectores de población que no tuvieron más mecanismos de subsistencia alternativos que la venta de su fuerza de trabajo a los propietarios de las plantaciones, o al menos que estos mecanismos fueran lo suficientemente precarios como para propiciar este intercambio desigual. Sin embargo, la creciente demanda de trabajadores, combinada con la debilidad del régimen demográfico del norte argentino, continuaba presentando un problema de déficit para cumplir con las necesidades de mano de obra. Ante esta perspectiva, otra alternativa aparecía en escena: conseguir esa cantidad de trabajadores de entre quienes provinieran de una zona expulsora de población<sup>32</sup>.

---

Gelman, Jorge; Garavaglia, Juan Carlos y Zeberio, Blanca, *Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX*. La Colmena, Buenos Aires, 1999, p.195.

<sup>30</sup> Para un total de 734 casos de compra-venta de tierras producidos entre 1800-1850, sólo un 2,1% de las transacciones fue hecha a nombre de sociedades, mientras que las compras individuales alcanzaron a 603 personas. En el mismo sentido, un 40,5% de las operaciones se fija con un monto inferior a los 99 pesos, lo que manifiesta el predominio de la pequeña y mediana extensión. En: Fandos, Cecilia y Fernández Murga, Patricia, “Composición ocupacional de los compradores de tierras. Tucumán, 1800-1850”, *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, N° 13, 2000, p. 218. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/185/18501313.pdf> (Consultado el 23/10/2010).

<sup>31</sup> Bravo, María Celia, “El campesinado tucumano...”, *op.cit.*, p. 201.

<sup>32</sup> Campi, Daniel, “Notas sobre la gestación del mercado...”, *op.cit.*, p. 186.

### 1.3.1. Trabajadores para el azúcar

Incluso siendo Tucumán la provincia más densamente poblada del país (con valores diez veces superiores en 1801 a la media del conjunto que luego sería la Argentina y cinco veces a la del litoral, a comienzos del despegue azucarero), resultó difícil abastecer de trabajadores a la naciente industria. Ante esta situación, una hipótesis sugerida es que la escasez de brazos se debió a la resistencia que la población ofreció frente a su conversión forzosa en proletarios<sup>33</sup>, debido a los enormes cambios que eso implicaba para los afectados, tanto en términos materiales como culturales<sup>34</sup>. En todo caso, la solución a la demanda fue encontrada, fundamentalmente, en la contratación de trabajadores de las provincias limítrofes o, en menor medida, con otros llegados desde más lejos<sup>35</sup>.

Como ya hemos señalado anteriormente, el primer aspecto que llama la atención en cuanto a la configuración demográfica de Tucumán es su alta densidad de población, que la convierte en una excepción dentro del espacio del NOA, y aún más, en toda la Argentina, a excepción de la capital federal y el conurbano bonaerense. Ya en el II Censo Nacional de 1895, donde las provincias cuentan con su extensión actual, Tucumán alcanzaba una densidad de población de 9,33 hab/km<sup>2</sup>. Otras provincias como Córdoba se situaban con 2,18 hab/km<sup>2</sup>, mientras que Buenos Aires tan sólo llegaba a los 3,02 hab/km<sup>2</sup><sup>36</sup>. Seis décadas más tarde, el Censo Nacional de 1960 arrojó para toda la zona del NOA un total de 1.724.739 habitantes<sup>37</sup>, es decir, 415.883 más que las censadas en esa área en el año 1947<sup>38</sup>. Este incremento significa un crecimiento anual medio de 21,1% para el período intercensal precedente, que resulta un 4,0% más alto que el registrado en el período 1914-1947, donde fue del 17.1%.

---

<sup>33</sup> En opinión de María Celia Bravo, esta resistencia se puede explicar por una etapa de prosperidad para el ámbito rural en la segunda mitad del XIX, que facilitó al campesino el acceso a la tierra, su arraigo y, por tanto, el fortalecimiento de su capacidad de oposición. En: Bravo, María Celia, "El campesinado tucumano...", *op.cit.*, p. 220.

<sup>34</sup> Estas resistencias fueron catalogadas por la élite como "indisciplina", "ociosidad", "vagancia", "vicios", "inmoralidad", "desorden", etc. Véase: Campi, Daniel, "Notas sobre la gestación del mercado...", *op.cit.*, pp. 190-192.

<sup>35</sup> Pucci, Roberto, "La población y el auge azucarero en Tucumán", *Breves contribuciones del IEG*, N° 7, 1992, p. 12.

<sup>36</sup> Bourdè, Guy, "La clase ouvrière argentine (1929-1969)", Tesis doctoral inédita, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, París, 1982, p. 206.

<sup>37</sup> Ese pico de población no se ha vuelto a alcanzar, siendo el último dato actualizado en del Censo Nacional de Población del año 2010, que consigna para Tucumán una población de 1.448.188 de habitantes. Disponible en: <http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/> (Consultado el 13/06/2015)

<sup>38</sup> *Censo Nacional de Población 1960*, p. 6.



**Tabla 1. Evolución del crecimiento de la población de Tucumán<sup>39</sup>**

Año	1895	1914	1947	1960	1970	1980
Tucumán	215.742	332.933	593.371	773.972	765.962	972.655

La población de Tucumán siempre fue relevante en su área regional, debido al peso de su actividad económica y esa tendencia se vio reforzada una vez asentada la industria demandante de trabajadores. Sin embargo, producto de la crisis que provocó el cierre de los ingenios azucareros en 1966, del que hablaremos más adelante, la población no sólo no superó el crecimiento vegetativo que era esperable sino que, producto de la migración interna, disminuyó en esa década<sup>40</sup>.

**Tabla 2. Población del NOA por provincias<sup>41</sup>**

Año	1895	1914	1947	1960
Total Zona	543.133	755.123	1.308.856	1.724.739
Catamarca	90.161	100.769	147.213	168.231
Jujuy	49.713	77.511	166.700	241.462
La Rioja	69.502	79.754	110.746	128.220
Salta	118.015	142.154	290.826	412.854
Tucumán	215.742	332.933	593.371	773.972

<sup>39</sup> Elaboración propia a partir de los datos de: *Censo Nacional de Población, 1960 y Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980*.

<sup>40</sup> No fue Tucumán, sin embargo, la única provincia que expulsó población durante esos años. Si nos mantenemos en la región del NOA, Catamarca es una provincia que en 1970 contaba con 150.000 en la provincia y con más de 100.000 repartidos en el resto del territorio nacional. Véase: Miatello, Roberto A., "Migraciones de población de la provincia de Catamarca en el período 1947-1970", *Revista geográfica*, N° 79, 1974, pp. 177-218.

<sup>41</sup> *Censo Nacional de Población, 1960 y Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980*.

**Tabla 3. Porcentaje de la población tucumana en el NOA<sup>42</sup>**

Año	1895	1914	1947	1960
Tucumán en el NOA (en %)	39,7	45,4	45,3	44,9

La persistencia de esta excepcionalidad demográfica reflejaba formas de vida diferentes a las de otros territorios del país, ya que la dedicación agrícola y campesina requirió de una población más densamente localizada y más numerosa en términos absolutos<sup>43</sup> que la actividad ganadera.

Desde mediados del siglo XIX, hasta el inicio del fin de la economía agro-exportadora, la sociedad argentina recibió flujos migratorios que se fueron acumulando como estratos irregulares, producto de la aluvial llegada de extranjeros<sup>44</sup>. En tres cuartos de siglo, cerca de ocho millones de extranjeros entraron al país, de los cuales alrededor de la mitad tomaron el camino de regreso, pero el resto permaneció para conformar la sociedad argentina como la conocemos en la actualidad<sup>45</sup>.

El caso tucumano no se revela como una excepción, aunque tal vez sí que requiera de algún matiz. Durante los años de crecimiento de la actividad azucarera, acompañados del consiguiente aumento en las necesidades de mano de obra, el crecimiento natural de la población no fue suficiente para abastecer la creciente demanda. Sin embargo, mientras que los migrantes extranjeros preferían mayoritariamente buscar ocupación en las zonas del litoral, para Tucumán fue decisivo el aporte demográfico venido de las provincias cercanas del interior del país y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. La sociedad tucumana se distingue de la del litoral en función del peso que adquieren las migraciones externas, que fue cuantitativamente inferior y estuvo cualitativamente diferenciado respecto del de sus pares de la costa. A diferencia de lo que ocurría en otros polos de atracción para migrantes, el flujo de llegada anual de

<sup>42</sup> *Censo Nacional de Población*, 1960, p. 11.

<sup>43</sup> No obstante, sobre el papel de la capital se pueden recoger opiniones como la siguiente: “La ciudad de Tucumán desplegaba elegancia y buen vivir [...] su modelo es Buenos Aires” Cfr.: Rock, David, *La construcción del Estado y los movimientos políticos en la Argentina, 1860-1916*. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006, pp. 38-39

<sup>44</sup> Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina, 1916-1999*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007, pp. 22-23.

<sup>45</sup> Bourd , Guy, “La clase ouvri re argentine...”, *op.cit.*, p. 12.

extranjeros osciló entre las 21 personas por año registradas en 1878, hasta las 1.147 de 1885. En cualquier caso, el porcentaje de población foránea de la provincia alcanza tan sólo un 4,9% del total, mientras que la media nacional ascendía hasta el 25,5%. Como señalara D. Guy, “la industria azucarera se convirtió en dependiente del trabajo de los criollos”<sup>46</sup>.

**Tabla 4. Migraciones intrarregionales de nativos en el NOA. Participación porcentual por provincias según los destinos<sup>47</sup>**

Provincias	1869	1895
Catamarca	15%	6%
Jujuy	12%	12%
La Rioja	2%	2%
Salta	29%	12%
Santiago del Estero	5%	7%
Tucumán	36%	62%
Total regional	25.193	57.910

Consecuencia de la llegada de la población migrante, en los primeros años del boom azucarero, la población fue reubicándose en torno a los principales polos económicos de la provincia: la capital y el piedemonte. Estos núcleos urbanos configuraron las poblaciones de mayor importancia, cuyo peso específico se mantiene hasta la actualidad.

<sup>46</sup> Guy, Donna, “The rural working class in Nineteenth-century Argentina: forced plantation labor in Tucumán”, *Latin American Research Review*, Vol. 13, N° 1, 1978, p. 137. Nuestra traducción.

<sup>47</sup> Ortiz de D'Arterio, Julia P., “Nordeste Argentino: migraciones de nativos”, *Breves contribuciones del IEG*, Vol. 1, N°4, 1987. Cf: Bravo, María Celia, “El campesinado tucumano...”, p. 208.

**Tabla 5. Población y representación porcentual por áreas<sup>48</sup>**

Área	1845	%	1869	%	1895	%
Capital	16822	29	37559	34	78160 <sup>49</sup>	63
Piedemonte	31314	54	53560	49	105901	49
Llanuras Áridas	9197	16	16183	15	23270	11
Montañosa	583	1	1641	2	8411	4

La zona de mayor actividad económica fue también la de mayor concentración de población. En el departamento de Capital, que fue dividido en dos en 1888 (Capital, que ocupaba la margen oriental del río Salí; y Cruz Alta), se concentraba el cultivo de azúcar, junto con el del arroz, maíz, tabaco y frutales. Fruto del crecimiento económico, que se tratará en el siguiente apartado, la población de la zona pasó de representar un 29% del total de la provincia en 1845, a alcanzar el 36% de 1895<sup>50</sup>.

Si observamos la evolución del aumento de población por departamentos, podremos constatar que la mayor relevancia económica de determinados espacios se significa en el creciente aumento de población.

<sup>48</sup> Bravo, María Celia, “El campesinado tucumano...”, *op. cit.*, p. 206.

<sup>49</sup> Incluye el departamento de Cruz Alta.

<sup>50</sup> Bravo, María Celia, “El campesinado tucumano...”, p., *op. cit.*, p. 207.

**Tabla 6. Población por departamento<sup>51</sup>**

Departamento	1845	1869	1895	1914
Capital	16.822	37.559	59.350	100.080
Cruz Alta	-	-	28.800	43.253
Famaillá	5.989	25.149	27.000	36.083
Monteros	10.225	14.181	25.500	31.846
Chicligasta	5.567	11.960	23.000	29.199
Río Chico	3.861	8.687	20.000	27.059
Graneros	5.642	8.534	10.400	13.681
Leales	3.933	7.203	8.800	14.254
Burruyacú	3.021	5.500	8.600	14.984
Trancas	2.243	3.670	5.900	5.857
Encalilla	583	1.463	8.400	16.637
Total	57.876	108.953	215.742	332.933

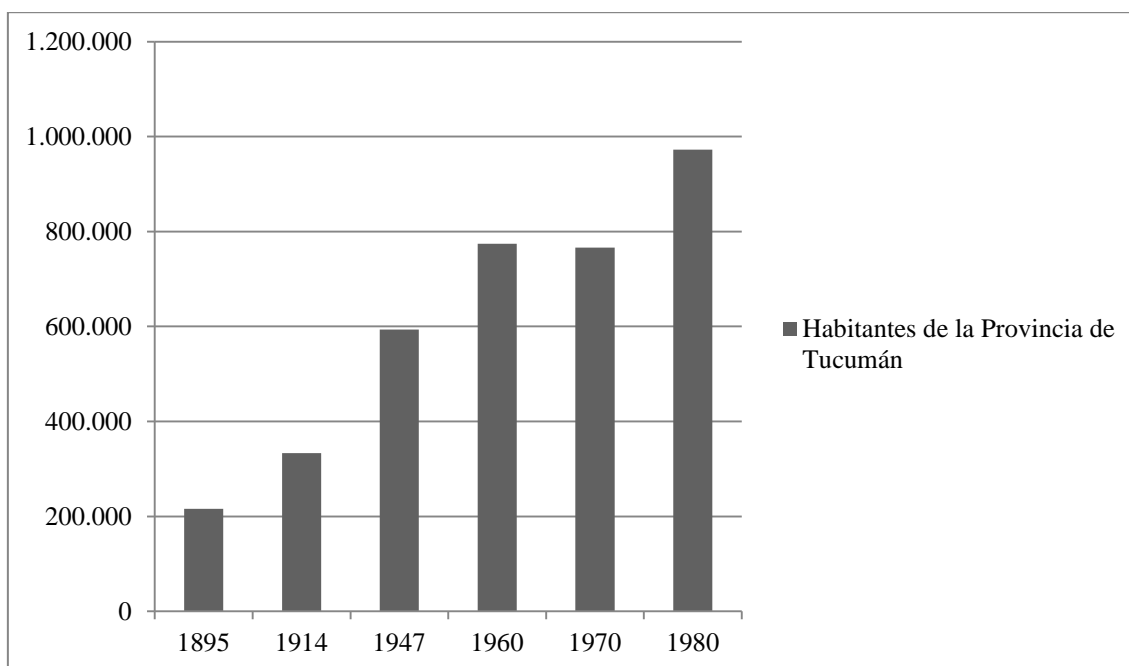
En este sentido, no podemos dejar de reparar en la evolución que sufrirá la población desde mediados de la década de los '60 del siglo XX. Aunque nos adelantemos en la exposición de los acontecimientos, resulta presente el ritmo de crecimiento de población hasta esa fecha para poder evaluar la magnitud de los acontecimientos vividos en ese momento.

---

<sup>51</sup> Paterlini de Koch, Olga, *Pueblos azucarero...*, op.cit., p. 33.

No obstante, el aumento sostenido de población que ocupa desde finales del XIX hasta entrada la primera mitad del XX, sufre un estancamiento, que se puede observar en la ilustración 4, entre los años de 1960 y 1970, que como ya advertimos más arriba, se explica por el cierre de los ingenios de 1966.

**Gráfico 2. Evolución de la población de Tucumán<sup>52</sup>**



También resulta esclarecedor observar que el censo de 1960 da como resultado la existencia de 430 centros poblados en la zona, es decir, 121 menos que los obtenidos en el Censo de 1947. Sin embargo el número de núcleos de población con más de 2.000 habitantes llega a un total de 69, es decir 21 más que en el año 1947<sup>53</sup>

Por otro lado, resulta interesante constatar cómo el peso de la población de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia, aumenta muy considerablemente en un corto espacio de tiempo pasando de tener 194.166 habitantes en 1947, y llegando hasta los 271.246 de 1960.

<sup>52</sup> Elaboración propia. Fuente: *Censo Nacional de Población*, 1960, p. 29

<sup>53</sup> *Censo Nacional de Población*, 1960, p. 6.

No obstante, aparece un punto de inflexión a partir del Censo Nacional de 1970, cuando se estanca significativamente el crecimiento de la población, que ya mencionamos anteriormente. La pérdida de población fue un acontecimiento que no pasó desapercibido, puesto que el movimiento en la balanza poblacional resultó notorio desde su comienzo y los efectos de la despoblación fueron palpables en el corto plazo.

Es por esto que el interventor-gobernador de la provincia, Roberto Avellaneda, decidió realizar un censo de la provincia el 4 de diciembre de 1968. Dicha encuesta fue requerida a especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán, la secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC) y la consultora Italconsult. Los datos no llegaron a ser publicados, porque su intención última era la de justificar las medidas tomadas por el Operativo Tucumán<sup>54</sup>, siendo sus resultados tan impactantes que se decidió ocultarlos a la opinión pública. En el censo se recogieron un total de 758.499 habitantes, lo que suponía alrededor de 142.707 personas menos de las que debían habitar la provincia para esas fechas, según predicciones de la Dirección Provincial de Estadística.

La sangría poblacional que comenzó no había alcanzado aún su punto álgido, ya que entre 160.000 y 230.000 tucumanos abandonaron la provincia a finales de la década de los años sesenta. Estas cifras surgen de las estimaciones de crecimiento vegetativo realizadas a través de la comparación de los censos de 1960 y 1970, donde la población provincial era de 773.000 y 765.900 habitantes respectivamente. De esta manera, el censo nacional de 1970 registró la cifra de 272.250 tucumanos viviendo fuera de la provincia, de los cuales 198.959 residían en Buenos Aires y su área metropolitana<sup>55</sup>. Esta última cifra demuestra el fenómeno de engrosamiento de las bolsas de pobreza establecidas en la periferia de la capital de la República<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> El *Operativo Tucumán* fue el plan económico puesto en marcha bajo el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, que asumió el poder en 1966, para tratar de reconducir la economía tucumana luego del decreto que cerró los ingenios azucareros. Hablaremos de este plan con más detalle, puesto que fue decisivo en el contexto del entramado de alianzas entre trabajadores que analizaremos en el curso de este trabajo.

<sup>55</sup> Es en estos años cuando se comienza a popularizar la expresión “villa miseria”, entendida como arrabal de aluvión de la periferia urbana en el que se asientan los migrantes sin recursos para garantizarse las condiciones materiales mínimas de existencia. El término proviene de la novela de Bernardo Verbitsky *Villa miseria también es América*, publicada en 1957.

<sup>56</sup> Las cifras presentadas se encuentran en: Pucci, Roberto, *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán* 1966. Ediciones del Pago Chico, Buenos Aires, 2007, pp. 127-136.

#### 1.4. La expansión del modelo y las primeras crisis

La producción de azúcar se desarrolló desde los comienzos del siglo XIX, más precisamente a partir de 1820, poniéndose en funcionamiento ingenios en los alrededores de la capital, lo que facilitaba el acceso a los canales de distribución que desde ahí partían<sup>57</sup>. De esta manera, el desarrollo económico azucarero vivió un periodo de transición entre las formas tradicionales y el desarrollo plenamente capitalista. En esta etapa transicional se cohabitó con el modelo de producción artesanal, ocupando este proceso de industrialización paulatina desde la década de los '20 hasta los '80. Es a partir de 1880 que los ingenios azucareros reconvierten completamente su modo de producción y el resultado se evidencia al constatar que, de los 80 ingenios tradicionales contados en el año 1875, se pasa a los 35 ingenios modernizados de 1895<sup>58</sup>.

Este primer estadio de desarrollo industrial ha sido definido como etapa de “capitalismo incipiente”<sup>59</sup>, puesto que no se han encontrado elementos de “economía tributaria” para el caso del Tucumán de la época. En sentido contrario, otros autores han defendido las ideas de “neofeudalismo” y “trabajo esclavo”, ante la inexistencia de un mercado capitalista del trabajo<sup>60</sup>, hipótesis que consideramos menos sólida que la que evocamos anteriormente. En cualquier caso, es en este período donde se produjo un aumento exponencial en el número de ingenios azucareros, pasando de los 13 contados en 1850 a los 54 del año 1870, llegándose a alcanzar en 1877 la cifra de 82 ingenios<sup>61</sup>.

---

<sup>57</sup> Daniel Campi precisa estos espacios de la siguiente forma: “En sus orígenes, las plantaciones y los primeros ingenios se localizaron en los alrededores de la ciudad de Tucumán, en el Bajo (en lo que fue luego el Parque 9 de julio), El Alto (el Oeste) y en La Banda (el margen oriental del río Salí), instalándose también algunos en las tierras de piedemonte que rodeaban la villa de Lules”. En: Campi, Daniel, “Notas sobre la gestación...”, *op.cit.*, p. 178.

<sup>58</sup> Bravo, María Celia, “El campesinado tucumano...”, *op.cit.*, p. 203.

<sup>59</sup> Campi, Daniel, “Notas sobre la gestación...”, *op.cit.*, p. 178.

<sup>60</sup> Una síntesis de esta idea sería la siguiente: “La acumulación originaria, pero sobre todo la inexistencia de un mercado capitalista de trabajo, condujo a formas de explotación de tipo esclavista: las leyes de conchabo. Atados los trabajadores a las haciendas azucareras, no sólo perdían su libertad individual, sino que con ello desaparecía todo estímulo laboral. Era como si se tratara de inventar una clase obrera no asalariada. Obreros que controlaban la tecnología más avanzada de entonces, bajo relaciones de patronazgo o esclavitud”. En: Rosenzvaig, Eduardo, “Mitología y utopismo del azúcar”, *Anuario Antropología*, N° 29, 1992, p. 378.

<sup>61</sup> Taire, Juan Octaviano, *Azúcar para el monopolio*. Ediciones del Pago Chico (1ª Edición, Ediciones Del Signo, 1969), Buenos Aires, 2006, p. 30.



Esta proliferación de ingenios provocó que en 1875 se diera la primera crisis de sobreproducción<sup>62</sup>.

El fin de la producción tradicional de azúcar y el desarrollo de infraestructuras de comunicación y transporte dieron comienzo a un nuevo periodo. La etapa que se abrió a continuación fue la de una concentración progresiva de los medios de producción mecanizados, que se extendió desde 1880 hasta 1914, y cuyo estancamiento en la década de los '20 provocó una serie de reajustes que pusieron en peligro la pervivencia de este modelo<sup>63</sup>. Al mismo tiempo, esta transformación necesitó de la entrada de capitales vía créditos, de los que pudieran disponer los industriales para, efectivamente, contar con la capacidad financiera que les permitiera invertir en la modernización de los equipamientos.

Si atendemos al sector industrial, parece claro que la pervivencia de esos circuitos comerciales de raigambre colonial fue lo que posibilitó la primitiva acumulación de capital necesaria para llevar a cabo la inversión en el sector azucarero, especialmente a partir de la década de 1880<sup>64</sup>. Esta década es significativa para el sector, puesto que será gracias a algunos de los factores determinantes introducidos en los años precedentes, que los industriales azucareros efectuarán una reorientación significativa de los procesos productivos

Otro de los factores detonantes del definitivo desarrollo de la economía tucumana fue la puesta en funcionamiento de la primera línea férrea en la provincia, en el año 1876, que aparece como un punto de inflexión decisivo<sup>65</sup>. Sobre este aspecto tampoco

---

<sup>62</sup> Los diferentes espacios de negociaciones que se transitaron en estos momentos de crisis han sido estudiados en: Guy, Donna, "Tucumán sugar politics and the generation of Eighty", *The Americas*, Vol. 32, N° 4, 1976, pp. 566-584. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/979832> (Consultado el 27/01/2011).

<sup>63</sup> Algunos autores consideran que si la incorporación de formas de propiedad y trabajo anteriores resultó exitosa, debe haber sido debido a que los protagonistas del desarrollo agro-industrial serían los antiguos latifundistas de la provincia, a los que caracteriza como clase dominante en el contexto socioeconómico anterior. Véase: Santamaría, Daniel J., "Estado, industria azucarera y conflicto social en Tucumán durante el segundo gobierno radical (1922-28)", *Revista de Indias*, N° 175, 1985, p. 162.

<sup>64</sup> Sánchez Román, José Antonio, *La dulce crisis: estado, empresarios e industria azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914)*. CSIC-EEHA-Diputación de Sevilla, Sevilla, 2005, p. 341. Del mismo autor, véase también: "La industria azucarera en Argentina (1860-1914). El mercado interno en una economía exportadora", *Revista de Indas*, Vol. 65, N° 233, pp. 147-172.

<sup>65</sup> Entre la producción historiográfica que ha tratado la cuestión del ferrocarril podemos destacar: Bravo, María Celia, "Poder provincial, dinámica regional y Estado nacional. El norte argentino entre 1852 – 1880". *Travesía, Revista de Historia Económica y Social*, 23, Vol. 1 N° 3-4, 1999-2000; Campi, Daniel y Richard Jorba, Rodolfo, "Las producciones regionales extrapampeanas", Bonaudo, Marta (Dir.),

han sido escasos los aportes historiográficos, analizando la implementación de esta infraestructura desde perspectivas diferentes. De este modo, encontramos que en algunos de los primeros trabajos acerca de la economía tucumana, el elemento ferroviario aparece como un obstáculo para el desarrollo autónomo de la provincia, siendo el ferrocarril parte de un engranaje de intercambio desigual entre los productos del interior y los intereses exportadores del litoral. De igual manera, el desarrollo ferroviario es visto como una parte del proyecto de uniformización política impulsado desde el poder central<sup>66</sup>. Por lo tanto, conviene desechar la idea exclusivamente funcionalista del desarrollo ferroviario entendido exclusivamente como resultado de una alianza de la burguesía industrial tucumana para conseguir la mejor circulación de su producción, ya que esto supondría minimizar el papel jugado por el Estado, que siempre añadió implicaciones de carácter político a este desarrollo<sup>67</sup>. Condensando algunas de estas ideas, D. Rock afirma que:

*“La lucha por el poder entre las autoridades nacionales y las provinciales incrementó el compromiso del gobierno nacional con el desarrollo de las provincias. Roca deseaba aumentar sus vínculos con los gobernadores provinciales, las figuras claves del sistema político que había desarrollado. Solicitó préstamos a Europa para construir ferrocarriles en el Interior que conectaran Córdoba con Mendoza y Tucumán con Jujuy. El tendido de líneas ferroviarias tenía fuertes objetivos políticos, además de los económicos y militares.”*<sup>68</sup>

---

*Liberalismo, Estado y Orden burgués (1852 – 1880). Nueva Historia Argentina*, tomo IV, Sudamericana, Buenos Aires, 1999, pp. 362- 422; Campi, Daniel, “Las provincias del Norte. Economía y sociedad”, Lobato, Mirta (Dir.), *La Argentina Conservadora, 1880- 1916. Nueva Historia Argentina*, tomo V, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, pp. 73-118; Manzanal, Mabel, “El primer ferrocarril a Tucumán: discutiendo las razones que explican su construcción”, *Población y Sociedad*, N° 8/9, 2000-2001, pp. 1-45; García Basalo, Javier, “La planificación ferroviaria argentina en el siglo XIX. Un problema historiográfico pendiente”, *XX Jornadas de Historia Económica*, Mar Del Plata, Asociación Argentina de Historia Económica, 2006; Rebuelto, Emilio, “Historia del desarrollo de los ferrocarriles argentinos”, Shickendantz, E. y Rebuelto, E.: *Los ferrocarriles en Argentina*. Fundación Museo Ferroviario, Buenos Aires, 1994; Schvarzer, Jorge y Gómez, Teresita, *La primera gran empresa de los argentinos. El ferrocarril del Oeste (1854 – 1862)*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006; Palermo, Silvana, “Actores e instituciones en la construcción de los ferrocarriles del Estado (1862–1916)”, *Vº Coloquio de Historia de Empresas “Investigaciones en curso en la historiografía argentina”*, Buenos Aires, Universidad de San Andrés, 2007.

<sup>66</sup> Guy, Donna J., “El azúcar y la política de recursos naturales: el estado argentino y las provincias del noroeste, 1870-1930”, Campi, Daniel (Comp.), *Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina II*. Universidad Nacional de Jujuy-Universidad Nacional de Tucumán, Jujuy, 1992, p. 45.

<sup>67</sup> Sánchez Román, José Antonio, *La dulce crisis...*, op.cit., pp. 343-344.

<sup>68</sup> Rock, David, *La construcción del Estado...*, op.cit., p. 106.

Como señala N. Girbal-Blacha, las obras del ferrocarril Córdoba-Tucumán (F.C.C.N) inauguradas por el presidente tucumano Nicolás Avellaneda el 31 de octubre de 1876, supusieron la primera acción directa del ejecutivo en claro beneficio de las demandas de los industriales azucareros, a pesar de las luchas políticas internas y de la crisis financiera de 1873<sup>69</sup>.

De estas fechas también datan otros proyectos de mejora de las infraestructuras, tales como la construcción de un sistema de canales para prevenir los cambios de cursos de los ríos y prevenir posibles inundaciones, que amenazaban algunos cultivos campesinos en tierras arenosas o salinas<sup>70</sup>.

Por lo dicho anteriormente, se puede inferir que los industriales se beneficiaron poderosamente de estos avances, pero sin olvidar que el Estado también obtuvo plusvalías para nada desdeñables. Con esta actuación, las autoridades políticas nacionales fueron capaces de dar cabida en su régimen político a unas élites que podrían haber resultado problemáticas, al tiempo que se asentaba un nuevo medio para obtener recursos a través de las tasas aduaneras. Esto fue así, al menos, hasta la década de 1890, cuando fruto del alza de los importadores y productores pampeanos, el Estado sufrió presiones dirigidas a la eliminación de las medidas proteccionistas que, sin embargo, fueron mantenidas<sup>71</sup>.

La línea de crecimiento ascendente que la economía tucumana venía viviendo en los últimos quince años se truncó en el momento en que la crisis financiera de 1890 se hizo notar en el mundo azucarero. El ejecutivo nacional decidió entonces fijar los impuestos nacionales internos, de manera que, entre otras disposiciones, se aumentaron los cargos fiscales directas destinadas a recaudar por la actividad de producción y venta de alcoholes. No obstante, no es menos cierto que aún en esta coyuntura desfavorable, hasta 1896 se mantuvieron intactos los gravámenes que afectaban al azúcar, mientras persistía la alta presión impositiva sobre la importación de azúcares foráneos. De esta manera, la protección de la producción nacional quedaba asegurada. Contrariamente, el gobierno provincial, como herramienta para enmendar lo reducido de sus fondos, optó

---

<sup>69</sup> Girbal-Blacha, Noemí, "Estado, modernización azucarera y comportamiento empresario en la Argentina (1876-1914). Expansión y concentración de una economía regional", *Anuario de estudios americanos*, Nº 45, 1988, p. 394.

<sup>70</sup> Rock, David, *La construcción del Estado...*, op.cit., pp. 186-187.

<sup>71</sup> Rock, David, *La construcción del Estado...*, op.cit., p. 106.

por aumentar la tasas correspondientes a los ingenios y cañaverales, frente a lo que los industriales respondieron con el aumento del precio de venta de los artículos producidos, que para esas fechas aún seguía resultando más barato para el mercado de consumo interno que los azúcares importados<sup>72</sup>.

También los créditos oficiales, emitidos por parte de entidades como el Banco Nacional, el Banco Hipotecario y el Banco de la Provincia de Tucumán, ayudaron a los industriales a enfrentar estos sobrecostos. Los espacios político y económico eran habitados por los notables de la oligarquía local, y no son pocas las familias que desempeñaron ambos roles, como por ejemplo los Nougués, Padilla, Posse, Terán, Frías, Avellaneda, Gallo, etc.<sup>73</sup>

El Banco Nacional y el Banco Hipotecario eran dos entidades financieras de capital mixto, en los que el Estado lograba controlar la propiedad de la mayoría de las acciones, además de participar de las decisiones administrativas y comerciales. Junto a ellos, el Banco Provincial fue adquirido por el gobierno tucumano a una entidad privada en la década de 1880. Estos tres bancos fueron los principales promotores del desarrollo azucarero de esta década, y aunque estaban bajo el control estatal, miembros de algunas de las familias que se acaban de nombrar formaron parte de sus consejos de administración. Los instrumentos de crédito se multiplicaron y se manifestó una tendencia hacia la formación de un mercado sólido para el azúcar, convergiendo las tasas, sin tener en cuenta el plazo o el capital prestado. No obstante, se produjo también una mayor fractura entre quienes tenían acceso al crédito bancario y los que no contaban con ese respaldo. Entre los primeros, qué duda cabe, figuraron en un lugar privilegiado los industriales<sup>74</sup>.

Será en 1895 cuando la primera crisis de superproducción golpee duramente la estructura sobre la que los industriales del azúcar habían impulsado su desarrollo, pero también a un 45% de la población de las provincias del NOA que vivía de esta industria y las actividades indirectas que generaba. Para esa fecha llegaron a registrarse bajadas de hasta el 50% del precio de venta del azúcar, ante lo que el gobierno nacional decidió

---

<sup>72</sup> Girbal de Blacha, Noemí, “Estado, modernización azucarera...”, *op.cit.*, p. 397.

<sup>73</sup> Schlek, Emilio J., *Cincuentenario del centro azucarero argentino. Desarrollo de la industria en medio siglo. 1894-1944*, Buenos Aires, 1944, p. 235. Cfr.: Girbal-Blacha, Noemí, “Estado, modernización azucarera”, *op.cit.*, p. 397.

<sup>74</sup> Sánchez Román, José Antonio, *La dulce crisis...*, *op.cit.*, p. 342.

financiar con impuestos de recaudación interna la exportación de los excedentes. La reacción normativa llegó a comienzos del año 1897, cuando el Congreso sancionó la ley n° 3.469 de subsidio del azúcar. Con esta ley se determinó el valor fijo en “6 centavos por kilo el impuesto interno que se pagará al fabricante o importador, autoriza la exportación de un 35% del producto con una prima de 12 centavos, quedando el excedente a beneficio de la nación, mientras se intenta controlar el precio del artículo para el consumo interno”<sup>75</sup>.

Para el caso tucumano, la circulación del crédito fue en aumento desde 1910 hasta 1929 y, en la práctica, el volumen de los giros transferidos aumentó cada año. El sistema empleado consistió en que los grandes ingenios recibieron los créditos para con ellos comprar la caña a los pequeños y medianos productores. Desde este punto de vista, se puede considerar que tanto los minifundistas, como los trabajadores temporales empleados en la zafra de la caña, constituyeron un “sector dependiente ligado a las grandes centrales por una estructura permanente de dependencia, gracias a los mecanismos del sistema de crédito informal”<sup>76</sup>. En esta etapa de expansión económica, la producción de azúcar en Tucumán llegó a representar el 89% del total de la producción industrial, para lo que necesitó el consumo del 78% del capital invertido<sup>77</sup>.

En un sentido contrario al que acabamos de apuntar, otros autores estiman que las medidas proteccionistas no fueron tales, ya que se tendió a minimizar sistemáticamente el precio del azúcar nacional, especialmente desde la aprobación de la Ley Saavedra Lamas de 1912, mantenida hasta 1940, que eliminaba la protección del azúcar nacional cada vez que el precio interno superase un determinado umbral<sup>78</sup>.

El objetivo de la Ley Saavedra Lamas fue el de fijar una reducción progresiva de la protección aduanera hasta el año 1921. Del mismo modo, contemplaba gravar a los azúcares importados que recibieran primas en su país de origen, con una suma equivalente a dicha prima. Nuevamente, sirviendo como ejemplo de lo que se acaba de

---

<sup>75</sup> Girbal-Blacha, Noemí, “Estado, modernización azucarera...”, *op.cit.*, p. 398.

<sup>76</sup> Castillo, Hugo F; Tulchin, Joseph S. y Falquevert, Jacqueline, “Développement capitaliste et structures sociales des régions en Argentine (1880-1930)”, *Annales: Histoire, Sciences Sociales*, N° 6, 1986, p. 1378. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/27583434> (Consultado el 28/03/2009).

<sup>77</sup> Greenberg, Daniel J., “Sugar depression and agrarian revolt: the argentine radical party and the Tucumán cañeros’ strike of 1927”, *HAHR*, Vol. 67, N° 2, 1987, p. 303. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2515025> (Consultado el 23/01/2010).

<sup>78</sup> Pucci, Roberto, *Historia de la destrucción...*, *op.cit.*, pp. 40-41.

mencionar, la ley tuvo buena acogida por parte de los representantes tucumanos en el Congreso nacional, siendo uno de los participantes más activos el diputado Ernesto E. Padilla, quien a su vez era vocal del Centro Azucarero Argentino<sup>79</sup>, organización corporativa que reunía a los empresarios azucareros del país para defender los intereses de su industria, y que funcionó como un lobby en las esferas políticas<sup>80</sup>.

No obstante, otros procesos de cambio estaban ocurriendo en este período. En 1923, el sistema de precios fijados con anticipación resultaba molesto para los cañeros<sup>81</sup>, quienes presionaban para que el precio de compra fuera más flexible, de manera que se pudiera ajustar a los valores reales del mercado. En 1926, estas tensiones cristalizaron en el momento en el que dándose una sobreproducción durante la zafra, los ingenios fueron obligados a comprar la mitad de la caña a los cañeros independientes, debiendo ser destinado para la exportación el azúcar producido con la caña propiedad del ingenio. Cuando los industriales se vieron obligados a recurrir a las plantaciones independientes, se produjo un alza en los precios de la tierra que provocó que los grandes y medianos terratenientes quisieran hacerse de capital mediante la venta, subdivisión o arrendamiento de estas propiedades revalorizadas. De esta manera, el sector cañero acabó por participar de una especialización que lo subordinaba al sector industrial. Como resultado de este proceso, los ingenios sembraron prácticamente la

---

<sup>79</sup> Entre otros, véase: Lenis, María y Moyano, Daniel, “Las corporaciones empresarias: la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Centro Azucarero Argentino (CAA). La legitimación del espacio empresarial, 1894-1904”, Xº Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, edición CD-ROM, Rosario, 2006.

<sup>80</sup> El cambio de política defendido por el CAA, que mutó de la defensa del proteccionismo económico a una postura abiertamente librecambista, ha sido visto como una “crisis de identidad” que obligó a la corporación a redefinir su presencia en el espacio público, intentando así continuar haciendo legítima su existencia. Sus esfuerzos se dirigieron entonces a impulsar la venta de los excedentes de producción al mercado extranjero, pero el gobierno provincial abortó esta iniciativa después del duro invierno de 1914, que retrajo sensiblemente los excedentes disponibles. En: Lenis, María, “El proteccionismo en retirada. Las dificultades del Centro Azucarero Argentino (1912-1923)”, *Población y Sociedad*, N° 14-15, 2007-2008, p. 82. De la misma autora, consúltense también: Lenis, María, “Estrategias corporativas frente a la primera crisis de sobreproducción azucarera en Tucumán (Argentina): de la regulación de la comercialización a la regulación de la producción, 1895-1904”, *América Latina en la Historia Económica*, N° 37, 2012, pp. 181-207.

<sup>81</sup> Sin embargo, el escaso margen de maniobra de los cañeros en el momento de vender su producción era una característica “tradicional” de su actividad. Para fines del siglo XIX, ya se ha señalado que estos minifundistas se vinculaban a las grandes centrales azucareras en una estructura de dependencia permanente gracias a los mecanismos del sistema crediticio informal. En: Castillo, Hugo F., Tulchin, Joseph S. y Falquevert, Jacqueline, “Développement capitaliste et structures sociales des régions en Argentine (1880-1930)”, *Histoire, Sciences Sociales*, N° 6, 1986, p. 1378.

misma superficie en 1919 que en 1940, mientras que el sector cañero aumentó dos veces y media<sup>82</sup>.

Con respecto al nivel de ocupación en estas fechas, según el censo de 1914, el personal ocupado en los ingenios y refinerías de azúcar alcanza los 42.163 individuos. De entre ellos, 14.648 corresponden al personal permanente, mientras el resto son empleados como auxiliares para la zafra, con marcada preeminencia de trabajadores nativos (88%). En este momento, la población rural de la provincia era de 181.000 habitantes, contra los 152.000 que se localizaban en las distintas áreas urbanas<sup>83</sup>.

Pero como ya se ha apuntado, el complejo del sistema agro-industrial azucarero mantuvo la particularidad de estar compuesto por dos sectores de trabajadores diferenciados e interdependientes. Por un lado se encontraban quienes se vinculaban a la vertiente industrial, ocupados en procesar la caña de azúcar para su conversión en producto de consumo. Del otro lado, los productores de caña de azúcar que proveían de la materia prima necesaria. Esta convivencia, no exenta de numerosos mecanismos de imposición, necesitó de un proceso de adaptación problemático, en el que trabajadores de muy diversos orígenes terminaron por compartir el mismo espacio socio-económico.

#### **1.4.1. La vida y el trabajo en el ingenio**

En el colectivo involucrado en la actividad azucarera tucumana encontramos la particularidad de la existencia de un sector cañero diferenciado del industrial, que procuró mantener relativas cuotas de autonomía frente a la naciente burguesía agroindustrial. Respecto a los orígenes del sector cañero en la provincia, se han señalado tres hipótesis principales: 1) el surgimiento de los cañeros se encuentra en los industriales de trapiches domésticos que no accedieron a la tecnificación y que perduraron en la actividad como plantadores medianos y grandes; 2) se consolidaron siguiendo la tradición de los cultivadores cañeros que surgieron alrededor de 1840 y que crecieron lentamente hasta 1876; 3) incorporados en una etapa tardía, los cañeros serían aquellos productores agrícolas que se orientaron al cultivo de la caña en 1880, bajo el

---

<sup>82</sup>Santamaría, Daniel J., “Estado, industria azucarera...”, *op.cit.*, p. 175.

<sup>83</sup>Girbal-Blacha, Noemí, “Estado, modernización azucarera”, *op.cit.*, p. 393.

influjo de la industrialización azucarera<sup>84</sup>. Además, esta última hipótesis sostiene que la clave de la existencia del sector habría que situarla “en la insuficiente fuerza de los industriales para convertirse a un mismo tiempo en fabricantes y latifundistas”<sup>85</sup>; y que, en consecuencia, debería destacarse que “los cañeros tucumanos nacieron y crecieron al amparo de esa limitación que sufría el núcleo más poderoso de los dueños de ingenios, cuando la industria da sus primeros pasos”<sup>86</sup>. Esta particularidad daría la pauta para comprender el empoderamiento que los cañeros independientes mantuvieron en Tucumán, más evidente si se pone en contraposición con la estructura productiva que se articuló en las vecinas provincias de Salta y Jujuy, cuyos cinco ingenios son ejemplos de “integración vertical”<sup>87</sup>.

Otras interpretaciones han puesto el acento sobre la importancia del sector industrial en este proceso. En el caso de M.C. Bravo, sus investigaciones ponen de manifiesto la tradición comercial de parte de este campesinado, así como las resistencias ejercidas por éstos ante la proletarización a la que estaban siendo forzados a someterse<sup>88</sup>.

Respecto a los trabajadores que fueron traídos del exterior, bien para desempeños temporales bien para asentamientos permanentes, y que al contrario de los cañeros de tradición comercial, no dispusieron de mecanismos formales de resistencia a su conversión en obreros, sus orígenes eran muy diversos: indígenas chaqueños cazadores-recolectores, trabajadores mestizos con diversos grados de experiencia en el trabajo asalariado, arrendatarios y minifundistas de Santiago del Estero, de Catamarca, del Valle Calchaquí y de la Quebrada de Humahuaca, coyas de la Puna argentina y de Bolivia, Chiriguano del Chaco boreal, etc.<sup>89</sup>.

Estos trabajadores que, con una extrema precariedad compartían barracones maltrechos y sin ningún servicio, consiguieron que lentamente se mejorara su

---

<sup>84</sup> Pucci, Roberto, “La población y el auge...”, *op.cit.*, p. 12.

<sup>85</sup> *Ibidem*.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> Bolsi, Alfredo y Pucci, Roberto, “Evolución de los problemas de la agroindustria del azúcar”, en *Problemas agrarios del Noroeste argentino (contribuciones para su inventario)*. Instituto de Estudios Geográficos-Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1997, p. 123.

<sup>88</sup> Bravo, María Celia, “El campesinado tucumano...”, *op.cit.*, p. 203.

<sup>89</sup> *Ibidem*.



situación<sup>90</sup>. Con el paso del tiempo, se modificaron las condiciones habitacionales de estos trabajadores, aunque no necesariamente con el objetivo de hacer más habitable su cotidianeidad. En el fondo, el propósito de esta labor era el control de los trabajadores, vinculando la aceptación paulatina de algunas demandas con la retención de esa mano de obra, al tiempo que se asentaban las medidas disciplinarias frente a conductas, individuales o colectivas, que resultaran gravosas para los intereses de los industriales. La mezclanza de estos contingentes tan heterogéneos, con sus diferentes modos de entender las relaciones laborales, sociales y personales, dio como resultado al “pueblo azucarero”, que nunca fue uniforme ni estático<sup>91</sup>.

Esta condición de la sociedad tucumana en el ámbito azucarero permitió, no obstante, que en el nuevo espacio ocupacional generado por la instalación de los ingenios modernos se pudiera tener la impresión de vivir un ambiente casi cosmopolita. Por ejemplo, en el Ingenio San Pablo “coexistían unos 300 indígenas tobas con contingentes de trabajadores tucumanos y santiagueños quechuahablante, quienes debían entenderse con los técnicos franceses que los propietarios del recientemente modernizado ingenio habían contratado para su montaje y puesta en producción”<sup>92</sup>.

En suma, según las conclusiones de J. Balán sobre la conformación de esta inédita fuerza de trabajo en la provincia, se infiere que “su reclutamiento y adaptación al trabajo en la economía azucarera fue posible, al final, por una combinación de salarios altos, métodos coercitivos y redes tradicionales sobre la base del estancamiento económico y el crecimiento demográfico de áreas vecinas a la azucarera”<sup>93</sup>. Pero el problema era considerado de tal magnitud que “la importación de *coolies*”<sup>94</sup> fue

---

<sup>90</sup> No fue el caso para el resto de sectores asalariados de la provincia, donde la brecha de la renta del trabajo aumentó sensiblemente para el período 1895-1914. En: Álvarez, Beatriz, “La evolución de la desigualdad en los ingresos en Tucumán (1895-1914)”. Disponible en: <http://www.fcs.edu.uy/archivos/B.%20%C3%81lvarez,%20La%20evoluci%C3%B3n%20de%20la%20desigualdad%20de%20ingresos%20en%20Tucum%C3%A1n%20%281895-1914%29.pdf> (Consultado el 01/06/2012). A este respecto, consúltese también: Álvarez, Beatriz y Correa Deza, María Florencia, “La movilidad social en Tucumán, Argentina, 1869-1895”, *América latina Historia económica*, N° 1, 2013, pp.126-157.

<sup>91</sup> Campi, Daniel, “Contrastes cotidianos. Los ingenios del norte argentino como complejos socioculturales, 1870-1930”, *Varia Historia*, Vol. 25, N° 41, 2009, p. 249.

<sup>92</sup> Campi, Daniel, “Contrastes cotidianos...”, *op.cit.*, p. 248

<sup>93</sup> Balán, Jorge, “Migraciones, mano de obra y formación de un proletariado rural en Tucumán, Argentina, 1870-1914”, *Demografía y economía*, N° 2, 1976, p. 217.

<sup>94</sup> Trabajadores de origen asiático, fundamentalmente de China, Corea y la India, que recibían ese mismo apelativo aglutinador. Su presencia fue común en el Caribe. Para el caso de estos migrantes en Buenos

mencionada en la época, con directa referencia a la expansión de la agricultura de caña de azúcar en el Perú, que había utilizado esta vía”<sup>95</sup>. Insistiendo en la idea de la coerción como uno de los elementos explicativos de mayor peso, J. Balán afirma que:

*“El elemento organizativo básico de la plantación, el uso intensivo de mano de obra de baja calificación supervisada estrechamente y disciplinada militarmente, en un sistema de explotación más semejante al fabril o al minero que al agrícola, dentro de organizaciones “totales”- es decir, comunidades relativamente cerradas en las que se realizan todas las actividades sociales-, sobrevivió a la esclavitud pero exigió un proletariado rural sui generis”*<sup>96</sup>

Con respecto a los hábitos sociales de los pobladores de los pueblos azucareros, las pesquisas realizadas por D. Campi demuestran que la interacción social tuvo como escenario principal los espacios públicos, puesto que sólo los más privilegiados podían acceder a hábitats en los que se pudiera disponer de espacios de privacidad. Parte de estas relaciones sociales se llevaban a cabo en el marco de los juegos, informales y grupales para los trabajadores, aunque elitistas y exclusivos para los empleados más cualificados, como era el caso de la práctica del tenis<sup>97</sup>.

En su mayor parte, la alimentación de los trabajadores estaba basada en carne vacuna y maíz, pero estas provisiones sólo se consiguieron como resultado de la exitosa huelga de 1904, ya que antes de la fecha se les suministraban raciones que resultaban escasas y provocaban problemas de malnutrición entre los trabajadores que las consumían, quedando por debajo del aporte calórico diario necesario para su labor. Del mismo modo, resultado de la misma acción de fuerza, se forzó una mejora en los uniformes de trabajo suministrados a los trabajadores<sup>98</sup>.

La actividad de estas poblaciones estaba marcada por el ritmo del ingenio y, por lo tanto, de la zafra. En tiempo estival, el ingenio entraba en una hibernación, fruto de la falta de actividad que alimentaba la fábrica, pero al concluir la época de lluvias y asomar el otoño, los trabajadores se aprestaban a preparar la maquinaria para su

---

Aires véase: Kim, Junyoung Verónica, “Desarticulando el 'mito blanco': inmigración coreana en Buenos Aires e imaginarios nacionales”, *Revista de crítica literaria latinoamericana*, N° 71, 2010, pp. 169-193.

<sup>95</sup> Balán, Jorge, “Migraciones, mano de obra...”, *op.cit.*, p. 216.

<sup>96</sup> Balán, Jorge, “Migraciones, mano de obra...”, *op.cit.*, p. 215.

<sup>97</sup> Campi, Daniel, “Contrastes cotidianos...”, *op.cit.*, p. 256.

<sup>98</sup> Campi, Daniel, “Contrastes cotidianos...”, *op.cit.*, p. 257.

funcionamiento. Esto ocurría si eran trabajadores permanentes, mientras que los trabajadores temporales comenzaban a afilar sus machetes, para dejar a ras de suelo la espigada caña que había estado creciendo esos meses.

Los contrastes eran muchos en esta suerte de crisol, ya que se encontraban los trabajadores de vestimenta a la europea con los harapientos que apenas si tenían con que cubrir sus cuerpos. Unas marcadas diferencias sociales que se enfrentaban cotidianamente en este espacio singular, y tal y como nos lo relatan los testimonios, se mantuvo hasta hace no tanto tiempo:

*“...cuando terminaba la zafra, paraban dos o tres meses la fábrica. Entonces la gente tenía que emigrar a otros lugares a buscarse trabajo; ir fuera de la provincia inclusive. Eso disponía la patronal. Y bueno, los obreros emigraban: algunos iban a Santa Fe a juntar maíz o algodón; otros a hachar en los obrajes hasta que pasaba esa época y volvían”<sup>99</sup>*

Los períodos de inactividad, lejos de ser momentos en los que poder encontrar el descanso, suponían una mayor zozobra para quienes tenían que seguir buscando su forma de sobrevivir al calor y al hambre:

*“Porque los que trabajaban como obreros simplemente no cobraban cuando no trabajaban. Eran estables pero no eran mensuales. Eran trabajadores por día, jornalizados. Si faltaban un día, no lo cobraban; inclusive a veces ni por enfermedad. Porque primeramente no se justificaban ni las enfermedades. O en el caso de que, por ejemplo, el patrón disponía que no se trabajaba en la fábrica, por cualquier circunstancia, el obrero perdía de ganar sin que tenga nada que ver con la paralización de las actividades. Era la ley del patón”<sup>100</sup>*

---

<sup>99</sup> Taboada, María Estela y Lobo, Héctor Ángel, *Los dueños de la zafra. Vida y trabajo en un ingenio azucarero*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1996, p. 49.

<sup>100</sup> Taboada, María Estela y Lobo, Héctor Ángel, *Los dueños de la zafra...op.cit.*, p. 50.

#### 1.4.2. El azúcar tucumano como problema nacional

A partir de la segunda mitad de la segunda década del siglo XX, ya con el radicalismo<sup>101</sup> en el poder, comenzaron a hacerse cada vez más audibles las críticas que arremetían contra la economía protegida del azúcar. En este contexto, en septiembre de 1916, una moción a favor de la reducción de los derechos sobre el azúcar fue presentada en la Cámara de Diputados, llevando la firma de un diputado conservador y otro socialista. Esta moción fue finalmente aprobada, provocando las iras de industriales y cañeros<sup>102</sup>.

En estos momentos, y con la asunción en ese mismo año de Hipólito Yrigoyen<sup>103</sup> como presidente de la República, el sector de agroexportadores pampeanos ganó peso político, consolidándose una alianza junto con los socialistas y radicales.

Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Yrigoyen fue la promulgación un decreto que autorizaba la importación de 75.000 Kg de azúcar con derechos reducidos. El ejecutivo entendía que podía disponer la bajada de las tasas aduaneras a la entrada del dulce extranjero hasta alcanzar la supresión, si esto era necesario<sup>104</sup>.

El azúcar se había convertido, por tanto, en un tema de discusión a escala nacional, en el que radicales y socialistas trataban de aumentar su electorado en el ámbito porteño mediante la crítica reiterada a la industria tucumana. De este modo, el grupo socialista presentó un proyecto, finalmente no aprobado, que pretendía la supresión de la Ley Saavedra Lamas, aduciendo argumentos tales que:

---

<sup>101</sup> Véase el trabajo de: Rock, David, *El Radicalismo Argentino, 1890-1930*. Amorrortu, Buenos Aires, 1997.

<sup>102</sup> Lenis, María, y Moyano, Daniel, “Las corporaciones empresarias: la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Centro Azucarero Argentino (CAA). La legitimación del espacio empresarial, 1894-1904”, Xº Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Rosario, 2006. Edición en CD-ROM

<sup>103</sup> Hipólito Yrigoyen nació en 1852, y con sólo 25 años ya había iniciado su carrera política como diputado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Integrante desde la primera hora de la Unión Cívica Radical, el pensamiento de Yrigoyen se inscribe en la corriente del reformismo liberal-democrático que pretendía acabar con la corrupción del sistema oligárquico. Ocupó la presidencia entre 1916-1922 y más adelante de 1928-1930, cuando fue derrocado por el golpe de Estado que encabezó José Félix Uriburu.

<sup>104</sup> María Lenis, y Moyano, Daniel, “Las corporaciones...”, *op.cit.*, p. 89

*“los señores azucareros de Tucumán han podido degenerar la caña y emplear procedimientos de elaboración anticuados y costoso, estancándose en la pereza y en la rutina, merced al altísimo precio que asegura para sus productos el gravamen aduanero vigente”*<sup>105</sup>

Los industriales azucareros, a través de altavoces editoriales como los de la *Revista Azucarera*, comenzaron a manifestar una reivindicación de la industria en términos de defensa nacional, y así es que a partir de 1920 encabezaba todas sus publicaciones con la frase: “fomentar las industrias nacionales es obra de patriotismo y de amor a la tierra donde nacimos”<sup>106</sup>.

Lo cierto es que tanto radicales como socialistas, que aumentaron su peso político desde el año 1912, en que se aprobó el sufragio universal y obligatorio, se habían mostrados partidarios de un librecambio que veía en el sector ganadero su modelo de crecimiento ideal, y se acusaba a los ingenios, como ya se ha apuntado, de mantener un sistema de producción costoso en lo económico y excesivamente duro con los trabajadores que en él participaban. No será sino Lisando de la Torre quien encabezó una lista conservadora para las elecciones de 1916, desde la que se decidió a plantear un programa económico netamente proteccionista, matizado a su vez con aspectos relativos a mejoras sociales en lo laboral<sup>107</sup>.

Pero volviendo al escenario provincial, en abril de 1917 el radicalismo pasó a ocupar el gobierno de la provincia, gracias al apoyo de agricultores, principalmente propietarios, trabajadores, pequeños empresarios y una minoría de la élite industrial local. Juan Bautista Bascary ocupó el cargo de gobernador hasta diciembre de 1920, fecha en la que por intercesión del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) se decidió destituirlo de su función institucional. A lo largo de estos escasos años, el propósito de Bascary, aunque irrealizado, fue el de armonizar la cuestión tributaria,

---

<sup>105</sup> *Revista Azucarera* N° 169, enero 1917, p. 10 Cfr.: *Ibidem*.

<sup>106</sup> Bravo, María Celia, “Las representaciones en torno a la agroindustria y el proteccionismo en la Argentina, La cuestión azucarera en la década de 1920, *Revista digital de la escuela de historia*”, N° 2, 2008, p. 43

<sup>107</sup> Bravo, María Celia, “Las representaciones en torno...”, *op.cit.*, p. 48

encarándola hacia las propuestas del nuevo modelo radical, y atendiendo en buena medida las sugerencias del sector cañero<sup>108</sup>.

El objetivo de los industriales siguió siendo el mismo y, aunque aparentemente contradictorio, se mostraba claro en sus fines. La ley Saavedra Lamas era el único instrumento legal que dotaba de estabilidad a la producción azucarera, por lo que les interesaba que las críticas hacia ésta no fueran lo suficientemente duras como para desprestigiarla absolutamente y poder llegar a su derogación. No obstante, lo que sí que pretendían era limitar las facultades que esa ley otorgaba al presidente, que se mostró siempre muy involucrado en la cuestión, ya que le permitían regular los precios del mercado azucarero. Como nos explica M. C. Bravo:

*“los factores azucareros aceptaron una ley que era librecambista en su esencia, en tanto rebajaba las tarifas e imponía aranceles fijos de naturaleza más fiscal que protectora. A cambio de esta concesión, obtenían un marco de funcionamiento de índole liberal, que prohibía al presidente la intervención en la importación y exportación de azúcares. A su vez, en concordancia con los reclamos de los legisladores y la prensa del litoral, articulaban el sistema impositivo de la provincia a la protección aduanera; ésta se reduciría en concordancia con el monto de los nuevos impuestos. La presión tributaria del radicalismo provincial había llevado a los industriales a resignar una de sus banderas más caras, la autonomía provincial, cuyo aspecto impositivo era la expresión consistente de dicha potestad”*<sup>109</sup>

Un factor novedoso fue la introducción del concepto de justicia distributiva que emana de la administración pública. Desde 1927 fue uno de los elementos clave en la elaboración de la política económica sobre el azúcar. Como señalan D. Campi y A. Kindgard, la llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen erosionó los mecanismos que articulaban la convergencia de intereses entre la élite industrial azucarera tucumana y el gobierno de la Nación<sup>110</sup>. También en este sentido, M.C. Bravo y F. Gutiérrez han

---

<sup>108</sup> Girbal-Blacha, “Azúcar, poder político y propuestas de concertación para el Noroeste argentino en los años '20”, *Desarrollo Económico*, Vol. 34, Nº 133, 1994, p. 111

<sup>109</sup> Bravo, María Celia, “Las representaciones en torno...”, *op.cot.*, pp. 56-57.

<sup>110</sup> Campi, Daniel y Kindgard, Adriana, “La política azucarera argentina en las décadas de 1920 y 1930 y la cuestión de la 'justicia distributiva'”, *III Congreso Brasileiro de Historia Económica*, 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 1999. Disponible en: <http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/mesat5/Daniel%20CAMPPI%20y%20Adriana%20KINDGARD.pdf> (Consultado el 12/10/2010)

subrayado en un estudio reciente la importancia del Estado como el actor que intentó, mediante la puesta en práctica de medidas distributivas, impedir el aumento de conflictividad social que generaban las tensas relaciones mantenidas entre industriales azucareros y productores cañeros<sup>111</sup>.

### **1.5. La fractura de 1930**

La retracción de la economía mundial, fruto de la crisis de 1929, tuvo un impacto notable en la economía argentina y, por ende, en la tucumana. En el período que inaugura el cambio de década se han distinguido cambios en lo referente a las relaciones entre el Estado y las grandes empresas, así como su relación con el mundo obrero. El año de 1930 es el momento de fundación de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT), en un intento del gobierno por reunir en una gran central obrera a las atomizadas asociaciones de trabajadores que venían de tradiciones socialistas, comunistas o anarquistas disidentes de la otra gran central del sindicalismo de clase, la Federación Obrera de la Regional Argentina (FORA). La protección bajo un paraguas común, que a su vez generó la aparición de una dirigencia que poco a poco se fue distanciando de sus intereses de clase, junto con la legislación represiva y los intentos de concertación entre el Estado y los sindicatos, significaron una primera experiencia de verticalización del movimiento obrero en la Argentina.

El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que puso a la cabeza del gobierno al teniente general José Félix Uriburu, derrocando al radical Hipólito Yrigoyen, significó la intervención militar a favor de la salvaguarda de los privilegios de la burguesía nacional, cuyos intereses estaban en peligro por las debilidades del mercado internacional. El colapso del sistema de partidos, la posterior proscripción del radicalismo, las medidas represivas y la persistencia de altas tasas de desocupación hicieron que, desde la mayoría de la producción historiográfica, este lustro haya sido calificado de baja intensidad en lo que a conflictos obreros se refiere. Algunos autores, sin embargo, han matizado esta idea poniendo en valor las investigaciones de la corriente historiográfica definida como “historia militante”, que en sus recuentos agrega

---

<sup>111</sup> Bravo, María Celia y Gutiérrez, Florencia, “La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje estatal (1928-1949)”, *H-industria*, N° 14, 2014, pp. 153-185

conflictos que no están reflejados por las estadísticas oficiales<sup>112</sup>. Como advierte N.I. Carrera, otros autores han caracterizado el período en base a su calma relativa, teniendo en consideración los ciclos de protesta entre los que se encuentra jalonado el periodo<sup>113</sup>. Desde nuestra perspectiva, consideramos que investigaciones recientes han venido a reforzar la idea que la clase trabajadora ya estaba articulada como un actor social autónomo, que a través de sus expresiones institucionales y sus prácticas de confrontación en el esquema de la relación entre capital y trabajo, participó activamente en el territorio social en disputa de la década de los 30.

Para el caso tucumano, se ha descrito prolijamente que si bien las estructuras de representación colectiva de los trabajadores podían caracterizarse por lo efímero e intermitente de su existencia, sus luchas pasaron frecuentemente por los espacios inorgánicos, algo que no pone en tela de juicio la persistencia de esta confrontación permanente. Para sustentar esta hipótesis, M. Ullivarri ha rastreado las huellas de los conflictos entre obreros azucareros e industriales, aunque vinculando la coyuntura económica desfavorable, hasta mediados de la década, con la dificultad para la consolidación de llevar a cabo demandas o sostener en el tiempo las posiciones de fuerza<sup>114</sup>. Además, en las conclusiones de su tesis doctoral, la autora incluye una reflexión que tiene mucho en común con lo que el presente trabajo pretende demostrar. Aplicado a los sectores obreros de la década de los 30, Ullivarri nos dice que “la lucha por consolidar un movimiento sindical implicó no solo la búsqueda y reorientación de un lugar de interpelación hacia los pares, sino también la fundación de una nueva relación con la estructura estatal”<sup>115</sup>. En suma, tanto en este período previo, como a lo largo de nuestro estudio, veremos que en la dinámica propia al conflicto de clases, los

---

<sup>112</sup> Carrera, Nicolás Íñigo, “La clase obrera argentina a comienzos de los '30. Sistema institucional, partidos y clase: apuntes para una lectura crítica”, ponencia presentada en las *Jornadas a 40 años del Cordobazo: ciento treinta años de historia de las luchas de la clase obrera en Argentina, 1878-2008*, Córdoba, 27 y 28 de mayo de 2009. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/icarrera1.pdf> (Consultado el 28/10/2010). En este texto, N. I. Carrera hace una crítica de la historiografía que en los años 80 y 90 dejó de lado, o minimizó, a la clase obrera como actor social protagonista del devenir histórico, así como una escasa preocupación por las evidencias empíricas que debían sostener tales afirmaciones.

<sup>113</sup> Tal es el caso de: Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto, *Sectores populares. Cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*. Sudamericana, Buenos Aires, 1995.

<sup>114</sup> Ullivarri, María, “Sindicatos en la 'capital del azúcar'. Organización y lucha en el mundo del trabajo de la provincia de Tucumán (Argentina), 1930-1943”, *Historia Agraria*, N° 55, 2011, pp. 101-133. De la misma autora: “Trabajadores, sindicatos y política en Tucumán. 1930-1943”, Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

<sup>115</sup> Ullivarri, María, “Trabajadores, sindicatos...”, *op.cit.*, p. 329.



actores sociales y sus expresiones organizacionales parecen encontrarse en la búsqueda permanente de un espacio de participación, entendido desde un punto de vista inmediato, es decir, provincial, pero también apelando a la cohesión colectiva en todo el país, mediante la reubicación de los espacios de negociación donde se encuentren con los dispositivos que dispone el poder político.

### **1.5.1. El movimiento obrero tucumano antes del peronismo: 1935-1943**

Con el derrocamiento de Yrigoyen en 1930, se inauguró una nueva etapa en la vida política del país, conocida como la “década infame”<sup>116</sup>. Este gobierno conservador propició que en Tucumán accediera, en 1932, a la gobernación de la provincia Juan Luis Nougués, perteneciente al partido Defensa Provincial Bandera Blanca<sup>117</sup>, de corte reformista conservador. El gobierno de Nougués se sumió en el marasmo institucional, debido a que fue incapaz de lograr los acuerdos parlamentarios necesarios para poner en práctica una política de aumento de los recursos fiscales que contribuyera a la mejora de la situación financiera de la provincia. Los problemas derivados de su gestión fueron tales que, en 1934, el PEN decidió intervenir a la provincia, que sólo recuperó su autonomía institucional en el año 1935.

El nuevo gobernador electo fue Miguel Campero, de la UCR, quien asumió el cargo en un contexto, tanto nacional como provincial, de creciente conflictividad política manifestada en torno a la oposición entre fascistas y antifascistas. Los primeros meses del año 1935 estuvieron marcados por una fuerte agitación social, así como

---

<sup>116</sup> Sobre este período de la historia tucumana consúltense, entre otros los trabajos de: Barbieri de Guardia, Marta, “Reforma y representaciones colectivas: sus proyecciones en el movimiento estudiantil tucumano a comienzos de la década de 1940”, Bonano, Luis Marcos, *Estudios de historia social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX* (Vol. I). Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1999, pp. 119-146; Ullivarri, María, “El Partido en su laberinto. La Federación Socialista Tucumana, 1931-1937”, *Historia Regional*, N° 26, 2008, 99. 137-164; Ullivarri, María, “Política, antifascismo y movimiento obrero. Tucumán 1935-1936”, *Población y sociedad*, Vol. 16, 2009, pp. 283-316. Disponible en: <http://www.poblacionysociedad.org.ar/archivos/16/P&S-V16-Ullivarri.pdf> (Consultado el 13/04/2015); Ullivarri, María, “Trabajadores, Estado y política durante las gobernaciones radicales en Tucumán. 1935-1943”, *Anuario del Centro de Estudios Históricos 'Prof. Carlos S.A. Segreti'*, N° 9, 2009, pp. 303-321; Ullivarri, María, “La miseria del hogar como discurso público. Estrategias obreras en épocas de crisis. Tucumán durante los primeros años treinta”, *Anos 90*, Vol. 19, N° 36, 2012, pp. 339-365.

<sup>117</sup> Véase: Parra, Graciana, *El 'reformismo social' conservador tucumano: el partido "Bandera Blanca" (1927- 1934)*, Tesis de licenciatura inédita, Universidad Nacional de Tucumán, 2006.

enfrentamientos provocados por la Legión Cívica Argentina<sup>118</sup>. Por su parte, el antifascismo sirvió como aglutinador del movimiento obrero, adoptándose la huelga como un recurso más para luchar contra el aumento de los movimientos fascistas en la provincia<sup>119</sup>.

En esta etapa, no fueron pocos los movimientos de fuerza protagonizados por el movimiento obrero tucumano. Como indica E. Piliponsky, entre 1936 y 1943 se registran 52 movimientos huelguísticos, donde sólo en dos ocasiones los trabajadores obtuvieron el triunfo, totales o parciales, frente a la patronal<sup>120</sup>. Este mismo autor nos señala que, siguiendo las manifestaciones públicas que los gremios de distintas ocupaciones sectoriales realizaron en este contexto adverso, se puede deducir que existía una militancia o “estructura clandestina previa”, destinada a evitar ser el foco de la represión gubernamental<sup>121</sup>.

Otro aspecto relativo a la vida de los sindicatos es el de la función social de los mismos, cuya importancia veremos que se repite con el caso de ATEP. En este sentido, las organizaciones obreras no sólo se “limitaban” al ejercicio reivindicativo de la mejora de las condiciones materiales de sus afiliados, sino que contribuían a densificar el tejido social mediante multitud de actividades culturales, deportivas o asociativas<sup>122</sup>.

### **1.6. La “Revolución de junio” en Tucumán, 1943-1946**

El golpe de Estado del 4 de junio de 1943 puso fin al gobierno de Ramón Castillo, y trajo al frente del Estado a la sucesión de militares compuesta por Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Como es bien sabido, también es este el momento en el que emerge la figura política Juan D. Perón, que ocupó la secretaría de Trabajo y Previsión.

La primera medida económica que tomó el gobierno militar, en relación a la economía azucarera, consistió disminuir los precios, de modo que se hiciera más

---

<sup>118</sup> Una agrupación representativa del nacionalismo armado de derechas. Para un análisis de su presencia en Tucumán, véase: Ullivarri, María, “Política y antifascismo...”, *op.cit.*

<sup>119</sup> Ullivarri, María, “Política y antifascismo...”, *op.cit.*, p. 300.

<sup>120</sup> Piliponsky, Esteban, “¿Sindicatos fuertes con poder de negociación débil? Análisis del sindicalismo tucumano previo al surgimiento del peronismo”, *Acontracorriente*, Vol. 10, N°1, 2012, p. 324.

<sup>121</sup> *Ibidem.*

<sup>122</sup> Piliponsky, Esteban, “¿Sindicatos fuertes...?”, *op.cit.*, p. 326 y ss.

accesible el consumo generalizado del producto. Según M.C. Bravo y F. Gutiérrez, la secretaría de Trabajo “asumió las reivindicaciones del sindicalismo pero las dificultades para implementar en los inmediato las reformas laborales reconocidas en el decreto [nº 678] precipitaron la protesta de los trabajadores”<sup>123</sup>. Este decreto fue el primero que recogía los intereses de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (en adelante FOTIA), cuya creación fue, sin duda, el hito más importante de este período en lo que se refiere al movimiento obrero tucumano. La creación de la FOTIA, en 1944, contribuyó decisivamente al articulado organizacional del peronismo provincial. Aunque se ha señalado que, especialmente a partir de 1949, la voluntad del poder político fue la de restar autonomía a la central azucarera, G. Rubinstein ha demostrado que los dirigentes sindicales, así como los obreros azucareros en su conjunto, encontraron en el peronismo “los resquicios necesarios para introducirse al sistema y tomar parte en la dirección de los acontecimientos participando de algunas decisiones de un gobierno al que ellos mismo contribuyeron a sostener”<sup>124</sup>. No obstante, si bien la FOTIA se reivindicaba como el sostén fundamental del peronismo en la provincia “más peronista del país”, su capacidad de influir en el plano político se reveló más limitada que lo que sus dirigentes habían intentado determinar<sup>125</sup>.

### 1.7. A modo de balance

El objetivo de este primer capítulo ha sido mostrar al lector algunas de las singularidades espaciales y demográficas, cuyas características contribuyen a comprender cómo se asienta en la provincia una estructura económica de monocultivo agroindustrial basada en la plantación y proceso del azúcar. Entendemos que es interesante dedicar este espacio porque sólo así se podrán comprender las numerosas referencias que a la situación de crisis económica estructural de la provincia y de sus trabajadores que realizará ATEP a lo largo del período que ocupa nuestro estudio.

---

<sup>123</sup> Bravo, María Celia y Gutiérrez, Florencia, “La política azucarera...”, *op.cit.*, pp. 167 y ss.

<sup>124</sup> Rubinstein, Gustavo, *Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, p. 153.

<sup>125</sup> Rubinstein, Gustavo, “El Estado peronista y la sindicalización de los trabajadores azucareros”, en: Macor, Daría y Tcach, César, *La invención del peronismo en el interior del país*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003, pp. 319-363.

Revisando la bibliografía específica hemos querido poner de manifiesto que, además de los trabajos clásicos que se han mencionado, una multitud de nuevas miradas están contribuyendo a complejizar el pasado tucumano, especializando los estudios, en temática y cronología. Nuestra intención ha sido, por tanto, la de elaborar una síntesis interpretativa sobre la multitud de matices que la investigación histórica más reciente viene aportando.

Si algo se ha podido observar con claridad es que el entramado productivo y social del azúcar formó la columna vertebral de la economía del Tucumán contemporáneo. Sin embargo, aunque esta actividad económica fuera, a mucha distancia de las demás, la principal en términos de rendimiento y de ocupación de mano de obra, también se ha visto cómo el movimiento obrero tucumano se expresó tempranamente, matizando así la idea de que antes del surgimiento del peronismo, los trabajadores asalariados no se habían integrado en organizaciones sectoriales. Esta acumulación de experiencias previas sirve, por tanto, como clave interpretativa para arrojar luz sobre las dinámicas de negociación que se dieron durante los conflictos azucareros que se sucedieron en los primeros años del peronismo. Asimismo, se puede considerar que esta “tradición militante” pasaría a formar parte de la cultura política de la provincia o, si así se prefiere, se agregaba al imaginario social de los trabajadores tucumanos. Es en este sentido que nos parece importante hacer hincapié sobre las trayectorias del sindicalismo tucumano, en tanto en cuanto se puede considerar que la experiencia vivida en el momento de integrarse al movimiento peronista, significó una suerte de aprendizaje social del cual los sindicalistas y militantes docentes tuvieron que extraer enseñanzas.

## II. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEL TRABAJO DOCENTE EN TUCUMÁN

*“La profesión de la enseñanza requiere tanta o mayor preparación como ninguna otra. A la idoneidad individual del maestro ha de añadirse la serie de conocimientos adquiridos y los resultados averiguados ya, si no se quiere que cada maestro invente el arte de enseñar y lo deje morir con él, para renacer con el que le suceda.”<sup>1</sup>*

### 2.1. Hacia la construcción del objeto de estudio: los trabajadores de la educación como actor social en vías de proletarización

Los educadores han sido un grupo social de difícil encaje en los análisis provistos por las ciencias sociales que han atendido las relaciones entre de clase y trabajo. Existe una larga tradición interpretativa que dota a los docentes de significado social en tanto que activos del trabajo intelectual, eso sí, de menor prestigio que el desempeñado por los profesionales liberales<sup>2</sup>. Además, hay que añadir una característica que diferencia a los docentes de otros colectivos asalariados: su temprana implantación masiva en la sociedad a través de la institución escolar y los sistemas educativos liberales de carácter universalista. Una asentada formulación teórica ha tendido a considerar a los docentes como parte de la clase media. Esta interpretación se sustenta sobre dos ideas principales: 1) los docentes son trabajadores intelectuales, cuya mayor preparación académica les aleja del mundo obrero; 2) el colectivo docente está mayoritariamente compuesto de mujeres, cuyo aporte salarial no es el sustento principal de la unidad familiar, sino un complemento en los ingresos domésticos, nutridos principalmente por la parte masculina de la ecuación. A estas ideas habría que sumar la escasa propensión a la

---

<sup>1</sup> Sarmiento, Domingo Faustino., *De la educación popular* [1ª edición, Imprenta Julio Benín, Santiago, 1849], p. 109. En: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/de-la-educacion-popular--0/> (Consultado el 26/04/2015).

<sup>2</sup> La definición gramsciana indica que todos seres humanos tenemos los atributos del ser intelectual, pero diferencia a los intelectuales del resto de trabajadores por su función social. Desde este punto de vista, los intelectuales participan de la articulación hegemónica de un estado cuando se les atribuye “una actividad propia en su campo técnico”. Para Gramsci, los docentes “desde maestros hasta profesores de universidad” componen la más numerosa y homogénea fracción de los intelectuales, aunque reconoce la subordinación de los primeros a los segundos “por espíritu de casta”. Gramsci, Antonio, *Cuadernos de la cárcel*, Tomo I. Ediciones Era, Puebla, 1999, pp. 121-122.

conflictividad social en los momentos en que la clase trabajadora se configuró como un actor social autónomo. Estas hipótesis, sin embargo, no han sido respaldadas por investigaciones de base empírica. Los científicos sociales vienen realizando aportes que señalan en otra dirección. Tal es el caso del trabajo de R. Donaire, quien ha insistido sobre el hecho de que a partir de las reformas neoliberales de la década de los noventa, en la Argentina se ha instalado el debate entre pauperización o proletarización del colectivo docente<sup>3</sup>.

La controversia sobre la condición intelectual del trabajador de la educación es pertinente<sup>4</sup>. Las fuentes consultadas en esta investigación han arrojado fórmulas como “obreros de la tiza”, “obrero intelectual” y la finalmente aceptada “trabajador de la educación”. Sin embargo, la diferente posición ocupada por los trabajadores manuales y los trabajadores intelectuales en el esquema de la división capitalista del trabajo ya fue señalada por K. Marx<sup>5</sup>. Esta distinción es difícilmente rebatible incluso en el contexto del sistema capitalista contemporáneo, aunque se deba matizar que los procesos del trabajo intelectual tienen cada vez más peso en el resultado de la producción de bienes y servicios. El sistema de producción capitalista, aun manteniendo esa diferencia, evolucionó históricamente hacia la subordinación del trabajo intelectual al capital. En este sentido, el trabajo intelectual se construyó como un campo de reproducción cultural, aunque no exento de cierta autonomía, con el doble objetivo de proveer de avances científico-técnicos a las economías desarrolladas<sup>6</sup>, así como ayudar a construir

---

<sup>3</sup> Donaire, Ricardo, “El reclutamiento de los docente en Argentina: una aproximación a partir de la ocupación de sus cónyuges”, *Educación Social*, Vol. 34, N° 122, p. 122.

<sup>4</sup> Nos parece importante definir qué papel ocupa el trabajador de la educación en el esquema de las relaciones sociales capitalistas, sin embargo, una buena parte de la bibliografía insiste construir al docente como objeto de estudio a través de las prácticas educativas, centrándose más en los aspectos de su desempeño profesional que en el papel que estos trabajadores ocupan en el desarrollo de la lucha de clases. De este modo, autores como A. Alliaud se esfuerzan en delinear cuáles son las características que se le atribuyen a un docente respecto de su actividad magisterial. Esto le lleva a definir al maestro incluyendo “tanto las cualidades 'apostólicas' como las profesionales y también las de trabajador de la educación [modelos que] no son ni mutuamente excluyentes ni exclusivos de un momento histórico particular. En: Alliaud, Andrea, *Los maestros y su historia. Los orígenes del magisterio argentino*. Granica, Buenos Aires, 2007, 9. 33.

<sup>5</sup> Léase: Marx, Karl, “Glosas marginales al programa del partido obrero alemán”, 1875. Disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm> (Consultado el 29/03/2015).

<sup>6</sup> Es interesante ver cómo, en algunas publicaciones aparecidas en los sesenta, la función social de la educación como dispositivo destinado a mejorar los procesos productivos era plenamente reivindicada. Valga como ejemplo de esta idea la siguiente cita: “El problema educativo argentino en lo que respecta a la educación elemental es, más que un problema de alfabetización, [...] el de lograr, como nivel educativo mínimo, una cantidad de conocimientos que equie a la población para poder participar activamente en la

el tipo de ciudadanía que se quiere hacer arraigar en los nacientes estados liberales<sup>7</sup>. Tal es el caso del sistema educativo en la Argentina<sup>8</sup>, que cumple con la doble función de proveer de fuerza de trabajo al modelo agroexportador en marcha, así como la de fortificar el aparato institucional del Estado mediante la instrucción en los valores republicanos<sup>9</sup>.

El sistema de educación pública fue un instrumento vertebrador de fundamental importancia en la hora de la construcción del Estado en Argentina<sup>10</sup>, siendo su mayor impulsor Domingo Faustino Sarmiento<sup>11</sup>. La figura que se conmemora con la celebración del “día del maestro” el 11 de septiembre, fecha de su muerte, fue pionera

---

actual sociedad tecnológica en continuo desarrollo”. En: Sanjurjo, María Ester, “La educación y la oferta de mano obra en Argentina”, *Desarrollo Económico*, Vol. 2, Nº. 3, 1962, pp. 99-117.

<sup>7</sup> Acerca de este proceso, para el caso de Bolivia, consúltese: Martínez, Françoise, “Vivre ensemble. Le rôle de l'école libérale dans la construction d'une citoyenneté du XXème siècle”, *Lazos*, Nº 7, 2005, pp. 29-42.

<sup>8</sup> También es cierto que, si se pone el valor social de la institución escolar en su relación a la transmisión de los conocimientos acumulados por una sociedad, podemos considerar que la escuela “emerge como institución social especializada cuando la cultura a transmitir se complejiza [...] y ya no resultan suficientes las formas de transmisión orales entre las generaciones para garantizar la continuidad de la vida social”. En: Birgin, Alejandra y Dussel, Inés, “Rol y trabajo docente”, *Formación docente, Aportes para el debate curricular*, p. 5. Disponible en: [http://www.opech.cl/bibliografico/Doc\\_Docente/S\\_Rol\\_y\\_trabajo\\_docente\\_Birgin-Dussel.pdf](http://www.opech.cl/bibliografico/Doc_Docente/S_Rol_y_trabajo_docente_Birgin-Dussel.pdf) (Consultado el 15/03/2015)

<sup>9</sup> La idea de ciudadanía, por su parte, siempre fue un territorio de disputa. Los sucesivos gobiernos se arrogaron la potestad de definir qué ciudadanía era la que se aspiraba a construir a través de las instituciones educativas. Las prácticas discursivas a este respecto siempre han consistido en tratar de persuadir a la ciudadanía que el modelo educativo que se quiere aplicar es el más apropiado para el tipo sociedad que se quiere conseguir. Algunos ejemplos son especialmente dolosos: habiendo pasado apenas unas semanas tras el golpe de 1976, con los componentes represivos del Estado terrorista trabajando a toda máquina, el flamante ministro de Educación de la dictadura, Ricardo Pedro Bruera, declaraba que: “Tendrá primacía inmediata en la acción del gobierno al educación, la restauración del orden en todas las instituciones escolares. La libertad que proclamamos como forma y estilo de vida, tiene un precio previo, necesario e inexcusable: el de la disciplina. El caso contrario sólo significa alienación y en él se diluye toda posibilidad de realización personal y social auténtica”. Diario *Clarín*, 14/04/1976, Cf.: Filmus, Daniel y Frigiero, Graciela, *Educación, autoritarismo y democracia*. Miño y Dávila, Buenos Aires, 1988, p.13.

<sup>10</sup> De forma hiperbólica, J.C. Tedesco sitúa el origen de la cuestión educativo es este momento: “ Cuando el 15 de julio de 1796, Manuel Belgrano leía ante el Consulado de la ciudad de Buenos Aires su *Memoria sobre los medios generales para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio*, quedaba inaugurado en la Argentina el debate educacional en términos modernos”. En: Tedesco, Juan Carlos, *Educación y sociedad en la Argentina (1880-1900)*. Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1970, p. 27.

<sup>11</sup> El maestro, escritor, gobernador y presidente de la República fue la figura más destacada en el momento del impulso de la ley de Educación Común 1.420 (que garantizó el carácter laico y obligatorio en el nivel primario), aprobada bajo la presidencia del tucumano Julio Argentino Roca en 1884. Una versión digital de la obra de Domingo F. Sarmiento *De la educación popular*, publicada por primera vez en 1849, se encuentra accesible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/de-la-educacion-popular--0/> (Consultado el 26/04/2015).

en la defensa de la idea de la construcción de la igualdad<sup>12</sup> mediante la institucionalización de la educación pública, laica, obligatoria y gratuita, lo que supuso un avance comparativo respecto del resto de países de la región<sup>13</sup>. En el ámbito latinoamericano está bien asentada la tradición de identificar a personalidades del pasado como los forjadores y/o constructores, próceres incluso, de las repúblicas construidas luego de las Independencias, y el caso de Sarmiento no es diferente cuando de la educación y los docentes se trata. La importancia de su legado es frecuentemente traída a la memoria por actores que no necesariamente comparten las posiciones ideológicas desde las que se impulsa este manido rescate del espíritu “sarmientino”. Héctor Félix Bravo, pedagogo, académico y diputado nacional<sup>14</sup> del Partido Demócrata Progresista<sup>15</sup>, señalaba que la barbarie y el caudillismo formaban los males sociales que Sarmiento detectó en la sociedad argentina de mediados del S. XIX, deficiencias que sólo se podrían solventar con la educación democrática y popular, el único elemento de liberación popular y de superación de las condiciones morales y materiales en que éste se veía sumido<sup>16</sup>.

Pero la inspiración que despertaba Sarmiento no era compartida por todos. Un ejemplo significativo se produjo a raíz de la aprobación de un homenaje al “Día del Maestro” en el Senado de la Nación. Con ese pretexto, y sumergidos en el efervescente clima revolucionario de los años setenta, los senadores justicialistas y radicales se enzarzaron en una disputa en la que, mientras el radical Carlos H. Perette defendía la figura del pedagogo, el justicialista Héctor Domingo Maya, senador por la provincia de Entre Ríos, se despachó afirmando que “esos que van a colocar bombas trabajan más a

---

<sup>12</sup> Al hilo de la aprobación del sufragio universal masculino luego de las revoluciones burguesas en Europa, Sarmiento defendía que “...esta igualdad de derechos acordada a todos los hombres, aún en los países que se rigen por sistemas tutelares, es en las repúblicas un hecho que sirve de base a la organización social, cualesquiera que sean las modificaciones que sufra accidentalmente por los antecedentes nacionales u otras causas. De este principio imprescriptible hoy nace la obligación de todo gobierno a proveer de educación a las generaciones venideras...”. En: Sarmiento, Domingo F. *De la educación...*, op. cit., p. 14.

<sup>13</sup> En Chile, la ley de instrucción primaria obligatoria no se promulgará hasta 1920, mientras que en Uruguay no será reflejada hasta la aprobación de la Constitución de 1950.

<sup>14</sup> Elegido como representante de Capital, entre 1963-1966 presidió la comisión de Educación de la cámara de Diputados.

<sup>15</sup> Para un estudio de esta corriente política que cobró importancia en la década de los treinta, consúltese: Macor, Darío, “Radicales, demoprogresistas y antipersonalistas: oficialismo y oposición en la Santa Fe de entreguerras”. Disponible en: <http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/viewFile/98954/146847> (Consultado el 22/03/2015)

<sup>16</sup> Bravo, Héctor Félix, *Sarmiento, pedagogo social*. EUDEBA, Buenos Aires, 1965, pp. 17-32.



favor, que en contra de Sarmiento”, en alusión a un atentado con artefactos explosivos que tuvo lugar, días antes, contra el Colegio Nacional Sarmiento<sup>17</sup>. La réplica de Perette tuvo bastante de ingenua, pero tal vez mostró sinceridad cuando, luego de la salida de tono de Maya, el senador radical afirmó que:

*“sorprende que se pongan estos puntos suspensivos en una vida como la de Sarmiento, precisamente en un momento de confusión juvenil, cuando la ultraizquierda y la ultraderecha trabajan para decirle a la República que no hay otro camino que el del caos y la destrucción, siendo Sarmiento la síntesis de la construcción, el propulsor del desarrollo y el progreso argentinos”*<sup>18</sup>

Más allá de la escasa profundidad de los argumentos de H. D. Maya, es fácil comprobar que la conceptualización negativa del sistema educativo en los setenta, tanto hacia el sector docente como al estudiantil, constituyó una de las preocupaciones que el gobierno golpista se abocó a atajar a partir de marzo de 1976<sup>19</sup>.

El papel del sistema educativo público constituye también un problema desde el punto de vista del análisis de las relaciones de producción en la economía capitalista. La resultante del proceso educativo, el producto final luego del trabajo docente, no genera plusvalía inmediata. La educación es, en este sentido, un dispositivo del aparato institucional de los estados burgueses, que prefieren sustraer parte de los ingresos para invertir en un proceso cuya producción será inmaterial<sup>20</sup>. Por añadidura, la naturaleza del trabajo docente no se puede explicar exclusivamente a través de las prácticas del educador en el aula, sino que la docencia “se define también por su aspiración, y no sólo

---

<sup>17</sup> Diario *La Opinion*, 12/09/1975, p. 10

<sup>18</sup> *Ibidem*

<sup>19</sup> Por ejemplo, la cuestión de la autoridad se repitió en el discurso emitido acerca de la cuestión educativa de la provincia. Sirva como botón de muestra la resolución del subsecretario de Cultura y Educación de la provincia de Córdoba, en julio de 1979: Lo importante es que la autoridad sea admitida y respetada. Así, la autoridad será la fuerza que proviene de la sabiduría y de los valores del espíritu. El hijo, o el alumno o el soldado o el obrero, etc., que ve como paradigma a su superior, aceptará de buen grado sus indicaciones y procurará imitar sus actitudes. Cf. en: Filmus, Daniel y Frigiero, Graciela, *Educación...*, *op.cit.*, p. 13.

<sup>20</sup> En su “Carta a los maestros”, el socialista francés Jean Jaurès hacía un llamamiento que a los docentes en el que se ponía el acento sobre la transmisión de los valores republicanos: “Ellos [los alumnos] son franceses y deben conocer Francia, su geografía y su historia: *su cuerpo y su alma*. Serán ciudadanos y deberán saber qué es una democracia libre, qué derechos les confiere, qué deberes les impone la soberanía nacional” (Traducción y subrayado propios). Jaurès, Jean: “Lettre aux instituteurs et institutrices”, *La Dépêche de Toulouse*, 15/01/1888. Disponible en: [http://www.vie-publique.fr/documents-vp/lettre\\_jaures.shtml](http://www.vie-publique.fr/documents-vp/lettre_jaures.shtml) (Consultado el 29/03/2015).

por su materialidad”, aunque este contenido simbólico no se pueda desligar de las condiciones reales de la praxis educacional<sup>21</sup>.

La implantación del sistema educativo nacional tuvo una consecuencia clara en el plano de las relaciones laborales: la aparición de un muy numeroso colectivo de trabajadores que, sin embargo, por su extracción social y la naturaleza de su trabajo, no tendió a reunirse en organizaciones de carácter profesional. Es a finales de la década de los 30 cuando comienzan a registrarse movimientos importantes en este sentido, multiplicándose en las siguientes dos décadas el número de gremios docentes en todo el país<sup>22</sup>. Para este periodo, según A. Ascolani, el movimiento docente puede entonces separarse en dos corrientes: los “legalistas” y los “reformistas contestatarios”<sup>23</sup>. El mismo autor entiende que los conflictos de los docentes pueden ser interpretados como enfrentamientos al interior del Estado, si se define a la docencia como parte del aparato burocrático estatal, o bien como “conflictos entre Estado y corporaciones de la sociedad civil”<sup>24</sup>. En este sentido, Ascolani argumenta que se pueden diferenciar los conflictos de los docentes y los de los obreros porque en este último caso se oponen antagonismos de la sociedad civil.

Esta interpretación, que entiende la sociedad civil como un actor social, con distintos sectores, pero que compone en sí mismo un cuerpo social único, nos parece que no explica las modalidades de lucha que se pondrán en práctica a lo largo de los años 60 y 70 en la Argentina. Los conflictos protagonizados por los trabajadores no enfrentaban a sectores opuestos de la sociedad civil, sino que pugnaban por revertir el sistema de dominación económica, enfrentamiento en el cual el Estado actuaba al servicio de los intereses de la clase dominante.

Es en esta perspectiva en la que consideramos importante definir al colectivo de los trabajadores de la educación como una fracción de la clase trabajadora que iniciará, durante el periodo del que se ocupa de nuestra investigación, un proceso de

---

<sup>21</sup> Contreras Domingo, José, *La autonomía del profesorado*. Ediciones Morata, Madrid, 2001, p. 17.

<sup>22</sup> De este modo, al cabo de algo más de veinte años de recorrido, los docentes contaban con una fuerte tradición gremial. Aun así, en 1955 “faltaban aún casi veinte años para que se identificaran masivamente con la clase trabajadora”. Véase: Puiggrós, Adriana, *Dictaduras y utopías en la historia reciente de la educación argentina (1955-1983)*, *Historia de la Educación Argentina*, tomo VIII. Galerna, Buenos Aires, 1997, p. 28 y ss.

<sup>23</sup> Ascolani, Adrián, “Apóstoles laicos, burocracia estatal o sindicalista? Dilemas y prácticas del gremialismo docente en Argentina (1916/1943)”, *Anuario de la SAHE*, nº 2, 1998-1999, pp. 87-102.

<sup>24</sup> Ascolani, Adrián, “Apóstoles laicos...”, *op.cit.*, p. 98.

proletarización que consideramos que continúa hasta nuestros días. Si partimos de la idea que los docentes, configurados como actor social desde la intersección de los planos material y simbólico, ocupaban una posición en la jerarquía social del capitalismo superior a la de los obreros industriales, este emplazamiento cambiará, con el curso de los años, situando de lleno a los docentes en el espacio social de la clase trabajadora. Lo antedicho se explica porque no se trató sólo de un proceso de pauperización, sino que también respondió a la función social que el Estado argentino asignó a los trabajadores de la educación. En el período que se extiende desde 1955 hasta 1976, la economía argentina pasó del capitalismo nacional moderadamente redistributivo a la puesta en práctica de las políticas racionalizadoras dictadas desde los centros del poder económico. En ese camino, el Estado tenía que adelgazar al máximo su función social, es decir, se asumió la minimización de las instituciones que otrora contribuyeron a asentar los valores ciudadanos que sirvieron para construir el Estado liberal. Con este objetivo se debilitó intencionadamente, a través del sometimiento material y la expropiación del capital simbólico acumulado, a un colectivo de trabajadores cuya función dejaba de considerarse imprescindible, una vez conseguida la consolidación del sistema político.

Definir a los docentes como parte de la clase trabajadora es una elaboración teórica que necesita complementarse con las nociones de clase en sí y clase para sí. En nuestro análisis hemos optado por primar la perspectiva que incide en el proceso dialéctico que practica esta fracción de la clase trabajadora. Por tanto, entendemos que las prácticas del sindicalismo docente son las que dotan de verdadero significado a la definición del proceso de proletarización, ya que sus acciones colectivas se ponen en funcionamiento a lo largo de un periodo histórico en el que la relación de fuerzas capitalista se está redefiniendo en la Argentina<sup>25</sup>. Si no atendemos a la construcción de

---

<sup>25</sup> Nos servimos de la idea de Georg Lukács, quien definió la conciencia de clase de esta manera: “La conciencia de clase del proletariado, que es verdad del proceso como 'sujeto', no es, sin embargo, en modo alguno estable, siempre igual a sí misma o en movimiento según 'leyes' mecánicas. Es la conciencia del proceso dialéctico mismo; es también un concepto dialéctico. Porque el aspecto práctico, activo, de la conciencia de clase, su esencia verdadera, sólo puede hacerse visible en su forma auténtica cuando el proceso histórico exige imperiosamente que entre en vigor, cuando una crisis aguda de la economía la impulsa a la acción”. Lukács, Georg, *Historia y conciencia de clase*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970, pp. 17-72. Disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/lukacs/1923/hcc.pdf> (Consultado el 15/03/2015).

las organizaciones sindicales que reúnen a los integrantes del colectivo, al mismo tiempo que estudiamos sus luchas, no alcanzaremos a lograr tal objetivo.

## **2.2. El estado de la cuestión**

Los trabajos que han abordado el sindicalismo docente han respondido, fundamentalmente, a dos líneas de investigación independientes entre sí. En un primer tiempo, los estudios sobre la historia de la educación y las prácticas del trabajo docente esbozaron fragmentariamente la historia de las organizaciones sindicales docentes. Sin embargo, es a esta tradición a la que debemos un primer interés por el colectivo sobre el que, hasta hace poco tiempo, la historia social había guardado un clamoroso silencio.

Desde hace algo más de una década, e impulsado en buena medida por los estudios desde el campo de la sociología<sup>26</sup>, así como desde una perspectiva militante, caso el Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” de la secretaría de Educación y Estadísticas de la CTERA, se ha trabajado en la dirección de construir un marco teórico sólido sobre el que asentar las investigaciones que ubican a los docentes como parte activa de la clase trabajadora. En este sentido, se ha atendido tanto a la construcción de las organizaciones sindicales como a los alcances de sus luchas. Asimismo, la historiografía reciente ha contribuido de manera decisiva al estudio de la relaciones entre los docentes y las administraciones de que dependen, así como a los mecanismos de resistencia empleados frente a las reformas educativas, abordando los conflictos tanto desde una perspectiva histórica como en sus manifestaciones coetáneas.

El presente trabajo se enmarca dentro de la corriente historiográfica que quiere contribuir a renovar los estudios sobre el trabajo y los trabajadores que, después de años de escaso interés por parte de la academia, está de nuevo formulando sugerentes hipótesis de investigación<sup>27</sup>, seguramente influidos por el contexto de crisis financiera global que ha golpeado al hemisferio occidental desde 2008. En un momento histórico

---

<sup>26</sup> En este campo, el autor que más ha trabajado sobre nuestras problemáticas es Julián Gindín. Una completa síntesis de las investigaciones recientes se encuentra en: Gindín, Julián (Comp.), *Pensar las prácticas sindicales docentes*. Herramienta-AMSAFE Rosario-AGMER-ADOSAC, Buenos Aires, 2011.

<sup>27</sup> En el panorama académico argentino encontramos iniciativas interesantes. Dejando aparte los congresos multitudinarios más conocidos, nos parecen especialmente relevantes la producción científica que se ha hecho pública en los cuatro congresos que ha organizado la Red de Estudios sobre el Peronismo (<http://redesperonismo.com.ar/>), así como en los congresos organizados por la ASET (Asociación Argentina de Estudios del Trabajo, [www.aset.org.ar](http://www.aset.org.ar)).

donde las desigualdades económicas no hacen sino incrementarse, cuando resulta patente que los sectores medios de las sociedades capitalistas se están empobreciendo, resurge con fuerza la pertinencia de estas preguntas dirigidas a entender cómo se ejecutaron similares procesos sociales en el pasado, cuáles fueron los mecanismos de resistencia que intentaron los sujetos que los sufrieron y cuál fue el alcance de sus luchas.

A continuación realizaremos un repaso a las contribuciones que nos han servido para situar nuestro problema de investigación, para lo cual comenzaremos por abordar los estudios que partieron desde el campo de la historia de la educación, lo que a completaremos con los más recientes aportes publicados desde la perspectiva de la historia del sindicalismo docente.

### **2.2.1. Las investigaciones desde la historia de la educación**

No son pocos los estudios que han ayudado a sentar las bases del conocimiento acerca de los trabajadores de la educación, si bien es cierto que la principal preocupación de éstos no era tanto la organización colectiva, como las prácticas y la evolución de las capacidades técnicas de su desempeño profesional. En este sentido, un estudio pionero es el de J.C. Tedesco, quien se ocupó de los problemas que generó la intersección entre educación y sociedad a finales del S. XIX<sup>28</sup>.

Respecto del papel de la educación en democracia, D. Filmus<sup>29</sup> y G. Frigerio trabajaron sobre la importancia de las políticas educativas en su dimensión instrumental, así como observaron el esfuerzo por imponer la “normativización, burocratización y disciplinamiento” en los procesos educativos, a través de los cuales se transmitieron

---

<sup>28</sup> Tedesco, Juan Carlos, *Educación y sociedad en la Argentina (1880-1900)*. Ediciones Panneditte, Buenos Aires, 1970. Otros de los trabajos clásicos son los de: Solari, Manuel H., *Historia de la educación argentina*. Paidós, Buenos Aires, 1981 (1ª edición de 1949); Hiller, F.; Cucuzza, R.; Nacimiento, R. y Zimmerman, L., *El sistema educativo argentino*. Editorial Cartago, Buenos Aires, 1985; Pinau, Pablo, *Sindicatos, estados y educación técnica (1936-1968)*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1991; Morgade, Graciela (Comp.), *Mujeres en la educación. Género y docencia en la Argentina (1870-1930)*. Miño y Dávila, Buenos Aires, 1997.

<sup>29</sup> Del mismo autor señalamos también: Filmus, Daniel, *Demandas populares por educación. El caso del movimiento obrero argentino*. Aique Grupo Editor, Buenos Aires, 1992.

valores tendentes a reforzar concepciones reaccionarias como las de respeto acrítico frente a la autoridad y la disciplina sobre los comportamientos sociales<sup>30</sup>.

Para el periodo que nos ocupa, el trabajo clásico de A. Puiggrós ha servido de referencia a multitud de investigaciones, puesto que se trató del primer esfuerzo que compuso una *Historia de la Educación Argentina*, cuya importancia no sólo radica en el ambicioso periodo cronológico que abarca desde los tiempos de la colonia hasta los años 80 del siglo XX, sino que también concede un peso importante a los diferentes recorridos vividos en las provincias del país, huyendo de la tentación de querer extrapolar la realidad porteña al resto del país. Su trabajo consistió en la coordinación de una colección de ocho volúmenes, ocupándose en exclusividad del primero de ellos, *Sujetos, disciplina y currículum en los orígenes del sistema educativo argentino*, que trata de la educación básica hasta 1916.

En el volumen *Dictaduras y utopías en la historia reciente de la educación argentina (1955-1983)*, A. Puiggrós explica que en los años del primer peronismo el magisterio se resistió a participar en los intentos que el oficialismo promovió para alcanzar la integración sindical masiva de los docentes que, excepción hecha de la UDA, no contaban con ninguna estructura organizativa de tercer nivel. Según la autora, esta resistencia se debió al rechazo instintivo de cierto verticalismo, así como la tendencia política del colectivo, compuesta mayoritariamente de radicales y liberales laicos. En este sentido, la autora señala que “cuando cayó el peronismo [...] los maestros socialistas, demócrata progresistas y radicales volvieron a la superficie e impulsaron una revivificación de la escuela activa, pero laica y científica”<sup>31</sup>. También es interesante destacar que en este trabajo se afirma que la reformas educativas de 1968 y 1976-1983 tuvieron una misma inspiración ideológica en el nacional-catolicismo franquista, perspectiva desde la cual se escribieron los contenidos curriculares de formación ciudadana y ética, impulsando el resurgimiento de los valores del integrista cristiano en la cultura educativa argentina<sup>32</sup>. Respecto del sindicalismo docente, bien que de manera no exhaustiva, este trabajo da cuenta del congreso celebrado en la

---

<sup>30</sup> Filmus, Daniel y Frigerio, Graciela, *Educación, autoritarismo y democracia*. Miño y Dávila, Buenos Aires, 1988, pp. 13-15.

<sup>31</sup> Puiggrós, Adriana, *Dictaduras y utopías en la historia reciente de la educación argentina (1955-1983)*. Galerna, Buenos Aires, 1997, pp.28-30.

<sup>32</sup> Puiggrós, Adriana, *Dictaduras y utopías...*, op.cit., p. 55.

provincia de San Lu s en 1967, donde se cre  la CGERA (antecedente de CTERA), donde se se ala la participaci n de ATEP junto con otras organizaciones de las provincias<sup>33</sup>.

Dentro de esta misma obra, en el volumen titulado *La educaci n en las provincias y territorios nacionales (1885-1945)*, encontramos el trabajo de Mar a Adela Suayter (y colaboradoras) en el que se pone el acento sobre los usos pol ticos de la educaci n, subrayando la importancia del problema de analfabetismo de aquellos momentos. En su trabajo hallamos la referencia a la creaci n del C rculo del Magisterio de Tucum n, en 1905, corporaci n que ten a como objetivo el de “colaborar eficientemente en la obra del progreso general, propender a la difusi n y progresos del gremio, congregando en su seno a la totalidad de los docentes de Tucum n”<sup>34</sup>, lo que en definitiva no fue m s que una organizaci n corporativa sin pretensi n de acci n sindical o pol tica contestataria.

En el volumen VII de la misma colecci n, *La Educaci n en las provincias (1945-1985)*, otro cap tulo redactado por M. A. Suayter se ocupa del mismo periodo que nuestra investigaci n. En su trabajo se dedica espacio al papel jugado por ATEP (aunque con algunas imprecisiones), poni ndose en valor las movilizaciones que los docentes realizaron contra medidas tocantes a la pol tica educativa, impulsadas por el gobierno provincial<sup>35</sup>.

Un trabajo posterior es el de M. Barbieri de Guardia, donde la autora subraya la necesidad de formar trabajadores para el desarrollo azucarero, puesta de manifiesto a partir de diciembre de 1923 con la fundaci n del Instituto T cnico, lugar donde se impart an cursos de perfeccionamiento t cnico destinado a obreros. En su trabajo se exploran las pol ticas educativas llevadas a cabo por el peronismo en Tucum n, al tiempo que se examina el factor del g nero en el proceso formativo de los docentes, que en este periodo fue torn ndose cada vez m s exigente, se alando que la mayoritaria

---

<sup>33</sup> Puiggr s, Adriana, *Dictaduras y utop as...*, op.cit., pp. 77-82.

<sup>34</sup> Suayter, Mar a Adela, “Historia de la educaci n p blica en Tucum n: 1880-1945”, Ossana, Edgardo y Artieda, Teresa (Comps.), *La Educaci n en las provincias y territorios nacionales (1885-1945)*. Galerna, Buenos Aires, 2001, pp. 522-523.

<sup>35</sup> Suayter, Mar a Adela, “Historia de la educaci n p blica en Tucum n 1945-1985”, Ossana, Edgardo; Puiggr s, Adriana y Pinkasz, Daniel, *La educaci n en las provincias (1945-1985)*. Galerna, Buenos Aires, 1997, pp 452 y ss.

presencia de mujeres tendría que ver con los “prejuicios sociales en torno a la formación del maestro/a como un espacio desvalorizado”<sup>36</sup>.

Muy recientemente, presentando la problemática respecto de las relaciones entre el Estado, los docentes y la sociedad civil, L. G. Rodríguez está trabajando en la línea de explicar los mecanismos en virtud de los cuales los gobiernos militares pudieron tener éxito en la aplicación de sus preceptos en materia educativa, llegando a la conclusión de que se necesitó de una importante participación de sectores de la sociedad civil<sup>37</sup>.

### 2.2.2. Las investigaciones sobre el sindicalismo docente

Los estudios sobre sindicalismo docente se han venido desarrollando, con intensidad creciente desde los inicios del siglo XXI. Un trabajo pionero, que por vez primera intenta asumir el reto de construir un relato integrador a escala nacional, explicando el proceso de integración organizacional del atomizado universo sindical docente, es el S.A. Vázquez y J. Balduzzi<sup>38</sup>. La bibliografía actual demuestra que su trabajo sigue siendo una referencia que, como toda síntesis, necesita de ser completado con estudios parciales que profundicen los aspectos generales que ellos presentan. La idea principal de su libro reside en dotar de las claves interpretativas que lleven al lector a comprender cómo a través de la práctica sindical, los docentes se redefinieron en tanto

---

<sup>36</sup> Barbieri de Guardia, Marta, “Políticas oficiales, educación y género: el Instituto Técnico y la Escuela Sarmiento de Tucumán hacia los años del primer peronismo”, en: Bonano, Luis Marco, *Estudios de historia social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX*, Vol II. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2001, pp. 9-65. En otro trabajo, la autora vuelve a trabajar sobre el período, pero esta vez centrando el foco de su análisis en el movimiento estudiantil tucumano de la década de los cuarenta. Véase: Barbieri de Guardia, Marta, “Reforma y representaciones colectivas: sus proyecciones en el movimiento estudiantil tucumano a comienzos de la década de 1940”, en: Bonano, Luis Marcos, *Estudios de historia social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX*, Vol. I. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1999, pp. 119-146.

<sup>37</sup> Rodríguez, Laura Graciela, “Funcionarios y políticas educativas en Argentina (1976-1983)”, *Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación*, N° 4, junio 2015, pp.62-85. Disponible en: <http://www.historiadelaeeducacion.cl/> (Consultado el 17/06/2015); Rodríguez, Laura Graciela, *Civiles y militares en la última dictadura. Funcionarios y políticas educativas en la provincia de Buenos Aires (1976-1983)*. Prohistoria, Rosario, 2012. De la misma autora, respecto de los vínculos entre educación y catolicismo, véase: Rodríguez, Laura Graciela, “Iglesia y educación en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX”, *Cadernos de História da Educação*, Vol. 14, N°1, 2015, pp. 263-278. Disponible en: <http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/32125/17341> (Consultado el 06/11/2015); Rodríguez, Laura Graciela, “Los católicos y la educación en el tercer peronismo (1973-1973)”, *Anuario SAHE*, Vol. 14, N° 2, 2013. Disponible en: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/article/view/2715/pdf> (Consultado el 20/05/2015).

<sup>38</sup> Vázquez, Silvia Andrea y Balduzzi, Juan, *De apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente, 1957-1973*. Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”-CTERA, Buenos Aires, 2000.



que nuevo actor social, dejando de lado los preceptos decimonónicos que ya hemos mencionado. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, han surgido multitud de estudios que se han ocupado del papel del sindicalismo docente desde diferentes disciplinas.

Un importante trabajo con el que compartimos enfoque teórico es el publicado R. Donaire, en el que apoyándose en el proceso de pauperización del docente, así como en la observación de sus prácticas colectivas, construye la idea de proletarización docente como un proceso que se acelera a mediados de la década de los setenta, continuándose en la actualidad<sup>39</sup>. Anterior a este trabajo, el mismo autor realizó una síntesis histórica del sindicalismo docente argentino junto con un análisis empírico del peso estructural de la docencia, los cambios en las regulaciones de las condiciones de trabajo y evolución de la retribución monetaria, entre otros elementos<sup>40</sup>.

El proceso de construcción de las organizaciones sindicales docentes permanece, aún hoy, mucho menos estudiado<sup>41</sup>. Algunos trabajos han tratado de explicar la sindicalización docente como una reafirmación en su identidad de clase trabajadora, precisamente por haber sido excluidos de los beneficios de las políticas redistributivas del primer peronismo<sup>42</sup>, argumento no nos parece del todo acertado, en tanto en cuanto

---

<sup>39</sup> Donaire, Ricardo, *Los docentes en el siglo XXI, ¿empobrecidos o proletarizados?*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2012. Unos años antes, S.A. Vázquez, en un trabajo donde queda impresa su militancia en CTERA, ya advertía que este proceso de proletarización, que desembocó en la autopercepción del docente como trabajador de la educación, se encuentra aún inconcluso. Tanto así que recuerda que la discusión en torno al nombre de la CTERA respondía a las concepciones de los dirigentes de los principales sindicatos, pero no era mayoritariamente sustentada por la base sindical. Además, la autora considera que la hegemonía neoliberal ha supuesto “un retroceso en la conciencia de los docentes y en la construcción de la identidad como trabajadores de la educación”. Vázquez, Silvia Andrea, “Las identidades laborales de los docentes y la acción político-sindical”, *VII Seminario Redestrado-Nuevas regulaciones en América Latina*, Buenos Aires, 3-5 de julio de 2008. Disponible en: [http://www.fae.ufmg.br/estrado/cdrom\\_seminario\\_2008/textos/ponencias/Ponencia%20Silvia%20Vazquez.pdf](http://www.fae.ufmg.br/estrado/cdrom_seminario_2008/textos/ponencias/Ponencia%20Silvia%20Vazquez.pdf) (Consultado el 20/05/2015).

<sup>40</sup> Donaire, Ricardo, *La clase social de los docentes. Un recorrido histórico en Argentina desde la colonia hasta nuestros días*. Instituto de investigaciones pedagógicas “Marina Vilte”, Buenos Aires, 2007. Del mismo autor consúltense: Donaire, Ricardo, “El reclutamiento de los docente en Argentina: una aproximación a partir de la ocupación de sus cónyuges”, *Educ.Soc.*, Vol. 34, N° 122, 2013, pp. 121-138. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/es/v34n122/v34n122a07.pdf> (Consultado el 20/05/2015); “¿Desaparición o difusión de la 'identidad de clase trabajadora'? Reflexiones a partir del análisis de elementos de percepción de clase entre los docentes”, *Conflicto Social*, N° 1, 2009, pp. 135-167

<sup>41</sup> A este respecto, un trabajo importante es el de: Acri, Martín, “Las asociaciones y gremios docentes de la Argentina. La situación laboral, la organización y las primeras luchas (1881-1930)”, Tesis de Maestría, FLACSO-Argentina, 2012. Disponible en: <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4519/2/TFLACSO-2012MAA.pdf> (Consultado el 07/07/2015).

<sup>42</sup> Rodríguez, María Soledad, “Formas de organización y lucha de los trabajadores de la educación en Argentina, durante el peronismo (1943-1955)”, en: Acri, Martín (Comp.), *Conflictos pedagógicos, lucha y organización de los docentes en Argentina, 1881-1973*. Barcos Ediciones, Buenos Aires, 2012, p. 181.

no podemos desdeñar el factor de aprendizaje social que los sindicatos docentes creados bajo el peronismo acumularon en sus primeros años de existencia.

Sobre las prácticas empleadas en las luchas docentes, también contamos con una cada vez más nutrida producción, tanto desde el punto de vista teórico como aplicada a casos concretos. La huelga de la Liga de Maestros de la provincia de Buenos Aires, de 1912, ha sido analizada como una reacción de la docencia frente al Estado en su papel de organizador del trabajo docente, de lo que se extrae que el recurso a la huelga intervino más como instrumento político que económico<sup>43</sup>. Para el periodo que nos ocupa, M. Gudelevicius<sup>44</sup> lleva a cabo un análisis de las huelgas docentes en el periodo 1968-1972, como protesta frente al proyecto de reforma de la ley de Educación nacional, iniciada por el ministro José Mariano Astigueta<sup>45</sup>.

### 2.3. La estructura del sistema educativo en Tucumán

Para comprender el escenario en el que el sindicalismo docente tucumano va a llevar a cabo su participación, hemos querido nutrir nuestro trabajo con una descripción cuantitativa del sistema educativo argentino. Las cifras que examinaremos a continuación tienen como propósito traducir numéricamente la composición de la institución escolar y así concretar la magnitud de este grupo de trabajadores.

---

En este mismo volumen se encuentra un trabajo sobre la construcción de CTERA que, lamentablemente, no recurre a fuentes originales, por lo que ofrece una síntesis correcta de lo que conocemos sobre este proceso, pero no entra a desenmarañar las tensiones internas que debieron producirse. Véase: Salvarrey, Leandro, "CTERA: un largo camino de lucha hacia la unidad sindical", en: Acri, Martín (Comp.), *Conflictos pedagógicos, lucha y organización de los docentes en Argentina, 1881-1973*. Barcos Ediciones, Buenos Aires, 2012, pp. 217-247. Desde una óptica regional, contamos con el aporte de: Dufour de Ortega, Ana Luisa y Mazzei de Martínez, Stella, "Conflictos docentes (1919-1972)", Roig, Arturo y Satlari, María Cristina, *Mendoza, identidad, educación y ciencias*. Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, 2007.

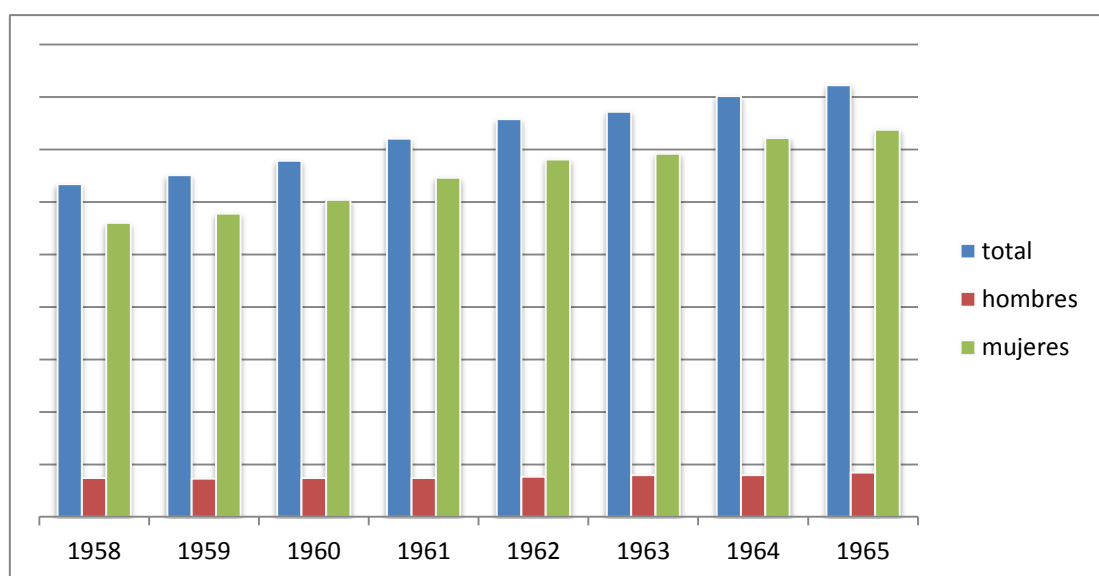
<sup>43</sup> Este trabajo revela también argumentos en contra de la feminización del colectivo, lo que consideraban motivo de sus escasos salarios. La conclusión de la autora es que el movimiento de fuerza fracasó por la falta de cohesión del movimiento, aunque la experiencia sirvió para ir en contra de la idea del maestro como individuo servil. Mannocchi, Cintia, "Huelga de maestros en 1912. En contra del Estado educador y del docente servil", *Anuario SAHE*, VOL. 14, N° 1, 2013. Disponible en: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/article/view/3040/pdf> (Consultado el 10/05/2015).

<sup>44</sup> Gudelevicius, Mariana, "La protesta gremial docente contra el proyecto educativo de la 'Revolución Argentina'", *Archivos de Ciencia de la Educación*, N° 5, 2011, pp. 117-129. Disponible en: [http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art\\_revistas/pr.5432/pr.5432.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5432/pr.5432.pdf) (Consultado el 10/05/2015)

<sup>45</sup> Las décadas de los 70 y 80 han sido tratadas en: Labourdette, Lorenzo L., "Dinámica del sindicalismo docente bonaerense en los años '70 y '80: de la "fragmentación democrática" a la "centralización burocrática" ", *Razón y Revolución*, N° 28, 2015. Del mismo autor: "Dinámica y organización del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires: 1970-1973", III Seminario Nacional de la Red ESTRADO Argentina, Buenos Aires, septiembre 2015.

El primer dato que llama nuestra atención, y que pensamos que deberá ser abordado en profundidad por investigaciones posteriores, es la feminización del trabajo docente. No se puede pasar por alto que, a diferencia de lo que ocurría en el sistema escolar de fines del s. XIX, a raíz de la masificación del sistema educativo se introdujo a las mujeres en la docencia. La feminización del trabajo docente<sup>46</sup>, explica cómo el salario que recibían las maestras correspondía con la idea de que éste no sería el sustento principal de la unidad familiar, ya que se daba por supuesto que el varón debía aportar más en esa relación. A continuación, podemos observar cómo la proporción hombre-mujer en la docencia se mantuvo prácticamente inalterada en el período 1958-1966, superando la parte femenina el 80% del colectivo.

**Gráfico 3. Personal docente en educación primaria<sup>47</sup>**



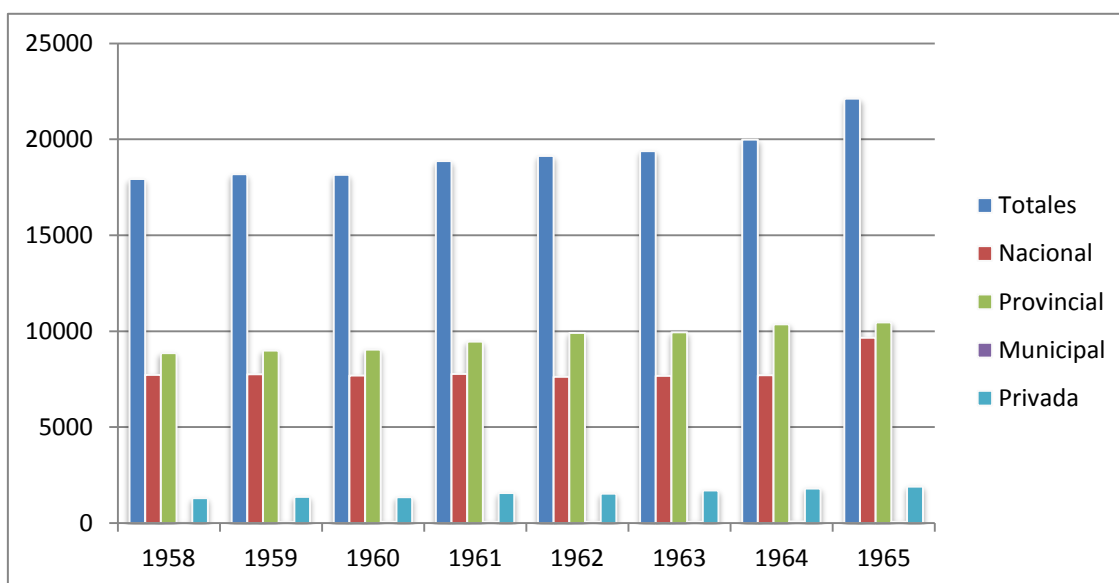
El sistema educativo argentino se dividía en tres tipos de establecimientos escolares: los dependientes del ministerio de Educación de la Nación, los dependientes de los ministerios de Educación provinciales y, los menos numerosos, aquellos que dependían de los gobiernos municipales. La tendencia observada en el período que nos ocupa es la de aumentar el número de establecimientos provinciales. Esta voluntad debe

<sup>46</sup> Para desarrollar esta cuestión, véase: Donaire, R., *Los docentes en..., op. cit.*

<sup>47</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Argentina: la educación en cifras, 1958-1967. Buenos Aires, 1966

ser interpretada como un intento por aligerar el peso financiero que el sistema educativo suponía para el gobierno nacional. Sin embargo, como veremos en el desarrollo de los conflictos protagonizados por ATEP, la creciente provincialización del sistema educativo no venía acompañada del respaldo financiero necesario para sustentarla.

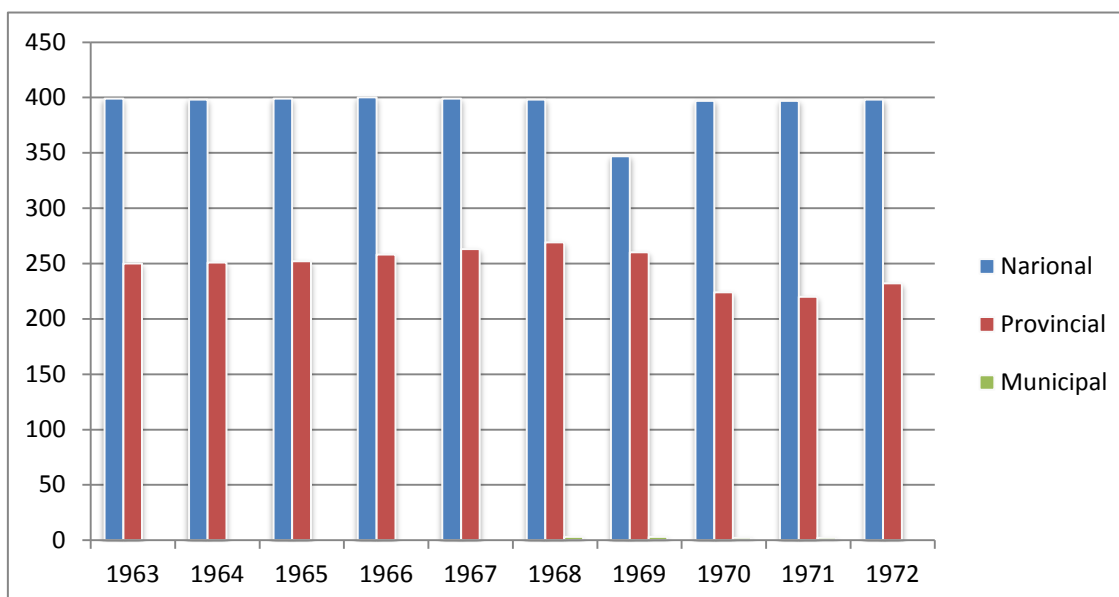
**Gráfico 4. Escuelas por dependencia: enseñanza primaria<sup>48</sup>**



Para el caso de Tucumán, los establecimientos escolares dependientes del sistema educativo nacional era más que los provinciales. Es por esto que una de las constantes del período fue que el gobierno de la Nación trató de imponer a los gobiernos provinciales la incorporación de centros educativos nacionales como parte de su propio sistema. La administración se oponía sistemática, al tiempo que recibía las críticas de los docentes provinciales y nacionales, que entendían que sus condiciones laborales respectivas se verían empeoradas de producirse esta incorporación.

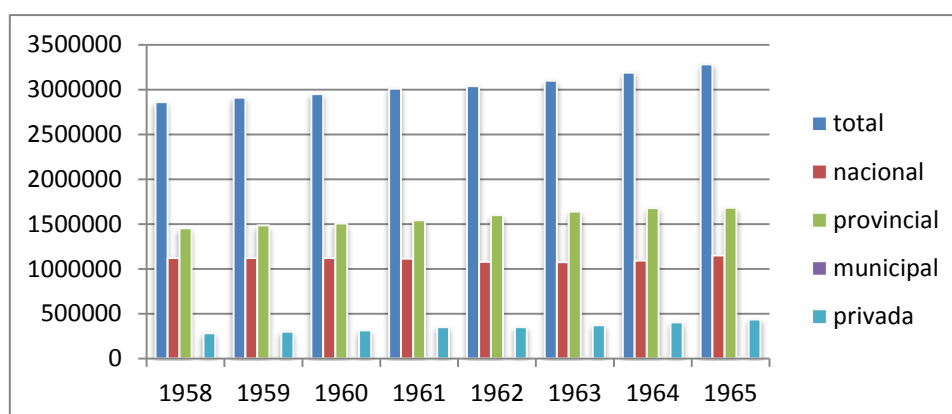
<sup>48</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Argentina: la educación en cifras, 1958-1967. Buenos Aires, 1966

**Gráfico 5. Establecimientos escolares por jurisdicción y dependencia: Tucumán<sup>49</sup>**



Como resulta lógico deducir, la “federalización” del sistema educativo tuvo como consecuencia que el mayor contingente de alumnos hubiera de ser asumido por los establecimientos provinciales. Además, para el período que nos ocupa, se observa el crecimiento de la ratio de alumnos por profesor, muestra de la disminución presupuestaria que las sucesivas administraciones concedieron al mantenimiento de unas óptimas condiciones para el desempeño de la labor docente.

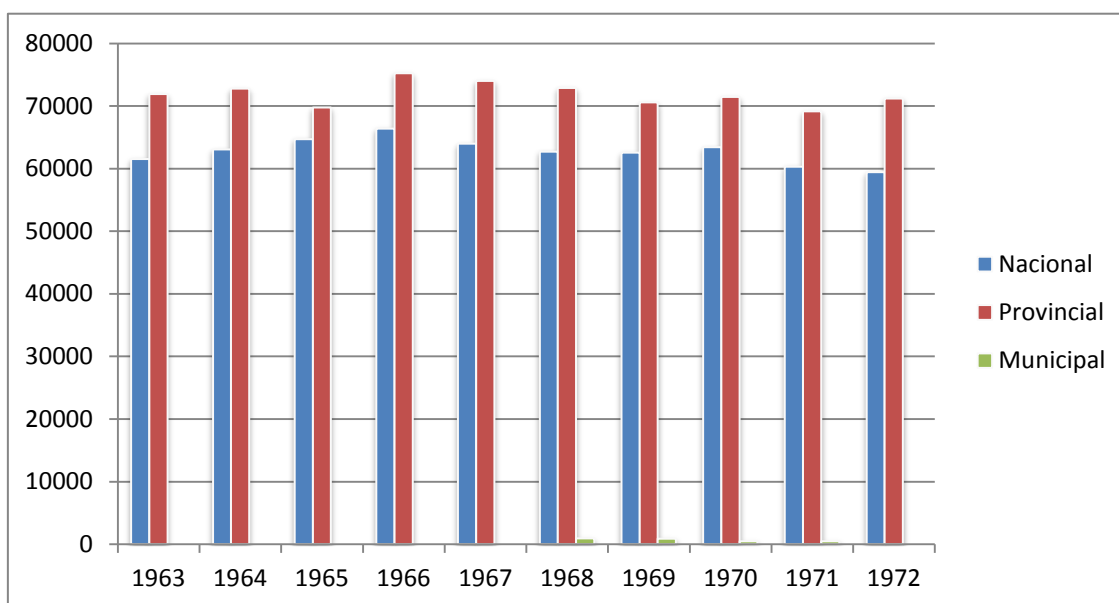
**Gráfico 6. Alumnos matriculados por dependencia<sup>50</sup>**



<sup>49</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Argentina: la educación en cifras 63-72

<sup>50</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Argentina: la educación en cifras, 1958-1967. Buenos Aires, 1966

**Gráfico 7. Alumnos matriculados por dependencia y jurisdicción: Tucumán<sup>51</sup>**



**Gráfico 8. Evolución del número de alumnos matriculados, número de establecimientos y ratio de alumnos/establecimientos en la educación primaria<sup>52</sup>**

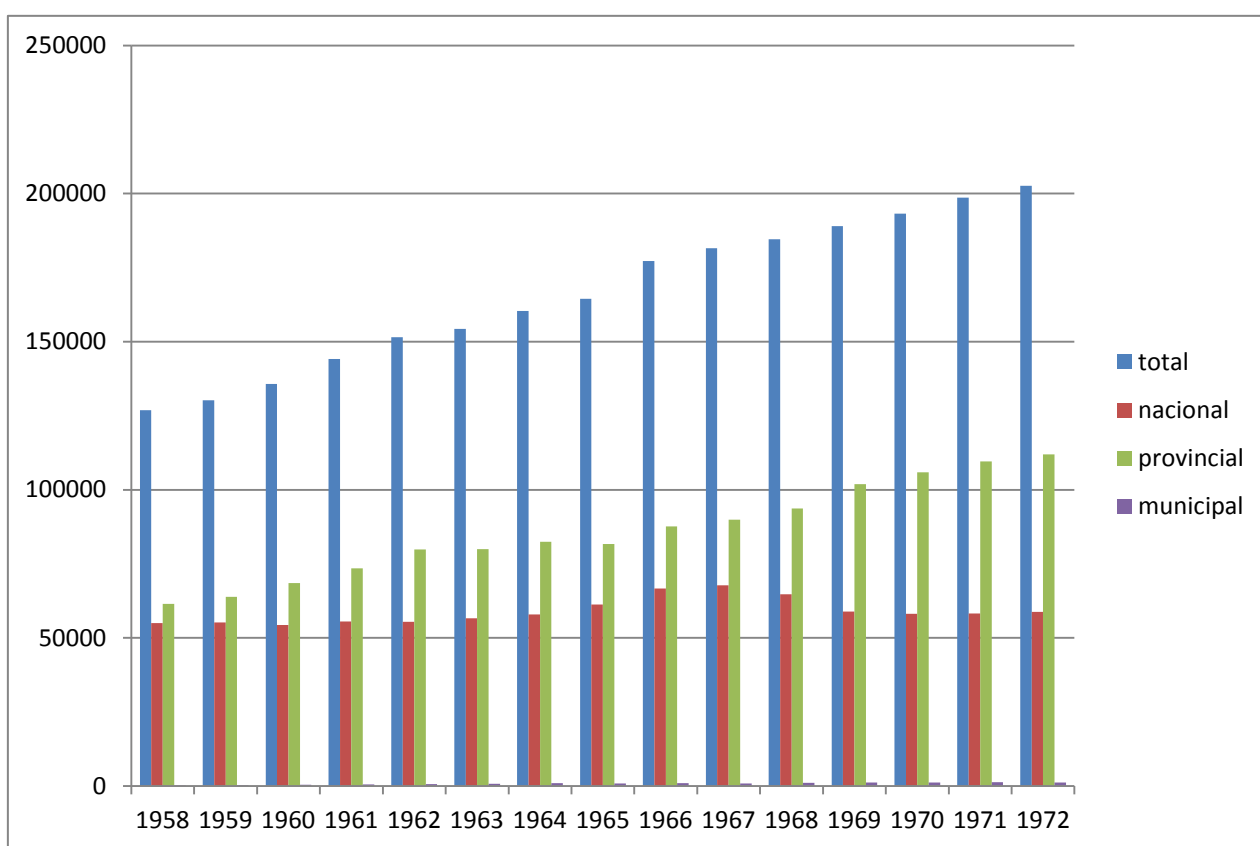
Año	Alumnos	Establecimientos	Ratio
1958	2859826	17929	159,5
1959	2907516	18185	159,8
1960	2947666	18155	162,3
1961	3010715	18855	159,6
1962	3036811	19239	157,8
1963	3097240	19392	159,7
1964	3185491	19982	159,4
1965	3279290	22116	148,2
1966	3472788	27658	125,5
1967	3504343	28204	124,2
1968	3546177	26067	136
1969	3605544	25709	140,2
1970	3632050	25793	140,8
1971	3671451	25311	145
1972	3699007	25881	142,9
1976	3601243	20590	174,9

<sup>51</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Argentina: la educación en cifras 1963-1972

<sup>52</sup> Fuentes: Ministerio de Educación de la Nación, Estadísticas de la Educación. Argentina y su lugar en el mundo por niveles educativos según el número de escuelas, personal docente y alumnos matriculados. Buenos Aires, 1978; Secretaría de Estado de Cultura y Educación, Argentina: La educación en cifras, 1958-1967. Buenos Aires, 1966.

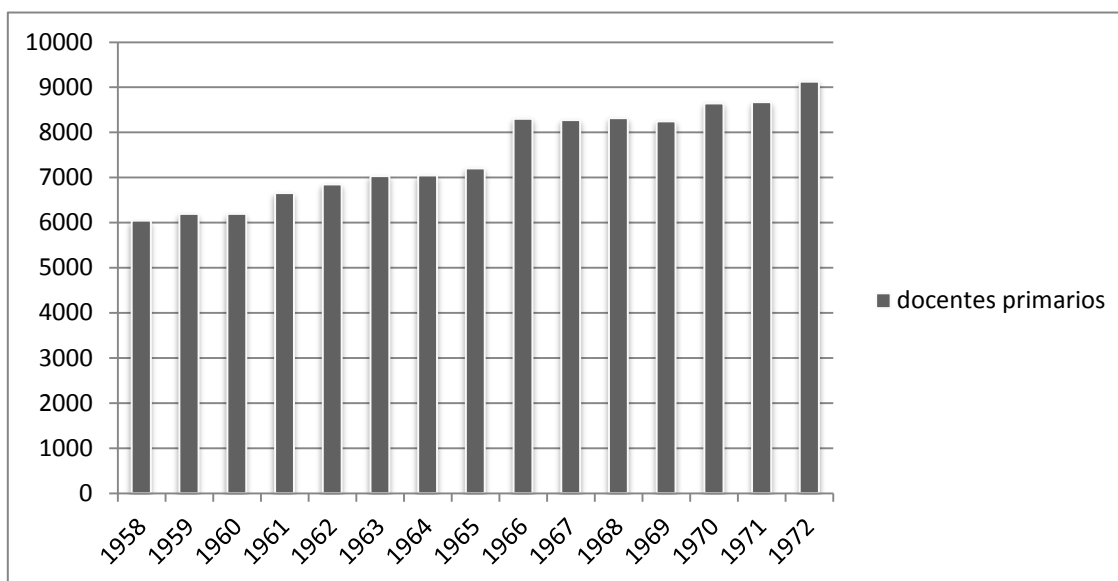
Para completar este análisis, debemos atender al último elemento definidor del sistema educativo, es decir, el grupo humano que componía este colectivo de trabajadores. En los inicios de la década del setenta, los trabajadores de la educación rebasaban la cifra de los 200.000 ocupados en todo el país, lo que significa un crecimiento continuado para todo el período de 1958-1973. Como se verá en las gráficas que exponemos a continuación, la mayoría de los docentes de la Argentina pertenecían a los sistemas educativos provinciales.

**Gráfico 9. Personal docente por dependencia<sup>53</sup>**

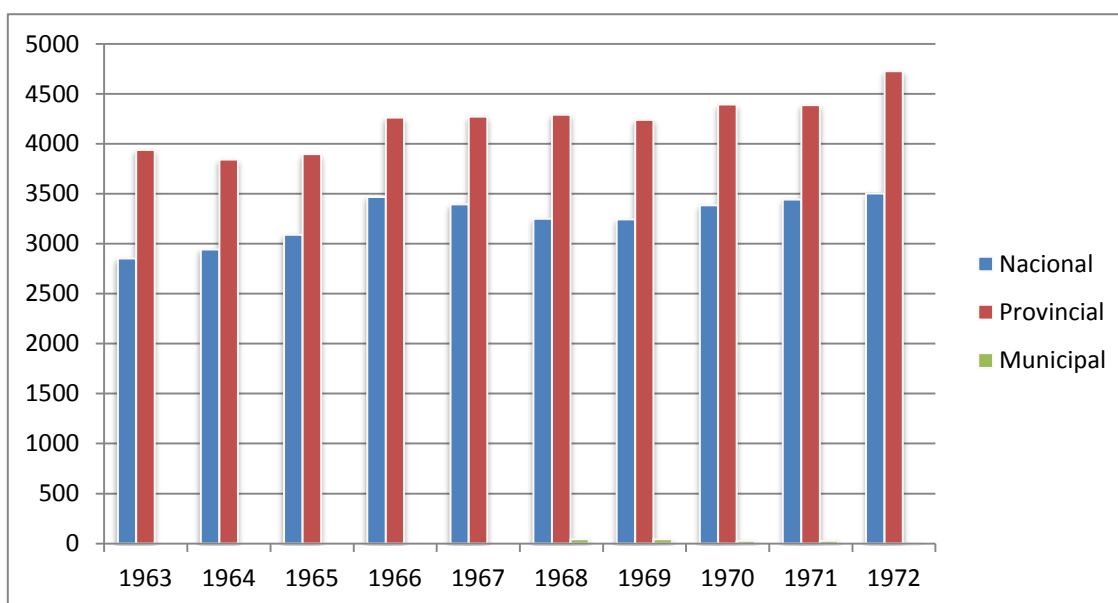


<sup>53</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Argentina: la educación en cifras, 1958-1967. Buenos Aires, 1966

**Gráfico 10. Personal docente, enseñanza primaria, por jurisdicción: Tucumán<sup>54</sup>**



**Gráfico 11. Personal docente por jurisdicción y dependencia: Tucumán<sup>55</sup>**



<sup>54</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Argentina: la educación en cifras, 1958-1967. Buenos Aires, 1966

<sup>55</sup> Fuente: Secretaría de Educación y Cultura. Argentina: La educación en cifras, 63-72



Como se ha podido comprobar, los trabajadores de la educación primaria provincial en Tucumán integraban el colectivo docente más numeroso de los educadores de la provincia, superando para 1973 la cifra de los 4.500 empleados, alrededor de 1.000 efectivos por encima de los maestros nacionales. Si atendemos a la escala nacional, observaremos que esa cifra se corresponde con algo más del 4% de los maestros provinciales del país.

Desde nuestro punto de vista, es en parte gracias a esta importancia numérica que se puede comprender la acción sindical de ATEP en los años posteriores. Sin una masa de trabajadores tan importante, sus acciones de protesta difícilmente habrían adquirido la dimensión, provincial y nacional, que veremos en las páginas que siguen.

## **PARTE 2**

### **El sindicalismo docente tucumano: articulación, transformaciones y luchas de un actor social**

### III. LOS INICIOS DEL SINDICALISMO DOCENTE EN TUCUMÁN. ATEP EN SU ETAPA DE FORMACIÓN (1949-1955)

*“Son los maestros, mezcla esforzada de misioneros y soldados, dispuestos en misión de avanzada y en orden de combate por todos los campos, por las ciudades y por las fronteras de la Patria, para buscar la esencia misma de lo mejor de su alma, y modelarla en el crisol de las tradicionales virtudes de nuestra raza de hombres justos, dignos y libres”<sup>1</sup>*

#### 3.1. Construcción y primeras experiencias del sindicalismo docente tucumano

En las líneas que siguen se prestará atención a los primeros años de actividad de la ATEP. Se tendrá en cuenta para su análisis el contexto en el que se tiene noticia de su fundación, tan sólo unos días después de que la mayor organización obrera de la provincia, la FOTIA, fuera intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, PEN) tras una prolongada huelga que se levantó en noviembre de 1949, después de 46 días de paro.

Se tomará en consideración el contexto provincial en el que tiene lugar la fundación de ATEP que, como veremos, se erigió sobre los vestigios de otra organización gremial preexistente. Como sabemos, la experiencia de organización sindical de ATEP no fue la primera de la provincia<sup>2</sup>, aunque su trayectoria le otorgue mayor importancia.

---

<sup>1</sup> Discurso de Eva Perón pronunciado el 30 de mayo de 1947 en la Secretaría de Trabajo y Previsión en un acto realizado por el Sindicato de Maestros. En: Duarte de Perón, Eva, *Discursos completos, 1946-1948*, Tomo I. Editorial Megafón, Buenos Aires, 1985, p. 86.

<sup>2</sup> En 1897 se fundó el Centro de Maestros, cuyos objetivos se dirigían al “mejoramiento social” de los docentes tucumanos, hicieron peticiones al gobierno provincial para que no se retrasase en los pagos de los salarios ni esquivara la responsabilidad en el mantenimiento de los establecimientos escolares. En 1905 se creó el Círculo del Magisterio, que además de luchar por los intereses laborales de los docentes, organizó actividades de promoción cultural. Véanse: Suayter de Íñigo, M.A. *et al.*, *Historia de la educación pública en Tucumán, 1880-1945...op.cit.*; Aciri, M., “Las asociaciones y gremios...”, *op.cit.*, pp. 155-160.

Comprobaremos igualmente que la conducción de la agremiación, inhibida de la participación en reclamos de orden laboral, estaba preocupada por distinguirse como una organización bien considerada por el oficialismo, tanto en el ámbito provincial como en el nacional. Se destacará, pues, su papel como agente intermediario entre el colectivo profesional docente y la administración provincial.

La aparición de casos de corrupción y de sectores críticos que desde la base reclamaron una verdadera acción gremial de la organización, serán tratados en este capítulo que se extiende cronológicamente hasta la caída del gobierno peronista en 1955. Este espacio está destinado, por tanto, a explicar los orígenes de la organización, el clima político del que surge, la evolución seguida durante los primeros años y las tensiones internas que entonces surgieron. Por último, queremos señalar que entre el final del presente capítulo y el siguiente, el lector advertirá el silencio de las fuentes gremiales, provocado por la intervención y cese de actividad que siguió a la “Libertadora”<sup>3</sup>.

### **3.2. Interpretaciones en disputa: algunas consideraciones acerca del peronismo**

No es el objetivo de las líneas que siguen revisar exhaustivamente la abundantísima y sugestiva producción bibliográfica en torno a los orígenes del peronismo desde los espacios provinciales. Esta decisión responde a que se trata de un debate aún abierto y que cuenta con multitud de aportes recientes acerca de este acontecimiento histórico que, sin duda, marcó un hito en la historia política de la Argentina<sup>4</sup>, que se proyecta con intensidad hasta nuestros días.

---

<sup>3</sup> El sector que desalojó a Juan Domingo Perón del poder se autodenominó “Revolución Libertadora”, atribuyendo al régimen precedente un carácter dictatorial. Nos permitimos utilizar el término por formar parte del léxico habitual en Argentina, aunque sin dotarle de contenido semántico desde una perspectiva analítica.

<sup>4</sup> Algunos ejemplos de esta producción reciente se pueden encontrar en: Garzón Rogé, Mariana, “El primer peronismo desde el interior del país. Reflexiones a partir de una experiencia de investigación”, *Estudios Sociales*, N° 46, 2014, pp. 279-296; Tcach, César y Macor, Darío, *La invención del peronismo en el interior del país II*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2013; Gutiérrez, Florencia y Rubinstein, Gustavo, *El primer peronismo en Tucumán. Avances y nuevas perspectivas*. EDUNT, Tucumán, 2012; Rein, Raanan; Barry, Carolina; Acha, Omar y Quiroga, Nicolás, *Los estudios sobre el primer peronismo. Aproximaciones desde el siglo XXI*. Instituto cultural de la provincia de Buenos Aires, La Plata, 2010; Tcach, César, “El enigma peronista: la lucha por su interpretación”, *Historia Social*, N° 43, 2002, pp. 129-139.

En cualquier caso, se hace necesaria una mención, siquiera a vuelapluma, acerca de las reflexiones generadas en torno a la naturaleza del peronismo en tanto que fenómeno político y social de masas. Si bien una consideración pormenorizada de todos los aportes relevantes en el ámbito de las ciencias sociales excedería las pretensiones de este capítulo, resulta útil a efectos de nuestro desarrollo posterior, sentar las bases teóricas sobre las que proyectar la experiencia sindical docente tucumana que se quiere reconstruir.

Muchas han sido las interpretaciones que desde la sociología, en primer lugar, y la historiografía posteriormente se han pronunciado respecto de las características del surgimiento del peronismo, del que numerosos autores han destacado su especificidad y dificultad de clasificarlo<sup>5</sup>. En la primera corriente de interpretación surgida, iniciada por el sociólogo italiano G. Germani, primó el análisis del peso de una masa social que estaría “disponible” para ser incorporada al Estado mediante el ejercicio de prácticas de inclusión preventiva, destinadas a evitar los posibles focos de conflictividad social que surgieran entre sectores de la población que se sabían desplazados de los centros de decisión y de las políticas estatales, al tiempo que iban desarrollando su capacidad de autopercepción y movilización sociopolítica<sup>6</sup>. Los grandes colectivos de inmigrantes inmersos en un proceso de proletarianización serían, según esta óptica, los grupos destinatarios de dichas políticas, evitándose así abonar corrientes verdaderamente cuestionadoras del orden social. Los migrantes llegados de Europa, por tanto, resultaban ser el actor social clave en una etapa de transición entre una sociedad tradicional a otra

---

<sup>5</sup> Tcach, César, “El enigma peronista: la lucha por su interpretación”, *Historia Social*, N° 43, 2002, pp. 129-139. En oposición a esta presunta especificidad del peronismo, el autor defiende que esta pretendida imposibilidad para su definición en base a parámetros políticos ortodoxos responde más a la voluntad del propio movimiento peronista que a un análisis riguroso de sus prácticas. En este sentido, aludiendo al surgimiento del peronismo como fenómeno político, D. Mácor y C. Tcach afirman que: “Lejos de ser inclasificable, este mito originario del peronismo repite de modo riguroso todos los elementos de las construcciones fundacionales del populismo. En términos generales, un pueblo al que no se le reconocen clivajes de clase y un líder taumatúrgico que es portador de una promesa mítica”. En: Mácor, Darío y Tcach, César (Eds.) *La invención del peronismo en el interior del país*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003, p. 5.

<sup>6</sup> Entre estos primeros autores se deben señalar: Germani, Gino, *Política y Sociedad en una época de transición*. Paidós, Buenos Aires, 1971; Germani, Gino, “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos”, *Desarrollo Económico*, Vol. 13, N° 51, 1973, pp. 435-488; Di Tella, Torcuato, *Clases sociales y estructuras políticas*. Paidós, Buenos Aires, 1974; Waisman, Carlos H., *Modernización y legitimación: la incorporación de la clase obrera al sistema político*. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1980.

con una estructura productiva moderna e industrializada<sup>7</sup>. Estas propuestas fueron matizadas posteriormente, cuando las evidencias empíricas demostraron que el peronismo no pudo contar exclusivamente con estos sectores como base de su consolidación, sino que necesariamente debió conciliar apoyos de los sectores medios, o incluso entre ciertas élites.

El factor fundamental para interpretar este proceso era la incorporación de la clase obrera al sistema político pero, hasta ese momento, entendiéndola como un sujeto pasivo que se movilizaba exclusivamente en función de los intereses de la dirigencia peronista. En estos estudios prima el carácter rupturista del peronismo, que fue capaz de introducir en la sociedad argentina dispositivos de articulación social, esto es, un movimiento sindical de fuerte apoyo popular, dirigido por una fuerza política que no buscaba tanto la redistribución de las plusvalías del gran capital generadas en los años de expansión económica, como la aplicación de un programa transformador de la realidad social alejado de preceptos revolucionarios<sup>8</sup>.

Otros estudios continuaron matizando esas primeras impresiones y destacaron la importancia de las experiencias previas, especialmente en lo que se refiere a la participación de la “vieja guardia” sindical en la definición de los términos de ese nuevo contrato social que se estaba por elaborar. El papel protagonista de los viejos sindicatos –y sindicalistas– resultaría, desde este punto de vista, la clave interpretativa determinante para comprender la materialización de las políticas sociales y el ordenamiento legislativo impulsado durante el peronismo. En este sentido, las estrategias de supervivencia del antiguo sindicalismo frente a la injerencia del intervencionismo peronista, fueron consideradas como el ejercicio de una elección

---

<sup>7</sup> En este sentido, Milcíades Peña aporta una lectura marxista de este proceso, pero poniendo el acento sobre el carácter heterónomo de las organizaciones sindicales promovidas bajo el peronismo, donde lo que primaría sería la fuerza de una organización poderosa, en detrimento del desarrollo de un movimiento obrero con intereses autónomos. Peña, Milcíades, *Masas, caudillos y elites*. Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1971, pp. 61-63; Cfr.: Feinmann, José Pablo, *Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina*, Tomo I. Planeta, Buenos Aires, 2010, pp. 38-41. Sin embargo, el trabajo clásico desde el análisis marxista sigue siendo el de: Murmis M. y Portantiero, J.C., *Estudio sobre los orígenes del peronismo*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.

<sup>8</sup> Ciertamente que el peronismo trató de establecerse como proyecto hegemónico durante esos años, y fueron frecuentes los intentos de silenciamiento de aquellos sectores que se oponían a las políticas implementadas por el peronismo, fueran éstos provenientes de la izquierda de tradición marxista o de los sectores conservadores representantes de los intereses de las clases altas. Esta voluntad de uniformizar ideológicamente al país fue considerada por algunos autores como la aplicación latinoamericana del fascismo europeo. En este sentido véase, entre otros: Romero, José Luis, *Las ideas políticas en la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1956.

racional, en la que el movimiento sindical decidió tratar de forjar alianzas con la nueva fuerza social emergida, eso sí, en función de intereses autónomamente definidos<sup>9</sup>.

Asimismo, y profundizando en esta perspectiva que trata de aportar matices a los modelos “macro” de los primeros teóricos, las investigaciones con enfoques regionales mostraron que, para algunos casos concretos, no es posible comprender el éxito del movimiento peronista sin tomar en consideración la unidad de voluntades que parece darse entre las iniciativas gubernamentales y las demandas de los trabajadores<sup>10</sup>. Desde nuestro punto de vista, en el caso tucumano resulta pertinente atender a la importancia determinante que juega el sindicalismo azucarero en la conformación del movimiento peronista, cuyos miembros llegan a trascender el ámbito gremial para acabar incluso incorporándose a la esfera política<sup>11</sup>, sin caer en el error de pensar que en los años anteriores al peronismo no existía en Tucumán un movimiento obrero autónomo con cierta trayectoria<sup>12</sup>. Asimismo, la implicación de la acción estatal en el mantenimiento de los márgenes de beneficio de los industriales azucareros ha sido demostrada, lo que evidencia que el avance en políticas redistributivas de la riqueza estaba fundamentalmente costado por las inversiones del propio Estado y no por la expropiación de plusvalías a los industriales.

---

<sup>9</sup> Louise M. Doyon lo expresa de la siguiente manera: “En verdad, los trabajadores organizados fueron un determinante clave de los límites dentro de los cuales habría de moverse el régimen peronista desde sus orígenes hasta su derrocamiento”. En: Doyon, Louise M., *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2006, p. 415. En esta línea de análisis véanse, entre otros: Torre, Juan Carlos, *La vieja guardia sindical y Perón*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

<sup>10</sup> Sin embargo, los estudios recientes están complejizando cada vez más esta mirada, dando cuenta de las divisiones que al interior del movimiento sindical produjo la aparición del peronismo. Para una revisión de la producción reciente, así como un estudio de caso de los obreros de la industria petrolera, véase: Carrizo, Gabriel, “El sindicalismo durante el primer peronismo en el interior del país. El caso del sindicato de obreros y empleados de YPF de Comodoro Rivadavia”, *Revista Pilquen*, Vol. 16, N° 2, 2013. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/spilquen/v16n2/v16n2a03.pdf> (Consultado el 15/03/2015).

<sup>11</sup> No debe pensarse, sin embargo, que la incorporación de los trabajadores tucumano tuviera un recorrido lineal o sin hesitaciones. En un trabajo reciente, E. Piliponsky ha mostrado la heterogeneidad del movimiento obrero tucumano que, vale la pena no olvidarlo, existía con diferentes sensibilidades y tendencias antes de que triunfara la propuesta populista. En su trabajo es interesante ver el uso político que los obreros tucumanos hacen de las tres huelgas que se realizaron entre octubre y diciembre de 1945, como muestra de una participación política en la campaña para las elecciones de 1946. En: PILIPONSKY, Esteban, “De las calles a las urnas. Movimiento obrero, izquierdas y laboristas en Tucumán durante la campaña electoral de 1946”, *Coordenadas, Revista de Historia local y regional*, N°2, 2014, pp. 118-145. Para un estudio de caso, véase: Gutiérrez, Florencia y Lichtmajer, Leandro, “Apuntes para una microhistoria del mundo azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del ingenio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949)”, *Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)*, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2014.

<sup>12</sup> Véase: Capítulo 1, p. 50 y ss.

En suma, podemos decir que el curso de las investigaciones sobre los orígenes del peronismo ha contribuido a arrojar luz sobre un proceso que presenta multitud de aristas y que no es, en modo alguno, regular en su desarrollo. Sin embargo, y no olvidando el contexto provincial en el que se desarrolla nuestra investigación, consideramos pertinente rescatar el concepto de “masas en estado de disponibilidad” empleado por G. Germani, cuando se trata del colectivo de los docentes provinciales. Germani recogió esta idea de Raymond Aron, aplicándola a los trabajadores que, fruto de la migración interna provocada por la industrialización del país, accedían por vez primera a espacios de visibilidad política y social. En nuestro caso este concepto no se puede trasladar sin matizarlo de manera importante: los trabajadores de la educación no provenían de sectores necesariamente ajenos a la vida política. Sin embargo, sí que entendemos que la función social tradicionalmente atribuida a los docentes, alejados del mundo de los conflictos laborales por deberse a la superior tarea de ejercer su “apostolado laico civilizatorio”, disponía al colectivo a una instrumentalización en el sentido que el peronismo dispuso, esto es, a través de la conformación de entidades representativas de estos trabajadores que, finalmente, quedarían sometidas a la voluntad política de quienes, en un primer momento, impulsaron su construcción.

### **3.2.1. El peronismo como fenómeno de masas nacional**

La aparición en la escena política argentina del movimiento peronista estuvo precedida por la participación de Juan Domingo Perón en el gobierno nacional, donde llegó a ocupar los cargos de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, y vicepresidente. Cuando tras el golpe militar del 4 de junio de 1943, asumió la presidencia de la Nación el general Pedro Pablo Ramírez, Perón era uno de los más destacados integrantes del Grupo de Oficiales Unidos (GOU)<sup>13</sup>, una logia militar que había impulsado la conspiración contra el gobierno hasta entonces vigente. El general Rawson, primer impulsor de este pronunciamiento, continuó por el camino ya inaugurado de la intervención militar en las instituciones políticas de la república,

---

<sup>13</sup> Véase: Díaz Araujo, Enrique, *El GOU en la revolución de 1943 (una experiencia militarista en la Argentina)*. Instituto de Ciencias Políticas, Mendoza, 1970; Sandoval, Alicia T., *La revolución de 1943: políticas y conflictos rurales*. Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1988; Babich, Mariano, *4 de junio de 1943: la carta que apresuró “la revolución”*. Dirple Ediciones, Buenos Aires, 1997. Casal, Horacio Néstor, *La revolución del 43*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1971.



aunque pareciera que este golpe no era esperado por una buena parte del país<sup>14</sup>. Tiempo atrás, el derrocado presidente Ramón Castillo había tratado de salvaguardar su régimen, que en buena medida se había sustentado gracias a la celebración de comicios fraudulentos, mediante el nombramiento como candidato a su sucesión del veterano conservador Robustiano Patrón Costas, insigne representante del empresariado azucarero del interior del país<sup>15</sup>. Sin embargo, en la cúpulas militares donde ejercía su influencia el GOU<sup>16</sup>, se entendía que la intervención tenía que ser más decidida, y se resolvió romper definitivamente con la posibilidad de continuidad de un sistema político que se consideraba agotado<sup>17</sup>.

Las primeras medidas tomadas por este nuevo gobierno trataron de coincidir con los valores conservadores que representaban y, por este motivo, su principal empeño consistió en tratar de modificar el orden social, con la intención de configurar un escenario institucional donde la protesta social y el enfrentamiento político quedaran abolidos. En este sentido, la proscripción de las agrupaciones comunistas<sup>18</sup>, la persecución a los sindicatos<sup>19</sup> y la implantación de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas<sup>20</sup>, contribuyó a formar la imagen de que el poder se

---

<sup>14</sup> “EL golpe de Estado del 4 de junio de 1943 sorprendió a la gran mayoría de los argentinos, muy poco había trascendido sobre la actividad conspirativa de las Fuerzas Armadas”. En: Sidicaro, Ricardo, *La política desde arriba. Las ideas del diario La Nación, 1909-1989*. Sudamericana, Buenos Aires, 2003, p. 177. Cfr.: Bisso, Andrés, *Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial*. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2005, p.233.

<sup>15</sup> Sobre la figura de este senador salteño del Partido Demócrata Nacional consúltense: Aráoz, Ernesto M., *Vida y obra del doctor Patrón Costas. Cincuenta años de vida política argentina vistos desde Salta*. Mercatali, Buenos Aires, 1966; Luque Colombres, Carlos A., *Patrón Costas en la historia*. SEPA, Córdoba, 1991; Sweeney, Ernest S., *Robustiano Patrón Costas: una leyenda argentina*. Emecé Editores, Buenos Aires, 1998.

<sup>16</sup> También en el ámbito civil el GOU contaba con apoyos. Sirva como ejemplo el que algunos miembros de la Unión Cívica Radical habían propuesto al propio Ramírez, ministro de Guerra del gabinete de Castillo, encabezar su lista para las elecciones programadas para septiembre de 1943. En: García Sebastiani, Marcela Alejandra, “La oposición política al peronismo. Los partidos políticos en Argentina entre 1943 y 1951”. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1998. Disponible en: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0043101.pdf> (Consultado el 29/03/2014)

<sup>17</sup> Algunos autores sostienen que esta cesura hay que situarla en 1930. A. Rouquié afirma que: “*Depuis 1930, l'Argentine est l'exemple même de la 'république prétorienne'. La vie publique y est caractérisée par la permanence d'une hégémonie martiale banalisée. Les interventions militaires ne sont pas l'ultime recours dans des circonstances exceptionnelles, mais elles apparaissent comme des formes 'normalisées' de résolution des conflits*”. Rouquié, Alain, *À l'ombre des dictateurs. La démocratie en Amérique latine*. Albin Michel, París, 2010, p. 103.

<sup>18</sup> Mediante el decreto de 31 de diciembre de 1943, se acabó por disolver a todos los grupos políticos.

<sup>19</sup> Una de las primeras medidas del ejecutivo fue la supresión de la escisión socialista de la CGT, dirigida por Francisco Pérez Leirós.

<sup>20</sup> La enseñanza religiosa se hizo obligatoria en las escuelas públicas por medio del decreto ley 18.411/43, ratificado en 1946.

encontraba en manos de un gobierno autoritario, antidemocrático, nacionalista e integrista<sup>21</sup>.

Juan Domingo Perón, que en aquel tiempo ostentaba el grado de coronel, ocupaba la secretaría del ministerio de Guerra. A la cabeza de esta cartera se encontraba en Edelmiro Julián Farrell<sup>22</sup>, quien en febrero de 1944 ascendió a ocupar la presidencia de la República, posibilitando a su vez el acceso de Perón a alcanzar la titularidad del ministerio de Defensa, desde donde alcanzó la vicepresidencia. Sumado a este nombramiento, y teniendo como pistoletazo de salida su mediación en un conflicto con los trabajadores del gremio de la carne, asumió el cargo de director del departamento de Trabajo, organismo que luego se convertiría en secretaría. El día de su asunción como secretario de Trabajo y Previsión, el 2 de diciembre de 1943, Perón apuntaba cuáles iban a ser los propósitos de su gestión:

*“...el Estado manteníase alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber, [...] Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la Era de la Justicia Social en la Argentina. Atrás quedarán para siempre la época de la inestabilidad y el desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y obreros”<sup>23</sup>*

La secretaría de Trabajo y Previsión se convirtió en el órgano político de referencia de cara los trabajadores, ante el cual pedían amparo en sus reclamos laborales. En palabras de F. Luna, “la gestión de Perón al frente de la secretaría de Trabajo y Previsión hizo que una nueva sensación se adueñara del ánimo nacional: la de que el Estado había tomado partido por los trabajadores”<sup>24</sup>. Esta impresión se reforzó con la consecución de una serie de conquistas sociales, tales como el régimen jubilatorio, las vacaciones pagadas, los hogares para ancianos, el tribunal de los trabajadores y la promoción del turismo social, entre otras.

La popularidad adquirida por Perón fue en aumento debido a que su gestión era considerada exitosa por los trabajadores, y desde esa tribuna se convirtió en la principal figura del ejecutivo nacional. Tanto fue así que, gracias a este desempeño, acabó

---

<sup>21</sup> Romero, Luis Alberto, *Breve historia...*, op.cit., p. 98.

<sup>22</sup> Sobre la sucesión de presidentes en este período consúltese: Rodríguez Lamas, Daniel, *Rawson/Ramírez/Farrell*. CEAL, Buenos Aires, 1983.

<sup>23</sup> Cfr.: Torre, Juan Carlos, *Nueva historia Argentina*, Tomo VIII. Sudamericana, Buenos Aires, 2002, p. 26.

<sup>24</sup> Luna, Félix, *Breve historia de la sociedad argentina*. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2009, p. 170.

convirtiéndose en la personalidad política mejor posicionada ante las futuras elecciones presidenciales, llamadas a celebrarse en febrero de 1946. A esta reapertura democrática se llegó a raíz de las presiones ejercidas por los países aliados en la segunda Guerra Mundial, con los que Argentina se había alineado definitivamente, declarando la guerra a Alemania e Italia en el mes de marzo de 1945. El ejecutivo militar debió comprender entonces que con la derrota de las potencias del eje quedaban abortadas las posibilidades de construcción de un estado corporativista, sin la presencia de los cauces de participación ciudadana que ofrece la democracia<sup>25</sup>. A pesar del retroceso sufrido por el movimiento peronista en los primeros días de octubre, cuando el gobierno decidió volver al estado de sitio y retomar la prohibición de los partidos políticos, el encarcelamiento de Perón por parte del sector militar opositor supuso que, tras la movilización popular que condujo a su liberación, Perón emergiera convertido ya en un líder de masas<sup>26</sup>, siendo el 17 de octubre el día en que por vez primera tomó forma, de manera autónoma y con significado social, el movimiento peronista<sup>27</sup>.

Las elecciones de 1946 reafirmaron que Perón contaba con la mayoría del apoyo entre los sectores populares, aunque el margen de su victoria no fue tan amplio como pudo haberse imaginado luego de las jornadas de octubre. El resultado de los comicios ponía de manifiesto la existencia de un país políticamente fracturado en dos. El total del censo convocado ascendía a los 3.405.173 votantes, de los cuales participó un 85%. Del total de los 2.839.507 votos emitidos, Perón obtuvo 1.487.886 (52,40%) y la Unión Democrática 1.207.080 (42,51%). Los resultados del peronismo en Tucumán fueron los

---

<sup>25</sup> Al mismo tiempo, no conviene olvidar que uno de los problemas que obsesionaron a los militares en los años precedentes era el rearme de Brasil. La facción militar encabezada por el general Arturo Rawson, se mostraba partidaria del alineamiento con los Estados Unidos para contener a la potencia vecina, mientras que los miembros del G.O.U. no descartaron buscar el apoyo de Alemania para obtener tales fines. En el contexto de la posguerra resultó evidente que el aliado habría de ser el vecino del norte. Véase: Potash, Robert, *El ejército y la política en la Argentina, 1928-1945*. Sudamericana, Buenos Aires, 1971.

<sup>26</sup> L. A. Romero considera que la relevancia política de la figura carismática en la Argentina no se inauguró con J.D. Perón sino con H. Yrigoyen. El autor incide en la impronta indeleble del fenómeno peronista cuando dice que “es difícil decir qué cosa es ser peronista, pero está claro que es todavía hoy un rasgo fuerte de la política argentina”. En: Romero, Luis Alberto, “El apogeo de la sociedad de masas”, *Efedeportes*, N° 50, 2002, [www.efdeportes.com/efd50/romero1.htm](http://www.efdeportes.com/efd50/romero1.htm) (consultado el 23/02/2010).

<sup>27</sup> “It was these events which would launch Peron on his path to victory in the elections of February, 1946, leading to the consolidation of a social and political movement which has dominated Argentine society for much of the last forty years”. En: James, Daniel, “October 17th and 18th, 1945: Mass Protest, Peronism and the Argentine Working Class”, *Journal of Social History*, Vol. 21, No. 3, 1988, pp. 441-461.

más elevados de entre todos los distritos electorales, alcanzando esta opción el 70,60% de los sufragios<sup>28</sup>.

De aquí en adelante, los gobiernos de Perón se caracterizaron por el orden y, según V. Palermo, el orden era una cuestión, ante todo, de autoridad<sup>29</sup>. La capacidad política de Perón no residió tanto en una original aportación al sentido de la actuación del Estado de cara a sus ciudadanos, como en la reorientación que supo imprimir a ideas ya asentadas. Siguiendo a V. Palermo, el peronismo “no inventó conceptos, pero su utilización política local tuvo destinatarios inéditos que encontraron asombrosamente sencillo identificarse con ellos”<sup>30</sup>.

Sin embargo, en este contexto de apertura de nuevos horizontes para la clase trabajadora argentina, resulta tanto más interesante comprobar cuál fue la reacción del poder ejecutivo ante un conflicto laboral en el que la federación obrera tucumana desafió al oficialismo en una huelga que se extendió por 46 días. El resultado fue esclarecedor. La resolución del conflicto se alcanzó con la intervención del sindicato azucarero y la concesión de un aumento salarial equivalente a un 60% de lo demandado, por lo que se consiguió transmitir la impresión de que los sindicalistas se habían extralimitado en sus peticiones, y que éstas podían responder a intereses ajenos al mundo estrictamente laboral. En las líneas que siguen a continuación abordaremos ese escenario de conflicto entre sectores del peronismo, en el que también tuvo lugar la fundación de ATEP.

### **3.2.2. De conflictos y soluciones: el primer peronismo en Tucumán**

Como ya se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos en las elecciones de 1946 destacaron a Tucumán como la provincia argentina con mayor adhesión política a la causa peronista. La reiterada intención del peronismo, al menos discursiva, de disminuir la brecha entre los asalariados y los sectores económicos que habían obtenido enormes réditos durante el ciclo expansivo de la economía agroexportadora, caló profundamente entre el electorado tucumano. Sin embargo, el vínculo establecido entre

---

<sup>28</sup> García, Marcela Alejandra, “La oposición política al peronismo...” *op. cit.*

<sup>29</sup> Palermo, Vicente, “El siglo peronista”, *Punto de Vista*, N° 89, 2007. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/palermo3.pdf> (Consultado el 28/10/2010)

<sup>30</sup> *Ibidem.*

los trabajadores azucareros y Perón se remontaba a unos años atrás, cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en agosto de 1944, Perón se ocupó de transmitir a los industriales azucareros un pliego con las peticiones de los obreros del sector<sup>31</sup>. Esta participación, no obstante, correspondía con el rol tradicional que el Estado había jugado en tanto que mediador para la satisfacción de los intereses de los diferentes sectores implicados en la producción del azúcar<sup>32</sup>.

En el plano económico, el peronismo puso en marcha, por vez primera, la regulación de la producción azucarera a escala nacional, estableciendo rígidos controles sobre los cupos de producción. En palabras de R. Pucci, esta preocupación por regular la actividad azucarera no estuvo encaminada a proteger el precio del azúcar ni a propiciar que estos precios hicieran de la Argentina un país exportador de azúcar<sup>33</sup>. Fue mediante el decreto ley 678 del 13 de enero de 1945 que el PEN se atribuyó la capacidad de fijar los precios del azúcar, de la caña y del valor de los salarios, mediante la creación de la Junta Nacional del Azúcar<sup>34</sup>. En este decreto ha sido vista la intención de mantener un “equilibrio de clases asentado en una política distributiva promovida desde el Estado”<sup>35</sup>. En cualquier caso, parece poco cuestionable que las políticas

---

<sup>31</sup> Estas reclamaciones se realizaban en los siguientes términos: “Las fábricas azucareras, los cañeros independientes, han venido disfrutando durante varias décadas de todos los beneficios que crea una explotación floreciente y protegida, donde el azar del desequilibrio entre el capital expuesto y el mercado tienen un afianzamiento jurídico distinto a toda otra clase de actividad [...]...el hombre que extrae de la tierra el elemento básico para la vida ha sido por contraste de justicia olvidado permanentemente en sus problemas vitales. Se echa en olvido que ese puntal de toda organización debe ser mantenido dentro de un concepto que lo resguarde de cuantos inconvenientes surjan de las soledades, si otro incentivo que una profunda conciencia en cuanto a su carácter de elemento precioso para la Nación y sus semejantes...” En: Schleh, Emilio, *Composición legal sobre el azúcar. Leyes, decretos, resoluciones sobre el régimen de la industria, desde el 1 de junio de 1946 al 31 de diciembre de 1947*. Ferrari Hnos., Buenos Aires, 1947, p. 265. Cfr.: Rubinstein, Gustavo, “Evolución de los salarios de los obreros azucareros durante el primer peronismo (1946-1949)” 5º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo-ASET, 2001, p. 6. Disponible en: <http://www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/RUBINSTEIN.PDF> (Consultado el 13 de abril de 2011).

<sup>32</sup> En este sentido, D. Guy entiende que la preocupación del gobierno nacional por controlar las industrias provinciales estimuló el desarrollo de un Estado fuerte en materia económica, que luego sirvió de abrigo a las experiencias autoritarias y corporativistas iniciadas en los años '30. Guy, Donna, “El azúcar y la política de recursos naturales...”, *op. cit.* p. 31.

<sup>33</sup> Pucci, Roberto, *Historia de la destrucción...*, *op. cit.*, pp. 52-53.

<sup>34</sup> Con posterioridad, en 1946, se dio el decreto número 33.302, que provocó el malestar entre el empresario y los cañeros tucumanos, quienes se mostraban convencidos de no poder asumir las mejoras salariales que el decreto establecía para los obreros azucareros”. Girbal-Blacha, Noemí M., ““Economía azucarera tucumana, empresarios y crédito en tiempo del Estado peronista (1946-1955)”, en: Mácor, Darío y Tcach, César, *La invención del peronismo al interior del país*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003, p. 280.

<sup>35</sup> Rubinstein, Gustavo, “Evolución de...” *op. cit.*, p. 8. A esta idea, R. Pucci opone la interpretación de que la voluntad de protección estuvo dirigida hacia los pequeños productores cañeros, quienes se vieron favorecidos por la concesión de créditos que impulsaron la plantación de caña, lo que conllevó que éstos

crediticias implementadas desde el ámbito político tuvieron su efecto deseado como impulsoras de las inversiones en este sector, incluso entendidas como una forma de subsidio encubierto<sup>36</sup>, puesto que los tipos de interés con los que el dinero era prestado apenas llegaban a compensar la depreciación de la moneda nacional, devaluación provocada a su vez, por el vertiginoso aumento de la inflación<sup>37</sup>. Pero al contrario de lo que podría pensarse, este impulso financiero no fue acompañado por el crecimiento de la producción, ya que solo a partir de 1949 se llegó a cubrir las necesidades del consumo interno nacional. Siguiendo a G. Rubinstein se puede considerar, por tanto, que “el apuntalamiento de los derechos obreros y de sus reivindicaciones económicas pudo sostenerse gracias a un desmesurado crecimiento del gasto público”<sup>38</sup>, y fue aquí donde, durante la primera etapa del gobierno peronista, se centró la optimización de los recursos invertidos y no tanto así en mejorar la productividad del sector.

El peronismo tucumano se articuló en torno al eje que encarnaba la FOTIA<sup>39</sup>, la central sindical que reunía a la mayoría de trabajadores azucareros de la provincia. Sin embargo, ante las tentativas de desarrollo autónomo de la entidad, el gobierno peronista se mostró inflexible. Dirigentes de FOTIA habían formado parte de las instituciones políticas, como el caso de Manuel Parés, quien participó de la fundación de FOTIA en octubre de 1945, y ocupó la delegación regional de Trabajo y Previsión Social. Otro

---

aumentaran su participación en la producción azucarera, en detrimento de la de los industriales, que decreció del 42'2 al 24'3% entre 1945 y 1955. En: Pucci, *Historia de...*, *op. cit.*, p. 53.

<sup>36</sup> N. Girbal-Blacha señala que los préstamos facilitados por el crédito oficial se destinaron en un alto porcentaje, a partir de 1948, al: “...pago de sueldos, jornales, aguinaldos, vacaciones, deudas impositivas y deudas de previsión social”. Girbal-Blacha, Noemí M., “Economía azucarera tucumana...*op.cit.*”, p. 271.

<sup>37</sup> Rubinstein, “Evolución de...” *op. cit.* p. 9.

<sup>38</sup> Rubinstein, “Evolución de...” *op. cit.*, p. 10.

<sup>39</sup> La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), fue fundada en 1944 bajo el auspicio de la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en esos momento ocupada por Carlos Aguilar. Este funcionario siguió la línea de pensamiento que emanaba de la Doctrina Social de la Iglesia, donde se consideraba necesario aunar al colectivo de los trabajadores para “mantener una posición equidistante tanto del individualismo liberal como del colectivismo marxista”. La FOTIA estableció la necesidad de un sindicato único por cada ingenio azucarero y asumió la representación de unos 30.000 trabajadores en la provincia. La capacidad de ejercer influencia en el ámbito político, y la conciencia de que la organización contaba con un respaldo numérico muy relevante, hicieron que federación obrera tratara de funcionar como un agente autónomo al interior del entramado del sindicalismo peronista. Rubinstein, Gustavo, “El estado peronista y la sindicalización de los trabajadores azucareros”, Mácor, Darío y Tcach, César (Comp.), *La invención del peronismo...op. cit.*, p. 321. Véase también la monografía del mismo autor: Rubinstein, Gustavo, *Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo tucumano*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2006.

caso llamativo es el de Luis René Villacorta, quien fue llamado a hacerse cargo del Consejo General de Educación, a finales de 1946<sup>40</sup>.

En los meses siguientes, y sin que hubiera necesidad de desplazar a la dirigencia, los dirigentes sindicalistas ocuparon el papel que les fue reservado, pasando a integrar la delegación regional de la CGT, en el papel de agente intermediario entre el estado y los trabajadores del azúcar tucumano<sup>41</sup>.

Sin embargo, ante las elecciones provinciales de 1948, decidieron concurrir en las listas del Partido Peronista tucumano tres ex secretarios generales de la FOTIA, a saber: Celestino Valdez, Manuel Lema y Luis René Villacorta, que resultaron elegidos y acabaron por convertirse en diputados nacionales. La participación en las elecciones no hacía sino reforzar la importancia que FOTIA se otorgaba en el seno del peronismo tucumano. Este movimiento, sin embargo, redujo los escasos márgenes de autonomía presentes en los primeros años del peronismo, y desde ese momento las preocupaciones de la federación no sólo se destinaban hacia su base, sino también al mantenimiento del estatus obtenido por la dirigencia. Esta disminución de poder de decisión de las bases en la entidad coincidió además con los primeros síntomas de depresión de la economía argentina, repercutiendo gravemente en el salario real de los trabajadores azucareros.

El empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores fue el motivo de reaparición de las acciones de protesta, es decir, de las convocatorias de huelga en los meses de marzo y octubre de 1949. Sin embargo, estos movimientos de fuerza no deben ser interpretados como una acción de disidencia política, puesto que la crítica que de ellas emanaba estaba más dirigida a los empresarios azucareros que al papel jugado desde el ámbito de la política<sup>42</sup>.

En las peticiones de los trabajadores azucareros se aspiraba a conseguir un aumento del 100% en el salario, pero la marcha de la economía argentina no permitía el mantenimiento del gasto público tan elevado que se había sostenido hasta entonces. La

---

<sup>40</sup> Rubinstein, Gustavo, "Las cosas en su lugar", p. 4. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/rubinstein.pdf> (Consultado el 28/10/2010).

<sup>41</sup> Rubinstein señala que, al contrario de lo que sucedió en otros sectores, "en la provincia no hizo falta, en principio, recurrir al desplazamiento de dirigentes para disciplinar a los sectores obreros. Los obreros azucareros aceptaron rápidamente formar parte de un engranaje en donde las organizaciones sindicales se incorporaban a una estructura verticalista que tenía a Perón en su cúspide". Rubinstein, Gustavo, "El estado peronista y la sindicalización...", *op. cit.*, p. 339.

<sup>42</sup> Rubinstein, Gustavo, "El estado peronista y la sindicalización...", *op. cit.*, p. 354.

huelga iniciada el 14 de octubre, coincidiendo con la época de la zafra<sup>43</sup>, se prolongó durante 46 días, es decir, hasta el 29 de noviembre. En ese tiempo, la FOTIA no recibió apoyos ni por parte de la CGT, ni del bloque de legisladores peronistas en la cámara provincial, lo que supuso el desplazamiento de la federación azucarera como centro del movimiento peronista tucumano. De nuevo, G. Rubinstein apunta que, durante los primeros momentos, “la FOTIA pudo resistir el disciplinamiento y la burocratización de los sectores sindicales sin subordinarse totalmente a la estructura vertical diseñada por el fundador del movimiento”<sup>44</sup>. La reacción frente a la gran huelga azucarera fue vista como la oportunidad ideal para fijar los límites de la autonomía sindical.

Tan sólo unos días antes de la finalización del conflicto azucarero, tuvo lugar la primera reunión de ATEP. El peronismo buscó, en este momento, organizar un sindicato con un colectivo de trabajadores que aún estaba pendiente de ser sindicalizado, aunque su importancia relativa, tanto cuantitativa como cualitativa, despertó el interés del gobierno provincial por dar cabida a una nueva entidad gremial en el entramado organizativo peronista.

### **3.3. La creación de ATEP y su primera comisión directiva (1949-1952)**

La fundación de ATEP se enmarca en un proceso de redefinición de las relaciones entre el movimiento sindical y el Estado, como ya se ha señalado. Este cambio de orientación se daba, al unísono, en relación a las nuevas políticas educativas impulsadas desde el oficialismo. Al igual que ocurrió en el resto de ámbitos, el peronismo osciló entre las medidas inclusivas de corte democrático y aquellas vinculadas a un sesgo autoritario en el ejercicio del poder. En el espacio que nace de la intersección entre los esfuerzos de verticalización organizativa de los trabajadores intelectuales y la implantación de perspectivas pedagógicas que rompen con la tradición sarmientina, se localiza el impulso del gobierno provincial por dotar de una organización representativa única a los docentes primarios que de su administración dependían.

El marco de políticas educativas en el que se inscribe la fundación de ATEP está vinculado con la defensa de valores conservadores, que estuvo presente desde los

---

<sup>43</sup> Meses en los que se corta, recoge y procesa la caña de azúcar.

<sup>44</sup> Rubinstein, Gustavo, “Las cosas...”, *op. cit.*, p.18.



inicios del peronismo<sup>45</sup>, siendo la ley de enseñanza religiosa uno de sus mejores ejemplos. Aprobada en la legislatura provincial tucumana en 1947, esta ley representó la alianza del primer peronismo con la jerarquía eclesiástica, al tiempo que la materialización legal de la identificación en los principios morales entre católicos y gran parte de la masa social peronista. Esta alianza, que perduró sólidamente hasta el año 1950, reintrodujo en la educación elementos de adoctrinamiento religioso que habían sido dejados fuera del espacio de la instrucción pública mediante la ley 1.420, y tuvo como propósito impulsar la construcción, o recuperación, de una “nueva moral” en la que se respetara a la autoridad y la jerarquía como verdades absolutas, y donde desapareciera la incipiente movilización política que, a través del mundo educativo, estaba apareciendo, especialmente, entre ciertos grupos de mujeres<sup>46</sup>.

En este contexto de conflicto con los trabajadores azucareros y connivencia con los intereses de la Iglesia<sup>47</sup>, es donde se enmarca la creación de ATEP, con fecha del 24 de noviembre de 1949, cuando la Oficina de Asuntos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Previsión de Tucumán puso en posesión a la Comisión Directiva provisoria del Sindicato del Magisterio de Tucumán<sup>48</sup>. La primera reunión celebrada por esta Comisión Directiva (en adelante CD) se llevó a cabo dos días después, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y estuvo formada por las siguientes miembros: Presidenta; Rosa Voza de Zapata, Vicepresidenta; Ana Sánchez de Pascual, Secretaria; Aurora

---

<sup>45</sup> En un discurso pronunciado el 15 de febrero de 1947, con motivo de la inauguración de un ciclo de conferencias organizados por el Sindicato Argentino de Maestros, para difundir el Plan Quinquenal, Eva Perón apuntaba que: “...el fracaso social de nuestra escuela es debido a que no educa, no forma y no moraliza. Se limita a instruir. De ahí la necesidad de su transformación indispensable y la ayuda de la enseñanza religiosa, para formar hombres y mujeres cuya responsabilidad de conducta contribuya a la paz social, conjuntamente con una mayor justicia social. Esto solo puede lograrse con la buena voluntad de la educación cristiana, fraternal y solidaria en lo privado y lo público, y jamás con el individualismo ateo y materialista”. Perón, Eva, *Discursos completos, 1946-1948*, Tomo I. Editorial Megafón, Buenos Aires, 1985, p. 48.

<sup>46</sup> Tío Vallejo, Constanza, “El integrismo católico argentino: principio, propuestas y proyecciones tucumanas de la ley de enseñanza religiosa de 1947”, Bonano, Luis Marcos y Pucci, Roberto (Comp.), *Autoritarismo y dictadura en Tucumán. Estudios sobre cultura, política y educación*. Catálogos, Buenos Aires, 2009, pp. 219-233.

<sup>47</sup> La provincia de Tucumán es un territorio de fuerte implantación religiosa. Sin embargo, la Acción Católica Argentina, el mejor ejemplo de los movimientos del integrismo católico, surgida en los años 30, no tuvo en sus primeros años de vida una sólida implantación. Al contrario de lo que sucedía en las provincias del litoral, donde se concentraba la mayoría de la afiliación, en Tucumán sólo se contabilizaban 981 socios/as para el año 1933. En: Acha, Omar, “Notas sobre la evolución cuantitativa de la afiliación en la Acción Católica Argentina (1931-1960)”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/acha.pdf> (Consultado el 28/10/2010)

<sup>48</sup> Esta entidad gremial, sobre la que no se cuenta con más informaciones, es la agrupación docente en la que se encuentra el precedente de ATEP, aunque por las circunstancias que se invocan en el acta de fundación de ATEP se puede inferir que no tuvo una actuación relevante.

Mastrolorenzo de Chiacchio<sup>49</sup>, Prosecretaria; Aída Aurora López, Tesorera; Ercilia V. Páez, Protesorera; Rosa Amalia Piebrabuena, Delegada; Emma Heredia Luna, Delegada Suplente; Sara Elvira Núñez de Lezama, Vocales; María Alcira Colombres y María Delia Pacheco<sup>50</sup>.

En el orden del día se trató, en primera instancia, la reestructuración del ex Sindicato del Magisterio de Tucumán, sobre lo que se decidió que “en lugar de reorganizar”, se conformaría una nueva entidad, fundamentando esta decisión en que de la extinta organización no se recibieron bienes, libros o nómina de afiliados<sup>51</sup>. La CD provisoria tuvo por cometido la elaboración de una conscripción de socios y la convocatoria de elecciones, del mismo modo que se encargó de proponer el nombre de la nueva entidad. Asimismo, se formaron sendas comisiones para la elaboración de los nuevos estatutos y para la gestión de la personería gremial y jurídica<sup>52</sup>. A este respecto, el Fiscal de Gobierno informó que la personería jurídica sería concedida tras la presentación de los estatutos y los libros correspondientes (de actas, de cuentas, de afiliados, etc.). Sin embargo, como se verá posteriormente, la personería gremial no sería concedida sino hasta 8 años después. En relación a la elaboración de los estatutos de la flamante entidad, la CD exponía sus primeras consideraciones afirmando que: “dadas las necesidades del gremio en la hora presente, se hace necesaria una reforma de dichos estatutos que tienda a resolver en forma integral las aspiraciones del Magisterio”<sup>53</sup>. Aunque no se aclaraban cuáles eran esas necesidades actuales del colectivo, se infiere de la documentación analizada que éstas, fundamentalmente, atañían a la mejora de las condiciones laborales de sus afiliados, reclamos que, como se comprobará, serán recurrentes a lo largo de la historia de la agremiación.

La estructura interna de la entidad gremial quedaba entonces compuesta por una dirección, la mencionada CD, que resultaría elegida por los afiliados mediante sufragio directo. Por otro lado, el máximo órgano de representación de la agremiación lo constituía la Asamblea General, a la que habrían de concurrir los delegados escolares en

---

<sup>49</sup> Quien renunció a su puesto después de tres semanas

<sup>50</sup> Archivo ATEP (en adelante AA), CD, Libro I, acta n° 1, 26/11/1949.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> La obtención de la personería jurídica significaba el reconocimiento oficial de la entidad recién creada, mientras que la personería gremial, de más difícil obtención, facultaba a la organización la representación del colectivo de trabajadores ante las negociaciones que tuvieran lugar en relación a cuestiones gremiales.

<sup>53</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 2, 07/12/1949.

representación de todos los afiliados. Estos delegados debían ser elegidos por cada centro educativo, y eran convocados por la CD en función de la importancia del asunto a tratar.

En el mes de diciembre de 1949, ATEP inaugura su actividad institucional con las entrevistas realizadas a los ministros provinciales de Gobierno y de Hacienda y al Interventor del Consejo General de Educación<sup>54</sup>. Tal y como expresaba la dirección, la intención no era otra que la de hacerles una “visita de cortesía [...] interesándolos por la equiparación de sueldos del magisterio tucumano”<sup>55</sup>. El resultado del encuentro fue la de la formal promesa de que la equiparación de los sueldos sería una realidad en breve tiempo, anunciada por parte del ministro de Gobierno. En similar sentido, el interventor del Consejo General de Educación alentó a las representantes de ATEP a continuar bregando por los “sanos ideales del gremio”<sup>56</sup>, evidenciando así que no esperaba de este colectivo sino una actitud conciliadora con el poder político y de escaso alcance reivindicativo.

Este primer encuentro es un buen ejemplo de la dinámica que se estableció durante el período que se aborda en el presente capítulo. Ante las peticiones de mejora de las condiciones laborales del gremio, el gobierno provincial contestaba, en primer lugar, que las demandas eran justas y aceptables, pero los compromisos que se adquirirían eran sistemáticamente aplazados ante la mayor urgencia de otros problemas, invocando recurrentemente los problemas financieros de la provincia y a la imposibilidad de obtener recursos adicionales.

---

<sup>54</sup> El Consejo de Educación era el organismo en el que residía el gobierno escolar, dependiente del ministerio de Educación de la provincia y compuesto por funcionarios nombrados por el ejecutivo y vocales docentes que representaban a los sindicatos. Entre sus funciones se comprendían la gestión de la incorporación de nuevos docentes, los traslados a distintos centros, la repartición de grados y, en definitiva, velar por el correcto cumplimiento la legislación educativa y laboral vigente para los docentes.

<sup>55</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 2, 07/12/1949. Se refieren a la equiparación entre salarios de los docentes pertenecientes al sistema educativo nacional y aquellos que trabajaban para el sistema educativo provincial, a quienes ATEP representa. La reivindicación de mejoras salariales por parte de los docentes databa de algunos años atrás. En marzo de 1945, el diario *La Prensa* de Buenos Aires, publicaba un editorial titulado “El apostolado del magisterio”, donde se destacaba que los salarios de los docentes eran inferiores a los determinados por el escalafón y que, en cambio, se había aumentado continuamente el de los trabajadores del estado. Además, en este artículo se hacía hincapié sobre la diferencia salarial entre los maestros de los sistemas nacional y provincial. Por otro lado, el diario *La Nación*, compartía el diagnóstico de que el problema comenzaba en el año 1945, aunque se centraba en la cantidad de días festivos que disponían los docentes y en las excesivas licencias que les eran otorgadas. Ambas referencias en: Bernetti, Jorge Luis y Puiggrós, Adriana, *Peronismo: cultura política y educación (1945-1955)*. Galerna, Buenos Aires, 1993, p. 193.

<sup>56</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 3, 16/12/1949.

Continuando con el proceso de institucionalización, tuvo lugar la primera asamblea general extraordinaria del sindicato, llamada a celebrarse el día 19 de diciembre con el objetivo de considerar el cambio de nombre de la entidad y la reforma de los estatutos, aunque es más preciso decir que se trató de una elaboración completa, ya que no se conocían los estatutos del anterior sindicato. En esta reunión fue aprobado por unanimidad el nuevo nombre del sindicato, tras escuchar a la vicepresidenta Ana Sánchez de Pascual, que incidió en la necesidad de “una denominación que abarcara los aspectos material y moral unidos a la cultura intelectual”<sup>57</sup> de los docentes provinciales tucumanos<sup>58</sup>. Con respecto a la elaboración de los estatutos de la recién creada ATEP, la asamblea decidió, también por unanimidad, encomendar exclusivamente a la CD esta tarea. Finalmente, y con ocasión de otra asamblea extraordinaria, los nuevos estatutos fueron aprobados el 26 de diciembre de 1949, aunque no se ha conservado registro completo de ellos.

### 3.3.1. La primera intervención gremial

Con el inicio del ciclo lectivo, en marzo de 1950, ATEP retoma su actividad y en ese momento se produce la primera actuación en defensa de sus afiliados, como organismo intermediador entre dos partes litigantes. En este caso, se trató de un grupo de docentes y las directoras de las escuelas en las que trabajaban. El problema consistía en que, según la declaración de Ana S. de Darmani, trabajadora en la escuela Obispo Piebrabuena<sup>59</sup>, 10 maestras de este centro eran menoscabadas por la actividad de Alicia M. de Herrera, quien las trataba de forma “torpe, descomedida y arbitraria”. De la

---

<sup>57</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 4, 19/12/1949.

<sup>58</sup> Unos años antes, la revista La Obra daba cuenta del debate que ya se destila en estas primeras autodefiniciones que pronuncia ATEP. En mayo de 1945, en el contexto del gobierno militar que trataba de cooptar al movimiento sindical, en La Obra se podía leer: “¿Constituimos acaso una clase particular en la sociedad como pueden serlo la de los militares y la de los clérigos, por ejemplo, según se los estima corrientemente? ¿Integramos por ventura un sector un tanto amorfo de las llamadas ‘profesiones liberales’ encajadas dentro de la denominada ‘clase media’ aburguesada y con sueños de aristocratización? ¿O pertenecemos de conformidad con nuestro estado económico, nuestra posición social y la naturaleza de nuestro trabajo a la masa proletaria y la clase obrera de la Nación? Los maestros estamos, pues, dentro de la masa proletaria y obrera del pueblo. No arrugue el ceño maestro amigo a quien puede sorprender nuestra rotunda afirmación”. La Obra, editorial, Tomo XXVII, 1945, p. 105. Cfr.: Caruso, Marcelo, “Fuentes y espacios del pensamiento pedagógico del primer peronismo. Los discursos pedagógicos del nacionalismo y de la izquierda”. Informe final de investigación, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1993, p. 203.

<sup>59</sup> Situada en la localidad de Leales, en el departamento del mismo nombre al sudeste de la capital.

misma manera, las denunciantes señalaban el incumplimiento con la legislación vigente en lo relativo a la distribución de grados<sup>60</sup>. El otro caso registrado, en esa misma ocasión, fue el expuesto por María Ángela Gorkillafane, quien manifestó que Angélica R. de Fanciotti, directora de la escuela Ricardo Gutiérrez N°1<sup>61</sup>, también trataba de forma desproporcionada al personal a su cargo.

Ante estas denuncias, la CD nombró una subcomisión para recabar información acerca de los casos, mediante la solicitud de información a la inspectora general<sup>62</sup>. Después de este paso, y si eventualmente se comprobaba la veracidad de los hechos que acababan de ser expuestos, se dirigirían al interventor del Consejo de Educación solicitando el traslado de ambas directoras<sup>63</sup>.

La respuesta de la inspectora general fue que las citadas directoras tenían ya abiertos varios expedientes, antecedentes por los cuales la funcionaria se dirigió, al iniciarse el curso académico, a la escuela Obispo Piedrabuena con la intención de lograr la restitución de los maestros que habían sido desplazados de sus grados. La representación que ATEP había mandado ante la inspectora, formada por la presidenta, delegada y tesorera, decidió entonces solicitar el encuentro con el interventor del Consejo de Educación, quien se reunió tanto con las directoras como con las representantes gremiales, y prometió resolver en sentido favorable las demandas presentadas por la comisión enviada por ATEP. Desde este momento, aunque con especial énfasis durante la etapa peronista, será manifiesto el interés que las sucesivas direcciones sindicales docentes van a tener por vincularse a las autoridades políticas del gobierno provincial. Un ejemplo se observa en esta ocasión, esclarecido en tanto la

---

<sup>60</sup> Archivo de la Honorable Legislatura de Tucumán (en adelante ALT), Desde el 1 de enero de 1947 estaba vigente la ley n° 2.000, en la cual se recogía en aquellos docentes con mayor antigüedad tenían preferencia a la hora de escoger el grado en el que iban a impartir clases. Diario de Sesiones de la H. C. de Senadores, 19/11/1946, pp. 416-422.

<sup>61</sup> Situada en San Miguel de Tucumán.

<sup>62</sup> La inspectora era Cira Salazar Colombres de Belluscio; Según el artículo 17 de la ley 2.000, este cargo, que dependía del Honorable Consejo de Educación Provincial, era provisto por funcionarios del cuerpo de inspectores, al contrario que los inspectores seccionales, quienes tenían que contar con experiencia docente o “actividades vinculadas a ella”. ALT,

<sup>63</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 6, 14/03/1950. Según el artículo 20 de la ley 2.000, el traslado de un docente tenía que estar necesariamente avalado por el Consejo de Educación, después de comprobada una “falta grave de conducta o idoneidad reflejada en sumario administrativo”. Véase: ALT, Diario de Sesiones de la H. C. de Senadores, 19/11/1946, pp. 416-422.

comisión nombrada por ATEP pretendió informar igualmente al ministro de Gobierno, consideración que no fue contemplada por el interventor del Consejo de Educación<sup>64</sup>.

Sin embargo, el traslado de las directoras a otros centros no fue resuelto con la rapidez esperada por la CD, por lo que ATEP decidió intentar elevar sus peticiones, de nuevo, ante las autoridades políticas de la provincia. La comisión encargada consiguió, esta vez sí con el visto bueno de la inspectora general, elevar su queja ante el ministro de Gobierno, Ramón Bustos, quien se significó no tanto a favor del traslado como de la exoneración de las directoras<sup>65</sup>. Resulta interesante comprobar, por otro lado, que el ministro solicitó la colaboración de ATEP, quedando la comisión sindical encargada de informarle si resultase que el Consejo de Educación modificara lo ya dispuesto sobre ese asunto<sup>66</sup>.

En este sentido, se puede concluir que la agremiación era utilizada por las autoridades políticas como un elemento más de control sobre otras instituciones gubernativas que pudieran actuar de manera autónoma a la hora de acometer determinadas actuaciones. La subordinación de ATEP a la esfera política se manifiesta, durante la etapa peronista, mediante la participación en este tipo de estrategias<sup>67</sup>.

No obstante, el caso no quedaba circunscrito estrictamente a sus protagonistas, de manera que el 22 de marzo fue el marido de Ana S. de Darmani, Eduardo Herrera, quien acudió a la sede gremial para entrevistarse con la presidenta y la tesorera, ésta última,

---

<sup>64</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 7, 21/03/1950.

<sup>65</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 8, 24/03/1950.

<sup>66</sup> El ministro demostraba conocer bien la ley de Educación, puesto que no era competencia del ejecutivo provincial la decisión sobre el cese de docentes, sino que, como ya se ha mencionado, era el Consejo de Educación el encargado de hacerlo. Por la actitud del ministro se puede afirmar que contemplaba la posibilidad de que el Consejo de Educación actuara con autonomía respecto de la directriz indicada.

<sup>67</sup> La dicotomía entre autonomía y heteronomía del sindicalismo argentino bajo el peronismo ha sido extensamente estudiada. L. Doyon ha hablado de la existencia de una “democracia primitiva” en organizaciones de nivel primario con alto grado de participación en las decisiones del colectivo. Así, Doyon considera que la burocratización de los sindicatos contribuye a aumentar su autonomía, puesto que con el crecimiento del aparato interno y la aparición de un sector dirigente diferenciado de los trabajadores *strictu sensu*, se diversifican los intereses, aún pudiendo entrar en conflicto con la masa de afiliados. Según esta interpretación, si los sindicatos no hubieran desarrollado cierta autonomía, no podrían haber sobrevivido al derrocamiento del régimen que les daba cabida. Sin embargo, como se mostrará más adelante, la creación y posterior ubicación de ATEP en el entramado sindical nos hace acercarnos a la postura de J.C. Melon Pirro cuando afirma que “no existen dudas de que, desde comienzos de los años cincuenta y en paralelo al desarrollo de una clara vocación hegemónica, el movimiento funcionó de un modo centralizado [donde] la verticalidad de una dirigencia sindical capaz de movilizar a miles de trabajadores aparecía para confirmar, en el ritual de la plaza pública, la lealtad al garante de las conquistas obreras”. Véase: Doyon, Louise, “La organización del movimiento sindical peronista”, *Desarrollo Económico*, N° 94, 1984, pp. 203-234; Melon Pirro, Julio César, *El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del 55*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, p. 13.

secretaría de la escuela Obispo Piedrabuena. Los argumentos de Herrera consistieron en la minusvaloración de las peticiones efectuadas por los docentes, así como en la asimetría de un conflicto en el que una de las partes, es decir, la directora de la escuela, no había sido interrogada. La respuesta de la presidenta fue, en este sentido, reveladora: no fue escuchada por no ser afiliada. Finalmente, Herrera manifestó su consideración de que la medida era injusta e informó de la intención de llevar el asunto ante la justicia. A partir de este desencuentro, la CD resolvió servirse del resorte político que la recién inaugurada connivencia con el ministro de Gobierno le proporcionaba, y aprobó solicitar un nuevo encuentro con el ministro con el objetivo de informarle acerca de la actuación de Herrera y, de paso, hacer llegar a manos del gobernador de la provincia este conflicto de carácter laboral<sup>68</sup>.

Esta nueva cita con el ministro de Gobierno, realizada el 25 de marzo, confirmó la unidad de voluntades entre el poder político y los representantes sindicales, definitivamente aclarada cuando el ministro expresó “que antes de restituir a la Sra. de Herrera renunciarían todos en pleno”<sup>69</sup>, refiriéndose a él mismo y a los miembros del Consejo de Educación. Aunque resulta más que probable que esta afirmación no fuera más que un brindis al sol, no es desdeñable la intensidad del vínculo que la administración demostraba querer trenzar con la flamante organización gremial.

Finalmente, el desplazamiento a otra escuela de la directora hizo que esta gestión de ATEP fuera bien recibida entre algunos docentes, quienes enviaron a la entidad una nota de agradecimiento en los siguientes términos:

*“La situación de dignidad y equilibrio moral de que hoy disfruta nuevamente la escuela Obispo Piedrabuena, llevarán por los derroteros que le dieron justamente un lugar de privilegio en la consideración general a través de todos los tiempos”*<sup>70</sup>

Se cerraba de esta manera la primera intervención gremial del sindicato, que contaba con tan sólo 4 meses de actividad. Sin embargo, tras lo que parecía ser el inicio de una acción comprometida con los trabajadores, la acción gremial quedó relegada a un segundo plano durante los meses en los que se trabajaba por la consolidación dentro del

---

<sup>68</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 8, 24/03/1950.

<sup>69</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 9, 28/03/1950.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

campo sindical tucumano. Desde ese momento, el interés de la actividad de ATEP se centró en establecer un sólido vínculo con los mandos políticos y sindicales del peronismo provincial.

### **3.3.2. Trámites, viajes y primeras críticas hacia la consolidación institucional**

Los primeros meses de vida de ATEP requirieron de la atención a los trámites burocráticos necesarios para poder consolidar el sindicato. Con intención de edificar los canales de financiación de la entidad, a finales de marzo de 1950, la CD solicitó al Consejo de Educación la autorización para el cobro de la cuota mensual social a los afiliados, lo que en una primera respuesta fue rechazado<sup>71</sup>. En cualquier caso, ante esta decisión se volvió a recurrir al ministro de Gobierno como intermediador en su resolución, confirmando la tendencia antes señalada, que en esta ocasión no fue tan resolutiva como prometía, ya que el descuento mensual no se concedió hasta algunos meses más tarde.

Desde comienzos del mes de mayo, la principal actividad de ATEP se centró en el cumplimiento de los procedimientos administrativos conducentes a la obtención de la personería jurídica y gremial. Sin embargo, la organización de un viaje a Buenos Aires para mostrar la adhesión de la entidad a Eva Perón y su “Ayuda Social”<sup>72</sup>, aparecería

---

<sup>71</sup> En las fuentes no se hacen constar los motivos de esta denegación, aunque se pueden inferir dos hipótesis: que la denegación vino propiciada por un simple defecto formal en la solicitud, o bien que el Consejo de Educación no quiso facilitar el funcionamiento de la entidad tras la gestión realizada contra las directoras mencionadas. AA, CD, Libro I, acta nº10, 04/05/1950.

<sup>72</sup> El 8 de julio de 1948 se creó la Fundación Eva Perón, en parte heredera de la antigua Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, que sirvió para centralizar el caudal asistencial que emanó desde el Estado. La propia Eva Perón controlaba y decidía a qué serían destinados los fondos recaudados por la Fundación, que en su mayoría provenían de aportaciones de la CGT, los sindicatos, el Estado y donaciones particulares. Desde esta institución se desarrolló una actividad de cobertura social paralela y a la vez complementaria de aquella dirigida directamente por el gobierno, que se centró en la atención de las mujeres, ancianos y niños con medidas que iban desde la construcción de hogares y escuelas hasta la repartición de pan dulce y botellas de sidra en navidades. La propia Eva Perón definía sus objetivos de este modo: “Apuntala y preserva el derecho de vivir para aquellos que por razones de edad, por causas de enfermedad o por incapacidad física, no son aptos para el trabajo. Es la habitación, el vestido, el alimento, la medicina para el enfermo que no está capacitado para el trabajo y que no pudo adquirirla. No es limosna. Es, simplemente, solidaridad humana”. Véanse: Navarro, Marysa, “Evita”, Torre, Juan Carlos, *Nueva Historia...op.cit.*, pp. 332-334 y Duarte de Perón, Eva, *Clases y escritos completos*, Tomo III. Editorial Megafón, Buenos Aires, 1987, p. 197. Otra mirada interesante es la aportada por M. Plotkin, cuando incluye a la fundación dentro de la categoría de los “mecanismos informales” dispuestos por el peronismo tendentes a conseguir el “consenso pasivo” de parte de la sociedad que no había sido incorporada al movimiento peronista por los cauces más ortodoxos que primero se dispusieron. En: Plotkin, Mariano, *Mañana es San Perón*. Ariel, Buenos Aires, 1993, pp. 211-255.



como la principal preocupación de la dirigencia. Con respecto a la primera cuestión, a finales del mes de mayo fue presentada la documentación necesaria para la obtención de la personería jurídica (estatutos, libro de actas, índice con el domicilio de los afiliados). Al mismo tiempo, se nombraba una comisión para solicitar informes al ministro de Trabajo y Previsión sobre los requisitos a cumplir para obtener la personería gremial, por lo que ambas gestiones quedaban a la espera de resolución favorable.

En lo tocante al encuentro con Eva Perón, la CD solicitó en primera instancia permiso al gobernador<sup>73</sup> de la provincia para entrevistarla con ocasión de su visita a Tucumán, teniendo como única intención la de presentarle los “saludos y la adhesión de la entidad”<sup>74</sup>. El asunto, que fue entendido como fundamental por la dirigencia de ATEP, se trató en asamblea general extraordinaria el 28 de mayo. En el orden del día figuraban dos únicos puntos: considerar la visita a Eva Perón y conseguir la donación a la “Ayuda Social Eva Duarte de Perón” por un grupo numeroso de socios. En relación a esta donación, la delegada de ATEP, Emma Heredia Luna, consideró que la cuota debería ser de 5 pesos, convocando a todo el magisterio tucumano, independientemente de si se trataba o no de afiliados a la agremiación. Por su parte, Laura Gutiérrez dobló la apuesta, y puso a consideración una donación de 10 pesos, triunfando finalmente la primera opción<sup>75</sup>. Con este propósito, la asamblea nombró una comisión para recorrer todas las escuelas y conseguir la contribución de los docentes tucumanos.

Con respecto a la entrevista con Eva Perón, se comisionaron afiliados encargados de solicitar insignias del Partido Peronista<sup>76</sup>, que habrían de ser utilizadas por los

---

<sup>73</sup> En ese momento el gobernador de la provincia era el mayor retirado Carlos Domínguez, nacido en Buenos Aires en 1907, quien llegó destinado a Tucumán en 1943. Antes de acceder a la gobernación había sido interventor en la Legislatura, bajo el mandato de Alvelo. Durante su gestión se destaca la construcción de 14 establecimientos escolares del sistema provincial, unidos a otros 6 erigidos por el gobierno de la Nación, pasando de 52.339 alumnos matriculados en 1945 a 59.983 en 1949. En: De la Torre, Carlos (h), *Historia de Tucumán*. Plus Ultra, Buenos Aires, 1987, p. 673.

<sup>74</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 10, 04/05/1950.

<sup>75</sup> Para situar esta aportación en su justa medida, conviene señalar que desde la promulgación de la ley 2.000, en noviembre de 1946, se estableció en el artículo n°2 que el salario inicial de un maestro de enseñanza común ascendía a los 200 pesos/moneda nacional. En este caso, para un recién llegado a la carrera docente, la cantidad propuesta ascendería al 5% del salario mensual.

<sup>76</sup> El Partido Peronista, fundado el 25 de julio de 1949, se concibió como organización “superadora” del Partido Laborista, con el que Perón accedió a la presidencia en su primera ocasión. Con esta organización partidaria se pretendía abortar el cauce de participación política de los representantes sindicales que había supuesto el Partido Laborista. Para un análisis de las dinámicas electorales durante el peronismo véase: Little, Walter, “Electoral Aspects of Peronism, 1946-1954”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 15, No. 3, agosto 1973, pp.267-284; Wellhofer, E. Spencer, “Peronism in Argentina: The Social Base of the First Regime, 1946-1955”, *The Journal of Developing Areas*, Vol. 11, N° 3, abril

delegados en tal ocasión. El interés en que se realizara con la mayor prontitud posible parecía máximo, y por esto se aprobó una propuesta que instaba a la realización de este encuentro en las vacaciones de invierno, fecha que fue descartada por coincidir en el tiempo con las celebraciones sanmartinianas<sup>77</sup>. Las cuestiones logísticas también ocuparon lugar en el debate asambleario, de manera que se decidió solicitar los pasajes al ministro de Transportes, al tiempo que se gestionaría la estancia de la delegación tucumana en la Casa del Docente Argentino en Buenos Aires<sup>78</sup>. Dicha delegación, a propuesta de Raquel de Ortiz, estaría integrada por 20 socios, comprendiendo entre ellos a la CD por completo. Finalmente, en esta asamblea tan sólo se refleja la propuesta de una afiliada, Susana Torres de Carrer, pidiendo la intervención de ATEP en la equiparación de sueldos entre maestras especiales provinciales y maestros de escuelas profesionales dependientes del sistema nacional de educación<sup>79</sup>. Es decir, tras 6 meses desde su fundación, se consigna por primera vez la petición de una afiliada que llama a la CD a interesarse en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

Los esfuerzos para recaudar las donaciones fueron redoblados mediante avisos radiotelefónicos a los departamentos de la provincia, especialmente desde comienzos del mes de junio. Unos días antes, la CD no cejaba en su empeño de mostrar su compromiso con la causa peronista, y pedía al director del “Hogar Escuela Presidente Perón”<sup>80</sup> audiencia para entrevistar a la primera dama, con la intención de “saludarla y presentarle la adhesión del magisterio tucumano”<sup>81</sup>. Finalmente, esta voluntad se confirmó y, con motivo de su visita a la provincia, tuvo lugar el encuentro con Eva

---

1977, pp. 335-356; Mackinnon, Moira, *Los años formativos del partido peronista (1946-1955)*. Instituto Di Tella-Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.

<sup>77</sup> En la documentación de ATEP se encuentra un escrupuloso respeto por las celebraciones de carácter nacional y patriótico, donde son reiterados actos tales como ofrendas florales, celebraciones de misas, etc.

<sup>78</sup> Las gestiones de carácter gremial a efectuarse en Buenos Aires debían ser intermediadas a través del delegado escolar de la Agrupación del Docente Argentino, cuya delegación tucumana tenía como sede la Escuela Normal. A partir de mediados del año 1951 se hizo obligatorio, además, solicitar el alojamiento en la Capital Federal mediante esta residencia, impidiendo que los docentes pudieran cursar a título personal este tipo de solicitud. Diario *La Gaceta*, 04/08/1951, p. 4.

<sup>79</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 13, 28/05/1950.

<sup>80</sup> El hogar funcionó como una casa de acogida para niños desfavorecidos, donde se les proporcionaría “atenciones básicas”, así como actividades formativas, que completaban una obra de “redención social”. Informaciones sobre su inauguración se registran en: Diario *La Gaceta*, 04/06/1960, p. 1 y p. 6.

<sup>81</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 14, 30/05/1950.

Perón<sup>82</sup>. La presencia de la primera dama se justificaba por la asunción del nuevo gobernador provincial, Fernando P. Riera<sup>83</sup>, el día 4 de junio de 1950. La urgencia de la dirección de ATEP para conseguir fondos se explica porque en esa misma jornada, Eva Perón iba a estar presente en la inauguración del citado “hogar”<sup>84</sup>.

En las actas quedó anotado que la primera dama “accedió encantada” a recibir en audiencia a los representantes de ATEP. Cabe señalar, no obstante, que las gestiones realizadas con el gobernador de la provincia no fueron fructíferas, puesto que los dirigentes del gremio sólo tuvieron acceso a Eva Perón gracias a la cesión de la tarjeta profesional de Elvira Beltramelli de Delgado Jerez, con ocasión del homenaje que le rindió la filial tucumana de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Contando con este favorable arranque, la organización del viaje a Buenos Aires continuó preparándose en la asamblea general realizada el 8 de junio. En esa sesión, y ante lo imperativo de mediar con las autoridades políticas, Emma Heredia de Luna insistía en volver a solicitar al gobernador que activara los trámites para concretar la entrevista. La necesidad de acceder a Eva Perón a través de los canales establecidos provocaba que el afiliado Dionisio Campos creyera conveniente hacer presente la gestión al gobernador, para “no pasar por alto jerarquías”<sup>85</sup>, en una clara intención de evitar ofender a las autoridades por alguna desatención en el procedimiento.

Desde ese instante, y una vez resuelta la principal preocupación planteada por la CD, resulta interesante comprobar cómo asumen el protagonismo en la asamblea tres afiliados que no forman parte de la dirección, quienes comienzan a plantear, de manera decidida, la responsabilidad de las autoridades políticas en relación a los compromisos adquiridos mediante la firma de disposiciones legales. El caso particular que ocupa a estos intervinientes es el de la “ley 2.000”<sup>86</sup>. Las críticas se dirigieron tanto al poder

---

<sup>82</sup> Otra agrupación de docentes, el Círculo del Magisterio, envió un telegrama a la primera dama en la que expresaba que la entidad “participa del pueblo y afirma orgulloso que siente hoy el pueblo tucumano por la distinción que significa vuestra visita a esta histórica provincia”. Diario *La Gaceta*, 04/06/1950, p.2.

<sup>83</sup> El candidato del Partido Peronista, elegido para un mandato de dos años, había conseguido 77.662 votos, quedando muy por delante del radical Celestino Gelsi, que contó con el apoyo de 31.221 tucumanos. Fernando Riera nació en Bella Vista (Tucumán) en 1915, y había ocupado durante la etapa de Domínguez el ministerio de Gobierno, al tiempo que ejercía como diputado en la legislatura provincial. En: De la Torre, Carlos (h), *Historia de Tucumán*, op. cit., p. 680.

<sup>84</sup> Diario *La Gaceta*, 30/05/1950, p. 1.

<sup>85</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 15, 08/06/1950.

<sup>86</sup> ALT, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, diciembre, 1946, pp. 719-724. La Ley 2.000 fue aprobada el 19 de noviembre de 1946, por las Cámaras de senadores y diputados de la provincia de

ejecutivo de la provincia como a la directiva de la entidad gremial. Fue Dionisio Campos quien, en primer lugar, expresó que:

*“Los dirigentes de ATEP deben interpelar al gobierno por el cumplimiento de la Ley 2.000 del escalafón del magisterio provincial. Esta ley no se cumplió en ninguno de sus aspectos. El inspector con el director [de la escuela] califican al maestro y el magisterio no está presente. Debe haber calificaciones hechas por comisiones que lleven al educador laborioso, justo e inteligente a los primeros puestos”*<sup>87</sup>

A partir de este momento, la demanda expresada por Campos recibió el apoyo de otros compañeros. Tal es el caso de Manuel Enrique Maschetti, quien introdujo en la discusión elementos que hasta entonces no habían sido considerados, tales como la cohesión de los afiliados al interior de la agremiación y la importancia de la solidez organizacional. Respecto a esto, Maschetti manifestaba lo siguiente:

*“El magisterio tiene que unirse y estabilizar una institución que respalde los intereses del gremio en su hora [...] Las leyes dan estabilidad a las leyes, y con personería jurídica mandamos nuestros representantes en nombre del magisterio. Si se ha cometido un error hay que repararlo. Debemos asegurar la estabilidad de esta Agremiación”*<sup>88</sup>

Subrayando la importancia de la obtención de la personería jurídica emanaba una crítica hacia las gestiones dirigidas por la CD. El aspecto mencionado por Maschetti resultaba decisivo a la hora de poner en práctica la norma fijada en la ley 2.000, puesto que en su artículo 19 los docentes quedaban incluidos en los tribunales de calificación con la representación de “un director y un maestro [...] elegidos por las entidades de maestros reconocidas”<sup>89</sup>.

El recurso empleado por la vicepresidenta Ana Sánchez de Pascual en este momento de la discusión, fue el recordatorio de que las mencionadas gestiones ya habían sido iniciadas. Tras lo dicho, y tratando de reencauzar el debate en la asamblea,

---

Tucumán. Sus autores fueron los diputados Basualdo, Mirandou y Zarlenga. En esta disposición se recogían los escalafones, sueldos, cargos, juntas de clasificación, mecanismos de promoción y ascenso, equiparación salarial y acceso para los cuerpos docentes dependientes del sistema provincial de educación. Asimismo, en su artículo n° 22 se equiparaba a maestro normal nacional a efectos de sueldo inicial, a los docentes con título supletorio y sin título que estuvieran prestando servicio.

<sup>87</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 15, 08/06/1950.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> ALT, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, diciembre, 1946, p. 723.

la delegada Emma Heredia Luna informó que la publicidad que se acordó dar a la recaudación de la donación para la “Ayuda Social” fue cedida gratuitamente por la emisora de radio LV 7, con anuncios que serían emitidos a las 20 horas de los días 11, 12 y 19 del mes de junio.

Sin embargo, Campos volvió a incidir en la falta de implicación de los afiliados de base, al tiempo que vinculaba este desinterés con la brevedad de las experiencias sindicales anteriores. Tomando en cuenta las experiencias asociativas previas, Campos afirmaba que:

*“El magisterio ha tenido asociaciones efímeras que poco han hecho, pero han cimentado la presente Agremiación [...] La ATEP representa hoy al magisterio porque las minorías activas hacen la vida de una institución. Se hacen gestiones pese a la indiferencia del gremio; hay que atraer al maestro con obras; se pide al Sr. Gobernador, a los ministros y a las Cámaras que se resuelvan nuestros problemas”*<sup>90</sup>

Marchetti se volvía a mostrar partidario de esta línea, que sugería una mayor implicación en la labor de captación y difusión de las actividades acometidas, y apuntaba a que:

*“La CD debe atacar la indiferencia del misterio insistiendo en hacer conocer la obra que realiza [...] Para la buena marcha de la ATEP se hace necesario dejar todo bien sentando, de tal manera que se den o se pidan razones con precisión y rapidez”*<sup>91</sup>

Dirigido a tratar de resolver los problemas que acaban de apuntarse, Tulio Caponio manifestaba la necesidad de visitar al maestro en su domicilio, así como de aprovechar las visitas donde se recaudara la donación, para “hacer propaganda a favor de la ATEP” y afiliar nuevos socios.

La asamblea, después de discutidos los puntos plasmados en el orden del día, volvió a recoger las manifestaciones de Campos, que en el espacio destinado a asuntos varios insistió en:

---

<sup>90</sup> AA, CD, Libro I, acta nº 15, 08/06/1950.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

*“...que la Agremiación plantee a las autoridades problemas claros y definidos. Los maestros necesitan la equiparación de sueldos con el orden nacional. Puede entrevistarse a la Sra. Eva Perón que vela por los necesitados. Como el gobierno provincial aporta cierta cantidad, la CD de la ATEP debe gestionar primero ante él, si se le permite la gestión, en el orden nacional. Pido que la ATEP se interese por la Ley 2.000 que vio la luz en diciembre de 1946. La ATEP debe integrar los tribunales de concurso [...] Diré por qué no se cumple la ley 2.000. El maestro, obrero intelectual, no se interesa por sus problemas y por lo tanto no hay justicia en sus promociones. No tiene ‘Junta Calificadora’, la asociación debe estar representada por una persona que conozca dichos sumarios; disciplinas. Para ascensos debe haber una comisión especial que los estudie [...] Deseo que se hable de la ley 2.000, que se hagan los ascensos de acuerdo a esta ley”<sup>92</sup>*

Marchetti, por su parte, intervino cerrando la reunión, expresando que la máxima autoridad política de la provincia ostentaba la responsabilidad última del incumplimiento de la legislación que debía regir al magisterio tucumano:

*“...en síntesis; tenemos que al gobernador se le plantearán dos problemas: escalafón y cumplimiento de la ley 2.000 [...] No podemos tratar los asuntos del gremio a la ligera [...] Debe solicitarse audiencia para conversar con el gobernador acerca de la ley 2.000 detenidamente”<sup>93</sup>*

Las diferencias expresadas entre estos tres afiliados de ATEP y la CD pone de relieve las tensiones internas dentro de una organización que estaba definiendo cuál sería la metodología empleada a la hora de ejecutar las prácticas reivindicativas. En cualquier caso, tanto en la CD como en este sector crítico, se observa un acatamiento de los procedimientos establecidos en la negociación de los intereses del colectivo, si bien éstos se mostraban más decididos a dirigir demandas concretas al poder político. Por otro lado, la CD parecía estar más interesada en sacar adelante el encuentro con Eva Perón que en atender las reivindicaciones que se comenzaban a plantear desde parte de la base de la asociación.

---

<sup>92</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 15, 08/06/1950.

<sup>93</sup> *Ibidem*.

Asimismo, resulta interesante subrayar la autodefinición en la que Campos se señala como parte de la minoría, al tiempo que pondera enormemente la relevancia de la actividad de estos grupos minoritarios, sin los cuales entiende que no se consolida la institución. Esta actitud de vanguardia, por parte de los “críticos activos”, se corresponde con la acusación de desinterés vertida a sus colegas de profesión, a los que pretende denigrar con el calificativo de “intelectuales”<sup>94</sup>, despreocupados por los problemas reales. Para Campos, el carácter intelectual del docente es el factor que impide el arraigo de la entidad entre el magisterio provincial. Entendido el docente más como profesional que como trabajador, Campos veía aquí la causa de la falta de implicación y participación del colectivo. Sin embargo, como se demostrará más adelante, el propósito del régimen peronista, así como de las sucesivas direcciones de ATEP durante ese período, fue el de encauzar al movimiento docente que se encontrara bajo su influencia, a participar de una confederación que precisamente reunía a los profesionales liberales, asunto que retomaremos más adelante.

En los días posteriores a la asamblea, la intermediación entre sindicato y gobierno se reiteraba con la petición al gobernador del pago de los pasajes a Buenos Aires. Sin embargo, el objetivo de la visita a Eva Perón fue finalmente definido con la presentación de dos reclamos gremiales: la equiparación de cargos y escalafón del magisterio provincial con el nacional.

En octubre de ese mismo año, el interés del poder político pareció mirar hacia otro lado, ya que se decidió cancelar el viaje a Buenos Aires, por considerar el gobernador “inoportuno el momento para pedir un aumento de los sueldos para el magisterio provincial”<sup>95</sup>. No obstante, esta decisión no fue óbice para el envío de un mensaje de adhesión al presidente de la nación y a su esposa en el “Día de la Lealtad”<sup>96</sup>, así como que se considerase la incorporación de ATEP a la CGT<sup>97</sup>. De igual modo, en esa fecha

---

<sup>94</sup> Sobre la postura antiintelectual del propio Perón y otros integrantes relevantes de su movimiento véase: Fiorucci, Flavia, “Neither Warriors nor Prophets: Peronist and Antiperonist Intellectuals, 1945-1956”, tesis doctoral inédita, Institute of Latin American Studies, University of London, Londres, 2002.

<sup>95</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 18, 11/10/1950.

<sup>96</sup> EL 17 de octubre se celebra el llamado “Día de la Lealtad Peronista”, en el que se conmemora la liberación de Perón en el año 1945. Sobre los sucesos de estos días consúltase: James, Daniel, “October 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup>, 1945: Mass protest, peronism and the argentine working class”, *Journal of Social History*, Vol. 21, N° 3, 1988, pp. 441-461.

<sup>97</sup> La CGT había recibido por parte del Ministerio de Trabajo la facultad de intervenir federaciones y sindicatos. La legitimidad de la CGT, que emanaba directamente de la autoridad de Perón, propició que los sindicatos “funcionaran como organizaciones paraestatales [que] asumieron el color político que el

se consignó el total de la cuantía destinada a la “Ayuda Social”, cifra que alcanzó los 12.837 pesos<sup>98</sup>.

En la primera semana del mes de noviembre, se convocó a elecciones para la renovación parcial de la CD, en sus cargos de vocales, secretario, prosecretario, revisor de cuentas y 3 vocales suplentes<sup>99</sup>, teniéndose que celebrar el 3 de diciembre. En otro sentido, se invitó también a los afiliados a participar en la misa a celebrar en el altar de la virgen del Rosario de la iglesia de Santo Domingo celebrada en acción de gracias por “la feliz terminación del curso lectivo”.

Pero volviendo a la celebración de estas primeras elecciones, las actas de ATEP son confusas, puesto que en primer lugar, la convocatoria se realiza en un acta fechada con anterioridad a la que le precede en el libro, por lo que no es descartable que ésta hubiera sido redactada posteriormente a la fecha que en ella se consigna. Además, con fecha 16 de diciembre la presidencia informa de lo siguiente:

*“La elección de autoridades que debía celebrarse el 17 no tendrá lugar. Un llamado telefónico de la Policía comunicó que el comicio [sic.] no podía realizarse, por no haber la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y Previsión, pasado nota a la Policía en su oportunidad. Como la ATEP se adhirió a la cena en honor del Ministro de Trabajo y Previsión José María Freire, se acordó que la comisión que asistirá al acto, entrevistará al Delegado Regional Sr. Mariani, con el propósito de aclarar el punto, por cuanto no había comprobantes escritos y máxime con la noticia de que la Delegación dispuso que el comicio [sic.] se efectuara el 17”<sup>100</sup>*

Lamentablemente no hay constancia de este incidente en la prensa consultada pero, en cualquier caso, resulta llamativo observar que existe una modificación en las fechas, puesto que en la primera referencia a la renovación parcial de la CD decide que sea el día 3 de diciembre el elegido, y no existe posterior aclaración respecto de este día hasta el momento en que se suspenden las elecciones. La respuesta de la directiva ante

---

peronismo le dio al Estado y el pluralismo se tornó oficialmente ilegítimo”. En: De Riz, Liliana; Cavarozzi, Marcelo y Feldman, Jorge, *Concertación, estado y sindicatos en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, CEDES, 1987, p. 16.

<sup>98</sup> AA, acta n° 18, 11/10/1950. Esta cantidad permite inferir que el número de docentes que contribuyó con su donación debió superar los 2.000.

<sup>99</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 19, 16/10/1950.

<sup>100</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 25, 16/12/1950.



esta comunicación de la Policía fue la de solicitar explicaciones a la Fiscalía de Gobierno y a la Delegación Regional de Trabajo y Previsión. Del mismo modo, es manifiesta la influencia de la administración sobre el sindicato, puesto que también queda constancia de que había sido la Delegación de Trabajo y Previsión quien había decidido la fecha en que se debían haber celebrado las elecciones.

Finalmente, fue en los primeros días de 1951 que se recibió la autorización para llevar a cabo la entrevista con Eva Perón, que se realizó el 19 de enero y a la que asistieron presidenta, vicepresidenta, delegada titular y delegados suplentes. Para prepararla se pidieron informes al Consejo de Educación sobre el número de maestros provinciales (de instrucción y especialidades), el monto de la subvención nacional para educación, número de maestros normales, número de maestros nominales con cargos especiales y equiparación de cargos (directores, inspectores, etc.)<sup>101</sup>. Desafortunadamente para los intereses de la entidad, el Consejo no accedió a facilitar las informaciones requeridas. Por tanto, quedaba evidenciado que el vínculo entre las autoridades del gobierno educativo y la agremiación no era efectivo cuando se trataba de presentar aspiraciones ante una de las personalidades más influyentes del país. Con esta actitud, el Consejo evitaba que su gestión fuera puesta en tela de juicio, al tiempo que impedía que ATEP se cimentase como una sólida base desde la que el magisterio presentara sus demandas corporativas con un cierto nivel de autonomía.

Unos días antes del viaje a Buenos Aires, la CD tomó la decisión de que la presidenta de la entidad pudiera disponer de una cantidad de dinero para los gastos del desplazamiento. En este punto las fuentes son clarificadoras, y se puede comprobar que en el lugar donde debería aparecer la cifra aprobada, se encuentra un elocuente vacío, lo que indica que, en realidad, la presidenta tuvo libertad para disponer de cualquier cantidad de los fondos de la entidad. De nuevo, esta omisión da una idea certera acerca de la importancia con que se había encarado este encuentro, en detrimento de otras actividades que la agremiación debía desempeñar<sup>102</sup>. Además, la ausencia es tanto más llamativa si se tiene en cuenta que en la misma reunión se aprobó la solicitud de licencia temporal de la tesorera de la entidad durante 3 meses, quien según los estatutos era el miembro de la directiva que debía acompañar a la presidenta en todos los retiros de

---

<sup>101</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 28, 05/01/1951.

<sup>102</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 29, 15/01/1951.

efectivo de la cuenta de la entidad. Finalmente, al día siguiente fueron retirados 4.000 pesos con la sola firma de la presidenta y la autorización del subgerente del Banco de la Provincia, y se informó que el aporte del magisterio de la provincia a la Fundación Eva Perón ascendió, con los intereses generados, a la cantidad de 13.115'63 pesos<sup>103</sup>.

Aunque no se detallan informaciones sobre el contenido de la entrevista en las actas o en la prensa, se puede concluir que el resultado de la visita fue el reforzamiento de los vínculos trenzados entre ATEP y el oficialismo, ya que tras el encuentro se decidió apoyar y tomar parte en el mitin de mujeres del Partido Peronista Femenino (PPF)<sup>104</sup> organizado en Tucumán, con el fin de propiciar la reelección de Perón y también destinado a poner en valor la obra de Eva Perón<sup>105</sup>. Con esta intención la CD se entrevistó con Raquel Juárez, delegada del PPF en Tucumán, con el fin de poner a la agremiación “a sus órdenes para la organización del acto”<sup>106</sup>. Además, en esta reunión también se decidió presentar las preocupaciones de ATEP por las cuestiones de equiparación y escalafón del magisterio. Esta tentativa, aunque desatinada por la escasa influencia política de su interlocutora, muestra al menos un intento por redirigir a la entidad hacia la consecución de los objetivos que habían sido reclamados por las bases en la asamblea de junio del año anterior. Además, poco después, el 26 de abril de 1951, se decidió enviar mensajes telegráficos al presidente Perón y a Eva Perón, con el fin de

---

<sup>103</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 30, 16/01/1951.

<sup>104</sup> El Partido Peronista Femenino (en adelante PPF) fue creado a imagen y semejanza de su contraparte masculina, el día 26 de julio de 1949. Este colectivo funcionó más como movimiento que como partido, puesto que tuvo como objetivo mantenerse al margen de las características disputas del mundo político, prefiriéndose una acción social que potenciara los valores que se estimaban más reseñables en la mujer, es decir: “heroísmo, abnegación y lealtad”. El PPF tuvo como referente la figura de Eva Perón, quien parecía encarnar mejor que nadie los valores antes mencionados. No obstante, el PPF contribuyó a la incorporación masiva de la mujer en la estructura política peronista, si bien potenciada como un componente de menor relevancia. Colectivos profesionales de mujeres adquirieron un prestigio antes ausente, y un ejemplo de esto fueron las maestras, a las que se asociaba valores positivos como el de la maternidad. En suma, la experiencia del PPF, si bien no dejó de tener unos límites evidentes, significó la incorporación y visibilidad pública de las mujeres argentinas, incluyendo también a aquellas provenientes de sectores populares. Véanse: Barry, Carolina, “El Partido Peronista Femenino: la gestación política y legal”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, diciembre 2007. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/12382> (Consultado el 05 abril 2011); Bianchi, Susana y Sanchís, Norma *El partido peronista femenino*. Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1988, 2 tomos, pp. 205-205; Zink, Mirta; Di Liscia, María Herminia: “Gestar una ciudadanía política. La incorporación de las mujeres al Estado peronista, apoyos y resistencias (1945-1955)”, pp. 211-232, en: Bravo, María Celia; Gil Lozano, Fernanda; Pita, Valeria Silvina: *Historias de luchas, resistencias y representaciones. Mujeres en la Argentina, siglos XIX y XX*. EDUNT, Tucumán, 2008, pp. 211-227.

<sup>105</sup> Nos referimos a las elecciones realizadas el 11 de noviembre de 1951, en las que la fórmula electoral Perón-Quijano obtuvo el 62% de los votos, frente a la principal candidatura opositora de los radicales Balbín-Frondizi.

<sup>106</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 31, 20/04/1951.

interesarlos en la cuestión de la equiparación de sueldos, al tiempo que el afiliado Herrera Muñoz promovía comenzar un movimiento entre los maestros “por la conquista del escalafón”<sup>107</sup>.

La alianza con el Partido Peronista Femenino se reforzó a través de actos públicos que escenificaban la unión de intereses, como es el caso de la “celebración de un vino en honor” de las autoridades de dicho partido. Asimismo, con ocasión de este encuentro se anunció la primera actividad de carácter cultural promocionada por ATEP: la convocatoria de un concurso literario llamado “Reseñas Biográficas o semblanzas de tres tucumanos ilustres: Juan Bautista Alberdi<sup>108</sup>, Miguel Lillo<sup>109</sup> y Juan B. Terán<sup>110</sup>”, que finalmente fue suspendido por no recibir suficientes trabajos.

Atendiendo de nuevo a las acciones llevadas a cabo en el plano gremial, la siguiente actuación de la que se tiene constancia fue la de atender a la petición de Blanca Rosa Aragón, de la escuela Manuel Belgrano<sup>111</sup>, quien solicitó su traslado a la escuela José Federico Moreno n° 12<sup>112</sup> con el cargo de prosecretaria por razones de su mala salud, comprobada mediante certificados médicos. Ante esta petición, la CD acordó trabajar por el traslado ante las autoridades del Consejo General de Educación<sup>113</sup>.

Posteriormente, ATEP relanzó sus acciones propositivas mediante la presentación de un memorial al subsecretario de Educación y Cultura, donde se solicitaba la equiparación y el aumento de escalafón del magisterio<sup>114</sup>. Más adelante, se le volvió a cuestionar acerca de una decisión tomada por parte del Consejo General de Educación, desde donde se había publicado un decreto en virtud del cual se disponía la próxima

---

<sup>107</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 32, 26/04/1951.

<sup>108</sup> Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán en 1810, aunque pronto se radicó en Buenos Aires. Fue jurista, economista y político, y en ese ámbito destacó como uno de los inspiradores de la constitución argentina de 1853.

<sup>109</sup> Miguel Lillo nació en Tucumán en 1862. En 1914 recibió el doctorado *Honoris Causa* en la Universidad Nacional de la Plata, por su contribución al estudio de la flora y la fauna autóctonas. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Tucumán, institución a la que donó todos sus bienes.

<sup>110</sup> Juan Bautista Terán fue un abogado, educador e historiador tucumano, nacido en 1880. Participó en la fundación de la Universidad Nacional de Tucumán, siendo su primer rector. Además, fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Educación, a partir del golpe del 6 de septiembre de 1930. Con su llegada se reforzó la corriente espiritualista y se puso en práctica una concepción de la educación de carácter técnico-profesional.

<sup>111</sup> En Villa Quinteros, departamento de Monteros.

<sup>112</sup> Situada en la localidad de Monteros.

<sup>113</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 33, 27/05/1951.

<sup>114</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 34, 15/06/1951.

jubilación de un determinado número de maestros. Por su parte, y en contra de esta iniciativa, ATEP solicitó la restitución del cargo que desempeñaban los docentes hasta la terminación del año lectivo<sup>115</sup>, aunque esto no se consiguió con la totalidad de los afectados. Continuando con las solicitudes de los agremiados, también se decidió pasar una nota al jefe de Correos y Telecomunicaciones solicitando que el crédito que disfrutaban los maestros nacionales se hiciese extensivo al magisterio dependiente del gobierno provincial<sup>116</sup>.

A medida que se acercaba el final del año, ATEP reforzó su actividad gremial, contando con una mayor presencia ante las autoridades políticas de la provincia. Pareciera, incluso, que no se tuvo tiempo para levantar actas durante esos meses, puesto que es en el primer encuentro del año 1952 donde se recogen los actos realizados por la CD en los meses finales de 1951<sup>117</sup>.

La apuesta política de ATEP de cara a las elecciones de noviembre de ese año fue decidida. El día 5 de agosto, ATEP participó junto con el resto del magisterio de la provincia, en un acto a favor de la reelección de Perón. En esa ocasión, también se aprovechó para expresar su adhesión a la candidatura de Eva Perón como vicepresidenta<sup>118</sup>. Según se recoge en la documentación, se hicieron presentes más de 2.000 maestros “que expresaron su voluntad en el sentido de que la fórmula Perón-Eva Perón rija los destinos del país”<sup>119</sup>, aunque esta cifra no se ha podido constatar en otras fuentes. El acto fue presidido por las autoridades de la provincia y del Partido Peronista Femenino y, en representación de ATEP, intervino la delegada Emma Heredia Luna. Asistieron también al encuentro, en representación de otras instituciones docentes, Alba Pía de Tegnossini y Fernando Posa Reto<sup>120</sup>. Esta fue la primera ocasión en que coincidieron en una manifestación pública los representantes de los tres sectores de la docencia en la provincia, es decir, los docentes del sistema nacional, los profesores de centros de enseñanza católicos y los maestros provinciales.

---

<sup>115</sup> AA, CD, Libro I, acta nº 35, 02/08/1951.

<sup>116</sup> AA, CD, Libro I, acta nº 36, 05/09/1951.

<sup>117</sup> Aunque por un error son anotados en las actas como pertenecientes al año 1952.

<sup>118</sup> La fórmula electoral J.D. Perón-E. Duarte no llegó a término, puesto que la esposa del presidente renunció a ocupar este puesto el 31 de agosto de 1951, en lo que pasó a conocerse como el “día del renunciamiento histórico”.

<sup>119</sup> AA, CD, Libro I, acta nº 39, 07/08/1951.

<sup>120</sup> Diario *La Gaceta*, 06/08/1951, p. 4.

Teniendo como precedente el encuentro mencionado, la presidenta de ATEP se entrevistó con el presidente del Círculo del Magisterio, José Bustos, para pedirle que actuara en forma conjunta con la citada entidad y la Federación de Profesores y Maestros Católicos, a efectos de conseguir la unificación de sueldos con los del magisterio nacional. Esto fue el día 13 de septiembre, y para inaugurar esta flamante alianza, representantes de las tres entidades se dirigieron a la Legislatura provincial para dar comienzo con las gestiones pro-equiparación. A partir de ese momento las reuniones conjuntas se realizaron en el local del Círculo del Magisterio, participando de ellas toda la docencia provincial, siendo presididas por los máximos dirigentes de las tres instituciones. Ante esta decisión, Ercilia Páez manifestaba que “siempre fue el anhelo del magisterio fraternizar en común para convertir en realidades sus aspiraciones”<sup>121</sup>.

La concreción de esta política de colaboración es significativa puesto que ATEP, contando con pocos meses desde su fundación, comprendió que su capacidad de presionar en términos efectivos era fácilmente doblegable sin el apoyo del resto de sectores docentes de la provincia. Aunque existían diferencias significativas entre las tres asociaciones, es importante señalar que un sindicato creado bajo el amparo del oficialismo, como es el caso de ATEP, considera la posibilidad de aunar su capacidad reivindicativa con otras asociaciones. Esta alianza, de sesgo corporativo, constituye así la primera experiencia colaborativa de la docencia tucumana en beneficio de los intereses del colectivo al que representaban.

El aumento de intensidad en la actividad de la agremiación se entiende porque en esos días se comenzaba a plantear un debate parlamentario acerca de la modificación de la ley 2.000, destinada a mejorar el escalafón de los docentes provinciales. Es por este motivo que el 7 de septiembre, representantes de ATEP asistieron a la Cámara de Senadores para pedir la solidaridad del bloque oficialista al proyecto del senador Eustaquio Benítez y, en el mismo tenor, se acudió a la delegada del Partido Peronista Femenino. Tratando de hacer más audibles sus exigencias, el 19 de septiembre se envió un telegrama al gobernador de la provincia, que se encontraba en Buenos Aires, solicitándole el apoyo a dicho proyecto. Igualmente, se envió un telegrama a Eva Perón

---

<sup>121</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 40, 03/09/1952.

recordándole la conveniencia de la medida de la equiparación de los sueldos de los docentes.

El 24 de octubre se hizo un pedido al secretario de la Cámara de Senadores de Tucumán, José Espejo, en el que se le solicitó audiencia para que cien maestros lo entrevistaran, a lo que recibieron la respuesta de que la petición había sido trasladada al ministro de Educación, Méndez Pau Martín. En misma fecha se cursó nota a la interventora del Partido Peronista Femenino, Otilia Villa Mocul, solicitando una audiencia, al tiempo que se le pedía que intermediara para la obtención de pasajes a Buenos Aires, donde de nuevo se tenía la intención de entrevistarse con Eva Perón. En los primeros días de noviembre se nombró la comisión que formaría parte de este nuevo desplazamiento a la Capital Federal, y se solicitó la colaboración de los maestros con 30 pesos para costear los gastos<sup>122</sup>.

Por otro lado, en esos días continuaba la actuación conjunta entre las entidades docentes de la provincia. Una nueva iniciativa tuvo lugar el 19 de noviembre<sup>123</sup>, cuando el presidente del Círculo del Magisterio encabezó una reunión con el gobernador y los ministros del ejecutivo. José Bustos actuó en esa ocasión como portavoz de los intereses de los docentes dependientes del sistema nacional, a los que él mismo representaba, de la Federación de Maestros y Profesores Católicos, y de los docentes provinciales. De hecho, esta asociación de las tres entidades se llamó “Comisión Mixta Pro Equiparación”, y se reunieron periódicamente hasta la aprobación la mejora del escalafón. El encuentro con el máximo dirigente político de la provincia fue aprovechado para felicitarle por el proyecto de ley sobre el que se estaba trabajando en esos días, a lo que el gobernador Riera respondió que no discrepaba con ninguna gestión que tuviera por objetivo satisfacer sus aspiraciones. Además, se mostraba esperanzador cuando afirmaba que después de la mejora del escalafón que se contemplaba en el proyecto de ley, la equiparación de los docentes “vendrá de cajón”<sup>124</sup>. La reunión concluyó con el aviso de que la reforma del escalafón iba a suponer la inversión de 5 millones de pesos, por lo que se convino en mantener un compás de espera antes de afrontar la equiparación.

---

<sup>122</sup> Cantidad significativa máxime teniendo en cuenta que el salario inicial de un docente sin antigüedad se situaba en los 200 pesos mensuales.

<sup>123</sup> Diario *La Gaceta*, 20/11/1951, p. 4.

<sup>124</sup> *Ibidem*.

ATEP continuaba con su intención de reunirse con el presidente Perón. Sin embargo, dos días después de la entrevista con el gobernador, se confirmó que el pedido de audiencia para el presidente y su esposa había sido transferido a la gobernación de la provincia. Sin embargo, el 25 de noviembre se envió una nota a Nicolás Heredia (quien efectuaba las gestiones en Buenos Aires) manifestándole que en vista de la nota anterior se resolvía dejar pendientes las gestiones iniciadas, al menos hasta el inicio del próximo período escolar.

Debido a lo frustrado del propósito, el 27 de noviembre se citó a los delegados por escuelas de la ciudad y campaña para devolverles el dinero que se les había solicitado. En esa misma fecha se produjo la audiencia que tuvieron 800 maestras con el gobernador de la provincia, demandando la equiparación salarial, quien manifestó que por el momento “este justo anhelo del magisterio no podrá ser satisfecho”, asegurando que no escatimará esfuerzos para dar una solución al mismo, y que si no era resuelto por él, lo sería por un futuro gobernante. La dinámica anunciada no cambiaba, y la representación política no hacía sino postergar la solución de las demandas docentes, sin fijar compromisos, pero evitando el posible conflicto al reconocer la justicia de sus peticiones.

En cualquier caso, el compromiso político de la entidad con el peronismo se volvía a demostrar cuando a día 28 de noviembre, y haciendo referencia a algunos altercados que se vivieron en la provincia con motivo de las elecciones presidenciales, se daba cuenta de que “dada la frustrada revolución, el magisterio en pleno concurre a la Plaza Independencia en señal de apoyo hacia las altas autoridades del país y como repudio a los elementos que tratan de perturbar el orden institucional de la República”<sup>125</sup>.

La última actividad de esta CD consistió en ofrecer un homenaje al ex senador provincial Eustaquio Benítez, “en retribución de atenciones por sus gestiones a favor de nuestro gremio”<sup>126</sup>. Tal acto se convocó para el 18 de mayo de 1952 y se invitó también al Círculo del Magisterio y a la Federación de Profesores Católicos<sup>127</sup>. Este homenaje,

---

<sup>125</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 37, 17/03/1952. Véase también: Diario *La Gaceta*, 29/11/1952, p. 4: “Docentes peronistas celebrarán el triunfo obtenido en las urnas”.

<sup>126</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 44, 26/04/1952.

<sup>127</sup> Diario *La Gaceta*, 19/05/1952, p. 3.

que incluyó también la celebración de una misa en la iglesia de la Merced<sup>128</sup>, se produjo a los pocos días de aprobada la ley 2.477 por la Cámara de Diputados de la legislatura tucumana<sup>129</sup>. El proyecto de Benítez contemplaba un aumento de salario de los docentes, pasando de los 200 pesos mensuales para maestros de ingreso reciente a los 550 propuestos para los maestros de enseñanza común.

Benítez, por su parte, consideró excesivo el homenaje puesto que, como él mismo expresó, “su gestión no había tenido otro propósito que el de hacer justicia a la labor cultural que el magisterio cumple en beneficio de la sociedad”<sup>130</sup>. Sin embargo, reconocía que “si bien sus gestiones no habían alcanzado el éxito anhelado, había abierto el camino para futuras conquistas que indudablemente serán logradas”<sup>131</sup>. En esta victoria relativa aparecían, de nuevo, los valores del docente como agente civilizatorio que ayuda a la mejora del conjunto social, en detrimento de la consideración del maestro en tanto que trabajador. Como se demostrará posteriormente, durante el periodo peronista, no se advertirán cuestionamientos de estas concepciones conservadoras de la docencia por parte de ATEP<sup>132</sup>.

### **3.4. Renovación de la dirigencia y continuidad en las estrategias**

Los estatutos marcaban la celebración de las elecciones transcurridos dos años desde el comienzo del mandato, así que en febrero de 1952 se pretendió entregar la entidad a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y previsión<sup>133</sup>, como

---

<sup>128</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 46, 19/05/1952.

<sup>129</sup> ALT, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, abril 1958, p. 517.

<sup>130</sup> Diario *La Gaceta*, 19/05/1951, p. 3.

<sup>131</sup> *Ibidem*.

<sup>132</sup> La cuestión de los valores tradicionales de la enseñanza estaba presente también en el ámbito político. El gobernador Carlos Domínguez, en abril de 1947, expresaba cuáles debían ser los principios que rigieran la enseñanza, instalado el nuevo régimen: “racionalizar y simplificar los programas de estudio, implantar la orientación práctica de la enseñanza e inculcar en toda forma el sentimiento vigoroso de la patria y del honor, son medidas fundamentales que posibilitarán la realización de la nueva política pedagógica, en que se encuentra empeñado el Poder Ejecutivo[...]La tarea del maestro no debe abarcar solamente el limitado campo de la instrucción en sí, sino que debe llegar al niño, hasta su más hondo sentido espiritual, orientando sus vocaciones, estimulando sus virtudes y despertando en él las cualidades de moral y corrección[...]colaborando estrechamente con los padres en la crianza familiar”. ALT, Diario de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, abril, 1947, p. 67. Cfr.: Barbieri de Guardia, Marta, “Políticas oficiales, educación y género: el Instituto Técnico y la Escuela Sarmiento de Tucumán hacia los años del primer peronismo”, Bonano, Luis Marcos, *Estudios de historia social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX*, Vol. II. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2001, p. 20.

<sup>133</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 41, 27/02/1952.



requisito previo a la celebración de los comicios. Sin embargo, para esas fechas, en la CD no participaban regularmente todos los miembros que oficialmente pertenecían, lo que significaba que estatutariamente no se podía cumplir con la premisa de llamar a elecciones con la aprobación de la mayoría de la directiva. A la semana siguiente, y teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el delegado regional de Trabajo y Previsión, Aparicio Vildoza, ante el problema planteado por ATEP, referente a su situación y actuación de minoría, se resolvió hacer memoria y balance general de la entidad para entregarla, “haciendo un compás de espera hasta ver convocado con éxito el esfuerzo que será la máxima conquista del magisterio provincial y muy especialmente de los miembros de la CD de ATEP, que fue su constante bregar”<sup>134</sup>. En este sentido, el delegado felicitó a la CD por su actuación y se comunicó que los bienes de ATEP quedarían en caución hasta la celebración de las nuevas elecciones.

Finalmente fue el 15 de abril de 1952, incluso no encontrándose con la mayoría legal necesaria para el llamado a elecciones, se resolvió proceder a la entrega de la entidad, con todo su patrimonio, a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y Previsión<sup>135</sup>. La fecha elegida coincidía con el cumplimiento del “anhelo del magisterio”, es decir, la aprobación del proyecto de ley del senador Benítez<sup>136</sup>.

Las elecciones no tuvieron lugar sino hasta el 8 de noviembre de 1952, lo que significó que, en la práctica, la actividad de la agremiación estuvo suspendida durante más de seis meses. A estas elecciones concurrieron tres listas: la “Justicialista Pro-Equiparación”, “Renovación y Acción Gremial” y la lista “Azul y Blanca”. Se proclamó vencedora la lista “Azul y Blanca”, con 364 votos, sobre el total emitido de 854. La lista “Justicialista Pro-Equiparación” alcanzó los 270 votos, que destacaba con una mayor incidencia en el departamento capital, donde sobrepasó en 5 votos a la lista ganadora mientras que sólo contó con 13 votos en el departamento de Monteros, frente a los 127

---

<sup>134</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 42, 03/03/1952.

<sup>135</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 38, 15/04/1952.

<sup>136</sup> ALT, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, abril, 1952, p. 796. El proyecto de ley 2.477 fue preparado a iniciativa del poder ejecutivo provincial. Sin embargo, para este texto se tuvo en cuenta la ponencia realizada con anterioridad por el senador Eustaquio Benítez, quien la presentó el 25 de septiembre de 1951 a la Cámara de Senadores. En esta ley se contempló el cambio en las remuneraciones percibidas en función del escalafón del magisterio provincial, alcanzando el maestro de enseñanza común de nuevo ingreso la suma de 550 pesos mensuales. Del mismo modo, se incluía una compensación especial por ubicación, en caso de que los docentes tuvieran que desplazarse a sus puestos de trabajo en medios que no fueran ni las líneas regulares de autobuses ni los ferrocarriles, donde ya existían descuentos para los trabajadores públicos.

de la “Azul y Blanca”. Además, cabe señalar que formaba parte de esta lista “Justicialista Pro-Equiparación” Sixto Miguel Paz, quien unos meses después protagonizará, junto con otros afiliados, un desencuentro con la directiva, pero que, en la década de los sesenta y setenta, formará parte de la CD de ATEP, ejerciendo como representante de la entidad tucumana en las reuniones de colectivos a nivel nacional.

La tercera lista, “Renovación y Acción gremial”, alcanzó los 220 votos, siendo los departamentos de Monteros y Concepción, con 39 y 40 votos respectivamente, los que mayoritariamente apoyaron a esta formación<sup>137</sup>.

El resultante de esta elección conformó la siguiente CD: Presidente; Virgilio Machado, Vicepresidenta; María Mercedes López de Pérez, Secretaria; Ana Isabel Loyola Córdoba, Pro Secretaria; Delia Bitor de Hause, Tesorera; María Teresa Agüero, Pro Tesorera; Elisa Solana de Fontana, Vocales; María Luisa Moraleda; Ana de Méndez; Blanca Fernández, Delegada Titular; Benita Araujo.

En la primera reunión de la nueva CD se llegó al acuerdo de que todos los libros de caja, recibos y comprobantes fueran entregados a la tesorera, con la intención de que el contador los revisase en un “análisis minucioso”. El balance sería distribuido por todas las escuelas con el objeto de liquidar responsabilidades y que los agremiados conocieran el estado de las finanzas de la institución<sup>138</sup>. Curiosamente, en esta reunión se conocía la renuncia del hasta ese momento contable de la entidad, Arnaldo Zapata, quien reaparecerá unos meses más tarde. Otra de las decisiones que se tomó en esta reunión fue la de encargar a la delegada Benita Araujo que solicitara al gobernador de la provincia la cesión del local que ocupaba el Instituto de Previsión Social, para ser convertida en sede de la agremiación y Casa del Maestro.

La nueva directiva trató de impulsar la asociación de los docentes y, en un intento por demostrar que la pertenencia era una cuestión verdaderamente relevante, se aprobó la creación de un carné de afiliado que sirviera como documento de acreditación de identidad en futuras elecciones. Asimismo, se designó una comisión destinada a recabar

---

<sup>137</sup> El detalle de los resultados es el siguiente: Lista “Azul y Blanca”: Capital; 227 votos, Tafí Viejo; 58, Monteros; 127, Concepción; 18, Villa Alberdi; 19. Total: 364 votos. Lista “Justicialista Pro-Equiparación”: Capital; 232 votos, Tafí Viejo; 5, Monteros; 13, Concepción; 8, Villa Alberdi; 12. Total: 270 votos. Lista “Renovación y Acción Gremial”: Capital; 110 votos, Tafí Viejo; 10, Monteros; 39, Concepción; 40, Villa Alberdi; 21. Total: 220 votos. AA, CD, Libro I, acta n° 46, 10/11/1952.

<sup>138</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 47, 19/11/1952.

ante establecimientos comerciales de la provincia, rebajas sobre las compras de artículos por parte de los agremiados<sup>139</sup>, con la intención de demostrar que la entidad trabajaba efectivamente por la mejora de las condiciones de vida de sus militantes.

La CD se presentó ante los afiliados mediante la celebración de una asamblea, el día 30 de noviembre. En este acto, la encargada de llevar la palabra fue la delegada Benita Araujo, que comenzaba a adquirir protagonismo en la directiva. En su discurso, además de agradecer a quienes habían depositado el voto por la lista “Azul y Blanca”, destacó que en ese acto se encontraban reunidos en “fraternal camaradería maestros y maestros de la ciudad y la campaña, hermanados en un sincero anhelo de solidaridad y defensa de comunes intereses”<sup>140</sup>.

En su discurso se destacaba que la principal voluntad del magisterio era la equiparación de los sueldos provinciales con los de los docentes nacionales y que, además, ésta era una petición que venía avalada por el propio presidente Perón. Araujo resumía diciendo: “no puede negarse, ni desconocerse el derecho de percibir igual remuneración para el desempeño de funciones idénticas”<sup>141</sup>. Hizo también mención a que este reclamo era impostergable, debido al aumento del costo de la vida, y que ante esta coyuntura económica, “los gremios obreros y los empleados de la producción, de la industria y del consumo” ya habían visto mejorada su situación<sup>142</sup>.

La declaración de intenciones continuaba con el compromiso de impedir que “surjan beneficios personales, siendo que todos aspiramos al bien común”. Así, los propósitos de la nueva directiva de ATEP quedaban substanciados en los siguientes puntos: trámites para jubilaciones, cooperativa de consumo, colonias de vacaciones, rebajas de pasajes, bolsa de trabajo y casa de tránsito para maestros.

---

<sup>139</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 48, 21/11/1952.

<sup>140</sup> AA, CD, Libro I, acta de Asamblea General, 30/11/1952.

<sup>141</sup> *Ibidem*.

<sup>142</sup> Esta mención resulta interesante por cuanto hace referencia a otros colectivos de trabajadores que sí habían visto mejorada sus salarios reales. Para el caso tucumano, parece ineludible prestar atención a los obreros azucareros, quienes vieron aumentados sus salarios reales en un 62% entre los años 1945-1949. La instrumentalización de los obreros que el peronismo puso en práctica, para conseguir apoyo masivo a su proyecto político, es una de las claves para interpretar estas notables diferencias. Sin embargo, los docentes, carentes de influencia sobre la marcha de los sistemas productivos, no recibieron esas atenciones. Sobre los salarios de los obreros azucareros y los mecanismos empleados para su sostenimiento, véase: Rubinstein, Gustavo, “Evolución de los salarios de los obreros azucareros durante el primer peronismo (1946-1949)”, 5° Congreso Nacional de estudios del trabajo, ASET, 2001. Disponible en: <http://www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/RUBINSTEIN.PDF> (Consultado el 13 de abril de 2011)

El discurso de Araujo concluía exhortando al magisterio a comprometerse “para la obtención de Justicia” sobre estos derechos, y emplazando a los afiliados a juzgar la tarea ejercida por la CD al final de su mandato<sup>143</sup>.

#### **3.4.1. La concreción de algunos resultados**

Uno de los elementos que primero llaman la atención, y sobre el que se regresará más adelante, es que en este nuevo período se pone de manifiesto el interés por comenzar a concertar la unión de las diferentes agrupaciones que daban cabida a los docentes provinciales en todo el país. De este modo, en una reunión celebrada el 4 de diciembre se aprobó la autorización a los miembros de la CD para que “en vacaciones y fuera de la provincia conversen y cambien ideas sobre la formación de la Confederación de Maestros Provinciales de toda la República”<sup>144</sup>. No obstante, este acuerdo sólo funcionó como una declaración de intenciones que, aunque muestra un cambio de tendencia en la institución, no se concretó hasta algún tiempo después.

Otro de los aspectos que resultan interesantes para conocer la actuación de la CD en este período, es el suceso protagonizado por la delegada Benita Araujo. Al parecer, se trató de la primera muestra de una actuación irregular fue cuando se le pidieron los comprobantes de los gastos destinados a un refrigerio servido tras la asamblea antes mencionada. Dichos justificantes, que no fueron entregados en ese momento, debían haber sido entregados en la siguiente reunión, como justificante del gasto dispuesto con los escasos fondos de ATEP, pero tampoco fue este el caso.

La actividad gremial se cerró ese año con la redacción de un memorial que se elevó al gobernador, en el que se destacaban las necesidades del gremio y se contemplaba la adopción de medidas como la modificación del sistema de pago para maestros de la campaña, la confirmación de las maestras interinas y la implantación de la Educación Física en las escuelas de manualidades<sup>145</sup>. Del mismo modo, ATEP tuvo

---

<sup>143</sup> AA, acta de Asamblea General, Libro I, acta sn., 30/11/1952.

<sup>144</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 49, 04/12/1952.

<sup>145</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 50, 16/12/1952.

ocasión de reafirmar su filiación política cuando se resolvió la adhesión al Segundo Plan Quinquenal<sup>146</sup>.

Como ya se ha señalado, las actividades de Araujo fueron protagonistas en estos primeros meses de 1953. Ella fue la encargada de realizar los trámites para conseguir la casa de descanso para docentes. Con respecto a esta iniciativa, el gobernador dispuso la cesión de una casa en la localidad de Yerba Buena, en el entonces departamento de Taíí Viejo. Esa casa sería de uso provisional porque el gobernador hacía saber su intención de conseguir un local definitivo en dicha localidad. En relación al régimen que regiría las estancias docentes de los afiliados, se resolvió fijar un precio de 16 pesos por día para los maestros que fueran a pasar allí sus días de descanso<sup>147</sup>. En la casa<sup>148</sup>, que fue inaugurada el 24 de enero de 1953, se contaba con 30 plazas y se convino en permitir una estancia máxima de 15 días<sup>149</sup>. Para que la disponibilidad del hogar de descanso fuera de público conocimiento, se decidió dar publicidad a través de la prensa del inicio de las actividades. Finalmente, se convino en que para hacer las reservas, tanto los maestros como los jubilados, debían presentar documento de identidad y dar en adelanto una cantidad mínima de 50 pesos<sup>150</sup>.

La inauguración de la Casa de Descanso conllevó gastos relativamente importantes para la entidad, destinándose a la inauguración 1.224,4 pesos y para la

---

<sup>146</sup> Este segundo programa de reformas de socioeconómicas impulsado por el gobierno tenía unos fines bien definidos cuando del papel de los establecimientos escolares se trataba. En un documento redactado para dar instrucciones a la organización de cooperativas escolares, publicado por el ministerio de Educación, se expresaba de esta manera: "...los establecimientos de enseñanza tienen obligación por su carácter de unidades básicas difusoras del Segundo Plan Quinquenal, de suministrar una información viva de sus postulados no sólo a sus alumnos sino al pueblo en general y en particular al conglomerado social dentro del cual actúa; Que la actuación de los alumnos en la organización, dirección y funcionamiento de una cooperativa, a la vez que desarrolla en ellos los hábitos de solidaridad, de tolerancia y de sana convivencia social, y que contribuye a robustecer su carácter y el sentido de responsabilidad, los inicia en una actividad que mañana realizarán fuera de la escuela, cualquiera sea el oficio, profesión u ocupación a que se dediquen; Que el gobierno de la Nación ha propiciado y propicia en toda forma la organización de cooperativas como medio de contribuir al bienestar del pueblo; Que en los establecimientos de enseñanza las cooperativas tendrán por objeto: a) adquirir o producir por cuenta de la sociedad y distribuir entre los socios el material necesario para los estudios y la enseñanza; b) fomentar el espíritu de cooperación, ahorro y ayuda mutua; Que el hecho de auspiciar la multiplicación de este tipo de sociedades no entraña la obligación e constituir las cuando no se cuenta con el clima propicio o cuando se dude del buen éxito por los mil factores que pueden incidir sobre ellas, siendo preferible no crear la cooperativa antes que someterla a un probable fracaso...". En: Ministerio de Educación de la Nación, *Organización de cooperativas escolares*. Buenos Aires, 1954, p. 5.

<sup>147</sup> Incluyendo el desayuno, almuerzo, té, cena y un viaje a los cercanos cerros de San Javier.

<sup>148</sup> Para el mantenimiento de la casa se propició la contratación de personal: una ecónoma; con sueldo de 350 pesos, una cocinera; con 300 pesos, y dos muchachas de servicio; con 120 pesos cada una.

<sup>149</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 51, 09/01/1953.

<sup>150</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 52, 19/01/1953.

adquisición de vajilla otros 3.400 pesos. Este desembolso fue puesto en consideración de la directiva “teniendo en cuenta que toda obra de aliento debe afrontar dificultades en sus comienzos por la indiferencia y la desconfianza con que por lo general los gremios acogen esta clase de iniciativas”<sup>151</sup>, por lo que se resolvió reconocer los gastos efectuados. Sin embargo, Agüero y Strasser consideraban que ante la magnitud de los gastos, este presupuesto debía haber sido puesto a consideración de una asamblea extraordinaria. La opinión de estas dirigentes no parecía desencaminada, puesto que fruto de estas inversiones, la agremiación entró en déficit. Por otro lado, resulta ilustrativo para reparar en la precariedad material de la agremiación el hecho de que las fotografías del presidente Perón, su esposa y el gobernador fueran prestadas por la inspectora general de Educación, para el día de la inauguración de dicha casa, fotografías que, además, fueron posteriormente devueltas<sup>152</sup>.

Las posiciones de Agüero y Strasser evidenciaban un problema que ya había aparecido en la agremiación, la participación directa de las bases en la toma de decisiones que afectaran al patrimonio de la entidad<sup>153</sup>. Sin embargo, como ya había ocurrido anteriormente, la mayoría de la CD entendía que tenía las facultades para decidir correr con los gastos que fueran necesarios, siempre y cuando se entendiera que

---

<sup>151</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 53, 03/02/1953.

<sup>152</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 65, 02/06/1953.

<sup>153</sup> Este problema de legitimidad decisoria de la CD entronca con la cuestión de la representación de las bases en el proceso de elección de las direcciones sindicales. La participación de las bases a la hora de elegir a sus directivas es un factor clave para determinar la existencia de una verdadera democracia sindical. En la mayoría de elecciones celebradas en ATEP durante el período peronista se dio la participación de más de una lista, lo que implica que, al menos formalmente, existía la posibilidad de que la dirigencia fuera ocupada por un sector disidente de la base. Sin embargo, hasta después de haber accedido a la cúpula directiva la lista de Francisco I. Arancibia, no se puede comprobar que desde la dirigencia se tome en consideración la opinión de las bases. Al contrario, en estos primeros años de vida de ATEP, se tienen registros de los mecanismos de exclusión ejercidos contra los sectores disidentes y, en este sentido, debemos concluir que los valores democráticos del sindicato eran ciertamente escasos, cuando no inexistentes. Esta afirmación no sólo se mantiene por la articulación de la dirigencia de esos mecanismos de exclusión, sino que como señala J.C. Torre: “la flexibilidad que advertimos entre las tácticas sindicales y la situación social y económica de los gremios puede ser, en este sentido, mejor interpretado cuando es vista como el resultado de la influencia, por un lado, de la independencia con que actúan los dirigentes obreros frente a sus propias bases, y por otro, de la autonomía institucional del sindicato”. Para el caso de ATEP, el grado de dependencia institucional es máximo, puesto que el gremio de los docentes públicos encuentra a su patronal en el Estado, el que, a su vez, promocionó la creación del sindicato que los reúne. Es por esta razón que tan sólo con la desarticulación institucional del régimen que los amparó, pueda considerarse que existe en ATEP una dinámica interna democrática. Esto mismo, por otro lado, sólo se entiende como una continuación efectiva de las dinámicas electorales impuestas por el peronismo, que teniendo intenciones más formales que reales, creó los hábitos necesarios para que, cuando se tuvo oportunidad, se llevara a cabo esta participación. Véase: Torre, Juan Carlos, *El proceso político interno de los sindicatos en Argentina*. Instituto Torcuato di Tella- CIS, Buenos Aires, 1974, pp. 18-19.

eran por el bien de la agremiación, fueran estos un viaje a Buenos Aires o la inauguración de la Casa de Descanso.

Unas semanas después de la inauguración, se detectó una deuda que ascendía a los 4203,10 pesos. El descuadre en el balance económico fue encontrado después de que Carlos A. Martínez, nuevo empleado contable de la entidad, examinara las cuentas de la agremiación y dedujera la presunción de un delito por parte del anterior empleado contable de la entidad, Arnaldo Dante Zapata. El desfalco se comprobó tras la pérdida de una nota presentada al Banco de la Provincia, donde la tesorera de ATEP, Agüero, pedía un estado de cuentas. A partir de este suceso, el Banco comprobó la documentación relativa a la cuenta bancaria de ATEP y detectó la adulteración de cheques y la falsificación de la firma de la anterior titular.

Arnaldo D. Zapata, que había sido contratado a principios de junio de 1950<sup>154</sup>, y después de ser llamado a comparecer ante los miembros de la CD, confirmó su culpabilidad en los hechos, tras lo que se decidió “elevar la denuncia correspondiente al jefe de Policía, César Augusto Sosa, adjuntando informe elevado por el contador”<sup>155</sup>. Sin embargo, ésta no fue la única decisión tomada, puesto que en la misma reunión se censuró a la delegada Araujo, por haberse excedido en sus funciones habiendo presentado, sin conocimiento de la CD, una denuncia contra Zapata el día 14 de febrero. Por su parte, los familiares del acusado confesaron intentaron llegar a un acuerdo con ATEP, ofreciéndose a reponer la suma indicada. Sin embargo, la CD rechazó esta posibilidad puesto que, según la nota emitida por el Banco de la Provincia, la cifra sustraída podía alcanzar los 12.000 pesos<sup>156</sup>.

Mientras se trataba la solución del caso Zapata, la Casa de Descanso seguía dando problemas en su gestión, puesto que desde diciembre del año anterior se esperaba la comparecencia de Araujo para explicar el funcionamiento y justificar los gastos que allí se estaban destinando desde la fecha de su inauguración.

Imprevisiblemente, el inicio del curso escolar sorprendió a ATEP con la muerte de su presidente, Virgilio Monserrat Machado, que falleció el 13 de marzo de 1953. La presidencia fue ocupada entonces por Mercedes López de Pérez, vicepresidenta hasta

---

<sup>154</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 16, 09/06/1950.

<sup>155</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 55, 18/02/1953.

<sup>156</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 56, 27/02/1953.

ese momento. Al cargo de vicepresidenta accedió, por su parte, Ana Di Marzo de Méndez. El mismo día del suceso, y como homenaje al fallecido presidente, la CD puso en conocimiento de sus afiliados la siguiente nota:

*“Atento al fallecimiento del Presidente de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, don Virgilio M. Machado, cuyo deceso significa para esta entidad una sensible como sentida pérdida y considerando que el extinto, a través de su larga actuación como educador supo poner al servicio de la docencia sus mayores esfuerzos, entusiasmo y patriotismo, honrando de esa forma al gremio: que aparte de estos antecedentes que ponen de manifiesto su personalidad, desplegó una entusiasta acción sindical mientras ejerció su presidencia”*<sup>157</sup>

Después del imperativo relevo en la presidencia, reapareció de nuevo en escena la delegada Benita Araujo, quien presentó una denuncia contra Ana Di Marzo de Méndez, por haber incurrido en una violación de los estatutos de la entidad, al haber ocupado temporalmente la presidencia con motivo de la ausencia de Mercedes López. El enfrentamiento parece tratarse de una cuestión personal, puesto que en ausencia del presidente, la entonces vicepresidenta Mercedes López, dejó a Araujo a cargo de la presidencia interina, a día 14 de febrero. Precisamente el mismo día que Araujo creyó conveniente presentar a título individual la demanda contra Zapata. La posterior actuación de la CD consistió en recurrir al delegado regional de Trabajo y Previsión, quien estimó que la denuncia de Araujo no era procedente, invitándosela a retirarla<sup>158</sup>. Esta iniciativa de Araujo no fue la única que se le recriminó, puesto que en una inspección a la Casa de Descanso del Docente, de cuyo funcionamiento ella estaba encargada, se dijo haber descubierto irregularidades en la marcha del establecimiento<sup>159</sup>. Ante estas acusaciones, Araujo fue citada, pero decidió no comparecer. Las exigencias de la CD estaban dirigidas a conocer con exactitud la gestión de los aportes económicos que el gobierno provincial había destinado a la Casa del Docente, cuyas cantidades no habían sido conocidas por el resto de la dirigencia, como tampoco se había presentado justificante con los gastos consignados. Estas actuaciones, sumadas a la iniciativa

---

<sup>157</sup> AA, CD, Libro I, acta nº 57, 13/03/1953.

<sup>158</sup> AA, CD, Libro I, acta nº 58, 26/03/1953

<sup>159</sup> Lo cierto es que en la documentación no se mencionan cuáles son esas irregularidades, más allá de la incomparecencia de la delegada ante la solicitud de clarificar la contabilidad relativa a la Casa del Docente.



personal de denunciar al margen de la CD el caso de Zapata, fueron decisivas para su expulsión. La sanción fue dictada en los siguientes términos:

*“... la mencionada delegada llevó a la Secretaría de Trabajo y Previsión una denuncia tendenciosa en contra de la comisión directiva que le fue rechazada, lo que significa una insubordinación hacia las resoluciones de la misma, a la par que un agravio y desconsideración a sus miembros; Que por los antecedentes, todos ellos documentados, demuestra que la señorita Araujo adopta actitudes que crean conflictos internos con peligro de quebrantar la buena marcha de la Agremiación y hacen peligrar su estabilidad.[...]La CD resuelve: suspender por tiempo indeterminado a la señorita Araujo hasta tanto la Asamblea decida sobre su separación definitiva; comunicar a la interesada y a la Secretaría de Trabajo y Previsión sobre la medida tomada”<sup>160</sup>*

#### **3.4.2. Primeras tentativas de integración oficialista**

Una vez tomada la decisión de expulsar a Benita Araujo, el alineamiento junto con otras organizaciones representantes de colectivos docentes aparece como una de las principales preocupaciones de ATEP. Las gestiones comenzaron en abril de 1953, cuando tuvo lugar un primer acercamiento con Óscar Sarrulle<sup>161</sup>, quien era el delegado en Tucumán de la Agremiación del Docente Argentino<sup>162</sup>. En ese encuentro, ATEP se

---

<sup>160</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 59, 29/03/1953.

<sup>161</sup> Óscar Emilio Sarrulle estuvo presente en la política tucumana durante décadas, y llegó a ocupar el puesto de gobernador en febrero de 1971, sucediendo a Carlos Imbaud. Fue nombrado bajo el mandato del presidente de facto de Levingston y confirmado en su cargo cuando a los pocos días la presidencia pasó a ser ocupada por Alejandro Agustín Lanusse. Militante peronista, fue parte del colectivo docente, al tiempo que cultivaba otras aficiones. Un ejemplo coetáneo es la publicación de un canto a Tucumán, publicado en el boletín de la Sociedad Sarmiento. Así glosaba Sarrulle, en diciembre de 1951, las bondades de Tucumán: “Y ahora, en esta misma hora y en este mismo momento, estará coqueta y recogida entre la policromía variante de sus letreros luminosos, el ir y venir de sus gentes, el murmullo sonoro y bullanguero de la vida que pasa, con la montaña a su frente, imponente y magnífica, con el misterio de su cielo y el secreto encantamiento de sus noches, en que el azahar preña el ambiente con la tibieza de un perfume y otra vez los lapachos floreciendo y elevando al hombre por encima de lo mezquino, de lo pequeño y de lo transitorio, paisaje e historia presentes en la arquitectura [sic.] espiritual, con sustancias vitales de su marcha interior. Así es y así será Tucumán, la de siempre, la de las libertades, al de la poesía y la belleza: reserva para todos los momentos de la argentinidad”.

<sup>162</sup> En adelante, ADA. La Agremiación del Docente Argentino fue la entidad sindical docente impulsada por el peronismo. La ADA estuvo adherida a la CGT, siendo su presidente Rafael Oronás y su secretario general Carmelo Alfano. Unos meses antes del primer contacto de ATEP con esta entidad, la ADA se manifestaba en los siguientes términos con respecto al segundo Plan Quinquenal recientemente aprobado por Perón: “Se ha hablado mucho del valor e importancia de la actividad docente y del espíritu de

interesó por la incorporación de la entidad de los docentes tucumanos a la ADA, advirtiéndoles que la integración en esta organización debería hacerse por intermedio de la CGT<sup>163</sup>. En este mismo sentido, el delegado de la CGT en Tucumán fue entrevistado por otros dos miembros de ATEP, a quienes informaron que la única manera de adherirse a la central obrera era, precisamente, por medio de la ADA o bien integrándose en la agrupación del personal civil de la Nación. Más allá de la falta de claridad en el procedimiento a seguir, lo cierto es que en la posterior negociación con Sarulle, los representantes de ATEP hicieron hincapié en que la incorporación a la entidad nacional no debería implicar la disolución de la vigente directiva provincial, a lo que Sarulle respondió pidiendo autorización para enviar una nota a la central de la ADA, en la que se ponían de manifiesto las intenciones de ATEP. Por su parte, la dirección de ADA resolvió aceptar esta propuesta<sup>164</sup>, y quedaba así allanado el camino para la incorporación al organismo nacional del sindicalismo docente peronista<sup>165</sup>. Con este precedente, inesperadamente, y como si el éxito de estas negociaciones hubiera reforzado la confianza de los dirigentes, ese mismo día se decidió que una parte de la CD se dirigiera al gobernador para interesarse por la utilización de la partida presupuestaria de 45.000 pesos que estaba destinada para cubrir los gastos de la Casa del Docente, puesto que hasta ese momento el gobierno provincial no había dispuesto cantidad alguna para tales efectos.

La nueva directiva no descuidó los aspectos formales que la institución requería y, de hecho, se mostró preocupación por ampliar los mecanismos internos de representación de los afiliados al interior de la entidad. Es por esto que en junio de 1953

---

sacrificio que casi siempre alienta en esos ardientes apóstoles. [...] Los docentes argentinos ven el segundo Plan Quinquenal como un hermoso devenir para la educación y cultura del país; prosiguiendo una etapa que comenzó con el Primer Plan Quinquenal, de revolución y evolución total de la enseñanza en los conceptos básicos y culturales de la misma; llevando lo que fuera una promesa del general Perón al campo de las realizaciones efectivas que la nacionalidad toda esperaba de un gobierno que tiene a su frente a un Conductor, que demuestra diariamente una disciplina y una laboriosidad, dignas de un hombre que echó sobre sus espaldas la responsabilidad inmensa y trascendental de organizar y estructurar esta hermosa, nueva y pujante Argentina que es la Argentina de Perón y Eva Perón. [...] El Segundo Plan Quinquenal conduce a la enseñanza hacia el derrotero de hacerla profundamente social, nacional y formativa; pues como lo dice el Líder era individualista, neutra y enciclopedista y estaba de espaldas a la realidad nacional y mirando hacia afuera”. En: “El plan quinquenal y nosotros los docentes”, *Revista de la Agrupación del Docente Argentino*, n° 20, febrero 1953, p. 12.

<sup>163</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 60, 07/04/1953.

<sup>164</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 61, 16/04/1953.

<sup>165</sup> En octubre de ese año es cuando se procede a confeccionar las listas de afiliación demandas para solicitar la solicitud de ingreso a la CGT. AA, CD, Libro II, acta n° 69, 02/10/1953.

se solicitó el nombramiento de delegadas escolares en todos los centros educativos, con el objeto de que no quedara ningún establecimiento escolar sin representación en las asambleas que se celebrasen. Sin embargo, no se puede pensar que de esta medida derive un interés por abrir la participación de sectores potencialmente disidentes con la actuación de la dirigencia, puesto que a las futuras delegadas se les pediría su afiliación peronista<sup>166</sup>. En cualquier caso, y para que no quedase ninguna duda a este respecto, en esas fechas se convocaba a todo el magisterio provincial a participar del homenaje que se celebraría en memoria del aniversario de la muerte de Eva Perón.

Pero antes de continuar con su definitiva vertebración en el entramado sindicalista del peronismo, la dirección de ATEP tenía que dar cuentas de la medida tomada contra quien fue su antigua delegada. El procedimiento elegido, según marcaban los estatutos, tenía que pasar por la aprobación de una Asamblea General Extraordinaria, que se celebró el día 1 de agosto. En esta asamblea se contó con la presencia de Leónidas Paliza Garay, en representación de la delegación local de Trabajo y Previsión, siendo presidida la sesión por el afiliado Enzo Luque.

Hacía cuatro meses que la CD había encargado a una comisión de investigación que redactara su veredicto acerca de la posible expulsión definitiva de Benita Araujo. Dicha comisión estuvo compuesta por Ramón Machado, Horacio Valverdi y Víctor Herrero, quienes dieron el visto bueno a la suspensión provisional decretada a finales del mes de marzo y aconsejaron la separación definitiva de la afiliada. La propuesta encendió los ánimos de los defensores de Araujo quienes, según el testimonio de la presidenta, impidieron abruptamente la resolución del asunto a tratar. Ante la difícil situación, el representante de Trabajo y Previsión decidió dar por concluida la reunión, pero esto no fue aceptado por el sector opositor a la medida. Un grupo en apoyo de la delegada decidió no abandonar el local y continuar con la reunión, llegando incluso a nombrar una comisión directiva provisoria integrada por los afiliados Cipriano Rivero, Lujana Ibáñez de Amado y Carmen Peón, quienes se postulaban para asumir el mando de la entidad para gestionar ante Trabajo y Previsión la convocatoria de elecciones que

---

<sup>166</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 67, 29/06/1953.

renovaran la directiva en los siguientes 90 días, así como el estudio de modificación de los estatutos de la entidad<sup>167</sup>.

La respuesta de la CD pasó por la intervención policial, puesto que esta comisión provisoria fue acusada de haber retenido libros de la secretaría gremial que, según los estatutos, no podían estar en su poder. Finalmente, en el mes de septiembre, el delegado regional del ministerio de Trabajo y Previsión, Luis Aparicio Vildoza, declaraba nula la asamblea del día 1 de agosto<sup>168</sup>, y el conflicto generado en la reunión no tuvo finalmente el efecto deseado por el sector opositor.

Este enfrentamiento da muestras inequívocas de la división interna del sindicato durante este período. Aunque no contamos con registros que nos permitan conocer en más detalle las acciones que había desarrollado Benita Araujo, y si estas fueron improcedentes o no, es evidente que, más allá de lo correcto de su actuación, contó con el apoyo de un grupo de afiliados que ya se habían significado previamente en la agremiación como integrantes de un sector discordante con la directiva.

En otro orden de cosas, la directiva tuvo que encarar otro contratiempo cuando la directora general de Enseñanza dispuso que la agremiación tenía que abandonar el local que hasta el momento se le estaba cediendo, puesto que se había decidido trasladar allí una escuela de readaptación. Finalmente, en el mes de octubre, ATEP se desplazó a la que sería su sede desde ese momento, en la calle Congreso, número 428, de la capital tucumana<sup>169</sup>.

En el plano gremial, las últimas acciones de esta CD estuvieron vinculadas con la petición de mejoras salariales. El 20 de octubre se redactó a tal efecto un documento dirigido al gobernador de la provincia y a la cámara de senadores provinciales, con el fin de pedir el aumento de sueldos del magisterio provincial. Además, se pidió al ministro de Hacienda que verificara si era económicamente viable sostener la demanda solicitada, petición que no tuvo respuesta por parte del ejecutivo. La última de las solicitudes reflejadas en este petitorio aludía, una vez más, al interés de la agremiación por solicitar un encuentro con el presidente Perón, con ocasión de una visita prevista en la provincia.

---

<sup>167</sup> Diario *La Gaceta*, 02/08/1953, p. 3.

<sup>168</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 68, 09/09/1953.

<sup>169</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 69, 02/10/1953.

### 3.5. La consolidación de ATEP en los últimos años del peronismo (1954-1955)

Este último período de actividad de ATEP antes del derrocamiento del peronismo se distingue principalmente por factores que ya han sido apuntados anteriormente. En primer lugar, la voluntad de homogeneizar a la militancia sindical se mantuvo presente por los conflictos que ya habían tenido lugar, así como por los nuevos que aparecerán en estos meses. El procedimiento a seguir es el mismo que se había empleado con el caso de Benita Araujo, esto es, la expulsión de quienes se significaron como opositores a la directiva.

Por otro lado, la voluntad de adquirir relevancia en el seno de las organizaciones peronistas da un salto cualitativo en lo que se refiere a la integración de ATEP en entidades representativas de tercer nivel<sup>170</sup>, si bien este prometedor arranque se vio frustrado por el devenir de la política nacional y la poca solidez institucional que alcanzó a consolidar la Confederación General de Profesionales (en adelante CGP), a la que los sindicatos de docentes provinciales fueron llamados a unirse.

La creación de la CGP está relacionada con voluntad de integrar sectores de la sociedad que habían permanecido menos permeables a la llamada incluyente del peronismo de los primeros años, como fue el caso de los sectores medios, más reacios que los obreros a incorporarse a las organizaciones impulsadas por el gobierno. La fundación de la CGP data de septiembre de 1953<sup>171</sup>, y en palabras de E. Adamovsky, sus actividades durante sus primeros meses de vigencia consistieron “fundamentalmente en acercar la mayor cantidad posible de profesionales y en comenzar a recorrer el camino hacia la oficialización de la nueva entidad como una de las tres patas de la comunidad organizada”<sup>172</sup>. Según el mismo autor, la creación de la CGP también debe ser puesta en valor como un recurso del peronismo para tratar de evitar la movilización que la Iglesia estaba tratando de promover entre asociaciones de profesionales, por lo que en los estatutos de la entidad se recogía que: “no podrán tener personalidad

---

<sup>170</sup> Las asociaciones de tercer nivel, o confederaciones, otorgaban la máxima representación de un colectivo en todo el territorio nacional. La CGP obtuvo la primera “personalidad profesional” del país en enero de 1955, lo que la convertía en la máxima organización representativa de los “profesionales”.

<sup>171</sup> Adamovsky, Ezequiel, “El régimen peronista y la Confederación General de Profesionales: orígenes intelectuales e itinerario de un proyecto frustrado (1953-1955), *Desarrollo Económico*, Vol. 46, N° 182, julio-septiembre, 2006, pp. 245-265.

<sup>172</sup> *Ibidem*.

profesional las asociaciones que se constituyan, diferencien o denominen en base a religiones, credos, nacionalidades, razas o sexos”.

Asimismo, como se verá posteriormente, resulta interesante comprobar que el papel jugado en el seno de la directiva de la CGP por el que entonces era secretario general de ATEP, sugiere que la agremiación de los docentes tucumanos había sabido manejarse con habilidad en las negociaciones en las que su representante resultó elegido secretario de Hacienda de la directiva de los profesionales, y que a decir de las informaciones fragmentarias con las que se cuenta, desempeñó un papel que no fue en modo alguno irrelevante<sup>173</sup>. Finalmente, el proyecto de la CGP se diluyó tras la intervención decretada por los autores del golpe militar de 1955, y la consiguiente derogación de la ley 14.348 de asociaciones profesionales, que ya durante el período peronista despertó críticas en sectores de la abogacía y el mundo universitario.

### **3.5.1. Renovación parcial y disciplina interna**

A mediados de noviembre de 1953, y según quedaba estipulado en los estatutos, se procedió a la conformación de una Junta Electoral que auspiciaría la celebración de comicios para la renovación parcial de la directiva, que atañía a los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, vocales primero y tercero y vocales suplentes primero y tercero, así como dos revisores de cuentas<sup>174</sup>. Las elecciones se celebraron el día 20 de diciembre, y por vez primera sólo se presentó una única lista, la denominada “Azul”. Los integrantes de la lista eran Horacio C. Valverdi<sup>175</sup>, como presidente, Emilia Julia Losean de Foreada; vicepresidenta, Elena Rosa Leal; secretaria, Ruth Alderete de Fernández y Delicia S. de Hardoy; vocales titulares, Amanda María Osorio e Irma Pelli de Caminos; vocales suplentes y Raquel Muñoz y Blanca Lidia Correa de la Cuesta como revisores de cuentas.

En la primera reunión de la nueva directiva, celebrada en enero de 1954, se puso de manifiesto la política continuista en relación a la ubicación de ATEP en el entramado

---

<sup>173</sup> No obstante, y aunque el autor advierte que el listado no es exhaustivo, E. Adamovsky no registra ATEP entre las asociaciones que formaron parte de la CGP.

<sup>174</sup> AA, CD, Libro II, acta nº 71, 16/11/1953.

<sup>175</sup> Quien había participado unos meses antes en la comisión que investigó las actuaciones de la ex delegada Benita Araujo.

del sindicalismo peronista. Con una actitud reverencial ante el proyecto político puesto en marcha por el presidente de la nación, el nuevo máximo dirigente de los educadores provinciales tucumanos manifestaba que:

*“...consciente de la responsabilidad histórica de la hora en la que el General Perón ha transformado fundamental y substancialmente al país con las tres reformas: económica, política y social, creando una nueva Argentina, y que siendo esta comisión directiva representativa de un gremio que como pueblo colabora con el gobierno y máxime tratándose de la Cuarta Reforma Cultural a realizarse desde 1954. Esta CD no escatimará esfuerzos ni sacrificios para trabajar con equidad y justicia en beneficio del gremio y de la colectividad dentro de la esfera de acción en que le toque actuar, teniendo en cuenta la Doctrina Nacional del Justicialismo creada por el Excelentísimo Presidente Gral. Perón”*<sup>176</sup>

Como ya ocurrió en ocasiones anteriores, en esta primera sesión se prestó atención a la situación económica que se heredaba en la entidad, por lo que a tal efecto se llevó a cabo el examen de las cuentas pertinente, encontrándose depositados en el Banco Provincial de Tucumán la cantidad de 23.258, 30 pesos. Asimismo, en el curso de dicha reunión, Ana de Méndez manifestó que uno de los objetivos fundamentales de la agremiación era trabajar por la equiparación de sueldos, continuando así con las gestiones iniciadas por la CD anterior, de la que ella misma formaba parte como vocal. De Méndez insistía en que, teniendo en cuenta lo expresado por Perón en su mensaje a los docentes<sup>177</sup>, se debía observar con atención y participar activamente de la organización nacional del colectivo magisterial, incluyéndose en la asamblea nacional de la Unión del Docente Argentino. Sin embargo, y en contra de las expectativas

---

<sup>176</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 74, 26/01/1954.

<sup>177</sup> Ana de Méndez se refiere al mensaje a los docentes pronunciado por Perón el 14 de agosto de 1953, en estadio “Luna Park” de Buenos Aires. En su discurso expuso una defensa de los valores tradicionales en el ámbito educativo, como por ejemplo cuando afirmaba que: “...yo, como todos los que me acompañan, pensamos en la infinita superioridad del alma sobre la materia, y pensamos también que el hombre no puede vivir en dos dimensiones, que es menester también que se prolongue hacia el cielo, buscando una tercera y sublime dimensión, sin la cual los hombres pierden quizás lo más sagrado y lo más sublime que el hombre tiene en sí mismo”. Asimismo, en esa ocasión, Perón expuso los vínculos que esperaba trazase el magisterio en relación a los presupuestos de actuación contemplados en el Segundo Plan Quinquenal. El impulso político que el peronismo daba a la creación de entidades gremiales docentes se explicitaba al decir que: “El día que los maestros se organicen, estoy seguro de que será una magnífica organización, porque los maestros y las maestras, lo sé bien, son altamente idealistas. Si no fueran tan idealistas, ya no habría maestros en la Argentina por las cosas que he visto en mi tierra”. En: Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, “Perón habla a los docentes”, *Boletín de comunicaciones del Ministerio de Educación de la Nación*, n° 297, 1953, pp. 3, 13-14.

generadas en un primer momento, la afiliación a la UDA quedó abortada el 15 de mayo de 1954, porque la entidad no aceptaba a agremiaciones provinciales. No obstante, en esa misma fecha, se proponía la adopción de los estatutos de la UDA con las modificaciones pertinentes<sup>178</sup>.

Sin embargo, al tiempo que se trataba de reconducir este cambio de rumbo en la integración sindical de la entidad, la dirección de ATEP siguió preocupada por el comportamiento de los sectores opositores. Un nuevo reto les había sido planteado a los dirigentes en mayo de 1953, cuando un grupo de afiliados concurrieron a la asamblea general presentando un proyecto de estatutos, sobre el que no han quedado registros. La CD recurrió a la intermediación de las autoridades sindicales, con la intención de buscar amparo en la resolución de ese conflicto. La respuesta llegó en el mes de febrero de 1954, cuando el jefe de ocupaciones profesionales, Sr. Becerra Peña, decía lo siguiente:

*“...que siendo el problema planteado por el recurrente orden interno del gremio, esta oficina no tiene jurisprudencia para declarar la caducidad del proyecto al Estatuto presentada por la asamblea del 3 de mayo de 1953. En mérito de lo expuesto elevo estas actuaciones al Jefe de Acción Social Directa para su consideración y conocimiento”*<sup>179</sup>

Según el testimonio de Ana de Méndez, las personas que participaron en los actos de la asamblea fueron: José Dionisio Campos, Enzo Aníbal Luque, Cipriano Rivero, Rosa del Valle Rodríguez de Paganini, Sixto Miguel Paz<sup>180</sup>, Lujana Ibáñez de Amado, Carmen Dora Peón, Benita Rosa Araujo y Carmen Stella Chiarello<sup>181</sup>. Nombres que ya se habían destacado anteriormente por su oposición crítica con las actuaciones de la directiva. En ese momento se decidió tomar medidas contra el sector opositor, en lo que se puede deducir era un esfuerzo por dotar de cohesión interna a la agremiación, utilizando mecanismos de depuración que, si bien iban en contra de la autenticidad de la posibilidad de participación democrática en el interior de la entidad, dotaban de solidez a una directiva cansada de ser cuestionada. No obstante, y antes de tomar la decisión

---

<sup>178</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 80, 29/05/1954.

<sup>179</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 74, 25/02/1954.

<sup>180</sup> Aunque no tenemos constancia para el resto de afiliados, Sixto Miguel Paz continuó con su militancia gremial a través del Sindicato de Docentes Particulares, entidad a la que llegó a representar como delegado ante la CGP cuando éstos decidieron afiliarse a la central de los profesionales en lugar de a la CGT. Véase: Diario *La Gaceta*, 06/12/1954, p. 3

<sup>181</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 78, 24/04/1954.



definitiva, se convino consultar al secretario de Trabajo y Previsión, para que estudiase si la causa era valedora para declarar “no socios a las personas citadas”.

Finalmente, los 9 miembros mencionados fueron expulsados en virtud de los estatutos vigentes, previa autorización de las autoridades correspondientes<sup>182</sup>. Dionisio Campos, posteriormente, presentó a la fiscalía de gobierno la petición de invalidar la asamblea del 18 de julio en la que se tomó la decisión de expulsar al grupo, pero esta iniciativa no fue tomada en consideración<sup>183</sup>.

Se demostraba entonces, que el régimen de disciplina interna era tomado como un pilar fundamental en la constitución definitiva de la entidad. Resulta interesante comprobar cómo tan sólo después de haber tomado esta medida, ATEP introduce en sus manifestaciones elementos que, aunque de manera muy sutil, ponen en cuestión la política llevada a cabo por el gobierno nacional con respecto a los docentes provinciales. En este sentido, se hacía manifiesta por vez primera la voluntad de ATEP de participar en los procesos de ascensos, traslados y nombramientos mediante la representación del gremio en un Tribunal de Clasificaciones, atribución reflejada en la ley 2.000, pero que hasta entonces no había sido reclamada.

Frente a las elecciones de 1954, ATEP decidió comunicar su apoyo a los candidatos del Partido Peronista Masculino y Femenino. En esos mismos días se tramitaba la realización de una entrevista con el contralmirante Tesaire<sup>184</sup>. A mediados de marzo, ATEP decidió cursar una nota al presidente Perón, en la que se le solicitaba tomase en consideración la situación del magisterio. Uno de los elementos que en esa carta se resaltaban era la alta cifra de afiliados de la agremiación, que en esos momentos superaba los 3.200. Dirigiéndose a Perón como el “primer educador de la Patria”, el documento expresaba seguridad ante lo que su “sabia y justicialista obra de gobierno” sabría responder. En la carta, cuyo envío había sido aprobado previamente por el gobernador provincial, se hacía hincapié en la “exigua remuneración” del magisterio provincial en comparación con otros colectivos de trabajadores del Estado, especialmente si se tenía en cuenta la titulación académica requerida. Entre las derivadas de este problema, se subrayaba la dificultad que esto suponía en la economía

---

<sup>182</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 80, 29/05/1954.

<sup>183</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 82, 19/08/1954.

<sup>184</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 77, 18/03/1954.

doméstica de los docentes, agravada para aquellos que se desempeñaban en el ámbito rural. De igual manera, la diferencia de sueldos entre los docentes provinciales y los nacionales era destacada como un elemento de desigualdad injustificable, en tanto en cuanto no respetaba la máxima de que “a igual trabajo, igual remuneración”. Este agravio en materia salarial entre docentes nacionales y provinciales provocaba, según lo expresado por ATEP, el “menoscabo en la moral de los educadores tucumanos [...] y también en el orden material, puesto que no hay retribución digna de las condiciones económicas y sociales a que alude el 2º plan quinquenal”. Después de esta ligera crítica, el presidente de ATEP aprovechaba la despedida para “reiterar la adhesión total a la obra gigantesca y patriótica que cumple desde la primera magistratura [...] y la decisión de las maestras tucumanas de realizar todo lo que esté a nuestro alcance en la Reforma Cultural”<sup>185</sup>, con lo que se evitaba que el receptor del mensaje pudiera considerar que no estaba tratando con adeptos a su causa.

En la siguiente entrevista con el gobernador, Luis Cruz<sup>186</sup> manifestó que “la equiparación de sueldos con los maestros nacionales no era posible, dado que el presupuesto de la provincia no alcanza para sufragar tales gastos”<sup>187</sup>. En esa misma semana tuvo lugar un encuentro con Agustín Puentes, interventor del Partido Peronista en Tucumán, a quien se pidió apoyo en las gestiones para la equiparación. Puentes aseguró que se ocuparía de la cuestión, al tiempo que se comprometía a gestionar una audiencia con el presidente. En un encuentro posterior, en octubre de ese mismo año, el gobernador recibió a los delegados titulares y suplentes de ATEP en el salón “Eva Perón” de la Casa de Gobierno<sup>188</sup>. En este acto intervinieron el gobernador, el presidente de ATEP y su delegado, Francisco Javier Herrera. Después de sus intervenciones, los delegados escolares de la agremiación se reunieron constituyendo una asamblea improvisada, y decidieron marchar por el centro de la ciudad, lo que ocasionó la intervención de la policía.

---

<sup>185</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 77, 18/03/1954.

<sup>186</sup> Luis Cruz había sido elegido gobernador en las elecciones de noviembre de 1951, coincidiendo en fecha con las presidenciales. El candidato peronista consiguió 201.036 votos, frente a los 77.902 del candidato radical, Alfredo García. Cruz había nacido en Purmamarca (Jujuy), en 1905, y había sido obrero ferroviario y militante socialista. En el período 1946-1951 fue senador nacional por Tucumán. En: De la Torre, Carlos (h), *Historia...op. cit.*, p. 683.

<sup>187</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 85, 25/09/1954.

<sup>188</sup> Diario *La Gaceta*, 03/10/1954, p. 4.

La jornada ya había arrancado con la reunión de un numeroso grupo de maestras en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, al frente de la fachada principal de la Casa de Gobierno provincial. Los delegados gremiales fueron invitados a reunirse con el gobernador quien, a su vez, estaba acompañado por sus ministros de Gobierno y de Hacienda, Próspero Barrionuevo y Haurigot Posse; el delegado del consejo superior peronista, Agustín T. Puentes; el jefe de la Policía, César Augusto Sosa; el secretario general de la Gobernación, Carlos P. Plaza Maidana; el procurador del Tesoro, Adolfo L. Valle; la directora general de enseñanza, Antonia Rébola de Escribano; y la inspectora general de esta dependencia, Cira Salazar Colombres de Belluscio, “así como por otros funcionarios de la gobernación”. El primero en intervenir fue el presidente Valverdi, quien comenzó agradeciendo a las autoridades el haberles recibido, tras lo cual se remitió al discurso pronunciado por Perón el 22 de marzo de 1954, en el cual se refería al “salario vital mínimo” de los trabajadores emergidos y sumergidos. Valverdi apuntaba que los docentes provinciales se encontraban sumergidos, al contrario de lo que ocurría con los nacionales, en función del estatuto del docente recién aprobado por Perón<sup>189</sup>. Debido a esta situación, señalaba Valverdi, ATEP no podía “ni realizar obras de asistencia social, ni de cooperativismo, ya que la situación de los interesados llega, en la mayoría de los casos, a ser afligente [sic]”.

Después de esta exposición, el gobernador Cruz expresó que sería “un placer acordar los sueldos que se le solicitaban y que en justicia le corresponde a este esforzado y abnegado gremio del magisterio”, para acto seguido concluir que las circunstancias financieras lo impedían, mientras insistía en que la petición era justa y que uniría los esfuerzos del gobierno a los del colectivo para la satisfacción de sus demandas. Sin embargo, el posterior comentario de Cruz deja entrever una crítica al gobierno central, cuando expresó que “por mi condición de modesto obrero con más de veinticinco años de militancia gremial, no puedo prometer, como lo hacen otros, aquello

---

<sup>189</sup> En el prefacio del Estatuto del Docente del General Perón se condensan algunas de las atribuciones clásicas del docente entendido como parte del mecanismo de transmisión de los valores que emanan del Estado. Así se puede leer que el estatuto “...confiere a sus integrantes la jerarquía moral y los recursos pecuniarios dignos que corresponden a sus condiciones de forjadores de la juventud de la Patria, que tendrá en el futuro la responsabilidad de refirmar los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social, que ha plasmado con su genio tutelar el Presidente de la Nación, General Juan Perón, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras”. Versión digital disponible en: <http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/90779/EL003000.pdf?sequence=1> (Consultado el 23/11/2014).

que no puedo realizar”, a lo que añadió que “los problemas financieros se resuelven con dinero, no con promesas”. La crítica se sustentaba cuando después afirmó que su gobierno estaba considerando el aumento del salario a los docentes, pero que sin apoyo del ministerio de Educación de la Nación les sería imposible concederlo.

Una vez concluido el encuentro, los delegados de ATEP decidieron continuar la reunión, en forma de asamblea improvisada, en el local de un cine cercano al palacio de gobierno. Valverdi intervino pidiendo tiempo y prudencia ante un auditorio que solicitaba la celebración inmediata de una asamblea general extraordinaria en la que se pusieran en común las medidas de lucha a adoptar para la consecución de la equiparación de salarios. Por este motivo, y pese a los llamados a la calma de la directiva, decidieron marchar hacia el diario “La Gaceta” para poner en conocimiento de este medio el resultado de la reunión y las demandas que exigían. La respuesta del gobierno provincial fue entonces enviar a la policía para tratar de disuadir a los maestros y maestras de su empeño en marchar por una de las arterias principales de la capital tucumana. Sin embargo, y a pesar de la llegada de refuerzos policiales, los docentes consiguieron su propósito, en lo que se convirtió en la primera acción pública de los afiliados de la agremiación que iba en contra de lo recomendado por la dirigencia y la voluntad gubernamental<sup>190</sup>. No obstante, la respuesta de la CD ante esta la presencia policial fue la publicación, unos días después, de una nota a ese mismo diario en la que decían que el envío de agentes “no se justifica dada la corrección observada por los docentes que en ningún momento pretendieron realizar bulliciosas manifestaciones, ni menos alterar el orden”<sup>191</sup>.

Los sucesos de esta jornada, lejos de ser irrelevantes, supusieron la constatación de que en el seno de ATEP existía un sector de la base militante que discrepaba, al menos en ocasiones concretas, con el servilismo político mostrado tradicionalmente por la dirigencia sindical. Aunque aún no aparecieran en escena la posibilidad de convocar medidas de fuerza, el empuje dado por la voluntad de autonomía que movió a los delegados en aquella ocasión se convirtió en un pulso contra la dirigencia que trataba de encauzar su actividad gremial en el marco del oficialismo y la cordialidad con las autoridades políticas.

---

<sup>190</sup> La crónica de la jornada en: Diario *La Gaceta*, 03/10/1954, p. 4.

<sup>191</sup> *Ibidem*.

Poco más de una semana después de los hechos, el 16 de octubre, y dando así cabida a las reclamaciones de los delegados, se celebró una asamblea en la que el presidente manifestó con claridad el lugar que entendía debía ocupar la entidad:

*“Como actuamos como Entidad Gremial y que estamos incorporados a la Confederación General de Profesionales colateral de la CGT, nuestro mandato tiene una gran importancia y ningún afiliado puede pasar por la autoridad de Uds. que son los representantes de ellos. Uds. a su vez se deben a la CD y la CD se debe a la CGP, al Ministerio de Trabajo y Previsión, a la Jefatura de Policía y a la Fiscalía de Gobierno”*<sup>192</sup>

El acto transcurrió sin los sobresaltos de otras ocasiones, y fue concebido por la directiva como un ejercicio de disciplinamiento hacia los sectores que venían mostrando opiniones discordantes. En el discurso de Valverdi se resaltaba la estructura vertical de la entidad, que a su vez debía quedar sometida a los poderes públicos, de los que emanaba su legitimidad fundacional. Llama la atención, al mismo tiempo, comprobar el interés mostrado por tratar de desligar los reclamos gremiales de las opiniones políticas para, acto seguido, incurrir en una evidente contradicción discursiva, aludiendo a la cohesión ideológica de la militancia política de los afiliados en torno al peronismo, planteada en términos de una adhesión inquebrantable y acrítica. Así es que, como conclusión de la asamblea, Valverdi exhortó entonces a reconocerse en la ideología que, en principio, unía a todos los presentes:

*“Consideramos que si hay un pedido justo es este precisamente el de la equiparación; pero queremos dejar aclarado que este es un asunto estrictamente gremial y que no deben tener participación en esto ninguno de los enemigos del Gral. Perón. Y a propósito de esto voy a hacerles una pregunta para que contesten: ¿Uds. son Peronistas? Sí o No. Entonces no lo olviden que una de las 20 verdades del Peronismo dice: que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”*<sup>193</sup>

Pero esos vínculos con las autoridades políticas parecían no dar los frutos deseados, puesto que el 22 de octubre de 1954 la agremiación recibía la respuesta del jefe de la Casa Militar, en la que se le hacía saber que el encuentro que se había

---

<sup>192</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 88, 15/10/1954.

<sup>193</sup> *Ibidem*.

solicitado con el presidente Perón no tendría lugar. Sin embargo, se les emplazaba a enviar un memorándum donde se contemplaran sus peticiones, iniciativa a la que ATEP decidió responder favorablemente<sup>194</sup>. Sin embargo, unos días después de este revés, el delegado provincial de la CGT, Óscar E. Sarrulle, decidió que sería Francisco Javier Herrera el delegado tucumano enviado a la reunión que se llevaría a cabo con el directorio de la CGP para tratar las mejoras del magisterio, el 25 de noviembre en la sede de Buenos Aires<sup>195</sup>. De esta manera, se daba un espaldarazo a la labor desarrollada por la agremiación, que después de haber intentado infructuosamente reunirse con el presidente, al igual que trató de afiliarse a la UDA, veía reconocidos sus esfuerzos por conectar con la dirigencia del movimiento sindical peronista mediante esta labor de representación del colectivo de los profesionales tucumanos. Del mismo modo, se puede afirmar que la elección de un miembro de ATEP no fue gratuita, puesto que gozaba de cierta legitimidad representativa al contar con un alto número de afiliados.

En los días posteriores a la reunión se tienen noticias de la actuación desarrollada en la asamblea de delegados de maestros provinciales, celebrada en Buenos Aires, convocados por el directorio de la CGP. Las delegaciones presentes eran Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, San Juan, Santa Fe, San Luis y Tucumán. La reunión fue presidida por el Director de Asuntos Profesionales, Alberto Graziano. Por su parte los representantes del magisterio reclamaron, en síntesis, la equiparación de sueldos con el Estatuto Perón que regía para los docentes nacionales, siendo el mínimo exigido el de 2.000 pesos mensuales. Según lo estudiado por el delegado tucumano, ese aumento consumiría unos 200 millones de pesos de las arcas del gobierno central. Ante esto, los delegados se comprometieron a consultar a los gobiernos provinciales a cuánto ascendía la cantidad que ellos podrían aportar, emplazándose a otra reunión para poner en común las cifras comprometidas. Posteriormente los delegados se entrevistaron con el ministro de Hacienda de la Nación, Pedro Bonani, quien les dijo que el gobierno nacional ya había cumplido su compromiso, girando a las provincias una suma que ascendía a los 510 millones de pesos, afirmando que ahora correspondía a los representantes ahí reunidos tomar contacto con los gobiernos provinciales, para saber con qué cantidad se contaba y cuál

---

<sup>194</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 90, 27/10/1954.

<sup>195</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 92, 12/11/1954.

era el estado real de las cuentas, ya que tan sólo después de haber unificado esos balances se haría la petición de ayuda federal por medio de la CGP<sup>196</sup>. Los delegados allí reunidos, que afirmaban representar a 70.000 maestros de todo el país, quedaban responsabilizados de intermediar entre el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales, emplazados en una disputa política que parecía difícil de encajar con sus atribuciones gremiales originarias. Por su parte, tan pronto los asociados conocieran esas cantidades, los dirigentes de la CGP se comprometían a visitar cada provincia con la intención de tratar el asunto con los gobiernos provinciales.

Como quedaba recogido en la prensa, después de la reunión celebrada en Buenos Aires, los maestros pedían un sueldo mínimo de 1.000 pesos. En la reunión, se informó, por medio de Alberto Graziano, que estaba entre los intereses de la CGP la gestión “eventual solución” de los reclamos que los docentes les estaban haciendo llegar, acerca de la equiparación de sueldos con aquellos que se reflejan en el “Estatuto Perón”, vigente para el magisterio nacional<sup>197</sup>. También se recogían las declaraciones de Valverdi que decía que tras esta reunión en Buenos Aires, y la obtención de la mejora de 200 pesos por parte del gobierno provincial, daba por concluida su etapa en el gremio, deseando suerte a la siguiente comisión directiva. En una nota se expresaban de la siguiente manera:

*“Al terminar nuestro mandato después de 2 años de actuación, lo hacemos con el profundo convencimiento de haber cumplido la etapa más difícil de la entidad, cual es la de su organización, sorteando toda suerte de obstáculos de orden interno, esgrimiendo como bandera de lucha la verdad, la razón y la justicia”*<sup>198</sup>

A finales de año se acercaban las nuevas elecciones, destinadas a renovar a todos los miembros de la directiva. Es por esto que la comisión encabezada por Valverdi se reunió el 8 de diciembre para hacer un balance de su gestión. En la información que se recogía en el libro de actas de ATEP, se daba cuenta que en fecha de 20 de noviembre de 1952 la agremiación contaba con un fondo de 8.441'55 pesos, y que en el momento que esta comisión saliente firmaba, la cifra alcanzaba los 36.962,10 pesos. Al mismo

---

<sup>196</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 93, 03/12/1954

<sup>197</sup> Véase Diario *La Gaceta*, 06/12/1954, p. 2: “Los maestros piden un sueldo mínimo de 1.000 pesos. La CGP apoyará sus gestiones”.

<sup>198</sup> *Ibidem*.

tiempo se mencionaba que hace dos años la entidad se componía con tan sólo 940 afiliados, habiéndose ahora alcanzado el número de los 3.460. Así también, se destacaba la importancia decisiva de la definitiva incorporación de la agremiación a la CGP<sup>199</sup>. Ciertamente, si se atiende a la magnitud de las cifras, es de justicia decir que en este período ATEP concretó un crecimiento institucional significativo, debido al aumento del número de afiliados y, por consiguiente, los fondos disponibles. Por otro lado, si se mantienen al margen las infructuosas tentativas de mejoras gremiales o su escasa capacidad para acceder a la personalidad política más relevante del país, es cierto que la integración en el CGP se puede considerar un avance importante para una entidad gremial que, por otro lado, estaba llamada a ocupar un lugar en la estructura del sindicalismo peronista.

Las elecciones tuvieron por primera vez repercusión en la prensa, producto de la relevancia que ATEP había ido adquiriendo en la sociedad tucumana. La participación en los comicios era obligatoria, y la dejación injustificada de este derecho suponía la inhabilitación durante 6 meses para el afiliado que incurriera en ella. A estas elecciones se presentaron dos listas: “Unión, Acción y Progreso” y “Lealtad y Justicia”, la primera con arraigo en la capital y la segunda con un mayoritario apoyo en el sur de la provincia<sup>200</sup>. El candidato de la primera lista, Ramón Antonio Quagliata, afirmaba que el postulado de la justicia social había sido tomado por los maestros provinciales, que “de ese modo asumen su puesto de lucha en la revolución argentina”. Asimismo, en un discurso que se elevaba por sobre las cuestiones gremiales concretas, señalaba que “es preciso superar las viejas formas sociales encaminándose por el rumbo que marca la mística justicialista, preconizada por el general Perón”. En el día previo a los comicios, Segundo Elías Dip, miembro de la lista, recordaba a sus potenciales votantes que “somos intérpretes del general Perón que pregonar la unidad y organización de los gremios”<sup>201</sup>.

Por su parte, la lista “Lealtad y Justicia” tenía como candidato a Francisco Javier Herrera, quien ya había ocupado el cargo de delegado de la agremiación. Su propuesta, sin alejarse en absoluto del oficialismo, concretaba objetivos gremiales más definidos,

---

<sup>199</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 94, 08/12/1954.

<sup>200</sup> Diario *La Gaceta*, 26/11/1954, p. 3

<sup>201</sup> *Ibidem*.



queriendo destacar su lucha por la unión y unificación del gremio. El plan de trabajo de la lista incluía continuar con el movimiento por la equiparación de los sueldos y “la materialización de toda gestión que implique un beneficio colectivo”<sup>202</sup>. También prometía solicitar a la Dirección General de Educación la participación del gremio en lo referente a nombramientos, traslados, ascensos y demás decisiones que afecten a los docentes, así como una modificación del sistema de licencias temporales y del sistema de pagos. En este sentido, también prometía la gestión de un seguro contra accidentes. Un aspecto destacable de su propuesta económica residía en gestionar con alguna institución bancaria un préstamo especial para la “unificación de deudas”, así como la obtención de rebajas en sanatorios, farmacias y establecimientos comerciales. Igualmente novedoso resultaba que Herrera se comprometía a gestionar ante las autoridades la aprobación del derecho a la jubilación tras 25 años de servicio sin límite de edad<sup>203</sup>.

Finalmente resultó vencedora la lista encabezada por Francisco Javier Herrera, que se impuso con 1.510 votos sobre la lista derrotada, que alcanzó los 927<sup>204</sup>. Acto seguido, el flamante dirigente se expresó hacia los afiliados manifestando que la actuación mostrada por los docentes en los comicios:

*“...da la pauta de la conciencia con que actuaron los maestros señalando, una vez más, su propio destino. Con esa conducta, esencia del espíritu de la doctrina peronista, se ubican los maestros defendiendo con lealtad sus*

---

<sup>202</sup> Este programa tenía una carga semántica importante. Estudios recientes han demostrado que, a partir de 1952, el recurso a las movilizaciones de fuerza fue una constante creciente entre los sectores asalariados. En la declaración de ATEP queremos subrayar el término “gestión”, que parece querer indicar la renuncia al enfrentamiento directo con la administración. Donde otros colectivos trataban de limitar los alcances de la voluntad verticalizadora del peronismo, ATEP optaba por estrategias de negociación basada en el pacto y no en el músculo sindical. Para saber más acerca de este aumento de la conflictividad social en los últimos años del primer y segundo gobierno de Perón, consúltense: Contreras, Gustavo Nicolás, “La organización sindical del personal de la administración pública nacional durante el primer gobierno peronista (1946-1955). Acuerdo, conflictos y disputas”, *Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-1976)*, 4-6 de noviembre de 2010. Disponible en: <http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD2/Contreras.pdf> (Consultado el 15/05/2015); Izquierdo, Roberto, “La clase obrera y el segundo gobierno peronista. El caso de la huelga del tabaco de 1954”, *Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-1976)*, 4-6 de noviembre de 2010. Disponible en: <http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD2/Izquierdo.pdf> (Consultado el 15/05/2015).

<sup>203</sup> Diario *La Gaceta*, 25/11/1954, p. 2.

<sup>204</sup> Diario *La Gaceta*, 29/11/1954, p. 3. En este registro no se computan los votos de las mesas establecidas en la localidad de Villa Alberdi.

*propios intereses al amparo de la justicia de nuestro líder, el general Perón*”<sup>205</sup>

### **3.5.2. Algunos éxitos: Francisco Javier Herrera, secretario general**

La nueva comisión se reunió por primera vez el 21 de diciembre de 1954, presidida por Francisco Javier Herrera, que ahora asumía el cargo de secretario general<sup>206</sup>. Además del propio Herrera, la CD entrante estaba compuesta por: María Esther B. de Soria; María Luisa R. de Jiménez Brú; Alba Díaz Gramajo; [ilegible] Fuensalida; Ruth Lobo de Liz; María Enriqueta G. de Bulacio Ramos y como vocales titulares; Rosa Funes de Sánchez; Sara Argelia Soto; Marta Salas; Susana Salas; Nelly Escalante; Bernarda Carmona; Rosario de Jesús Taboada y Lía Valdez.

Como era habitual, en la primera reunión de la directiva se puso de manifiesto cuáles eran las líneas en torno a las que se basaban las intenciones de la directiva entrante. En este sentido, Jiménez Brú expresaba que “la equiparación es la aspiración unánime del magisterio, gremio este obviado, postergado y reducido a la categoría de entes menos significantes de la sociedad”<sup>207</sup>.

En los primeros días de 1955, sin tener en cuenta el periodo de inactividad gremial que se solía vivir coincidiendo con las vacaciones escolares, tuvo lugar el primer pedido de ATEP en esta nueva etapa, que se elevó ante el vicegobernador Vicente Maíquez, y en el que se comprendían las siguientes reclamaciones:

*“Como autoridades de ATEP e interpretando las aspiraciones del magisterio de la Provincia nos dirigimos a V.E. para formular el siguiente petitorio:*

- 1. Que el gobierno de la provincia disponga la rebaja del 50% del precio del boleto en todos los medios de transporte de pasajeros de su dependencia en beneficio de los maestros de la provincia.*
- 2. Que el P.E. gestione del Ministerio de transporte de la Nación el mismo beneficio señalado en el punto anterior en los ferrocarriles del Estado y demás medios de transportes dependientes de ese ministerio.*

---

<sup>205</sup> Diario *La Gaceta*, 29/11/1954, p. 3

<sup>206</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 95, 21/12/1954.

<sup>207</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 96, 27/12/1954.

*3. Que el superior gobierno de la provincia disponga la unificación de deudas de los maestros por intermedio del Banco de la provincia*<sup>208</sup>

Es interesante constatar que en esta primera ocasión no se hace referencia al que los dirigentes docentes no dudaban en calificar como el primer problema del magisterio. Sin embargo, resulta novedosa en la trayectoria de la agremiación la propuesta de medidas tan concretas de carácter económico, en especial aquella referente a la unificación de deudas de los docentes, que debido al proceso inflacionario vivido en la Argentina de aquellos años, tenían que recurrir con frecuencia al crédito para satisfacer sus necesidades básicas. Por otro lado, se quiso hacer notar que, además, los docentes eran los peor remunerados de entre los trabajadores de servicios de la provincia, y especialmente gravosa era la situación de aquellos que se desempeñaban en el interior<sup>209</sup>. Sin embargo, no se alcanzó el consenso necesario en la directiva para enviar en estos términos la petición por escrito, precisamente por motivo de la expresión: los “peor remunerados de la provincia”. María Luisa de Jiménez Brú insistía en que efectivamente así lo eran, puesto que poseían un título y tenían más exigencias que otros colectivos, poniendo por caso a los agentes de policía, que recibían ropa y transporte por parte de la administración.

Los problemas de cohesión continuaban estando presentes en el seno de la directiva. La CD se enfrentó a su primera división interna cuando en el mes de marzo, los afiliados que habían sido expulsados por la anterior comisión pidieron su reincorporación al sindicato. La CD se dividió entre aquellos que apostaron por la simple reingreso de los ex afiliados, y quienes pensaban que la decisión debía pasar por la asamblea general o incluso por el tribunal de disciplina<sup>210</sup>. En sucesivas reuniones se siguió tratando el tema de los desafiliados, llegándose a contar con una nota enviada por un numeroso grupo de docentes de la localidad de Monteros, que no se mostraban

---

<sup>208</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 97, 07/01/1955.

<sup>209</sup> En cualquier caso, si bien es cierto que la administración pública desoyó sistemáticamente las demandas económicas de la docencia, no podemos pensar que esta actitud se debiese tan sólo a la poca estima de su labor profesional. La mayoritaria componente femenina del colectivo significaba, en último extremo, que el sueldo docente rara vez era el único o principal ingreso de una familia, sino más bien el complemento aportado por la parte económicamente más débil del matrimonio. En este sentido, entendemos que la mayor presencia en la dirigencia gremial de varones, no sólo se explica por las prácticas propias a la cultura política del momento. A este factor habría que añadir el hecho de que los docentes varones, seguramente fueran los que aportaran el mayor ingreso a su núcleo familiar, por lo que se puede suponer que, como cabezas de familia, padecían los bajos ingresos de forma más acuciante.

<sup>210</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 98, 05/03/1955.

partidarios de la reincorporación. Finalmente, en contra de las opiniones reticentes, se resolvió:

*1. Dejar sin efecto la desafiliación de Maestros dictada por la Comisión Directiva anterior con fecha 25 de mayo de 1954, reincorporarlos a la vida activa del gremio, con la expresa constancia de que aquella medida no los afecta en su conducta gremial, ni tampoco les interrumpe en la antigüedad de afiliados a la ATEP*<sup>211</sup>

Esta decisión, que debe ser leída como una desautorización de las medidas tomadas por la anterior directiva es, al mismo tiempo, la primera manifestación de la voluntad de reincorporar a los sectores opositores. Aunque no se cuentan con informaciones sobre las que poder comprobar esta interpretación, consideramos que debió ser tomada en cuenta la dilatada experiencia gremial de los expulsados, algunos de los cuales mantuvieron su actividad en otras organizaciones y que, incluso, llegarán a ocupar cargos de especial relevancia en directivas futuras, como se verá más adelante.

Por otro lado, el papel del secretario general comenzaba a levantar suspicacias entre algunos miembros de la directiva, lo que se hizo patente cuando se resolvió llamar la atención a Herrera por haber visitado, sin previo informe a la CD, al delegado del partido peronista, el profesor Fuentes, a quien dijo “fue a pedir apoyo para las gestiones de la CD ante el interventor Martiarena”<sup>212</sup>. Con motivo de esta actuación, se resolvió que toda gestión en nombre del sindicato debía contar con la aprobación previa de la CD, así como con la presencia de uno o dos acompañantes en cada encuentro concreto. Asimismo, en el transcurso de este encuentro de la directiva se abrió una discusión en torno a si un miembro de la CD podía aceptar o no un cargo público. La resolución en ese sentido fue que: “se puede aceptar un cargo siempre que el miembro, haciéndose

---

<sup>211</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 99, 26/03/1955.

<sup>212</sup> El día 1 de marzo de 1955 se decretó la intervención de Tucumán, junto con las de Santa Fe y Santiago del Estero. La disposición de Perón tenía, según su texto “denuncias formuladas por diversas organizaciones del pueblo, con referencia a fallas e irregularidades de diversa índole [...] un ambiente de pasividad e inoperancia [...] donde se prescinde sistemáticamente de la colaboración de las organizaciones del pueblo [la falta] absoluta o casi total de iniciativas útiles y tendientes a resolver los múltiples problemas que los gobernantes del Estado justicialista deben afrontar incesantemente [...] defectos esenciales en la Justicia [...] parcialidad tendenciosa de muchas de sus resoluciones y un inadmisibles desconocimiento de los principios justicialistas que animan a la Doctrina Nacional [...] corregir sin demora esa situación de verdadero desgobierno y abandono administrativo”. Asumió como interventor José Humberto Martiarena. Diario La Gaceta, 02/03/1955; en: Páez de la Torre, Carlos (h), *Historia de...op.cit.*, p. 688.

eco de su moral y su conducta honrada, acepte con la condición de servir mejor al gremio que representa”<sup>213</sup>. Por otro lado, la directiva de Monjes evidenciaba la escasa capacidad de respuesta que ATEP podía ofrecer a los afiliados que presentasen sus quejas por el estado de los centros educativos, puesto que propuso que sólo se visitaran las escuelas “que no demandaran gastos”, hasta que no se concretara la resolución del problema económico.

Sin embargo, la queja presentada hacia la conducta del máximo dirigente de la agremiación estaba lejos de quedar zanjada, ya que sobre el acta en que se consignó el llamado de atención a Herrera, se volvió a discutir días después, cuando el secretario general quiso impugnar precisamente ese punto. Se votó por la supresión, estando en contra de Monjes, finalmente resultando ganadora la propuesta de esta última, con lo que Herrera anunció que votaría en disconformidad. Pero posteriormente volvió a producirse un desencuentro entre de Monjes y Herrera, cuando éste dijo tener que hacer algunas observaciones “sobre política” en la reunión ordinaria de la CD, a lo que de Monjes le replicó que “no hablara de política en las reuniones de la CD, puesto que allí sólo se trataban asuntos gremiales”. Pero más allá de estas disputas, en esta reunión se decidió enviar a Herrera a Buenos Aires para participar de la definitiva formación de la Federación Argentina de Maestros Provinciales<sup>214</sup>, entidad amparada por la CGP y que debía dar cabida a todos los docentes provinciales de la República, respondiendo así afirmativamente a la propuesta que se le había comunicado a ATEP un mes atrás<sup>215</sup>.

Un hecho novedoso que se registra en estos días, probablemente vinculado con las buenas relaciones que Herrera mantenía con los poderes políticos, es que ATEP intentaba ejercer influencia en nombramientos políticos, algo improbable hasta ese momento, y que lo hacía en los siguientes términos:

*La CD de ATEP tiene el honor de llegar a Ud. en nombre de sus cuatro mil afiliados rogándole quiera conceder un pedido especial. El magisterio tucumano vería con sumo agrado la designación del Sr. Dionisio Delgado para ocupar el cargo de subsecretario de Cultura, educador de conocida y correcta actuación, quién en otra oportunidad se desempeñó con todo éxito.*

---

<sup>213</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 99, 26/03/1955.

<sup>214</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 102, 16/04/1955.

<sup>215</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 98, 05/03/1955.

*Esperando que nuestro pedido sea resuelto favorable saludamos al Sr.  
Inspector con toda consideración y respeto*<sup>216</sup>

De nuevo, los canales establecidos con el poder político parecían estar surtiendo efecto, y de este modo se registran algunas respuestas positivas acerca de las propuestas planteadas por ATEP. En este sentido, el interventor de la provincia decidió reconocer una rebaja del 50% para el transporte de los afiliados en los ómnibus y tranvías en todo el interior de la provincia<sup>217</sup>.

En lo referente a la reunión celebrada el 27 de abril en Buenos Aires, que tenía por objetivo sentar las bases de la federación antes mencionada, y a la que asistieron delegados de todas las personerías excepto de Salta y Santiago del Estero, los resultados fueron presentados como verdaderos logros por parte de los representantes tucumanos. ATEP ejerció en la reunión como “intérprete único del magisterio tucumano”, siendo nombrado Francisco Javier Herrera secretario de Hacienda de la flamante entidad, avalado por su “notable actuación” en el ámbito provincial, lo que finalmente requirió su presencia permanente en Buenos Aires. Por otro lado, el cargo de presidente de la federación pasó a denominarse como secretario general, y fue ocupado por el representante de la provincia de Entre Ríos, siendo el secretario adjunto el representante de Buenos Aires, Sr. Rises. No hay que olvidar que el lugar que ocupaba ATEP en el seno de la CGP era significativo por el número de afiliados, siendo precisamente a través de la confederación que se llevó a cabo una reunión con el vicepresidente de la nación, quien dijo encontrar lógicas todas las aspiraciones del magisterio, afirmando que: “Con el panorama político que se presenta en algunas provincias, el gremio tiene que pedir, hacer públicas sus aspiraciones, que el pueblo sepa y se compenetre de los anhelos del magisterio”<sup>218</sup>.

Sin embargo, lo que quería ser presentado como un éxito de la delegación tucumana no aparcó el conflicto latente en el interior de la directiva, por lo que en la misma reunión en la que se expuso lo conseguido en Buenos Aires, De Soria volvía a insistir en que los pedidos personales que se hacían en la gobernación y en las esferas superiores debían pasar primero por la ATEP, para darles “más carácter y fuerza al

---

<sup>216</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 101, 02/04/1955.

<sup>217</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 104, 07/05/1955.

<sup>218</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 105, 13/05/1955.

gremio”. Esta afirmación vinculaba, inequívocamente, el reciente nombramiento de Herrera con un juego de influencias manejado al margen de la directiva del sindicato, en el que el resultado de la presión ejercida por el gobierno provincial se materializó en el nombramiento del representante tucumano.

Ante este nuevo desafío, Herrera recordó que cuando fue reprobado por haber asistido él sólo a la reunión con Agustín Fuentes, entendía que esa actitud: “sólo se manifestaba [...] como un acto de orden político”, añadiendo luego que después de su gestión en Buenos Aires, María de Jiménez Brú y Estela Josefina Moya de Monjes comentaron con el resto de la CD: “a Herrera hay que eliminarlo, a Buenos Aires sólo deben ir los más capaces”. Tras esto, Herrera continuó acusando a las directivas de hacer correr el rumor de que el secretario general: “se ha acomodado, a Herrera no le interesa más la equiparación, por cuanto está acomodado ante la Federación con un sueldo mensual de 3.000 pesos”.

Según manifestó Herrera, esas ideas calaron, en especial, ante un grupo de 81 afiliados de la localidad de Concepción, que el 27 de mayo manifestaron su disconformidad con la gestión del secretario general, y pidieron rendición de cuentas por las gestiones realizadas a favor de la equiparación.

Recordaba también Herrera que, con ocasión de la asamblea del 13 de junio, en la que los asistentes decidieron renovar su confianza en la CD, declaró que los afiliados:

*“...nunca verán defraudadas sus esperanzas pues prometí y prometo nuevamente luchar con honor y valentía sin escatimar esfuerzos en bien de la felicidad y prosperidad del magisterio tucumano, inspirado siempre en los principios justicialistas de la Doctrina Nacional”<sup>219</sup>*

Herrera manifestó entonces que no se cumplía el principio cristiano de “amaos los unos a los otros” y que dada la “maldad” demostrada por esas dos miembros, pedía su expulsión. Fuensalida intervino diciendo que era más conveniente tomar un tiempo de reflexión antes de una decisión tan importante. Sin embargo, Moya de Monjes declaró: “sí, es cierto, lo sostengo y le digo a la cara, que su actuación en Buenos Aires ha sido vergonzosa”, mientras que Jiménez Brú aceptaba la separación siempre y cuando estuviera fundada en pruebas concretas y no en conjeturas. De Soria, en ese momento,

---

<sup>219</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 111, 02/07/1955.

apostó por continuar con la expulsión, mientras que Díaz Gramajo defendía lo contrario, y los miembros presentes, a excepción de Fuensalida, apoyaron la moción de De Soria. La reunión terminó con la reacción de las expulsadas, que se manifestaron en términos como “infame, canalla, desgraciado, sea más hombre, etc.”<sup>220</sup>.

De nuevo, tuvo lugar un conflicto en el seno de la comisión directiva y que, en esta ocasión, se saldó con la expulsión de dos miembros que mostraron su desacuerdo con las gestiones realizadas por quien era el máximo dirigente. La voluntad de integrar a los sectores disidentes, algo que parecía que por fin iba a comenzar a darse en esta etapa, quedó de nuevo abortada ante el cuestionamiento de la actuación planteado por Moya de Soria y Jiménez Brú.

El día después de este enfrentamiento se hacía pública en la prensa la noticia de que se había conseguido una rebaja del 50% en los pasajes de ómnibus y tranvías de la provincia para todos los docentes provinciales, mediante resolución del gobierno de la intervención, eso sí, siempre y cuando se contara con el carné de la agremiación<sup>221</sup>.

Fue durante esa primera semana de julio cuando, tras la estancia de Martiarena en Buenos Aires, se dispuso que la intervención provincial arbitrara los medios necesarios para hacer efectiva “de inmediato” la equiparación de sueldos básicos con los del orden nacional<sup>222</sup>, con lo que se conseguía el mayor éxito de la agremiación hasta la fecha, al menos en el plano teórico, puesto que el golpe que tendría lugar pocas meses después postergó la puesta en práctica de esta resolución.

También durante el mes de julio, y con motivo de un acto de homenaje a los próceres de la Nación, Herrera aprovechó para advertir a sus colegas que tuvieran precaución cuando escucharan las “manifiestas ofensivas que tienden a desprestigiar su labor [y que] estén alerta ante el confusionismo mal intencionado, no dejándose sorprender nuevamente en su buena fe firmando notas que puedan comprometer al afiliado”, aludiendo a lo esgrimido por algunos de los afiliados de Concepción, quienes dijeron desconocer el contenido de la nota de protesta que se les había invitado a firmar en contra de la gestión de Herrera. Al mismo tiempo, el secretario general agradecía de esta manera a los colegas:

---

<sup>220</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 111, 02/07/1955.

<sup>221</sup> Diario *La Gaceta*, 14/05/1955, p. 4.

<sup>222</sup> Diario *La Gaceta*, 07/07/1954, p. 1.



*“...de toda la provincia que hicieron llegar su contento por la equiparación, manifestándoles que sólo lo acepta como un homenaje al conductor de la nueva Argentina, general Juan Perón, y a su representante inmediato en esta provincia, su excelencia el comisionado nacional doctor José Humberto Martiarena”<sup>223</sup>.*

En relación a una nueva reunión celebrada en Buenos Aires, se informó de la admiración que el resto del magisterio sentía por el gremio tucumano, y se destacaba la labor de Martiarena<sup>224</sup>, del mismo modo que se significaba que:

*Efectivamente el Conductor del pueblo argentino había dicho al magisterio que previa organización sería oído en sus reclamos. Y como el magisterio provincial de Tucumán está sin excepción alguna formando una sola asociación sindical, ATEP, y ésta se encuentra dirigida por docentes elegidos por amplia mayoría de votos en elecciones limpias, era el caso de atender las gestiones permanentes de esa Comisión ante el Comisionado Nacional<sup>225</sup>*

Con ocasión de este encuentro, también tuvo lugar una recepción en el Consejo Superior del Partido Peronista Femenino, donde fueron recibidas por Nélida de Miguel, antigua delegada en Tucumán y en el momento diputada nacional. En el ministerio de transporte se les informó que estaba aprobada la rebaja para conducir a docentes del sur de la provincia, en un 50%.

Además, en esas mismas fechas la prensa recogía el primer punto de acuerdo alcanzado sobre el funcionamiento interno de la Federación Argentina de Maestros Provinciales, en la que Herrera ocupaba un cargo destacado: “El triunvirato designado por el consejo federal y los miembros del secretariado, señores Ernesto H. González, Santiago Elena y Enrique Bischoff; Eduardo Castro Luna, Jorge D. Herrera, José A. Guevara, Arnaldo Burgos, Francisco Javier Herrera y un representante de Buenos Aires, gobernarán conjuntamente la institución”<sup>226</sup>.

---

<sup>223</sup> Diario *La Gaceta*, 10/07/1954, p. 4.

<sup>224</sup> De hecho, a su regreso de Buenos Aires, Martiarena fue recibido por la totalidad de la CD de ATEP, entre representantes de otros colectivos, donde se le manifestó “el más sincero agradecimiento por la feliz gestión en pro de la equiparación de sueldos con el magisterio nacional efectuada ante el presidente de la Nación”. Diario *La Gaceta*, 08/07/1955, p. 3.

<sup>225</sup> Diario *La Gaceta*, 29/08/1955, p. 2

<sup>226</sup> *Ibidem*.

## IV. LA DÉCADA DE LA CONSOLIDACIÓN, 1955-1966

*“Los gremios docentes, al establecer y jerarquizar el valor de la escuela y de la cultura ejercen evidente función monitora; en cierto modo guían el proceso social. Establecen que las primeras prioridades son la salud y la enseñanza de los niños y de los jóvenes, y con ello indican que los presupuestos de las naciones los deben atender en primer término, aunque así -hasta ahora- no se haga.”<sup>1</sup>*

### 4.1. La “Revolución Libertadora” en Tucumán

El 16 de septiembre de 1955 tuvo lugar el golpe de Estado contra el gobierno peronista, cuando desde Córdoba se produjo el alzamiento militar que derrocó, cinco días más tarde, al presidente Perón<sup>2</sup>. La insurrección militar estuvo encabezada por el general Eduardo Lonardi, pero éste sólo se mantuvo al frente del recién instaurado gobierno durante dos meses, momento en que asumió el general Pedro Eugenio Aramburu, quien llegó a la presidencia fruto de las divisiones al interior del directorio militar<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Foradori, Américo, *Informe Final. Sobre las actividades profesionales, sociales y culturales del seminario sobre planificación y finanza escolar*. Buenos Aires, Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza- CAMYP, 1964, p. 4.

<sup>2</sup> Aunque explorar las condiciones necesarias para que se produjera el alzamiento militar no es objetivo del presente trabajo, queremos reproducir una interpretación temporalmente cercana a los hechos que, aún siendo absolutamente fiel a los propósitos de la Libertadora, apunta con acierto a la composición diversa del antiperonismo, mientras yerra al atribuir al levantamiento el carácter de espontáneo: “...la revolución contra Perón surgió como una forma de reacción, espontánea y separada, pero coincidente, de los más diversos sectores de la población argentina”. En: Del Carril, Bonifacio, *Crónica interna de la revolución libertadora*. Emecé Editores, Buenos Aires, 1959, p. 208. La lectura de Del Carril es relevante porque formó parte del golpe como asesor político del general Julio A. Lagos, quien dirigió las operaciones en la región de Cuyo. Para una interpretación historiográfica de la obra de Del Carril, véase: Spinelli, María Stela, “La desperonización. Una política de amplio alcance (1955-1958)”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf> (Consultado el 28/10/2010).

<sup>3</sup> Un destacado miembro del nacional-catolicismo argentino rescató la explicación oficial emitida desde la secretaría de prensa del gobierno, legitimando la corriente encabezada por Aramburu: “La crisis de gobierno se ha debido exclusivamente a la presencia en el seno del gobierno mismo de grupos influyentes en el espíritu del general Lonardi que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora, los cuales consiguieron apoderarse, ante el estupor de la sana opinión revolucionaria, de puestos llaves en la conducción del país., Esas personas y no otras intentaban colocar a la nación en una peligrosa senda a cuyo término sólo podía esperarse otra nueva dictadura”. Sánchez Sorondo, Marcelo, *Libertades prestadas. La Argentina del tiempo perdido*. Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 1970, p. 284

En el mundo de los trabajadores, la caída del peronismo fue recibida con estupor, a lo que inmediatamente siguió un intenso temor a las consecuencias sociales que el régimen de facto podría suponer, tras los avances conseguidos en los años anteriores. Al mismo tiempo, la CGT optaba por una actitud más pragmática, acorde con su tradición pactista, que se expresó mediante un llamado a la calma de sus afiliados<sup>4</sup>. En cualquier caso, resulta innegable la afirmación de que el golpe estuvo respaldado no sólo por aquellos sectores sociales que se incluirían en los descriptores de la oligarquía tradicional<sup>5</sup>, sino que también contó con el visto bueno, más o menos explícito, de una parte de la intelectualidad de izquierda<sup>6</sup>, militantes políticos de partidos con raigambre liberal y sectores de profesionales que sentían menoscabada su posición social<sup>7</sup>.

Pero si la CGT se apresuraba en tratar de aplacar el envite represor que se podía esperar del nuevo gobierno, la celeridad del directorio militar por poner en marcha un plan de reestructuración de la economía argentina no fue menor. El conocido como

---

<sup>4</sup> Para ilustrar esta posición valga como ejemplo el comunicado que a través de Radio del Estado, emitió la central obrera el día 21 de septiembre: “En momentos en que ha cesado el fuego entre hermanos y por sobre todo se antepone la Patria, la CGT se dirige una vez más a los compañeros trabajadores para significarles la necesidad de mantener la más absoluta calma y de continuar en sus tareas recibiendo únicamente las directivas de la Central Obrera. Cada trabajador en su puesto por el camino de la armonía para demostrar al mundo que hay en los argentinos un pueblo de hombres de bien; pues sólo en la paz de los espíritus es posible promover la grandeza de la Nación que es el modo de afianzar sus conquistas sociales. Miremos de frente, tengamos fe, lo demás lo hará la Patria”. Cfr.: Senén González, Santiago y Torre, Juan Carlos, *Ejército y sindicatos. Los 60 días de Lonardi*. Editorial Galerna, Buenos Aires, 1969, pp. 12-13.

<sup>5</sup> El principal mérito de los conspiradores fue utilizar los errores del peronismo para ir poniendo de su lado sectores diversos de gran influencia y poder. En este sentido, el conflicto con la Iglesia ha sido visto como la principal causa de la caída del peronismo. Para profundizar sobre esta convulsa relación consúltese: Zanatta, Loris, *Perón y el mito de la Nación católica*. Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

<sup>6</sup> Si bien es cierto que la intelectualidad argentina situó mayoritariamente al peronismo en el espectro de las experiencias autoritarias, no lo es menos que después del golpe del 55 se abrió lugar para un abordaje explicativo del fenómeno peronista más matizado que hasta ese entonces. Para conocer más sobre el papel de los intelectuales véase, entre otros: Berrotarán, Patricia y Bonet, María Teresa, “Opiniones, interrogantes y certezas: el peronismo bajo el prisma de los intelectuales”, Besse, Juan y Kawabata, Alejandro, *Grafías del 55. Otros repartos entre recuerdo y olvido*. Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, 1997, pp. 33-58.

<sup>7</sup> Podemos encontrar así, entre otros ejemplos, una lectura periodística idealizadora de lo ocurrido en Buenos Aires durante la noche del 22 de septiembre: “Esa noche, a pesar del toque de queda, puede decirse que media población se volcó en la calle. Salieron a relucir centenares de miles de escarapelas, gallardetes, cintas argentinas, banderas nacionales y retratos del general San Martín. Hombres y mujeres a pie, en camiones, en automóviles, recorrían las calles cantando y vivando la libertad. Los transeúntes se abrazaban, conocidos o desconocidos. Comenzaron a salir en libertad los presos políticos, que se unieron a los festejos, y sólo se escuchó un jubiloso grito: ¡Viva la libertad!”. Lamas, Raúl (Dir.), *Así cayó Perón, Crónica del movimiento revolucionario triunfante*. Editorial Lamas, Buenos Aires, 1955, p. 140.

“Plan Prebisch”<sup>8</sup> confirmó la sospecha de que uno de los principales objetivos del nuevo gobierno era la “desperonización” del sistema productivo<sup>9</sup>. Siguiendo la interpretación de A. Schneider:

*“Los lineamientos políticos generales del nuevo Presidente [Aramburu] estuvieron concentrados en dos asuntos básicos, íntimamente vinculados entre sí. El primero de ellos fue la modificación del sistema de acumulación de capital que por entonces imperaba en el país; para eso la Revolución Libertadora se propuso anular las conquistas sociales y económicas obtenidas por la clase obrera. En segunda instancia, la administración castrense quiso erradicar al peronismo de la sociedad argentina”*<sup>10</sup>

Evidentemente, el proyecto de la Libertadora no consistía tan sólo en un reencauzamiento de las dinámicas productivas arbitradas por el peronismo, sino que se propuso alcanzar un objetivo más trascendente, frente al que fracasó rotundamente<sup>11</sup>. El intento de hacer desaparecer de manera absoluta el inmediato pasado peronista se encontró con una tozuda resistencia que, una vez superada la conmoción inicial, hizo reverdecer los sentimientos de pertenencia a ese movimiento, e incluso propició la aparición de ramificaciones inéditas vinculadas a lo que comenzó a conocerse como el “peronismo revolucionario”<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Este plan recibe el nombre de Raúl Prebisch, economista nacido en San Miguel de Tucumán en 1901, quien confeccionó el recetario que la Libertadora habría de aplicar a la economía argentina que pasaba, entre otras medidas, por la incorporación al Fondo Monetario Internacional.

<sup>9</sup> Arturo Jauretche, uno de los más destacados intelectuales del ala izquierda del peronismo, expresaba en los siguientes términos una predicción sobre las consecuencias del Plan Prebisch que no está exenta de aciertos: “El plan Prebisch significará la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza y de nuestra renta hacia las tierras de ultramar. Los argentinos reduciremos el consumo, en virtud de la elevación del costo de la vida y del auge de la desocupación. De esta manera, no solamente aumentarán nuestros saldos exportables, sino que serán más baratos [...] La mayor parte de nuestra industria, que se sustentaba en el fuerte poder de compra de las masas populares, no tardará en entrar en liquidación. Los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada”. Jauretche, Arturo, *El retorno al coloniaje. De Prebisch a Krieger Vasena*. Ediciones del mar dulce, Buenos Aires, 1969, p. 125.

<sup>10</sup> Schneider, Alejandro, *Los compañeros: izquierda, trabajadores y peronismo en la Argentina, 1950-1973*. Imago Mundi, Buenos Aires, 2005, p. 83.

<sup>11</sup> En un provocador ensayo, J. P. Feinman apunta a esta imposibilidad para disolver el hecho peronista como su característica más relevante para la historia argentina de la segunda mitad del S. XX: “Los hechos concretos de la filosofía política del peronismo expresan una persistencia histórica alimentada por una obstinación de los sujetos que la protagonizan”. Feinman, José Pablo, *op. cit.*, p. 19.

<sup>12</sup> La principal personalidad de esta corriente, durante los primeros años de la proscripción, fue John William Cooke, abogado y economista, así como diputado peronista desde la primera hora. Figura clave de la corriente que apostó por la lucha armada, mantuvo una abundante correspondencia con Perón en el exilio (desde 1960 en Madrid). Según Ernesto Goldar, quien abre su ensayo con una cita del propio

El golpe de Estado tuvo su particular desarrollo en Tucumán. El día 17 de septiembre arribó a la provincia el teniente coronel Horacio Zenarruza, al mando del Batallón Monte Escuela de Tartagal, y la Agrupación de Ingenieros de Jujuy, bajo las órdenes del teniente coronel Manuel Tagino, oficiales que permanecieron fieles a Perón<sup>13</sup>. Zenarruza se hizo cargo del gobierno provisional ese mismo día, siguiendo las órdenes del coronel Jorge Gregorio Rosales, jefe militar de la zona norte. Quedaba así instaurada en la capital de Tucumán el estado de sitio y el toque de queda.

Tres días más tarde, Zenarruza fue reemplazado por Jorge Mario Moretti, quien estuvo al frente del gobierno mientras Lonardi asentaba su poder en Buenos Aires. El fin de esta inestabilidad se produjo con la asunción como interventor federal de Tucumán, el día 4 de octubre, del coronel retirado Antonio Vieyra Spangenberg, nombrado personalmente para el cargo por Lonardi.

La orientación economicista de la nueva administración se puso de manifiesto con las declaraciones de Vieyra Spangenberg, advirtiendo a los pocos días de su llegada sobre el estado crítico de las cuentas provinciales: la deuda pública consolidada era de 36.438.856,27 pesos y la no consolidada 375.566.078,45, sumando un total de 412.004.932,72 pesos<sup>14</sup>. Como quedaba patente, la imposición del modelo económico enarbolado por los militares tenía como núcleo una reordenación de los mecanismos de acumulación y distribución de los ingresos, y esto, a pesar de la primera voluntad

---

Cooke (“los comunistas, en la Argentina, somos nosotros”) Cooke significaba para el peronismo “la intransigencia en el movimiento nacional de masas, la prédica para no ‘alveizarse’, el alerta para que la clase obrera no afloje y se entregue desdentada”. Véase: Goldar, Ernesto, *John William Cooke y el peronismo revolucionario*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985, pp. 7-15. Para saber más sobre J. C. Cooke consúltense, entre otros: Brieza, Hernán, *John W. Cooke: el peronismo revolucionario*. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006; Recalde, Aritz, *El pensamiento de John William Cooke en las cartas a Perón, 1956-1966*. Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2009.

<sup>13</sup> Páez de la Torre, *Historia...*, op. cit., p. 689.

<sup>14</sup> Páez de la Torre, *Historia...*, op. cit., p. 693.

mostrada por Lonardi<sup>15</sup>, implicó la reacción adversa de los sindicatos con una combatividad social creciente, hasta entonces más moderada<sup>16</sup>.

Vinculado con el problema que acaba de ser apuntado, se entiende que la intervención de Vieyra Sprangenberg tuviera un final abrupto, puesto que el ejecutivo nacional no consideró suficientemente contundente su gestión del conflicto con los trabajadores ferroviarios en huelga<sup>17</sup>, cuyo movimiento había sido declarado ilegal<sup>18</sup>. El 29 de abril de 1957 asumió Daniel Ignacio Parodi, quien fuera Director General de Provincias del Ministerio del Interior. Parodi permaneció como interino unos días hasta la asunción definitiva de Nicolás Mario Juárez García, quien arrancó su etapa en la gobernación provincial el 5 de mayo de 1957.

#### **4.2. Los años del letargo, 1955-1957**

Como resulta lógico barruntar, la actividad de ATEP se resintió después del golpe militar, no sin antes sufrir un período convulso que, por otra parte, fue un lugar común en esos días<sup>19</sup>. Aún teniendo en cuenta la difícil situación que se presentaba para una organización directamente vinculada con el peronismo, la directiva de ATEP recibió notas de los delegados de las localidades de Río Seco, Villa Quinteros y Monteros, donde se le solicitaba la organización, junto con el resto de asociaciones magisteriales, de un acto para “tributar homenaje a los caídos en la lucha por la libertad”, aunque la

---

<sup>15</sup> Es importante tener en cuenta que Lonardi declaró no estar interesado en intervenir en la vida interna de los sindicatos, y lo quería demostrar con declaraciones como esta: “No he pensado en intervenir en la CGT. Mi propósito es inmiscuirme lo menos posible en la vida autónoma de las organizaciones obreras. Los obreros están naturalmente inclinados a la práctica de una sana democracia y espero tener en ellos los mejores auxiliares de mi gobierno”. Más allá de la veracidad de esta declaración de intenciones, lo cierto que es la CGT fue intervenida tan sólo después de que Lonardi saliera del poder, con motivo de una huelga general realizada el 16 de octubre de 1955. Véase: Senén González, Santiago y Torre, Juan Carlos, *Ejércitos y sindicatos...*, op. cit., p. 17.

<sup>16</sup> Según M. Peralta Ramos, este cambio en el modelo productivo tuvo efectos indelebles en la faz política del movimiento sindical peronista: “El contenido de clase del peronismo en la oposición cambió sustancialmente: de ser la expresión de una alianza de clases, el movimiento pasó a representar los intereses económicos y políticos de la clase obrera”. En: Peralta Ramos, Mónica, *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. FCE, Buenos Aires, 2007, p. 109.

<sup>17</sup> Sobre los conflictos de los ferroviarios consúltese: Bourdé, Guy, “L’Etat-patron et les luttes des cheminots en Argentine (1947-1967)”. *Le mouvement social*, N° 121, 1982, pp. 7-43.

<sup>18</sup> Paéz de la Torre, op. cit., p. 696. Sin embargo, el autor supone que la verdadera causa tenía que ver con que el gobierno trataba de promocionar los intereses de la UCR del Pueblo, mientras que el interventor y algunos de sus colaboradores, se mostraban más cercanos a la UCRI.

<sup>19</sup> Véase, por ejemplo, el comunicado enviado por la CGT a Lonardi como consecuencia de la ocupación de las sedes de la Federación Gráfica, Unión Ferroviaria y Sindicato Único de Portuarios en Buenos Aires. En: Senén González, Santiago y Torre, Juan Carlos, *Ejércitos y sindicatos...*, op. cit., pp. 29-30.

moción fue rechazada por “la situación actual” y porque había maestros que se habían declarado en contra de tal iniciativa<sup>20</sup>. Lejos de este propósito, la iniciativa del secretario general del gremio consistió en pedir audiencia al interventor Vieyra para presentarle los saludos del magisterio, en lo que constituyó un esfuerzo por tratar de evitar, con vistas a futuro, posibles situaciones difíciles con el gobierno de la intervención militar, esfuerzo que, como se verá más adelante, fue en vano.

Así fue que apenas una semana más tarde, y siguiendo una tónica que se había generalizado en otras entidades gremiales de la provincia, la sede de ATEP fue ocupada por un colectivo de “maestros libres”, quienes impidieron en un primer momento el acceso a los dirigentes en la sede de la calle Congreso. La respuesta de la CD ante este desafío fue comprometerse a realizar una asamblea general en la que se convocarían elecciones para renovar íntegramente a la directiva, mientras que Herrera trataba de salvaguardar la continuidad de la entidad prometiendo al interventor que ajustaría “su conducta sindical a las sugerencias del gobierno provisional”<sup>21</sup>.

Por su parte, el grupo de los “maestros libres”, favorables al nuevo régimen, había conformado una junta directiva provisional<sup>22</sup> que, además, acusaba a Francisco Herrera de ser responsable del mal estado financiero del gremio, diciéndose que recibió 46.000 pesos de la directiva anterior, y encontrándose actualmente sólo 682,75 pesos. El argumento que servía de respaldo a este grupo de docentes era que la directiva expulsada “había surgido de elecciones efectuadas bajo la presión oficial”<sup>23</sup>. No obstante, esta junta rescataba la labor de antiguas dirigentes como María Luisa Rodríguez Toscano de Jiménez Brú, Estela Josefina Moya de Monjes y Díaz Gramajo, puesto que “en plena dictadura estuvieron decididamente en la defensa de la libertad y la dignidad del maestro”<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 121, 01/10/1955.

<sup>21</sup> Diario *La Gaceta*, 07/10/1955, p. 4

<sup>22</sup> Esta directiva de facto estaba compuesta por los siguientes integrantes: secretaria general; Emma Rosa Fernández de Moreno Campos, prosecretaria general; Larisa Taddel de Fernández, secretaria administrativa y de actas; María Esther Fuensalida, secretario de hacienda; Julio Bulacio, prosecretaria de hacienda; Luisa Martínez de Teves, secretaria de asuntos gremiales, Sofía Zamorano Vega de Median; secretaria de asuntos educacionales, Diana Fernández Olivera; secretaria de cultura y acción social; Julia Segura; vocales, Eloísa María Pellegrina y Febe Almaraz. En: Diario *La Gaceta*, 07/10/1955, p. 4.

<sup>23</sup> Diario *La Gaceta*, 09/10/1955, p. 5.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

La composición de la junta provisional y las excepciones que ésta destaca dan cuenta de la disputa previa que existía por el control de la agremiación, puesto que se mencionaba a las ex directivas que más enfrentamientos habían tenido con el anterior secretario general. Al día siguiente, en un comunicado a la prensa, dejaban clara la postura de la nueva directiva:

*“Los maestros tucumanos, que al igual que otros muchos gremios líbranse de la imposición de ideas y creencias políticas sustentadas por el régimen depuesto e impuestas a través de organizaciones sindicales bajo su inspiración y manejadas por la coerción, el temor o el soborno de sus dirigentes, no pudieron permanecer ajenos al movimiento revolucionario que les brinda la oportunidad propicia para la reestructuración de su entidad representativa [...] sobre la base de una auténtica democracia sindical.”<sup>25</sup>*

La disputa por el control de la entidad se mantuvo en esos días, ya que a renglón seguido de la primera ocupación encontramos a Herrera que, contando con la ayuda de la policía, recuperó el gremio durante un día. Sin embargo, al día siguiente, y en ausencia de cualquier directivo de la entidad, el sector disidente se reapropió de la sede gremial. El todavía secretario general anunció su estrategia en la prensa, que pasaba por hacerse a un lado en la disputa abierta y recurrir a la justicia. En su descargo, Herrera apuntaba que las únicas irregularidades en el manejo de los fondos de la entidad podían haber sido realizadas por Díaz Gramajo, quien ocupó el cargo de prosecretaría de hacienda hasta el día 2 de julio, aunque el dirigente no aportaba argumentos firmes frente a la acusación que le había sido realizada.

Por otra parte, la todavía oficial directiva no descuidaba su empeño en mantener buenas relaciones con los flamantes responsables políticos, por lo que no olvidaron enviar el correspondiente mensaje de felicitación al Dr. Juan Ángel Tito Frías, por su nombramiento como subsecretario de Cultura de la provincia<sup>26</sup>. Por su parte, la junta de los “maestros libres”, también invitaba a participar al magisterio en el acto de nombramiento del citado funcionario, al tiempo que explicitaba los deseos de este grupo de docentes:

---

<sup>25</sup> Diario *La Gaceta*, 10/10/1955, p. 4.

<sup>26</sup> Diario *La Gaceta*, 13/10/1955, p. 2.



*“...que aspira para sus componentes una agremiación donde no tengan entrada las banderas políticas, religiosas, ni de índole extraña a la misión del magisterio, y dirigida con dignidad, honestidad y sentido patrióticos.”<sup>27</sup>*

A partir de este momento sobreviene un período de silencio documental, puesto que en los últimos días de octubre se decretó la intervención del gremio. Este mutismo se mantendrá hasta la dimisión del interventor de la agremiación, Emilio Concha<sup>28</sup>, a mediados de abril de 1956. Asimismo, resulta interesante comprobar, aunque nada inesperado, que en el momento de su salida, Concha utilizara las informaciones contenidas en las actas para subrayar las implicaciones políticas de la agremiación, haciendo referencia a algunas manifestaciones de orden político que ya han sido tratadas en el capítulo anterior<sup>29</sup>.

Concha abandonaba ATEP no sin antes presentar un informe a las autoridades, donde hizo balance de lo que, en su opinión, había sido la institución hasta ese momento, tanto en los aspectos gremiales como de administración de los recursos. En palabras de Concha, ATEP “es una típica expresión de lo que fueron los sindicatos en los tiempos de la dictadura [organizaciones] puestas al servicio de la propaganda y de la acción del partido oficialista”<sup>30</sup>. En esta misma línea, afirmaba que “las preocupaciones de estricto orden gremial siempre fueron supeditadas a las instrucciones de los dirigentes políticos justicialista”. Agregaba, además, que “los dirigentes de ATEP, en líneas generales y salvo excepciones, tomaron la vía cómoda y reprochable de la obsecuencia al partido oficialista y a sus cabecillas”, aunque lamentablemente no nos señala quiénes fueron para él esas salvedades en la dirigencia gremial<sup>31</sup>.

Por último, otro de los aspectos que destacaba el informe es el estado de las cuentas, informando que cuando actuó la intervención se contaba con 25.700 pesos en la

---

<sup>27</sup> Diario *La Gaceta*, 13/10/1955, p. 2.

<sup>28</sup> En el momento de su salida de ATEP, Concha manifestaba que su dimisión estaba provocada por su intención de participar en la vida política de una forma activa, que entendía incompatible con el desempeño que había estado desarrollando hasta ese momento, aunque dejaba claro que esta renuncia: “no significa una falta de colaboración con la Revolución Libertada, ya que entiendo que a la misma no sólo se la sirve desde la función pública sino también en la calle, especialmente en la dura tarea política”. Diario *La Gaceta*, 15/04/1956.

<sup>29</sup> Para completar, véase Diario *La Gaceta*, 15/04/1956.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Más allá del valor absolutamente sesgado de la interpretación de Concha, aunque se puedan compartir algunas de sus apreciaciones acerca de la vinculación de ATEP en ese período, consideramos interesante comprobar que las citas del libro de actas que utiliza para sostener sus juicios en el informe, se corresponden estrictamente con lo contenido en la documentación, tal y como hemos cotejado.

caja de la entidad, mientras que al momento de su salida ATEP había elevado su liquidez hasta la suma de 43.873 pesos. Por último, el informe concluía reportando que la actividad gremial había sido nula, dando el argumento, y no sin cierta dosis de sarcasmo, de “haber actuado durante el período de vacaciones”<sup>32</sup>.

### 4.3. La vuelta a la “normalidad”

El período que se abrió después de los gobiernos militares quiso ser presentado ante la sociedad argentina como una vuelta a la plena democracia que, según los “libertadores”, el peronismo habría secuestrado y que, Lonardi primero y Aramburu después, tuvieron que suprimir temporalmente para poder sentar las bases de este refundado Estado<sup>33</sup>. Lo cierto es que aquella democracia distaba mucho de poder considerarse legítima y completa, en tanto en cuanto la opción electoral que hubiera conseguido más apoyos estaba desterrada, por la fuerza de las armas, de los cauces oficiales de participación política<sup>34</sup>. El punto de arranque de este cambio institucional se sitúa en el 12 de abril de 1957, cuando el gobierno militar aprobó el decreto n° 3838/57, que llamaba a elecciones constituyentes para el día 28 de julio. Los resultados de esa jornada arrojaron un claro diagnóstico de la situación argentina. La “fuerza política” que registró más apoyo fue el voto en blanco, a llamada del peronismo proscrito<sup>35</sup>.

En el caso tucumano, el vigor que mostraba el peronismo se presumía envidiable para cualquier otra fuerza política. En ocasión de esas mismas elecciones, los resultados obtenidos alcanzaron los 136.054 votos en blanco (casi el 40% del total de los

---

<sup>32</sup> Diario *La Gaceta*, 15/04/1956

<sup>33</sup> Entre las iniciativas puestas en marcha por Aramburu cabe destacar que en lo económico se proponía: “suprimir controles, atraer inversiones y que los sacrificios sean soportados proporcionalmente por todos”. Sáenz Quesada, María, *La libertadora: 1955-1958*. Sudamericana, Buenos Aires, 2007, p. 156.

<sup>34</sup> Hubo algunos intentos que, aunque resultaron fallidos, exploraron las posibilidades de constituir un partido “neoperonista” con visos de continuidad en una eventual democracia consolidada. Tal es el caso de la Unión Popular, partido dirigido por el antiguo ministro de Relaciones Exteriores, Juan Atilio Bramuglia. Para conocer más sobre esta experiencia consúltese: Rein, Raanan, “El primer peronismo sin Perón: la Unión Popular durante la Revolución Libertadora”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Rein.pdf> (Consultado el 03/12/2010).

<sup>35</sup> Mientras el partido ganador de los comicios, la Unión Cívica Radical del Pueblo, había obtenido el apoyo de un 24,20% de los sufragios, el voto en blanco había alcanzado el 24,31%. En: Melon Pirro, Julio César, “Los números del ‘Recuento’. El primer test electoral del peronismo en la proscripción”, p. 5. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Melon1.pdf> (Consultado el 12/11/2010).

sufragios) contra 73.699 de la UCRI y 51.699 de la UCRP, los dos partidos legales mayoritarios que se adjudicaron representación constituyente<sup>36</sup>.

El acceso del candidato de la UCRI a la presidencia de la Nación, Arturo Frondizi<sup>37</sup>, tras las elecciones celebradas el 23 de febrero de 1958, significó una moderada apertura de los ámbitos de participación política<sup>38</sup>. Aunque se mantuvo el desalojo del peronismo, fue precisamente esta actitud juzgada como demasiado condescendiente para con el peronismo, algo que dio argumentos suficientes al ejército para, una vez más, intervenir en el curso de la vida política nacional y situar a José María Guido como presidente de facto, el 29 de marzo de 1962. Que las FF.AA. supervisaran a los gobiernos civiles se mantuvo a lo largo de la cronología que abordamos en nuestro estudio.

Como cabía esperar de sus impulsores, los tres gobiernos que se sucedieron durante el período que ocupa este capítulo (dos plebiscitados y uno de facto), cumplieron con un programa económico que tuvo duras consecuencias sobre los trabajadores de la Argentina, trayendo consigo la pérdida de capacidad adquisitiva y el aumento de los niveles de desocupación, especialmente en los sectores manufactureros<sup>39</sup>. Para los docentes, quienes también sufrieron esta disminución en sus condiciones materiales, estos años inauguraron dos décadas de lucha sindical en defensa de los trabajadores de la educación, del sistema educativo público y de los valores democrático y de libertad. En el siguiente punto veremos cómo emerge la generación de militantes que cambió el rumbo de la organización docente tucumana.

---

<sup>36</sup> Pavetti, Óscar Américo, “Azúcar y Estado en la década de 1960”, en: Bonano, Luis Marcos, *Estudios de Historia Social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX* (vol. II). Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2001, p. 158.

<sup>37</sup> La figura de Arturo Frondizi ha sido objeto de recientes estudios. Partiendo del ya clásico trabajo de C. Altamirano, en los últimos años se han sumado otros aportes, entre los que se pueden mencionar: Altamirano, Carlos, *Arturo Frondizi o el hombre de ideas como político*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998; Gambini, Hugo, *Arturo Frondizi*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 2006; Llairó, María Monserrat, *Frondizi: un nuevo modelo de inserción internacional*. EUDEBA, Buenos Aires, 2003.

<sup>38</sup> Una interpretación de este nuevo estado de cosas, que desde nuestro punto de vista alberga espacios para el matiz, es la que aporta Liliana de Riz: “a partir de 1958, con el acceso de Frondizi al gobierno, se abandonó la pretensión de liquidar a la dirigencia gremial peronista, e incluso durante el período 1958-1962 se reconoció el predominio peronista en el gremialismo y se lo apuntaló desde el Estado”. De Riz, Liliana, *Concertación, estado y sindicatos en la Argentina contemporánea*. Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1987, pp. 19-20.

<sup>39</sup> Ese decrecimiento de la capacidad de compra de los trabajadores ha sido cifrado en un 10% durante el período 1959-1961, y en un 4% para 1961-1963. Bourde, Guy, *La classe ouvrière...*, op. cit., p. 650.

#### 4.3.1. Retorno a la acción gremial

La actividad sindical se pudo retomar a partir de julio de 1957. En ese primer momento, parecía urgente la reconstrucción del enclenque aparato de la organización. Desde el gobierno militar se comisionó a un grupo de afiliados para componer una directiva de transición que recuperara las dinámicas de funcionamiento interno del sindicato y comenzara su labor gremial en un período de tiempo razonable. Así se entiende que el programa de actuación se iniciara con la solicitud a las directoras de todas las escuelas, en vistas a la actualización de la nómina de delegadas escolares que se postulaban para participar en la agremiación. Para dotar de vigor a este primer impulso, se convocó una asamblea para el día 10 de agosto, con un orden del día compuesto por el estudio de la reforma estatutaria y la fijación de la cuota mensual, lo que tenía por fin último regular los ingresos de ATEP y retomar la prestación de los servicios sociales. Sin embargo, esta reunión fue postergada hasta el 31 de agosto porque no se pudo contar, antes de esa fecha, con los datos preceptivos. Con ocasión de este encuentro se reanudó la tramitación para obtener la personería gremial, al tiempo que se hizo saber que los servicios sociales que aún se prestaban tenían que quedar suspendidos hasta haber reordenado la financiación de la entidad<sup>40</sup>.

El gobierno de la intervención provincial había dispuesto la conformación de la nueva directiva, que estaba integrada por los siguientes afiliados: Rosa Mustafá<sup>41</sup>; secretaria general, Dora Gordillo; prosecretaria general, Carmen G. Domínguez; secretaria gremial, [ilegible] Gómez; secretaria de administración y actas, Julio Segura Bulacio; secretario de Hacienda, Ángela S. de la Bárcena; prosecretaria de Hacienda, Dora G. de Risso Patrón; secretaria de asuntos educativos, Antonio P. de Toledo; secretario de acción social, Mercedes de Uslengli, Serafina Costafreda, Aurora Corominas y Aída G. de Casádez, como vocales titulares, y Antonia Villafane Vega, Delina Rosa Soraire, María Estela G. Soria y Dolores Dulce, como vocales suplentes<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> El caso al que se hace mención es el de un médico que continuaba atendiendo afiliados, aún cuando la entidad no tenía recursos suficientes para asumir los gastos derivados. En: AA, acta n° 124, 13/07/1957.

<sup>41</sup> Mustafá venía de ocupar el puesto de interventora de ATEP, nombrada por el gobierno provincial. Aunque no se ha podido documentar una actividad destacada previa a la ostentación de este cargo, permaneció activa después de dejar el cargo, oponiéndose a la directiva que la sucedió a la cabeza de la entidad.

<sup>42</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 126, 07/08/1957.

Con relativa celeridad se recibió, a finales de septiembre, la aprobación del Consejo de Educación para proceder a los descuentos gremiales, aunque todavía quedaba en ese momento por cumplir el trámite de presentar las autorizaciones firmadas por cada uno de los afiliados<sup>43</sup>, operación que resultó más complicada de lo previsible, puesto que la directiva desconocía el número de miembros con que contaba la entidad en ese momento<sup>44</sup>.

La siguiente asamblea de delegados se convocó para el 16 de noviembre, sin que se registrara en esa primavera ninguna actividad significativa de la agremiación, más allá de los esfuerzos por tratar de recomponer la estructura interna. En el orden del día figuraban: la consideración del proyecto de escalafón que estaba por presentarse al interventor, las posibles actuaciones del gremio en las reglamentaciones para el acceso a los cargos de consejero docente y director de escuela, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de los servicios sociales y, por último, una convocatoria de elecciones para dar el pistoletazo de salida a esta nueva etapa de la entidad<sup>45</sup>.

Asimismo, entre los primeros destellos de reclamaciones al gobierno provincial, se denunció que el Consejo de Educación llevaba sin pagar los viáticos por desplazamiento de los docentes durante dos años, adeudándose las cantidades correspondientes a 1955 y 1956, y estando todavía en estudio las de 1957.

Las repercusiones de la reactivación de las actividades políticas y sindicales en la segunda mitad de 1957, no quedaron al margen de los movimientos de unificación gremial docente que comenzaban a despuntar. Así se entiende que a finales de año se recibiera la invitación de la CAM<sup>46</sup>, sección argentina de la organización que también había retomado sus actividades, para participar en un congreso de próxima celebración. Ante esta invitación, la CD dispuso convocar a la asamblea a que considerase un plan para ser presentado en la reunión celebrada en Santiago del Estero, entre los días 6 y 7

---

<sup>43</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 129, 28/09/1957.

<sup>44</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 130, 11/10/1957.

<sup>45</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 131, 26/10/1957.

<sup>46</sup> La Confederación Americana del Magisterio se fundó en el IV Congreso Americano de Maestros, realizado en Santiago de Chile en 1943. Esta organización, respaldada por la Internacional del Magisterio Americano, sirvió como espacio de reflexión de escala continental acerca de cuestiones como el desarrollo económico, la independencia nacional y los valores de la democracia. Véase: Pita González, Alexandra, “La internacionalización del magisterio americano: propuestas educativas y tensiones políticas”, *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, Vol. 13, N° 17, 2011, pp. 237-262. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/869/86922615010.pdf> (Consultado el 07/07/2015).

de diciembre<sup>47</sup>, decidiéndose enviar a los afiliados Dora Gordillo y Manuel Aldonate como representantes del magisterio tucumano<sup>48</sup>. Este gesto, que podría ser pasado por alto, supuso la confirmación de que la directiva, afín a los propósitos del todavía gobierno militar, adoptaba una actitud bien distante de la observada en el período peronista que, sin embargo, facultaba para la toma de decisiones a una mayoría de afiliados de extracción mayoritariamente peronista. Tantas habían sido las críticas sobre el dirigismo político de la entidad en la etapa previa que, siendo coherentes con ese discurso, los directivos consideraban que la única manera de legitimar las decisiones del gremio pasaba por incorporar a las bases de una forma activa. Tanto fue así que el establecimiento de canales de participación de las bases resulta clave para comprender las decisiones que el gremio de los docentes adoptó tan sólo unos meses después.

En el congreso de la CAM estuvieron representadas siete provincias, y se adoptó la decisión de dirigir sus actividades hacia la equiparación de sueldos y la aplicación del Estatuto del Docente, así como se formuló la petición de que los maestros cesanteados fueran reintegrados a sus puestos<sup>49</sup>. Entre los aspectos más destacables de esta reunión se encuentra una petición fundamental y que, de nuevo, hace inteligibles algunas de las prácticas sindicales seguidas en los años venideros: “la posibilidad de que los docentes participen en política como cualquier otro ciudadano”<sup>50</sup>. Por otra parte, Gordillo estimaba que la asistencia del Prof. Santamarina, quien era presidente del Consejo de Educación tucumano, había sido muy bien recibida por el resto de entidades gremiales

---

<sup>47</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 132, 09/11/1957.

<sup>48</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 133, 05/12/1957.

<sup>49</sup> Al igual que en otros ámbitos de la administración pública, el cese de personalidades vinculadas al peronismo fue una medida frecuente en el intento del gobierno militar de “depurar” las instituciones públicas. En este sentido, el magisterio provincial no fue una excepción.

<sup>50</sup> Esta referencia es interesante puesto que ayuda a debilitar la extendida idea de que el docente se debía antes que nada a su función social. Aunque pudiera pensarse que se trataba de una concepción demodé, lo cierto es que bajo el gobierno de Frondizi, pretendidamente visto por sus simpatizantes como modernizador, se seguían dando cobijo a publicaciones que defendían este ideal del maestro como ciudadano con atributos distintos del resto. Un ejemplo de éstas es la *Revista de Educación*, editada por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador en esos días, Óscar Alende, había trabajado en su juventud como empleado del consejo provincial de educación. Así es que, en un artículo firmado por Leonor Cabrera, se podía leer: “El maestro no es un empleado más, el maestro está dedicado a una actividad especial a la que debe concurrir con todos sus actos públicos y privados, a una actividad en la que se funda la profunda repercusión social y la estabilidad de su obra [...] Y si trabajaron, evolucionaron y se jubilaron siempre en su modesto puesto, oscura y silenciosamente, sin pretensiones ambiciosas; si hicieron el sacrificio de mantenerse ignoradas en el renunciamento, mayor su triunfo, más definitiva su consagración”. En: *Revista de Educación*, n° 4, abril 1958, p. 114; una nota biográfica sobre O. Alende en: <http://www.lanacion.com.ar/170794-alende-un-bisonte-que-supu-hacerse-escuchar-en-politica> (Consultado el 29/06/2015).

pero que, en cualquier caso, restaba una importante dosis de autonomía respecto de las resoluciones tomadas, ya que la presencia de Santamarina implicaba la representación del poder político en un ámbito que debía haber sido ocupado exclusivamente por los representantes de los trabajadores.

Algo tanto o más importante que el refuerzo de la vinculación establecida con otras organizaciones fue la aprobación de la personería gremial provisional de la entidad<sup>51</sup>, lo que habilitó la posibilidad de descontar la cuota gremial de los afiliados y sanear el maltrecho estado financiero de la entidad. Sin embargo, aunque el paso dado era significativo, estos descuentos a los afiliados no se llegaron a efectuar hasta marzo de 1958, en un acto que demostraba la poca voluntad del Consejo de Educación y, por ende, del poder político provincial de proveer a las entidades gremiales de los recursos económicos que por derecho les correspondían.

Entrado ya 1958, y comenzando el fin de esta etapa de transición, se planteó la cuestión de la celebración de elecciones para renovar a la directiva, sin dejar de lado el intento de hacerse escuchar ante la administración del gobernador Celestino Gelsi<sup>52</sup>, mediante la presentación un proyecto de escalas salariales, en el que se recogía la actualización de la primera propuesta, que de 1.700 pesos mensuales pretendía alcanzar los 2.000 pesos, para el caso de los maestros de grado, y los 1.900\$ para los maestros en escuelas especiales<sup>53</sup>. Aunque estas peticiones fueron desatendidas, y la actividad gremial mantuvo una baja intensidad, se puede hacer un balance moderadamente positivo de esta directiva, en función de un resultado concreto que sentó las bases para el músculo sindical que ATEP desarrolló con los nuevos dirigentes y su apertura a las bases. La obtención de la personería gremial, atribución que la entidad tucumana fue de las primeras en obtener de entre los docentes de todos el país, constituyó un salto

---

<sup>51</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 134, 19/12/1957. La resolución definitiva no se registró hasta el 26 de abril de 1962.

<sup>52</sup> El gobernador y líder provincial de la UCRI, Celestino Gelsi, nació en Tucumán en 1915 y se licenció en Derecho en la Universidad de Córdoba. Fue tres veces diputado en la legislatura provincial durante el peronismo y diputado nacional en 1957. Durante su mandato, de 1958 a 1962, tuvo que enfrentar al sindicalismo radicalizado, con especial relevancia por parte de la UCIT y FOTIA. Entre sus obras de gobierno destaca el afán por mejorar las infraestructuras públicas, como fue el caso del dique de El Cadillal. Véase: Páez de la Torre (h), Carlos, *Historia...op.cit.*, p. 699; Campi, Daniel y Bravo, María Celia, "Aproximación a la historia de Tucumán en el siglo XX. Una propuesta de interpretación", Orquera, Fabiola, *Ese ardiente jardín de la República. Formación y desarticulación de un "campo" cultural: Tucumán, 1880-1975*. Alción, Córdoba, 2010, p. 30.

<sup>53</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 138, 19/04/1958.

cualitativo sin el cual no se hubieran podido llevar a cabo las políticas gremiales que se van a analizar a continuación.

#### **4.3.2. Desde abajo y apuntando arriba: elecciones y nueva directiva**

En el transcurso de esta nueva convocatoria electoral tuvieron lugar una serie de circunstancias inéditas que ameritan ser tenidas en cuenta. Por primera vez desde su fundación, concurrieron cuatro listas electorales, en lo que constituye un síntoma inequívoco de que la diversidad de proyectos que convivían, hasta entonces, ajenos a la esfera directiva, que habían podido fraguar sus aspiraciones en torno a candidaturas autónomas. A esta apertura en la participación, se suma el compromiso adoptado por las cuatro agrupaciones de no impugnar las listas completas sino que, llegado el caso, sólo se haría a candidatos individualmente. Esta decisión implicaba la voluntad de evitar erosionar a los adversarios en función de su adscripción política previa, ya que resulta difícil imaginar que muchos de los candidatos incluidos en las listas electorales pudieran certificar esa ausencia de mácula peronista requerida.

En este mismo sentido incluyente, no sólo se convocaba a los afiliados de ATEP<sup>54</sup>, sino que todos los maestros fueron invitados a participar de los comicios, algo que resulta explicable por el nuevo estatus gremial recientemente adquirido con el reconocimiento de la personería. Surgió, no obstante, un desacuerdo a la hora de elegir a los delegados departamentales, puesto que las listas “Violeta”, “Azul y Blanca” y “Roja y Blanca” propusieron postergar la elección de éstos, a lo que la directiva en funciones replicaba que el argumento de la falta de tiempo no era válido, achacando la dificultad para conseguir listas de candidaturas completas, fundamentalmente, a la indolencia de los maestros<sup>55</sup>. Finalmente, el resultado de las elecciones fue el siguiente: lista “Azul y Blanca”, 604 votos; lista “Violeta”, 304 votos; lista “Verde”, 269 votos; lista “Roja y Blanca”, 234 votos; en blanco, 7 votos; nulos, 0 votos; total de votos emitidos: 1.418.

Esta repartición de los apoyos implicaba que, al no alcanzarse el porcentaje del 25% de votos requerido en los estatutos, no hubo que considerar la representación de la

---

<sup>54</sup> Lamentablemente no contamos con una cifra exacta de los afiliados de ATEP en ese momento, pero después del periodo de inactividad, y la suspensión de los descuentos gremiales, cabe pensar que el número habría disminuido en relación a la etapa peronista.

<sup>55</sup> AA, CD, Libro I, acta n° 139, 23/04/1958.



minoría en la dirección sindical. Estos resultados proporcionaban, por tanto, una sólida legitimidad a la directiva entrante, en tanto que había sido capaz de lograr un apoyo muy significativo de los afiliados en el marco de unas elecciones limpias. De esta manera, la nueva CD que tomó posesión el día 8 de junio, quedó constituida por los siguientes miembros: Presidente; Francisco Isauro Arancibia, Vicepresidente; Nelly Medina Ripollet, Secretario General; Segundo Elías Dip, Tesorero; Joaquín René Cazalbón, Protesorera; Margarita Luca de Miguel, Secretaria de Acción Social; Esther Toledo de Miguel, Secretario de Asuntos Gremiales; Juan Bautista Bulacio, Vocales titulares: Cipriano Abraham Rivero; Hortensia Heredia de Dávila; María Rosario Castro y [ilegible] Medina<sup>56</sup>.

Entre los nombres de la nueva directiva se advierte la inclusión de Cipriano Rivero, quien ya fue mencionado en el capítulo anterior, como uno de los miembros “díscolos” de la agremiación, protagonistas de la asamblea del 1º de agosto de 1953. De la inclusión de Rivero en la dirección, así como de otros miembros que reaparecerán con posterioridad, inferimos que las pulsiones de las bases sindicales habían estado sometidas ante la maquinaria oficialista de la etapa anterior y que, cuando tuvieron ocasión de hacerlo, se pusieron del lado de dirigentes que se apartaban del pactismo y la unión de voluntades con el poder político.

La recuperación de ciertos espacios de participación sociopolítica en el contexto de la democracia tutelada tuvo tempranas derivaciones en el sector de los docentes. Sólo bajo esta óptica se puede entender que, apenas una semana más tarde de la asunción de la nueva directiva, una delegación de maestros se presentara en la sede sindical para pedir que se protestara ante el gobernador Gelsi, demandando la reintegración de los miembros del Consejo de Educación, de manera definitiva y compuesto por maestros titulados en la escuela normal nacional<sup>57</sup>. La respuesta emitida desde el ministerio de Gobierno fue que el Consejo de Educación estaba intervenido y continuaría en esa forma hasta tiempo indeterminado. En esa ocasión ATEP recibirá, además, una contestación que puede ser aplicada a todos los conflictos que el gremio encarará, pues se convirtió en un denominador común ante cualesquiera fueran las demandas del magisterio. Se entendía pues, que los problemas económicos de los docentes quedaban

---

<sup>56</sup> AA, CD, Libro II, acta nº 142, 10/05/1958.

<sup>57</sup> AA, CD, Libro II, acta nº 143, 17/05/1958.

subordinados a otros de mayor importancia y, en este sentido, el argumento esgrimido es más que ilustrativo: “en lo referente a sueldos no les pudo adelantar ninguna solución concreta; hasta tanto sea resuelto el problema azucarero en la provincia”<sup>58</sup>.

Pero mucho estaba comenzando a cambiar en el sindicato con la llegada de la nueva directiva. En su primera reunión se tomó la iniciativa de solicitar al gobierno provincial un aumento de emergencia de 1.000 pesos sobre los salarios vigentes, hasta que la legislatura y el gobierno considerasen la propuesta de sueldo básico para maestro común de 3.000 pesos y 2.900 pesos para los maestros especiales, contando además con un aumento uniforme de 300 pesos cada dos años, que había sido presentada por la directiva sindical saliente<sup>59</sup>. Esta petición de ATEP tiene aún más arrojo si se tiene en cuenta que se planteó el día después de que en la legislatura provincial se sancionara la ley de equiparación con el magisterio nacional, que aún necesitaría del visto bueno de la comisión de finanzas y obras públicas de la legislatura<sup>60</sup>.

De hecho, los problemas que afectaban a los docentes no eran pasados por alto desde las instancias del poder legislativo, ya que inclusive se presentó a iniciativa de los diputados José del Valle López y Pascual E. Ibáñez, una moción para que se procediese a: “la inmediata reincorporación de los maestros dejados cesantes por causas políticas o gremiales durante el período de las intervenciones federales del gobierno de facto”<sup>61</sup>.

Un *tour de force* promovido personalmente por Isauro Arancibia fue la convocatoria de asambleas abiertas, celebradas en diversas localidades, con el fin de recibir las propuestas de los afiliados, algo que indudablemente suponía un mayor acercamiento a las bases que el visto en la etapa anterior. En todo caso, a pesar de la

---

<sup>58</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 144, 31/05/1958.

<sup>59</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 145, 12/06/1958.

<sup>60</sup> El artículo primero de la ley fue aprobado en los siguientes términos: “Desde la promulgación de la presente ley, el personal docente dependiente del Consejo General de Educación de la Provincia gozará de las mismas bonificaciones por antigüedad, escalafón, asignaciones familiares, por razones de distancia y demás beneficios que estable el presupuesto de la Nación para el magisterio primario de esa jurisdicción”. Posteriormente el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia sancionaban con fuerza de ley la equiparación del magisterio provincial con el nacional en las bonificaciones por antigüedad, escalafón, asignaciones familiares, por razones de distancia y demás beneficios. Mientras tanto, en el debate sobre la equiparación de los salarios un senador se expresaba de la siguiente manera, respecto de las enseñanzas que debían recibir las alumnas en la escuela: “una niña se hará mujer no por la enseñanza de las cuatro operaciones tan sólo [...] Se hará mujer cuando esa niña aprenda también en la escuela primaria a manejar la aguja y los artefactos de cocina”. En: ALT, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputado, 11/06/1958, p. 186.

<sup>61</sup> ALT, Diario de Sesiones..., 26/06/1958, p. 291.

persistencia de algunos asistentes porque las asambleas tuvieran un carácter que fuera más allá del sondeo de opinión, la CD se acogía a la reglamentación estatutaria para dotar a estos encuentros de una función estrictamente consultiva.

La primera de ellas tuvo lugar en la ciudad de Aguilar. Entre las peticiones recogidas destacamos las relativas a que el Consejo de Educación se hiciera cargo no sólo de la provisión de los materiales necesarios para la enseñanza, sino que también se encargase del transporte de los alumnos hasta los centros escolares. Este tipo de inquietud tiene un valor reseñable, puesto que da cuenta de que los docentes estaban no sólo preocupados por sus condiciones materiales, sino que existía inquietud acerca del funcionamiento del sistema educativo en su conjunto. En este sentido, también se recogían peticiones acerca de la realización de actividades culturales en los centros escolares, especialmente en las escuelas rurales

En relación a las demandas de tipo económico, o vinculadas con la mejora de las condiciones de trabajo, se destacaron las peticiones de: ampliación de licencias médicas hasta treinta días, ampliación de licencias por fallecimiento de familiar hasta diez días y la obtención de un régimen jubilatorio con salario actualizado anualmente, móvil en las fuentes, que evitara la devaluación con motivo de la inflación.

Sin duda, la propuesta más interesante recibida en el curso de la asamblea fue la realizada por la afiliada David, quien presentó un completo programa de acciones a seguir, en donde se quería reforzar la presencia del maestro en el órgano directivo docente, así como defender la injerencia de los maestros en la redacción de las leyes educativas. Los puntos expresados eran los siguientes:

- a) Solicitar la pronta integración del Consejo de Educación; b) Que se le dé al magisterio el derecho de elegir al presidente y dos vocales; c) Que una vocalía sea representada por un maestro del sud de la provincia; d) Propiciar la reforma de la ley de educación común en vigencia, dando injerencia en tal reforma al propio maestro; e) Que se constituyan por zona tribunales de ética, para juzgar y sancionar al maestro que incurra en faltas, contradiciendo la conducta que un educacionista debe observar; f) Que se gestione para lograr que la sección archivo e informes del Consejo[de Educación] esté en manos de maestros; g) Que se imponga un emblema o distintivo para la agremiación; h) Que se edite la propia Revista*

*del magisterio provincial, y que cada maestro haga su aporte literario;*  
*i) Que se luche por concretar la Casa del Maestro*<sup>62</sup>

La participación del maestro en el organismo público del que depende es una constante en las quejas expresadas por los afiliados y la CD recogió esta petición, como veremos, planteando con frecuencia ese requerimiento. Es interesante constatar que en esta reunión, la anterior secretaria general Rosa Mustafá, declaraba desconocer el motivo por el cual no se descontaba al maestro la cuota sindical. A su entender, si el descuento no se llevaba a cabo sería debido a la falta de personal en el Consejo. En cualquier caso, se dispusiera o no efectivamente del personal administrativo necesario para acometer el trámite<sup>63</sup>, este procedimiento ponía de relieve el desdén con que el gobierno provincial trataba a la organización docente que, por otra parte, no había llegado más allá de la presentación de respetuosos petitorios, esquivando la posibilidad de poner en riesgo la tranquilidad de las autoridades políticas. Isauro Arancibia, por su parte, terminó la reunión exhortando a la unidad y firmeza del gremio. Finalmente, ante las voces que se levantaban entre el auditorio, preguntando acerca de qué harían si no se cumplía la ley de educación, el presidente respondió que “la CD y el gremio sabrán hacer cumplir la ley”<sup>64</sup>.

La segunda asamblea se celebró en la localidad de Monteros, contando con la asistencia de unas 350 personas<sup>65</sup>. Esta importante concurrencia sirvió para tomar el pulso del magisterio en la ciudad natal del presidente Arancibia. Como en la ocasión anterior, algunos asistentes insistieron en que la reunión no tuviera carácter un meramente informativo, pero desde la CD se volvió a emplazar al auditorio a la celebración de una asamblea general ordinaria, con la presencia de todos los delegados escolares, para tomar definitivamente las decisiones que se consideraran oportunas. Haciendo hincapié en las medidas económicas que se querían conseguir para el gremio, Arancibia declaró al inicio del acto que “el hombre jamás llegará a ser libre si se ve acuciado por necesidades económicas”<sup>66</sup>, arrancando los aplausos de la mayoría de

---

<sup>62</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 147, 28/06/1958. Consúltase el acta completa en el Anexo I.

<sup>63</sup> Desafortunadamente no podemos cotejar los datos que emanan de las fuentes del sindicato, ya que durante el transcurso de esta investigación resultó imposible acceder al archivo del Consejo de Educación de la provincia de Tucumán.

<sup>64</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 147, 28/06/1958.

<sup>65</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 148, 05/07/1958.

<sup>66</sup> *Ibidem*.

asistentes. Acto seguido, se comenzaron a escuchar voces que pedían la concentración inmediata de todo el magisterio frente a la Casa de Gobierno, para exigir los aumentos salariales. Aparecieron también entre los asistentes, llamados a la solidaridad, unión y compañerismo de los docentes para la consecución de estos logros laborales.

Mustafá, que de nuevo estuvo presente en la reunión, exhortó a que se diera verdadero significado a una propuesta presentada por J. Bulacio<sup>67</sup>, en la que se pedía que el gremio entrara en estado de alerta. Su propuesta pasaba por hacer que se designara al maestro provincial como docente argentino, para así disolver las diferencias entre uno y otro colectivo, y que la agremiación tuviera injerencia en las designaciones del Consejo y de los consejeros docentes. Al cierre de la reunión, yendo en contra del carácter que había sido otorgado a la misma, Arancibia anunciaba a los asistentes que el gremio de los maestros provinciales se declaraba en estado de alerta.

Después de estas reuniones, la CD comprendió que el éxito de las convocatorias en el interior de la provincia despertaba una preocupación inédita entre los representantes políticos provinciales<sup>68</sup>. Durante esas jornadas se diagnosticó una menor implicación de los docentes afincados en la capital, quienes tradicionalmente habían sido más activos. Para tratar de revertir esta situación, se adoptó la medida de recorrer todas las escuelas de la capital, en un intento de captar la adhesión de los docentes y tener ocasión de explicar el proyecto y actividades que la nueva directiva sindical tenía en su agenda.<sup>69</sup>

Lo cierto es que esta iniciativa tuvo un éxito incontestable. La siguiente asamblea, que se celebró en la sede del Centro de Socorros Mutuos de la capital tucumana, contó en esa ocasión con la asistencia de 800 colegas docentes<sup>70</sup>. Arancibia inauguró el acto manifestando que la ley de educación vigente era demasiado amplia y que daba margen a interpretaciones que podían llegar a resultar contradictorias, especialmente en lo referente a la integración de Consejo de Educación, organismo para el que la CD no había postulado candidato alguno. En efecto, uno de los problemas que más ocupaba la

---

<sup>67</sup> Julio Bulacio falleció en enero de 2014. Sobre este dirigente sindical y ex diputado provincial radical, consúltese su necrología en: <http://www.lagaceta.com.ar/nota/577506/politica/fallecio-julio-pibe-bulacio.html> (Consultado el 02/02/2014).

<sup>68</sup> Mientras tanto, pocos días después del encuentro de Monteros, se recibió una nueva invitación de la CAM a participar en otro congreso, al que se decidió no enviar delegados por el dañado estado financiero.

<sup>69</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 150, 12/07/1958.

<sup>70</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 151, 19/07/1958.

atención de la CD era el proyecto de ley que se estaba tramitando en esos días, y que fue finalmente presentado a mediados de agosto<sup>71</sup>.

Arancibia insistía en que entre los considerandos del decreto de intervención del Consejo se incluía la prohibición de representación gremial, ante lo cual ATEP había decidido enviar comunicados al gobernador y al ministro del Interior, así como al vicepresidente y presidente de la Nación. Esta decisión, que hasta ese instante no se había hecho pública, fue recibida con la aprobación unánime de los asistentes.

Sin embargo, en la asamblea se tuvo que tratar el pedido de intervención de ATEP por parte de un grupo de maestros que consideraba que la declaración de estado de alarma del gremio había sido hecha en violación de los estatutos<sup>72</sup>. La propuesta fue desestimada por cuanto se entendió que con ésta sólo se perseguía cuartear la unidad del gremio. Otro de los aspectos tratado fue el aumento de sueldo que había sido concedido por el gobierno unos días atrás, calificado desde la presidencia sindical como de “migajas”.

A partir de este momento, y contando con el apoyo unánime de los participantes, se estableció que el inmediato objetivo de ATEP no era otro que alcanzar la equiparación entre los maestros provinciales y los del sistema nacional, en todos sus alcances. La animosidad era tal que en el transcurso del debate incluso se llegó a considerar la redacción de una petición formal dirigida al ejecutivo, para propiciar la intervención de las cámaras legislativas que, a juicio de los docentes, estaban resultando incompetentes en esta materia. Del mismo modo, y cabe enfatizar acerca de la celeridad que adquirirían los acontecimientos, aparece entre los asambleístas la posibilidad de

---

<sup>71</sup> La diputada Alba Onil fue la encargada de la redacción del proyecto de ley de estabilidad y carrera docente. La sanción de esta ley, como el estatuto provincial del docente que veremos más adelante, constituyó el referente jurídico hacia el que dirigir los reclamos del magisterio. El sistemático incumplimiento de las disposiciones de que se había dotado la administración resultaron ser un sólido argumento al que apelar. No obstante, tanto los reales problemas financieros de la provincia, como la inestabilidad institucional que minaba la validez de los ordenamientos jurídicos, hicieron que ATEP se encontrara en sus conflictos frente a un interlocutor incapaz unas veces, imposibilitado otras, de ofrecer soluciones reales a los problemas presentados. En cualquier caso, la ley de estabilidad contempló una serie de derechos que quedaron marcados a fuego en el magisterio. Entre ellos se puede mencionar el artículo 2º que establecía que: “Ningún docente podrá ser exonerado, declarado cesante o suspendido en sus funciones sino por falta grave de conducta o de idoneidad probada, mediante sumario previo instruido por un director docente y con participación del interesado”. Otro artículo destacable es el número 22: “Equipárase, al solo efecto del escalafón, a maestro nacional, a los docentes con títulos supletorios o sin títulos que presten actualmente servicios en la docencia, y que tengan cinco años de antigüedad como mínimo, aunque fueran discontinuos”. ALT, Diario de Sesiones..., 16/08/1958, pp. 438-442.

<sup>72</sup> Desafortunadamente no contamos con registros para conocer quiénes realizaron ese pedido.

convocar al gremio a una huelga. Sin embargo, se decidió esperar a una nueva convocatoria de asamblea, a celebrarse en los próximos veinte días. En esta ocasión, la reunión se cerró con una declaración que reafirmaba la decisión y el compromiso de la directiva para con lo expresado por los delegados de la entidad: “la CD luchará por la ley y por su gremio”<sup>73</sup>.

En el curso de ese invierno tuvieron lugar algunas actuaciones determinantes para el futuro recorrido de la agremiación. En primer lugar, continuaba el camino legislativo para que tuviera aplicación la ley de equiparación recientemente aprobada<sup>74</sup>. Sin embargo, el acontecimiento más notable se produjo con la sanción del estatuto del docente por parte del gobierno provincial<sup>75</sup>. Además, con respecto a la voluntad de normalización del consejo de Educación, los miembros de la CD mostraban sus inquietudes ante la posibilidad de que sus actuaciones fueran entendidas como una crítica política al gobierno, frente a lo que se recordaba que “la lucha de ATEP será siempre la lucha del gremio y no cabe asomar ideas políticas”<sup>76</sup>. Del mismo modo, en esta fecha se recibió la confirmación de que el ministerio de gobierno había aprobado que la contaduría del consejo de Educación retuviese la cuota sindical de todos los afiliados, momento desde el cual el gremio podía comenzar a manejar sus propios fondos. Interesante resulta la intervención de Rivero en este sentido, cuando se alegraba por dejar de “estar subsidiados” por los afiliados que brindaron aportaciones económicas voluntariamente, para pasar “gracias a la medida del gobierno” a recibir una “inyección en la vida gremial”. En cualquier caso, la interlocución entre el gremio y el gobierno escolar estaba desconectada ya que, sin estar integrado el consejo, se encontraban en la práctica frente a la inexistencia de autoridades a las que recurrir<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 151, 19/07/1958.

<sup>74</sup> ALT, Diario de Sesiones..., 04/09/1958, p. 514.

<sup>75</sup> La Ley 14.473 fue aprobada el 12/09/1958 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el proceso de redacción de la ley, la CGT provincial mostró su apoyo al sindicato docente, por lo que los maestros correspondieron enviando una nota de agradecimiento a la delegación de la central obrera a comienzos de septiembre. Véase: AA, CD, Libro II, acta n° 154, 05/09/1958.

<sup>76</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 155, 16/10/1958.

<sup>77</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 158, 18/10/1958.

#### 4.3.3. El largo camino hacia la unificación docente

En el ámbito nacional continuaron los movimientos tendentes a avanzar hacia la coordinación entre diferentes sindicatos docentes. En este sentido, la Federación Provincial del Magisterio de la Provincia de Santa Fe invitó a ATEP a participar del Congreso Nacional de escuelas de provincias, con la intención de unificar la lucha gremial que pretendía la equiparación salarial entre docentes provinciales y nacionales. Al encuentro, que se celebró el día 30 de noviembre de 1958<sup>78</sup>, asistieron Rivero y Cazalbón, quienes habían sido nombrados delegados por la CD, y que incluso tuvieron que costear los gastos derivados de su participación en el congreso con sus recursos personales<sup>79</sup>. En las jornadas se dieron cita representantes de entidades sindicales docentes provenientes de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, Mendoza. Otras organizaciones, como fue el caso de la Confederación Argentina de Docentes y los sindicatos docentes Salta, Jujuy y Corrientes, mostraron también su adhesión, aunque no participaron enviando delegados. El congreso había sido convocado y estaba presidido por la “Comisión Central Pro Mejoras Económicas del Magisterio Santafesino”, donde se nucleaban representantes de los trabajadores docentes de las distintas escalas del sistema educativo. En el desarrollo de la reunión, y mediante el estudio de los informes presentados, se puso de manifiesto que sólo la provincia de Córdoba tenía íntegramente solucionado el problema de la equiparación, mientras que en lo tocante al caso tucumano, como sabemos, la cuestión aún se encontraba en la fase de estudio parlamentario<sup>80</sup>. Las conclusiones de la reunión fueron las siguientes:

---

<sup>78</sup> En esos días, la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe se manifestaba en contra de la modificación del artículo 1º de la ley 4810, que contemplaba el reconocimiento del tiempo hubiesen durado las cesantías a los efectos de cotización jubilatoria, acusando al ejecutivo provincial de establecer “una diferenciación casi partidista”. El proyecto del ejecutivo consistía en dejar al margen de este beneficio a los docentes que hubieran sido cesanteados con anterioridad al 16 de septiembre de 1955. En: Diario *El Litoral*, 29/11/1958, p. 3.

<sup>79</sup> AA, CD, Libro II, acta nº 159, 27/11/1958.

<sup>80</sup> Lo cierto es que el trámite para la equiparación venía haciéndose desde junio de ese mismo año, cuando la legislatura de Tucumán envió a la comisión de finanzas y obras públicas el proyecto de ley para la equiparación en bonificaciones por antigüedad, escalafón y otros beneficios. Véase: ALT, Diario de Sesiones..., 11/06/1958, p. 186.



1. *Promover un movimiento único en la docencia del país, con el objeto de:*
  - a. *Defender los intereses económicos del magisterio;*
  - b. *Bregar por la pronta sanción de una ley de equiparación al capítulo de remuneraciones del estatuto del docente nacional en todas las provincias argentinas e incorporarlas a los presupuesto del año próximo;*
  - c. *Incluir una ley de jubilaciones de conformidad con el estatuto del docente nacional;*
  - d. *Actualizar los sueldos en forma anual de acuerdo con los índices del costo de la vida;*
  - e. *Realizar el estudio de la actualización y efectivización [sic.] de la ley 2737 y otras posibles fuentes de recursos para asegurar las conquistas económicas del magisterio;*
  - f. *Gestionar que en las provincias donde funcione escuelas municipales, se encomiende al Departamento Ejecutivo arbitre las medidas conducentes para equiparar los sueldos del personal de las mismas.*
2. *Formar una comisión central, integrada provisoriamente por la entidad patrocinadora de la asamblea con sede en Santa Fe, para la conducción y centralización del movimiento. La comisión decidirá la división de la república en comisiones zonales para asegurar el éxito del trabajo.*
3. *Invitar a las organizaciones docentes que existen en el país colaborar en la constitución de las subcomisiones zonales apoyando en forma decidida la labor del comité central.*
4. *Solicitar un aporte único voluntario a las entidades adheridas para sufragar gastos iniciales de la comisión.*
5. *Recomendar a las organizaciones docentes de cada provincia y municipalidad, que se preocupen por el estudio y sanción de instrumentos que regulen la carrera docente en todos sus aspectos, sobre la base de los mejores antecedentes en la materia.*
6. *Realizar un congreso nacional del magisterio en la capital federal en la segunda quincena de febrero de 1959.*<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Diario *El Litoral*, 02/12/1958, p. 4.

Tras el receso navideño, Al contrario de lo que había sucedido con la anterior invitación cursada por la CAM, y gracias a la mejora de las finanzas gremiales, la dirección de ATEP aprobó asistir a la reunión que se iba a celebrar en La Plata, resolviendo comisionar de nuevo a Arancibia y Cazalbón<sup>82</sup>. El viaje se convirtió en un espaldarazo para la entidad, a tenor de las conclusiones de la reunión. Arancibia consideró que la entidad cumplió un papel satisfactorio al establecer vínculos con otras agrupaciones docentes del interior, mientras que por su parte, Cazalbón se mostraba convencido de que “Tucumán puede ser y debe serlo, la capital o sede de CAM”<sup>83</sup>. Arancibia subrayaba estos propósitos cuando decía que:

*“no somos ilusos al pretender que Tucumán sea la provincia revolucionaria en el aspecto educacional, por lo tanto todos los maestros debemos aspirar a superarnos en todos los aspectos: cultural, social y económico.”*<sup>84</sup>

Respecto del campo asistencial del sindicato, es a comienzos de 1959 cuando se toma la decisión de prestar servicios sociales a los afiliados de ATEP, aunque en esos primeros momentos algunos militantes aún no habían firmado la autorización para el descuento correspondiente. La oferta de cobertura médica estaba pensada para asistir a 2000 personas, por lo que la dirección consideraba que una parte importante del gremio recibiría la iniciativa favorablemente, mediante el aporte de 12 pesos mensuales por afiliado<sup>85</sup>. La renovación de los servicios médicos, que en aquellos meses había amparado también a los familiares de los afiliados, tuvo que renovarse en mayo de 1959. Para conseguir este objetivo se necesitaba contar con un mínimo de 1.500 afiliados que contribuyeran mensualmente con un 3% de su salario básico<sup>86</sup>.

Otra de las medidas en este ámbito fue la creación de una caja de créditos y ahorros. En el seno de la directiva se evidenciaron dos corrientes de opinión acerca del funcionamiento de la futura caja. Por un lado estaba la propuesta de Díaz, quien sugería tasar los préstamos de forma más elevada que las instituciones financieras corrientes, con la intención de obtener mayores réditos de las operaciones. Por otro lado se encontraba la postura que finalmente se impuso, encabezada por Arancibia, que

---

<sup>82</sup> AA, Libro II, acta n° 164, 05/02/1959.

<sup>83</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 165, 10/03/1959.

<sup>84</sup> *Ibidem*

<sup>85</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 162, 13/01/1959.

<sup>86</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 165, 15/05/1959.

proponía facilitar un crédito menos gravoso que el de las instituciones oficiales, por cuanto a su juicio la función de la entidad docente no era “ganar dinero, sino cambiar la situación de apremio que sufre el maestro”<sup>87</sup>.

En los días siguientes se abrió una interesante discusión acerca de si el asesor legal, Lucio Díaz, debía percibir un salario por los trabajos que prestaba en la entidad gremial. Esta iniciativa fue presentada por Arancibia y a ella se adhirió De Miguel. Es interesante comprobar la postura que toma el interesado en este momento, puesto que en la argumentación que expone para defender lo innecesario de obtener remuneraciones a cambio de su trabajo en ATEP, hace un diagnóstico personal del gremialismo argentino. Sus palabras fueron las siguientes:

*“Soy, estimados colegas, un maestro, un afiliado más de ATEP. Siempre cuidé y seguiré haciéndolo, de los intereses del gremio. No acepto la burocracia sindical, ni deseo dar origen a ella, mal del sindicato actual. Trabajaré siempre, mientras pueda, sin remuneración alguna. No cobraré haberes, mi imperativo categórico es ese”*<sup>88</sup>

Sin embargo, a pesar de lo expresado por Díaz, y a iniciativa del propio Arancibia, se convino en pagar a Lucio Díaz a razón de 2.000 pesos mensuales<sup>89</sup>.

A finales de enero, se tomó la decisión de enviar una delegación a Buenos Aires, integrada por Arancibia y Calzalbón, con el fin de exigir el envío de fondos que posibilitarán el pago de la equiparación de los salarios de los docentes, coincidiendo así con la presencia del gobernador provincial y el ministro de gobierno en la capital federal<sup>90</sup>.

Las gestiones en Buenos Aires comenzaron con la sorpresa de las autoridades tucumanas, que no esperaban la presencia de la delegación enviada por ATEP. Según informaron a su regreso, el gobernador les prometió tener en reserva 35 millones de pesos para efectuar el pago de la equiparación, reiterando un pedido de paciencia y confianza hacia el gobierno, por parte de los representantes sindicales. Sin embargo, los dirigentes no mostraban muchas expectativas en las promesas de Gelsi. De hecho,

---

<sup>87</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 161, 10/01/1959.

<sup>88</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 167, 27/06/1959.

<sup>89</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 168, 25/08/1959.

<sup>90</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 163, 24/01/1959.

estuvieron tentados de acudir a los medios de comunicación cuando supieron que los funcionarios tucumanos no habían planteado en la reunión con el subsecretario de Hacienda de la Nación la cuestión de los docentes, pero aun así decidieron esperar al regreso del gobernador a la provincia, antes de tomar medidas de mayor alcance<sup>91</sup>.

A mediados del año en curso, la lentitud de las cámaras legislativas tucumanas frente al cumplimiento de la ley de equiparación salarial, aprobada a fines del año anterior<sup>92</sup>, inquietaba crecientemente al magisterio. En las reuniones de la CD se percibía la predisposición y el convencimiento de ejercer medidas de fuerza si no se llegaba pronto a una solución concreta del problema. Es este sentido, De Miguel expresaba que: “debemos estar siempre preparados para salir hasta la calle en lucha por nuestra equiparación”<sup>93</sup>, mientras que De Zarlenga ponía el acento sobre la escasa movilización de los docentes al remarcar que “el magisterio está esperando que de pronto cobrará su equiparación de 1958 y tener la de 1959”<sup>94</sup>. Arancibia, además, incidía en que el magisterio debía luchar para conseguir que las cámaras aprobaran finalmente el proyecto presentado por la diputada Alba.

#### **4.4. La ruptura de la tradición**

La lucha gremial que se va a producir a partir de 1959 representó un acontecimiento inédito en la historia del sindicalismo docente tucumano. Esta ruptura de la tradición sindical sólo es comprensible a través de un proceso de toma de conciencia del docente en tanto que conformador de la clase trabajadora, que como hemos visto hasta el momento, aún no parecía del todo maduro.

El fenómeno de la huelga docente ha sido atendido por el análisis social desde diversas perspectivas. Consideramos que los trabajadores de la educación adquieren su verdadera significación social en el momento en que deciden llevar a la práctica estrategias de lucha que se enfrentan a su código deontológico y profesional. El tratamiento recibido desde la administración, el empeoramiento de sus condiciones de

---

<sup>91</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 164, 05/02/1959.

<sup>92</sup> Fue a finales del mes de junio cuando se registró la primera petición de fondos para la equiparación de salarios, por parte de las Cámaras de legisladores provinciales de Tucumán al Congreso de la Nación. Véase: ALT, Diario de Sesiones..., 25/06/1959, pp. 496-536.

<sup>93</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 166, 06/06/1959.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

subsistencia, y el hartazgo que generan las promesas sistemáticamente incumplidas imprimieron en el magisterio tucumano los desagavios necesarios para la protesta. En palabras de E. P. Thompson, “la clase la definen los hombres mientras viven su propia historia y, al fin y al cabo, esta es su única definición”<sup>95</sup>

Los docentes tucumanos inician en estas jornadas una transición que culminará siete años más tarde. El primer paro docente significó un aldabonazo para los políticos provinciales, que no esperaban del gremio de los maestros una participación de esas dimensiones. En cualquier caso, la trayectoria seguida por el sindicalismo docente sufrió modulaciones en su intensidad, que impiden hablar de una progresión lineal en este proceso colectivo.

#### **4.4.1. Antecedentes de las huelgas**

La primera gran huelga de ATEP se inició el 7 de septiembre, por los motivos que se han identificado anteriormente. La permanente promesa incumplida de cobro de la equiparación salarial, que no hacía más que prolongarse, determinó en última instancia la iniciativa tomada por ATEP. La reacción del gobernador Gelsi fue tratar de deslegitimar el movimiento, amenazando con que toda “maestra reemplazada, no volverá a ocupar un cargo en la provincia, por ningún concepto”<sup>96</sup>, y apuntando a que la huelga tenía como finalidad última:

*“crear problemas de índole político al gobernador de Tucumán [ya que] hace más o menos veinte días, en una finca cercana a Colonia Lilita, situada en Los Ralos, departamento de Cruz Alta, concurrieron a una reunión miembros de esa entidad de maestros para conversar con dirigentes políticos, resolviéndose entonces hacer jugar el artículo quinto de la Constitución Nacional”<sup>97</sup>*

---

<sup>95</sup> Thompson, E. P., *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Crítica, Barcelona, 1989, p. 15

<sup>96</sup> Diario *El Litoral*, 07/09/1959, p. 1.

<sup>97</sup> Diario *El Litoral*, 07/09/1959, p. 1. El texto del mencionado artículo de la Constitución nacional es el siguiente: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. Gelsi no erraba al apuntar que ATEP quería incidir en la responsabilidad jurídica que ostentaba el gobierno provincial respecto del mantenimiento del sistema educativo y, por ende, de quienes trabajaban para él. Así

El éxito de la huelga fue rotundo en los primeros días, llegando la policía a protagonizar diversas actuaciones de carácter violento, que impidieron que los docentes dieran clase a sus alumnos fuera de las escuelas. Una de las consecuencias de esta represión fue que resultó herida una niña, Cristina Vecci, alumna de cuarto grado, cuando se encontraba presente en la sede del Centro Social de la calle Alberdi, número 71. La respuesta de los docentes a estas provocaciones fue, a partir de ese momento, continuar con las clases en clubes u otros establecimientos donde se hiciera necesaria una orden de allanamiento antes de poder proceder al desalojo. Según la prensa, la concurrencia a las escuelas del personal directivo y docente fue nula. Ante esta situación, el gobierno de Gelsi habilitó a los legisladores provinciales para nombrar docentes reemplazantes de aquellos que estuvieran en huelga, incluso sin tener en cuenta la posesión o no de los títulos habilitantes. Inés David, vocal del Consejo General de Educación, no sólo consideraba que la huelga era justa por la situación económica de los maestros, sino que entendía que la medida dictada por el gobernador era “un arbitrariedad incalificable y un atropello a las autoridades del Consejo”<sup>98</sup>.

Un día después de estos hechos, la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe hizo una declaración de solidaridad con el magisterio tucumano, que demostraba la creciente articulación del movimiento sindical docente a nivel nacional<sup>99</sup>.

A fines de septiembre la CD evaluaba los gastos derivados de las jornadas de lucha en 55.000 pesos<sup>100</sup>, al mismo tiempo que se decidía prolongar el gasto durante el tiempo que continuara, aunque incidiendo en la importancia de que todos los desembolsos tuvieran que ser correctamente contabilizados<sup>101</sup>. A estas alturas del conflicto, ya se empezaba a considerar que la petición inicial de 2.000 pesos había

---

entendido, el fenómeno de las huelgas docentes del sector público debe ser entendido como un acto político en sí mismo, puesto que siempre se pasa por apelar al Estado al incumplir las garantías que él mismo se otorga haciendo uso de su legitimidad soberana.

<sup>98</sup> Diario *El Litoral*, 08/09/1959, p. 2.

<sup>99</sup> “Es inadmisibles que haya provincias que permanezcan insensibles al drama económico que viven las clases laborales más humildes del país y estén abonando a sus maestros un sueldo que resulta miserable frente al abrumador costo de la vida [...] y que más lamentable es todavía el hecho que el gobernador de Tucumán Dr. Celestino Gelsi cometa el atropello contra las autoridades del Consejo de Educación, autorizando a legisladores a nombrar reemplazantes en lugar de los maestros en huelga”. Además, con respecto al desalojo ya mencionado, se afirmaba que era “una reiterada manifestación de barbarie que no prestigia al gobierno tucumano ni a la cultura del país” En: *Ibidem*.

<sup>100</sup> A esta cifra habría que añadir los 43.660,45 pesos que se aprueban a finales de diciembre. En: AA, CD, Libro II, acta n° 173, 30/12/1959.

<sup>101</sup> AA, CD, Libro II, n° 169, 29/09/1959.

quedado obsoleta, en tanto en cuanto el gobernador sólo ofrecía pagar septiembre equiparado y una cuota hasta el 10 de octubre, lo cual era considerado por ATEP como el reintegro de un mero anticipo, y no una mejora en firme de los ingresos del magisterio.

En otro sentido, hasta ese momento, la CGT regional no había participado o mostrado solidaridad con el movimiento de los maestros. En el trascurso de una reunión se llegó a considerar que la central obrera podría arbitrar el conflicto, sin embargo, la mayoría de la directiva de ATEP consideró que la CGT regional se había comportado de manera desleal, ya que se esperaba que se hubiera unido al paro o, al menos, hubiese convocado alguna otra manifestación de apoyo. En este contexto también surgió un grupo con vocación de intermediar entre los intereses de los docentes y su contraparte gubernativa, el de los padres de alumnos, quienes se mostraron dispuestos a colaborar en la solución del conflicto.

Si bien es cierto que la cuestión salarial era la que había dado origen al movimiento, en este momento del conflicto los intereses de ATEP se dirigían, como primera prioridad, a conseguir la puesta en libertad de los afiliados Núñez y Bulacio, que habían sido detenidos en el curso de las jornadas de protesta, al tiempo que trataban de buscar una salida al conflicto que no significara una derrota de la agremiación que acabara por debilitar la unidad gremial que se había fraguado durante aquellas jornadas.

En la primera semana de octubre se levantó provisionalmente la huelga de los docentes, por un tiempo determinado de 48 horas. El Consejo de Educación invitó a los docentes reemplazantes a que dejaran su puesto a los titulares, pero tras la negativa de muchos se hizo incluso necesaria la intervención policial. El gobierno, por su parte, consideraba que el conflicto había sido superado, por cuanto se había procedido al pago de la equiparación reclamada, por lo que no entendía necesario tratar gestión alguna con ATEP. Al mismo tiempo, advertía que se descontarían los días de huelga, a lo que la entidad gremial respondía con el pedido de destitución del titular del Consejo de Educación, Orlando Lázaro, “por no merecerles confianza”<sup>102</sup>.

La huelga se saldó finalmente con la intervención del Consejo de Educación, tras las renunciaciones presentadas por el presidente, Orlando Lázaro y las vocales María Esther

---

<sup>102</sup> Diario *El Litoral*, 03/10/1959, p. 1.

Iturre de Enderle, Adelaida M. B. de Flavia y María A. Dip. También fue destituida de su cargo la vocal María Inés David, aunque sin que ésta hubiera presentado su renuncia. A partir de ese momento se nombró como interventor del consejo a Guillermo Federico Jerez<sup>103</sup>.

La intervención del consejo respondió a la iniciativa gubernamental por la cual se pediría una nota individual por parte de los maestros que hubieran adherido el paro, en un evidente intento de significar personalmente a todos los participantes de la huelga<sup>104</sup>. Como no podía ser de otra manera, ATEP protestó ante lo que significaba una violación de las potestades que en cuanto a representación colectiva se recogen en la ley de asociaciones profesionales, en virtud de la cual correspondía a la entidad gremial a elaborar dicha nota colectiva<sup>105</sup>. La decisión adoptada por la directiva fue la de dar libertad a los afiliados a la hora de completar o no la declaración individual, pero reservándose el derecho a intervenir si se consideraba que de esas firmas se derivaba algún perjuicio para el docente. Aún así, el interventor del consejo trataba hacer ver a la agremiación que la situación podía reencauzarse, incluso, sin que se llevaran a cabo las sanciones planteadas en un primer momento, eso sí, salvo algunas excepciones<sup>106</sup>.

La huelga había pasado factura también en otro sentido, puesto que fruto del desgaste vivido en los días de lucha, se produjeron varias renunciaciones antes de acabar el año<sup>107</sup>. La más significativa fue la de Julio Bulacio, que aludió motivos personales pero que, en virtud de su desempeño previo, fue desestimada en primera instancia,

---

<sup>103</sup> Diario *El Litoral*, 05/10/1959, p. 2.

<sup>104</sup> De hecho, si bien es cierto que las sanciones a los maestros huelguistas no se hicieron esperar, también tenemos tempranas muestras de que la oposición política al ejecutivo, bien por intereses partidarios o bien convencidos de lo expresado, se dirigía al gobierno “pidiendo la suspensión de las medidas adoptadas contras los maestros que participaron en el movimiento huelguístico efectuado por la ATEP, y la adopción de las que dispongan la inmediata reincorporación de los que hubieren sido sancionados hasta la fecha”. Silvestre Argañaraz en: ALT, Diario de Sesiones..., 21/10/1959, p. 998.

<sup>105</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 170, 05/10/1959.

<sup>106</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 171, 17/10/1959.

<sup>107</sup> Sin que esto significara que la actividad del gremio se hubiese visto interrumpida. Por ejemplo, una semana después del levantamiento del paro, ATEP decidió participar del Congreso del Norte Argentino (véase: AA, acta CD n° 171, 17/10/1959), celebrado en la capital de Jujuy, donde presentaron con un programa de objetivos preciso:

1. Traslados y permutas entre escuelas y reconocimiento de servicios prestados en ambas reparticiones (nacional y provincial) para todos los efectos.
2. Conocimiento de ATEP.
3. Crear bases reales para un mayor acercamiento entre el magisterio del norte; periodicidad del Congresos y Consultas.
4. Los índices del Orden Nacional; sean automáticamente aplicados en el orden provincial



invitándosele a reconsiderar su decisión. Otros que sí formalizaron su renuncia fueron el síndico titular, Antonio Noé Diclemente, y la secretaria de Acción Social, Esther Toledo de Miguel<sup>108</sup>.

#### **4.4.2. El desarrollo de los conflictos**

Desde la intervención del consejo se pusieron en funcionamiento los mecanismos necesarios para dificultar al máximo las condiciones de subsistencia del sindicato huelguista. La decisión de suspender el descuento de las cuotas sindicales y servicios sociales de los afiliados de ATEP suponía horadar aún más en el agujero económico de la entidad, al tiempo que contribuía a sembrar el malestar entre un colectivo que vería disminuidas las prestaciones sociales que venían recibiendo por el más que probable impago de la entidad gremial<sup>109</sup>. En una reunión mantenida con el ministro de Gobierno, se dijo a los representantes de ATEP que el cobro de las cuotas de retroactividad que se adeudaban quedaba subordinado a que la Nación enviara los fondos suficientes<sup>110</sup>. De este modo, y ante las trabas puestas por el gobierno escolar, la agremiación optó por obtener las cuotas mediante la personación del afiliado en la sede gremial o bien por el intermedio de los delegados escolares, quienes recibieron esta potestad por encargo de la CD<sup>111</sup>. Sin embargo, la medida ejecutada por el consejo tuvo una rápida repercusión,

---

<sup>108</sup> La CD quedó entonces compuesta por: Presidente: Francisco Isauro Arancibia; Vicepresidente: Cipriano Abraham Rivero; Secretario General: Segundo Elías Dip; Prosecretario: Manuel Aragón; Tesorero: Joaquín René Cazalbón; Protesorera: Margarita Lorca de Miguel; Secretaria de Acción Social: Hortensia Heredia de Dovich; Secretario Gremial: Juan Bautista Bulacio; Vocal titular 1ª: María Rosario Castro; Vocal titular 2ª: Olga Angélica Mojar; Vocal titular 3ª: Marina Heredia de Baumann; Vocal titular 4ª: Blanca Rodríguez de Zarlenga; Síndico titular: Benicio Álvarez. En: AA, Libro I, acta CD n° 173, 30/12/1959. Sin embargo, la presencia de Bulacio sólo se prolongó por tres meses, momento en que finalmente fue aceptada su renuncia, quedando la secretaría de asuntos gremiales encabezada por Rosario Castro. En: AA, CD, Libro II, acta n° 175, 26/03/1960.

<sup>109</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 174, 23/02/1960.

<sup>110</sup> Sin embargo, al mismo tiempo la legislatura mocionaba a favor del pago de horas extras al personal del consejo de educación, producto de la dedicación invertida para “poner en condiciones la contabilidad a los efectos de que se pueda atender la equiparación”. En distinto sentido, el diputado Critto, desde la bancada opositora de la UCRP, aprovechaba estaba moción para criticar la política de cesantías y traslados con la que estaba procediendo el ejecutivo que, en su decir, “afecta la dignidad del magisterio tucumano ya que fue maltratado por el Poder Ejecutivo en ocasión de la última huelga docente”, llegando incluso a mencionar los casos del cese de la Sra. Lamesson y el traslado de la Sra. de Juárez. En: ALT, Diario de Sesiones..., 26/11/1959, p. 1143. Véase también la primera propuesta de Miguel F. Critto, dirigida al Poder Ejecutivo, “expresando la preocupación de la Cámara por la violación del artículo 2° de la ley 2.000 en que incurre la intervención del Consejo de Educación, empeñada actualmente en la tarea de aplicar sanciones y producir traslados injustificados que afectan exclusivamente al personal que participó en la última huelga docente”. En: ALT, Diario de Sesiones..., 25/11/1959, p. 1303.

<sup>111</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 176, 05/04/1960.

ya que pronto se alcanzaron los 120.000 pesos de deuda ante la cooperativa médica, luego de no descontar el monto correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo<sup>112</sup>. Esta situación se prolongó hasta mayo, cuando el estado de las cuentas hizo necesario que se publicara un mensaje avisando a todos los afiliados que era necesario ponerse al día con el pago de las cuotas sociales, mediante los dos mecanismos ya mencionados, a fin de no perder el derecho sobre el uso de los servicios sociales<sup>113</sup>. En cualquier caso, una vez superada esta situación, la cobertura sanitaria continuó ampliándose con la renovación del contrato para la prestación de servicios médicos, al tiempo que se firmaron nuevos acuerdo con el Centro de Propietarios de Farmacia y el Colegio de Bioquímicos<sup>114</sup>.

Un episodio interesante fue el que se desarrolló a partir de finales de junio de 1960, momento en el que se comenzó a tramitar la nueva ley provincial de educación. Desde ATEP se invitó a los miembros de la Comisión Revisora del proyecto, con el fin de intercambiar ideas acerca de la forma de solicitar a las autoridades de la legislatura provincial la modificación del articulado propuesto por la diputada Alba<sup>115</sup>, encargada de la redacción del proyecto. Después de los estudios preliminares, fue en septiembre se comenzó a estudiar el proyecto de ley, del que habían participado ATEP y AGET<sup>116</sup>. Finalmente fue sancionada la nueva ley de Educación Común, con modificaciones con respecto a la propuesta realizada por el sindicato, en especial con lo referente a la implantación de la materia de religión y moral, donde la CD de ATEP se mostró unánimemente partidaria del mantenimiento de la laicidad preconizada por la ley 1.420.

Los contactos con otras organizaciones sindicales docentes no se interrumpieron, aunque la precaria situación de ATEP condicionó su participación en algunos de los encuentros que se convocaron. Durante los días 9, 10 y 11 de abril tuvo lugar un congreso de la CAMYP<sup>117</sup>, cuya invitación ATEP recibió por intermedio de Rivero, quien había participado de las sesiones preparatorias previas a la convocatoria. El

---

<sup>112</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 179, 07/06/1960.

<sup>113</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 180, 25/06/1960.

<sup>114</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 16, 03/04/1961.

<sup>115</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 180, 25/06/1960.

<sup>116</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 3, 03/09/1960.

<sup>117</sup> La Confederación Argentina de Maestro y Profesores Diplomados fue fundada en la provincia de Buenos Aires en noviembre de 1959. La CAMYP, o CAMYPD, es el primer intento de esta epata por integrar a las diferentes asociaciones docentes del país que se encontraban desarticuladas entre sí. Uno de sus primeros dirigentes fue Alfredo Bravo. En 1973 fue una de las entidades cofundadoras de CTERA.

objetivo de este nuevo encuentro nacional de docentes era tratar exclusivamente el problema de los índices remunerativos<sup>118</sup>. El problema residía en que, mientras algunas provincias como Buenos Aires no tenían problemas de esa índole, otras como Chaco o Tucumán, no escuchaban sino promesas desde hacía tiempo atrás. Después del informe presentado por Rivero se decidió enviar un delegado al Congreso<sup>119</sup>, aunque ya antes de esta decisión se había llamado al estado de alerta del magisterio, ante la eventual movilización que pudiera surgir de ese encuentro. En este contexto, de creciente tensión, el día 11 de mayo se convocó a una asamblea general ordinaria en la que se tratarían la memoria anual, balance general, inventario, presupuesto, cuenta de ganancias y pérdidas hasta el 31 de marzo, así como los informes de la CD y del síndico y la fijación de la suma que anualmente podrá manejar la CD<sup>120</sup>. En esa asamblea se debía convocar a elecciones para la renovación de la CD, en principio con fecha de 5 de junio, pero los comicios fueron postergados “al sólo efecto de lograr la colaboración de las autoridades provinciales”, decisión tomada apoyándose en el criterio de la asesoría legal de la entidad<sup>121</sup>.

A finales de año se decidió no atender la invitación a participar de un congreso organizado por la CAMYP, aduciendo motivos económicos, aunque sí que se aceptó la propuesta de asistir a un congreso de maestros en Mendoza<sup>122</sup>. Más adelante también fueron invitados a participar en una reunión del magisterio, en esta ocasión en la ciudad de Córdoba, pero ATEP declinó la invitación por no participar de la misma la CAMYP, respetando así la coherencia en su pertenencia sindical<sup>123</sup>. No fue esta la única ocasión en la que el magisterio cordobés mostró su interés por establecer vínculos con la organización tucumana, ya que más adelante se volvió a recibir una invitación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), aunque esta vez hecha en persona por el presidente Mario Adolfo Ammann, quien visitó personalmente la sede de ATEP para llamarlos a participar del congreso que la Unión Nacional de Educadores

---

<sup>118</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 175, 26/03/1960.

<sup>119</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 176, 05/04/1960.

<sup>120</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 178, 23/05/1960.

<sup>121</sup> AA, CD, Libro II, acta n° 179, 07/06/1960.

<sup>122</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 7, 02/12/1960.

<sup>123</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 9, 21/01/1961.

(UNE) estaba por celebrar el 15 de abril. La respuesta de ATEP no varió con la conocida, no asistirían por su vinculación a CAMYP<sup>124</sup>.

Se tuvo que esperar hasta el siguiente verano para que el sindicato docente volviera a participar de un encuentro de escala nacional. Entre los días 24 y 25 de febrero de 1961, la CAMYP convocó a sus organizaciones afines a un nuevo congreso al que ATEP envió como delegado a Rivero, quien estaba encargado de transmitir el siguiente mandato:

1. *Enviar notas de las diferentes filiales del país a la legislatura provincial solicitando su pronta sanción.*
2. *En caso de no obtener resultados se solicitaría la radicación de la Directiva de la entidad en Tucumán.*
3. *Esta Agremiación juzga conveniente que la sede de la institución esté ubicada en la ciudad de Rosario de Santa Fe o La Plata.*<sup>125</sup>

En este período de transición, los problemas económicos continuaban afligiendo a la agremiación, motivo por el cual se dispuso encargar a algunos militantes que se ocuparan del cobro de las cuotas sindicales y sociales en el interior de la provincia<sup>126</sup>. Además, se pusieron en marcha algunas iniciativas conducentes a una mayor efectividad y alcance de la acción gremial. En este sentido, se resolvió crear una secretaría de educación, con el fin de dar cobertura a las necesidades formativas que los docentes plantearan a la agremiación. La intención era la de acometer actividades de perfeccionamiento docente, al mismo tiempo que se decidió dividir la secretaría de acción gremial en dos subsecretarías que tuvieron como objetivo desdoblarse los esfuerzos para que las actividades gestionadas por ésta pudieran cumplirse de forma más eficiente. El bloqueo del cobro de las cuotas sindicales que ejerció el gobierno provincial hizo que a comienzos de septiembre se advirtiese que la situación de impago de algunos afiliados ponía al borde de la suspensión de pagos de los servicios sociales

---

<sup>124</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 17, 13/04/1961.

<sup>125</sup> La falta de presión ejercida contra el gobierno provincial por la CAMYP fue una de las críticas más repetidas en estos meses. Las quejas de la CD ante la inacción de CAMYP se hicieron permanentes en este período y entendemos que fue debido a esta inoperancia que se produjo el distanciamiento progresivo con esta organización. En: AA, CD, Libro III, acta n° 11, 22/02/1961.

<sup>126</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 18, 19/04/1961.

prestados por la agremiación<sup>127</sup>. Por su parte, el ministro de economía provincial prometió que las medidas con respecto a la docencia se tomarían siempre y cuando lo permitiera el estado de las finanzas de la provincia<sup>128</sup>.

Conscientes de la importancia de hacer valer las actividades del gremio, la CD reconoció la necesidad de “crear un estado de agitación en la opinión pública con respecto a la actividad del gremio y a la situación del magisterio en general”<sup>129</sup>, con lo que se veía necesario efectuar labores de propaganda y difusión, tanto oral como escrita, creándose la oficina de Prensa y Propaganda. Además, como parte de esta reestructuración de la organización, se dio el visto bueno a las reincorporaciones al gremio cuatro militantes: Sixto Miguel Paz, Víctor Ezequiel Herrero, Rodrigo Arturo Benito y Delia Gérez<sup>130</sup>.

Como parte de esta intención de abrir las actividades del gremio a la ciudadanía, es que entendemos que ATEP ofreciera sus servicios jurídicos al Sindicato de Obreros y Empleados del Parque 9 de Julio, en ocasión de una demanda interpuesta al secretario administrativo de la inspección médica del ministerio de Salud Pública, en lo que significó el primer acto de solidaridad directa entre los docentes y el mundo obrero del que tenemos constancia<sup>131</sup>.

Mientras tanto proseguían las labores de la entidad de cara a la sanción del estatuto docente provincial, presentando un borrador a la Cámara de Legislación del Senado provincial donde se recogían las observaciones y sugerencias de los representantes gremiales<sup>132</sup>. En vista de que las gestiones no daban fruto, se creó una “Junta del Magisterio Provincial” a favor de la aprobación del estatuto, siendo los representantes de ATEP ante ésta Arancibia, Rivero y Cazalbón.

ATEP aumentó la presión al gobierno mediante la convocatoria de un cese de actividades para los días 18 y 19 de julio, como señal de protesta ante la tardanza del legislativo para pronunciarse acerca de la cuestión. Sin embargo, la entidad volvió a mostrar su malestar ante la CAMYP por la tardanza en elaborar las comunicaciones de

---

<sup>127</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 25, 06/09/1961.

<sup>128</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 26, 25/09/1961.

<sup>129</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 19, 06/05/1961.

<sup>130</sup> *Ibidem*.

<sup>131</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 20, 15/05/1961.

<sup>132</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 21, 13/06/1961.

apoyo esperadas<sup>133</sup>. Finalmente, Rivero fue designado delegado ante la CAMYP, otorgándosele el mandato para exponer la situación del magisterio provincial, así como para explicar los motivos por los cuales se efectuó un paro el 1 de agosto<sup>134</sup>. Entre las directrices que se encargaron a Rivero, se encontraba la de trasladar que ATEP no era partidaria de la realización de un paro por tiempo indeterminado, solicitando que incluso aunque se adoptase esta medida, se debería dar libertad a las filiales<sup>135</sup>, aunque esta opción no fue la finalmente escogida.

Con respecto a las tratativas con la CAMYPD, fue el propio Arancibia quien tomó la responsabilidad de dirigirse a Buenos Aires para tratar los asuntos de manera personal. A su regreso, después del viaje realizado en los primeros días de octubre, el presidente informó que se había encontrado con las autoridades políticas de las que dependía el envío de crédito destinado a satisfacer las demandas de los docentes. Como consecuencia de la ausencia de soluciones, se decidió declarar al gremio en estado de alerta, dado que desde el gobierno de la provincia aún se adeudaban cuotas de retroactividad, manteniéndose el consejo intervenido y el estatuto del docente sin hacerse efectivo en la práctica<sup>136</sup>. La estrategia adoptada por la entidad gremial pasó por volver a convocar un paro el 16 de noviembre cuando además, producto de la situación económica de ATEP, la entidad se vio forzada a aceptar un préstamo por valor de 30.000 pesos provenientes de la Agremiación de Maestros de la Provincia de Salta, decisión que contó con sólo un voto en contra en el seno de la CD<sup>137</sup>. Después de esta jornada de movilización, que como medida de presión no tuvo los efectos deseados, la secretaría de Acción Social advirtió que el impago de algunos afiliados ponía en serio riesgo de suspensión de pagos de los servicios prestados<sup>138</sup>. A final de mes se consiguió pagar a las entidades médicas, bioquímicas y de farmacias, al tiempo que se puso en marcha una campaña destinada a recaudar más fondos entre los afiliados morosos<sup>139</sup>.

---

<sup>133</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 20, 22/07/1961.

<sup>134</sup> Este paro de una semana de duración había sido dispuesto por los docentes de la Nación, en protesta por el incumplimiento del artículo 38 de la ley 14.473. La CGT presentó su adhesión a la medida, así como la UCR del Pueblo dio “su más cálida expresión de solidaridad a los docentes”, mientras “alerta a todos los hogares de la patria, para que defendiendo sus propios intereses, apoyen la enseñanza popular, obligatoria y gratuita, salvando así el destino futuro de sus hijos”. En: Diario *El Litoral*, 01/08/1961, p. 2.

<sup>135</sup> AA, acta CD n° 23, 03/08/1961.

<sup>136</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 27, 24/10/1961.

<sup>137</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 24, 04/12/1961.

<sup>138</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 25, 06/09/1961.

<sup>139</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 26, 25/09/1961.

La dinámica de desencuentro con el gobierno provincial persistía, de modo que en una reunión mantenida con el ministro de economía, se reiteraron los compromisos, ya tantas veces escuchados, de que los problemas que afligían a la docencia tucumana serían solucionados a la mayor brevedad, en palabras del ministro: “siempre que las finanzas lo permitan”<sup>140</sup>.

La voluntad de Gelsi fue hacer creer que efectivamente los recursos de las arcas provinciales permitirían efectuar los pagos atrasados. Tanto es así que recién comenzado el año, el gobernador se mostraba seguro de poder comenzar de inmediato el pago de aguinaldo que se adeudaba, del mismo modo que vislumbraba, equivocadamente, que en el transcurso de ese año sería resuelto definitivamente el “problema azucarero”. En lo tocante a la cuestión de los docentes se puede pensar más en una actitud cínica que en un fallo de cálculo, ya que el gobernador llegó a declarar que habría aumentos de sueldos para el personal administrativo “y en especial para los educadores”<sup>141</sup>.

Sin embargo, apenas unos días después de las declaraciones de Gelsi, el propio ministro de Economía confirmó que no iba a ser posible el pago de las diferencias adeudadas al magisterio, del mismo modo que tampoco se había iniciado el descuento de cuotas por planilla<sup>142</sup>, lo que no hacía sino perpetuar los problemas financieros de la entidad. En esta ocasión se concretó el préstamo acordado con el gremio de Salta, destacándose que la importancia del mismo radicaba más en el “acercamiento con aquella agremiación” que en la consecución del dinero. Igualmente se recibió una contribución de 5.000 pesos por parte de la Asociación de Educadores de la Provincia de Jujuy<sup>143</sup>, lo que se explica porque, como la tesorería de la entidad informó, el estado financiero de ATEP era tan grave debido a la falta de colaboración del magisterio en el pago de sus cuotas sociales y sindicales, poniendo una vez más de manifiesto la relevancia del problema derivado de no descontar la cuota gremial.

En este periodo asistimos, por tanto, a un problema financiero de doble naturaleza. Por un lado, parece innegable la voluntad de la administración provincial por impedir el buen funcionamiento del gremio docente. La aplicación del descuento

---

<sup>140</sup> *Ibidem*.

<sup>141</sup> Diario *La Prensa*, 02/01/1962, p. 7.

<sup>142</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 27, 12/01/1962.

<sup>143</sup> *Ibidem*.

automático de la cuota sindical, atribución concedida gracias a la personería gremial que ostentaba ATEP, habría proporcionado a la entidad los recursos necesarios para poder seguir ofreciendo los servicios sociales contratados. Además, a este de bloqueo institucional, había que sumar el escaso compromiso que la militancia sindical docente demostró. Ante esta situación, entendemos que la militancia docente no participó más activamente de la financiación de la entidad por dos motivos: en primer lugar, los logros del primer movimiento huelguístico de la entidad fueron moderados, lo que sin duda erosionó la legitimidad que esta primera iniciativa preveía ostentar sobre el colectivo de trabajadores. En segundo lugar, y producto del incumplimiento de las promesas gubernamentales, no se puede obviar que la situación material de los educadores era lo suficientemente precaria como para plantearse no participar voluntariamente de los descuentos por cuota sindical.

La intensidad del conflicto de los docentes se manifestó a través de la persecución al presidente de ATEP. Tanto fue así que Arancibia llegó a ser detenido, a comienzos del mes de febrero de 1962, en una operación que él mismo consideró que tenía como “objeto [...] intimidarle para que durante la estadía del embajador de Inglaterra se abstuviera de hacer manifestaciones de la situación del magisterio provincial”, por el impago de los 208 millones de pesos adeudados al magisterio provincial<sup>144</sup>. Ante esta situación, la respuesta de ATEP consistió en hacerse con un listado de todas las entidades asociadas a la CGT, cursando una nota en la que se denunció la situación del magisterio tucumano, en lo que significó un intento por encontrar la solidaridad de las organizaciones obreras.

#### **4.4.2.1. Intervención militar y cambios de gobierno**

El frágil equilibrio institucional de la Argentina no pudo sostener las inquietudes que el gobierno de A. Frondizi despertaba en las FF.AA. Esta situación se resolvió con un nuevo pronunciamiento militar que, después de la presidencia interina de José María

---

<sup>144</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 28, 07/02/1962.



Guido, y luego de unos nuevos comicios, acabó colocando al radical Arturo Illia al frente de la presidencia de la Nación<sup>145</sup>.

Tras la intervención militar del gobierno provincial, un grupo de representantes de ATEP se entrevistó con los nuevos mandatarios de la provincia para plantearles los problemas del magisterio. La reunión con el interventor provincial, Carlos Imbaud<sup>146</sup>, finalmente tuvo lugar el 5 de septiembre pero, como era habitual, no se obtuvieron compromisos en firme. Como cabía esperar, la expresión de las demandas docentes no generó tampoco en esta ocasión una respuesta satisfactoria. Ante la inexistencia de avances en este sentido se comenzó a preparar un comunicado de protesta para hacer conocer a la opinión pública la situación de los docentes tucumanos y así reclamar a las autoridades sus necesidades en cuestiones tales como la provisión de libros y demás útiles escolares<sup>147</sup>, que hasta entonces no habían formado parte sustancial de las demandas del gremio.

En el mes de agosto 1962 se renovó parcialmente la CD y con tal ocasión el presidente Arancibia declaró que “la apatía del maestro podemos vencerla con nuestra labor”. Esta vez también la primera en que se mencionó la posibilidad de crear un periódico de la entidad<sup>148</sup>.

Unos meses atrás, en mayo, se reorganizó la estructura de la secretaría de Acción Social para dotar de un organigrama más práctico en las resoluciones de las cuestiones que surgían en esta parcela de la acción gremial<sup>149</sup>. Lo cierto es que la actividad gremial se reforzó con nuevas entrevistas a los dirigentes políticos de la provincia<sup>150</sup>, a los que se interpelaba para la consecución de los siguientes objetivos: pago de diferencias en haberes; actualización de los índices de remuneración; resolución sobre el Estatuto del

---

<sup>145</sup> Sobre este periodo, consúltense: Taroncher, Miguel Ángel, *La caída de Illia: la trama oculata del poder mediático*. Vergara, Buenos Aires, 2009; Tcach, César y Rodríguez, Celso, *Arturo Illia: un sueño breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966*. Edhasa, Buenos Aires, 2006; O'Donnell, Guillermo, *Modernización y autoritarismo*. Paidós, Buenos Aires, 1972

<sup>146</sup> Imbaud estuvo en el cargo desde el 9 de abril hasta el 21 de mayo del año 1962. Volvió a ser designado para el puesto en 1970.

<sup>147</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 30, 31/03/1962.

<sup>148</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 34, 04/08/1962.

<sup>149</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 32, 09/05/1962.

<sup>150</sup> También se recibió la invitación a participar en el Congreso Americano de Mujeres, pero se decidió abstenerse de concurrir a ese evento.

Docente; pedido de imputaciones y ampliación de partidas asignadas al consejo para solucionar problemas de emergencia<sup>151</sup>.

Después de que esas gestiones volvieran a ser infructuosas, se resolvió declarar al gremio en estado de alerta y se convocó a una asamblea extraordinaria, fundamentado la decisión en los siguientes puntos:

- a. Cumplimiento de la ley de equiparación, pago de la deuda y actualización de índices.
- b. Vigencia del Estatuto docente<sup>152</sup>.

En la asamblea se recordó que desde enero de 1960 no se realizaban los descuentos por planillas, por lo que se recibían muchos ingresos en cheques, algo que había hecho florecer algunos rumores acerca del manejo de los fondos de la entidad, a lo que se sumaba el caso de una empleada que había robado 8.000 pesos. El síndico Machado advertía sobre el riesgo que suponía para la CD la propagación de ese tipo de creencias entre el magisterio<sup>153</sup>. También se subrayó que para combatir la posibilidad de repetición de este tipo de casos, y porque “este factor hace el prestigio de la institución”, se decidió incrementar los sueldos de los empleados de ATEP hasta los 4090 pesos mensuales, con escalas y jerarquías<sup>154</sup>.

Como consecuencia del pulso tomado a la militancia gremial en la asamblea, se tomó la decisión de emprender nuevas iniciativas que, en la medida de lo posible, fueran capaces de superar el escollo que el diálogo con las instituciones provinciales estaba representado. Ante la situación inmovilista del gobierno provincial, Arancibia se dirigió a Buenos Aires para tratar la cuestión de la aprobación del Estatuto del Docente, aunque desde el ministerio de Gobierno de la provincia se le advirtió que esas iniciativas retardarían las gestiones ya comenzadas<sup>155</sup>, en un intento por frenar el primer impulso del dirigente. En cualquier caso, el presidente de ATEP llevó a cabo una serie de entrevistas en la capital federal.

---

<sup>151</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 35, 11/08/1962.

<sup>152</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 36, 18/08/1962.

<sup>153</sup> AA, acta CD n° 39, 30/08/1962.

<sup>154</sup> AA, acta CD n° 40, 08/09/1962.

<sup>155</sup> AA, acta CD n° 42, 06/10/1962.

Al regreso de Buenos Aires de Arancibia, se informó a la CD que el estatuto había sido enviado desde Tucumán con un informe desfavorable en lo referente a remuneraciones y jubilaciones. La actitud enfadó tanto, sin dejar la capital, Arancibia se dirigió a un diario para publicar el siguiente comunicado: "...los maestros tucumanos ganan los sueldos más bajos del país, 140 pesos, mientras los nacionales ganan 230. El 70% de los locales escolares está en pésimo estado y de ellos buena parte en ruinas"<sup>156</sup>. Insistiendo en los intentos de negociación, y aprovechando que el presidente del Consejo de Educación tucumano también estaba en la capital, trabajando sobre el Estatuto, la CD aprobó un nuevo desplazamiento de Arancibia a la capital<sup>157</sup>.

A lo largo de este periodo en el que se priorizaron las acciones dirigidas al gobierno provincial, las relaciones con otras entidades docentes se enfriaron. Como ya mencionamos anteriormente, eran varios los directivos que con frecuencia mostraban su enfado con la CAMYP, por no haber respondido en tiempo a los informes enviados por ATEP, sobre consultas relativas a la redacción del proyecto del Estatuto del Docente provincial. Sin embargo, a partir de la creación del Comité de Unificador Docente de Acción Gremial<sup>158</sup> (en adelante CUDAG), la dirigencia de ATEP se volvió a volcar en lograr el apoyo a las acciones promovidas desde la coordinadora nacional. Un ejemplo de lo antedicho es el paro nacional que se había convocado para el 9 de noviembre, en protesta por la disminución del presupuesto en educación. El día de antes, los delegados escolares, reunido en asamblea, decidieron que ATEP debía participar de la acción de fuerza<sup>159</sup>. Con la presencia de 106 delegados escolares se tomó la decisión unánime de concurrir al paro convocado por CUDAG, y se los emplazó al día 12 a considerar futuras acciones, como la de no comenzar el curso escolar si la situación de ese momento persistía. Asimismo, en esta asamblea se recogió una iniciativa interesante, puesto que el delegado de la escuela nocturna Alejandro Heredia propuso hacer entrega de las correcciones de los trabajos de final de curso, pero sin la firma del maestro<sup>160</sup>, aunque esta propuesta fue descartada por considerarse imposible llevarla a cabo.

---

<sup>156</sup> Diario *El Correo de la tarde*, 14/10/1962. Cfr.: Rosenzvaig, Eduardo, *La oruga...op. cit.*, p. 54.

<sup>157</sup> AA, acta CD n° 43, 23/10/1962.

<sup>158</sup> El CUDAG fue el germen de la unión nacional del sindicalismo docente. Fue fundado en 1960 producto de la convergencia las entidades de FAGE, CCID y UNE y CAMYP.

<sup>159</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 44, 06/11/1962.

<sup>160</sup> Esta estrategia es conocida como la "huelga de lápices caídos". En: AA, Asamblea, Libro I, acta n° 4, 08/11/1962.

Después de esta movilización, la asamblea decidió comenzar un paro de actividades por 72 horas, comenzando el día 13 de noviembre, y contando con el apoyo de 80 delegados escolares de entre los 88 participantes en la asamblea<sup>161</sup>. En el desarrollo de la huelga se sumaron los apoyos públicos del partido demócrata cristiano y de la CGT, quienes invitaron al presidente de ATEP a un acto a celebrado el día 16. Del mismo modo, los alumnos de la Escuela Normal realizaron en la sede de ATEP un evento para discutir acerca del presupuesto para educación en la provincia, en lo que la CD consideró un “loable gesto de solidaridad y comprensión hacia la docencia y la escuela pública”<sup>162</sup>.

El conflicto se cerró momentáneamente con la vuelta a las actividades y la promesa de solución por parte de las autoridades políticas, pero las reuniones no se concretaron hasta finales del mes de diciembre, cuando el ministro de gobierno manifestó que no había “esperanzas de pago para esta semana y que no veía salida para pagar los sueldos”, concluyendo que era un problema sin solución por el momento<sup>163</sup>.

En la primera reunión de 1963, la directiva convocó a una nueva asamblea extraordinaria para considerar, entre otras cosas, las infructíferas negociaciones que se estaban intentando con las autoridades políticas provinciales. ATEP había saludado el nuevo año con un comunicado en prensa en que reclamaba al Consejo de Educación el pago de sueldos atrasados, por el que además había recibido llamadas de colegas que se mostraban en todo de acuerdo con lo expresado en el escrito<sup>164</sup>, de igual manera que se decidió la adhesión al acto de protesta que encabezaba la CGT contra el pago del aguinaldo fraccionado. En cualquier caso, el presidente Arancibia parecía tener claro que el cobro del aguinaldo era más que improbable<sup>165</sup>, afirmando que “en cuanto al pago de diciembre y aguinaldo, no hay absolutamente ni remotas esperanzas; no se nos ha prometido nada”<sup>166</sup>.

---

<sup>161</sup> AA, Asamblea, Libro I, acta n° 5, 12/11/1962.

<sup>162</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 46, 14/11/1962.

<sup>163</sup> AA, acta CD n° 50, 26/12/1962.

<sup>164</sup> AA, acta CD n° 51, 05/01/1963.

<sup>165</sup> Es también en esta primera reunión que, debido al menesteroso estado financiero de la acción social de la entidad, se resolvió aumentar la cuota para los servicios sociales hasta los 180 pesos, para el caso de los beneficiarios individuales y 400 pesos para los aportes familiares, como única salida para solventar las deudas que se mantenían con los proveedores de servicios sanitarios.

<sup>166</sup> AA, acta Asamblea n° 6, 18/01/1963.

Otro de los problemas surgidos con el ejecutivo provincial consistió en que ante la visita del ministro del Interior de la Nación, y la voluntad de encontrarse con él expresada por ATEP. A través de la gestión efectuada con el ministro provincial de Gobierno, el presidente de la entidad manifestó no tolerar el trato que se le estaba dando a esta solicitud, de la cual el ministerio de Gobierno había hecho caso omiso. La expresión de Arancibia demostraba la voluntad por mantener la autonomía en sus interlocuciones institucionales, puesto que afirmó que se dirigirían personalmente al ministro de la Nación “sin acudir a la mediación de otra institución gremial”<sup>167</sup>.

En los primeros días de febrero se recibió un proyecto que suscitó el interés de la directiva y que, aunque ambicioso, esperaba concitar el apoyo de un número significativo de docentes. El proyecto estaba liderado por la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio, que había entrado en negociación con el Consejo Federal de Vivienda para la tramitación de un préstamo por valor de 500 millones de pesos. El recorrido para hacer llegar el caudal monetario hasta la entidad pasaría por la entrega del capital desde el Banco Hipotecario hasta el Consejo de Educación, quien se encargaría de librar los fondos a la entidad gremial, pudiendo disponer los docentes de 100 millones entre el total solicitado. La concreción del proyecto pasaba porque la entidad aportara el 15% de la inversión inicial y el magisterio se hiciera cargo de un 20%. Dada la situación económica, ni uno ni otros podían hacer frente a este desembolso, aunque Arancibia se mostrase esperanzado ante la posibilidad de poder obtener financiación, para lo cual el presidente se desplazó junto con Cazalbón a Buenos Aires para proseguir esas negociaciones<sup>168</sup>.

A comienzos de marzo, cuando daba inicio el nuevo curso lectivo, la CD volvió a declarar al gremio en estado de alerta. Con el objetivo de divulgar los motivos de esta decisión, se prepararon una serie de declaraciones que serían difundidas con octavillas en los días sucesivos, contando desde el 4 de marzo. Los temas sobre los que preparaban los boletines eran: los sueldos de los maestros de otras provincias, llamado a la solidaridad de los padres, reunión abierta de maestros en la localidad de Monteros y, finalmente, reunión abierta de maestros en la localidad de Aguilares. Asimismo, se preparó una marcha conjunta con la Asociación Gremial de Educadores de Tucumán (en

---

<sup>167</sup> AA, acta Asamblea n° 6, 18/01/1963.

<sup>168</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 53, 07/02/1963.

adelante AGET) para el día 4 de marzo<sup>169</sup>. El llamamiento que convocó a la movilización fue el siguiente:

*“La CD de ATEP llama a todas las fuerzas vivas de la provincia para la eliminación de 4 factores de perturbación de la vida privada y profesional del maestro constituidos por:*

- 1. Incumplimiento de la ley de equiparación durante los años 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 y presente, que ha originado una deuda de indefinido crecimiento que en la actualidad alcanza a la suma de 400 millones de pesos.*
- 2. Puntualidad en los pagos de haberes*
- 3. Ratificación del Estatuto del Docente*
- 4. Continua pauperización del maestro por los factores anteriores y el constante crecimiento general del costo de la vida”<sup>170</sup>*

La siguiente asamblea, en la que participaron 304 delegados, sirvió para transmitir el estado de las conversaciones mantenidas que, según lo expresado por Arancibia, sólo sirvieron para recibir “palabras que suenan a sarcasmos, irónicas”<sup>171</sup>. Esta indignación de la directiva de ATEP se explicaba porque el magisterio había quedado excluido del nuevo presupuesto que se estaba negociando en esas fechas.

Es interesante observar que en esta asamblea también se encuentran presentes representantes de AGET, quienes manifestaban traer el mensaje de mantener “trabajo conjunto con ATEP” y disponiendo “no iniciar las clases sin fijar límite”, punto éste que acto seguido fue aprobado por los delegados escolares de ATEP por 224 votos a favor, frente a 80 delegados que defendieron la realización de paros progresivos. Por su parte, la CD tenía la facultad de levantar el paro cuando lo creyera conveniente, sin necesidad de aprobación previa de la asamblea. Se insistió en la necesidad de dar publicidad al movimiento, por lo que se pusieron en contacto con todas las entidades gremiales de la provincia y las entidades docentes del resto del país, mostrando que el movimiento de fuerza estaba fundamentado en tres puntos: incumplimiento de la ley de equiparación (actualización de índices); falta de pago de las diferencias adeudadas por equiparación (atraso de sueldos); no ratificación del Estatuto del Docente.

---

<sup>169</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 55, 02/03/1963.

<sup>170</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 56, 04/03/1963.

<sup>171</sup> AA, Asamblea, Libro I, acta n° 7, 09/03/1962.

El movimiento huelguístico se desarrolló con un apoyo mayoritario, tanto así que los consejeros del Consejo Escolar y sus vocales manifestaron públicamente su apoyo a los docentes<sup>172</sup>. Además, intentando optimizar los recursos organizacionales de que se disponía, se crearon tres subcomisiones que tuvieron vigencia durante el desarrollo de la huelga: prensa, propaganda y relaciones intergremiales. De hecho, algunas asociaciones ya habían mostrado su adhesión al movimiento, como en el caso del Sindicato de Jubilados y Pensionados, la Asociación de Vendedores de diarios y revistas y la Asociación Mutua de Jubilados y Pensionados.

Las vías para buscar una solución al conflicto pasaban, fundamentalmente, por la disponibilidad de las cantidades adeudadas, algo que el propio vocal de ATEP en el consejo, Cipriano Rivero, consideraba imposible de realizar, por entender que aunque “hay muy buena voluntad por la solución [...] las arcas de la provincia no lo permiten”, luego de haber mantenido un encuentro con el ministro de gobierno Vázquez<sup>173</sup>, quien incluso llegó a admitir que las cantidades que ATEP señalaba eran exactas por estar basadas en informes técnicos contables producidos en el seno del Consejo de Educación. El mensaje que el ejecutivo transmitía a través de Rivero es que no se podía plantear la cuestión de las cantidades adeudadas en ese momento pero que, sin embargo, sí se mostraban dispuestos a dialogar acerca de la actualización de sueldos. En cualquier caso, Vázquez advertía que “levantado el movimiento, la única garantía es la consideración inmediata del problema”, y que no aceptarían un cese temporal de la medida de fuerza por considerarlo un chantaje al gobierno.

Enquistados en este punto, la Comisión de Padres de Alumnos, que ya había actuado de la mano de los maestros anteriormente, consideraba en esa ocasión que era necesario levantar el paro y entrar en tratativas con el gobierno, para lo que ellos se ofrecían como mediadores. La respuesta de ATEP fue no levantar el paro sin mediar antes unas mínimas garantías, y decantarse por la Junta Coordinadora Docente como intermediaria en las futuras gestiones.

En la siguiente asamblea, celebrada en la sede del Círculo del Magisterio y contando con la presencia de 304 delegados, se transmitió el optimismo de la dirección, no tanto por las posibilidades reales de alcanzar una solución satisfactoria al conflicto,

---

<sup>172</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 57, 12/05/1963.

<sup>173</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 58, 15/03/1963.

como por la implicación sin precedentes mostrada por el colectivo docente. En este sentido, al inicio de la reunión, Arancibia declaró que el paro estaba siendo extraordinario y que esto demostraba claramente “que el magisterio ha evolucionado y hará respetar sus mínimos derechos”<sup>174</sup>. Con respecto a la implicación de otras organizaciones de docentes y de trabajadores, Arancibia opinaba que:

*“El movimiento es unánime [...] Estamos recibiendo paulatinamente el apoyo de todos. Algunas organizaciones lo hicieron ya públicamente y en forma enérgica defendiendo las causas del movimiento. Esto reconforta, alienta y nos da la certeza de que vamos a conseguir el apoyo de todas las fuerzas vivas de la provincia; quizás llegue el caso en que necesitemos el apoyo directo, concreto de ellos...”*

En cualquier caso, el gobierno se negaba a entrar en negociaciones sin conseguir previamente el levantamiento del movimiento de fuerza, ante lo que ATEP respondía que su postura no era intransigente, en tanto en cuanto no se pedía el pago inmediato, pero sí que requerían ciertos compromisos antes de levantar la medida. Además, ATEP veía con desagrado que los comunicados del ejecutivo fueran dirigidos al afiliado en lugar de al conjunto de la institución, puesto que tras ello se escondía la voluntad de dividir la fuerza que la unión gremial representaba en ese momento. Pero en esta situación, un problema que se venía arrastrando se manifestaba con mayor evidencia, y es que la situación financiera era ciertamente preocupante, llegando a hacerse en la asamblea un pedido a los afiliados para animarlos a hacer contribuciones de apoyo.

La asamblea hizo un balance del movimiento después de transcurridos 30 días de paro de actividades. La directiva cifró en un 90% la adhesión del magisterio, al tiempo que juzgaba que los docentes estaban dando muestras de haber comprendido una lección histórica, la importancia de la unidad gremial para conseguir los objetivos de la docencia<sup>175</sup>.

Otro aspecto relevante que se fraguó en aquellos días fue la búsqueda del compromiso de los padres de los alumnos, y con tal intención Joaquín Cazalbón presidió una reunión con varias directoras de la provincia, un grupo de padres y la presidenta de AGET, la Sra. Alarcón. La estrategia planteada tenía que ver con la

---

<sup>174</sup> AA, Asamblea, Libro I, acta nº 8, 16/03/1963.

<sup>175</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta nº 9, 10/04/1963.



movilización de las directoras en el ámbito de las cooperadoras escolares donde, en palabras de Cazalbón, los padres “buscarán puntos coincidentes entre el gobierno y el gremio para establecer las bases sobre las cuales se puede convocar”<sup>176</sup>. Por su parte, los directores expresaron su firmeza en la continuidad del movimiento, afirmando que “lo consideran también como acto patriótico, pues la escuela pública se viene abajo”<sup>177</sup>.

No obstante, en el trascurso de la asamblea hubo lugar para las opiniones discordantes. El afiliado Núñez creía necesario estudiar las posibilidades de solución, pues consideraba que ATEP se encontraba “con el camino cerrado”, aunque apuntaba acertadamente que “esta medida de fuerza no es solamente circunstancia legal, sino que la realidad de la situación económica es lo que ha permitido al magisterio estar unido esta vez”<sup>178</sup>. Su propuesta defendía un levantamiento del paro por 24 horas, durante la jornada del domingo, para tantear la actitud del ejecutivo y contando aún con tiempo para retomar el paro el día lunes, impidiendo el inicio del curso escolar.

Bulacio respondió a la propuesta de Núñez considerándola leal pero equivocada, puesto que, en su opinión, tomar una decisión gremial implicaba su mantenimiento bajo toda circunstancia, y cambiar de estrategia en ese momento demostraría una debilidad que podría derrotar definitivamente al movimiento. En el turno de palabra de Serrano, otro afiliado, se puntualizó que además el interventor<sup>179</sup> no recibía a ningún gremio, estuviera ejecutando una medida de fuerza o no, y que estas tareas eran delegadas en el ministro Vázquez quien se limitaba a recibir a los sindicatos sin aportar soluciones, incidiendo además que para solucionar el conflicto las negociaciones deberían hacer directamente con el Interventor y “no con un ministro no facultado para dar solución”.

Se esperó a que avanzara la semana para que el ejecutivo tomara la iniciativa de recibir a la Comisión de Padres. Asimismo, es llamativa la evolución de las impresiones recogidas por los intermediadores, ya que mientras el resultado de la primera entrevista con el interventor dejó ver buena voluntad por su parte y un reconocimiento de la corrección de los planteamientos de los maestros, de la segunda reunión se salió con el

---

<sup>176</sup> *Ibidem.*

<sup>177</sup> *Ibidem.*

<sup>178</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 9, 10/04/1963.

<sup>179</sup> En esos momentos, el gobernador *de facto* era Alberto Gordillo Gómez, que ocupó el cargo desde el 15 de noviembre de 1962, hasta el 12 de octubre de 1965. Un recuento de todas las intervenciones en: Páez de la Torre (h), Carlos, “Los eclipses de la autonomía”. <http://www.lagaceta.com.ar/nota/583857/sociedad/eclipses-autonomia.html> Consultado el (25/03/2014).

cometido de transmitir que era “necesario levantar el paro porque con huelga o sin ella no habría solución”<sup>180</sup>. Frente a estos primeros síntomas de agotamiento del movimiento, o de quienes en principio se encontraban próximos a éste, se decidió emplazar a la celebración de una nueva asamblea para comprobar el estado de ánimo de los afiliados, aun a pesar de tener la CD la potestad de levantar o continuar el movimiento de forma independiente.

Una semana después la situación continuaba estancada, puesto que no se habían llevado a cabo nuevas tratativas o reuniones. En esos días, ATEP había publicado los puntos mínimos para levantar el magisterio, haciendo hincapié sobre la actualización del índice<sup>181</sup>. Al mismo tiempo, se estaba tratando de conseguir que la CGT regional se sumara de forma expresa al petitorio presentado. Sin embargo, la directiva docente advertía que si bien querían que la central se sumara a la lucha, no admitirían que participaran como mediadores, si acaso se ofrecieran a ello<sup>182</sup>.

En los primeros días del mes de abril la comisión de padres presentó una propuesta de solución, previamente consensuada con ATEP<sup>183</sup>. La CGT trataba de intervenir en el conflicto, que los educadores consideraban “interesante como ejemplo para todos los gremios”<sup>184</sup>, aunque insistían en mantener su autonomía con respecto a la central sindical, aunque no se rechazaba la capacidad de presión que podía ser ejercida por la central obrera.

Por su parte, el ministro de gobierno había hecho llegar su contraoferta a los docentes, luego de haberse encontrado con la comisión de padres<sup>185</sup>. Para ATEP, su solución al conflicto quedaba resumida de esta manera:

---

<sup>180</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 59, 21/03/1963.

<sup>181</sup> AA, CD Libro III, acta n° 60, 29/03/1963.

<sup>182</sup> “Nuestra lucha ha sido objeto de movimiento y efervescencia. AGET se ha adelantado en su publicación, al tocar temas religiosos en ciertas expresiones de tipo ideológico. No obstante que la medida impulsiva es oportuna, dejamos constancia expresa que se ha aclarado bien que el gremio en ningún momento recurre a apoyos que pueden ser factor de confusión en el movimiento” en AA, acta CD n° 60, 29/03/1963.

<sup>183</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 61, 03/04/1963.

<sup>184</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 63, 09/04/1963.

<sup>185</sup> La propuesta del ejecutivo consistía en los siguientes puntos: 1) En cumplimiento de la ley de equiparación de haberes n° 2834, incrementar el valor del índice de las remuneraciones que percibe el magisterio provincial, estableciendo a partir del 1° de marzo del año en curso, que es igual a 230. 2) La liquidación conforme al valor del índice indicado en el artículo anterior se efectuaría en la siguiente forma: meses de marzo y abril a razón de 1=170; mayo y junio, 1=200 y de julio en adelante 1= 230. 3) La diferencia acumulada desde marzo a junio inclusive del corriente tendrá prioridad en el pago que se

*“...sin manifestar que aceptamos, es interesante saber en qué condiciones quedarían los salarios de marzo. Hicimos referencia a salarios caídos, al caer salarios de marzo, la provincia se ahorra líquido 24 millones de pesos, es decir que con 30 millones de pesos estarían en condiciones de pagar el índice y quedarían aún llenos de oro. Luego al gobierno le conviene propiciar la huelga y eliminar el déficit no pagando al magisterio. Esta apreciación ha sido tomada por los padres como otro planteo, pero no es así. Nosotros disentimos [...] Ellos con claridad pueden manifestar que ATEP propone abril y mayo con 190 puntos, y que el gobierno ofrece 6.000 pesos desde mayo.- que el gobierno no puede arrancar un con índice alto, pero ATEP dice, por su parte, que con 2’5 millones de pesos no es solución”<sup>186</sup>*

La decisión final de la directiva fue aceptar la propuesta gubernativa de comenzar con el índice 170, en lo que entendían constituía un gesto de buena voluntad por parte del sindicato. De esta forma, el 13 de abril se preparó el decreto que contenía las disposiciones finales del ejecutivo. Otro de los saldos del prolongado conflicto fue la mutación de la relación con la Comisión de Padres, a quien miembros de la directiva sindical, como Joaquín Cazalbón, consideraban parcialmente responsables del alargamiento del conflicto<sup>187</sup>. El interventor Gordillo Gómez, por su parte, se mostró “menoscabado” por la publicidad que ATEP se había ocupado de otorgar al conflicto, mediante publicaciones en medios de prensa, tanto locales como nacionales.

La huelga se levantó el 20 de abril, tras la aprobación de un decreto por parte del interventor Gordillo Gómez, en el que se reconocía un aumento del 21,42% de marzo a abril, del 42,85% de mayo a junio y del 64,28% a partir de julio, aumento salarial que el poder ejecutivo quería significar como generoso, ya que no olvidaban destacar que éste

---

efectuará en el plazo a convenir con el magisterio, no siendo acumulable a las diferencias pendientes desde 1959. 4) Reconocer la existencia de la obligación contraída por el Estado Provincial a favor del magisterio, en concepto de diferencias de haberes derivadas de la falta de cumplimiento de la ley 2834 y concordante con la ley nacional 14.473 y los decretos nacionales que sucesivamente fijaron el valor del índice 1 equivalente a 230. 5) El poder ejecutivo fijará la forma de pago de la deuda reconocida en el artículo anterior, haciéndola en base a acuerdo con el magisterio. 6) El poder ejecutivo regularizará el pago puntual de los haberes procediendo de inmediato a la liquidar el aguinaldo del año 1962 y sueldos de febrero, 1963 y el mes de marzo del corriente año a la brevedad posible. 7) Dar vigencia inmediata la decreto ley nº6 de fecha 18 de marzo de 1962, Estatuto del docente. 8) El poder ejecutivo y el magisterio convendrán las posibles reservas a modificaciones a introducirse en el cuerpo legal mencionado en el artículo anterior. Véase: AA, CD, Libro III, acta nº 63, 09/04/1963.

<sup>186</sup> AA, CD, Libro III, acta nº 63, 09/04/1963.

<sup>187</sup> AA, CD, Libro III, acta nº 64, 13/04/1963.

se producía “no obstante las enormes dificultades económicas por las que atraviesa la provincia”<sup>188</sup>.

Los resultados de la prolongada huelga fueron considerados por ATEP como un cumplimiento mínimo de las demandas exigidas en el plano de las reivindicaciones de carácter económico. Al tiempo que se reconocía la importancia relativa de la participación de la Comisión de Padres, se entendía que éstos no habían estado a la altura de las circunstancias cuando, entre finales de marzo y comienzos de abril, comenzaron a surgir grietas en el frente encargado de mantener la negociación con el gobierno. En cualquier caso, acción de lucha implicó una acumulación de experiencia sindical no desdeñable, en tanto en cuanto sirvió como demostración inequívoca de la capacidad de presión de la que el gremio era capaz de ejercer, siendo hábil para generar alianzas.

Otro de los aspectos que no se deben pasar por alto de esta experiencia es el planteamiento sociopolítico que representó el ejercicio de la solidaridad entre colectivos diversos, con el objetivo de mejorar las condiciones materiales de los docentes y del funcionamiento de la escuela pública.

#### **4.4.2.2. Promesas incumplidas**

En el horizonte de ATEP se encontraban otros proyectos, los cuales fueron definidos en la primera reunión de la directiva tras la vuelta a las actividades cotidianas. En una propuesta que se enunció como un acto en el que “levantar la bandera por la reivindicación total del magisterio”, se incluyeron las siguientes metas: 1) Creación de la escuela superior del magisterio; 2) Consecución de la autonomía plena del Consejo de Educación; 3) Amejoramiento de las condiciones de la sede social de ATEP; 4) Construcción de un edificio escolar modelo; 5) Panteón; 6) Policlínico del magisterio<sup>189</sup>.

---

<sup>188</sup> Diario *El Litoral*, 20/04/1963, p. 1.

<sup>189</sup> Resulta llamativo comprobar, en cualquier caso, que la vía de financiación propuesta para alcanzar estos objetivos consistiera en la cesión por parte de los docentes de un 20% sobre el total de la deuda reconocida por ejecutivo. En: AA, CD, Libro III, acta n° 66, 04/05/1963.

El problema que apareció en escena fue el incumplimiento del compromiso acerca de no descontar del salario de los docentes los días de huelga<sup>190</sup>. La cuestión trascendió a los medios nacionales, puesto que meses atrás, el propio Frondizi había declarado estar al tanto de los problemas de los docentes provinciales<sup>191</sup>. A mediados de junio una comisión de la directiva de ATEP se reunía con el ministro de gobierno alrededor de esta cuestión, recibiendo la negativa por parte del funcionario. Los docentes amenazaron con la vuelta al cese de actividades y requirieron del compromiso de la CGT, frente a cuyos representantes el gobernador había accedido a no descontar los días de huelga<sup>192</sup>. Los días fueron pagados, pero en términos con los que ATEP discrepaba, ya que el gobierno entendía que era una concesión más que hacia al gremio de los docentes, mientras que por parte del sindicato esta medida no hacía más que negar el reconocimiento de un derecho<sup>193</sup>.

Arancibia asumió entonces una doble responsabilidad que, producto de la huelga, suponía un reto para el fortalecimiento de la entidad. Por un lado, consolidó su legitimidad como interlocutor de máximo nivel cuando tuvo ocasión de entrevistarse con el futuro presidente Arturo Illia, en un acto que significaba la irrupción definitiva de los maestros tucumanos en plano de los conflictos gremiales de repercusión nacional, lo que posibilitaba el acceso a las más altas personalidades políticas del país, algo que no se había podido alcanzar siquiera en la etapa peronista.

Por otro lado, se emprendieron esfuerzos para desacreditar las opiniones que desde algunos sectores contrarios a la línea de acción de la directiva se emitían en relación al manejo de los fondos de la agremiación. Arancibia no quería dejar ningún lugar a la duda cuando, en la reunión donde se tenía que aprobar el balance económico

---

<sup>190</sup> Esta cuestión arrancó un tiempo atrás, cuando cuatro miembros de la CUDAG (Angelina de Escobar, Isabel Ruiz y Carlos Silvera y Jaime Grinberg) se entrevistaron con el ministro de Educación de la Nación, Luis Rafael Mac Kay, quien había sido un destacado defensor de la política universitaria emprendida por Frondizi. En aquella ocasión se consiguió el compromiso del ministro para que no se descontaran los días de huelga, medida que había sido requerido por la Secretaría de Hacienda. En: *Diario La Prensa*, 12/01/1962, p. 8.

<sup>191</sup> *Diario La Prensa*, 14/02/1962, p. 1. En la misma nota se recogen, además, las declaraciones de Antonio F. Ruiz, delegado del CUDAG, quien a la salida de una entrevista con el ministro de educación le acusaba de desconocer “la importancia de la educación como institución básica de los estados modernos”, y de efectuar una política educativa “que transgrede esenciales principios de la organización republicana y representa una desviación de las formas operativas de la democracia, un inadecuado enfoque del programa de desarrollo del país y un apartamiento de la cultura de Occidente”.

<sup>192</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 68, 15/06/1963.

<sup>193</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 72, 03/08/1963.

del ejercicio precedente afirmaba con rotundidad: “los desafío a que vengan a averiguar, van a encontrar honestidad”<sup>194</sup>.

#### 4.4.3. Balance de los movimientos de fuerza

El coste de la huelga, si atendemos a los resultados concretos, puede considerarse elevado, ya que a fecha del primero de octubre los docentes provinciales no habían recibido sino los salarios correspondientes a los meses de mayo y junio<sup>195</sup>. El procedimiento de ATEP fue el habitual en estas situaciones, dirigiendo una comunicación al ministerio de Gobierno en la que expresaban su profundo malestar con la situación y prevenían que de no arribar a solución, el magisterio tendría que suspender sus actividades.

Días después de esta advertencia asumía como gobernador provincial el profesor Lázaro Barbieri<sup>196</sup>. La situación económica de la provincia era realmente grave, y se estaba viviendo la plenitud de la crisis azucarera. En ese contexto asumió el 12 de octubre un especialista en pedagogía que generó en ATEP ciertas expectativas con respecto a su futuro comportamiento<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> De hecho, mediando una aprobación de la asamblea, se fijaba el presupuesto que podría manejar la CD sin consulta previa a los delegados en 9.911.000 pesos. En: AA, CD, Libro III, acta n° 73, 26/08/1963; AA, CD, Libro III, acta n° 74, 28/08/1963.

<sup>195</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 77, 01/10/1963.

<sup>196</sup> Lázaro Nazareno de Jesús Barbieri nació en la provincia de Buenos Aires el 15 de enero de 1911. Militante radical desde su juventud, accedió a la gobernación de Tucumán el 12 de octubre de 1963, habiendo ganado las elecciones como candidato de la UCR del Pueblo. Sobre el período de su gobierno, marcado por el conflicto azucarero, consúltese: Pucci, Roberto, *Historia de la destrucción de una provincia: Tucumán, 1966*. Ediciones del Pago Chico, Buenos Aires, 2007.

<sup>197</sup> Por esto se entiende que durante la primera reunión con Barbieri no se hicieran peticiones expresas acerca del pago de salarios. No obstante, ATEP preparó un sólido programa en el que se reflejaban los cambios que la entidad aspiraba a conseguir, tanto en el aspecto económico del gremio, como en lo relativo a las mejoras educacionales. El memorándum contenía los siguientes puntos: 1.-Haberes por diferencia de índice. 2.-Estado docente. 3.-Bonificación a directores y personal jerárquico. 4.-Pago de planillas adicionales por suplencias. 4.-Depósito de retenciones se sueldo. 5.-Vigencia del estatuto del docente. 6.-Nulidad de decretos. 7.-Reglamentación de la ley 3.007. 8.-Necesidad de la creación de la escuela superior del magisterio o instituto de perfeccionamiento docente. 9.-Estricto control médico para el ingreso a la docencia y para el movimiento del personal que lo requiera. 9.-Revisión médica periódica y obligatoria. 10.-Necesidad de subsidio y contribución a acción social de ATEP. 11.-Régimen de licencias de los locales escolares. 12.-Construcción y referencia a edificios escolares. 13.-Aprovisionamiento de muebles y útiles para las escuelas. 14.-Necesidad del cumplimiento de la ley de educación común. 15.-De la ley del consejo escolar de distrito. 16.-De la deserción escolar y analfabetismo. 17.-Alfabetización de adultos. 18.-De la protección alumnos. 19.-De la salud de la población escolar. 20.-Educación sanitaria de la educación a través de la escuela por intermedio de Salud Pública. 21.-Cumplimiento de la constitución; sección 8ª: rentas propias para el consejo de Educación. 22.-Que los recursos presupuestarios sean

El primer encuentro con la nueva ejecutiva provincial no tuvo lugar hasta mediados de marzo y las respuestas obtenidas no satisficieron las demandas presentadas por la entidad. Los docentes se volvieron a encontrar con la promesa del pago de los salarios adeudados, esta vez mediante bonos por valor de 500 o 1000 pesos que, correspondientes a los meses de agosto y septiembre, tendrían como fecha de vencimiento marzo y octubre. Además, sobre el pago de los días de huelga, a pesar del paso previo dado por la administración anterior, se seguía sin tener noticias<sup>198</sup>.

El año de 1964 dio comienzo con una nueva petición de actualización de índices salariales, en este caso proponiéndose el valor 275. Mientras que sobre esta propuesta no se habían conseguido conclusiones, sí que se concretó el pago de la bonificación por antigüedad a los directores escolares, así como la liquidación de suplencias, interinatos y otras diferencias salariales que estaban pendientes desde 1960. El gobierno, por su parte, adeudaba el pago de 480.000 pesos, correspondientes a las cuotas gremiales de los meses de julio y agosto. La petición de pago de los días de huelga aún continuaba sin ser abordada por el Consejo Económico provincial, incumpliendo la promesa del ministro de gobierno.

En las posteriores negociaciones con el gobernador, ATEP consiguió el pago de los días de huelga en tres plazos, que se efectuarían junto con los salarios de febrero, marzo y abril, mejorando la propuesta inicial del gobernador de hacerlo en diez mensualidades<sup>199</sup>. También se consiguió el compromiso de aumentar el índice a 275 a partir del mes de abril, aunque el objetivo era conseguir el 315, la directiva se mostraba esperanzada en sus posibilidades de lograrlo tempranamente. Estos logros, en palabras del propio Arancibia, significaban que se había evitado una nueva huelga<sup>200</sup>.

---

volcados en la escuela común estatal. 23.-Necesidad de un instituto de orientación vocacional de los egresados de escuelas primaria. 24.-Sistema de becas para los estudiantes carentes de recursos y que posean condiciones para seguir estudios.

A estos puntos además se agregaron otras sugerencias: Que las escuelas diferenciales sean creadas también en el interior; equipamiento integral de las escuelas de prácticas rurales; atención preferente de las escuelas diferenciales; que los 4 vocales del consejo sean elegidos por el magisterio. En: AA, CD, Libro III, acta n° 79, 17/10/1963.

<sup>198</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 81, 18/11/1963.

<sup>199</sup> Finalmente, el pago de la primera cuota se efectuó en el mes de mayo. AA, CD, Libro IV, acta n° 91, 19/05/1964.

<sup>200</sup> AA, CD, Libro III, acta n° 86, 14/03/1964.

Lejos de lo que afirmaba el presidente de ATEP, la etapa estudiaremos a continuación registra un aumento de intensidad en los conflictos del magisterio. El resultado que arrojan las luchas de la docencia no refleja la consecución de todos los objetivos, sin embargo, nos parece importante señalar que es en este periodo cuando ATEP consigue afianzar su función de actor social combativo. La rotundidad con la que la militancia acompañó las decisiones de la CD se entiende como la prueba de la legitimidad que había adquirido la agremiación. No cabe duda que las jornadas de lucha que hemos examinado imprimieron un cambio duradero en la autopercepción de los docentes tucumanos que, desde la recuperación de la democracia interna, apoyaron desde sus bases a una dirigencia que expresó a lo largo de todo el periodo una actividad inédita, basada en las acciones de fuerza colectiva.

Por otro lado, si bien es cierto que los intentos de apoyarse en la delegación regional de la CGT no produjeron los resultados esperados, es interesante comprobar que entre las estrategias del sindicalismo docente tucumano se comienzan a registrar prácticas tendentes a la identificación de clase del colectivo docente, lo que certificaremos en las páginas que siguen.



## V. LOS EFECTOS DE LA CRISIS: SOLIDARIDAD Y UNIÓN SINDICAL, 1966-1973

*“Los tucumanos no cesan de preguntarse hasta cuándo permanecerá sin estallar la bomba de tiempo que día a día se amasa en su provincia”<sup>1</sup>*

### 5.1. El quiebre de la provincia

La “Revolución Argentina”, como se autodenominó el golpe militar que, en su primera etapa, encabezó el general Juan Carlos Onganía, tuvo unos efectos trágicos para el país, pero muy particularmente para Tucumán. Forman ya parte del imaginario tucumano, las escenas que resultantes de la parálisis socioeconómica de la provincia, inducida por el cierre de once de los veintitrés ingenios azucareros que funcionaban hasta entonces en la provincia. La voluntad “modernizadora” del gobierno militar pasaba por desmochar los restos de una industria productiva que empoderaba a los trabajadores y que generaba focos de resistencia social inquietantes para sus intereses.

La medida definitiva estuvo precedida por algunos intentos por parte distintos actores sociales, de reencauzar la situación hacia una deriva que pudiera ser sostenible en el medio plazo. Con este objetivo se realizó un Congreso en Defensa de la Economía Tucumana, impulsado por FOTIA. Este encuentro estuvo precedido por una manifestación de obreros del ingenio Amalia, el 26 de abril, quienes terminaron concentrados en la plaza Independencia de la capital tucumana, frente a la Casa de Gobierno que ocupaba Lázaro Barbieri<sup>2</sup>. No obstante, la situación no cesó de tensarse, no en vano, el 4 de mayo se encontraban en huelga por impago los empleados de la administración pública, los maestros, los empleados judiciales y el personal sanitario.

Según algunos análisis, de la celebración del Congreso se obtuvo, entre otros resultados, la constatación de un hecho inédito en las manifestaciones sociopolíticas en la provincia. A una semana vista del encuentro, *Primera Plana* observaba que por vez

---

<sup>1</sup> *Primera Plana*, 22-28/03/1966, p. 8

<sup>2</sup> Llama la atención que este Congreso voluntariamente “conservador” de los escasos recursos materiales que para los trabajadores producía la actividad de los ingenios que se amenazaba con cerrar, fuera considerado por la revista *Primera Plana* como de “neto corte insurreccional”. Véase: “Tucumán: paraíso de Scotland Yard”. *Primera Plana*, n° 175, 03-09/05/1966, p. 23.

primera había tenido lugar un acto de esta envergadura donde el peronismo había acudido en minoría frente a los representantes de grupos de tendencias marxistas y demócrata cristianos. Mientras los primeros habían copado las posiciones más elevadas al interior de la mesa directiva, los segundos detentaban mayor notoriedad pública fruto de su participación activa en los actos derivados del Congreso<sup>3</sup>.

De la repercusión nacional que el conflicto tucumano estaba adquiriendo deja constancia la publicación de una extensa investigación titulada “Tucumán: reportaje al caos”, aparecida en la revista *Primera Plana*<sup>4</sup>. El semanario tomó como punto de partida la jornada de huelga general del martes 17 de mayo que definió como: “...otro brote, uno de los más pequeños, de una situación de violencia y hambre que parecen no tener fin y que, al menos desde fines de 1965, atenta contra la estabilidad constitucional del Presidente Arturo Illia”<sup>5</sup>. De esta afirmación se extrae que, para la publicación capitalina, en la flagrante situación sobrevivida por los tucumanos no se encontraba el principal desagravio a la convención pacífica, sino que éste había que irlo a buscar en las vías de posibilidad que ofrecía el deslegitimado, desde su génesis, proyecto encabezado por Illia. Pero más allá de esta desenfocada y miope mirada, donde incluso se menciona la supuesta impresión de que algunos pequeños cañeros encuentran en “la sangre aborigen” el origen de todos los males, este reportaje deja una declaración que estremecen por el tono caustico empleado por quien debía ocupar una posición de privilegio para tratar de solventar la situación. Las palabras del gobernador Barbieri, sórdidamente proféticas, fueron las siguientes:

*“Si los problemas de la provincia no se resuelven, Tucumán tendrá que ser dividida en dos partes: una se la daremos al Norte, para que los industriales de Salta y Jujuy cuiden de ella; y a los otros 500.000 habitantes, que se los lleve Buenos Aires: total, ya Buenos Aires está acostumbrado a acumular escombros en sus villas miseria.”*<sup>6</sup>

El gobierno provincial tomó la iniciativa de crear una “Junta asesora de promoción económica”. El órgano, de carácter consultivo, estuvo compuesto por dos miembros de cada una de las siguientes organizaciones: Bolsa de Comercio de Tucumán,

---

<sup>3</sup> *Primera Plana*, n° 176, 10-16/05/1966, p. 24.

<sup>4</sup> “Tucumán: reportaje al caos”, *Primera Plana*, n° 178, 24-30/05/1966, pp. 15-24.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 15.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

Cámara Azucarera Regional, Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, Centro Azucarero Tucumano, Confederación General del Trabajo, Estación Experimental Agrícola, Federación Económica de Tucumán, Federación de Empleados de la Industria Azucarera, Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Sociedad Rural de Tucumán y Unión de Cañeros Independientes de Tucumán. Como gesto de deferencia institucional, la presidencia de la Junta quedaba reservada a la figura del gobernador o al delegado que éste designara<sup>7</sup>.

A fines de ese mes, representantes de los trabajadores azucareros y de los docentes condenaron al unísono la muerte del estudiante Santiago Pampillón a manos de la policía. Al duelo decretado por la Federación Universitaria Argentina, se adhirió tanto UCIT como FOTIA. ATEP, además, declaraba que daba su apoyo a la medida “cumpliendo con un elemental deber de solidaridad con la juventud estudiosa en tradicional lucha por los principios esenciales de la educación, la ciencia y la cultura sin más limitaciones que las necesarias en cualquier comunidad civilizada”<sup>8</sup>. Aunque en relación a la actuación de FOTIA, en los meses que siguieron a los cierres, algunas voces acusaron a su dirigente, Atilio Santillán, de no haber sabido mantener la unidad del gremio ni una posición de autoridad frente a los causantes del problema que acontecía<sup>9</sup>.

En octubre reverdecieron los desencuentros con el gobierno interino, que demoraba los pagos a los docentes. Según expresaba el gobernador Delfor Elías Otero, la educación era una prioridad del gobierno, pero la situación financiera impedía la normalización de los haberes pendientes de pago, así como no se mencionaba la deuda por equiparación<sup>10</sup>. Las peticiones de ATEP alzaron la voz respecto de la actualización en base al índice 800 como condición mínima, en función de la merma que suponía la creciente inflación. Esta petición venía avalada por el precedente de que en la segunda semana de septiembre, el PEN dictó un aumento de la actualización salarial anual hasta el índice 500 para los docentes nacionales. La medida otorgada equiparaba al magisterio nacional con los salarios percibidos por los agentes de la administración pública, traduciéndose en un incremento del 25% sobre las remuneraciones hasta ese momento

---

<sup>7</sup> Véase: Diario *La Prensa*, 01/09/1966, p. 11.

<sup>8</sup> Diario *La Prensa*, 23/09/1966, p. 6.

<sup>9</sup> *Primera Plana*, n° 198, 11-17/10/1966, p. 21

<sup>10</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 35, 21/10/1966.

percibidas. Sin embargo, no se contemplaron abonos extraordinarios por dedicación exclusiva a la función docente<sup>11</sup>. Por otro lado, ATEP aceptó participar en la Comisión Asesora de Educación del Ministerio de Gobierno, en lo que intentó ser una maniobra para influir de manera más efectiva sobre las políticas laborales que el gobierno provincial pensara aplicar sobre los docentes provinciales<sup>12</sup>.

Llegada la última semana de octubre, ATEP comunicó al ministro de Gobierno que pasaba a estado de alerta, solicitándole que diera una pronta solución a las deudas que se acumulaban. Debido a los magros resultados obtenidos en el encuentro con los representantes políticos, la asamblea del gremio decidió apoyar la realización de un paro de 24 horas<sup>13</sup>, que la CD fijó para el miércoles 9 de noviembre<sup>14</sup>. Entretanto, el gobierno provincial aducía que sin la llegada de los fondos, resultaba imposible ofrecer una solución al reclamo de los docentes. La asamblea que siguió a la jornada de paro, realizada el día 12, contó con la asistencia de 155 delegados. Después de haber constatado que la disposición del gremio era efectiva, la presidencia consultó a la asamblea sobre la actitud a seguir. La decisión adoptada, reflejo del moderado optimismo que siguió a la ejecución de algunos pagos en los días precedentes, fue la de pasar a cuarto intermedio hasta la semana siguiente<sup>15</sup>.

Los libramientos de pagos del gobierno continuaron en esos días por la senda apenas arrancada de modo que, con ocasión de la siguiente asamblea de delegados, Sixto M. Paz estuvo en disposición de anunciar que si bien no se había logrado la normalización en los pagos, sí que se había alcanzado a pagar la mitad de la suma adeudada a los maestros suplentes. No obstante, la predisposición para la movilización mostrada por la asamblea hizo que, de nuevo, se confirieran facultades a la CD para trasladar a los afiliados la declaración de estado de alerta del gremio<sup>16</sup>. ATEP demostraba así su capacidad para continuar con las movilizaciones, a pesar de los gestos que el ejecutivo trató de dirigir hacia el colectivo docente. Se puede señalar, no obstante, que esta movilización sí que supuso un éxito relativo del gremio, habida

---

<sup>11</sup> Con este aumento, un docente que se iniciaba en la carrera docente, sin antigüedad ni salario familiar, pasaba de los 14.000 pesos hasta ganar 17.500. Véase: Diario *La Prensa*, 08/07/1966, p. 1.

<sup>12</sup> La participación en esta comisión estuvo integrada por el presidente de la entidad, así como Julio Bulacio, Sixto Miguel Paz, y Miguel Aragón. AA, CD, Libro IV, acta n° 137, 03/10/1966.

<sup>13</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 36, 05/11/1966.

<sup>14</sup> AA, CD, Libro IV, acta n° 141, 07/11/1966.

<sup>15</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 37, 12/11/1966.

<sup>16</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 38, 16/11/1966.

cuenta de que una vez avanzada la segunda mitad del mes de noviembre, el personal titular ya había recibido la paga del mes de septiembre, así como también se había hecho para algunos puestos correspondientes a interinatos y suplencias<sup>17</sup>.

Del mismo modo, la presencia de ATEP en el ámbito de los trabajadores azucareros seguía haciéndose patente mediante el apoyo a iniciativas impulsadas por los trabajadores desocupados<sup>18</sup>. Un ejemplo de estas acciones fue la intermediación frente al subsecretario de educación y el de trabajo, defendiendo la propuesta de emplear a la mano de obra desocupada y los equipamientos del Ingenio Esperanza, con el fin de reparar y construir asientos y utillajes varios para las mal dotadas escuelas provinciales<sup>19</sup>.

No obstante, lo que unos días atrás parecía un ligero cambio de rumbo en las actuaciones del gobierno provincial, no fue más allá de un espejismo que condujo a que, como venía resultando habitual, en la primera semana de diciembre no se hubiera procedido aún al pago de los salarios correspondientes al mes de octubre y que, por descontado, existieran pocas expectativas acerca del pago de la deuda por equiparación. En este punto resulta sorprendente el arrojo, no exento de ingenuidad, de la CD del gremio que decidió trasladarse a Buenos Aires –siendo los designados para esta gestión Francisco I. Arancibia y Sixto M. Paz- para tratar de iniciar negociaciones con el gobierno nacional<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> AA, CD, Libro IV, acta n° 142, 21/11/1966.

<sup>18</sup> Son muy frecuentes los testimonios que relatan esta época de unidad del sindicalismo combativo tucumano, citándose siempre en la ecuación a FOTIA y ATEP. La recuperación de algunos de estos testimonios se puede encontrar en: Kotler, Rubén Isidoro, “La alianza obrero estudiantil como respuesta a la dictadura de 1966 en la periferia argentina. El caso de Tucuman”, *Clio, Revista de pesquisa histórica*, N° 132. Disponible en: <http://www.revista.ufpe.br/revistaclio/index.php/revista/article/viewFile/360/197> (Consultado el 10/06/2015). En esta línea de la recuperación de la memoria, existe un trabajo que aborda la experiencia sindical de mujeres militantes docentes, poniendo el acento sobre el empoderamiento que esta experiencia imprimió sobre sus protagonistas. Bader, Melina Lazarte, “Docencia y participación sindical. Testimonios de mujeres tucumanas”, *IX Encuentro Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina-Los usos de la memoria y la Historia oral*. Disponible en: <http://www.historiaoralargentina.org/attachments/article/eho2009/Mundodeltrabajo/Lazarte%20Bader-Melina.pdf> (Consultado el 20/05/2015).

<sup>19</sup> AA, CD, Libro IV, acta n° 142, 21/11/1966.

<sup>20</sup> AA, CD, Libro IV, acta n° 143, 05/12/1966.

## 5.2. El camino hacia la proletarización de los trabajadores de la educación

A principios de 1967, los militantes sindicales sobrepasaron la conducción de FOTIA y tuvo lugar la manifestación en la que perdió la vida Hilda Guerrero, que recibió un disparo en la cabeza cuando la policía reprimía a los manifestantes que se habían presentado en la comisaría de Bella Vista pidiendo la liberación de un obrero detenido<sup>21</sup>. Durante el mes siguiente, representantes cordobeses del sindicato “Luz y Fuerza” visitaron la provincia, tras lo cual ambas partes manifestaron la voluntad de estrechas “vínculos permanentes”. Incluso la revista “Dinamis”, publicación del sindicato dirigido por Agustín Tosco<sup>22</sup>, dedicó un reportaje al sindicato de los maestros tucumanos<sup>23</sup>.

El cambio en el rumbo económico quedó entonces, según el gobierno provincial, supeditada a las cantidades recaudadas mediante los impuestos<sup>24</sup>, lo que convertía de facto a los docentes en un colectivo a la expensa de la solución de problemas que la propia administración era incapaz de gestionar con solvencia. Fue tan sólo a comienzos del mes de marzo que se hizo efectivo el pago correspondiente al mes de enero, momento en el cual también se desbloquearon las retenciones gremiales por valor de 2.408.803 millones de pesos, destinadas a pagar los servicios ofrecidos por el Colegio Médico<sup>25</sup>.

La situación distaba mucho de mejorar con rapidez y el balance realizado por el gremio ascendía al impago de 4 cuotas por equiparación correspondientes al año 1965 y el impago de todas las correspondientes a 1966<sup>26</sup>. El secretario de finanzas del gobierno provincial se comprometió a disponer un pago por valor de 50 millones de pesos, cifra que no alcanzaba ni la mitad de lo presupuestado en concepto de deudas para el presente año 1967. La asfixia económica del gremio empeoró desde el momento en que el Colegio Médico decidió aumentar los aranceles en un 40%. Los ánimos de los docentes se encendieron y Arancibia declaró que era un orgullo el ser los primeros que se

---

<sup>21</sup> *Primera Plana*, n° 212, 17-23/01/1967, p. 12.

<sup>22</sup> Principal dirigente del sindicato Luz y Fuerza. Sus posiciones marxistas y su participación en el Cordobazo le llevaron a convertirse en una de las figuras emblemáticas de finales de los sesenta y principios de los setenta.

<sup>23</sup> AA, CD, Libro IV, acta n° 148, 06/3/1967.

<sup>24</sup> AA, CD, Libro IV, acta n° 147, 23/02/1967.

<sup>25</sup> AA, CD, Libro IV, acta n° 148, 06/03/1967.

<sup>26</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 39, 18/03/1967.

opusieran estas medidas, afirmando que “los maestros no deben nada a los médicos”<sup>27</sup>. La respuesta del Colegio fue interrumpir súbitamente la prestación de servicios médicos<sup>28</sup>. Sin visos de solución, en el mes de agosto el gremio no estaba sino en disposición de saldar los pagos debidos hasta el mes de abril, ascendiendo la deuda total a 9 millones de pesos<sup>29</sup>. Finalmente, estos problemas económicos tuvieron como resultado el aumento de las cuotas gremiales y sociales para los militantes de ATEP desde ese mes de agosto<sup>30</sup>, como ya había ocurrido en una ocasión anterior.

En este período, las reivindicaciones de los docentes giraron en torno a la consecución del índice de actualización salarial de 800 puntos (mantenido todavía en 575 por efecto del decreto n° 7971), así como el reconocimiento por la dedicación exclusiva, petición ésta que de acuerdo a lo decidido por el gobierno provincial sólo se reconocería a partir de enero de 1969<sup>31</sup>. A esta cuestión se sumó otra de las disputas abiertas, que giró en torno al régimen jubilatorio establecido por la ley 3470<sup>32</sup>, adaptación provincial de la ley nacional n° 17.310<sup>33</sup>, en función de la cual se establecía

---

<sup>27</sup> En cualquier caso, el problema para hacer frente a los pagos por servicios médicos no era exclusivo de los docentes. Un número importante de gremios de la provincia redactaron una nota pública en la que ponían de manifiesto su “imposibilidad material” para afrontar los aumentos exigidos, al tiempo que pedían retomar las negociaciones y reanudar los servicios médicos que el Colegio había interrumpido unos días atrás. Los colectivos que suscribieron esta petición fueron: Luz y Fuerza, Trabajadores de la Universidad, Obreros y Empleados Municipales, Obreros de la Carne, Vendedores de Diarios, Obreros de la Industria del Pan, Obreros Fideeros, Asistencia Social del Personal de Agua y Energía, Asociaciones Bancarias, Empleados de la UNT, Empleados de Farmacia, Asociación de Trabajadores del Estado, sociedades de Empleados y Obreros del Comercio, Obreros Papeleros, FOTIA, FEIA, Asociaciones Mutualistas, Universitaria del Norte, Unión Obrera de la Construcción, Obra Social de Salud Pública de la Nación y ATEP. En: Diario *La Gaceta*, 30/07/1967, p. 8.

<sup>28</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 40, 29/07/1967.

<sup>29</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 41, 02/08/19667.

<sup>30</sup> Diario *La Gaceta*, 10/09/1967, p. 10.

<sup>31</sup> En el mes de septiembre, ATEP se entrevistó con el subsecretario de Gobierno e interino de Educación de la provincia, Juan Carlos Lynch, con el fin de hacerle notar que el gobierno estaba incumpliendo sus propias disposiciones en tanto en cuanto las estadísticas oficiales fijaban un aumento del costo de la vida correspondiente a un valor de 1.100 pesos por punto, mientras que la petición de ATEP era tan sólo de 800, sin que siquiera la moderada petición fuese implementada. Asimismo, se aprovechó para recordar al dirigente que cuando los salarios debían haber alcanzado ya la cifra de 24.000 pesos para un sueldo inicial nominal, la cantidad aún se mantenía en 15.000. En el mismo sentido se hacía referencia al impago de la sobreasignación de 2.500 pesos y pago de la dedicación exclusiva contemplado en el Estatuto del Docente. En: Diario *La Gaceta*, 24/09/1967, p. 9.

<sup>32</sup> La mencionada ley 3470 contiene el Estatuto del Docente provincial. Merece la pena destacar que fue recién en junio de este año que el texto legal, por el que se había luchado desde casi una década atrás, entró en vigor plenamente. Al documento se puede acceder en: <http://www.tucuman.sadop.net/Article/443/Files/L3470estatutodocentetextoconsolidadotucuman.pdf> (Consultado el 25/05/2015).

<sup>33</sup> De hecho, la promulgación de esta modificación propició la activación de los docentes jubilados como elemento activo del panorama de actores sociales en la provincia. A partir del mes de noviembre comenzaron a reunirse con el fin de obtener la personería jurídica que reconociera al Centro de Docente

una reducción en los haberes jubilatorios, lo que significaba el desconocimiento del derecho adquirido al 82% móvil, algo que, en palabras de Arancibia, redundaría en el “lógico detrimento de la maltrecha economía del jubilado”<sup>34</sup>.

En todo caso, se podían encontrar muestras de solidaridad que, si se leían entre líneas, se enmarcaban dentro de la lucha liderada por el sindicalismo docente. En este sentido, encontramos una carta enviada al director del diario *La Gaceta* por Emilio del C. Sánchez y Nina Acosta, remitida desde la localidad de Alderetes, en la que se quejaban de la situación de la escuela. Según se detallaba en el texto, en el centro “[desde 1965] quedaron únicamente tres educadoras, y se obligan a triplicar el grado hasta la cantidad de setenta y noventa alumnos”<sup>35</sup>. ATEP correspondía a estos gestos demostrando que entre sus preocupaciones no sólo se contaban los problemas materiales de los trabajadores de la educación, sino que también se debía atender al bienestar de su alumnado. Siguiendo esta lógica, y en absoluto ausente de intencionalidad crítica sobre el malestar económico que azotaba la provincia, ATEP demandó la reapertura de la colonia de vacaciones escolares situada en San Pedro de Colalao, argumentando que, con la llegada del verano existirá un “considerable porcentaje de niños que por la situación económico-social de la campaña acusan los efectos de la destrucción y sus consecuencias...”<sup>36</sup>.

Lo cierto es que el convulso año de 1966 había pasado factura a la militancia gremial docente. A tenor de la baja asistencia a las escasas asambleas realizadas a lo largo de 1967 (que en varias ocasiones no alcanzaron a contar con el quórum necesario según los estatutos), se constata que el movimiento sindical estaba entrado en un fase de letargo provocado, a buen seguro, por la inflexible posición gubernamental y la erosión en los ánimos propia de las demostraciones de fuerza que no fueron seguidas de mejoras materiales perceptibles por los trabajadores. Arancibia tomó acertadamente el pulso de un colectivo exhausto y, delante de una asamblea de nuevo poco concurrida, llamó la atención sobre la indiferencia que un buen número de maestros mostraba ante la actividad sindical, acción donde se encontraba la clave de las posibilidades de éxito del

---

Jubilados, señalando su directiva que con su gestión querían tender a “...lograr conquistas sociales, como son los servicios asistenciales, cooperativa de consumo, casa de descanso y organización de excursiones”. Véase: Diario *La Gaceta*, 29/10/1967, p. 8.

<sup>34</sup> Diario *La Gaceta*, 27/08/1967, p. 11.

<sup>35</sup> Diario *La Gaceta*, 23/07/1967, p. 6.

<sup>36</sup> Diario *La Gaceta*, 03/12/1967, p. 11.



colectivo, en palabras del propio dirigente. Frente a los delegados escolares preguntó acerca del estado de ánimo de la docencia, pero en esta ocasión tan sólo obtuvo como respuesta la expresión de disconformidad con respecto al aumento salarial de un 15% sobre el salario bruto mensual, que había sido recientemente implantado<sup>37</sup>, que en palabras de Sixto M. Paz era “ilegal e irrisorio [...] sin haberse tenido en cuenta lo exiguo de los sueldos actuales frente al elevado costo de la vida”<sup>38</sup>.

En adelante, las críticas hacia el gobierno se formularon en razón del aumento de sueldo en base a índice de 800 pesos, cuando estaba reconocido por el ejecutivo nacional que el costo de la vida se situaba en los 1.100 puntos. Esto hacía alcanzar la cifra de los 24.000 pesos para un sueldo nominal, mientras se mantenían los 15.000. A estas críticas, ATPE agregaba que no se cumplía la asignación por dedicación exclusiva, contemplada en el Estatuto<sup>39</sup>.

### **5.2.1. Fragmentación y renovación de la unidad docente**

En el plano de la unificación sindical docente, las negociaciones continuaban de cara a la creación de lo que sería la Confederación General de Educadores de la República Argentina (en adelante CGERA), para lo que se designó como delegada a la Sra. De Oste, en tanto que representante de ATEP en la Federación docente<sup>40</sup>. Por otro lado, a partir de esta decisión se produjo un movimiento que dotó de sentido a la perspectiva de actuación que se esperaba que CGERA asumiera, puesto que luego de la incorporación de la Federación Docente de Tucumán, se produjo la salida de éste nucleamiento provincial de la Federación Tucumana de Mestros Laínez, disconforme con la orientación y el liderazgo que venía asumiendo ATEP en el proceso de

---

<sup>37</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 42, 10/11/1967.

<sup>38</sup> Diario *La Gaceta*, 23/07/1967, p. 12.

<sup>39</sup> Diario *La Gaceta*, 24/09/1967, p. 9.

<sup>40</sup> EL congreso que dio lugar a la fundación de esta confederación tuvo lugar en la ciudad de San Luis, el 11 de febrero de 1967. A este evento acudieron 18 entidades gremiales que representaban a cerca de 150.000 educadores de distintas ramas y jurisdicciones. En palabras de Arancibia: “Cabe destacar la trascendencia histórica de dicho congreso para el gremialismo docente argentino [...] A Tucumán le corresponde la secretaría de relaciones gremiales e interior [...] función de gran importancia, sobre todo para la atención los problemas de los magisterios provinciales”. En sustitución de Oste, fue designado para ocupar este cargo Sixto M. Paz, quien en el momento de su nombramiento expresó: “Con justificada razón la docencia argentina cifra muchas esperanzas en el nuevo organismo confederal”. Finalmente, la junta directiva de la entidad se compuso con representantes de San Luis, Mendoza, Tucumán, Salta, San Juan y Capital Federal. En: AA, CD, Libro IV, acta n° 146, 09/01/1967; AA, CD, Libro IV, acta n° 147, 23/2/1967.

negociaciones hasta ese momento seguido<sup>41</sup>. Lo cierto es que los maestros Laínez comenzaron a percibir un aumento junto con el reconocimiento de la dedicación exclusiva, así como con una asignación adicional en el sueldo inicial. Es a partir de este instante que se confirmó la salida de la entidad tucumana de la CAMYP, quienes no obstante siguieron cursando invitaciones a ATEP para participar de distintos actos<sup>42</sup>.

La posición de CGERA quedaba definida por las palabras de Miguel Bianchi, prosecretario de Hacienda de la confederación. En declaraciones hechas al diario *El Mundo*, Bianchi expresaba que:

*“La escuela pública debe propender a la formación de la cultura nacional como requisito para lograr el desarrollo económico, cultural y social del pueblo argentino [...] Los educadores deben participar en la solución de los problemas del país. No se puede separar la educación de la totalidad de éstos”*<sup>43</sup>

En el transcurso del Congreso de San Luís, quedó plasmada la ruptura con la CUDAG, organismo que al contrario que CGERA, se daba por satisfecho con el incremento propuesto por el gobierno. Según los informes policiales relevados con tal motivo, “muchos fueron los dirigentes [sic.] provinciales que evidenciaron el antagonismo con el CUDAG”, señalando especialmente a los delegados de Mendoza, San Luis y San Juan<sup>44</sup>.

En la provincia de San Luis se organizó un congreso de entidades docentes del interior que estaban enfrentadas con la CUDAG, a la que acusaban de antidemocrática. En esa reunión se creó la CGERA, de la cual participaron algunas entidades del interior que ya eran sindicatos únicos. Además de ATEP, en este foro se encontraron el SUTE de Mendoza, la Asociación del Magisterio Provincial Puntano y Afines (AMPIA) de

---

<sup>41</sup> La Federación Tucumana de Maestros Laínez continuó afiliada a CAMYP. Aunque con una orientación distinta, los maestros nacionales participaron de protestas realizadas contra la modificación del régimen de jubilaciones previsto en la ley 14.473. La crítica a la ley 17.310 se fundamentaba en la exigencia de 20 años frente a cursos y la edad mínima de 55 años como requisitos para acceder a la jubilación, así como la retirada de la revalorización anual del 82% móvil. Resulta curioso, en cualquier caso, el ejemplo elegido para ilustrar la especificidad de la condición laboral del docente: “La aplicación de sus escalas de haber jubilatorio despoja a los docentes de su derecho al 82% móvil del último sueldo y desconoce a los educadores su condición de personal tan especializado como el de las fuerzas armadas”. Véanse: Diario *La Gaceta*, 13/08/1967; AA, CD, Libro IV, acta n° 150, 20/03/1967.

<sup>42</sup> Véase: AA, CD, Libro IV, acta n° 149, 13/03/1967.

<sup>43</sup> Diario *El Mundo*, 10/07/1967, en: DIPBA, Mesa B, Carpeta 127, Legajo n°217, Tomo I, f. 13.

<sup>44</sup> DIPBA, Mesa B, Carpeta 127, Legajo n° 217, Tomo I, f. 16.

San Luis. En ese congreso se convergieron tendencias distintas, desde el sindicalismo peronista ortodoxo, hasta el sindicalismo más combativo, mayoritariamente de orientación socialista<sup>45</sup>.

Como entidad representante de la CGERA en la provincia, la Federación Docente de Tucumán, se declaró en contra del aumento del 15% propuesto por el gobierno, y su portavoz quiso:

*“señalar ante la opinión pública nacional la contradicción en que incurren las autoridades gubernativas que, mientras por una parte proclaman la prioridad de la educación y propósitos de mejoramiento, por otra parte dictan medidas inconsultas, no pocas de las cuales implican un verdadero retroceso para la profesión docente, y por ende para nuestra educación”*<sup>46</sup>

CGERA convocó a sus entidades para participar, el 24 y 25 de febrero de 1968, en el Congreso del Magisterio Nacional, con la intención de discutir los problemas derivados de la incorrecta aplicación del Estatuto del Docente Nacional y sus equivalentes provinciales, en especial en lo que se refería al régimen jubilatorio, remuneraciones, gobierno escolar, obras sociales, situaciones especiales de las provincias, edificación y material escolar y deserción en los niveles primarios, entre otros. A modo de síntesis, el argumento esgrimido por los convocantes remitía a las “horas inciertas que vive en todo el país”<sup>47</sup>.

### **5.2.2. La radicalización del conflicto**

El conflicto social tucumano seguía agravándose ante el paso del tiempo, que sólo suponía acontecimientos que venían a llover sobre mojado. La convulsa situación en el ingenio San Pablo, donde el 7 de enero habían sido despedidos 97 trabajadores, provocó que apareciera la alianza entre los trabajadores azucareros y la Iglesia o, al menos, parte de ella. Víctor Gómez Aragón, quien era en ese momento el cura del ingenio, avivaba las llamas de la conciencia de los trabajadores vejados mientras decía:

---

<sup>45</sup> Puiggrós, Adriana, *Dictaduras y utopías en la historia reciente de la educación argentina (1955-1983)*, *Historia de la Educación Argentina*, tomo VIII. Galerna, Buenos Aires, 1997, pp. 77-82.

<sup>46</sup> Diario La Gaceta, 23/07/1967, p. 12.

<sup>47</sup> Diario La Gaceta, 14/02/1968, p. 5.

*“Un pueblo que no grita su esclavitud es un pueblo sin destino y sin futuro: deben entender los poderosos que acometen empresas económico-sociales que ellas no pueden ser aventuradas en pos de ganancias, sino de un verdadero compromiso con Dios y la comunidad, desde el momento en que la persona del trabajador es mejor capital, no para su explotación sino para su dignificación y grandeza personales.”<sup>48</sup>*

El gobernador Fernando Aliaga García respondía que, aún no llegando a constituir delito, este tipo de expresiones serían reprimidas por la ley, ya que constituían una violación a las normas de disciplina social.

La vida interna del sindicato transcurría relativa normalidad, de modo que el 19 de mayo de 1968 se celebraron elecciones para la renovación de la CD. Por primera vez en su historia, sólo concurrió una única lista, la “Azul y Blanca”, que llamaba a la “imperiosa necesidad de proseguir la lucha en defensa de los educadores y la escuela pública que viene desarrollando el gremio”<sup>49</sup>. Esta posición se explicaba a través de los siguientes ejemplos:

*“remuneraciones docentes humillantes, mientras parece que si hay dinero cuando se trata de aumentar los sueldos de las altas jerarquías gubernamentales; deudas permanentes al magisterio interino y reemplazantes; falta de pago de la dedicación exclusiva; deuda paralizada de alrededor de 700 millones de pesos por equiparación de índices, demora en la actualización del índice docente de jubilados; el nuevo presupuesto fiscal no contempla ni siquiera las necesidades mínimas de la Educación, y menos su mejoramiento, pese a que siempre figura como prioridad; necesidad impostergable de crear nuevas escuelas de diversos tipos y dar impulso eficaz a construcción, ampliación y reparación de locales; inexistencia de una efectiva asistencia escolar, especialmente en zonas pauperizadas de la provincia; el Consejo de Educación intervenido y el magisterio sin su legítima representación; régimen de incompatibilidades para el magisterio después de 60 años de correcta interpretación de la Constitución”<sup>50</sup>.*

---

<sup>48</sup> *Primera Plana*, n° 265, 23-29/08/1968, pp. 18-19.

<sup>49</sup> *Diario La Gaceta*, 19/05/1968, p. 10.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

La lista recibió el apoyo de 778 votantes, hecho que da cuenta de la baja participación que confirma la escasa movilización de las bases gremiales durante ese año<sup>51</sup>. Lamentablemente no contamos con la información acerca de la cantidad de votos blancos o nulos que pudieran darnos pistas acerca del volumen de afiliados que desaprobaban la gestión de la CD dirigida por Arancibia desde hacía una década.

Fue hacia el mes de abril cuando comenzó a tomar forma una iniciativa política que, de nuevo, contribuyó a generar malestar entre la comunidad educativa. Nos referimos al proyecto de Ley General de Educación del secretario de Estado de Cultura y Educación de la Nación, José Mariano Astigueta<sup>52</sup>, que tenía como fin, entre otros, el de transferir a las provincias la jurisdicción de las escuelas que hasta ese momento eran nacionales<sup>53</sup>. La medida supondría, desde el punto de vista de las organizaciones sindicales<sup>54</sup>, el empeoramiento de las condiciones de la enseñanza ya que, si a duras penas el Estado central era capaz de invertir los recursos suficientes aun con el importante volumen presupuestario disponible, mucho más difícil situación habrían de afrontar las administraciones provinciales, malacostumbradas ya a la austeridad impuesta por la nefasta situación económica. Por ende, el sindicalismo docente entendió, con buen tino, que con esta medida no sólo no se mejorarían las condiciones de trabajo del personal dependiente de las provincias, sino que muy probablemente, los antiguos maestros nacionales pasarían a ser compañeros de ruta en la precariedad. De

---

<sup>51</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 46, 28/06/1968.

<sup>52</sup> José Mariano Astigueta, nacido en Buenos Aires en 1922, estudió Derecho y trabajó como fiscal federal hasta que renunció a su cargo, como consecuencia de un desencuentro con el gobierno de Perón. Durante un mes ocupó la cartera de Educación, en el gobierno de José María Guido. Ciertamente, Astigueta no pareció contar con las mejores condiciones para sacar adelante su proyecto de ley. Además de la consecuente contestación de los actores sindicales y otras asociaciones integrantes del ámbito educativo, el secretario contó con las dificultades que le supuso el enfrentamiento con los que A. Puiggrós define como al “derecha liberal conservadora”, conectada con el equipo educativo de CONADE, y que contaba con notables representantes como Emilio Fermín Mignone. Sin embargo, en palabras de Puiggrós, “el conservadurismo católico ultramontano no toleraba la menos expansión del funcionalismo desarrollista”. En: Puiggrós, A., *Dictaduras y...*, op. cit., p. 55.

<sup>53</sup> Véase: Diario *La Gaceta*, 09/06/1968, p. 10.

<sup>54</sup> Aunque pudiera resultar previsible, merece la pena señalar que también los grupos de la izquierda política se hicieron eco de las medidas de Astigueta, en tanto en cuanto no resultaba del todo frecuente estos grupos repararan en los efectos de las políticas educativas y, menos aún, acerca de las consecuencias sobre los trabajadores de la educación en tanto que sujetos conformadores de la clase trabajadora argentina. Como ejemplo, tomaremos la mención que la publicación del Partido Comunista Argentino, “Nuestra Palabra”, efectúa a este respecto: “En el 80 aniversario del fallecimiento del gran sanjuanino se realizaron actos evocativos en todo el país. Entidades laicas y del magisterio rindieron homenaje al prócer y reivindicaron la escuela pública. En ceremonia oficial, el Dr. Astigueta, secretario de Estado de Cultura y Educación de la Dictadura que pisoteó los principios sarmientinos en la enseñanza, colocó una corona de flores al pie del monumento de Sarmiento en Palermo”. En: *Nuestra Palabra*, n° 950, 17/09/1968, p. 2.

paso, como efecto de no menor importancia, los edificios escolares y sus equipamientos respectivos verían aún más en entredicho su mantenimiento, afectando así a la comunidad educativa por completo<sup>55</sup>.

Iba más allá, no obstante, la voluntad del comité redactor del proyecto de ley, habida cuenta que se contemplaba el aporte económico de las familias que estuvieran en disposición de hacerlo, de acuerdo a sus posibilidades económica. Este recurso de financiación, camuflado bajo el argumento de la contribución proporcional, supondría en la práctica la abolición de la gratuidad de la enseñanza plasmada en la ley 1.420<sup>56</sup>.

En julio se celebró una reunión que escenificaba la voluntad de unir a varios sindicatos de la provincia para estudiar las medidas a realizar conjuntamente, en relación al cierre de los ingenios y las derivadas que se extendían sobre toda la economía tucumana. Los participantes de esta “Mesa Redonda sobre la situación provincial”, organizada por FOTIA, fueron: la delegación regional de la CGT, ATEP, Federación de Maestros Láinez, Federación Económica de Tucumán, UCIT, CACTU, Círculo de la Prensa y la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio. Como producto de este encuentro se redactó un documento que llevó por título “Cartas a Tucumán”, que tenía por objetivo “alertar sobre las nuevas y catastróficas amenazas que se ciernen sobre el futuro inmediato de la provincia a razón de la persistencia del gobierno nacional en no modificar su actual política azucarera”<sup>57</sup>. Además, en relación a unos cursillos<sup>58</sup> de perfeccionamiento docente dictados en el marco del Seminario

---

<sup>55</sup> Vale la pena señalar que la oposición a este proyecto no vino sólo de parte de los docentes provinciales, sino que también los maestros dependientes de la nación temían sobre las condiciones laborales que les podrían ser impuestas en el futuro. En este sentido, aunque no con prontitud, el Centro Docente Sarmiento de Tucumán se expidió con profusión acerca de los aspectos negativos que consideraban encontrar en el citado proyecto. Véase: Diario *La Gaceta*, 01/06/1969, p. 13.

<sup>56</sup> De forma muy acertada, *Primera Plana*, que no dudaba en calificar a Astigueta de ser un ultracatólico de extrema derecha, se preguntaba lo siguiente: “¿Para qué sirven entonces los impuestos?”. Véase: “El general Sarmiento va en coche al muere”, *Primera Plana*, n° 227, 16-23/04/1968, p. 14.

<sup>57</sup> Diario *La Gaceta*, 07/07/1968, p. 10.

<sup>58</sup> Alertamos en este punto que estos cursos de formación no están vinculados con el fenómeno del “cursillismo” católico, que venía desarrollándose vigorosamente desde antes de la asunción de Onganía. En palabras de R. García Lupo, dichos cursillos estaban basados “en el antiguo modelo de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola”. Según el autor, estos cursillos formaron parte de lo que denomina el “partido secreto”, una organización católica “dispuesta a servirse de la religión como instrumento de dominación política, y militar, aunque con ramificaciones entre los civiles, especialmente los relacionados con el poder económico y cultural”. Las personalidades pertenecientes a estos colectivos, entre los que se contaba al comandante de la V Brigada de Infantería general Aníbal Medina y el entonces coronel Jorge R. Videla, actuaron de manera influyente bajo el gobierno de Onganía, ocupando algunos de sus miembros cargos relevantes en el orden político. R. García Lupo, *Mercenarios y monopolios en la Argentina de Onganía a Lanusse. 1966-1971*. Achával Solo, Buenos Aires, 1971, p. 8.

Provincial de Educación Primaria organizado por el gobierno provincial, representantes de ATEP declaraban que:

*“...cualquier persona medianamente informada sabe [...] que el maestro debe luchar prácticamente solo contra las serias dificultades y carencias de las cuales el Estado se desentiende casi por completo [...] Inculpar a la escuela nuestro crónico subdesarrollo es otra aviesa inexactitud por cuanto nuestra educación también es víctima de la crisis económica reinante que, por supuesto, se origina en otras causas y entre ellas precisamente el tradicional estado de casi total abandono de nuestra educación. Sobre el particular afirmamos con Luis Roissig que la solución de los problemas escolares fundamentales hay que buscarla primero en el régimen social, económico y político que sustenta la escuela”*<sup>59</sup>

Desde la presidencia de ATEP se criticaba que la provincia tan sólo hubiese visto aumentar el número de desempleados, sin tener noticia alguna de las mejoras que se habían prometido, lo que no hacía sino incrementar “el estado de pauperismo general en que se debate nuestra provincia, empezando por la angustiosa situación económica de los propios maestros”<sup>60</sup>. Situación, la de Tucumán, que “fuera de la brusca supresión de importantes fuentes de trabajo no ha visto todavía ningún plan efectivo y justo”<sup>61</sup>.

Un planteamiento más político formuló Arancibia cuando exculpaba a la educación de la “frustración argentina” que achacaba a “la frecuente quiebra de nuestro sistema institucional y a la ya larga falta de participación de todo el pueblo sin exclusiones en el efectivo ejercicio de los derechos políticos consagrados por nuestra Constitución”<sup>62</sup>. También cabe destacar que entre las propuestas para mejorar la educación se incluyera esta: “una política económica-social basada en principios de justicia y de insobornable defensa del patrimonio nacional”<sup>63</sup>.

Una semana después de esta diatriba, regresaba Sixto M. Paz desde Buenos Aires, donde había actuado como delegado de ATEP ante el Encuentro Nacional Docente convocado por la Unión de Maestros Primarios de Buenos Aires. Además de dar

---

<sup>59</sup> Diario La Gaceta, 20/10/1968, p. 8.

<sup>60</sup> *Ibidem.*

<sup>61</sup> *Ibidem.*

<sup>62</sup> *Ibidem.*

<sup>63</sup> *Ibidem.*

muestras de apoyo a la jornada de huelga efectuada por el magisterio sanjuanino en razón de salarios impagados<sup>64</sup>, se comenzó a fraguar lo que luego de otro encuentro cristalizaría en el Movimiento en Defensa de la Escuela Pública<sup>65</sup>.

A principios de 1969 se normalizó el consejo de educación, siendo Miguel Ángel Torres<sup>66</sup> el designado como presidente, pero en función de las normas impuestas desde el ejecutivo nacional, los representantes gremiales continuaban sin posibilidad de participación en el gobierno escolar.

En el orden político, la situación seguía padeciendo la cotidiana inestabilidad, provocando que incluso en una editorial de *La Gaceta*, nada sospechosa de contestarías, expresase que hacía tiempo ya que se venía gestando la idea de eliminar forzosamente a la población obrera de Tucumán, llegando a decir que “al paso que vamos [...] se podría estructurar una solución definitiva tucumana apelando a la metodología hitleriana...”<sup>67</sup>. Esta altisonante reflexión fue provocada por unas declaraciones del gobernador de la provincia que dijo que los tucumanos “tienen un complejo y una hábilmente explotada situación de miseria”<sup>68</sup>. Apenas un puñado de días después, el líder de la CGT de los Argentinos<sup>69</sup>, Raimundo Ongaro, fue detenido en su camino hacia Tucumán, adonde asistía para participar en un acto contra el cierre del ingenio Bella Vista<sup>70</sup>. No en vano,

---

<sup>64</sup> En telegrama enviado a la Junta Intergremial Docente de San Juan, ATEP expresó que: “resulta simbólico que en la tierra natal de Sarmiento, los maestros hayan asumido una actitud digna en defensa de sus legítimos derechos”. En: Diario *La Gaceta*, 03/11/1968, p. 10.

<sup>65</sup> Diario *La Gaceta*, 27/10/1968, p. 9.

<sup>66</sup> Torres ya fue interventor del consejo en la etapa de Martiarena. Los gremios escolares quedaban tan solo representados por un consejo asesor, y el consejo quedaba siempre bajo la decisión del gobierno provincial, quien era encargado de elegir presidente y dos vocales. Diario *La Gaceta*, 05/01/1969, p. 8.

<sup>67</sup> Diario *La Gaceta*, 12/01/1969, p. 8.

<sup>68</sup> Por si no fuera suficiente, estas declaraciones no sólo provenían del orden político. Desde medios porteños también se atacaba a la publicación tucumana como, al menos, corresponsable de su turbio presente. El siguiente es un ejemplo en este sentido: “La culpa no llega tan sólo a los tucumanos, acostumbrados a rebañar el pan en el plato del vecino: toca en especial al gobierno de la Nación, que en 1966, al cercenar la industria, creyó liquidar las causas de la crisis, cuando sólo atacaba sus efectos”. Véase: “La cigarra agoniza”, *Primera Plana*, n° 317, 21-27/01/1969, p. 11.

<sup>69</sup> Esta escisión de la CGT, opuesta a la corriente partidaria de la política pactista con el gobierno de la dictadura, surgió en 1968. Estuvo compuesta por militantes socialistas, marxistas, cristianos de izquierda e independientes y sus militantes fueron protagonistas de las jornadas del Cordobazo. Para ampliar sobre esta experiencia sindical antiburocrática, consúltense: Bozza, Juan Alberto Domingo, “La voluntad organizada. La CGT de Los Argentinos, una experiencia de radicalización sindical”, *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, N° 9, 2009, pp. 179-208. Disponible en: [http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/12431/Documento\\_completo.pdf?sequence=1](http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/12431/Documento_completo.pdf?sequence=1) (Consultado el 20/05/2015); Brennan, James, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*. Sudamericana, Buenos Aires, 1996; Anzorena, Óscar, *Tiempo de violencia y utopía, 1955-1975*. Contrapunto, Buenos Aires, 1988.

<sup>70</sup> Crenzel, Emilio, *El tucumanazo*. CEAL, Buenos Aires, 1991, p. 48.



las muestras de solidaridad se hicieron patentes desde finales de junio de 1968, cuando comenzó el envío de alimentos a los trabajadores azucareros en el marco de la campaña “Pan para la lucha”<sup>71</sup>.

Después de una jornada de protestas, reclamando aumentos salariales, la CAMYP manifestó que el gobierno estaba: “siguiendo una política que parece tener como finalidad fundamental el desmantelamiento de la escuela pública en beneficio de la privatización de la enseñanza, está entregando la educación del pueblo a los mercaderes que la usufructúan”<sup>72</sup>. En el documento firmado por el presidente de la asamblea, Arístides Incarnato, se señalaba que “un grupo de reaccionarios se ha adueñado de la conducción de la educación y la legislan con principios arcaicos y antidemocráticos”.

En una dirección diferente a la CAMYP se movía ATEP. Los maestros tucumanos fueron participaron en las Jornadas Docentes para la Unidad de Acción, convocadas por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, entidad que envió a sus delegados Simón Furlan y Francisco Rodríguez para cursar esta propuesta<sup>73</sup>. La reunión estuvo precedida con el aumento salarial del 20% con que el secretario de Educación de la Nación, Astigueta, quiso calmar las aspiraciones docentes. Sin embargo, esta dádiva sólo satisfizo a la CUDAG<sup>74</sup>, mientras que provocaba que otros núcleos de gremios docentes reforzaran su intención de cristalizar en una asociación más sólida<sup>75</sup>. Fueron Sixto M. Paz y Julio Bulacio los representantes que envió ATEP. El resultado concreto

---

<sup>71</sup> En su primer envío, esta acción solidaria consiguió llevar 10 toneladas de alimentos a distribuir entre los trabajadores desocupados de 10 ingenios, junto con prendas de vestir que se repartieron entre 3.000 personas. De ese modo se pudo continuar con la “olla popular” del Ingenio Amalia, y se instauró la “taza de leche” en la sede de FOTIA. En: R. Ongaro, *CGT de los ARGENTINOS. Por una patria Justa, Libre y Soberana, La Patria Socialista* (Programa del 1º de mayo de la CGT de los Argentinos. Un resumen con algunos de los documentos y acciones protagonizadas por los trabajadores/as y el pueblo de nuestra Patria en el período de Marzo de 1968 a Marzo de 1973), Julio, 2001, p. 47.

<sup>72</sup> Diario *La Gaceta*, 23/02/1969, p. 3.

<sup>73</sup> Diario *La Gaceta*, 23/03/1969, p. 11.

<sup>74</sup> *Primera Plana*, n° 323, 04-10/03/1969, p. 15.

<sup>75</sup> La oposición a la reforma de la Ley de Educación del gobierno militar durante el período 1968-1972 fue el agente movilizador de la protesta docente, recurriéndose con mucha frecuencia a los paros de actividad. Esta apuesta por la combatividad también se puede leer en clave de enfrentamiento entre la CUDAG y la CGERA, que estaban en la pugna por la consolidación de la estructura nacional. La falta de unidad representaba problemas a la hora de encarar la praxis contestataria del modo más eficiente, pero, como señala M. Gudelevicius, “permite reconocer a los docentes como sujetos autónomos y activos, portadores/productores de múltiples identidades que influyen en sus prácticas y que definen el tipo de organizaciones y redes en las que se insertan”. GUDELEVICIUS, Mariana, “La protesta gremial docente contra el proyecto educativo de la ‘Revolución Argentina’”, *Archivos de Ciencia de la Educación*, N° 5, 2011, p. 126. Disponible en: [http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art\\_revistas/pr.5432/pr.5432.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5432/pr.5432.pdf) (Consultado el 10/05/2015)

de este encuentro se materializó con la redacción de un documento en el que se consignaban los problemas comunes del magisterio, en todos los territorios del país, a saber: proyecto oficial de ley orgánica de Educación, violaciones del Estatuto del Docente, insuficiencia del presupuesto para educación, problema salarial docente e incremento del 40% para reclamar, modificaciones del sistema previsional docente, transferencia de escuelas a las provincias, situación de los magisterios provinciales y del personal de institutos privados y de enseñanza, y de la escuela pública argentina<sup>76</sup>.

Resulta igualmente interesante observar los argumentos que se expusieron en una carta dirigida al director de La Gaceta:

*“Señor Director: los maestros, los pobres maestros, parecieran estar olvidados por la Providencia. SU situación no pasa inadvertida en el gobierno. Por el contrario, “la tiene bien en cuenta”. Pero nada más que eso (“bien en cuenta”). Hoy se habla de jubilaciones a los 60 años (los maestros tendrán que ser descendientes de Matusalén para jubilarse); ¿que se les quitará el descanso de los sábado y los veremos dar clase el 1º de mayo y en año nuevo?; que deberán hacer un cursillo que les insumirá un gasto de 3.000 pesos mensuales y otras cosas por el estilo. Todo es aumento, menos en los sueldos, pensión a la vejez y otros beneficios sociales. Muchas veces nos hicimos esta pregunta: ¿Cómo se las arregla una maestra viuda, separada o divorciada para mantener tres o cuatro hijos con 18.000 o 20.000 pesos de sueldo? Si en la actualidad el alquiler de dos habitaciones en los quintos infiernos cuesta hasta 12.000 pesos, si para movilizarse con tres hijos se requieren 2.000 pesos mensuales y para lavar la ropa otros 2.000. Y pensar que después se pregunta por qué “el ambiente está corrompido y saturado de un fluido malsano”. Seamos sinceros: antes había ladrones “natos”; hoy existen los que roban por necesidad”<sup>77</sup>*

En este contexto de imbricación del sindicalismo docente tucumano con otras organizaciones obreras y docentes del país se celebró la siguiente asamblea de delegados escolares. En esta ocasión participaron 114 delegados, quienes decidieron colectivamente la línea de actuación desde ese momento en adelante, observándose un giro hacia posturas marcadamente combativas. Arancibia iniciaba la reunión con una

---

<sup>76</sup> Diario La Gaceta, 13/04/1969, p. 13.

<sup>77</sup> Diario La Gaceta, 03/03/1969, p. 8.

reflexión acerca de los problemas de la educación, que en su opinión sólo podrían ser resueltos en la medida en que se los encara como parte de lo que denominó el “orden general”, haciendo alusión a la unión de los gremios docentes, proceso del que ATEP venía formando parte activa. La postura de la directiva quedó expuesta en la siguiente afirmación, hecha con una rotundidad inédita hasta entonces:

*“Teniendo en cuenta la situación especial por la que atraviesa el país, no podemos negar el estado de retroceso que se observa en todos los niveles, especialmente en materia de educación, es así que la docencia argentina debe mantener una posición revolucionaria al exigir la plena vigencia de postulados que deben ser inalterados: el Estado debe sostener una escuela pública, gratuita y obligatoria al alcance de todos sin ninguna clase de discriminación, ya que en el terreno de los hechos la educación está cada día más alejada de las clases populares”*<sup>78</sup>

Esta asamblea extraordinaria fue convocada a propósito de la actualización de las escalas salariales docentes, que fueron fuertemente enfrentadas por el sindicato docente. De hecho, se decidió secundar el paro general de 24 horas convocado por la CGT para el día 30 de mayo<sup>79</sup>. La convocatoria a esta jornada de movilización fue definida por Sixto M. Paz como “un acto de valiente rebeldía del pueblo argentino”<sup>80</sup>.

El presidente de ATEP continuó utilizando sus herramientas discursivas para arremeter vehementemente contra el proyecto de ley de educación, al tiempo que iban destinadas a despertar la conciencia de los trabajadores de la educación, quienes recibían estos mensajes por boca de los delegados sindicales, cuya asistencia seguía sin

---

<sup>78</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 47, 25/04/1969.

<sup>79</sup> La convocatoria de este paro nacional, del que participaron las dos escisiones de la CGT, es entendida por algunos autores como un momento decisivo en el desarrollo de la lucha de clases del proletariado que, según esta interpretación, estaba teniendo lugar en una horquilla de tiempo que abarcaría desde la “Revolución Libertadora” hasta el inicio del “Proceso” en marzo de 1976. Desde nuestra perspectiva, resulta cuanto menos arriesgado afirmar que todos los colectivos implicados en las luchas sociales que se estaban llevando a cabo hubieran desarrollado ya en ese momento un nivel de conciencia suficiente como para identificar al modo de producción capitalista en tanto que objetivo último de sus reivindicaciones. En todo caso, lo que sí parece evidente es que las distintas organizaciones mediante las cuales los trabajadores se representaban en ese momento, distaban mucho de participar de un mismo proyecto político. No obstante, sí que existe la innegable constatación de que fue precisamente a partir de que el plan de lucha de la CGT entró en funcionamiento, acompañado por la onda expansiva que supuso el asesinato del “pactista” Augusto Vandor, que las fuerzas represivas incrementaron la dureza de la reacción frente a los actores sociales combativos. Para una lectura en la clave arriba evocada consúltese: B. C. Balvé y B. S. Balvé, *El '69. Huelga política de masas. Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo*. Ediciones Razón y Revolución, Buenos Aires, 2005, pp. 31-34.

<sup>80</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 49, 26/08/1969.

ser tan masiva como antaño, pero que iba aumentando en los últimos tiempos. De esta forma, Arancibia llevó a cabo una arenga que pretendía emocionar a su auditorio:

*“Es necesario que la docencia tome conciencia de su papel, así como la ciudadanía argentina nucleada en distintas entidades lucha por la vigencia de los derechos democráticos, especialmente el derecho de expresión. Así nosotros podemos señalar desde cualquier tribuna todos los ataques y destrucción sistemática de nuestra escuela pública. Y que, así como se procede a la enajenación del patrimonio de orden económico, así figura la enajenación de ese patrimonio mucho más valiosos que es la educación del pueblo...”<sup>81</sup>*

Entre las conclusiones de la asamblea se cuentan la redacción de un comunicado dirigido al gobierno provincial<sup>82</sup>, en el que se volvieron a reflejar las ya conocidas demandas del sindicato, al igual que se acordó aprobar la celebración, durante el mes de julio próximo, de un Congreso Nacional Pro Ley de Educación Pública, en oposición al proyecto de Ley Federal de Educación en marcha.

En junio se celebró una nueva reunión de CGERA, con la asistencia de Sixto Paz y Julio Bulacio. En esta ocasión se dispuso fijar la sede de la asociación en la ciudad de Córdoba, convocándose a organizar una Asamblea Nacional de Educación para “discutir y elaborar un anteproyecto de auténtica ley Federal de Educación”<sup>83</sup>. Sin embargo, el secretario de ATEP dio cuenta de unas declaraciones comprometidas que ayudan a situar al sindicato docente tucumano en el espectro de organizaciones combativas y decididamente opositoras al régimen de Onganía. En relación a los acontecimientos del “Cordobazo”, Sixto M. Paz manifestaba en nombre de la directiva de ATEP:

---

<sup>81</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 48, 29/05/1969.

<sup>82</sup> Los puntos establecidos fueron los siguientes: 1) Solicitar a las autoridades correspondientes la inmediata integración del Consejo de Educación, convocando a la docencia a la elección de los vocales que establece la ley; 2) Inmediata actualización del índice de remuneraciones de acuerdo a la norma fijada en el Estatuto del Docente; 3) Pago de la dedicación exclusiva, recordando que el gobernador prometió hacerlo efectivo con los haberes de marzo, sin que se haya cumplido; 4) Reanudación de pago a reemplazantes e interinos a quienes se adeudan haberes, en casos, desde 1965, las acertadas entregas semanales fueron suspendidas desde hace 20 semanas; 5) Hacer presentaciones ante el Consejo de Educación, planteando lo inoportuno de la unificación de las escuelas y los problemas que ello acarrearán; 6) Reactivar el cumplimiento de los objetivos y fines del departamento de Materiales y Construcciones Escolares, acelerando la refacción y construcción escuelas; 7) Solicitar inmediata convocatoria del magisterio para elegir Junta de Clasificación. En: Diario *La Gaceta*, 27/04/1969, p. 14.

<sup>83</sup> Diario *La Gaceta*, 01/06/1969, p. 13.

*“Con toda admiración y respeto, su solidaridad con el estudiantado argentino, en dramática lucha por valores que son esenciales en la vida de los hombres. Como contribución a la paz social, los docentes argentinos formulamos un vehemente llamado a las fuerzas armadas, como principales responsables de los actuales actos de gobierno, para que se adopten con urgencia las siguientes medidas en el orden universitario y educativo en general: restitución de la autonomía universitaria y del cogobierno estudiantil; derogación de la actual ley universitaria; eliminación del espionaje policial y los servicios de información en el ámbito universitario; régimen de concursos en base a méritos y antecedentes en vez de la designación discrecional de profesores; asientos para la enseñanza media y modificación de promociones por haberse probado en la práctica que no responde a la ley organiza de educación; respeto y vigencia del Estado a nuestra realidad educativa; archivo del proyecto de la secretaría de cultura y educación sobre estatuto del Docente en la nación y las provincias; prioridad del Estado para la escuela pública para evitar la creciente privatización y mercantilización de la enseñanza”<sup>84</sup>*

Unos días después de esta declaración, una parte de los directivos de la entidad informaron que, respondiendo a una invitación oficial entregaron un memorial al general Imaz sobre los principales y más urgentes problemas que afectan a la escuela pública y al magisterio tucumano. Aclararon que en la audiencia colectiva concedida por el titular del Ministerio del Interior no pudieron plantear otros puntos de importancia por la forma en que se desarrolló la misma y por la falta de oportunidad para tratar lo relacionado con la situación socio económica de la Provincia, las cifras dadas por el ministro sobre aportes financieros nacionales, levantamiento del estado de sitio, libertad de presos políticos; gremiales y estudiantiles, reincorporación de empleados cesantes o despedidos, restitución de personerías gremiales y otros temas.

El memorial firmado por Francisco Isauro Arancibia y Sixto Miguel Paz, se ocupa de los siguientes puntos:

**Consejo de Educación:** *Un organismo de la fundamental importancia del Consejo de Educación-se expresa- no debe permanecer en situación anómala por falta de integración de su cuerpo. No obstante nuestras reiteradas peticiones, el magisterio*

---

<sup>84</sup> Diario La Gaceta, 01/06/1969, p. 13.

*continúa sin su representación mediante dos vocalías que por ley le corresponden. La participación del magisterio en el gobierno escolar, además de ser un legítimo derecho consagrado por la ley-se agrega-es de real necesidad y conveniencia por cuanto nadie puede estar más interesado que el propio magisterio en el normal y eficiente funcionamiento del organismo rector de la educación pública, como lo ha probado la experiencia de varios años. Insistimos-añaden-en que corresponde la inmediata convocatoria al magisterio provincial para que proceda a elegir sus dos vocales que en su representación le corresponde por ley.*

***Junta de Clasificación:*** *Nuestra provincia dice, no cuenta con una Junta de Clasificación constituida de conformidad al Estatuto del Docente, es decir, con representación del magisterio, tal cual se cumple en el orden nacional y en las demás provincias, Si se tienen en cuenta las delicadas funciones que debe cumplir esa junta (valoración de méritos, empadronamientos, etc.) resulta obvio el cumplimiento de la ley.*

***Régimen jubilatorio:*** *En Tucumán-expresan- se encuentra suspendido por ley el capítulo XIX de la ley 3470 (Estatuto del Docente) correspondiente al régimen jubilatorio y reitera ahora que se restituya la plena vigencia de esa disposición legal del Docente Provincial por elementales razones de justicia.*

***Régimen de Licencias:*** *Señalan sobre el particular que la docencia tucumana continúa sometida a un anacrónico e injusto régimen de licencias, por lo que reiteran la necesidad y conveniencia de la sanción de un nuevo régimen en cuyo estudio participó esta entidad.*

***Índice de remuneraciones:*** *Hacen notar que el magisterio tucumano percibe el índice 575, lo que significa un exiguo sueldo inicial de \$ 17.250. Reiteramos- dicen- nuestra petición del 30 de agosto de 1968, ratificada al gobernador el 25 de junio de 1969, en el sentido de que se fije un índice 1-1000 o sea, un sueldo inicial de apenas \$ 30.000, cifra que estimamos modesta en relación a lo que corresponde por el Estatuto del Docente.*

***Deuda por equiparación:*** *Denuncia la deuda al magisterio local de alrededor de 700 millones de pesos correspondientes a equiparaciones con el magisterio nacional pendientes de pago. Manifestaron que dicha deuda tuvo principio de pago en cuotas de diez millones de pesos mensuales, paralizadas desde hace bastante tiempo. Solicitaron el concurso del Tesoro Nacional para la cancelación de la referida deuda.*

***Situación de Tucumán:*** *Como tucumanos y como educadores-dicen finalmente-somos testigos de las duras condiciones en que se debaten amplios sectores de la comunidad*

*provincial, como consecuencia de la situación económico-social de la provincia, deriva fundamentalmente de la falta de adecuadas soluciones para el viejo y conocido problema azucarero, agravada por el cierre de importantes fuentes de trabajo. La incidencia negativa de tal situación en el quehacer educativo se refleja en los alarmantes índices de deserción escolar y pauperismo. ATEP-añaden-uniendo su voz al clamor general de Tucumán por soluciones inspirada en sanos principios de justicia social, reitera ante el ministro del Interior<sup>85</sup> su preocupación por los destinos de esta histórica provincia<sup>86</sup>. (AGET por su parte no hacía ninguna mención de este tipo<sup>87</sup>).*

Los objetivos reivindicativos de ATEP apuntaban cada vez más alto. Si tomamos como ejemplo la reclamación que se presentó ante el presidente del Consejo de Educación con motivo de la elaboración de los presupuestos en educación para el año siguiente, entenderemos que el gremio pretendía aumentar sus ámbitos de injerencia. Aún a pesar de contar con la oposición de AGET, que reclamaba una representación proporcional en el Consejo mediante la aplicación de la ley D'Hont, los docentes públicos se hacían oír reiterando sus críticas al estado de mantenimiento de las dependencias escolares y la necesidad de construir otras nuevas en zonas desatendidas<sup>88</sup>

Mientras que la condición material de los docentes continuaba sin mejoras destacables, se produjo la vuelta al funcionamiento del Consejo de Educación. En cualquier caso, lo hizo de forma irregular puesto que, al contrario de lo que se reflejaba en el Estatuto del Docentes, los representantes gremiales de los docentes no habían sido convocados a formar parte del órgano reconstituido. La crítica de ATEP, en boca de su presidente, se estaba acercando cada vez menos veladamente, a un discurso dirigido contra el orden político en el que los gobiernos militares tenían sometido al país. Precisamente, el propio gobernador Avellaneda ironizaba frente al dirigente de ATEP diciendo: "...al no haber elecciones de presidente, de gobernadores, etc., mal pueden los

---

<sup>85</sup> El plan del ministro del interior, Francisco Imaz, consistió en sancionar la ley 18.275, en virtud de la cual se dotaba al gobierno provincial de la capacidad de implementar cambios en el planeamiento de las tareas de transformación de la provincia. Este vaporoso propósito era, además, remachado de la siguiente manera: "...esa transformación será solamente posible si el pueblo mismo de la provincia del Norte, sin excepciones, colabora en los propósitos del Gobierno y presta a éste, en forma decidida, su ayuda". Véase: Diario *La Nación*, 14/07/1969, p. 5.

<sup>86</sup> Diario *La Gaceta*, 13/07/1969, p. 14.

<sup>87</sup> Sin embargo, unos días antes, AGET había declarado a sus militantes en estado de alerta, instando a su directiva a disponer medidas de fuerza de considerar que no hubiera avances en las negociaciones. Véase: Diario *La Gaceta*, 29/06/1969, p. 12.

<sup>88</sup> Diario *La Gaceta*, 10/08/1969, p. 14.

maestros pedir elecciones de representantes”<sup>89</sup>. Sin embargo, esta reunión dejó muestras de las dos tendencias que convergían en el sindicato. Por un lado, con Arancibia a la cabeza, un grupo mayoritario que apoyaba las acciones conjuntas con otras entidades sindicales. Por otro lado, aquellos que defendían que la docencia debía protagonizar sus movimientos reivindicativos autónomamente. A este segundo grupo, el presidente se encargaba de transmitir que “...no podemos aislarnos de las organizaciones sindicales, ni desconocer el valor de los gremialistas, ya que las realidades son las mismas”<sup>90</sup>. En cualquier caso, es reseñable que en el momento de proceder a la votación, el apoyo al paro nacional contó finalmente con el respaldo unánime de los delegados escolares<sup>91</sup>, quedando la CD facultada para convocar un paro de 24 horas exclusivo de los educadores.

El sentimiento de frustración que provocaba el estancamiento de las negociaciones respecto a las peticiones conocidas provocó que, después de la entrevista celebrada con el gobernador luego de la conmemoración del día del maestro, los ánimos del magisterio tendieran hacia un incremento en las acciones de presión. El resultado de las negociaciones fue el acostumbrado. Ante la petición de ATEP de alcanzar un valor de actualización de 1=1.000 pesos (cuando según la CD le hubiera correspondido reclamar la cifra de 1=1.500), el ejecutivo provincial ofertaba el 1=690, que después del transcurso de las negociaciones modificó hasta el definitivo 1=700. Así fue que en la asamblea extraordinaria celebrada el 14 de octubre, el delegado de la escuela nocturna “9 de Julio” trasladó que su escuela, “en forma total”, pedía ir a la huelga. Otros delegados apuntaban al poco compromiso expresado por los trabajadores de la educación, luego de actos en los que se les emplazó para ejercer como mecanismo de

---

<sup>89</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 50, 26/08/1969. Precisamos, no obstante, que en el momento de celebración de esta asamblea el puesto de gobernador ya lo ocupaba el coronel retirado Jorge Daniel Augusto Nanclares, quien sustituyó a Avellaneda el 10 de julio. Nanclares había sido director nacional del azúcar, y colaboró estrechamente con el equipo del ministro Salimei. Este bagaje era considerado de forma positiva por sectores de la opinión pública, encontrándose pronósticos como el siguiente: “La nueva ofensiva puede implicar un cambio drástico en la conducción del problema tucumano. Un militar, sin compromisos de sector y con conocimientos del problema azucarero, debe asumir la responsabilidad de producir el cambio estructural de Tucumán, respetando el tiempo social anunciado por el presidente Onganía y manteniendo el orden en un centro donde los sectores laborales poseen un alto grado de politización”. Véase: *Análisis*, n° 434, 08-14/07/1969, pp. 12-13.

<sup>90</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 50, 26/08/1969.

<sup>91</sup> Esta huelga general fue secundada por el sindicalismo oficialista, aunque promovida por el sector combativo. Las posiciones entre tendencias se encontraban tan enfrentadas que el propio Miguel Gazzera declaraba: “Ongaro pretende derrocar a Onganía, nosotros no”. En: “El repliegue sindical”, *Periscopio*, n° 2, 30/09/1970, p. 4.



presión hacia el ejecutivo, especialmente referido esto último a los actos celebrados el 11 de septiembre precedente. En este sentido, el delegado de la escuela nocturna “Benjamín Aráoz” advertía antes de la votación que había que tener en cuenta que no todo el magisterio apoyaría el paro, a pesar de lo cual, se resolvió por unanimidad realizar una jornada de huelga por duración de 24 horas, a seguirse el día 17 del mes en curso<sup>92</sup>.

La medida de fuerza contó un elevado seguimiento de los docentes, al tiempo que mostraron músculo intersindical gracias a las numerosas declaraciones de apoyo recibidas en esos días. Además de la presencia de delegados docentes de Salta en la asamblea que tuvo lugar el día 22, ATEP contó con el apoyo público de la Asociación de Educadores de la Provincia de Jujuy y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que incluso enviaron telegramas al gobernador Jorge Nanclares<sup>93</sup>. Asimismo, FOTIA advirtió que era necesario que se valorara a los maestros como contribuidores al progreso cultural de la nación, en lo que definían como el sumergimiento de un valioso sector de trabajadores. De igual modo, la imposibilidad aducida por el gobierno para implementar los aumentos solicitados significaba para FOTIA “la clara confesión oficial del rotundo fracaso de su política económica”<sup>94</sup>. Por su parte, la FEIA constataba el asombro que provocaba el ver que “mientras se invierten millones de pesos en equipar a la policía para la represión del pueblo<sup>95</sup> –y no para asegurar la vida y los intereses de la población honrada- se mantiene al magisterio en una situación que como hombres de trabajo no podemos aceptar”<sup>96</sup>.

Después de este, de nuevo, fallido intento de negociación con el gobernador, ATEP tomó la decisión de declarar al gremio en estado de huelga<sup>97</sup>, convocando a la totalidad del magisterio a una asamblea consultiva para el día 27 de ese mes, celebrada en la Biblioteca Sarmiento, donde se reunieron maestros de toda la provincia. Arancibia

---

<sup>92</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 51, 14/10/1969.

<sup>93</sup> Diario *La Gaceta*, 19/10/1969, p. 11.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

<sup>95</sup> De hecho, los delegados de ATEP informaron de la presencia de agentes policiales en varias de las dependencias escolares. En: AA, Asambleas, Libro I, n° 52, 22/10/1969.

<sup>96</sup> Vale la pena reparar en que AGET, aún no mostrándose satisfecha con el aumento decretado, proponía un calendario de aumentos que llevaría a alcanzar en octubre de 1970 el índice 1=1.000, aunque no se vislumbraba la posibilidad de unirse, o comenzar, acciones de fuerza. En: Diario *La Gaceta*, 19/10/1969, p. 11.

<sup>97</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 52, 22/10/1969.

inauguró el encuentro repasando los planteamientos que habían sido elevados al gobierno provincial en numerosas ocasiones. Hizo hincapié sobre el hecho de que en otras provincias, como era el caso de Mendoza, las propuestas de actualización eran superiores a las ofrecidas en Tucumán y los docentes seguían oponiéndose a ellas. Con este tipo de manifestaciones, el dirigente trataba que los docentes disconformes con la frecuencia que estaban adquiriendo los paros, ponderaran a la luz de la comparación, la contundencia de las razones objetivas en razón de las cuales se movilizaban. Este mensaje estaba fundamentalmente dirigido a los maestros que habían concurrido a sus puestos de trabajo en los días de paro, fenómeno que no se había registrado con tanta intensidad hasta ese momento. En cualquier caso, no es posible atribuir estas deserciones únicamente a un descenso en la presión del caudal reivindicativo de los militantes, sino que también hay que tener en cuenta la acción erosiva ejercida por la prensa local, que omitía las declaraciones de apoyo firmada por la Coordinadora de Gremios docentes en Santa Fe, mientras resaltaba las medidas sancionadoras que habían recibido maestros en otras provincias<sup>98</sup>. Definitivamente, cuando hubo que tomar el pulso a la asamblea, quedó patente el estado de movilización en que se encontraba la mayoría de los militantes, puesto que se tomó la decisión de dirigirse a la sede del diario La Gaceta para informar, de primera mano e inequívocamente, que el magisterio había decidido continuar su lucha<sup>99</sup>, efectuándose paros los días 22 y 29 de octubre.

En solidaridad con los movimientos seguidos en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luís y Tucumán, se decretó un paro nacional docente. El día 6 de noviembre, Sixto M. Paz mantuvo una entrevista con el ministro de Educación de la nación, Pérez Gilhou, a quien se invitó a negociar para evitar, por lo que Paz declaraba que “dadas las cosas como están, y ante la posición favorable del ministro de educación y del propio presidente, creemos que habrá impasse”. El secretario de ATEP continuaba señalando que aunque el índice en ese momento era de 585 (lo que hacía que un maestro con 20 años de antigüedad ganara 28.384 pesos netos mensualmente), y su demanda era de

---

<sup>98</sup> AA, Asambleas, Libro I, sn., 27/10/1969.

<sup>99</sup> En esta ocasión la decisión no fue adoptada por unanimidad, de manera que al menos dos delegados escolares proponían levantar el paro al día siguiente. Consciente de que el enfrentamiento entre los dos sectores podía provocar la división de la entidad, Arancibia trató de ejercer como bisagra de unión entre las dos corrientes, llamando a la reflexión sobre las medidas a adoptar. De esta forma, el presidente sugería entreveradamente que las decisiones adoptadas por la asamblea podrían llegar a no corresponderse con la disponibilidad efectiva para la movilización del conjunto del magisterio. En: AA, Asambleas, Libro I, sn., 27/10/1969.

1.000, aceptarían la equiparación con el de los maestros nacionales, de 720 pesos (una petición moderada teniendo en cuenta que el magisterio mendocino aspiraba a la implantación de un calendario de aumentos tuviera por meta el índice 1.600)<sup>100</sup>.

La acción huelguística continuó una vez entrado el mes de noviembre, manteniéndose la vieja dinámica de infructíferos requerimientos sindicales ante un gobierno del que no se obtenían respuestas, ni mucho menos compromisos. En ocasión de la siguiente asamblea, Arancibia volvió a demandar “máxima prudencia en las resoluciones a adoptar” por los delegados<sup>101</sup>. Se presentaron mociones que iban desde la convocatoria de un paro de 24 horas, hasta el paro por tiempo indeterminado. Nadie propuso contemplar la posibilidad de no convocar nuevos paros, tomándose finalmente la decisión de adherir al paro convocado por CGERA para el día 20 de noviembre, de la misma manera que quedaba en manos de la CD determinar otro cese de actividades durante 48 horas<sup>102</sup>.

Los resultados de esta movilización tuvieron menos alcance que sus precedentes, de modo que sólo en cinco provincias se hizo efectivo el paro, al que no adhirió la CUDAG: Mendoza, San Luís, Catamarca y Córdoba fueron los compañeros de ruta de Tucumán<sup>103</sup>. El magisterio comenzó a acusar la estrategia de división que practicaba el gobierno. Los elementos puestos en funcionamiento atacaban a la unidad de los dos sectores del magisterio de manera que los aumentos salariales aprobados en el orden nacional, incidieron negativamente en el ejercicio de solidaridad para con sus colegas provinciales.

Como balance de esta jornada, se publicó una nota en la prensa local en que se recogía que, en esa ocasión el gremio docente planteó, y lo ratifica ahora-dice el comunicado-que los males que afectan a la escuela pública de Tucumán se originan en la crisis nacional socio-económica del país, agravada en la provincia por la situación

---

<sup>100</sup> *Análisis*, n° 452, 11-17/11/1969, pp. 14-15.

<sup>101</sup> Ciertamente, la situación se estaba haciendo cada vez más insostenible, especialmente si atendemos a las noticias que llegaban del resto de provincias donde los docentes se movilizaban. En Mendoza, después del paro nacional del día 13, se tomó la decisión de continuar con interrupción de actividades los días martes y jueves, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. San Juan declaró la huelga por tiempo indeterminado, mientras 10 docentes se refugiaban en el local de la CGT para cumplir una huelga de hambre. Por su parte, la provincia de San Luis, después de haber seguido un paro de 48 horas por la convocatoria que añadió el día 12 a la movilización, se optó por levantar los nuevos paros que estaban previstos para los días 19 y 20. En: *Análisis*, n° 453, 18-24/11/1969, p. 7.

<sup>102</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 53, 18/11/1969.

<sup>103</sup> *Análisis*, n° 454, 25-01/11-12/1969, p. 22.

azucarera que desde hace mucho tiempo ha forjado una realidad contraria a las posibilidades de desarrollo de la provincia, pero que se agudizó con la política azucarera impuesta por el actual gobierno<sup>104</sup>.

### **5.3. El congreso de Tucumán y la unión de los docentes**

El año de 1970 trajo consigo la celebración de un importante congreso de Educación, promovido por ATEP y celebrado en Tucumán. Estas jornadas significaron la puesta en escena del movimiento sindical docente nacional y demostraron su creciente articulación. La primera asamblea de ATEP en este año tuvo lugar en el mes de abril, momento en el que Arancibia comenzó su intervención diciendo que “los intereses de la educación [están amenazados] cada vez más por la acción del gobierno”<sup>105</sup>, declaración que venía precedida por la modificación parcial del Estatuto del Docente. Sixto M. Paz tomó la palabra para poner el acento sobre la cuestión de la unificación nacional, dado que en su opinión “lo importante es tener en el orden nacional un frente de lucha lo suficientemente fuerte como para lograr soluciones de orden nacional”. En este sentido destacaba que se estaba “elevando la conciencia gremial” de los docentes, ilustrando esta afirmación con los casos de Catamarca y La Rioja. La asamblea decidió adherirse unánimemente a la siguiente declaración:

- a. Expresar públicamente su apoyo a los reclamos de la docencia argentina*
- b. Invitar a la unidad gremial de la docentes en pro de la reivindicación de sus derechos*
- c. Ratificar la identificación con los anhelos de una ley federal de enseñanza al servicio de los intereses nacionales*
- d. Adherir al congreso de Educación a realizarse este año.*

En esta asamblea también se reiteró que la petición de índice de actualización debía ser de 1 punto igual a 1.000 pesos, lo que daría lugar a que el salario inicial de un maestro ascendiera hasta los 30.000 pesos moneda nacional mensuales<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> Diario La Gaceta, 21/12/1969, p. 12.

<sup>105</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 54, 10/04/1970.

<sup>106</sup> Diario La Gaceta, 12/04/1970, p. 13.

Por otro lado, las negociaciones con el ministro del Interior Francisco Imaz empezaron con mal pie. En primer lugar, CGERA, representada por Sixto M. Paz, decidió no concurrir a una entrevista con el gobernador que les fue concedida para el día 23, ya que en esa fecha se llevaba a cabo la medida de fuerza dispuesta por la comisión normalizadora y reorganizadora de la CGT. Las demandas cursadas, en tanto que “solución mínima e inmediata”, pretendían la aprobación del índice 805, vigente en el ámbito de los maestros nacionales, como índice de referencia para todos los docentes provinciales que se encontraran por debajo del mismo. También aprovechaban para recordar las deudas de 700 y 500 millones de pesos que se tenían con Tucumán y Santiago del Estero respectivamente, y caso especialmente grave de La Rioja, donde el salario no había subido, sino que había bajado<sup>107</sup>.

La negativa del presidente del Consejo a convocar elecciones para representantes gremiales había provocado la declaración de estado de alerta de ATEP. El problema radicaba en que el Consejo de Educación se había convertido tan sólo en un órgano unipersonal, donde sólo el presidente tenía presencia<sup>108</sup>. La asamblea tuvo como conclusión la convocatoria de un paro para el día 21 de mayo, exigiéndose los siguientes puntos: 1. Índice de remuneraciones; 2. Deudas de equiparación; 3. Normalización del Consejo de Educación. Entre las consecuencias del paro, se contó la liquidación de los sueldos del mes de mayo, eso sí, realizando los descuentos correspondientes a los días de huelga del año anterior<sup>109</sup>. Como las represalias continuaron, y no se alcanzaron logros significativos, las medidas tomadas por la asamblea consistieron en declarar al presidente del Consejo persona *non grata* y realizar un paro de 24 horas el jueves 4 de junio. Hubo necesidad de votar ante la posibilidad de realizar un paro de 48 horas, pero se decidió que este se llevaría a cabo durante la tercera semana de movilizaciones.

Mientras que la docencia seguía sin encontrar las soluciones a sus conflictos, la actividad institucional continuaba con normalidad. Para cumplir con esta premisa, el 25

---

<sup>107</sup> Diario *La Gaceta*, 26/04/1970, p. 5.

<sup>108</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 50, 19/05/1970.

<sup>109</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 57, 02/06/1970. En defensa de la opción opuesta, ATEP se apoyaba en la tesis sustentada por el Dr. Alfredo de la Zerda en su trabajo “El derecho de huelga”, publicado en 1962, según el cual los gremios que toman decisión como entidades jurídicas lo hacen sustituyendo la responsabilidad individual de los afiliados, por lo que resultarían inaplicables las medidas disciplinarias a título individual. Véase: Diario *La Gaceta*, 14/06/1970, p. 9.

de julio tuvo lugar el acto electoral que renovó la junta directiva, siendo estos sus miembros elegidos: Presidente; Francisco Isauro Arancibia, Vicepresidenta; María López Warnes de Gordillo, Secretario General; Sixto Miguel Paz, Prosecretaria; Aurora Teresa Racedo de Silberstein, Tesorero; Héctor Pérez, Protesorero; Segundo Elías Dip, Secretaria de Acción Gremial; Juana Gallo y Secretaria de Asuntos Gremiales; Elvira Bernard de Oste<sup>110</sup>. En esta lista se encontraban unidas personalidades próximas al peronismo, como era caso de Arancibia y Paz, como quienes lo hacían con el radicalismo, como Racedo de Silberstein. Encontramos que este hecho es reseñable ya que indica que en la confección de las listas no se tenía tanto en cuenta la adscripción política como el compromiso gremial. Las elecciones contaron con la participación una sola lista electoral, contándose en los comicios la emisión de 987 votos, de los cuales 979 respaldaron la lista Azul y Blanca, y 8 fueron en blanco<sup>111</sup>.

Por otro lado, con la caída del gobierno de Onganía, sustituido por Roberto Levingston, se reprodujo la inestabilidad en el gobierno tucumano. Los titubeos con motivo de la designación de un candidato acertado para ocupar el puesto de gobernador provincial provocaron que, de modo interino, el cargo fuera ocupado por el comandante de la V Brigada, el entonces coronel Jorge Rafael Videla, desde la caída de Nanclares el 3 de agosto, hasta la llegada de Carlos Imbaud, el 4 de septiembre.

En esas fechas, Arancibia se quejaba de la ya clásica desatención que le brindaba el ejecutivo provincial, reparando además en el escaso apoyo que recibía de la prensa local, la que “nunca dispone de espacio suficiente para la publicación de comunicados a diferencia de importantes diarios de Buenos Aires y otras provincias que publican con grandes titulares la actividad docente”<sup>112</sup>. De nuevo, se volvió a pedir el cese del presidente del consejo, al tiempo que se tomó la resolución de continuar con paros de 72 horas, a realizar los días martes, miércoles y jueves.

Las medidas de presión se mantuvieron inalterables durante ese mes de agosto, donde los paros no sólo se repitieron semanalmente, sino que también consiguieron la solidaridad de los maestros dependientes del sistema nacional, quienes se unieron a la medida de fuerza, registrándose apoyos al movimiento huelguístico por parte de UCIT,

---

<sup>110</sup> Diario *La Gaceta*, 26/07/1970, p. 14.

<sup>111</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 58, 25/07/1970.

<sup>112</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 59, 05/08/1970.

la Unión de Ferroviarios, el sindicato de Jubilados y Pensionados de la Administración Provincial, la Juventud Peronista y la Comisión de Padres y Vecinos de Famaillá<sup>113</sup>. Otras asociaciones que transmitieron su apoyo fueron las estudiantiles AUDAP, TAR, TUPAC, INTEGRALISMO, ARDES y ACE, ante las cuales un delegado se mostró desconfiado debido a la orientación política que representaban. La respuesta de Arancibia fue la siguiente: “ATEP siempre se ha mantenido al margen de toda tendencia política respondiendo siempre a sus principios de luchar por el bien de la escuela pública y su docencia”<sup>114</sup>, aprovechando para reiterar que el gremio agradecía toda adhesión al movimiento huelguístico. La resolución de la asamblea fue continuar con las acciones de paro por 72 horas, tal y como se había hecho hasta ese momento<sup>115</sup>. Si bien se habían registrado algunas deserciones al movimiento entre maestros de Famaillá, la acción huelguística fue considerada como de ausentismo total de maestros y alumnos, además de haber concitado el apoyo de todos los sectores de la sociedad, hecho constatado en los actos celebrados en las localidades de Lules, Simoca y Famaillá. La resolución adoptada por esta asamblea fue la de continuar los paros de lunes a viernes, decisión refrendada por mayoría frente a la propuesta de declarar un cese de actividades por tiempo indeterminado<sup>116</sup>. El acto concluyó con la intervención del presidente del sindicato santiagueño, Julio Salvatierra, quien afirmó que “la docencia del país está de pie junto a los maestros tucumanos”.

Con esta situación, el 29 de agosto, el gobernador interino Videla dirigió un mensaje, retransmitido por televisión, en el que pedía a los maestros que acudieran a sus centros a dictar clase el día siguiente. Precisamente, esta petición venía precedida de una nueva declaración de paro durante cinco días en asamblea extraordinaria de ATEP, de la que participaron 139 delegados<sup>117</sup>.

Videla decía proponer el diálogo como mecanismo de solución a unos problemas que su gobierno ya había encontrado sobre la mesa, sin dejar de advertir que en caso de no producirse este acercamiento de posturas, el gobierno tendría que considerar los agravios que entendía se estaban produciendo por efecto de la huelga, apuntando que:

---

<sup>113</sup> *La Gaceta*, 16/08/1970, p. 12.

<sup>114</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 60, 13/08/1970.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

<sup>116</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 61, 20/08/1970.

<sup>117</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 62, 28/08/1970.

“No menos importante resulta el derecho a trabajar coartado por las amenazas de represalias por parte de quienes hacen uso de este conflicto con fines extragremiales”<sup>118</sup>. Continuando con el intento de deslegitimar la acción gremial, el gobernador advertía: “sería de lamentar que, en el ejercicio de esta responsabilidad, intereses ocultos lograran crear un ficticio enfrentamiento entre maestros y el gobierno, ejercido en este caso por militares, enfrentamiento a todas luces inconveniente y por otra parte no deseado”<sup>119</sup>. Por su parte, Arancibia respondió al mensaje del Videla en los siguientes términos:

*“Somos respetuosos de la palabra del gobernador interino, pero entendemos que su mensaje no introduce ninguna variante para solucionar el conflicto. En casi un mes de huelga, el gobierno no dio ningún paso positivo, ni siquiera con la separación del presidente del Consejo y su normalización. En consecuencia, lo dispuesto por la asamblea se mantiene, y no habrá clases en las escuelas”*<sup>120</sup>

El conflicto no se resolvió antes de la salida de Videla, así que resulta lógico considerar que el rotundo desencuentro que mantuvo con los docentes no iba a ser olvidado fácilmente. El futuro golpista habría aprendido en el transcurso de esos días una lección importante, el movimiento sindical en Tucumán no se podía reducir sólo al mundo azucarero, también los docentes provinciales habían resultado ser capaces de plantar cara al gobierno militar.

Arancibia, por su parte, consideraba que el movimiento de fuerza de los docentes no tenía precedentes en la historia de Tucumán. Unos días antes había mantenido conversaciones con Imabud, ya que Arancibia consideró que el gremio debía mantener una actitud abierta ante la posibilidad de entrar en negociaciones. En esa ocasión, el flamante gobernador empenó su palabra para dar soluciones, a cambio de lo que solicitaba el levantamiento del paro. Ante la medida de levantar el paro, el delegado de la escuela Florencio Varela consideró que se trataba de una claudicación que le avergonzaba. El presidente, mientras tanto, apelaba al sentido común a la hora de buscar soluciones al problema que enfrentaba el gremio. Las tratativas iban a comenzar la

---

<sup>118</sup> Diario *La Gaceta*, 30/08/1970, p. 10.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> *Ibidem*.



semana siguiente, pero la CD se reservaba la opción de convocar de nuevo a la movilización en el caso de que no se alcanzara ningún acuerdo satisfactorio<sup>121</sup>.

Cuando se levantó el paro, producto de una entrevista mantenida en Buenos Aires entre Imbaud y Arancibia, muchos de los afiliados mostraron su desacuerdo en la asamblea que ratificó la decisión. Un columnista del diario *La Gaceta* resumía así el resultado de las jornadas de movilización: “Según están las cosas, los maestros tendrán que conformarse con las elecciones que les permitan tener alguna injerencia en el gobierno escolar y retornar a las aulas como si nada hubiera pasado”<sup>122</sup>.

En defensa de la estrategia escogida, Arancibia declaraba que “aunque muchos de nuestros reclamos fueran resueltos, si no se otorga el incremento del índice docente, que es el problema verdaderamente acuciante, no nos daremos por satisfechos”<sup>123</sup>. Imbaud, consciente de la capacidad de movilización del gremio y del estado de ánimo del magisterio a pocos días vista de la celebración del día del maestro, se aseguró que “el Consejo de Educación se normalizará y como medida inmediata dispondré que el mes de agosto se pague íntegramente a los maestros, es decir, sin los descuentos por la huelga”<sup>124</sup>.

El gobernador Imbaud dictó en ese momento una resolución de emergencia para terminar con el paro de actividades de los docentes, que se extendía ya por cerca de un mes, concediendo un aumento del 15%, a contar desde el primero de septiembre hasta fines de diciembre, dándose por hecho que con la llegada del nuevo año entraría en vigor definitivamente la equiparación salarial con los docentes nacionales<sup>125</sup>. Además, Imbaud agradeció “la buena disposición del magisterio hacia el gobierno, por haberlo ayudado en la emergencia, al asumir una actitud comprensiva”<sup>126</sup>. En ese momento, Arancibia mostró su conformidad provisional con la solución en una reunión mantenida con el ministro de gobierno de la provincia, Carlos Alberto Bravo, declarando que se

---

<sup>121</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 63, 04/09/1970.

<sup>122</sup> Diario *La Gaceta*, 06/09/1970, p. 9.

<sup>123</sup> Diario *La Gaceta*, 06/09/1970, *La Gaceta*, p. 13.

<sup>124</sup> *Ibidem*.

<sup>125</sup> Sin embargo, lo que contemplaba la ley nacional n° 18.514 era un plan para equiparar progresivamente los sueldos de los docentes de todo el país, culminando en 1974, fecha a partir de la cual todos los docentes provinciales del país recibirían la misma retribución que el personal nacional. Véase: Diario *La Nación*, 07/09/1970, p. 5.

<sup>126</sup> Diario *La Prensa*, 12/09/1970, p. 6.

trataba de una solución “comprensiva y honrosa”<sup>127</sup>. Imbaud, por su parte, se comprometía a que en el presupuesto del próximo ejercicio aparecerían reflejadas las necesidades del magisterio de manera definitiva. Además, se consiguió rebajar el descuento para jubilaciones del 14 al 12 por ciento, y se logró un índice de 1=805 pesos, que entró en vigor a partir de enero de 1971<sup>128</sup>. Otro de los acuerdos logrados por ATEP fue que el gobierno aceptara como justificadas las ausencias en razón de las jornadas de huelga. Es interesante destacar que en el curso de una asamblea, el presidente dio lectura a varios artículos de la revista *Educadores del Mundo*, cuyo número se centraba en el congreso pedagógico celebrado en Bolivia. Destacó también las declaraciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Chile y afirmó que esta reunión daba cuenta de un despertar en la docencia latinoamericana, a lo que Sixto M. Paz añadió que el congreso que daría comienzo el día 11 de octubre en Tucumán despertaba la atención de toda América Latina<sup>129</sup>.

Con respecto al paro convocado para el 9 de octubre por la CGT, la asamblea de ATEP resolvió apoyarlo, no sin antes tener en cuenta las muestras de apoyo que la delegación regional de la confederación había dado durante las movilizaciones docentes. En cualquier caso, la reflexión más interesante fue la realizada a la conducción de esta entidad, puesto que Arancibia se apoyó en un artículo del diario Clarín para hablar del carácter antidemocrático de la CGT, que contaba con dirigentes que no eran elegidos por las bases<sup>130</sup>.

Resulta interesante observar que ATEP, aún nucleando a los docentes públicos, tenía en cuenta en las negociaciones a los educadores de centros privados que prestaban servicios en escuelas subsidiadas por el Estado. En este sentido, la agremiación declaraba que “nunca deja de defender a todos los docentes que trabajan en relación de dependencia”<sup>131</sup>.

La semana siguiente, ATEP se negó a participar en la confección de listas de docentes participantes en los órganos de gobierno escolar porque el gremio no tenía la seguridad de que quienes participaran en estos organismos estarían “identificados con la

---

<sup>127</sup> Aumento de emergencia para maestros tucumanos. (1970, 12 Septiembre). La Prensa, p. 6.

<sup>128</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 64, 10/09/1970.

<sup>129</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 65, 06/10/1970.

<sup>130</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 66, 08/10/1970.

<sup>131</sup> Diario *La Gaceta*, 20/09/1970, p. 10.

defensa de la educación del pueblo, como un medio fundamental para su desarrollo y liberación integral”<sup>132</sup>.

En la atmósfera que proveía este conflicto enconado, tuvo lugar el Congreso Nacional de Educación, celebrado entre los días 10 y 12 de octubre. Los dos puntos a tratarse en el encuentro eran los siguientes: “Análisis de la situación educativa en relación con la realidad socio-económica a nivel nacional y regional” y “Educación y cambio socio-económico”. El resto de los puntos abordaba aspectos estrictamente pedagógicos y relacionados con la ordenación de la labor docente, aunque su discusión se emplazaba a posteriores reuniones, cuya fecha y lugar de celebración habría de decidirse en el transcurso de las jornadas. En la invitación para participar, cursada a través de la prensa local, se hacía extensivo el llamamiento a “todas las instituciones culturales, gremiales, profesionales y populares de la provincia”<sup>133</sup>.

**Ilustración 4. Francisco Isauro Arancibia en el acto de inauguración del Congreso Nacional de Educación**<sup>134</sup>



<sup>132</sup> Diario *La Gaceta*, 27/09/1970, p. 7.

<sup>133</sup> Diario, *La Gaceta*, 04/10/1970, p. 12.

<sup>134</sup> Diario *La Gaceta*, 11/10/1970, p. 9.

Durante el acto inaugural, cuya primera intervención corrió a cargo del titular de ATEP, Arancibia declaró: “Empieza una etapa plena de realizaciones, en la que el país tiene puesta su mirada en Tucumán [...] En Tucumán encontramos la imagen de un pueblo que se pretende destruir, pero que posee la firme determinación de sortear todos los obstáculos que traban su desarrollo”. El público presente en el acto rompió en aplausos cuando el presidente de ATEP afirmó que ese congreso no estaba patrocinado por nadie más que por el pueblo argentino. Su discurso terminó con la siguiente afirmación: “la educación debe estar al servicio de la libertad, independencia y autodeterminación de los pueblos”<sup>135</sup>.

La CD de ATEP sufrió su primer revés significativo justo después de la celebración del Congreso de Educación. La celebración de elecciones para vocales en el consejo de Educación, que finalmente se iba a integrar, dio como resultado que los candidatos promovidos por la dirección, Elvira Gómez de Nollar y Sixto Miguel Paz, sucumbieran ante dos candidatos alternativos, que formaban parte de un sector crítico con la política seguida por Arancibia. Se trata César Zelarayán y Vicenta Alderete de Faciano. La elección se hizo en dos vueltas con votación secreta, y participaron 117 delegados, de los cuales 70 dieron su respaldo a Vicenta Alderete y 55 César Zelarayán en la segunda vuelta<sup>136</sup>.

**Ilustración 5. Asamblea de delegados sindicales celebrado el 29/08/1970 en el local de la Sociedad Sarmiento**<sup>137</sup>



<sup>135</sup> Diario *La Gaceta*, 11/10/1970, p. 9.

<sup>136</sup> AA, *Asambleas*, Libro I, acta n° 68, 27/10/1970.

<sup>137</sup> *ATEP en marcha*, 10/1970, p.3

El acto de unión docente escenificado durante el congreso tuvo lugar apenas unas semanas antes del estallido social conocido como el “tucumanazo”. Entre los días 10 y 13 de noviembre, estudiantes universitarios<sup>138</sup> y trabajadores se aliaron de nuevo para reclamar al Estado la adopción de medidas de carácter económico que redujeran la elevada carga que estaban siendo obligados a soportar los trabajadores tucumanos<sup>139</sup>. Estos días pusieron de relieve que se había templado sólidamente la alianza entre sectores de trabajadores que se venía fraguando desde el cierre de los ingenios azucareros, donde los intereses de los sectores particulares pasaron a un segundo plano y expresaron, por encima de otras diferencias, la voluntad de cambio de la mayor parte de la sociedad tucumana<sup>140</sup>. En una asamblea celebrada unos días después, no se recogen menciones específicas de estos días, pero sí que se aprueba por unanimidad la adhesión al paro docente que estaba preparando la CGERA. Del mismo modo, Arancibia afirmaba que el CUDAG era “una simple mesa de acuerdo de la que participaban CAMIP, UNE, FAGE y que fuera disuelta debido a su falta de representatividad”, al contrario de lo que ocurría con CGERA, donde participaban “fuertes entidades con personería gremial”. Los motivos para el paro nacional convocado el día 18 de noviembre eran: 1. Rechazo a la reforma educativa; 2. Reclamaciones en lo referente a ajustes salariales; 3. Vigencia del Estatuto del Docente<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> Para una historia de la Universidad Nacional de Tucumán, consúltese: Pucci, Roberto, “Pasado y presente de la universidad tucumana”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pucci.pdf> (Consultado el 15/05/2015).

<sup>139</sup> Crenzel, Emilio, *El Tucumanazo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991.

<sup>140</sup> Estas jornadas se inscriben dentro del ciclo de protesta social abierto en la Argentina con el “Cordobazo” y suponen una manifestación más de las puebladas que sacudieron distintos territorios del país. En el caso de Tucumán, el motor del levantamiento popular fue arrancado por los sectores estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán, lo que se entiende también por el desgaste acumulado de los obreros de la industria azucarera. Lo inédito de este movimiento es el apoyo social que despiertan y el apoyo mutuo entre gremios. Para un análisis de este levantamiento popular, donde además se registra la participación de ATEP junto a los obreros y estudiantes, en: Nassif, Silvia G., “Conflictos sociales protagonizados por obreros y estudiantes en Tucumán durante 1970”, *Conflicto Social*, N° 5, 2011, pp. 175-200. Disponible en: [http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/05/10\\_nassif.pdf](http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/05/10_nassif.pdf) (Consultado el 15/05/2015). En otros trabajos, la misma autora desgana el conocido como segundo tucumanazo, de 1972, para condensar su recorrido investigativo en un libro que abarca el periodo 1969-1972, en: Nassif, Silvia G., “Conflictividad social en la provincia de Tucumán durante la 'Revolución Argentina'. El 'Quintazo' o 'segundo tucumanazo' de 1972”, *Páginas-Revista digital de la escuela de historia de la UNR*, N° 7, 2012, pp. 73-104; Nassif, Silvia, *Tucumanazos. Una huella histórica de luchas populares, 1969-1972*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2012.

<sup>141</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 69, 16/11/1970.

Con motivo de la clausura del año escolar, ATEP publicó una nota de prensa donde hacía un balance de los meses pasados. La comisión directiva del sindicato se mostraba orgullosa de que el magisterio, a pesar de haber tenido que enfrentar a distintas administraciones, había podido cumplir sus compromisos con el alumnado, y se mostraba esperanzada sobre lo que podrían hacer si dispusieran los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros escolares, esto es, “cuando sus maestros sean colocados en el nivel social, económico y profesional que les corresponde por derecho y justicia”<sup>142</sup>. El saldo con el que los maestros cerraban el año podía considerarse positivo, en tanto en cuanto se había conseguido la elevación del índice de remuneraciones y el pago de los días de huelga que fueron necesarios para esta consecución. Asimismo, se estimaban los logros alcanzados con motivo de la celebración del Congreso de Educación y las buenas relaciones que se estaban forjando con entidades sindicales del resto del país.

### **5.3.1. De la CGERA a la CTERA**

Después del descanso estival, el año de 1971 se inició con una declaración de estado de alerta del magisterio que trataba de impedir la aprobación de la reforma educativa, así como conseguir la paralización de la transferencia de escuelas nacionales a las provincias, esto último al menos hasta que se tuviera seguridad acerca de la existencia de las condiciones económicas necesarias para la federalización de la enseñanza. Ahondando en este sentido, la postura de ATEP fue sintetizada expresando que se anhelaba la “suspensión de todas las modificaciones a la legislación docente hasta que se normalice institucionalmente el país”<sup>143</sup>.

De nuevo, se puede constatar cómo en la base de las reclamaciones se ATEP se encuentra el “pecado original” de la naturaleza de las instituciones públicas. En todas las manifestaciones producidas por el sindicato reside, velada en mayor o menor medida, la crítica hacia las reformas introducidas por gobiernos que no ostentan legitimidad democrática para el ejercicio del gobierno y la acción legislativa. Desde este punto de vista, el elemento sustantivo de la protesta de ATEP es la defensa de un

---

<sup>142</sup> Diario *La Gaceta*, 06/12/1970, p. 17.

<sup>143</sup> Diario *La Gaceta*, 07/03/1971, p. 10.

sistema político del que los trabajadores de la educación se consideran herederos y, de alguna forma, supervivientes y garantes de su continuidad. Son los docentes quienes otrora se ganaron la autoridad para impartir sus conocimientos en el marco del respeto a los valores de la enseñanza pública, laica y gratuita y, por lo tanto, expresan unos deseos encaminados a que estos valores no sólo estuvieran presentes en el ámbito escolar, sino que más ampliamente pudieran ser aplicados a los distintos niveles de articulación de la sociedad argentina.

Por parte de CGERA se entendía que este proyecto de reforma de la ley de educación provocaba “un desmantelamiento en gran escala de la escuela pública en provecho de intereses de sector”<sup>144</sup>, una posición de rechazo frontal que motivó que el AND se entrevistara con el ministro Cantini, quien en el transcurso del encuentro dio cuenta de una contradicción difícilmente salvable, a la cual pudo asirse el AND para proceder con más intensidad y determinación en las movilizaciones consiguientes. La lógica que develó el ministro Cantini es que la disponibilidad económica estaba orientada a sufragar otros insumos de teórica mayor importancia, entre ellos los destinados a las FF.AA., resultando que el titular de la cartera de Educación reconocía mediante esta alusión que, en función de las condiciones presupuestarias dadas, resultaba ciertamente inviable implementar los cambios legislativos que desde el gobierno se estaban proponiendo<sup>145</sup>. La estrategia del ministro para aligerar la carga real del proyecto contemplado no tuvo el efecto disuasorio para el que fue concebida, muy al contrario, mostró al AND un flanco que los gobiernos de distintas escalas habían procurado blindar, o dicho de otro modo, el problema de la financiación de la escuela pública no se presentaba más como consecuencia de la falta de recursos materiales para sostenerla, sino como fruto de una madurada voluntad política que situaba en la escala de prioridades a colectivos más afines y menos problemáticos que los educadores.

Conscientes de la fortaleza construida sobre la cohesión interna del AND y las contradicciones expresadas por el gobierno, la respuesta del sindicalismo docente a la propuesta de nueva ley de educación fue la de llamar a los trabajadores a participar de un nuevo cese de actividades. En la víspera del paro de 72 horas, convocado por el AND para los días 23, 24 y 25 de marzo, las posiciones de ATEP alcanzaron

---

<sup>144</sup> Diario *La Prensa*, 07/03/1971, p. 7.

<sup>145</sup> Diario *La Prensa*, 09/03/1971, p. 8.

repercusión en medios de difusión nacional. En aquella ocasión, la denuncia pública se orientó principalmente hacia las políticas del gobierno que tenían por objetivo minar la efectiva gratuidad de la enseñanza pública. Según lo manifestado en esta publicación:

*“Lo evidente e indiscutible de este problema que afecta a los educadores y a los padres, es que constituye una expresión de política educacional, ya que el Estado, para favorecer el desarrollo de la escuela privada, ha abandonado la atención al servicio educacional, hasta el extremo de que se está cumpliendo ahora un verdadero proceso de vaciamiento de la escuela pública.”*<sup>146</sup>

ATEP señalaba que el Estado no cumplía con la obligación de garantizar la gratuidad de la enseñanza y se posicionaba a favor de los establecimientos privados, provocando intencionalmente que los docentes tuvieran que adquirir libros, cuadernos, lápices y otros elementos necesarios para la vida diaria en el aula. En suma, la posición de ATEP incidía en que fruto de los sucesivos gobiernos “puestos al servicio de la comercialización de la educación”, la escuela pública se encontraba en una situación “desesperante”<sup>147</sup>, víctima de una instrumentalización estatal que tenía como objetivo final adelgazar el sistema educativo público en la mayor medida posible.

De cualquier modo, el gobierno de Alejandro Lanusse, sucesor de Levingston a la cabeza del ejecutivo nacional, se había propuesto sacar adelante una reforma educativa que según sus redactores era necesaria para la actualización de los conocimientos de los docentes incluyendo, entre otras medidas, la realización de cursos de perfeccionamiento que no serían pagados y que se habrían de realizar de forma obligatoria fuera del horario lectivo. Desde las entidades de los trabajadores de la educación se estimaba que esta reforma estaba destinada a acabar con el acceso a la educación en igualdad de condiciones de todos los argentinos, al tiempo que incidiría negativamente sobre unos salarios que seguían siendo considerados escasos, motivos por los cuales el rechazo a la reforma fue mayoritario. En el caso de ATEP, la crítica volvía a incidir sobre los criterios que ya se han señalado, esto es, la ilegitimidad de un gobierno que no ha sido

---

<sup>146</sup> Diario *La Prensa*, 22/03/1971, p. 9.

<sup>147</sup> En el día de inicio de la huelga se hizo de nuevo presente la postura de ATEP, esta vez con un comunicado más extenso que incidía en los mismos elementos que ya se han señalado, al que se añadía una referencia a la situación de los cargos vacantes existentes que no se ocupaban sino de forma interina, lo que estaba produciendo la precarización de esos puestos de trabajo. Véase: Diario *La Prensa*, 23/03/1971, p. 11.



elegido por el pueblo frente a cuestiones que afectan a la sociedad en su conjunto<sup>148</sup>. En el siguiente comunicado quedaba inequívocamente expresada la postura de la entidad tucumana acerca de la actuación gubernamental:

*“...ejerciendo simplemente la autoridad que da el poder y no la autoridad que da la razón, se comete una grave agresión a los más elementales principios democráticos y de preservación de los intereses del país en materia tan delicada e importante como es la educación”*<sup>149</sup>

Dos días después tuvo lugar una asamblea donde Arancibia resaltó la importancia de la fundación de CGERA, subrayando la disolución de la CUDAG, así como la no participación de FAGE, de quien dijo que resultaba evidente su “marcada tendencia privatizante [sic.]”<sup>150</sup>. En su repaso a la situación del magisterio, Arancibia decía que el índice percibido había alcanzado en el mes precedente el valor de 1=828,6, cuando legalmente le correspondería el 1=2.300<sup>151</sup>. El gobernador Sarrulle recibía reclamaciones acerca del pago de aguinaldos (que ascendía a 19 millones de pesos), el cobro de la deuda por equiparación, mejoramiento de edificios escolares, aportes jubilatorios, Junta de Clasificación, etc. La asamblea cerró con la adhesión al paro nacional docente decretado para el 31 de marzo.

Influido por esta movilización, que en el caso de la provincia de Chaco constituía la paralización total de las actividades en las escuelas, el presidente Lanusse dio orden para que se iniciara un estudio de proyecto de ley para proceder a la equiparación de los

---

<sup>148</sup> En este comunicado, ATEP se alinea por intermedio de su presidente con el discurso que ya venía planteando Alfredo Bravo. Con motivo de la huelga del 31 de marzo, Bravo situó las ambiciones del sindicalismo docente en la consecución de “una escuela sin exclusiones, grande y abierta para todos”, así como defendía el derecho de los maestros a participar de la redacción de la nueva ley educativa “de acuerdo con las mejores tradiciones democráticas”. Mientras tanto, el ministerio de Educación se servía de los clásicos argumentos deslegitimadores de la condición trabajadora de los maestros, declarando lo siguiente: “el ministerio de Educación está atento a la evolución del contexto salarial para intensificar sus permanentes gestiones tendientes a solucionar todos los problemas que afectan a la docencia argentina. Los docentes por su propio nivel cultural, no pueden dejar de comprender que ello solo puede lograrse a través de los ajustes de una política general, nunca a consecuencia de presiones provocadas por medidas de fuerza”. Véase: Diario *La Prensa*, 30/03/1971, p. 9.

<sup>149</sup> Diario *La Gaceta*, 23/05/1971, p. 5.

<sup>150</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 70, 25/03/1971.

<sup>151</sup> En un estudio presentado realizado por CAMID, se ponía de manifiesto que mientras en 1960 se percibía un índice de 1=125, el acordado debía haber alcanzado el 1=287. Para 1962, la diferencia era de 399 teóricos a los 230 reales, manteniéndose en unos porcentajes cercanos al 60% de lo que debería haber percibido. En: AA, Asambleas, Libro I, n° 70, 05/09/1971.

sueldos de docentes nacionales y provinciales<sup>152</sup>. No obstante lo anunciado, y en tanto en cuanto las soluciones prometidas no llegaban a concretarse, se tomó la decisión de acudir a un paro nacional convocado para los días 5 y 6 de mayo (fechas que sustituían a la inicial propuesta del 28 y 29 de abril, que hubieron de ser anuladas por los problemas burocráticos que se presentaron en Salta y Jujuy, donde ya se estaban haciendo paros progresivos). El gobernador Sarrulle respondió enviando una nota al magisterio, en términos “cordiales”, pero no daba solución concreta a ninguno de los problemas planteados. Por otro lado, ATEP consideraba que el Consejo de Educación continuaba actuando igual que bajo la presidencia del profesor Torres, dando como ejemplo la distribución de las horas de cátedra en las escuelas de capacitación Urquiza, la reparación del cargo de la Srta. Feijoo, la retención de sueldos a aquellas docentes a quienes se instruye sumario, etc. Todas ellas medidas que incurrían contra las disposiciones expresadas en el Estatuto del Docente.

El estado de empobrecimiento generalizado de la provincia también se dejaba notar en las asambleas docentes. Para demostrarlo, tomemos como ejemplo lo expuesto por la delegada de la escuela San Lorenzo, situada en el Ingenio San Juan. En su intervención relató el mal estado sanitario de la población de la localidad, siendo especialmente gravosa la situación de una madre de dos alumnos enferma de polio, desatendida por las autoridades sanitarias a pesar de las comunicaciones efectuadas ante el ministerio. Finalmente, en esta asamblea se tomó la decisión, por unanimidad, de apoyar el paro nacional, al tiempo que el delegado de la escuela Paul Groussac transmitió la voluntad de todo el personal de la escuela que representaba para iniciar paros de protesta “por la situación de la provincia”<sup>153</sup>.

El día después de la movilización nacional se volvió a reunir la asamblea de delegados de ATEP, donde desde la presidencia se expresó que el balance había sido “extraordinario [...] no obstante la campaña en contra realizada por ciertas pseudo

---

<sup>152</sup> Los encargados del estudio de viabilidad fueron el ministro del Interior, Arturo Mor Roig, el ministro de Economía y Trabajo, Aldo Ferrer, y ministro de Cultura y Educación, José Luis Cantini. Véase: Diario *La Gaceta*, 11/04/1971, p. 2.

<sup>153</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 71, 26/04/1971. La apreciación del delegado escolar no iba desencaminada. Los datos de desempleo contabilizados en ese mes colocaban a Tucumán, con un 11,7%, como la provincia con una tasa de desempleo más elevada. Véase también: Diario *La Gaceta*, 23/05/1971, p. 5.

organizaciones docentes”<sup>154</sup>. La intervención de Arancibia continuó con una muestra de apoyo al editorial publicado por el diario *La Prensa*, donde se tildaba de “irritante injusticia” el aumento salarial propuesto a los docentes, que ascendía al 14%, frente al 31% de incremento del costo de la vida. Destacaba también que sólo después de las medidas de fuerza el gobierno aprobó una subida del 30%, lo que daba cuenta de que los recursos económicos realmente existían. El cuarto poder siguió presente en la asamblea, puesto que Arancibia se quejó en viva voz de la falta de colaboración mostrada por el Diario *La Gaceta*, “al no publicar los comunicados de prensa que envía ATEP”, a pesar del compromiso por ceder todo el espacio posible que le hubiera expresado el secretario de redacción del diario. Como se ha visto en las ocasiones precedentes, la reunión concluyó con una adhesión unánime a los nuevos paros nacionales que se resolvieran en el Acuerdo de Nucleamientos.

Una semana más tarde, ante la indignación provocada en el seno del magisterio luego de una serie de publicaciones en prensa que mostraban unos salarios que no se correspondían con la realidad, la decisión adoptada por unanimidad fue la de llevar a cabo dos paros de 48 horas, los días 19-20 y 26-27 del mes de mayo<sup>155</sup>.

En la antesala de la segunda tanda de huelgas, Arancibia destacó el éxito del paro especialmente en las localidades del sur de la provincia. Además, se encontraban respaldado el paro el presidente de APEM, Dionisio Paz, y una representante de la Federación de Padres, quien propició que los delegados de la federación estuvieran presentes en la reunión de docentes convocada para el 4 de junio. En esta ocasión, la asamblea votó por mayoría la resolución de convocar paros por 48 horas, en lugar del paro por tiempo indeterminado también propuesto<sup>156</sup>.

La siguiente asamblea quedó emplazada al 11 de junio, y contó con una numerosa asistencia, que ascendió hasta los 139 delegados. Arancibia comenzó su intervención responsabilizando al gobernador de la provincia y al presidente del Consejo por la situación que estaba atravesando el magisterio. Sin dejar de lado la exasperación, el presidente afirmó que los “empleados policiales” contaban con unos sueldos que superaban ampliamente el sueldo del maestro, aún contando con los posibles

---

<sup>154</sup> En referencia a la falta de representatividad atribuida a AGET. En: AA, Asambleas, Libro I, acta n° 72, 07/05/1971

<sup>155</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 73, 14/05/1971.

<sup>156</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 74, 24/05/1971.

incrementos por los que se estaba luchando. En otro sentido, el presidente dio a conocer que la voluntad de la CD era solicitar al Acuerdo de Nucleamientos la determinación de un plan de lucha. Seguidamente se pasó a la votación sobre las medidas a adoptar, momento en el que la delegada de la escuela Miguel Lillo propuso el paro por tiempo indefinido. Sin embargo, Arancibia intercedió para que los delegados moderaran sus impulsos, señalando la “conveniencia de proceder en forma orgánica”, lo que finalmente dio lugar a la aprobación “por gran mayoría” (lamentablemente no consta en el acta el escrutinio) de un paro por 72 horas<sup>157</sup>, efectuado los días 15, 16 y 17 del mes en curso.

La medida de fuerza fue calificada como total, y ante la asamblea Arancibia destacó el “espíritu de lucha que anima a los maestros y el apoyo de los padres”<sup>158</sup>. En esta ocasión, la CD se encontraba preparando la reunión de las organizaciones sindicales docentes, del interior del país, que hacían parte de la CGERA, las que se iban a reunir en Tucumán. Así se entiende la especial dedicatoria dirigida a los colegas docentes de la provincia de Santa Fe, y la participación en la asamblea de la delegación de La Rioja. En todo caso, a la hora de la votación se volvió a evidenciar la fractura entre los dos sectores de ATEP, traducida en la división entre quienes apoyaron la moción presentada por la delegada de la escuela Hogar y Patria, a favor de un paro por tiempo indeterminado, y quienes apoyaron en forma mayoritaria la resolución de un cese de actividades de 5 días, fijado entre el 21 y 25 del mes de junio.

El día de inicio del paro semanal, se volvió a reunir la asamblea. En este momento se enfrentaban a la situación dispuesta mediante la aprobación de la ley de represión n° 19.081, que en palabras del asesor legal de ATEP “...destruye todas las garantías y los derechos mientras el gremio esgrime la fuerza”<sup>159</sup>. Arancibia pedía a los delegados que reflexionaran sobre los riesgos existentes, al tiempo que declaraba que la CD estaba dispuesta a asumir la responsabilidad que le correspondía ante tal situación, “hasta sus últimas consecuencias”. Lo cierto es que la medida de fuerza conllevaba el riesgo de provocar la intervención de la entidad, como sanción de primer orden. En esta ocasión, la dirección de ATEP había tomado ya la prevención de solicitar un paro de apoyo a la

---

<sup>157</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 75, 11/06/1971.

<sup>158</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 77, 18/06/1971.

<sup>159</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 78, 21/06/1971.

CGT, entre tanto algunos delegados escolares exhortaban por la continuidad de la lucha hasta que se consiguiese la retirada de la citada ley. Otro delegado se dirigía a los 119 delegados asistentes arengando que “no es momento de dar un paso atrás”<sup>160</sup>, a lo que respondió la asamblea con la unánime decisión de continuar con la medida de fuerza programada.

Durante el transcurso de la semana, el presidente Arancibia se desplazó a Buenos Aires con el objetivo de iniciar negociaciones tanto con los ministros de Bienestar Social, Trabajo e Interior de la Nación, como con el ministro de Economía de la provincia. Al día siguiente de iniciadas las negociaciones, el presidente de ATEP acudió a una entrevista con el ministro del Interior<sup>161</sup>, quien le comunicó que le giraría al gobierno provincial la cantidad necesaria para proceder al pago del índice 920 y 1050 a partir del mes de julio. Con respecto a la deuda de 700 millones, se dijo que todo dependía de que el gobierno provincial hiciera llegar al gobierno nacional los informes rutinarios, para que tal cantidad fuera enviada. La fractura hizo aparición de nuevo, aunque en esta ocasión se presentó más profunda que hasta entonces. Mientras la delegada de la escuela Manuel G. Fernández, de la localidad de Bella Vista, pedía el mantenimiento de la huelga “hasta que queden totalmente solucionados todos los puntos del planteo”, otros proponían el levantamiento del paro y la vuelta a la escuela. Por su parte, el presidente Arancibia apelaba al “sentido común” antes de proceder a la votación, que tuvo como resultado la adopción de una medida ambigua, esto es, se levantó el paro para la semana siguiente, al tiempo que se mantuvo el “estado de huelga”<sup>162</sup>.

Mientras tanto, la vida política tucumana seguía su habitual sendero de inestabilidad. El intendente de San Miguel, José Garzón, declaró que dejaba el cargo el día 24 de junio, después de un aviso de bomba en la sede de la Legislatura provincial, donde en ese momento se encontraba en forma provisional la sede de la municipalidad. Mientras tanto, al gobernador Óscar Sarrulle se le acumulaban los problemas. En lo relativo al conflicto docente, el gobernador trató de calmar a los militantes de ATEP y

---

<sup>160</sup> Como se encargó de transmitir Sixto M. Paz a la asamblea, la postura de CGERA era continuar con la movilización “dado el clima totalmente favorable que existe en el país”. En: AA, Asambleas, Libro I, acta n° 78, 21/06/1971.

<sup>161</sup> En la entrevista también estuvieron presente el ministro de Economía de la provincia, directivos de CGERA y funcionarios de la Dirección General de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

<sup>162</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 79, 25/06/1971.

AGET (quienes también participaban de las huelgas) concediendo la equiparación con los salarios de los maestros nacionales, al tiempo que prevenía de este modo: “no tengo un peso para pagar; en todo caso me ayudará la Nación”<sup>163</sup>. Por otro lado, la inoperancia a la hora de atajar los crecientes atentados, así como la ineficacia demostrada por el “Operativo Tucumán”, se aparecían como obstáculos de las pretensiones políticas de Sarrulle, quien con estas medidas pretendidamente conciliatorias trataba ganar tiempo y destensar el conflicto social abierto.

El conflicto de los docentes permanecía activo en relación con el pago de los aumentos salariales adeudados, manteniéndose frecuentes contactos entre el gobierno provincial y los dirigentes de la agremiación. Sin embargo, al mismo tiempo que se enfrentaban estos problemas, no se dejaba de lado la participación en actos de solidaridad con los obreros azucareros. Un ejemplo de esta actividad lo encontramos en un acto celebrado a comienzos de junio, donde se solicitaba la reapertura del ex ingenio Esperanza. Con este motivo se reunieron en el citado ingenio representantes de los sindicatos del ex ingenio San Antonio y el ingenio Santa Rosa, así como también sacerdotes como Juan Ferrante, uno de los portavoces de la corriente eclesiástica tercermundista en Tucumán, y miembros de la comisión del Comedor Universitario de la UNT. Este acto, que recibió las adhesiones de destacados líderes del sindicalismo nacional, entre ellos Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, también contó con la representación de los docentes en la persona de Francisco Arancibia. Las palabras de clausura correspondieron a Benito Romano, secretario general del sindicato de obreros del ex ingenio Esperanza, quien destacó que dicho ingenio ya había sido clausurado en 1948, al tiempo que formuló un análisis de la situación del momento coincidente con las posiciones que ya había expresado ATEP en otras ocasiones. Romano señaló que existía la necesidad y “obligación histórica” de que los sectores populares lucharan hasta el fin por sus demandas, “en las calles, en las fábricas, en las cárceles, por sus legítimos derechos”<sup>164</sup>.

En la primera semana de julio, los dirigentes de ATEP comprobaron que se estaban realizando las gestiones necesarias para reclamar el pago de la deuda acumulada, de la misma manera que recibieron la confirmación de que los días de

---

<sup>163</sup> *Primera Plana*, año 9, n° 440, 06/07/1971, p. 18.

<sup>164</sup> *Diario La Gaceta*, 13/06/1971, p. 10.

huelga no serían descontados. Llama la atención que, después de estos intensos meses de lucha, el presidente centro parte de su discurso en la necesidad de reorganizar el gremio “como herramienta de lucha”, necesitando la entidad de un trabajo “serio y consciente”, no obstante ser ATEP “el primero en el país por organización”<sup>165</sup>. Los problemas en el orden nacional estaban lejos de quedar solucionados, por lo que el Acuerdo de Nucleamientos había confeccionado un calendario de paros en el orden nacional que comenzaría a cumplirse después de las vacaciones de julio. Las reclamaciones exigidas eran las siguientes: mejoramiento del índice, modificación del sistema previsional, recuperación de lo establecido por el Estatuto del Docente en cuanto a jubilaciones, derogación total de la Reforma Educativa y repudio a la ley 19.081. Por otro lado, Sixto M. Paz destacó como aspecto positivo la restauración del Consejo Nacional de Educación, que había sido reemplazado por “un gobierno impersonal”<sup>166</sup>. La importancia de la unificación gremial fue ganando enteros en las alocuciones del presidente durante los meses que siguieron. Un ejemplo de esto es la siguiente manifestación:

*“...indudablemente, la falta de acción continuada de la docencia es consecuencia directa de esa falta de una entidad central orgánica que nucleee a todos los docentes que estiman que el Estado debe atender, prioritariamente, la educación del pueblo como un hecho imprescindible para que el país logre su realización en la medida que corresponde. Es innegable que los maestros del interior del país son los que con más fuerza reclaman justicia y la CGERA es quien da tónica viva a los planteos, ya sea reclamando incremento de sueldo, régimen jubilatorio justo o anulación de una pseudo reforma educativa, que pretende disminuir aún más nuestra ya maltrecha escuela pública”*<sup>167</sup>

Con este tipo de intervenciones se reforzaba el ascendente que ostentaba el presidente de ATEP sobre la docencia tucumana, de modo que resoluciones de apoyo a medidas dispuestas por el AND, tales como una convocatoria de jornada de paro para el día 28 de septiembre, era resueltas por unanimidad por la asamblea sindical. Este paro fue justificado como protesta frente a la falta de solución a los múltiples problemas

---

<sup>165</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 80, 02/07/1971.

<sup>166</sup> *Ibidem*.

<sup>167</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 82, 23/09/1971.

planteados, con especial hincapié en la situación de los docentes de las provincias en Chaco, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras provincias<sup>168</sup>. De nuevo se ponía de manifiesto la solidaridad expresada por los padres de alumnos, quienes no enviaban a sus hijos en los días de paro, así como se insistía en la necesidad de:

*“...generalizar y profundizar la convicción de que los problemas que afectan a la educación y a nuestra escuela, no pueden resolverse en forma aislada, provincia por provincia, sino que vendrá como consecuencia de una acción conjunta y en perfecta coordinación con toda la docencia del país: para ello, no es posible disminuir la intensidad en la lucha, aunque es necesario atender a los momentos más oportunos...”*<sup>169</sup>

Los días 6 y 7 de octubre se convocó un nuevo cese de actividades, que no contó con la adhesión plena de la escuela “Prácticas del hogar”<sup>170</sup>. A mediados del mes de diciembre se aprueba una modificación de los estatutos de la entidad que contemplaba el derecho a elegir docentes jubilados como parte de la CD, siempre y cuando no fuera un número superior a 3 y no ocuparan los cargos de máxima responsabilidad (presidente, secretario y tesorero)<sup>171</sup>.

Los meses transcurrían y, sin embargo, no se avanzaba hacia una resolución del conflicto de los docentes, de modo que la cotidianeidad del desencuentro propiciaba que no se dejaran de lado ciertos hábitos gremiales. Entre las prácticas habituales de ATEP se encontraba la publicación de una nota en prensa, con motivo de la celebración del día del maestro, cada doce de septiembre. Esta declaración se redactaba a modo de balance, puesto que tanto el año natural como el curso lectivo entran en su recta final en torno a esa fecha. Estos textos suelen resultar, por lo tanto, un buen instrumento para medir cuál era el nivel de satisfacción de la entidad al respecto de su situación. Las afirmaciones recogidas en el mensaje dirigido al magisterio del año 1971 certificaban que, por un lado, nada se había resuelto en los términos en que los docentes esperaban. Por otro lado, los dirigentes de la entidad se comprometían a renovar su voluntad de acción de

---

<sup>168</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 83, 01/10/1971.

<sup>169</sup> *Ibidem*.

<sup>170</sup> *Ibidem*.

<sup>171</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 87, 14/12/1971.



cara al futuro, fruto de la insatisfacción de sus demandas. Queriendo expresarse de forma rotunda e incontrovertible, en el saludo al magisterio se podía leer:

*“Los maestros son mantenidos en el sumergimiento económico. No se les paga lo que mandan las leyes correspondientes. La escuela estatal, pública y popular está abandonada por los gobiernos. Muchas escuelas funcionan en ranchos y taperas. La provisión de útiles y elementos de trabajo es nula. El principio de gratuidad [...] no está asegurado. Afirmamos que tenemos un amplio programa de lucha por nuestros derechos”<sup>172</sup>.*

Los meses que discurrieron hasta las elecciones de marzo de 1973, y aún más allá de éstas, constituyeron un *tour de force* del sindicalismo docente tucumano contra el gobierno provincial, frente al que las distancias se hacían cada vez más insalvables. Las esperanzas estaban depositadas en el retorno de la democracia que, como se verá, también defraudó las expectativas del colectivo, cuyas reivindicaciones y actos de protesta no amainaron durante los escasos tres años que concedieron las FF.AA. hasta su nuevo golpe de Estado. En el recorrido de este largo camino hacia la anhelada normalidad institucional, los trabajadores tucumanos, y ATEP en particular, no podían tasar elevadamente los réditos obtenidos como fruto de las acciones colectivas efectuadas, al menos si se atendía exclusivamente a los logros de orden material. Sin embargo, se puede afirmar que el apoyo social concitado en las distintas ocasiones que se han mencionado, constituyó un auténtico soporte legitimador para sus futuras iniciativas. Los docentes tucumanos se habían confirmado a lo largo de este período, como un actor social de insalvable relevancia, construyéndose a sí mismos en tanto que conformadores de la clase trabajadora de la provincia.

El conflicto con el gobierno se expresó mediante la retirada de fondos a la entidad, una medida amparada por los tribunales. En la última asamblea del año se hizo referencia a esta situación, al igual que se detalló el proceso seguido pro CGERA, CCID y UNE para concretar lo que luego sería la CTERA. En esa ocasión, una delegada solicitó que “un pronunciamiento de la Asamblea en lo que respecta al entroncamiento del sector docente con las centrales obreras que luchas por las reivindicaciones

---

<sup>172</sup> Diario *La Gaceta*, 12/09/1971, p. 8.

gremiales”. De ahí en más, se propuso auscultar la voluntad de la docencia para no comenzar el período lectivo si no se daban soluciones a sus problemas<sup>173</sup>.

Las convicciones expresadas en ATEP se convirtieron, paulatinamente, en declaraciones que acusaban gravemente a los gobiernos provincial y nacional de mentir premeditadamente a la ciudadanía. En este sentido, una nota de prensa redactada el día de año nuevo de 1972, afirmaba que en Argentina se vivía un proceso de destrucción de la “escuela del pueblo”, que pasaba por la reducción de centros educativos, la disminución del presupuesto del departamento de construcciones escolares, y el sumergimiento económico de los docentes. Sin pasar por alto el éxodo poblacional, el elevado índice de desocupación y la privación de recursos gubernamentales, el texto concluía manifestando que: “...todo forma parte de un plan destinado a destruir la escuela pública, lo cual se puede comprobar con claridad en Tucumán”<sup>174</sup>.

La reanudación de las actividades escolares en el mes de marzo estuvo marcada por una reunión de la Federación Docente de Tucumán, entidad que nucleaba a los siguientes gremios: ATEP, APEM (Asociación de Profesores de Enseñanza Media), Centro Docente Sarmiento, Centro Docente Jubilados Provinciales y Centro de Docentes Jubilados Ley 4.349. El problema que se abordó no era nuevo, pero sí confirmaba la capacidad de atracción que ejercía ATEP sobre otras entidades docentes, que entendían que sumarse al potencial que ya habían demostrado los docentes provinciales podría actuar en su favor. En cualquier caso, la reunión sirvió para clamar contra la injusticia que, a su entender, suponía la precaria situación económica del magisterio, poniendo el acento sobre las exiguas remuneraciones de los docentes, que se situaban por debajo del salario mínimo de los profesionales, apenas alcanzando el 40% de lo dispuesto por ley<sup>175</sup>. Como resultado del apoyo expresado en la reunión de la federación, sólo bastaron algunos días para que los docentes de enseñanza media decidieran comenzar una huelga, provocada por el impago de salarios correspondiente al mes de febrero. Como dijimos, este movimiento fue apoyado por los gremios integrantes de la Federación Docente de Tucumán, haciéndose pública esta solidaridad en un acto que tuvo lugar el 18 de marzo, donde también aprovecharon para mostrar su

---

<sup>173</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 88, 14/12/1971.

<sup>174</sup> Diario *La Gaceta*, 02/01/1972, p. 11.

<sup>175</sup> Diario *La Gaceta*, 12/03/1972, p. 8.

adhesión representes de partidos políticos, como ocurrió con el Partido Demócrata Cristiano<sup>176</sup>.

Mientras se daban pasos adelante en el camino de la construcción del barrio de viviendas de ATEP, también se consolidaba la voluntad de la asamblea de adherir a la futura CTERA, la que tendría como propósito “la defensa de la escuela pública, obligatoria y no dogmática [...] y participar con todos los gremios, incluso los no docentes, en busca de las grandes soluciones que requiere el país”. Se volvía a declarar al magisterio en estado de alera, y se iniciaba una nueva campaña de sensibilización entre la población<sup>177</sup>. Con ocasión de los conflictos docentes en Mendoza, se decidió apoyar el paro nacional de 24 horas y trasladar como mandato a la mesa ejecutiva del AND la propuesta de definición de un plan de lucha que pasara por paros progresivos de 48 y 72 horas y posteriormente durante toda la semana<sup>178</sup>.

En el mes de abril, Arancibia fue el encargado de encontrarse con el presidente de la nación, Alejandro Agustín Lanusse, en calidad de representante del AND, para ponerle de manifiesto las medidas persecutorias de que eran objeto por parte del gobierno provincial. De esta reunión, Arancibia destacó que el presidente exhortó a los docentes a agremiarse “a fin de lograr la personería gremial que les otorgaría mayor representatividad”. El presidente de ATEP señalaba asimismo que el sindicato se veía obligado a hacer una acción más enérgica en el ámbito nacional, y que a través de un memorial, Lanusse tuvo conocimiento preciso de las peticiones de los docentes<sup>179</sup>. Se volvió a decretar un paro de 24 para el día 6 de junio, y se cerró esta asamblea con una referencia de Arancibia al conflicto de los judiciales y los presos políticos, concluyendo que “la docencia no puede estar al margen de los problemas generales del país”, a lo que la asamblea respondió con un pronunciamiento por “una total adhesión a los movimientos de lucha”<sup>180</sup>. La jornada del 6 de junio fue un éxito, y se refrendó con un

---

<sup>176</sup> Diario *La Gaceta*, 23/03/1972, p. 7.

<sup>177</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 90, 14/03/1972.

<sup>178</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 91, 11/04/1972.

<sup>179</sup> Los puntos reflejados en este documento fueron: “Pago de la deuda por equiparación de 1960 a 1963 inclusive (600 millones; disminución del actual aporte jubilatorio del 14%; consideración de la situación de los docentes jubilados y pago de 800 millones que el gobierno les adeuda; medidas persecutorias contra el gremio por parte del gobierno de la provincia. Asimismo se presentó ante el Ministro del Interior una tarjeta con todos los problemas que afectan a la docencia de la provincia”. En: AA, Asambleas, Libro I, acta n° 92, 29/05/1972.

<sup>180</sup> *Ibidem*.

nuevo paro de 48 horas para los días 14 y 15 de junio<sup>181</sup>, que fueron evaluados por ATEP como un rotundo triunfo que alcanzó el 100% de ausentismo, por lo que se volvió a acordar un nuevo paro por 48 horas. Por otro lado, el domingo 18 de junio hubo elecciones a la nueva dirección, que contó con un porcentaje de votantes del 42%<sup>182</sup>. El consejo respondió a este estado de movilización instando a las directoras de los centros escolares la nómina de los docentes que hubieran efectuado paros. En relación a los actos del próximo 9 de julio, se pidió que los maestros y el pueblo se congregaran sin participar en actos oficiales, al tiempo que se declaró la “solidaridad con todos los trabajadores estatales de cualquier sector, identificados en la lucha”. El presidente añadía que “la docencia está permanentemente al lado de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones”, criticando la acción de los dirigentes de la CGT, al tiempo que se resolvió tanto al paro nacional docente convocado por el AND como al dispuesto por la CGT<sup>183</sup>.

El siguiente paro realizado fue durante los días 22, 23 y 24 del mes de agosto, por resolución del AND. Ante esta medida, Sixto M. Paz decía que el gremio del magisterio “es el único que actualmente se enfrenta con el régimen”, lo que además fue reforzado con una campaña de actos en las localidades de Monteros, Concepción, San Miguel, Tafí Viejo y Aguilares<sup>184</sup>. Una nueva medida interesante fue la llamada “quita de colaboración”, definida por Paz como “la negativa o abstención de lo que no es tarea específica y en el horario que debe cumplir el maestro”. Entre estos supuesto se incluía el no efectuar gastos que correspondieran al Estado, señalar las diferencias de cualquier orden en lo que se refiere a política educacional e instar a la solución y satisfacción de necesidades de la escuela<sup>185</sup>.

Ya en octubre, se consideró que las medidas económicas adoptadas por el gobierno de la nación era fruto de la intensa campaña de movilizaciones docentes

---

<sup>181</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 93, 12/06/1972.

<sup>182</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 94, 19/06/1972. Cipriano Rivero, presidente de la junta electoral, informó que sobre un total de 1500 votantes correspondieron a la única lista, “Azul y Blanca”, un total de 1487 votos, 23 en blanco y 1 nulo. En: AA, Asambleas, Libro I, acta n° 96, 05/07/1972.

<sup>183</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 95, 26/06/1972.

<sup>184</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 97, 18/08/1972.

<sup>185</sup> *Ibidem*.

coordinada por el AND, aunque se seguía considerando que se estaba lejos de llegar a contentar las demandas de los trabajadores<sup>186</sup>.

En cualquier caso, la atmósfera en la que se vivía durante aquellos días, especialmente en la capital provincial, distaba mucho de poder ser considerada tranquila. Los actos de protesta frente a las medidas tomadas por el gobierno, dirigidas en su mayoría a mermar los ya debilitados resortes de protección social, se producían con cada vez mayor frecuencia. Así fue que el 4 de octubre, a poco de anunciarse el cierre de un comedor escolar en la Facultad de Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, los estudiantes se organizaron en ollas populares, al tiempo que decidieron comenzar a cobrar un peaje a los automóviles que pasaban frente a las puertas del establecimiento, para costear aquello que el gobierno había suprimido<sup>187</sup>. En esta ocasión, como ya se había producido con anterioridad, los estudiantes encontraron apoyo en ATEP, en cuyo local se cedían las imprentas para reproducir los volantes informativos que se repartieron durante la movilización. Una vez más, estos encuentros daban muestra de la alianza forjada entre distintos sectores de la sociedad, contenedora de un fuerte carácter antidictatorial y popular.

---

<sup>186</sup> AA, Asambleas, libro I, acta n° 98, 25/10/1972.

<sup>187</sup> “Tucumán: un comedor menos”, *Nueva Plana*, 1, 24/10/1972, p. 11.

## VI. DE LA FRÁGIL ESPERANZA AL TRÁGICO FINAL, 1973-1976

*“Para el ministro de Educación los maestros somos perturbados, delirantes, drogadictos, psicópatas, irracionales...”<sup>1</sup>*

Las elecciones del 11 de marzo de 1973 supusieron un breve fogonazo de esperanza para los sectores de la sociedad tucumana, y argentina, que esperaban que el retorno de la democracia<sup>2</sup> sirviera para que las autoridades políticas prestaran atención e implementaran soluciones ante los problemas económicos, de defensa de la escuela pública y de valorización del ejercicio docente que les acuciaban desde tiempo atrás<sup>3</sup>. Por su parte, ATEP aprovechó el encuentro electoral para hacer público el estado de sus reivindicaciones, a modo de llamado de atención para con el gobierno entrante. Un día antes del plebiscito de marzo, Arancibia recordó que al magisterio aún se le adeudaba el

---

<sup>1</sup> “Los términos de un mensaje rechaza ATEP”, extracto del comunicado firmado por Francisco Isauro Arancibia y Joaquín Cazalbón. Diario *Noticias*, 24/06/1975.

<sup>2</sup> Aunque entendemos que el sistema institucional se restablece formalmente, consideramos que es interesante no perder de vista que ya estas fechas se está abriendo un proceso de erosión de las libertades que conducirá a la progresiva expropiación de derechos ciudadanos. Acordamos con M. Franco cuando señala que desde el inicio de la tercera presidencia de Perón (dejada al margen la “primavera” de Cámpora) el gobierno limitó progresivamente el marco legal del ejercicio de libertades, desarrollo que llega a su conclusión con la aprobación de la Ley de Seguridad de 1974. Franco, Marina, *Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y 'subversión', 1973-1976*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2012.

<sup>3</sup> Las decisiones políticas relativas al ámbito educativo era en esos días discutidas por la opinión pública. Éstas no eran sólo entendidas desde un punto de vista exclusivamente técnico, sino que tanto la polémica sobre la abortada reforma de la ley de educación, como otros proyectos que si se pusieron en marcha, convirtieron el problema educacional en una derivada más del modelo socio-político que se estaba poniendo en tela de juicio. Un buen ejemplo de ello es la crítica dirigida a la reforma de las escuelas normales emprendida por el antiguo subsecretario de Educación en tiempos de la “Revolución Argentina”, Emilio F. Mignone. De esta forma se entiende que mientras Mignone defendía su reforma como un ejercicio de “redemocratización” de la agencia estatal encargada de la formación de los docentes, la lectura crítica de los hechos apuntaba a criticar lo que se entendía no era más que la implantación de modelos desarrollistas foráneos aplicados al terreno educacional. Si la crítica de Mignone al antiguo modelo se fundamentaba en el excesivo número de graduados que aspiraban a incorporarse al mundo laboral cada año, desde la revista “Nueva Plana”, el docente Roberto Quiroga lanzaba la siguiente diatriba: “La Argentina del socialismo nacional no debe tener modelos desarrollistas que también nos importan los imperialismos mucho más sutilmente. Si tenemos un exceso de profesionales no se trata de perfeccionarlos. Alfabetizar y educar a un pueblo no es repetir las prácticas alienadas de la cultura de la clase media. Debemos depurar nuestros objetivos sociales y políticos de falsas interpretaciones respecto al valor de las instituciones escolares en una política educativa”. Véase: *Nueva Plana*, nº 14, 22/01/1973, p. 15.

pago de la retroactividad correspondiente al período 1960-1964. De igual modo, tampoco se había recibido el pago de las diferencias por nuevos índices correspondientes a noviembre y diciembre de 1971 y octubre, noviembre y diciembre de 1972. Otra de las cuestiones que se quería poner a consideración era el aporte jubilatorio, que se cifraba en un 14% del sueldo, considerado excesivamente elevado. Por último, la suspensión de las retenciones salariales destinadas a los fondos de la entidad gremial constituían otra de las graves preocupaciones de ATEP, entendiendo que ese tipo de medidas “no hacen más que demostrar el objetivo del gobierno: destruir a ATEP para impedir que esta agremiación siga realizando la intensa lucha gremial que la caracteriza en defensa de la escuela pública y la educación en general”<sup>4</sup>.

### **6.1. Acción gremial y politización**

La vuelta al curso escolar trajo consigo de nuevo las muestras de malestar del magisterio<sup>5</sup>. A pesar de tratarse los reclamos consignados al gobierno provincial, la delegada de la escuela del ingenio San Juan propuso en la primera asamblea celebrada la convocatoria de una huelga por tiempo indeterminado<sup>6</sup>. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, la intermediación de la presidencia hizo que la votación se decantara por la opción de un paro de 72 horas, considerándola Arancibia excesiva. Tanto es así que propuso que el paro no diera comienzo el lunes 26 de marzo, emplazándose finalmente a los días martes, miércoles y jueves, que fueron seguidos con una asamblea celebrada el día viernes 30 de marzo<sup>7</sup>. El ausentismo fue total en todas las escuelas, aunque se vivió un momento de anormalidad cuando un funcionario policial se

---

<sup>4</sup> Diario *Noticias*, 10/03/1973, p.10.

<sup>5</sup> Con motivo del tradicional mensaje al magisterio al inicio del curso escolar, Arancibia firmó una nota en la que se reafirmaban los valores gremiales, así como también se reflejaba una posición política coincidente con el peronismo de izquierdas: “No aceptamos escuelas atendidas a desgano tanto en la rama primaria como secundaria; y acusamos a los responsables de tales situaciones como destructoras de los valores fundamentales de la nacionalidad, de desquiciadores del proceso cultural que vivir la República y como enemigos del progreso de un futuro de grandeza nacional. Es por ello que ATEP exhorta al magisterio a acrecentar su férrea unidad gremial a objeto de ponerla al servicio de la defensa de la escuela pública y de los derechos de los maestros. Tenemos conciencia de que en nuestras manos están todas las soluciones, pues ellas vendrán en la medida en que nuestra acción sea eficaz y sostenida; y el magisterio de Tucumán ha dado ya suficientes pruebas de ser una voluntad inquebrantable en la lucha por los objetivos gremiales y educacionales que se ha trazado”. En: Diario *Noticias*, 19/03/1973, p. 2.

<sup>6</sup> Según el diario *Noticias*, cabe señalar que: “...eran numerosos los delegados escolares que habían llevado el mandato por tiempo indeterminado”. En: Diario *Noticias*, 25/03/1973, p. 6.

<sup>7</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 99, 23/03/1973.

presentó en la escuela Juan Martín de Pueyrredón requiriendo los datos personales de los docentes que no habían concurrido a clase, negándose la directora a proporcionar esta información. Esta intimidación fue la causante de que ATEP acusara públicamente al Consejo de Educación y al gobierno provincial de “provocar hechos de violencia”<sup>8</sup> mientras se cumplía la jornada de paro en un clima de absoluta tranquilidad<sup>9</sup>. En definitiva, el movimiento de fuerza tuvo como resultado el pago de 246 millones de pesos destinados al Instituto de Seguridad Social, en relación a cantidades adeudadas a los maestros<sup>10</sup>, por lo que se puede considerar que la solución alcanzada fue más positiva de lo acostumbrado<sup>11</sup>. No obstante, las resoluciones de la asamblea consiguiente oscilaron de nuevo entre la corriente que pedía declarar el paro por tiempo indeterminado y los partidarios de la actitud más moderada que proponía la dirección sindical. Estos últimos, en función de su mayoría, determinaron ceder las facultades a la CD para que declarase el paro en el momento en que se estimara conveniente, siempre bajo el signo de las decisiones que se tomaran en el AND, desde donde estaban

---

<sup>8</sup> Diario *Noticias*, 29/03/1974, p. 4.

<sup>9</sup> Ciertamente el gobierno se empleó a fondo para tratar de restar legitimidad a la medida de presión docente. Con esta intención, la secretaría de Educación y Cultura publicó un comunicado de “Exhortación a los maestros”, donde se exponían los argumentos económicos y de responsabilidad profesional que debían disuadir a los docentes de acatar la huelga convocada. El contenido íntegro del texto es el siguiente: “Edificios escolares: En el período 1971-1972 se concretaron 111 obras en locales escolares que fueron desde edificios nuevos a remodelados y ampliados. En lo que va de 1973, se licitaron y adjudicaron 20 nuevos establecimientos por un monto de 748 millones de pesos moneda nacional, destacándose de que dichas obras ya en ejecución. En el curso de este mismo tiempo se invirtieron 55 millones de pesos moneda nacional, encontrándose involucradas 44 escuelas en arreglo, trabajos éstos iniciados en el receso escolar. Por último, se encuentran terminadas las capetas técnicas para licitar durante este año seis nuevas escuelas por un monto de 300 millones de pesos viejos. Mobiliario escolar: la secretaría de Educación distribuyó mobiliarios a las distintas escuelas de la provincia por un monto total e 39 millones de pesos, entre 1972 y 1973. Cabe acotar que en lo que respecta al año en curso, se adjudicarán próximamente dichos elementos mediante licitación pública efectuada por el departamento de Materiales y Construcciones Escolares. Retroactividades por aumento de índices: En lo concerniente al incremento de índice al magisterio se inició el pago de las retroactividades correspondientes a 1971 y 1972 y es propósito del gobierno concluir con los saldos pendientes en abril próximo. [...] Por todo esto, exhortamos a los maestros a no interrumpir las tareas escolares, recordando que una forma de desprestigiar a la escuela oficial es quitarle continuidad al proceso enseñanza-aprendizaje”. En: Diario *Noticias*, 27/03/1973, p. 6.

<sup>10</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 100, 30/03/1973.

<sup>11</sup> De hecho, el propio Arancibia ya había advertido que no se conformarían con una solución que alcanzase a colmar las expectativas del gremio. El aviso se debió a que, unos días antes de iniciarse la protesta, el gobierno giró algunos fondos para el pago de deudas, estrategia ante la que Arancibia declaró en la asamblea: “Ello es una nueva demostración del desconocimiento del gobierno de lo que es el magisterio como fuerza moral, ya que su decisión no será amortiguada por maniobras dilatorias. El magisterio reclama soluciones de fondo sobre todo el monto y no acepta ni aceptará parcelamientos [sic.] de ninguna naturaleza”. En: Diario *Noticias*, 25/03/1973, p. 6.



obligados a considerar las situaciones específicas de los maestros en Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba<sup>12</sup>.

**Ilustración 6. Rueda de prensa de la comisión directiva de ATEP<sup>13</sup>**



**Ilustración 7. Asistentes a la rueda de prensa<sup>14</sup>**



---

<sup>12</sup> *Ibidem.*

<sup>13</sup> *Diario Noticias*, 25/03/1973.

<sup>14</sup> *Diario Noticias*, 25/03/1973.

En la primera semana de abril, la Sra. de Badín en representación de ATEP, participó como integrante del AND en una reunión mantenida con el ministro de educación de la Nación, aunque finalmente no se contó con la presencia de los titulares de las carteras de Interior, Hacienda y Bienestar Social, que fueron requeridos para tratar la cuestión de la unidad nacional docente, provocando esta ausencia que la reunión tuviera un carácter estrictamente informativo<sup>15</sup>. En el encuentro, además del AND, se dio cita la Central Única de Trabajadores de la Educación (CUTE), entidad que se sumó a participar en el AND. Las demandas de esta entidad se centraban en lograr un incremento salarial que empezara a contar a partir del mes de marzo, apareciendo como elemento inédito la voluntad expresada por incluir a los docentes universitarios bajo el paraguas del estatuto del docente. En relación a las condiciones para acceder a la jubilación se presentaba como principio de solución el cumplimiento de 25 años al frente de grado sin límite de edad, quedando fuera de negociación por el momento la actualización del 82% móvil para los jubilados.

Estos avances relativos esperaban su confirmación en la reunión representantes del día 10 de abril, fecha que el AND fijó como límite en los plazos de negociación con el gobierno. Ante este informe, Arancibia declaró que era motivo de alegría para el magisterio la unidad de voluntades que se encontraba al interior del AND, pero sin embargo añadía que “los representantes del interior deben estar permanentemente alerta pues nunca faltan los sectores de distintas ideologías que tratan de desvirtuar el verdadero sentido gremial de los procedimientos seguidos por la docencia en sus luchas”<sup>16</sup>.

En el curso de ese encuentro también se informó de la reunión mantenida con el gobernador provincial, el mismo 9 de abril. Las conclusiones de la reunión fueron, no obstante la demora en conceder la entrevista, al menos moderadamente positivas para el magisterio. En primer lugar, se consignó el depósito de 40 millones para el pago de deudas por diferentes conceptos (priorizando las vinculadas con los interinatos y las suplencias), comprometiéndose a seguir saldando la deuda a razón de 20 millones por semana. El gobernador prometió asimismo el pago de horas excedentes a los maestros

---

<sup>15</sup> Conviene señalar que la llegada del nuevo gobierno trajo consigo la derogación del proyecto de ley de reforma educativa.

<sup>16</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 101, 09/04/1973.

especiales. Más llamativa aún es la solución propuesta para acabar con la deuda de arrastre, que ante la imposibilidad de recibir los fondos necesitados de manos del gobierno de la Nación, serían conseguidos mediante el remate de tierras fiscales con la intermediación del Banco Municipal, poniendo como fecha para esta iniciativa finales del marzo. Tan poco era el crédito del que gozaban los mandatarios en la asamblea de ATEP, que el anuncio de la propuesta, transmitido por Sixto M. Paz, fue recibido con murmullos y risas, ante lo que el secretario gremial tuvo que recordar que en ese momento se estaba limitando a repetir las palabras pronunciadas por el gobernador. Finalmente, el gobernador se dijo incompetente para requerir la disminución del aporte jubilatoria trasladada por los representantes de ATEP, en virtud de que era tan sólo el gobierno de la Nación quien ostentaba tales facultades.

Esta reunión terminó con una intervención de Arancibia, en la que solicitó la renovación de las facultades conferidas por la asamblea a la CD para disponer medidas de fuerza de la mano de las dispuestas por el AND. El apoyo mostrado una semana atrás fue reiterado por unanimidad, del mismo modo que avisó que durante la semana entrante no se debería proceder a paros, moción que igualmente fue aprobada por los 81 delegados escolares presentes en esta convocatoria extraordinaria.

El nuevo gobierno asumió en mayo y ATEP aprovechó la ocasión para publicar una larga nota en prensa. Las implicaciones de orden político contenidas en el texto ponen de relieve el compromiso con los valores democráticos y el repudio a los gobiernos militares que tan insuficientemente habían atendido a los problemas de la docencia, extrayéndose por tanto, una cierta dosis de optimismo, no exenta de precauciones, frente al horizonte político que se atisbaba. Por consiguiente, en el comunicado se daba cuenta de lo que el sindicato tucumano entendía como valores inalterables de lo que debía ser la educación pública y el ejercicio de la docencia:

*“La docencia argentina ya ha dicho en forma clara que no admite ser objeto pasivo en todo el profundo proceso de cambio que debe realizarse en el país. Quiere y debe ser parte activa junto a todos los demás trabajadores y sectores del pueblo al que pertenece. Los maestros conocen más que nadie, todo el proceso de vaciamiento de nuestra educación pública efectuada por los gobiernos que fueron aplastados por la voluntad ciudadana el 11 de marzo. De ese vaciamiento, que formaba parte de toda una política de*

*entrega que hipotecó al país [...] La ineludable lucha de los docentes logró frenar algunas de las más reaccionarias medidas, como la llamada reforma educativa [...] Los maestros tenemos una larga tradición de lucha. Nuestras banderas nunca han sido solamente las reivindicaciones salariales; hemos considerado que nuestros problemas gremiales tienen relación directa con el estado de la educación popular y que en la medida que ésta sufra las transformaciones que reclama, el país cambiará [...] Tenemos conciencia que es ahora cuando se debe iniciar el proceso de transformación y liberación que se concreta en la realización de los grandes objetivos que reclama el país para salir del sometimiento en que lo colocaron una política antipopular y antiprogresista”<sup>17</sup>*

En el mes de julio, la publicación una diatriba dirigida al gobierno provincial se reeditó. En esta ocasión, los representantes del magisterio formulaban un llamamiento a toda la docencia “a estrechar aún más sus filas para realizar con la mayor eficacia su misión permanente dentro de su amplio campo de acción profesional”<sup>18</sup>. Según se transmitía en la publicación, la docencia argentina, y en particular tucumana, había demostrado no querer permanecer ajena a los procesos de transformación que estaba viviendo el país. Muy al contrario, ATEP consideraba que la docencia “quiere y debe ser parte activa junto a todos los demás trabajadores y sectores del pueblo a que pertenece”<sup>19</sup>. Haciendo gala de su experiencia cotidiana al frente de las aulas, desde ATEP se declaraba que “los maestros conocen más que nadie el proceso de vaciamiento de nuestra educación pública efectuada por los gobiernos que fueron aplastados por la voluntad ciudadana el 11 de marzo”<sup>20</sup>, para a continuación establecer una relación directa entre la disminución en inversiones escolares y la creciente tasa de deserción escolar que se registraba en la provincia, que según los datos provistos por la entidad, alcanzaba un 75% del total del alumnado, veinte puntos por encima de la media nacional.

En relación a la controvertida y combatida ley de reforma educativa, ATEP recordaba que “[los proyectos de reforma de la ley de educación] en Tucumán tuvieron sus más conspicuos defensores. No era para menos: los gobernantes dueños de negocios

---

<sup>17</sup> Diario *Noticias*, 26/05/1973, p. 2.

<sup>18</sup> Diario *La Gaceta*, 25/07/1973, p. 8.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

de la educación privada eran partidarios de una reforma aristocratizante [...] y contraria a los intereses del pueblo”<sup>21</sup>. Prosiguiendo descarnadamente con su compromiso, el manifiesto de ATEP añade elementos políticos a su discurso en el siguiente párrafo:

*“Los educadores deben estar alerta ante los que se vistan con la bandera de los triunfantes en cada asalto al poder o en cada acto eleccionario, esgrimiendo también banderas de pseudo nacionalismo y que jamás reclaman realmente soluciones a las necesidades del país, sino a las de sus propios intereses y sólo tienen el compromiso destinado a frenar e impedir todo cambio positivo y trascendente”*<sup>22</sup>

El comunicado, además, continuaba ratificando la confianza en las fuerzas de la docencia y en la capacidad de liberación demostrada por el pueblo, “así como la seguridad de que nuestros gobernantes han de satisfacer esas esperanzas de las múltiples argentinas”. La confianza depositada en los maestros estaba, a su vez, apoyada en la tradición de lucha demostrada por el colectivo, los que en palabras de ATEP no sólo se manifestaron por reivindicaciones salariales, sino que además “la defensa de la escuela pública responde a que sólo podrá afianzarse en la conciencia del pueblo cualquier proceso de liberación del hombre y del país en la medida en que damos al pueblo los instrumentos culturales que le permitan ser protagonista de vanguardia en dicho proceso”. Finalmente, el comunicado destacó que la ley de amnistía aprobada por el gobierno de Cámpora contemplaba en forma expresa “las sanciones que los regímenes anteriores aplicaron a maestros y estudiantes que lucharon en defensa de los derechos y de la integridad del patrimonio cultural y educacional”<sup>23</sup>.

Definitivamente, la reaparición de las autoridades democráticas en el escenario político facilitó un mejor entendimiento entre la entidad sindical docente y el gobierno, en este caso municipal. De esta forma, el intendente de San Miguel de Tucumán, consiguió garantizarse la colaboración de ATEP de cara a la puesta en funcionamiento del Plan de Integración Comunitaria, destinado a poner en marcha una serie de núcleos vecinales a través de los cuales articular la nueva administración municipal. El proyecto,

---

<sup>21</sup> Diario *La Gaceta*, 25/07/1973, p. 8.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> Tal y como aparece citado en el propio texto, el artículo 5° de la ley establecía lo siguiente: “Quedan extinguidas de pleno derecho todas las sanciones disciplinarias por motivos políticos, sociales, gremiales o estudiantiles a docentes y alumnos de todos los establecimientos de enseñanza del Estado nacional o que funcionen por su autorización y bajo su control”. En: Diario *La Gaceta*, 27/05/1973, p. 8.

que según las fuentes oficialistas estaba respaldado por una gran adhesión entre las organizaciones populares, contaba con los afiliados de ATEP para difundir las pautas de integración comunitaria, aprovechando así al cuerpo funcionarial más homogéneamente extendido por la provincia<sup>24</sup>.

La celebración de los comicios trajo consigo la vuelta al poder del peronismo, representado en la escala provincial por el gobernador Amado Juri<sup>25</sup>. Sin embargo, las esperanzas depositadas por los docentes se vieron defraudadas ante la reiteración de la inviabilidad económica para dar satisfacción a las demandas del magisterio. Unos meses después de la llegada Juri, y tras el fracaso de varios encuentros, ATEP arremetió contra la política del nuevo gobierno provincial. Mediante un comunicado, la comisión directiva expresó que esa entidad gremial constituyó en los últimos 16 años un “permanente, insobornable e ineludable [sic.] bastión de lucha en defensa de uno de los aspectos más fundamentales del pueblo, y en especial de la clase trabajadora, como es el derecho a la educación, arma imprescindible para alcanzar la liberación”<sup>26</sup>. El contenido del mensaje no disimulaba la autodefinición de los docentes como parte de la clase trabajadora, al tiempo de dejaba patente la decepción de ATEP por el comportamiento de esta administración, que esperaban no continuase por los mismos derroteros que las que le precedieron. El comunicado arremetía con contundencia:

*Todo lo pasado se comprendió que era propio de gobiernos no elegidos por el pueblo. Hoy con el contundente pronunciamiento del 11 de marzo, no podemos comprender ninguna medida de gobierno contra los intereses de la escuela pública, contra su docencia, contra su pueblo*<sup>27</sup>

Más adelante la crítica señalaba al mal estado de determinados edificios escolares, problema al que ATEP venía prestando atención desde años atrás y que, en palabras de los firmantes, dada la situación escolar de los mismos quedaba demostrado lo pertinente de estas advertencias. Según los dirigente, sólo por este motivo era posible encontrar en el centro de la capital provincial edificios escolares clausurados y algunos otros

---

<sup>24</sup> Diario *La Gaceta*, 10/06/1973, p. 6.

<sup>25</sup> No obstante, la conflictividad social quedaba lejos de aplacarse. Como muestra de esta afirmación se puede presentar la toma de una fábrica de calzados, cuyos trabajadores se propusieron constituirse en cooperativa para evitar los despidos previstos, y la ocupación de los ingenios Concepción y Los Ralos. Véase: Diario *La Gaceta*, 17/06/1973, p. 8.

<sup>26</sup> Diario *Noticias*, 04/07/1973, p.4.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

funcionando en “condiciones deplorables”. La propuesta de ATEP consistió en pedir la participación del gremio en el departamento de Materiales y Construcciones, encargado de la reparación y construcción de nuevos locales escolares.

Estableciendo una relación de causa efecto que no por evidente puede ser considerada del todo desacertada, el comunicado llamaba la atención sobre unas escandalosas cifras de deserción escolar, que la entidad cifraba en algo más del 73%, así como un analfabetismo que rondaba el 16%, situaciones ambas que a juicio de los educadores debían ser eliminadas “como consecuencia de una política positiva en el orden educacional y social”, donde habrían de integrarse también la atención a las necesidades nutricionales de los alumnos, que en buena medida sólo podían ser satisfecha de forma precaria, y finalmente la provisión útiles escolares, que garantizaran el buen aprovechamiento por los alumnos de los recursos dispuestos. El colofón del comunicado, fuera de la línea discursiva que hasta este momento había mantenido el sindicato, reiteraba al gobierno provincial la decisión de trabajar con “auténtica vocación argentina para el logro de los reclamos populares”<sup>28</sup>.

Lo más interesante es que, en el mismo día en que aparecía publicado este texto, los dirigentes de ATEP mantuvieron una reunión con el gobernador provincial, a quien se le entregó un memorándum con los problemas que acabamos de plantear. En cualquier caso, parece conveniente aprovechar esta ocasión para analizar cuál era el análisis que el diario *Noticias* hacía de la experiencia sindical docente durante los últimos años. Inaugurando la reflexión con una idea que ya hemos escuchado, la de que resulta inconcebible que la acción de un gobierno resultante de las urnas pueda encaminarse a minar la maltrecha salud de la educación pública argentina, el editorial el vespertino local manifestaba que: “...después del 11 de marzo último resulta imposible comprender nada que conspire contra la escuela pública, contra la docencia o contra el pueblo”<sup>29</sup>. Sin embargo, lo más novedoso aparece en el momento en que se echa la vista atrás y se hace balance de la dialéctica mantenida con los gobiernos que se han ido sucediendo en el tiempo:

---

<sup>28</sup> Diario *Noticias*, 04/07/1973, p. 4.

<sup>29</sup> Diario *Noticias*, 05/07/1973, p.3.

*“...en los siete años precedentes, en que los sucesivos jefes de Estado, ministros, secretarios y hasta burócratas de escasa relevancia anunciaron no sólo los planes ostentosos que ni siquiera tuvieron principios de ejecución, sino también la voluntad de entablar diálogos amplios y fecundos con los maestros que, en la práctica, se redujeron a ignorarlos y desconocer en absoluto su manera de pensar y de sentir. A partir de 1966, la política seguida por los gobernantes consistió en proyectar y decidir en el campo de la educación al margen de todo sano criterio y cuando resolvieron nombrar comisiones especiales, lo que efectivamente se hizo en varias oportunidades, fue para desechar al final de sus conclusiones y obrar con el máximo desatino o teniendo en cuenta determinadas filosofías que estuvieron en boga en Europa entre las dos grandes guerras del presente siglo. Así se llegó a 1969, fecha en que un anteproyecto de ley orgánica nacional mereció el inmediato repudio de entendidos y profanos desde el momento que sus objetivos se encontraban en pugna con la vocación democrática de la ciudadanía y su sentido de la libertad. Unas veces por motivos ideológicos y otras por evidente ineptitud, las distintas iniciativas de los poderes públicos vinculadas con la enseñanza tuvieron que ser retiradas antes de su sanción para no agudizar un estado de ánimo colectivo cuya tensión iba en aumento. Pese a ello, no faltaron las disposiciones y programas lindantes con lo absurdo y disparatado que se aplicaron en opuestas latitudes el país”<sup>30</sup>*

Aunque no se trataba de la primera ocasión en que la prensa local se hacía eco de la situación de los trabajadores de la educación compartiendo parte de sus posturas, nos encontramos ante la primera manifestación de apoyo manifiesto a la causa de los docentes emitida por un medio de comunicación. La frontalidad de los argumentos esgrimidos se explica, en todo caso, por el restablecimiento de las libertades democráticas, que también promovieron el franco ejercicio de la libertad de prensa, que hasta ese entonces se encontraba, en mayor o menor medida, secuestrado por los gobiernos militares. El sindicato, por su parte, entendía que sus luchas particulares formaban parte de las etapas que era necesario pasar en toda lucha social que aspiraba a la consecución de cambios de mayor profundidad que las protestas puntuales sobre, por ejemplo, las condiciones económicas de los trabajadores. Tanto era así que, en relación

---

<sup>30</sup> *Ibidem.*



a la suspensión de descuentos de cuotas para mantener los servicios de salud que la entidad brindaba, el gremio declaraba: “no pretendemos medidas de enjuiciamiento por tales hechos –que consideramos momentos insoslayables en la permanente lucha en que todos estamos empeñados para hacer un país evolucionado y transformado- sino simplemente el reconocimiento de un derecho”<sup>31</sup>.

Apenas unos días después, y con motivo de la celebración del día de la Independencia, ATEP publicó un nuevo comunicado en prensa, donde manifestaba cuáles eran sus ideas en torno al proceso social que el país debía seguir en esta recién inaugurada etapa. Las palabras que siguen no dejan lugar a dudas sobre el compromiso de ATEP para con las ideas contenidas en los valores democráticos, al tiempo que reivindicaba una acción política dirigida a la consecución de mejoras económicas para el conjunto de la clase trabajadora del país y que fue expresada de la siguiente forma:

*“En el nuevo aniversario de la Independencia Nacional, la docencia de Tucumán, representada por ATEP, afirma su decisión inquebrantable de contribuir con todos sus esfuerzos, entusiasmo y capacidad de lucha en la realización de un esfuerzo que integre la independencia política declarada en 1816, con el logro de un proceso de liberación económica y social. Esto significará emancipar al país de toda independencia exterior, así como dará las bases para una distribución equitativa de los bienes y riqueza nacional entre el pueblo, que es el gran constructor de una Argentina capaz de darse en plenitud”<sup>32</sup>*

La confrontación con el gobierno provincial continuó haciéndose patente en cuatro frentes. En primer lugar, se planteó al gobernador Juri la necesidad de construir nuevos establecimientos escolares, apoyándose en que “el pueblo tiene una información veraz sobre el estado calamitoso de los edificios en que funcionan las escuelas”<sup>33</sup>. La dejación manifestada por las administraciones anteriores era resumida por la entidad docente como un ejercicio de corrupción, en tanto en cuento los gobernantes “dueños de colegios privados, favorecieron a esos establecimientos con toda clase de medidas que destruían a la escuela pública”<sup>34</sup>. Por otro lado, también se solicitaba para los maestros

---

<sup>31</sup> Diario Noticias, 30/07/1973, p. 4.

<sup>32</sup> Diario Noticias, 09/07/1973, p. 12.

<sup>33</sup> Diario Noticias, 10/07/1973, p. 6.

<sup>34</sup> Ibidem.

provinciales la aplicación de la misma medida que el gobierno de la Nación había dispuesto hacia los docentes nacionales, mediante un aumento cifrado en 23,50 pesos por punto de actualización, que habrían de contarse a partir del pasado día primero de mayo<sup>35</sup>. A este respecto, la respuesta del gobierno provincial consistió en expresar el compromiso del ejecutivo para evitar la acumulación de nuevas feudas y que, por tanto, se procedería al pago inmediato, dado que los recaudos presupuestarios ya habían sido previstos<sup>36</sup>. La tercera petición de ATEP requería la aplicación inmediata de la ley 20.058, cuyo efecto habría de ser la no incidencia de los días de huelga en el concepto profesional de los docentes. Asimismo, la entidad consideraba que la aplicación de esta ley no necesitaba de más argumentación que señalar que esas medidas “fueron dictadas por los gobiernos contrarios a la educación pública y contrarios a la organización gremial representativa de los docentes”<sup>37</sup>. Por último, la aplicación de la Ley de Amnistía en relación a la restitución de los maestros reprendidos o cesanteados desde 1955 fue otra de las exigencias planteadas Juri, con la singularidad de que en su fundamentación se esgrimía que la vigencia de esa ley en el ámbito provincial era “de fundamental importancia para asegurar la paz y la convivencia armónica, meta que

---

<sup>35</sup> De este mes data un interesante comunicado en el que Arancibia y Paverini de Badín expresan su queja frente al alza de los precios, tendencia que vinculan con que los mecanismos implementados por los sectores más privilegiados de la sociedad se estarían poniendo en práctica para frenar el mejoramiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora, que se suponía sería uno de los ejes de la política socio-económica del nuevo gobierno nacional. El texto íntegro es el siguiente: “La ATEP ante el impresionante aumento del costo de la vida que se viene registrando, sobre todo a partir del 11 de marzo pasado, expresa su enérgico repudio a las maniobras especulativas en tal sentido, así como por la total falta de acción de parte del régimen imperante para impedir tales atentados contra la economía del pueblo argentino. Evidentemente, la escalada alcista sin precedentes que estamos viviendo tiene una relación directa con el cambio de gobierno, ya que los sectores de privilegio social sospechan que el futuro gobierno pondrá en práctica algunas medidas tendientes a establecer una relación lógica entre sueldos-salarios y precios y esas medidas serán inevitables si es que realmente el país entra por el proceso de transformaciones que es menester para realizar su definitiva etapa de liberación nacional. Y ATEP no duda que ese proceso se dará, por cuanto la decisión del pueblo argentino ha sido clara y categórica. Es de preguntarse, por otra parte, en qué medida las fuerzas que públicamente han manifestado su apoyo al pacto social, están dispuestas a ofrecer su cuota de colaboración, que en estos momentos se está saboteando en un grado inconcebible a través de las maniobras alcistas, que realmente introducen factores de subversión en la economía nacional, ya que tales fuerzas no podrán su participación en este proceso inflacionario en que el pueblo es la única víctima. Y a ello se agrega, también la política económica disociadora del actual régimen, que a pocos días de la entrega del poder procede a aumentar impuestos en límites máximos, lo cual va también a repercutir en grado sumo para acentuar las maniobras de la especulación. ATEP, al protestar enérgicamente contra tales maniobras-una de cuyas víctimas es el magisterio, ya que el alza del costo de vida suma mayores angustias a los sueldos bajísimos que percibimos y que no tienen relación con lo que nos otorga la ley-, hace un llamado al pueblo, a sus entidades populares, a sus organizaciones sindicales, a fin de que cohesionen más sus filas para la gran lucha en procura de lograr un real estado de justicia social”. En: *Diario Noticias*, 25/05/1973, p. 6.

<sup>36</sup> *Diario La Gaceta*, 15/07/1973, p. 10.

<sup>37</sup> *Diario Noticias*, 13/07/1973, p. 7.

aspira a lograr el gobierno popular elegido el 11 de marzo y que, en forma terminante, ha resumido sancionar al ley de referencia”<sup>38</sup>. En resumen, la petición de ATEP se encaminaba a lograr, en virtud de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 4º de la ley de Amnistía, el cobro de los haberes impagados durante el período de exclusión de la carrera docente, así como el reconocimiento de este tiempo como servicios prestados a efectos de generar los derechos jubilatorios correspondientes.

Finalmente, la intensidad de las negociaciones dio un fruto que por infrecuente fue considerado como un auténtico logro por parte de la dirigencia sindical. Según el decreto n° 2.921 del gobierno de Tucumán, se reconocía a los docentes dependientes del Consejo de Educación de la provincia un índice de 1=2.350, a partir del 1 de mayo de ese mismo año. La decisión supuso la equiparación con la medida dispuesta por el gobierno de la Nación, y aunque en una declaración firmada por Arancibia y Paverini de Badin se reconocía que esto quedaba lejos de significar que la docencia gozara de todos sus derechos, se manifestaba la confianza en que las futuras políticas salariales del gobierno determinarían “una mejor valorización de la alta función que para la docencia cumple el país”<sup>39</sup>.

## **6.2. Las protestas contra la ley de Educación**

Como se puede inferir de los registros documentales empleados en esta investigación, el nuevo régimen político propició que la vida sindical fuera ciertamente activa durante esos meses. Se sucedían entonces las publicaciones en prensa, la participación de los militantes docentes en diversos campos de la vida pública tucumana y la celebración de reuniones y asambleas de las entidades participantes de la Federación Docente de Tucumán. En este sentido, como paso previo a la incorporación a la CTERA, que se produjo en el congreso de Huerta Grande (Córdoba), celebrado entre los días 30 de julio y 4 de agosto de 1973, se tuvo que consultar la voluntad de la asamblea. Como resultaba ya evidente a esas alturas, de la consulta no se obtuvo sino el apoyo unánime a la nueva entidad. Además, las reflexiones que siguieron al nacimiento de esta deseada confederación dejaron elementos de interés. En este sentido, tras haber

---

<sup>38</sup> *Diario Noticias*, 27/07/1973, p. 5.

<sup>39</sup> *Diario Noticias*, 18/07/1973, p. 3.

procedido al aumento de la cuota de afiliación (que ascendía a 400 pesos mensuales), el presidente de ATEP recordaba que esta cantidad era sensiblemente menor que en otras entidades de la misma naturaleza, “estando por encima de ella la de todos los gremios obreros”<sup>40</sup>. De este modo, y gracias a una referencia colateral, encontramos uno de los no muy numerosos ejemplos de declaraciones públicas de ATEP en los que se emplea la categoría de “obreros” como elemento para construir la autodenominación del colectivo de trabajadores de la enseñanza.

En aquellos momentos, la confrontación sindical se jugaba más en el tablero nacional que en el provincial, donde las promesas de buena voluntad del gobernador Juri, hasta el momento, se habían venido sosteniendo de forma relativa. En el orden nacional, las relaciones entre las distintas entidades sindicales docentes y el gobierno comenzaba a tensarse, significando un proceso que continuó agudizándose hasta el golpe militar de 1976. La cuestión que más soliviantaba a los sindicatos docentes era el restablecimiento del artículo 52 de la ley 14.473, que otorgaba el derecho de jubilación a los docentes que contarán con 25 años de servicio sin límite de edad. La derogación de este artículo se debió al gobierno de Onganía, desde donde se fundamentó la decisión en base a la viabilidad económica. Por su parte, los gremios docentes habían convertido este derecho en una de sus reivindicaciones de más larga data, y aseguraban que la anulación de esta disposición no se comprendía en el orden de la financiación, sino como una cuestión política, dado que este sistema funcionó sin problemas hasta la fecha de su suspensión.

Las medidas de fuerza que el magisterio nacional estaba llevando a cabo antes de la asunción de Cámpora fueron interrumpidas como muestra de acercamiento hacia un gobierno que tanto la mayoría de militantes como de dirigentes consideraban próximo a sus intereses. La expectativa pareció justificada en primera instancia puesto que el ministro de Educación de la Nación, Dr. Cantini, anunció que este anhelo sería sometido a votación en la legislatura nacional. Sin embargo, este anuncio fue seguido por la desautorización de los ministros de Economía y Bienestar Social, José Gebard y José López Rega, que junto con el propio presidente Cámpora firmaron un mensaje en el que se anticipaba la aplicación del veto presidencial en caso de ser aprobado el

---

<sup>40</sup> Diario *Noticias*, 17/09/1973, p. 6.

restablecimiento del artículo 52. La respuesta del AND a este primer desencuentro con el ejecutivo nacional no se hizo esperar, y se llamó a pasar al “estado de alerta y movilización” de todos los maestros encuadrados en CAMUYP, CGERA, CCID, UNE y la Unión Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires<sup>41</sup>.

El comunicado daba cuenta de la creciente politización que emergía de las posiciones ocupadas por el sindicalismo docente, al tiempo que se cuidaba de guardar la cautela necesaria en tanto que elemento independiente de los partidos políticos que, por proximidad ideológica, pudieran considerar que sus acciones no serían recibidas con desaprobación desde el colectivo de trabajadores de la educación. La posición del AND quedó expresada en los siguientes términos:

*“...la restitución del Art. 52 corría peligro de interferencias por parte de los conocidos factores interesados en entorpecer el desarrollo de nuestra educación pública mediante la tradicional técnica de desalentar a la docencia cercenando y burlando legítimos derechos laborales. Pero dichos factores enemigos de la educación popular se equivocan de plano si creen que a esta altura de los tiempos la conciencia gremialista de los educadores tolerará silenciosa y pasivamente nuevas negociaciones-provengan de donde provinieran-de sus derechos profesionales y de una educación al auténtico servicio del pueblo.”*<sup>42</sup>

Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por la intensidad que generaba la cercanía del congreso de Huerta Grande<sup>43</sup>. Como se ha demostrado, la presencia de

---

<sup>41</sup> La relevancia del sindicalismo docente tucumano quedaba de nuevo puesta de manifiesto dado que el firmante de la declaración en representación de la CGERA no era otro que Sixto M. Paz. Véase: Diario *Noticias*, 22/07/1973, p.6.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> En este momento resulta conveniente recordar cuáles eran las peticiones urgentes que desde la naciente CTERA se aspiraba a poner solución, habida cuenta de que estas reclamaciones son las mismas (descontando las estrictamente provinciales) que enarbolará ATEP en los siguientes años. En este sentido, la resolución publicada por al término del congreso hizo referencia a los siguientes problemas: “ 1) Cesantías: se exige la reincorporación a sus cargos de todos aquellos docentes arbitrariamente cesanteados y que aún permanecen en tal situación no obstante la vigencia de la Ley de Amnistía; 2) Régimen previsional: se reclama la restitución del régimen previsional docente establecido por el artículo 52 de la Ley 14.473, derogado por el gobierno militar. Se señala que el sistema previsional establecido por dicho artículo es una legítima conquista gremial, que no constituye ningún privilegio y que responde a la necesidad pedagógica de la permanente renovación de los cuadros profesionales docentes; 3) Régimen salarial: se declara que todo incremento en las remuneraciones docentes debe hacerse respetando el sistema de índice y puntajes establecido por el artículo 38 y conexos del Estatuto del Docente. Se recuerda que en una oportunidad el gobierno militar pretendió desconocer dicha legislación y que, al igual que entonces, la docencia no admitirá nuevas violaciones a su estatuto profesional; 4) Docencia universitaria: se reclama que la docencia universitaria vuelva a incluirse en el Estatuto del docente en

ATEP no sólo fue constante y determinante, sino que además la CTERA tomaba la experiencia sindical de los tucumanos como un elemento demostrador de la vocación combativa de la nueva entidad. Es decir, no se trataba de una entidad de primer nivel que pretendía sumarse a una gran estructura para así consolidar su arraigo en las bases sindicales, sino que al contrario, la CTERA estaba destinada a ser una entidad cimentada sobre las sólidas bases que proporcionaban las experiencias gremiales que sus constituyentes habían desarrollado previamente y, hasta ese momento, en solitario<sup>44</sup>.

Como resulta lógico imaginar, las jornadas del congreso de Huerta Grande habían llamado la atención de todo el país. Las reuniones preparatorias<sup>45</sup>, de las que

---

todo lo relacionado con las remuneraciones y su incrementación. Asimismo se propugna la inclusión de la docencia universitaria en el Estatuto en todos los demás aspectos de la carrera profesional; 5) Docencia de establecimientos privados: se reitera que la docencia que se desempeña en relación de dependencia en establecimientos privados sea incluida en el mismo estatuto de la docencia estatal con iguales derechos y garantías de orden profesional y laboral. Hasta tanto se concrete dicha aspiración, se peticiona que, mediante legislación especial, se garantice jurídicamente el derecho a la estabilidad para todos los docentes de la enseñanza privada. En: Diario *Noticias*, 06/08/1973, p. 4.

<sup>44</sup> A continuación reproducimos la declaración de principios que ATEP, APEM, el Centro Docente Sarmiento, el Centro de Maestros Suplentes de Monteros y la Federación Tucumana de Maestros Lafñez dieron a conocer tras el Congreso de la Unidad Docente de Huerta Grande: “El profundo proceso de transformaciones políticas, económicas y culturales que nuestra Patria necesita para eliminar la dependencia y concretar una sociedad justa y el pleno ejercicio de la democracia requiere que la educación propenda al desarrollo de la conciencia y actitudes científicas y críticas de los educandos frente a la realidad de la sociedad, a fin de que impulsen ese proceso, realizándose así social y personalmente. El docente, trabajador de la educación, está trascendiendo la condición del transmisor de conocimientos para actuar permanentemente como un factor importante del avance social que posibilitará la auténtica liberación del hombre, la patria y los pueblos. Organizados los trabajadores de la educación, de acuerdo con los principios de la democracia sindical, bregarán por la defensa y materialización de los intereses gremiales y particulares de su sector, de los demás trabajadores y por el progreso del país. Por lo expuesto precedentemente, al normar la vida de su institución, los docentes sostienen los siguientes principios fundamentales en su accionar: 1) La educación es un derecho de todo el pueblo y, por lo tanto, constituye un deber y una función imprescriptible, indeleble e inalienable del Estado, que responderá a las necesidades individuales y sociales del hombre argentino; 2) La educación debe ser común, única, gratuita, obligatoria, no dogmática, científica, coeducativa y asistencial y contar con los recursos necesarios suficientes y permanentes para lograr en los distintos niveles un real igualdad de oportunidades para todos, la que sólo puede tener plena vigencia eliminándose las trabas sociales, económicas y culturales que la impiden; 3) La formación del docente y el otorgamiento de sus títulos para todos los niveles y modalidades es función exclusiva e inalienable del Estado; 4) El docente debe participar efectivamente en el gobierno, planeamiento y política de la educación a través de su organización gremial; 5) Es obligación de la organización gremial docente defender los derechos profesionales, salariales, previsionales, asistenciales y culturales de toda la docencia en actividad o aspirantes a cargos sin distinción de ramas ni niveles ni jurisdicciones. Esta misma defensa con respecto a los docentes que se desempeñan en el sector privado, de ninguna manera significa convalidar la privatización del sistema educativo”. En: Diario *Noticias*, 08/08/1973, p. 4.

<sup>45</sup> Estas jornadas recibieron el nombre de Congreso Constitutivo del ente Confederal de la Docencia Argentina, y se celebraron entre el 7 y el 9 de septiembre. Según las estimaciones, las entidades sindicales allí reunidas portaban la representación de 233.770 trabajadores de la educación. En el transcurso de esas jornadas no se planteó la incorporación a la CGT, que estaba planteado como horizonte desde los tiempos de la CGERA, pero que constituía un problema para la central obrera, ya que la cuantiosa militancia docente obligaría a bascular los equilibrios de poder al interior de ésta. Respecto a la línea ideológica de

participaron más de cien entidades, fueron dirigidas por una comisión provisoria integrada por Óscar Rodríguez Keller (Córdoba), como presidente, y Carlos A. Rocchi (Capital Federal); Carlos de la Torre (Santa FE); Sixto M. Paz (Tucumán) y Juan Carlos Comínguez, como vicepresidentes<sup>46</sup>. Mientras la comisión de prensa de la naciente CTERA declaraba que “la firme voluntad de la docencia es la constitución de su organización confederal”, representantes de FAGE llamaban a “tratar de superar las diferencias accidentales que existen en la declaración de Huerta Grande, y lograr la suspensión de aquellos que impiden, por su oposición a los principios de libertad de enseñanza, la adhesión de la totalidad de los docentes del país”<sup>47</sup>.

Una vez celebrado el congreso constitutivo de CTERA, el 11 de septiembre de 1973, la dirección confederal acordó la celebración de la llamada “semana nacional de protesta y reafirmación de los derechos de los trabajadores de la educación”<sup>48</sup>, que se celebró entre el 17 y el 21 del mes de septiembre. Luego de la elección de la primera directiva<sup>49</sup>, la CTERA expresó cuáles eran sus objetivos fundamentales:

*“...la profundización del programa elaborado en la reunión realizada hace poco en Huerta Grande, Córdoba; la elaboración de un plan tentativo de lucha por cada entidad y realización regional y provincial, de acuerdo con las necesidades locales; denuncia de la situación que atraviesa la docencia para lograr la restitución del artículo 52 del Estatuto del Docente; reincorporación por causas políticas y gremiales de educadores; vigencia del artículo 38 del Estatuto del Docente, respecto a salarios; reincorporación del docente universitario al Estatuto del Docente”*<sup>50</sup>

---

la entidad, resulta interesante rescatar el punto de vista emitido por la publicación orgánica del Partido Comunista: “...hay coincidencia en señalar que expresará la continuidad de un accionar movilizador y combativo, con activa participación de las bases, característico en el período de la lucha contra la política salarial y educacional de la dictadura”. Véase: *Nuestra Palabra*, 2ª época, nº 12, 12/09/1973, p. 5.

<sup>46</sup> Diario *La Prensa*, 10/09/1973, p. 6.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> Merece la pena señalar que llegado el día de inicio del plan de acción docente, la CTERA resolvió convocar a toda la docencia argentina para que en las jornadas de lucha “incluyan el análisis de la asonada militar contra el gobierno democrático de Chile”. Véase: Diario *La Prensa*, 17/09/1973, p. 7.

<sup>49</sup> De cara a la elección de la comisión directiva se realizó una elección a la que se presentaron tres listas. La denominada “Celeste”, encabezada por Carlos A. Rocchi, recibió 349 y se proclamó vencedora de los comicios. El resto de listas fueron la “Blanca”, que obtuvo 120 votos con Carlos de la Torre como candidato, y la “Celeste y Blanca” de Víctor Niezwiechi, que alcanzó los 37 apoyos. En: Diario *La Prensa*, 14/09/1973, p. 7.

<sup>50</sup> Diario *La Prensa*, 14/09/1973, p. 7.

Tras la fundación de la CTERA, Sixto M. Paz remitió un comunicado a la prensa en el que se recogían las principales cuestiones a las que la flamante entidad aspiraba a dar solución a la mayor brevedad posible. En este sentido, el primer elemento a resolver habría de ser la reincorporación a su ejercicio laboral de los maestros cesanteados por motivos políticos y gremiales. Seguidamente se hacía referencia a la restitución del régimen jubilatorio establecido por el artículo 52 de la ley 14.473, conquista por la que ATEP hacía tiempo que reclamaba en vano al gobierno provincial, la violación del artículo 38 del estatuto del docente, que fija el régimen salarial en base a índices y el estancamiento de la cantidad asignada en el presupuesto nacional para la educación pública<sup>51</sup>. En razón de los motivos que se acaban de exponer, CTERA consignó una campaña de movilizaciones en todo el país que comprendió diferentes actos públicos, tales como concentraciones y asambleas, que convergieron en la concentración del 19 de octubre celebrada frente al Congreso de la Nación “para reiterar a los poderes públicos el pedido de soluciones efectivas”. El comunicado dejaba ver que, de no alcanzarse los objetivos planteados, la CTERA se encontraba con la fortaleza necesaria como para emprender medidas de acción directa, que habrían de tomarse a partir de la reunión del Consejo Confederal de la organización, previsto para el 20 de octubre<sup>52</sup>.

La relevancia de ATEP en el abanico de organizaciones gremiales docentes en Argentina quedó nuevamente de manifiesto de la mano de la celebración del Congreso de Educación que siguió a la fundación de la confederación de educadores. De entre los 900 delegados representantes de entidades docentes, cooperadores, culturales, universitarias y populares, la mesa de organización contó con la presidencia de Augusto A. Guibour, siendo ocupadas las secretarías por Mario López Dabat (de Rosario) y Sixto M. Paz<sup>53</sup>.

La primera asamblea celebrada tras la configuración de la CTERA recogió el voto de aplauso promovido por la delegada de la escuela Lola Mora, destinado a “poner de

---

<sup>51</sup> Diario *La Gaceta*, 30/09/1973, p. 10.

<sup>52</sup> De hecho, un día antes se hizo una primera demostración de fuerza cuando una delegación integrada por Eduardo Requena, Alfredo Bravo, Susana Pertierra y Carlos Roque entre otros, entregó un petitorio a la Cámara de Diputados en el que se ponía de manifiesto la inquietud de la docencia respecto al restablecimiento del artículo 52, así como de la reincorporación de los maestros cesanteados por causas políticas. Asimismo, durante el transcurso de esta jornada, los alrededor de 200 maestros que concurrieron frente al Congreso de la Nación efectuaron un corte de tráfico en la calle Rivadavia. Véase: Diario *La Prensa*, 20/10/1973, p. 4.

<sup>53</sup> Diario *Noticias*, 04/10/1973, p. 4.



manifiesto la importancia que reviste la constitución del nuevo ente”. Sin embargo, se vivieron algunos momentos de tensión y expresiones de desacuerdo con la conducción sindical. Mientras por un lado la delegada de la escuela Manuela Gornitti destacaba la falta de participación directa de los maestros en la vida sindical, el presidente respondía que no se había hecho más que llamar a la participación de los docentes en todo tipo de actividades. Esta delegada escolar criticaba la escasa información disponible ante la publicación del boletín gremial “ATEP en marcha”, mientras que Arancibia, por su parte, recordó que aún se encontraba abierto el plazo para enviar colaboraciones que aparecieran en la publicación.

Otro aspecto aún más significativo fue el expresado por la delegada de la escuela Manuel Lozondo, quien quiso que se aclarara el origen de los volantes de partidos políticos que se estaban distribuyendo desde la pequeña imprenta localizada en la sede de ATEP, del mismo modo que quería dejar patente su crítica hacia las personas responsables de ello. Esta tendencia estuvo respaldada por la delegada de la escuela Hogar y Patria, quien llegó incluso a proponer que se identificara públicamente a los afiliados de ATEP que a su vez militaran en partidos políticos. Estas peticiones no fueron admitidas por la mayoría de la asamblea, por lo que no se tuvieron en cuenta, y además contaron con la reprobación expresa y enérgica de Arancibia<sup>54</sup>.

Volviendo al plano de la práctica gremial, la dirigencia de ATEP demostró no disminuir la intensidad de sus requerimientos ante el nuevo gobierno provincial. A pesar de las declaraciones de buena voluntad que desde los últimos meses venían recibiendo los dirigentes del sindicato, buena parte de las cuestiones económicas estaban pendientes de una respuesta definitiva. De ahí en más, cabría señalar que otros nuevos problemas se iban añadiendo a la no magra lista de reclamaciones de la entidad. La finalidad de la entrevista mantenida con el ministro de economía de la provincia, Jorge Martínez, fue precisamente la de encarar el pago de las deudas que el colectivo docente venía soportando. A las ya conocidas, se la había añadido más recientemente el pago de la diferencia entre los índices 1440 y 1620 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1972. Además, se volvió a poner sobre la mesa la negociación acerca de las planillas pendientes de pago correspondientes al período

---

<sup>54</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 103, 31/10/1973.

1966-1973, así como el pago, con los sueldos de ese mes de noviembre, de todas las diferencias en concepto de bonificaciones sobre el último incremento salarial de 200 pesos nuevos, en base a lo establecido por el decreto 5033. En función de lo reflejado en un informe redactado por ATEP, “el ministro acogió con interés las peticiones y prometió que mañana responderá sobre los puntos planteados”<sup>55</sup>. Contra lo que se pudiera haber pensado en un primer momento, de las tratativas con el ministro sí que se consiguió el pago de los sueldos de noviembre con las bonificaciones previstas según el decreto 5.033/73, así como la planilla adicional correspondiente a septiembre de 1972, comprendiendo diferencias por interinatos y reemplazos<sup>56</sup>.

Hacia el final de año encontramos otra muestra de la nueva metodología de negociación que ATEP inaugura con el gobierno democrático. Como ya se ha apuntado con anterioridad, la legitimidad que ostenta el gobierno hace que el sindicato dirija sus cuestionamientos a las decisiones tomadas en tanto que violación de la voluntad popular que dio su sustento al nuevo ejecutivo. Es por esto que en relación al proyecto de creación de un nuevo organismo del gobierno escolar, la Dirección de Enseñanza Media, que era planteada como un organismo unipersonal sin participación gremial, el argumento esgrimido fuera el siguiente:

*“...no puede ni debe darse la paradoja de que el gobierno elegido por el pueblo que votó casi unánimemente por la abolición de todos los males generados por la dictadura, se deje sorprender en su buena fe por los mismos interés antipopulares a los cuales, especialmente en el campo de lo educativo, respondía el último régimen de facto”<sup>57</sup>*

En este proceso de posicionamiento político de ATEP no se dejó de lado las acciones de solidaridad con los trabajadores de la provincia, en especial con los del sector azucarero.

El año dio comienzo con un pedido de ATEP para que se procediera al pago de las diferencias de haberes que se adeudaban a los docentes correspondientes al periodo de

---

<sup>55</sup> Diario *La Gaceta*, 18/11/1973, p. 7. En esa ocasión, los miembros que integraron la delegación de ATEP fueron: María Laura López Wermes de Gordillo, Sixto Miguel Paz, Aurora Teresa Racedo de Silberstein y Héctor Pérez.

<sup>56</sup> Este logro fue, además, anunciado el día en que se sortearon los cuarenta departamentos que formaban parte del plan de vivienda gremial, que posteriormente fue conocido como el “barrio ATEP”. En: Diario *La Gaceta*, 25/11/1973, p. 7.

<sup>57</sup> Diario *Noticias*, 10/12/1973, p. 4.

junio-octubre de 1973, motivado por el aumento de 200 pesos nuevos que se otorgó a nivel nacional<sup>58</sup>. Aunque el gobernador manifestaba intermediar con el gobierno de la Nación para que se hiciera cargo de la deuda de 600 millones que se mantenía con el magisterio provincial<sup>59</sup>, lo cierto es que esta solución no terminaba de concretarse. La actitud de Juri provocaba la inquietud del magisterio, que siempre gozaba de declaraciones acerca de la “justicia” de sus peticiones, aunque éstas no fueran nunca del todo solucionadas.

En mayo de este año se procedió a convocar elecciones para proceder a la renovación de la CD, fijándose los comicios para el día 28 de julio<sup>60</sup>. Esta convocatoria estuvo precedida por la declaración de “estado de alerta”, que venía motivada porque ni el ejecutivo provincial ni las cámaras de legisladores provinciales daban pasos para resolver los problemas que se localizaban en la jubilación docente. En esta ocasión se volvía a emplear el recurso negociador que ya se ha señalado, apelando a la presunta calidad democrática del gobierno, expresado de esta manera:

*“...el gremio tiene la seguridad de que el gobierno popular no podría dificultades para corregir la situación de injusticia [...] pero que debe denunciar que han empezado a moverse fuerzas contrarias y enemigas de las conquistas sociales, con el objeto de impedir que el gobierno adopte las medidas a las que está obligado por compromisos contraídos con los docentes y con el pueblo”*<sup>61</sup>

De creciente importancia resultó, por lo tanto, el plano de las reivindicaciones salariales, reforzado por el Consejo Confederal de CTERA que tomó la decisión de demandar un aumento equivalente a solicitar un índice de 1=3.500 pesos<sup>62</sup>,

---

<sup>58</sup> Diario *La Gaceta*, 17/01/1974, p. 7.

<sup>59</sup> Diario *La Gaceta*, 13/02/1974, p. 6.

<sup>60</sup> Llama la atención que es en esta ocasión donde se registra la mayor asistencia, con la presencia de 176 delegados escolares. Por otro lado, las elecciones para la renovación de la junta directiva finalmente se celebraron el 4 de agosto. En: AA, Asambleas, Libro I, n° 104, 10/05/1974

<sup>61</sup> Diario *La Gaceta*, 09/05/1974, p. 7.

<sup>62</sup> Sin embargo, unos días antes de la celebración de la asamblea se recogía en la prensa local que la petición de ATEP se situaba en un índice no menor de 5.000 pesos viejos por punto, lo que suponía un sueldo básico de 200.000 pesos mensuales para el maestro de grado. En el comunicado publicado se decía que este salario era “aproximadamente el sueldo inicial de un obrero industrial no calificado, resultante del incremento general del 13%”. Según continuaba el mensaje, ATEP consideraba que de aplicarse en sentido estricto lo contemplado por el Estatuto del docente, el requerimiento debería ascender a los 6.000 pesos viejos, llegando el sueldo básico a los 320.000 pesos viejos para el cargo de maestro de grado. En cualquier caso, se enunciaba que la decisión de pedir los 200.000 respondía a un aumento de emergencia y que “de ninguna manera significa renunciar a lo que realmente corresponde por justicia y por derecho,

entendiéndose esta cantidad como un posible acuerdo de mínimos entre la entidad gremial y el gobierno nacional<sup>63</sup>. Sin embargo, al igual que se ha visto en otras ocasiones, lo más interesante de la asamblea sucedió cuando a la hora de decidir la actitud a tomar frente a la declaración de nuevos paros de actividades, el presidente Arancibia llamó a la reflexión acerca de la estrategia gremial que la asamblea estaba decidiendo seguir. Frente a las peticiones de huelga por 72 horas, acompañadas por la petición expresa de un delegado que solicitó que se considerara la incorporación de ATEP a la CGT regional, la delegada de la escuela Ciudadela 1 propuso un paro de 24 cuando CTERA lo considerase conveniente, esto es, en la reunión que plenario confederal iba a celebrar el día 18. Finalmente, la decisión adoptada fue la de proponer efectuar paros iniciales de 48 a 72 horas, ante lo cual Arancibia preguntó si los maestros realmente apoyaban un nuevo movimiento huelguístico. La cuestión recibió una respuesta unánimemente afirmativa por parte de los 155 delegados escolares presentes, de modo que la CD acató la decisión, no sin antes advertir que la táctica gremial a seguir debería dimensionar las peticiones “dentro de lo que se considera alcanzable”<sup>64</sup>. Por otro lado, atañendo al orden local, la CD recibió la facultad de la asamblea para convocar paros en el caso de que no se restituyera el régimen jubilatorio exigido.

---

sino simplemente que los trabajadores de la educación, al limitarse al máximo en sus derechos salariales lo hacen como contribución efectiva al gran esfuerzo de la reconstrucción y la liberación”. Véase: Diario *La Gaceta*, 04/05/1974, p. 10.

<sup>63</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 105, 13/05/1974. No obstante lo dicho arriba, ATEP no dejó de reclamar la el reconocimiento de la antigüedad de aquellos docentes que en 1967 fueron transferidos a servicios administrativos, en lo que consideraban un traslado “arbitrario e inconsulto [que] violó al Estatuto del Docente”. Véase: Diario *La Gaceta*, 15/05/1974, p. 6.

<sup>64</sup> *Íbidem*.

**Ilustración 8. Encuentro entre los representantes de la comisión directiva de ATEP y el representante del gobierno provincial<sup>65</sup>**



**Ilustración 9. Asistentes a la manifestación convocada por ATEP<sup>66</sup>**



---

<sup>65</sup> Diario *La Gaceta*, 15/05/1974.

<sup>66</sup> Diario *La Gaceta*, 07/06/1974.

**Ilustración 10. Reunión de delegados después del acto celebrado<sup>67</sup>**



**Ilustración 11. Votación en las elecciones para renovar la comisión directiva<sup>68</sup>**



---

<sup>67</sup> Diario *La Gaceta*, 02/08/1974.

<sup>68</sup> Diario *La Gaceta*, 05/08/1974.



**Ilustración 12. Celebración del día del maestro y homenaje floral a Sarmiento<sup>69</sup>**



**Ilustración 13. Manifestación<sup>70</sup>**



---

<sup>69</sup> Diario *La Gaceta*, 12/09/1974.

<sup>70</sup> Diario *La Gaceta*, 19/09/1974.

### **6.2.1. Los movimientos huelguísticos nacionales y su repercusión en Tucumán**

Con estos precedentes se llevó a cabo<sup>71</sup>, al día siguiente, el Día Nacional de Protesta Docente, convocado por CTERA. Los representantes de las entidades integradas en la Federación Docente de Tucumán se entrevistaron con el gobernador interino, Mariano Ramos, el vicepresidente del Senado, José Emilo Ale, y el presidente de la Cámara de Diputados, Luis A. de la Vega, donde a las peticiones ya conocidas, se hizo conocer la demanda de un sueldo básico de 200.000 pesos moneda nacional para el maestro de grado. Después de este encuentro se celebraron reuniones de docentes en Tafí Viejo, Monteros, Concepción y Aguilares, donde también participaron los dirigentes gremiales<sup>72</sup>.

Lo cierto es que la decisión tomada por CTERA consistió en el llamamiento a una nueva jornada de paro docente. El comunicado redactado por CTERA fue transmitido en Tucumán por Arancibia, como componente de la mesa ejecutiva de la entidad confederal. En este texto se hacía hincapié en el carácter estrictamente gremial que movía los intereses de la manifestación, puesto que se trataba del ejercicio del derecho constitucional a la huelga, en defensa de la plena vigencia del Estatuto del Docente. La posición transmitida por Arancibia no obvió recordar que los derechos de los docentes hacía tiempo que venían siendo “avasallados” por los gobiernos precedentes, lo que explicaba el estado de hartazgo de los trabajadores de la educación. Sin ocultarlo en modo alguno, el presidente de ATEP declaraba que este acto de protesta estaba destinado a impulsar “una política educativa al servicio de los sectores populares”<sup>73</sup>, habiéndose vistos forzados a tomar esta medida como producto de los infructíferos

---

<sup>71</sup> La situación también era tensa en otras provincias. La Asociación de docentes Provinciales de Chubut se había declarado en paro indeterminado desde el día 6 de mayo, dispuestos a no levantar la huelga hasta readmitir a los docentes que luego de los dos primeros días de paro fueron cesanteados por el Consejo de Educación provincial. En el Chaco, la Federación Chaqueña de Docentes inició un paro el día 16, en protesta por los cambios introducidos en la dirección del Consejo de Educación. En Mendoza se inició el 14 de mayo un paro por duración de cinco días, en señal de protesta por la demora en la sanción del proyecto de incremento salarial, presentado por el ejecutivo de la provincia el 28 de abril. En el caso de Córdoba, la Unión de Educadores decidió continuar con los paros progresivos, ya iniciados los días 2 y 9 de mayo, hasta el 29 de ese mismo mes. En San Luis, como consecuencia de no haber sido recibidos en audiencia oficial para iniciar las negociaciones, el gremio docente declaró un paro de 48 horas a contar desde el 17 de mayo. Finalmente, en San Juan todos los gremios docentes coincidían en la necesidad de efectuar paros. En: Diario *La Opinión*, 14/05/1974, p. 15; Diario *La Opinión*, 17/05/1974, p. 12.

<sup>72</sup> Diario *La Gaceta*, 15/05/1974, p. 6.

<sup>73</sup> Diario *La Gaceta*, 23/05/1974, p.10.



encuentros mantenidos con las autoridades. Aún de manera más explícita, el comunicado de ATEP señalaba cuáles eran los últimos propósitos de estas movilizaciones:

*“Es que la acción gremial de la docencia se fundamente en el imperativo de lograr no solamente el goce de los derechos fundamentales e inalienables, sino también en el mejoramiento y la transformación democrática de la escuela popular, a fin de que las grandes masas mayoritarias de la Nación participen decididamente en el derecho a la educación”*<sup>74</sup>

El paro nacional, que fue seguido por un número muy importante de docentes, de acuerdo a las consideraciones de la prensa<sup>75</sup>, fue objeto de una evaluación, hecha pasado el mediodía, por parte de representantes de la FDT que comunicaron que el seguimiento estaba siendo masivo en todo el país al igual que, especialmente en Tucumán, agradecían a los padres por no haber enviado a sus hijos a los centros escolares, lo que en palabras de Sixto M. Paz y Ángel Alberto Valoy (de la Unidad Gremial Docentes Laínez) significaba que la docencia debía continuar su lucha “no sólo en los problemas de índole salarial y previsional, sino también con el propósito de lograr de una vez por todas una educación realmente gratuita y al servicio de todo el pueblo”<sup>76</sup>.

Durante el transcurso de la jornada Juan Carlos Comínguez, que ostentaba el cargo secretario general interino de CTERA al tiempo que era diputado nacional por la Alianza Popular Revolucionaria (Partido Comunista), se entrevistó con el secretario de Programación y Seguridad Social del gobierno de la Nación, Celestino Rodrigo. Las cuestiones planteadas, restitución del régimen jubilatorio y 82% móvil<sup>77</sup>, centraron la negociación. Rodrigo, en cualquier caso, advirtió que “la restitución del artículo 52

---

<sup>74</sup> Diario *Noticias*, 23/05/1974, p. 4.

<sup>75</sup> La única entidad que se oponía a la decisión de CTERA, y que además no estaba afiliada a ésta, era la nueva Unión de Docentes Argentinos, encuadrada en los lineamientos ideológicos de la corriente más conservadora del peronismo. La postura oficial de la UDA mantenía que: “hay que dar tiempo al equipo económico oficial para que estudie el pedido presentado por la entidad de un sueldo básico de 200.000 pesos moneda nacional”. Posteriormente, otra entidad de tercer nivel, la Confederación Argentina de Trabajadores de la Educación, publicó una declaración en la que justificaba la oposición a las medidas de fuerza ejecutadas por CTERA por “considerar que son actos contrarios al gobierno popular”. En: Diario *La Opinión*, 15/05/1974, p. 13; Diario *La Opinión*, 29/05/1974, p. 11.

<sup>76</sup> Diario *Noticias*, 23/05/1974, p. 4.

<sup>77</sup> Siendo estas las cuestiones principales, también se hizo referencia a la instauración de un sueldo mínimo de 2.000 pesos, la configuración de una debate popular destinado a elaborar la nueva ley de educación, la reincorporación de los docentes universitarios al estatuto docente y la estabilidad real del docente privado.

sobre régimen jubilatoria será de difícil aplicación, por cuanto el decreto ley 466/73 establece que no puede haber sectores privilegiados y en caso de aprobarse ocurriría eso”<sup>78</sup>. En tanto en cuanto el encuentro no satisfizo las expectativas de los docentes, éstos confirmaron que no se iba a modificar el plan de movilizaciones, que preveía un paro de 48 horas a comenzar el 28 de mayo<sup>79</sup> y otro de 72 horas para los días 4,5 y 6 de junio, convergiendo el 8 de junio en un Congreso confederal para decidir nuevas actuaciones<sup>80</sup>.

Con ocasión del inicio de esta segunda etapa del plan de lucha, la FDT emitió un comunicado en el que acusaba a quienes no apoyaban el movimiento huelguístico de no tratarse de verdaderos representantes gremiales de la docencia. En otro sentido destacaba:

*“...el gremio docente, por vocación y tradición, ha estado siempre en la defensa de la democracia y de las instituciones republicanas y, por ende, de la estabilidad de los gobiernos constitucionales surgidos del mandato popular [...] en cuanto asumió el actual gobierno constitucional, la docencia argentina expresó públicamente, por medio de sus organizaciones gremiales, su satisfacción por la normalización institucional y expresó su decisión de colaborar en todo lo que significara consolidar la grandeza del país, en especial en el ámbito de la educación popular [...] los paros docentes no se hacen a favor ni en contra de nadie sino, simplemente, con el*

---

<sup>78</sup> Diario *La Gaceta*, 24/05/1974, p. 1.

<sup>79</sup> Ante este movimiento de fuerza, el Consejo Nacional de Educación no dejó pasar la oportunidad de publicar un comunicada en el que no sólo se amenazaba con las consecuencias que derivarían para los huelguistas, sino que también se negaba cualquier utilidad de esta medida de presión: “...al personal directivo de todos los establecimientos, que deberá garantizar la libertad del trabajo asegurando el libre acceso a las escuelas por parte de docentes y alumnos. Los docentes que concurren a prestar servicio deben impartir clase cualquiera que sea el número de alumnos presentes y las direcciones deben suministrar información sobre el número de docentes presentes. [...] Este Ministerio está persuadido de encontrar pautas que permitan defender la digna imagen del ministerio e impidan que lamentablemente se adopten medidas de fuerza como las actuales, que no sólo aportan poco a la solución concreta de los problemas sino que implican la posibilidad de que deban tomarse las medidas previstas en los reglamentos vigentes. [Se expresa la confianza en] la serenidad del magisterio, en su probada capacidad de comprensión. Se espera que sepa encontrar el camino de sus aspiraciones sin necesidad de interrumpir el proceso educativo en nuestras escuelas”. En: Diario *La Opinión*, 28/05/1974, p. 8.

<sup>80</sup> Cabe resaltar que la medida de paros progresivos, según declaró el secretario gremial Alfredo Bravo, fue respaldada por 122.000 votos de entre los 150.000 votos que los delegados de las entidades afiliadas representaban, aunque los afiliados totales de la confederación alcanzaban la cifra de 238.000. Esto se debió a que los docentes de la provincia de Buenos Aires decidieron no adherir el paro nacional. En: Diario *La Opinión*, 21/05/1974, p. 12; Diario *La Opinión*, 22/05/1974, p. 8.

*fin de lograr la restitución de derechos y conquistas anuladas por la dictadura militar*”<sup>81</sup>

El balance de las 48 horas de paro fue ciertamente positivo en lo que a participación se refiera<sup>82</sup>. Mientras el gobierno de la Nación no ofrecía cifras, CTERA estimaba que el seguimiento de los docentes de todo el país se había situado en un 80%, siendo de especial incidencia en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Pero si las cifras no eran contestadas desde las esferas gubernativas<sup>83</sup>, se estaba lejos de encontrar un principio de acuerdo, tal y como lo exponía la declaración emitida por el ministerio de Educación que afirmaba que no habría soluciones sectoriales ya que “es criterio del Poder Ejecutivo propender a la solución integral de los problemas previsionales y laborales”<sup>84</sup>. La intención de no pasar a una instancia de negociación en la que se enfrentaran exclusivamente las demandas planteadas por los docentes reafirmó la postura combativa de CTERA, desde donde se respondió que: “...el Gobierno no tiene intención de dar inmediata solución a los reclamos del magisterio [...] las propuestas inteligentes y viables presentadas por los docentes no hallaron los mecanismos de resolución, pese a que el Parlamento Nacional se manifestara a favor de los reclamos docentes”<sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> Diario *La Gaceta*, 28/05/1974, p. 7. Este comunicado se puede completar con otro extracto publicado por el diario Noticias: “...no es la primera vez, cuando la docencia se encuentra en lucha, que aparecen siglas fantasmas, surgidas de la noche a la mañana, con el evidente y vano intento de sembrar confusión y divisionismo [...] los actuales atacantes son totalmente desconocidos en el ambiente gremial docente y jamás asumieron ninguna actitud en favor de la docencia y de la educación popular [...] el gremio docente fue uno de los primeros en exigir, en pleno apogeo de la dictadura militar, la vuelta a la normalidad constitucional mediante el respeto a la soberanía política del pueblo. En cuanto asumió el actual gobierno constitucional la docencia argentina expresó públicamente su saludo y satisfacción y su decisión de colaborar en todo lo que signifique consolidar la grandeza del país, especialmente en todo lo relacionado con la educación del pueblo”. En: Diario *Noticias*, 27/05/1974, p. 8.

<sup>82</sup> Véase: Diario *Noticias*, 28/05/1974, p. 2.

<sup>83</sup> Incluso la agencia oficial de noticias Telam, de propiedad pública, consideró que la huelga fue acatada casi en forma unánime por los educadores en todos los niveles de educación, incluida la provincia de Buenos Aires, donde la Federación “Sarmiento” de educadores no adhirió la medida, así como el profesorado universitario. Además, en Chubut continuaba el paro por tiempo indeterminado y en Salta se prolongó hasta el 31 de mayo. Véase: Diario *La Opinión*, 03/05/1974, p. 9.

<sup>84</sup> Diario *La Opinión*, 29/05/1974, p. 11.

<sup>85</sup> *Íbidem*.

Los días 4, 5 y 6 de junio se cumplió el nuevo paro dispuesto por CTERA, jornadas de protesta que tuvieron como cierre una marcha de maestros el día 6<sup>86</sup> y la celebración de una asamblea de delegados de ATEP. El día de antes, los dirigentes del sindicato de educadores se habían reunido con representantes de partidos políticos de la provincia<sup>87</sup>, en un intento de sensibilizar a las fuerzas no oficialistas acerca de los motivos que existían para mantener la campaña huelguística<sup>88</sup>. Como consecuencia de la movilización mantenida durante la huelga, la asamblea de ATEP decidió otorgar una tregua de una semana al gobierno provincial<sup>89</sup>, tiempo que fue empleado para realizar campañas de sensibilización acerca del trabajo desarrollado por la Federación Docente de Tucumán<sup>90</sup>, especialmente en lo que a los docentes de establecimientos privados se refería<sup>91</sup>. Sin embargo, en el ámbito nacional se encontraba convocada una nueva jornada de paro para el día 14, en solidaridad con los docentes cordobeses, medida que finalmente fue depuesta con el propósito de “garantizar las medidas adoptadas por la docencia en el confederal de los días 8 y 9 de junio y de que se contemple el resultado del análisis sobre la presente situación nacional a través de asambleas de base”<sup>92</sup>. Lo cierto es que esta decisión respondía a la imposibilidad de mantener la intensidad del

---

<sup>86</sup> Aunque no se dan cifras aproximadas, la prensa describe que la columna de manifestantes se extendía por dos cuadras. Además, descontada la participación de las entidades participantes de la Federación Docente de Tucumán, se reseñó la presencia de militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), el Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista de Avanzada. El acto concluyó con la alocución de Sixto M. Paz quien arremetió contra el gobierno freujilsita al decir que: “Todos los proyectos que se anticiparon en la campaña preelectoral pareciera que se perdieron”. En: Diario *La Gaceta*, 07/06/1974, p. 11.

<sup>87</sup> De este encuentro participaron representantes del Partido Revolucionario Cristiano, Vanguardia Federal, Partido Comunista, Frente de Izquierda Popular, Partido Socialista Democrático, Partido Socialista Popular, Partido Socialista de los Trabajadores y la Unión Cívica Radical. Según las declaraciones posteriores, todos los invitados coincidieron en calificar como justas las reclamaciones docentes y comprometieron su apoyo para lograr soluciones al conflicto. Véase: Diario *La Gaceta*, 02/06/1974, p. 6.

<sup>88</sup> Diario *La Gaceta*, 01/06/1974, p. 6.

<sup>89</sup> En este sentido fue postergado por CTERA el paro previsto para el 14 de junio, decisión que se explicó por: “la necesidad de que las medidas de la docencia contemplen el resultado de análisis sobre la presente situación nacional, a través de asambleas de base”. En: Diario *La Gaceta*, 14/06/1974, p. 12.

<sup>90</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 106, 06/06/1974.

<sup>91</sup> La FDT recordaba que a pesar de haberse desconvocado la huelga, el magisterio continuaba en estado de movilización, situación que debía concretarse “mediante la intensificación de las reuniones informativas en cada escuela o colegio, a las cuales debe invitarse a las sociedades cooperadoras, centros vecinales y a toda otra entidad vinculada o vecina al respectivo establecimiento”. Otra medida iniciada a partir del día 14 fue la campaña de envío de telegramas al presidente de la Nación. Se llamaba a participar de esta medida de presión a todas las “escuelas, colegios y facultades, así como cooperadoras y demás entidades vinculadas o vecinas al establecimiento educativo”, siendo el texto acordado para el envío el siguiente: “Solicitamos solución problema docente y audiencia para CTERA”. En: Diario *La Gaceta*, 17/06/1974, p. 6.

<sup>92</sup> Diario *La Opinión*, 22/06/1974, p. 9

movimiento huelguístico en toda la república. Las provincias que mantenían conflictos abiertos seguían participando masivamente de las acciones colectivas, pero resultaba indudable la constatación de que el movimiento gremial estaba perdiendo músculo como consecuencia del desgaste. Asimismo, el gobierno quería aparentar que comenzaba a dar algún paso en el camino de las concesiones. De este modo, habiéndose reunido el ministro de Cultura y Educación Jorge Taiana con los representantes sindicales<sup>93</sup>, se anunció que tanto la cartera de Educación como la de Bienestar Social habían acordado finalizar la intervención de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), pasándose a designar un Consejo de Administración con representante del Estado y de los docentes. En este tenor, aunque sin fijar compromiso alguno, Taiana dejaba entrever la posibilidad de que no demorara mucho la aceptación de la propuesta de la central sindical docente referente a las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios<sup>94</sup>. Tras las expectativas abiertas, representantes de CTERA se reunieron el viernes 21 de junio con el secretario de Hacienda, Ricardo Lumi, quien hizo saber que las directivas de la negociación estaban siendo dadas por el propio Perón. De hechos, apenas unas horas después de mantenido este encuentro, la impresión de que se podría alcanzar un acuerdo fraguaba al calor de la declaración del ministerio de Cultura y Educación, desde donde se puso en conocimiento de los medios de comunicación que el ministerio de Bienestar social se encontraba considerando: “la posibilidad de otorgar la jubilación a los maestros de enseñanza primaria diferenciada y preescolar si hubieren cumplido 25 años de antigüedad al frente de un grado, lo que podría extenderse al resto de la docencia”<sup>95</sup>. Si bien es cierto que no se añadía nada sustancial a lo ya conocido una semana atrás, se comprende que la insistencia en el argumento generara expectativas positivas en la dirección de CTERA.

En cualquier caso, lo cierto es que las expectativas resultaron ser fundadas, en lo que fue una maniobra del ejecutivo para tratar de aplacar los ánimos de los gremialistas mientras ganaban algo de tiempo. De paso, con esta estrategia se podía conseguir que la mirada de la opinión pública dejara de ser comprensiva con los trabajadores de la educación y que, eventualmente, pasaran a considerarlos como un colectivo que era

---

<sup>93</sup> De todas estas reuniones participó Arancibia en su condición de secretario general de CTERA, aunque esa semana no consiguieron encontrarse con el ministro de Economía, José B. Gelbard, por haberse trasladado a la provincia de Catamarca. Véase: *Diario Noticias*, 25/06/1974, p. 6.

<sup>94</sup> *Diario La Opinión*, 22/06/1974, p. 9.

<sup>95</sup> *Diario La Opinión*, 23/06/1974, p. 13.

incapaz de llegar a acuerdos pese a la buena intención, al menos declarada, de la contraparte negociadora. Por consiguiente, tal y como dijo Alfredo bravo a su salida de la reunión mantenida con el ministro Taiana el 26 de junio, “el resultado [...] es totalmente negativo”<sup>96</sup>. Arancibia, que estuvo presente en la reunión, hizo la siguiente valoración:

*“Desgraciadamente, si bien nos hablaron de la posibilidad de jubilar a maestros primarios sin incluir límite de edad, actualmente es de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, no se dijo nada del 82% móvil. En esas condiciones no aceptamos el ofrecimiento. [...] Tampoco se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a las remuneraciones, ni tampoco de la forma en que se entregará la Obra Social para la Actividad Docente”*<sup>97</sup>

Los dirigentes de CTERA decidieron darse un plazo prudencial, que no cuantificaron, para consultar con sus bases y estudiar las acciones con las procederían tras esta decepción. Únicamente se mantenía la programación del 2 de julio como jornada de “movilización y protesta” por la no solución de sus reivindicaciones<sup>98</sup>. En todo caso, no dejaron de manifestar su intención de trasladar las negociaciones a la más alta esfera de poder, esto es, pedían entrevistarte con el presidente Perón.

La muerte de Perón supuso la desestabilización definitiva de las esperanzas puestas en un proyecto político que, desde su inicio, no correspondió a las expectativas generadas entre los sectores sociales que con más fuerza habían promovido el regreso del general como vía de llegada a la liberación nacional y popular. Consecuentemente, el deceso de Perón también trajo consigo la interrupción de las negociaciones abiertas entre el ejecutivo nacional y los docentes. Hasta ese día, la propuesta del gobierno contemplaba la concesión de la jubilación para los docentes con 25 años de servicio sin límite de edad, pero sin reconocer el 82% móvil. La postura de CTERA era la no de

---

<sup>96</sup> Diario *La Opinión*, 27/06/1974, p. 10.

<sup>97</sup> *Ibidem*.

<sup>98</sup> Las actividades programadas eran las siguientes: distribución de volantes alusivos a la lucha docente; reunión de personal en escuelas, colegios y facultades universitarias, para intercambiar ideas sobre la situación y los problemas; reuniones con sociedades cooperadoras, sindicatos, centros vecinales y otras organizaciones populares para informar sobre los reclamos salarial y previsional. En: Diario *La Gaceta*, 30/06/1974, p. 7.

aceptar soluciones parciales, aunque admitirían la posibilidad de una puesta en funcionamiento gradual de éstas.

Otro de los aspectos determinantes que la confederación sindical docente tenía sobre la mesa era el referente a la inclusión en la CGT. Frente a la asamblea de ATEP, Arancibia pidió a los delegados escolares que reflexionaran acerca de la “trascendencia histórica de la incorporación de la docencia a la central obrera”<sup>99</sup>. Tan sólo la delegada de la escuela Rivadavia n° 2 mostró su desacuerdo ante esta perspectiva, siendo su intervención jalonada por murmullos de reprobación. Por otro lado, la delegada de la escuela 7ª Miguel Lillo exhortaba a la asamblea a reflexionar sobre la decisión “sin sumarnos a ninguna burocracia sindical”, tras lo cual Arancibia precisó: “...la evolución gremial alcanzada por la docencia argentina influirá positivamente en la vida de la clase trabajadora ya que nos incorporamos para tener una activa participación en el proceso de reconstrucción y liberación nacional”, intervención que fue seguida por prolongados aplausos. Finalmente, la sola oposición registrada fue la ya mencionada más arriba, votando el resto de delegados por la incorporación de CTERA y ATEP a la central obrera. Al finalizar el acto, la CD de ATEP emitió un comunicado de felicitación al magisterio en que se calificaba la decisión adoptada de “...trascendental para los trabajadores docentes y de hito fundamental en la historia del sindicalismo argentino”<sup>100</sup>.

En otro orden de cosas, la campaña electoral que precedió a las elecciones sindicales vivió una agitación inusitada. En esta ocasión concurrieron tres listas electorales<sup>101</sup>. La corriente interna denominada “Renovación Democrática Docente”, presentó la lista “Celeste”, a la cabeza de la cual se encontraba como candidata a presidente Irene Cristina Gargiulo de Zelaya<sup>102</sup>. Las participantes de la lista destacaron

---

<sup>99</sup> AA, Asambleas, Libro I, n° 107, 12/07/1974.

<sup>100</sup> Diario *La Gaceta*, 13/07/1974, p. 7.

<sup>101</sup> Las normas estatutarias para formalizar las candidaturas eran las siguientes: los postulantes debían haber sido propuestos por al menos 50 socios activos de más de un año de antigüedad. Asimismo, para ser miembro de la CD, síndico o delegado departamental se exigía contar con dos años de afiliación gremial y no haber sido sancionado por casos probados de inconducta gremial o sentencia judicial que afectase al honor. Por otro lado, para poder participar como elector se necesitaba contar con una antigüedad mínima de tres meses y estar al día en el pago de cuotas gremiales. En: Diario *La Gaceta*, 08/07/1974, p. 8.

<sup>102</sup> El resto de candidatas eran: Luz Armonía Salguero de González, vicepresidente; Cira Zelarayán, secretaria general; Lilia del Carmen Suárez de Delgado, prosecretaria; María del Carmen Muzzo de Campos y Esperanza Cisterna de Sánchez, tesorera y protesora; Norma Sofía Cattáneo de Naval y

que su propuesta no significaba divisionismo, puesto que tan sólo era producto del ejercicio de un derecho de la democracia sindical<sup>103</sup>. Otra alternativa fue la de la corriente “Unidad Docente”, quienes se unieron en torno a la lista “Naranja”, presidida por María Marta Lazarte<sup>104</sup>. Su programa era sintetizado en cuatro puntos básicos: incremento del presupuesto educativo con aumentos salariales para los docentes, restitución del régimen jubilatorio que contempla el retiro a los 25 años de servicio sin límite de edad con el 82% móvil al último mes de sueldo, reforma estatutaria para ampliar la democracia sindical y apoyo al ingreso de ATEP en la CGT “para que los maestros, como trabajadores, participen en las luchas reivindicatorias con el conjunto de la clase obrera”<sup>105</sup>. Por último, la lista “Azul y Blanca” seguía estando encabezada por Arancibia<sup>106</sup>, quien utilizaba como respaldo para su continuidad los logros ya conseguidos en la lucha gremial, destacando la unificación gremial docente, que los

---

Estela Padilla de Giardini, secretarias de acción social y asuntos gremiales; María de los Ángeles Quirós de Bulacio, apoderada. En: Diario *La Gaceta*, 23/07/1974, p. 12.

<sup>103</sup> Las propuestas de la lista eran las siguientes: restitución del régimen jubilatorio con retiro a los 25 años, sin límites de edad y 82% móvil, disminución del aporte jubilatorio, actualización del índice, adecuación del estatuto docente a las reales necesidades, modificación de la ley de educación con participación de todos los factores interesados, igualdad de oportunidades para todos los docentes, becas para escuelas sindicales, representación gremial en el gobierno escolar, disminución del aporte mensual para el subsidio de salud (determinado en un monto fijo y no un porcentaje) y habilitación de salas de primeros auxilios en el local de ATEP y en los departamentos. En: *Ibidem*.

<sup>104</sup> Esta corriente aparece ya en 1969, siendo el resto de sus integrantes: María A. Graneros, vicepresidente; Florinda Leguizamón, secretaria general; Elda del V. Herrera, prosecretaria general; Lidia Solís, tesorera; Matilde G. Méndez, protesora; Elsa A. Lazarte, secretaria gremial; Elba Lobo de Siri, María Lucrecia Pinto, Cristina Vázquez de Aráoz y Lola Cisneros de Molina, vocales; Estela Graneros de Correa, Dolores Puchares, Ilda Jansen de Moyano, María Gutiérrez de Ponde de León, Ana Chuichiolo de Jaime, María Villol de Salvatierra, Lucía Belmonte de Hatim y María Elena García, vocales suplentes; Aurelia Araujo Ruhland y Mercedes Yolanda de Cantos, síndicos; Hugo Polti y Ramona Salado de Herrera, apoderados. En: Diario *La Gaceta*, 23/07/1974, p. 13.

<sup>105</sup> Entre el resto de propuestas concretas se enumeraba: nueva ley de educación provincial elaborada en asambleas docentes, partidas financieras que constituyan el 20% del presupuesto provincial, reestructuración de la organización de zonas de unicación, reorganización del departamento de materiales y Construcciones Escolares, provisión de útiles a alumnos y docentes, revisión del régimen de licencias, supresión del sistema de categorías de escuelas y de los interinatos de consejeros, desunificación inmediata de de escuelas, mayor control de la junta de clasificaciones, inclusión de los docentes privados en el Estatuto del Docente, otorgamiento de mayores facultades a las asambleas, integración de distintas comisiones internas, formación de un consejo directivo para administrar el subsidio de Salud reduciendo aportes y otorgando otros beneficios, mayor control por parte de los delegados y de los docentes sobre la labor de las comisiones directivas. En: *Ibidem*.

<sup>106</sup> El resto de miembros fueron: María Laura López Warnes de Gordillo, vicepresidente; Sixto Miguel Paz, secretario general; Héctor María Pérez, tesorero; Ricardo Kersul, protesoro; Juana Rosa Gallo, secretaria de acción social; Elisa Montaldo de Alderete Núñez, secretaria de asuntos gremiales; Joaquín René Cazalbón, Edith Puerto de Di Benedetto, Sonia Norma P. de Posse y Petrona Falci de Falci, vocales titulaes; Guillermina Aragón, Henry Barrios, Elba Nora Barrionuevo de Cisneros, Francisco Alves Ruffo, Domingo Intile, María Seguro de Román, Adela Rojo de Ramasco y Aurora Páez, vocales suplentes; Raúl Luciano Barrios, síndico titular y Manuel José Antonio de la Zerda, síndico suplente. En: Diario *La Gaceta*, 05/08/1974, p. 6.



candidatos afirmaron que hubo de concretarse en lo que calificaron como “una de las etapas históricas más críticas de nuestro país [por lo que ATEP] tuvo que pagar un duro precio por su conducta”<sup>107</sup>.

La campaña electoral discurrió con una inédita tensión en el ambiente. De este modo, la lista “Naranja” denunció dos días antes de la convocatoria que se habían sufrido presiones para forzar a que los candidatos se retiraran de la contienda electoral. Los responsables de estas presuntas presiones, calificados por Hugo Félix Polti como “grupos sin dignidad”, fueron puestos en conocimiento de Arancibia, quien se había comprometido con anterioridad “a facilitar la presentación de todos los docentes en la elección y a garantizar la pureza de los comicios”<sup>108</sup>.

Finalmente, el 4 de agosto se procedió a la renovación de la junta directiva, resultante de la elección entre la lista “Azul y Blanca”, que con un total de 1.436 votos se impuso a la lista “Celeste”, que sumó 459, y a lista “Naranja”, en última posición con 115 votos. Los resultados supusieron un respaldo a la lista ganadora del 71,2% de los 2.015 votos emitidos, sobre un total de 3.400 inscriptos<sup>109</sup>.

Continuando con la campaña de movilización, un nuevo paro fue convocado por CTERA para los días 4 y 5 de septiembre, del que no participaron las entidades nucleadas en UDA y CUTE, así como tampoco lo hizo AGET en el ámbito provincial, que realizó un paro de actividades bajo el llamado de una convocatoria autónoma<sup>110</sup>. En lo referente a ATEP, la entidad provincial llamó a la movilización de sus afiliados en función del “sumergimiento salarial de los maestros y el régimen previsional

---

<sup>107</sup> Como se ha señalado, el principal valor expuesto en la campaña fue el capital resultante de las luchas gremiales que esta dirección ya había acumulado a lo largo de más de quince años de experiencia. En este sentido, sus avales eran los siguientes: “representación docente en el Consejo de Educación, sistema de concurso de la carrera docente, equiparación de sueldos con el orden nacional y el respeto por la opinión del gremio [así como también] la obra social propia, las hosterías, la biblioteca pedagógica, los cursos de perfeccionamiento, el plan de viviendas y la cooperativa Caja de Crédito ATEP”. En lo tocante a proyectos de futuro, esta lista planteaba: “el panteón social, el camping de El Cadillal, la expansión de la obra social y la continuación de la lucha por el régimen jubilatorio con 25 años de servicio y 82% móvil”. En: *Ibidem*.

<sup>108</sup> Diario *La Gaceta*, 04/08/1974, p. 10.

<sup>109</sup> AA, Libro I, acta n° 108, 13/09/1974.

<sup>110</sup> La rama de establecimientos privados de AGET argumentó que no se sumó al paro porque había sido convocado por “entidades gremiales cuya política se opone a los principios sociales cristianos de AGET Privados”. Al día siguiente, la FDT respondió que: “la Confederación no está en contra de religión alguna y que, por el contrario, respeta a todas”. En: Diario *La Gaceta*, 03/09/1974, p. 5; Diario *La Gaceta*, 05/09/1974, p. 5.

inconveniente”<sup>111</sup>. Llegada la víspera de la movilización, el ministro de Educación Óscar Ivanissevich y el secretario de Seguridad Social, Celestino Rodrigo, se dirigieron en un mensaje retransmitido a todo el país, donde calificaron la medida de “extemporánea y no legal”<sup>112</sup>. Además, el argumento del ministro incidía en el hecho de que, reconociendo que los maestros estaban mal pagados, no era éste el único sector de trabajadores que merecía una mejora en sus condiciones, luego éstas no se podrían considerar hasta cuando fuera posible aplicarlos al resto de trabajadores. Rodrigo empleó argumentos aún más duros, acusando al magisterio de gozar de un régimen previsional “subvencionado por los otros sectores” que incluso pedía la restitución de un artículo que sólo crearía “más déficit y desequilibrio en las cajas [previsionales]”<sup>113</sup>. Por si aún no eran suficientes estas consideraciones, el presidente del Consejo Nacional de Educación, Carlos A. Benítez, no dejó pasar la ocasión para recordar que las ausencias se considerarían como injustificadas, y que una acumulación de diez suponía causa de cesantía<sup>114</sup>. La respuesta de la FDT no se hizo pública hasta el fin de las movilizaciones, aunque con su contundencia calificó al mensaje de Benítez como intimidatorio, por lo Sixto M. Paz quiso denunciar: “ante la clase trabajadora y la opinión pública, que ni la dictadura militar misma había llevado a extremos tales de desconocimiento y represalia al legítimo derecho de huelga”<sup>115</sup>.

El primer día del paro, una delegación de ATEP se entrevistó con el gobernador Juri<sup>116</sup> para apremiarle acerca de la restitución del régimen jubilatorio que establecía el artículo 80 del Estatuto del Docente de Tucumán. La conclusión a la que se arribó en la reunión daba cuenta de la necesidad de la actuación nacional para conseguir resultados en el ámbito provincial, puesto que el gobernador se limitaba a remitir a los acuerdos con el gobierno de la Nación en materia salarial y previsional, tal y como lo enunció la entidad luego del encuentro con el mandatario:

---

<sup>111</sup> Diario *La Gaceta*, 03/09/1974, p. 5.

<sup>112</sup> Diario *La Gaceta*, 04/09/1974, p. 1.

<sup>113</sup> *Ibidem*.

<sup>114</sup> *Ibidem*.

<sup>115</sup> Diario *La Gaceta*, 06/09/1974, p. 6.

<sup>116</sup> Cabe pensar que en este momento, el gobernador Juri no hubiera suscrito las palabras que unos meses atrás dijo con ocasión de la inauguración de la hostería de ATEP en Tafí del Valle: “Respaldaremos hombro con hombro este tipo de obra y a quienes las realizan con amor y cariño como lo hace ATEP, un gremio de hombres y mujeres guapos”. En: Diario *Noticias*, 13/05/1974, p. 3.

*“[El gobernador] manifestó que reconoce la justicia y razón del pedido docente en materia jubilatoria, pero que su gobierno no puede adoptar medidas por su propia cuenta en este asunto, ya que el acta suscripta entre la Nación y las provincias en la reciente reunión de gobernadores establece que las cuestiones de orden salarial y previsional deben coordinarse antes entre el gobierno nacional y los de provincia”*<sup>117</sup>

En cualquier caso, estas explicaciones no satisficieron a los representantes sindicales, quienes veían como la restitución del régimen jubilatorio sí que había tenido lugar en La Rioja, Catamarca, San Luis y Santiago del Estero, donde según el documento firmado por ATEP, sus “gobiernos no trepitaron [sic.] en hacer justicia a la docencia y la escuela pública reimplantando el régimen jubilatorio”<sup>118</sup>. En un sentido más positivo para los intereses de los docentes, el primer día de paro trajo consigo la declaración de solidaridad de la Federación Provincial de Padres de Educandos Primarios. En una nota firmada por la secretaria de la organización, Elena Nicolás de Cárdenas, se apoyaron las reivindicaciones de los docentes enmarcadas dentro de un proceso político de más amplio espectro que, en última instancia, remitía a puesta en valor de los trabajadores argentinos:

*“Respecto a las justas reivindicaciones del gremio docente, pensamos que la verdadera reconstrucción nacional se hará el día que no haya lugar en las esferas de gobierno para funcionarios o hombres de estado que sistemáticamente dan la espalda a las auténticas reclamaciones populares”*<sup>119</sup>

La primera jornada de protesta provocó la ausencia de clases en la casi totalidad de centros educativos de la provincia, excepción hecha de algunos colegios particulares. Tanto maestros y profesores, como alumnos del tramo primario y secundario, mostraron su apoyo al movimiento huelguístico. De hecho, según la FDT, también fue muy amplio el apoyo recibido por los docentes universitarios<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> Diario *La Gaceta*, 05/09/1974, p. 5.

<sup>118</sup> *Ibidem*.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> Además de las entidades que conformaban la FDT, se recibieron adhesiones de la Asociación de Maestros Suplentes de Tucumán, el Centro de Docentes Jubilados y el Partido Comunista Revolucionario. En: Diario *La Gaceta*, 06/09/1974.

Como cabía esperar, las estimaciones del nivel de seguimiento diferían radicalmente entre los convocantes y el ministerio. De esta forma, mientras los dirigentes de CTERA cifraban el seguimiento en Capital Federal en un 92% (aún mayor en el interior, pero sin aportar cifras), el ministerio de Educación estimaba que la asistencia de los docentes de establecimientos nacionales se situaba en una horquilla del 33% al 100% para la capital, siendo el ausentismo en el interior del país sólo un 10% mayor que cualquier jornada de trabajo convencional<sup>121</sup>. En Tucumán, Arancibia expresaba su agradecimiento a todo el magisterio por la disciplina gremial demostrada, así como a los padres de alumnos y a los sectores populares que mostraron su apoyo en las jornadas de protesta<sup>122</sup>.

El masivo apoyo recibido no hizo avanzar las negociaciones, por lo que se mantuvo el paro de 48 horas programado para los días 17 y 18 de ese mismo mes<sup>123</sup>. Esta medida estuvo antecedida por los actos de celebración de la Semana de Sarmiento, motivo por el cual ATEP organizó el día 11 una reunión de afirmación gremial a la que convocaba con el siguiente comunicado en prensa, que da buena cuenta del estado de movilización gremial y política de los militantes del sindicalismo docente tucumano:

*“La docencia reafirmará sus principios gremiales en la defensa de los derechos profesionales y por el mejoramiento y fortalecimiento de la escuela pública para una contribución positiva, trascendente y creadora en el proceso de la reconstrucción nacional que nos conduzca a la Liberación social, económica y política de la Nación y de su pueblo”*<sup>124</sup>

Al acto acudieron más de un millar de docentes, que fueron acompañados por la presencia del gobernador interino, Mariano Ramos, así como otros ministros y los legisladores provinciales encargados del proyecto de ley que tenía como destino el restablecimiento del régimen jubilatorio, Raúl Lechesi y Teresa Yolanda Pereyra. Cuando las autoridades del gobierno se hubieron retirado, el legislador Lechesi tomó la palabra para comprometer que la restitución total del estatuto sería una realidad, además

---

<sup>121</sup> Al día siguiente, el diario La Opinión consideraba que el paro de 48 horas “paralizó los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria en todo el país”. Véanse: Diario *La Opinión*, 05/09/1974, p. 1; Diario *La Opinión*, 06/09/1974, p. 1.

<sup>122</sup> Diario *La Gaceta*, 06/09/1974, p. 6.

<sup>123</sup> En esta ocasión, UDA estimó que: “son ilegales los paros por aumentos de salarios”. En: Diario *La Opinión*, 17/09/1974, p. 15.

<sup>124</sup> Diario *La Gaceta*, 11/09/1974, p. 9.

de pronunciar la siguiente frase: “La dignidad de los maestros está por encima de cualquier agravio”<sup>125</sup>. Este acto fue aún más significativo si se tiene en cuenta que ATEP no participó de las celebraciones oficiales del Día del maestro, celebradas en la sede del Consejo de Educación de la provincia, donde sí que asistieron Héctor Carrizo, como secretario de Educación, el presidente del organismo, Leandro Leoncio Díaz y el comandante de la V brigada de infantería, el general Luciano Benjamín Menéndez<sup>126</sup>.

Permaneció inalterable la división sindical que ya se había visto con ocasión de las anteriores movilizaciones. En este sentido, los gremios nucleados en FAGE<sup>127</sup> dispusieron no acatar el paro, fundamentalmente porque aun coincidiendo en los motivos gremiales, no compartían lo que consideraba razones doctrinarias. Pero más allá de esta permanencia, el hecho más destacado fue la prohibición de un acto convocado por ATEP y la FDT, para la tarde del día 18. La “Marcha de la Educación Popular” fue prohibida en la mañana de ese día, y así lo hizo saber la jefatura de Policía a los representantes de la FDT, a pesar de lo cual un centenar de docentes comenzaron a congregarse a las 16:30 en torno al monolito de Sarmiento, en la avenida de la capital que lleva su nombre. Cuando éstos pidieron autorización policial para poder permanecer concentrados entretanto llegaran nuevos manifestantes, para así poder darles el aviso de que no podían continuar con el plan trazado, el jefe del dispositivo policial les negó esta opción. Ante esta situación, los docentes pensaban dirigirse unidos a la sede de ATEP, lo que provocó que el responsable de los cuerpos policiales les conminara a disolverse, de lo contrario ordenaría “el ataque”. Mientras Arancibia y Paz se dirigían a los tribunales para protestar por la prohibición del acto, una columna de docentes se concentró frente a la sede del diario La Gaceta, donde hizo uso de la palabra el profesor Luis Bonano, de APEM, quien dijo: “Nuestra posición es clara: estamos en contra de todo intento golpista, por la legalidad institucional, pero también en defensa de los derechos de todos los trabajadores”<sup>128</sup>. En esa misma intervención, Bonano declaró que

---

<sup>125</sup> Diario *La Gaceta*, 12/09/1974, p. 5.

<sup>126</sup> Diario *La Gaceta*, 12/09/1974, p. 8.

<sup>127</sup> Federación Gremial de Educadores, de la que formaba parte AGET, Establecimientos Privados y Ateneo Docentes Unidos

<sup>128</sup> Diario *La Gaceta*, 19/09/1974, p. 8.

los docentes se situaban del lado de “una política educativa al servicio de la liberación nacional”<sup>129</sup>, al tiempo que destacó la solidaridad con FOTIA y sus trabajadores.

Unas horas después, la FDT emitió un comunicado de resolución mediante el cual se decidía “declarar públicamente la protesta, ya que a la falta de solución de los problemas docente y a las expresiones agraviantes del ministro Ivanissevich, se agrega ahora la represión de un pacífico acto gremial”<sup>130</sup>. En igual sentido, Arancibia y Elisa M. de Alderete Núñez firmaban la siguiente declaración expresando:

*“...satisfacción por el alto grado de conciencia gremial puesta en evidencia en todo el país como una respuesta categórica a las actitudes que pretenden mantener al gremio en el sumergimiento salarial y previsional y a la escuela abandonada en sus más perentorias reclamaciones”*<sup>131</sup>

Según las cifras manejadas por la confederación docente, la incidencia del nuevo paro aumentó con respecto al ya exitoso precedente, lográndose una adhesión del 95% en Capital Federal y del 98% en el interior del país. Por su parte, UDA difundió que el ausentismo apenas habría logrado el 40%, cifra aún menos relevante si se tenía en cuenta que la primera jornada coincidió con una jornada de huelga en el sector del transporte<sup>132</sup>.

El nivel de conflictividad social de la provincia seguía en aumento, fundamentalmente dado por las acciones combativas de los obreros azucareros. Unos meses atrás, ATEP ya se había señalado como favorable a la radicación de una fábrica de papel en la provincia, que aprovechara el bagazo<sup>133</sup> que se produce durante la zafra. Según lo entendía en esta ocasión la entidad no se trataba solamente de una nueva riqueza industrial, sino también de una manera de contribuir al desarrollo de la provincia, ayudando particularmente al:

*“...fortalecimiento de nuestro parque industrial, gravemente afectado por la medidas de cierres de ingenios en agosto de 1966, que significaron una sensible limitación de los recursos económicos de la provincia y el*

---

<sup>129</sup> *Ibidem.*

<sup>130</sup> *Ibidem.*

<sup>131</sup> *Ibidem.*

<sup>132</sup> Diario *La Opinión*, 19/09/1974, p. 10.

<sup>133</sup> Según la definición del DRAE: “Cáscara que queda después de deshechar la baya y separada de ella la linaza”.

*sumergimiento social para miles de trabajadores [...] significaría dar ocupación estable a varios miles de trabajadores y a la puesta en marcha, dentro de la provincia, de recursos económicos fundamentales en el proceso de reactivación que necesitamos para la reconstrucción económica de nuestra provincia”*<sup>134</sup>

El conflicto azucarero gozó de una repercusión nacional, habida cuenta que fue en Tucumán, luego de la destitución de Atilio Santillán como primer dirigente de FOTIA, que tuvo lugar la reunión celebrada para constituir la coordinadora de gremios en lucha. Los principales impulsores de ésta fueron Raimundo Ongaro<sup>135</sup> y Agustín Tosco, que llevaron a cabo esta reunión bajo prohibición policial<sup>136</sup>. En su declaración, Ongaro se preocupó de señalar que el plenario no estaba dando a luz a una CGT paralela, sino que el propósito era: “...sentar las bases de un programa de lucha en defensa del salario de los trabajadores y de la plena vigencia de la democracia sindical”<sup>137</sup>. Tosco recordaba que la decisión de encontrarse en Tucumán, a pesar de los problemas organizacionales que supuso, se debía a que la voluntad era “apoyar por todos los caminos posibles a la FOTIA”<sup>138</sup>. No obstante, aunque el propio Santillán no compareciera en el plenario, el gobernador Juri declaró el día antes de su celebración que tanto el dirigente sindical como FOTIA “buscan el caos y la violencia”<sup>139</sup>. La huelga convocada por FOTIA<sup>140</sup>, coincidente con el período de zafra, dio motivos a que el gobernador Juri procediera a intervenir la federación azucarera. Como reacción a esta medida, el día 17 se convocaron manifestaciones de las que participaron masivamente obreros azucareros y estudiantes, las cuales se saldaron con la detención de noventa personas, entre ellos el secretario de organización de FOTIA, Miguel Lazarte<sup>141</sup>. A su vez, la opción combativa

---

<sup>134</sup> Diario *Noticias*, 17/06/1974, p. 2.

<sup>135</sup> La valoración que el ministro de Trabajo de la Nación, Ricardo Otero hacía de la presencia en Tucumán de Raimundo Ongaro y Mario Firmenich era que: “Ninguno de ellos tiene representación cegetista ni pertenece a la industria del azúcar, sino que se ha pretendido buscar un pretexto para crear conflictos y enfrentamientos contra el gobierno del pueblo”. En: Diario *La Opinión*, 21/09/1974, p. 9.

<sup>136</sup> A una semana de iniciarse la huelga, el conflicto no era sólo de orden policial, sino que el comandante de la V Brigada de Infantería con asiento en Tucumán, Luciano Benjamín Menéndez, mantuvo primeramente una entrevista con el gobernador Juri, para luego reunirse con el propio Santillán. En: Diario *La Opinión*, 20/09/1974, p. 12; Diario *La Opinión*, 21/09/1974, p. 9.

<sup>137</sup> Diario *La Opinión*, 17/09/1974, p. 14.

<sup>138</sup> *Ibidem*.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

<sup>140</sup> Los motivos para la convocatoria consistían en la reclamación de un aumento salarial de 100.000 pesos mensuales y el establecimiento de un régimen que garantizase la estabilidad de tres trabajadores cada dos mil surcos de caña. En: Diario *La Opinión*, 21/09/1974, p. 9.

<sup>141</sup> Diario *La Opinión*, 19/09/1974, p. 11.

enarbolada por los obreros azucareros provocó fuertes tensiones con la delegación regional de la CGT y las 62 Organizaciones, llegando hasta el punto que estas entidades firmaron conjuntamente una declaración en la que se reprobaba el comportamiento de FOTIA en los siguientes términos: “la economía provincial se ve seriamente afectada por la actitud de los dirigentes de la FOTIA [por lo que ambas organizaciones avalaron] la medida puesta en marcha por el gobierno popular”<sup>142</sup>.

El magisterio tucumano no permaneció ajeno a este estado de las cosas, muy al contrario, Arancibia se dirigía a la asamblea en los siguientes términos:

*“Para la docencia el problema azucarero es aún más directo por cuanto las condiciones en que se desenvuelven corresponde la posibilidad de aprovechar los esfuerzos del magisterio en procura de la educación y el mejoramiento espiritual de la población infantil, castigada por los flagelos de la desnutrición, de la deserción escolar y de la mortalidad”*<sup>143</sup>

Arancibia condensaba su propuesta de manera mucho más explícita cuando, a renglón seguido, consideraba que en el interés de la Nación la CONASA debía ser la gran empresa estatal nacional que hiciera lo necesario para conducir definitivamente a la socialización total de la industria azucarera. En estos días también se había concretado la ayuda económica que el gremio docente destinaría a los compañeros de FOTIA, cuya entidad había sido intervenida en respuesta a los movimientos huelguísticos desarrollados. La asamblea se pronunció por unanimidad en apoyo de FOTIA, incluso decidiéndose que cada escuela patrocinaría reuniones con los sindicatos locales y centros vecinales “a los efectos de considerar la organización de una solidaridad activa, con cese de actividades si fuese necesario, en apoyo de los trabajadores azucareros”<sup>144</sup>.

En relación a las medidas estrictamente docentes, la asamblea de ATEP decidió llevar al congreso confederal de CTERA, que se celebró entre los días 28 y 29 de septiembre, la siguiente propuesta de acciones colectivas: primer paro de 72 horas, segunda semana 72 horas y tercera semana 96 horas. Del mismo modo, ya en el ámbito provincial, se concedió facultades a la CD para que convocara a un paro de 48 horas en

---

<sup>142</sup> *Ibidem*.

<sup>143</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 109, 26/09/1974.

<sup>144</sup> *Ibidem*.



el momento que considerase oportuno, en función del tratamiento que las cámaras legislativas daban al proyecto de reforma de la ley previsional<sup>145</sup>.

En octubre de 1974, la asamblea de ATEP resolvió reivindicar la satisfacción de las demandas laborales que venían siendo formuladas por FOTIA. En dicha asamblea, Arancibia señaló que “el problema que afecta a ese sector de trabajadores es una cuestión que interesa y atañe a todos los sectores del trabajo y al pueblo de la provincia”. En esta ocasión, también incidió sobre las dificultades que encontraba la labor educativa para desarrollarse en un contexto social adverso, cuando afirmaba que “...el papel de la educación en el medio social y las grandes dificultades con que tropieza se originan precisamente en la marginación social y económica de los trabajadores, tanto de fábrica como de surco”<sup>146</sup>. Con este diagnóstico se ponía de manifiesto la relación de causalidad que se veía entre las condiciones de vida de los trabajadores y los efectos que sobre ellos podía tener la labor educativa. De esta manera, ATEP vinculaba su función como educadores con las condiciones materiales de quienes eran los destinatarios de su labor docente.

En este punto, resulta interesante comprobar que, tal y como hemos venido señalando, tanto el análisis de la realidad, como las prácticas gremiales efectuadas a lo largo de este período, arrojan la conclusión de que la docencia tucumana, a través de su representación en ATEP, no hace sino protagonizar un proceso de transformación en tanto que actor social, donde esta fracción de la clase trabajadora se redefine como resultado de la relación conflictiva que mantiene con las autoridades políticas de las que dependen. La lucha por los recursos económicos del magisterio, manifestada en el terreno de lo político, da cuenta de esta transformación que confirma la idea de que las clases sociales no son elementos estáticos, sino que se ven sometidas a confrontaciones que terminan de configurarlas<sup>147</sup>.

En estos días se produce la primera detención de un docente a causa de su presunta militancia “subversiva”. El docente Guillermo Abregú, de la escuela García Hamilton, fue interpelado por la policía federal, quien se llegó a interrogar acerca de su nombre de guerra. Ante este hecho, ATEP no hizo esperar su queja, puesto que el

---

<sup>145</sup> *Ibidem*.

<sup>146</sup> “ATEP apoyó al gremio azucarero en la reclamación de derechos”, *Atep en Marcha*, 10/1974, p. 6.

<sup>147</sup> Acha, Omar, *Las huelgas de...op.cit.*, pp. 19-21

interrogatorio estuvo precedido de la revisión del local escolar donde el docente se desempeñaba, lo que fue entendido como una puesta en sospecha de toda la escuela<sup>148</sup>.

Después de las insistentes negociaciones, se consiguió el pago de los descuentos indebidos realizados a causa del subsidio de salud<sup>149</sup>. En el plano del gobierno educativo, ATEP consiguió que su candidata fuera elegida como vocal del Consejo de Educación<sup>150</sup>.

Con motivo de la finalización del año, ATEP publicó un comunicado en el que resumía la actividad gremial realizada. El texto recogía las buenas relaciones mantenidas con otras entidades gremiales docentes, así como con agrupaciones de carácter cultural, popular y estudiantil, quienes en interpretación de los docentes, se habían encontrado unidos por la común inquietud en trabajar por el mejoramiento social y económico. El balance que se transmitía era positivo, a pesar de no haberse conseguido avances con respecto a la ley de jubilación o el cobro de cantidades adeudadas por retroactividad, poniéndose en valor la unidad nacional del gremialismo docente, así como las propuestas hechas de cara a la redacción de un nuevo proyecto de ley de educación. En el ámbito provincial, ATEP ponía en cuestión la presidencia del Consejo de Educación por cuanto el gobierno escolar no debía estar conformado por “quienes no tengan un cabal conocimiento del papel que debe jugar la educación en una política de Liberación y Reconstrucción Nacional”<sup>151</sup>. Con respecto a las expectativas puestas en el año entrante, el comunicado sostenía que:

*“...los docentes tienen también fe de que el gobierno popular orientará una política educacional positiva y protagónica del proceso de Liberación Nacional, como lo concibiera en su programática política el ex presidente Perón, y que sirve de basamento a las obligaciones y responsabilidades del actual gobierno, cuya institucionalización para el funcionamiento definitivo y normal del sistema está en relación directa”*<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> Diario *La Gaceta*, 20/10/1974, p. 11.

<sup>149</sup> Diario *La Gaceta*, 12/12/1974, p. 7.

<sup>150</sup> La lista Azul, desde la que ATEP promovió la elección de María Inés David, obtuvo 3.063 votos. La lista de Blanca (AGET) consiguió 1.416 votos, además de consignarse 242 votos en blanco y 25 nulos del total de los 4.700 participantes entre los 5.541 inscriptos.

<sup>151</sup> Diario *La Gaceta*, 04/01/1975, p. 7.

<sup>152</sup> Diario *La Gaceta*, 04/01/1975, p. 7.

Sin embargo, apenas tres meses después, el saludo a la docencia tenía un tinte mucho más dubitativo sobre los mecanismos que el gobierno pondría en marcha:

*“...la escuela y el magisterio [anticipan] un año lectivo con dificultades, en especial teniendo en cuenta que la situación económica que afecta a los grandes sectores populares disminuyéndoles su nivel de vida, repercute directamente sobre el esfuerzo educacional, por cuanto el Estado no ha creado aún las condiciones para vigencia plena del concepto de gratuidad de la enseñanza”<sup>153</sup>*

Las aspiraciones de ATEP quedaban sintetizadas de la siguiente forma:

*“[se aspira a que]...la política educacional se desarrolle en forma de servir los intereses generales del país y de sus masas populares, por encima de las limitaciones que imponen los intereses sectarios, empresariales, de grupos interesados no en un proceso de enseñanza en busca del fortalecimiento y elevación del nivel cultural del pueblo argentino, sino en beneficio material de sectores minoritarios, con una concepción clasista de la educación, contra el derecho natural de todos los habitantes del país”<sup>154</sup>.*

### **6.3. El “Operativo Independencia” y el comienzo del terrorismo de Estado**

En un contexto de violencia política desatada, la oposición al ministro Ivanissevich seguía siendo contundente. Un ejemplo lo encontramos con la FDT, que no dudaba en sostener que el actual ministro hacía la misma política educativa que no había podido imponer la “Revolución Argentina”. De hecho, llama la atención analizar los términos en que se expresa la entidad docente, en tanto en cuanto se dejaba entrever la proximidad de una eventual intervención de los militares en el poder: “...por la estabilidad constitucional y la soberanía política del pueblo al servicio de un auténtico proceso de liberación nacional”<sup>155</sup>.

La situación política de Tucumán se estaba volviendo cada vez más incontrolable. Además de las acciones gremiales que ya se han considerado en este texto, la irrupción de grupos armados constituyó la excusa ideal para que el gobierno encabezado por

---

<sup>153</sup> Diario *La Gaceta*, 30/03/1975, p. 3.

<sup>154</sup> *Ibidem*.

<sup>155</sup> Diario *La Gaceta*, 25/01/1975, p. 6.

María Estela Martínez de Perón declarara el estado de sitio a finales de 1974. Poco después, en febrero de 1975, se puso en marcha el llamado *Operativo Independencia*, mediante un decreto que facultaba a las FF.AA. para actuar en la provincia de Tucumán con el objetivo de “aniquilar a la subversión”. Esta decisión convirtió al Ejército en detentador *de facto* del gobierno provincial. Por otro lado, hacía meses que se estaban registrando atentados contra militantes gremiales y estudiantiles, resultado de la acción del grupo paramilitar de la Triple A, patrocinado por la extrema derecha del peronismo que ocupaba el gobierno nacional en esos momentos. El terrorismo de Estado estaba dando sus primeros pasos, y Tucumán, por su alto grado de conflictividad social y la presencia de la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo, sirvió como laboratorio en el que testar las abyectas metodologías que se extenderían al entero del país luego del golpe del 24 de marzo.

En abril de 1975 la situación continuaba tensándose. Los representantes del gremio no acudieron al tradicional acto de inauguración del curso escolar, puesto que los conflictos planteados seguían sin arribar a soluciones. En la primera semana de abril se decidió declarar al gremio en estado de alerta, al tiempo que se propuso en el congreso confederal de CTERA la determinación de un día de paro nacional “por los atropellos cometidos con el gremio docente, y como demanda de reconocimiento oficial del organismo gremial confederal”<sup>156</sup>.

Unas semanas más tarde, la asamblea de ATEP mostró su adhesión unánime al paro nacional convocado por CTERA para el 26 de junio, como muestra de repulsa ante el nuevo proyecto de reforma de la ley de educación. El gremio fue declarado en estado de asamblea permanente y Arancibia pidió “mantenerse en actitud activa, para la difusión del problema y mentalización de la población”<sup>157</sup>. La CTERA llamó a la huelga luego de una reunión a la que asistieron Arancibia y Julio Bulacio en representación de Tucumán<sup>158</sup>, mientras los delegados de ATEP consideraban que la docencia estaba sufriendo un estado de miseria incompatible con los valores de la dignidad humana<sup>159</sup>.

---

<sup>156</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 100, 16/04/1975.

<sup>157</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 111, 24/06/1975.

<sup>158</sup> Los reclamos concretos eran los siguientes: 1) Sueldo básico inicial de 550.000 pesos viejos para el maestro de grado y la correspondiente adecuación, según lo establece el Estatuto del Docente, agregándose que en ningún caso será inferior al 100% de los haberes que actualmente percibe; 2) Cumplimiento integral del Estatuto del Docente en materia jubilatoria; 3) Rechazo del fondo compensador que constituye una injustificable disminución del 3% de los sueldos; 4) Reincorporación de

La situación era aún más tensa por el problema de legitimidad jurídica que aún mantenía CTERA, ya que no había logrado la obtención de la personería gremial. Esta circunstancia hizo que el director de Relaciones del Trabajo dispusiera la ilegalización del cese de actividades<sup>160</sup>. En este sentido, el secretario de educación Carlos Frattini declaraba:

*“Llevamos bien señalados desde hace tiempo los antecedentes de este proceso para crear problemas al gobierno con huelgas docentes. [...] Para la conducción educativa la huelga docente rompe un principio de la razón de ser del docente y de la escuela. [...] Las huelgas docentes son incompatibles con la educación como la salud es incompatible con la enfermedad. Hasta 1950 no conocíamos una sola huelga docente, los docentes quieren trabajar. [...] El solo anuncia de la huelga es un crimen de lesa majestad si un maestro hoy se ha despedido de sus alumnos hasta el viernes. Ha hecho muy mal. Queremos que los maestros sean la prima prioridad en el país. Sería más útil que nos dijeron cómo se eliminan las escuelas tapera. Aquí no está en discusión lo que merecen los maestros sino los métodos. Los están utilizando para sus manejos personales y eso no es cristiano ni de argentino”*<sup>161</sup>

Los miembros integrantes de la FDT respondieron a las palabras de los responsables políticos, llegando a pedir la dimisión del ministro, con un texto en el que se mostraba el “rechazo de una política económica que determina una inflación incontenible y el aumento del costo de la vida que deteriora el salario de la clase trabajadora”<sup>162</sup>.

Un nuevo plan de lucha por aprobado por CTERA para el mes de agosto, consistente en un paro de 48 horas la segunda semana del mes (12 y 13 de agosto), 72

---

los prescindibles o cesanteados y rechazo de toda medida que so pretexto de racionalización atente contra la estabilidad del docente; 5) Devolución de la obra social a los docentes; 6) Reconocimiento de CTERA como gremio realmente representativo de la docencia; 7) Rechazo de las injurias y agravios a la docencia inferidos por el ministro de Educación de la Nación, doctor Óscar Ivanissevich. En: Diario *La Gaceta*, 24/06/1975, p. 7.

<sup>159</sup> Diario *La Gaceta*, 25/06/1975, p. 7.

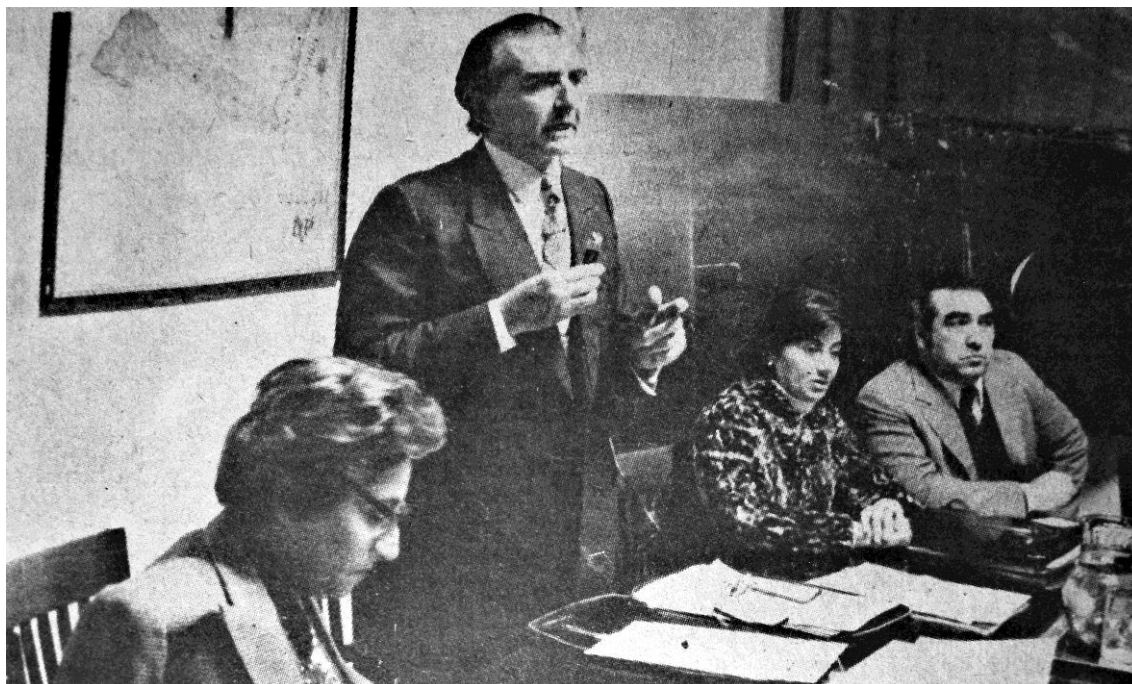
<sup>160</sup> Ante la reafirmación de la convocatoria, el día 26 se publicó en la prensa local el siguiente decreto del PE de la provincia: “Toda adhesión al paro de orden nacional, declarado ilegal por la autoridad competente, será sancionado con el descuento de la remuneración correspondiente a esa fecha en caso de ausencia, que a ese efecto será considerada falta injustificada, aplicándose además las sanciones administrativas a que hubiere lugar, según la legislación vigente”. En: Diario *La Gaceta*, 26/06/1975, p. 9.

<sup>161</sup> Diario *La Gaceta*, 26/06/1975, p. 1.

<sup>162</sup> Diario *La Gaceta*, 26/06/1975, p. 8.

horas para la tercera (días 19, 20 y 21) y 72 horas la cuarta semana (días 26, 27 y 28). En esta ocasión, una de las motivaciones expresas del paro era la consecución de la renuncia o el cese del ministro Ivanissevich, así como la inmediata derogación de la resolución que otorgaba la personería gremial a la UDA<sup>163</sup>.

**Ilustración 14. Intervención de Francisco Isauro Arancibia<sup>164</sup>**



---

<sup>163</sup> Diario *La Gaceta*, 11/08/1975, p. 5.

<sup>164</sup> Diario *La Gaceta*, 25/06/1975.

**Ilustración 15. Entrega de los premios del concurso escolar<sup>165</sup>**



La asamblea registró la negativa de tres escuelas a apoyar el mandato de la entidad confederal, aunque la inmensa mayoría sí que ratificó las medidas, añadiendo que éstas no sólo tenían que prestar atención a la atención salarial, sino también “a la dignidad del maestro que había sido injuriada”<sup>166</sup>. Reafirmando el posicionamiento combativo de la entidad, se declaraba que el plan de lucha se enmarcaba dentro de un auténtico sentido popular acorde con la realidad socio-económica que estaba viviendo el país, de igual modo que: “la lucha de CTERA se enmarcará en el ejercicio de la democracia sindical, en contraposición al sindicalismo que responde a una verticalidad obsecuente y patronal”<sup>167</sup>.

Fue a comienzos de septiembre cuando se consiguió que la cámara de senadores provinciales ratificara el restablecimiento de los artículos referentes a las modalidades de jubilación de los docentes, proyecto que había sido aprobado con anterioridad por la Cámara de Diputados. Se reconocía así la jubilación a los 25 años de servicio sin límite de edad y el 82% móvil. No obstante, existía el rumor de que el gobernador Juri podría vetar la aprobación de la ley, de manera que la entidad docente se expidió en la siguiente forma: “ATEP tiene la seguridad de que gobernador Amado Juri, procederá a

---

<sup>165</sup> Diario *La Gaceta*, 30/10/1975.

<sup>166</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta nº 112, 07/08/1975.

<sup>167</sup> Diario *La Gaceta*, 08/08/1975, p. 6.

promulgar de inmediato dicha ley, en un acto de auténtica adhesión a la celebración del Día del Maestro, desmintiendo antojadizas versiones referentes a que procedería a vetar la fundamental conquista”<sup>168</sup>.

CTERA volvió a convocar un cese de actividades para los días 17 y 18, al que ATEP también prestó su adhesión<sup>169</sup>, junto con los días 23, 24 y 25 del mismo mes de huelga en Tucumán. Después de la primera jornada de movilizaciones, tanto ATEP como la FDT manifestaron que el cumplimiento de la medida de fuerza se había hecho de forma masiva, lo que APEM cifró en un 85%, computado tanto el sector oficial como el privado<sup>170</sup>. Sin embargo, el domingo anterior a la nueva semana de movilizaciones la CTERA dispuso aplazar las medidas de fuerza, con vistas a las negociaciones que se retomaron en el Congreso de la Nación, siendo convocado un nuevo congreso confederal para el día 27 de septiembre<sup>171</sup>. El resultado de las negociaciones se materializó en la reincorporación del artículo 52 del Estatuto del Docente, con la salvedad de que se introducían edades límites para acceder a la jubilación: 48 años para las mujeres y 52 para los hombres. Con respecto a la cuantía a percibir, se acordó aprobar un 70% móvil al que se añadiría un 3% anual hasta alcanzar la cantidad demandada en el lapso de un cuatrienio. El balance que hacía ATEP era positivo, puesto que consideraba que con este acuerdo se habían satisfecho aspiraciones que necesitaron de largos años de lucha gremial<sup>172</sup>.

Sin embargo, este alcance estaba lejos de poner fin a la conflictividad gremial, algo que quedó demostrado con una nueva convocatoria de jornada de cese de

---

<sup>168</sup> Diario *La Gaceta*, 10/09/1975, p. 3.

<sup>169</sup> Estas eran las reivindicaciones concretas en el ámbito nacional: “1) Pago de los aumentos acordados a partir del 1° de junio pasado; 2) Reconocimiento de la representatividad de la CTERA; 3) Restitución plena y total del artículo 5° del Estatuto del Docente; 4) Reincorporación de los docentes prescindidos y cesanteados; 5) Normalización de las obras sociales: coparticipación de la docencia; 6) Anulación de la Caja Complementaria; 7) Solución para los problemas en varias provincias (San Juan, Santa Fe, Río Negro, Jujuy, etc.). Además, ATEP publicó sus peticiones particulares: “1) Cambio del gobierno escolar; 2) Pago de la deuda que, por retroactividad en la aplicación de la ley de equiparación de sueldos se adeuda a los maestros desde 1960; 3) Pago de las planillas demoradas y adicionales por diversos conceptos que, por momentos millonarias, se adeuda a los docentes; 4) Inmediata atención de las necesidades de la escuela pública, carentes de los elementales instrumentos de trabajo e, inclusive, para el registro administrativo de cada establecimiento; 5) Medidas concretas para el inmediato funcionamiento de escuelas clausuradas como consecuencia de la inoperancia del gobierno escolar para arbitrar, en tiempo y forma, las soluciones adecuadas; 6) Total respeto a la ley de educación y al Estatuto del Docente”. En: Diario *La Gaceta*, 16/09/1975, p. 6.

<sup>170</sup> Diario *La Gaceta*, 18/09/1975, p. 10; Diario *La Gaceta*, 19/09/1975, p. 10.

<sup>171</sup> Diario *La Gaceta*, 22/9/1975, p. 5.

<sup>172</sup> Diario *La Gaceta*, 29/09/1975, p. 9.



actividades para el jueves 9 de octubre<sup>173</sup>. Tal y como era lo habitual, AGET y el Ateneo de Docente Unidos, vinculados con FAGE, no adhirieron la convocatoria porque consideraban que el gobierno ya había demostrado su voluntad de resolver los problemas docentes, lo que les llevaba a considerar que muchas de las causas que movían a esta acción colectiva respondían a intereses políticos. En este sentido, la secretaria general de UDA en Tucumán, Gabina Valberdi pedía a los docentes: “concurrir al cumplimiento del sagrado deber de enseñar que es lo que dignifica la misión educadora y redundante en el progreso del país, facilitando la reconstrucción nacional”<sup>174</sup>. Desde las instituciones públicas, uno de los argumentos del secretario de Educación, Héctor Carrizo, frente al paro fue incidir en la idea de que, debido a la impostergable lucha que había de ser dada contra el analfabetismo, la docencia no se podía permitir infligir más daños a la niñez: “El niño tucumano necesita la asistencia permanente de los maestros”<sup>175</sup>.

---

<sup>173</sup> Con esta acción se pretendía acelerar la solución de los siguientes problemas: Pago en el curso del corriente año de todas las retroactividades que se adeudan con motivo de los aumentos salariales puestos en vigencia a partir del 1º de junio pasado; reincorporación de todos los docentes declarados prescindibles y/o cesanteados; reconocimiento de la representatividad de CTERA. Véase: Diario *La Gaceta*, 06/10/1975, p. 8.

<sup>174</sup> Diario *La Gaceta*, 08/10/1975, p. 8.

<sup>175</sup> Merece la pena reproducir el texto íntegramente, puesto que constituye una inmejorable demostración de la concepción reaccionaria proclamada por la Secretaría de Educación, negadora de la condición trabajadora del docente, cuya dignidad quedaría limitada a su entrega incondicional a la labor instructiva que le reserva el Estado: “El niño tucumano necesita la asistencia permanente de los maestros. Esta asistencia significa, al margen de cualquier otra razón, acompañarle durante todo el transcurso del año escolar en los requerimientos de su formación. Esta formación que es humana e integral, es decir, que abarca todos los aspectos de su ser, en lo trascendente y en lo temporal, es la única razón de la existencia de la escuela en una sociedad. No asistir al niño y joven tucumano en su formación significa no haber comprendido la razón de ser de la escuela. En Tucumán, especialmente en ciertas formas, los índices de analfabetismo, de deserción, de retraso en la formación de los niños en edad escolar alcanza topos sólo comparables con ciertos países subdesarrollados, casi primitivos. El gobierno provincial, consciente de este grave fenómeno ha agenciado todos los instrumentos posibles para paliar esta degradante situación. Es un problema de todos y en esto el gobierno recibe la colaboración de todos. Pueblo y gobierno tucumanos reconstruyen la escuela pública. Basta abrir los ojos. Por todo lo dicho, cerrar las puertas de una escuela es primeramente incomprensible, y luego atentatorio contra la formación y el proceso educativo de casi doscientos mil niños, jóvenes y adultos tucumanos. Incrementar la ignorancia, el analfabetismo, no puede ser considerado –por quien piensa con honestidad– sino un acto de imprudencia cuando no de irresponsabilidad. La sociedad tucumana, los padres tucumanos, no pueden aceptar –porque piensan con honestidad– que las escuelas de formación de sus hijos cierren las puertas. Si existen problemas –y quien piensa honestamente los reconocerá como tales– éstos deben ser considerados como corresponde a gente honesta y responsable, en la mesa de tratativas. Pero la formación no puede frenarse. Alguien dijo, con exageración, que el culto del ausentismo se ha convertido en el culto del analfabetismo. Estas consideraciones sirven para ayer, para hoy y para todo tiempo. Sobre todo para el hoy tucumano: necesitamos menos ignorantes, más hombres formados y coherentes, menos desfasaje moral e intelectual. La Secretaría de Educación y Cultura exhorta a quienes tienen, en el ámbito provincial, la responsabilidad de la formación de los jóvenes tucumanos que dejen a estos jóvenes en todas las escuelas y en todas las aulas. La escuela según la ley, debe permanecer abierta. A todos los maestros les asiste el derecho al

Como cabía esperar, la respuesta de ATEP contradijo los términos expuestos por el representante del gobierno oficial, a quien acusaron de no conocer la compleja realidad educativa de Tucumán con la misma profundidad que los docentes. Asimismo, se hizo hincapié en la siguiente idea, que los trabajadores de la educación tan sólo reclaman del Estado que cumpla con sus obligaciones contraídas con el pueblo, y que ante la falta de respuesta de las instituciones, la falta de honestidad y responsabilidad habría de buscarse en el terreno del gobierno educativo<sup>176</sup>.

Pero en el momento que el gobierno nacional decidía una subida salarial de 150.000 pesos viejos, los maestros quedaban excluidos de esta medida. La última asamblea de ATEP antes del golpe tuvo lugar en el local de FOTIA. El balance hecho en ese momento no era positivo. No se había logrado el pago de la deuda retroactiva por equiparación, cuyo monto estimaba en 20.000 millones de pesos. Tampoco se había alcanzado solución alguna respecto del pago de viáticos, ni con el pago de diferencias acumuladas de junio a septiembre sobre el último aumento conseguido, así como la incorporación del magisterio de Tucumán al régimen de aumento de 150.000 pesos concedidos a todos los trabajadores del país. En esa ocasión la asamblea se expidió por la concreción de un paro de 24 horas que sería determinado por la CD<sup>177</sup>.

A pesar de que la presión contra los representantes sindicales no dejaba de crecer, ATEP continuó con sus intervenciones públicas, desoyendo las intimidaciones de los criminales y los consejos de quienes pensaban que una actitud más prudente podría haberles sacado del punto de mira de los victimarios.

#### **6.4. El estallido de la violencia y las últimas horas**

A los pocos días de la llegada del segundo comandante del *Operativo*, el general Antonio D. Bussi, Arancibia fue detenido durante unas horas, y llevado a prisión, por conducir su camioneta sin las luces reglamentarias y no poder abonar la multa que se le impuso. Esta detención, que podría ser considerada anecdótica, supuso la confirmación

---

trabajo, y las inasistencias serán computadas según las normas vigentes”. En: Diario *La Gaceta*, 08/10/19975, p. 8.

<sup>176</sup> De hecho, los términos empleados fueron rotundos: “...el Consejo de Educación está desgobernado, engañándose al gobernador y al pueblo, y si el gobernador no está engañado, él es responsable también de todo el desquicio educativo de los ineptos del Consejo”. En: Diario *La Gaceta*, 09/10/1975, p. 9.

<sup>177</sup> AA, Asambleas, Libro I, acta n° 113, 18/11/1975.

efectiva de que los servicios de inteligencia del Ejército argentino tenían al presidente de ATEP entre uno de sus objetivos, aunque bien es cierto que ya había recibido anteriormente varias amenazas escritas, firmadas por la Triple A. Sin embargo, ATEP continuó protestando por las necesidades de reparación de diversas escuelas rurales y por el pago de las diferencias salariales adeudadas. Tanto es así que, con motivo de un acto celebrado en defensa de la escuela pública, Arancibia se dirigió al auditorio que le escuchaba afirmando que “la educación que debe estar al servicio de la reconstrucción y liberación nacional y no al de intereses sectarios y retrógrados”<sup>178</sup>.

El relevo en la comandancia del operativo se produjo en el mes de diciembre, recién inauguradas las vacaciones escolares. Al descanso anual, y el consiguiente descenso de la actividad sindical, se añadía el clima de altísima conflictividad social de la provincia. Si bien es cierto que no contamos con evidencias documentales, son varios los testimonios que nos han ayudado a recomponer esos últimos momentos.

Durante los meses de enero y febrero de 1976, fueron frecuentes los mensajes anónimos dirigidos al presidente de ATEP, que la advertían de la inminente actuación de la Triple A si no cesaba en su postura combativa. De las entrevistas que realizamos se desprende que Arancibia se mostraba preocupado, pero procuraba no dar crédito públicamente a las amenazas que recibía. Del mismo modo, estos testimonios nos relatan que, para ese momento, la sede de ATEP se había convertido en un centro de recepción de la militancia sindical, de izquierdas, estudiantil, etc. En su sede se llevaban a cabo reuniones de grupos que no tenían esa posibilidad en otro local, o se prestaba la imprenta de los maestros para la elaboración de pasquines y boletines.

Como reconstruye E. Rosenzvaig en *La oruga sobre el pizarrón*<sup>179</sup>, el asesinato de Francisco Isauro Arancibia y su hermano Arturo René se produjo en la madrugada del 24 de marzo de 1976, en la sede del gremio, donde el presidente ocupaba una pequeña pieza que hacía las veces de domicilio. Los hechos están siendo actualmente juzgados, pero por lo que se ha podido reconstruir, se sabe que el grupo de tareas de la Policía

---

<sup>178</sup> 03/06/1975, p. 3.

<sup>179</sup> En su libro, E. Rosenzvaig reconstruye además las últimas horas de Francisco Isauro Arancibia, que a la salida de una reunión de la CD, que terminó más tarde de lo habitual, no tuvo reparo en utilizar su vieja camioneta para acercar hasta su domicilio a los dirigentes que lo necesitan, contraviniendo los consejos de sus compañeros y familia, quienes le pedían que se ocultara para evitar que fuese detenido. Consúltese: Rosenzvaig, E., *La oruga...op.cit.*

encargado de la detención el dirigente sindical fue resistido con los disparos de las dos escopetas que portaban los hermanos Arancibia. En lugar de tratar de reconducir la situación, el grupo policial hizo uso de su superioridad numérica y consiguió abatir a los docentes, llegándose a contar más de un centenar de impactos de bala sobre los cuerpos.

No es difícil imaginar la conmoción que esto supuso para los militantes del gremio, pero es significativo comprobar que apenas dos días después del asesinato, Antonio D. Bussi convocó al magisterio a un acto en el que se les exhortó a cumplir con sus funciones “cívicas”<sup>180</sup>. En Tucumán, la dictadura empezó con el asesinato de dos maestros, una perfecta imagen de la barbarie represiva que se ejerció contra el pueblo argentino.

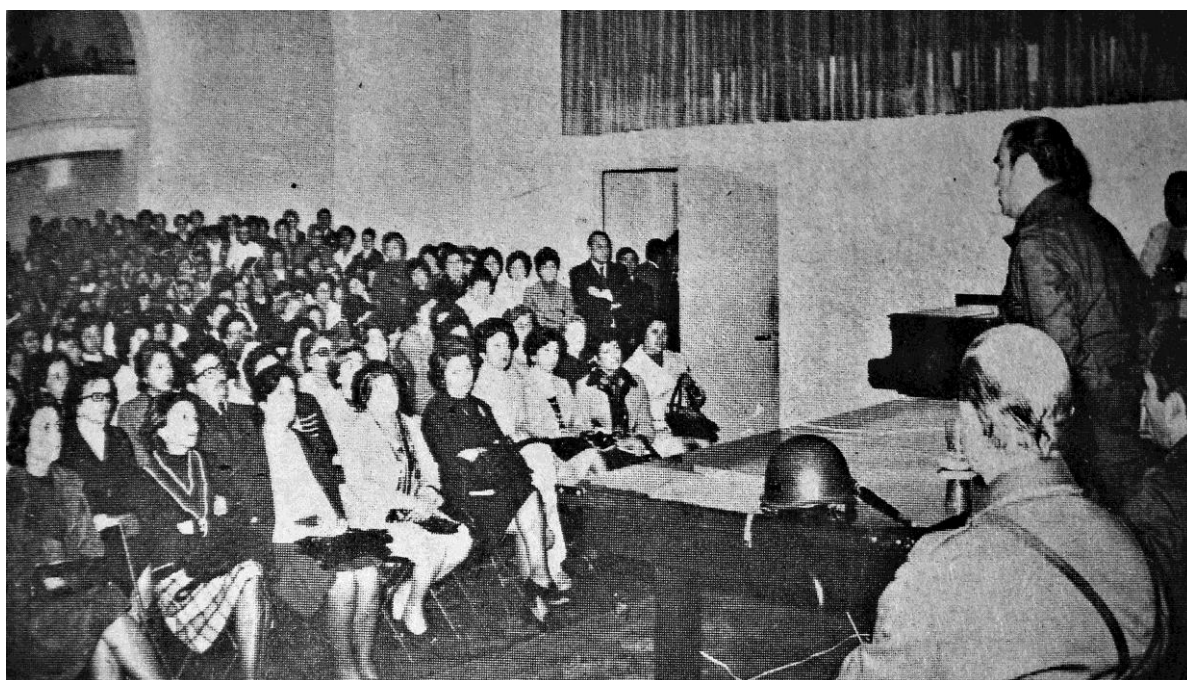
---

<sup>180</sup> Véase **Ilustración 16**, p. 315.

## CONCLUSIONES:

En esta investigación se impone un final tan abrupto como el que sufrió uno de sus principales protagonistas. Como ya hizo en su día E. Rosenzvaig<sup>1</sup>, el relato de las últimas horas de Francisco Isauro Arancibia estremece porque sabemos que el presidente de ATEP era consciente de lo que podía esperar de las primeras horas tras el golpe militar. Si bien es cierto que la represión en Tucumán había comenzado, y se había institucionalizado, bastante tiempo atrás, la toma del poder por las FF.AA. significó la suspensión de todas las libertades democráticas y otorgó carta blanca para que los victimarios pudieran continuar con su proceso selectivo de aniquilamiento de militantes políticos, sindicalistas, izquierdistas, disidentes, opositores, etc.

**Ilustración 16. Antonio D. Bussi dirigiéndose a la asamblea de maestros reunida con ocasión de la intervención de ATEP<sup>2</sup>**



---

<sup>1</sup> Rosenzvaig, Eduardo, *La oruga...*, *op.cit.*

<sup>2</sup> Diario *La Gaceta*, 25/04/1976.

El silencio de las fuentes se impuso y, aunque lo intentamos, no fuimos capaces de conseguir información sobre el período de intervención de ATEP, inmediatamente posterior al golpe<sup>3</sup>. Apenas un día después del nombramiento de Antonio D. Bussi como gobernador *de facto* de la provincia, se organizó una asamblea de docentes en la que el represor advirtió sobre la importancia del papel de los educadores y su necesaria colaboración para llevar a buen puerto el proyecto de transformación de la sociedad argentina, con el que las FF.AA. pretendieron extirpar una parte fundamental del cuerpo social. El embate con el que la dictadura arremetió contra ATEP consiguió desmovilizar a los trabajadores de la educación que, como el resto de trabajadores de la Argentina, se vieron sometidos al poder omnímodo del terrorismo de Estado.

Es tal la magnitud de esta interrupción en el devenir histórico del país, que nos parece evidente situar en este punto el cierre cronológico de nuestro estudio. A pesar de los terribles efectos de la dictadura, en el campo simbólico y material, los años noventa del siglo pasado volvieron a traer a escena a los docentes en tanto que colectivo altamente sindicalizado y movilizado, en intensa lucha contra la precarización de sus condiciones de trabajo y contra la dificultad para alcanzar la satisfacción de sus necesidades mínimas de subsistencia material. Es por esto que, a pesar de todo, podemos concluir que la experiencia de los cincuenta, sesenta y setenta no cayó en saco roto sino que, muy al contrario, generó el aprendizaje necesario sin el cual no podría haber germinado un movimiento sindical docente sólido como el que encontramos hoy en día en la Argentina<sup>4</sup>.

En el curso de nuestra investigación hemos demostrado que los trabajadores de la educación, especialistas en la transmisión de conocimientos y en las metodologías educativas, no desatendieron las “enseñanzas sociales” que convirtieron a la docencia en un actor destacado durante esos convulsos años. A lo largo de estas páginas hemos podido transitar los caminos que recorrieron los dirigentes y militantes de ATEP. Como

---

<sup>3</sup> El encargado de dirigir la intervención, en un primer momento, fue el economista Juan Carlos Kolisnyk, quien rechazó concedernos una entrevista.

<sup>4</sup> Sobre el movimiento sindical docente de las últimas décadas consúltase: Donaire, Ricardo, *Los docentes en el Siglo XXI...op.cit.*; Gindin, Julián (Comp.), *Pensar las prácticas sindicales docentes*. Herramienta-AMSAFE-AGMER-ADOSAC, Buenos Aires; Rosario, 2011. Para el caso tucumano: Toscano, Diego Esteban, “Luchas y resistencias contra los intentos de reforma del Estatuto Docente. El caso de la provincia de Tucumán”, XVII Jornadas Argentinas de Historia de la Educación, Tucumán, 2012.

se señaló en los dos primeros capítulos, la realidad social de Tucumán, por un lado, y la especificidad del trabajo docente, por otro, establecen las coordenadas precisas en las que situar la acción sindical de nuestro protagonista colectivo. En el caso de Tucumán, el volumen de trabajadores y establecimientos educativos dependientes del gobierno provincial fue determinante. Es en función de esta dimensión que hemos podido comprender cómo un sindicato, que *a priori* podría parecer llamado a ser irrelevante, contaba con unas bases de más de 5.000 afiliados, hacia el final de nuestra sección cronológica.

Durante los primeros seis años de vida de la organización, los esfuerzos de las CD sucesivas se dirigieron más a la consolidación de un estrecho vínculo con el gobierno provincial que a denunciar y combatir las promesas incumplidas por el ejecutivo. En esa etapa definimos a ATEP como un ejemplo de organización heterónoma en el contexto del intento de integración sindical que el peronismo diseñó respecto de los trabajadores intelectuales, quienes no se habían sumado al proyecto justicialista con la misma fuerza que el mundo obrero.

Otro de los elementos que pusimos de relieve fue que la mayoritaria presencia de mujeres entre la militancia se contrapuso, sin embargo, a la constante presencia masculina a la cabeza de la entidad. La reproducción de roles clásicos, donde los cargos de representatividad eran ocupados por hombres, no impidió que las acciones de identificación partidista se incorporaran a los dispositivos que el peronismo dirigió a las mujeres.

En este período, también pudimos comprobar la aparición opositores a la conducción gremial pactista, destacando las medidas disciplinarias condujeron a la expulsión de nueve afiliados que, como sabemos, tendrían más tarde un papel sustancial en la organización, formando parte de la directiva renovadora que se abrió paso a partir de 1958. Particularmente interesante resulta constatar que este sector apuntaba a la inacción reivindicativa de ATEP. En apenas tres años de existencia de la entidad se puso de manifiesto la disconformidad respecto de la estrategia de sostener una unión de intereses con el gobierno provincial, opción elegida y mantenida por los primeros dirigentes.

La fractura del sistema institucional, con el primero de los golpes de Estado que jalonan nuestra investigación, supuso también la inactividad temporal del sindicato. A partir de 1957 observamos que la reactivación de la organización trajo consigo una revitalización de su militancia que, a través de asambleas abiertas realizadas en localidades como Monteros, Aguilares y San Miguel de Tucumán, recogieron de primera mano las exigencias que el magisterio formulaba. Es en este momento cuando aparece la histórica figura de Francisco Isauro Arancibia, quien ocupó la presidencia de ATEP hasta el momento de su asesinato, que tuvo lugar en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Arancibia, junto con otros compañeros como Julio Bulacio o Sixto M. Paz, constituyeron un núcleo que se mantuvo durante casi dos décadas al frente de la organización, siendo capaz de aglutinar la legitimidad necesaria para que los docentes, tradicionalmente alejados de las grandes movilizaciones y acciones de fuerza, fueran a la huelga en reiteradas ocasiones: para la aprobación del Estatuto del Docente, para el cumplimiento de las subidas salariales prometidas, en contra de distintos proyectos de ley de educación, etc.

El balance de estas movilizaciones, entendido en términos materiales, arrojaba menos luces que sombras. Las huelgas de 1959 y 1962 supusieron un hito en el imaginario de la lucha gremial docente, pero no se pueden considerar exitosas. Tras la concesión de la personería gremial, efectiva desde 1962, ATEP se encaminó a lograr la aprobación del Estatuto del Docente provincial. A pesar de las intensas movilizaciones de 1962 y 1963, el texto que había sido redactado en 1962 no entró en vigor hasta 1967. Además, el gobierno provincial adeudó importantes cantidades por actualización de sueldos durante más de cuatro años. Por si eso no fuera suficiente, el Consejo de Educación impidió el descuento automático de las cuotas gremiales a los afiliados de ATEP, lo que provocó dificultades a la hora de cumplir con los pagos a los proveedores de los servicios sociales que gestionaba el sindicato. En las negociaciones con el gobierno siempre se siguió la misma pauta: ATEP expresaba sus peticiones, que en todos los casos correspondían a la aplicación de las propias normas que la administración había aprobado, para luego escuchar que el estado financiero de la provincia no permitía afrontar esos justos reclamos.



Al mismo tiempo, la estructura económica de la provincia hacía tiempo que se estaba derrumbando por la prolongada crisis de la agroindustria azucarera. El quiebre de la provincia, en términos de desempleo y migración, pero también de desesperanza y ansiedad, se produjo cuando luego del golpe de Estado de Juan Carlos Onganía, se decretó el cese de actividades y cierre de once de los veintitrés ingenios azucareros de la provincia. Esta circunstancia provocó, como ya vimos, el surgimiento de los lazos de solidaridad de clase, de los que participaron docentes y obreros. La crisis socioeconómica tucumana fue el combustible que puso en marcha los mecanismos de cooperación intersindicales, algo que no había sucedido anteriormente.

Después de la desmovilización de 1967, la participación de la militancia volvió a alcanzar los niveles de los años anteriores. En nuestro análisis de las asambleas de delegados escolares, hemos podido comprobar que los trabajadores de la educación no sólo querían participar de las acciones de lucha y resistencia propuestas por la CD sino que, en algunos casos, eran los dirigentes quienes tenían que intervenir para moderar la intensidad de las propuestas. Así es que otro elemento destacado es la politización del discurso gremial, de modo que revelamos el alejamiento definitivo del maestro “apóstol civilizatorio”, para convertirse en el trabajador de la educación que expresaba su interés por participar de la democracia, la justicia social, la independencia nacional y, no en el sentido marxista, promover una urgente revolución de los valores de la sociedad argentina.

Atendiendo a las prácticas y manifestaciones públicas enunciadas por los dirigentes del sindicalismo docente tucumano, hemos podido comprobar cómo operaron profundas transformaciones en el seno de este grupo de trabajadores. Partiendo desde la experiencia peronista, que empoderó a los docentes mediante su participación orgánica, hemos constatado el desarrollo y mutación de la ubicación social de un sector de trabajadores asalariados que se expresaron políticamente a través de su organización sindical y de las luchas que emprendieron. El resultado ofrece pocas dudas al respecto: la dirigencia y la militancia de ATEP participaron de un proceso de radicalización política que los identificó como uno de los mecanismos de resistencia de la sociedad frente al proceso de transformación socioeconómica que las FF.AA. y los impulsores del proyecto neoliberal quisieron imponer en la Argentina de mediados de los setenta.

La voluntad de participar en la construcción del naciente movimiento sindical docente de ámbito nacional es un eje que atravesó todo nuestro trabajo. Desde las primeras tentativas del peronismo, con una concepción profesionalizante del trabajo docente, ATEP se sumó a las iniciativas de CAMYP, CGERA, AND y, finalmente, CTERA, siendo una entidad protagonista en el diseño de una organización de talante democrático y en permanente lucha por la mejora de las condiciones materiales de los trabajadores de la educación.

Nuestra investigación se basó, con especial importancia, en la documentación que el sindicato elaboraba internamente. Esto nos permitió hacer una reconstrucción pormenorizada de las actividades de la entidad a lo largo de todo el periodo. El acceso a las actas de reunión de la CD, durante la mayor parte del periodo, nos permitió tomar el pulso al gremio desde una perspectiva institucional. De este modo, nuestro trabajo arroja resultados más precisos en relación a las iniciativas impulsadas por la dirigencia sindical. Es a través de las actas de las asambleas de delegados escolares que hemos podido hacernos una idea más aproximada de las voces de la militancia. Sin embargo, los avances que ofrece nuestro estudio residen más en el esclarecimiento de las relaciones establecidas entre la dirigencia sindical y la patronal pública que en la vida interna de la entidad, objetivo para el que no contábamos con suficientes recursos documentales. Asimismo, entendemos que nuestra investigación es significativa para, a través del seguimiento de las acciones colectivas y la evaluación que hicimos del apoyo que recibieron, contribuir a delinear el proceso de transformación en la autopercepción de los trabajadores de la educación.

Con el presente trabajo creemos haber contribuido a completar un capítulo de una historia que aún está por escribir, la del sindicalismo docente en la Argentina, durante el tercer cuarto del siglo XX. Este trabajo saca a la superficie un fragmento de este objeto de estudio que debería continuar abordándose desde una perspectiva integral, explorando las prácticas, discursos, transformaciones y luchas de esta fracción de la clase trabajadora.

## CONCLUSION

Dans cette recherche s'impose une fin aussi abrupte que celle dont a souffert un de ses principaux protagonistes. Comme cela a déjà été relaté par E. Rosenzvaig<sup>1</sup>, le récit des dernières heures de Francisco Isauro Arancibia nous ébranle car nous savons que le président de l'ATEP était conscient de ce qui pouvait lui arriver dans les premières heures suivant le coup d'état. Même s'il est avéré que la répression avait déjà commencé à Tucumàn, et qu'elle s'était institutionnalisée il y a longtemps, la prise de pouvoir par les Forces Armées signifia la suppression de toutes les libertés démocratiques et donna carte blanche aux bourreaux pour qu'ils puissent continuer leur processus sélectif d'anéantissement de militants politiques, de syndicalistes, de gauchistes, de dissidents, d'opposants, etc.

Le silence des sources s'imposa pendant sept ans et, même si nous avons essayé, nous ne fûmes pas en mesure d'obtenir des informations sur la période d'intervention de l'ATEP, immédiatement après le coup<sup>2</sup>. À peine un jour après la désignation de Antonio D. Bussi comme gouverneur *de facto* de la province, une assemblée d'enseignants fut organisée afin que l'opresseur puisse leur signaler l'importance de leur rôle et de leur nécessaire collaboration pour que les militaires atteignent leur objectif de transformation de la société argentine, par lequel les Forces Armées prétendirent extirper une partie fondamentale du corps social. La violence dont la dictature fit preuve envers l'ATEP réussit à démobiliser les travailleurs de l'éducation qui, comme le reste des travailleurs de l'Argentine, furent soumis au pouvoir du terrorisme d'Etat.

L'irruption des Forces Armées est si importante pour l'histoire argentine qu'il nous paraît évident de placer à ce moment précis la clôture chronologique de notre étude. Malgré les terribles effets de la dictature, dans les champs symbolique et matériel, les années quatre-vingt-dix du siècle précédent remirent les enseignants sur le devant de la scène en tant que collectif fortement syndicalisé et mobilisé, en lutte intense contre la précarisation de leurs conditions de travail et contre la difficulté d'aboutir à la satisfaction de leurs besoins minimaux de subsistance matérielle. C'est la raison pour laquelle, malgré tout, nous sommes à même de conclure que l'expérience

---

<sup>1</sup> Rosenzvaig, Eduardo, *La oruga...*, *op.cit.*

<sup>2</sup> Le responsable initial de l'intervention fut l'économiste Juan Carlos Kolisnyk, qui refusa de nous accorder un entretien.

des années cinquante, soixante et soixante-dix ne fut pas inutile, mais que, bien au contraire, elle signifia l'apprentissage nécessaire sans lequel le mouvement syndical que nous trouvons aujourd'hui en Argentine n'aurait pas pu germer<sup>3</sup>.

Au cours de notre recherche, nous avons démontré que les enseignants, spécialistes dans la transmission de savoir et des méthodologies éducatives, ne négligèrent point l'apprentissage social qui transforma les enseignants en un acteur social remarquable pendant ces années. Dans les pages précédentes, nous avons pu transiter les chemins, qu'avant nous parcoururent les dirigeants et militants de l'ATEP. Comme il a été signalé dans les deux premiers chapitres, la réalité sociale de Tucumán, d'une part, et la spécificité du travail enseignant, d'autre part, établirent les coordonnées précises sur lesquelles situer les actions collectives de notre protagoniste. En ce qui concerne le cas de Tucumán, le volume de travailleurs enseignants et le nombre d'établissements éducatifs dépendants du gouvernement provincial furent déterminants. C'est en fonction de cette dimension que nous avons pu comprendre comment un syndicat, qui à priori aurait pu paraître insignifiant, compta avec une base militante de plus de 5.000 affiliés vers la fin de notre section chronologique.

Pendant les premières six années de vie de l'organisation, les efforts des dirigeants successifs s'adressèrent plus à la consolidation d'un lien étroit avec le gouvernement de la province qu'à dénoncer et combattre les promesses non tenues par l'exécutif. Dans cette étape, nous définissons l'ATEP comme un exemple d'organisation hétéronome dans le contexte des efforts d'intégration syndicale impulsés par le péronisme, envers des travailleurs intellectuels qui n'avaient pas adhéré au projet justicialiste avec la même vigueur que le monde ouvrier.

Un autre des éléments que nous avons mis en avant fut la présence majoritaire de femmes dont la militance pourtant s'opposa à la présence masculine permanente à la tête de l'entité. La reproduction des rôles classiques, où les postes à responsabilité

---

<sup>3</sup> Voir: Donaire, Ricardo, *Los docentes en el Siglo XXI...op.cit.*; Gindin, Julián (Comp.), *Pensar las prácticas sindicales docentes*. Herramienta-AMSAFE-AGMER-ADOSAC, Buenos Aires; Rosario, 2011. Pour le cas de Tucumán: Toscano, Diego Esteban, "Luchas y resistencias contra los intentos de reforma del Estatuto Docente. El caso de la provincia de Tucumán", XVII Jornadas Argentinas de Historia de la Educación, Tucumán, 2012.

étaient occupés par des hommes, n'empêcha pas les actions d'identification partisane de passer par l'incorporation aux dispositifs adressés aux femmes par le péronisme.

Au cours de cette période, nous avons également pu vérifier l'apparition des militants s'opposant à la ligne "pactiste" du syndicat qui, comme nous le savons, auront un rôle substantiel dans l'organisation, même en faisant partie de la directive rénovatrice qui surgît à partir de 1958. Il est particulièrement intéressant de constater que cette dissidence s'adressait précisément à l'inaction revendicative de l'ATEP. À peine trois ans après la fondation de l'entité, le désaccord par rapport aux stratégies de soutien d'une union d'intérêts avec le gouvernement de la province demeurait évident.

La fracture du système institutionnel, avec le premier des coups d'État qui interviennent dans notre recherche, impliqua aussi l'inactivité temporaire du syndicat. À partir de 1957 nous observons que la réactivation de l'organisation fut accompagnée de la revitalisation de sa militance qui, à travers les assemblées ouvertes tenues dans des villes comme Monteros, Aguilares et San Miguel de Tucumán, nécessita de collecter de premières mains les opinions que les enseignants exprimèrent. C'est à ce moment qu'apparaît la figure historique de Francisco Isauro Arancibia, qui occupa la présidence de l'ATEP jusqu'au moment de son assassinat, qui eut lieu à l'aube du 24 mars 1976. Arancibia, avec d'autres compagnons comme Julio Bulacio ou Sixto M. Paz, constituèrent le noyau qui se maintint pendant presque deux décennies à la tête d'une organisation capable d'agglutiner la légitimité nécessaire pour que la militance des enseignants, traditionnellement éloignée des grandes mobilisations et des actions des forces, fassent grève à plusieurs reprises: pour la promulgation de *l'Estatuto del Docente*, pour la revalorisation des salaires, contre les différents projets de loi de l'Education, etc.

Le bilan de ces mobilisations, d'un point de vue matériel, était plutôt mitigé. Les actions de 1959 et 1962 furent un événement marquant dans l'imaginaire de la lutte syndicale des enseignants, mais elles ne peuvent pas être considérées comme un succès. Après l'approbation de la *Personería Gremial*, qui avait pris effet en 1962, l'ATEP ouvrit la voie à la promulgation de *l'Estatuto del Docente*. Malgré la mobilisation intense des années 1962-1963, le texte rédigé en 1962 n'entra en vigueur qu'en 1967. De plus, le gouvernement de la province accumulait quatre ans de dettes envers les

enseignants. Dans le cas où ces mesures n'étaient pas suffisantes, le *Consejo de Educación* empêcha le paiement automatique des cotisations syndicales des affiliés de l'ATEP, ce qui provoqua des difficultés à l'heure de payer le montant des services sociaux gérés par l'organisation. Au cours des négociations avec le gouvernement, nous avons relevé la dynamique suivante: l'ATEP présentait ses pétitions, qui dans tous les cas correspondaient à l'application des normes que l'administration s'était données, pour ensuite entendre que l'état financier de la province ne permettait pas de faire face à leurs exigences.

En même temps, cela faisait longtemps que la structure économique de Tucumán était en train de s'effondrer à cause de la crise économique persistante de l'agro-industrie du sucre. L'effondrement de la province, en termes de chômage et de migration, mais aussi au regard du désespoir et de l'anxiété, se produisit uniquement à la suite du coup d'Etat de Juan Carlos Onganía, puis il fut décrété l'interruption des activités et la clôture de onze des usines sucrières. Cette circonstance provoqua, comme nous l'avons déjà vu, l'émergence et le renforcement des liens de solidarité de classe auxquels les enseignants et les ouvriers participèrent. La crise à Tucumán fut le combustible qui mît en marche les mécanismes d'une collaboration intersyndicale inédite.

Après la démobilisation de 1967, la participation de la militance atteignit le niveau des années précédentes. Dans notre analyse des assemblées de délégués scolaires, nous avons pu vérifier que les enseignants voulaient prendre part aux actions de lutte et de résistance proposées, et même aussi dans certains cas, les dirigeants intervinrent à fin de modérer les propositions des militants. Un autre élément que nous avons souligné est la politisation du discours du syndicat, de manière à ce que nous puissions dévoiler l'éloignement définitif de la catégorie d' "apôtre de la civilisation", pour devenir un travailleur de l'éducation qui exprimait son intérêt pour participer à la démocratie, la justice sociale, l'indépendance nationale et, non pas dans le sens marxiste du terme, à une urgente révolution des valeurs de la société argentine.

En ciblant les pratiques et manifestations publiques émises par les dirigeants de l'ATEP, nous avons pu constater une transformation profonde du collectif. En partant de l'expérience péroniste, qui affirma les enseignants de par leur participation organique, nous avons observé le développement et la mutation de la place sociale de cette fraction

de travailleurs salariés qui s'exprimèrent politiquement via leur organisation syndicale et des luttes qu'ils engagèrent. Le résultat laisse peu de place au doute: les dirigeants et la militance de l'ATEP participèrent au processus de radicalisation politique qui les définît comme un des mécanismes de résistance face à la transformation socio-économique que les Forces Armées et les instigateurs du projet néolibéral voulurent imposer dans l'Argentine des années soixante-dix.

La volonté d'intégrer le jeune mouvement syndical enseignant d'ordre national est un axe qui traversa tout notre travail. Depuis les premières tentatives du péronisme, avec une conception professionnalisante du travail enseignant, l'ATEP adhéra aux initiatives de la CAMYP, la CGERA, l'AND et finalement la CTERA, étant une entité protagoniste dans la conception d'une organisation démocratique et en lutte permanente pour l'amélioration des conditions matérielles des travailleurs de l'éducation.

Notre recherche s'est basée tout particulièrement sur la documentation que le syndicat avait élaborée en interne. Ceci nous permît de faire une reconstruction détaillée des activités de l'entité au cours de ces années. L'accès aux actes de réunion de la direction du syndicat, pendant quasiment toute la période, nous amena à prendre la tension du syndicat avec une perspective institutionnelle. De cette manière, notre recherche met en évidence des résultats plus précis en rapport avec les initiatives développées par les dirigeants. C'est grâce aux actes des assemblées de délégués scolaires que nous avons pu nous faire une idée plus proche des voies de la militance. Néanmoins, l'apport de ce travail réside plus dans l'éclaircissement de relations établies entre les dirigeants syndicaux et le patronat public que de la vie interne de l'entité, objectif pour lequel nous ne disposions pas des ressources documentaires suffisantes. Nous considérons également que notre étude est significative, grâce au suivi des actions collectives et à l'évaluation que nous avons faites sur le soutien qu'elles ont reçu, pour contribuer à tracer le processus de transformation de l'auto perception des enseignants.

Avec le présent travail, nous croyons avoir participé à compléter un chapitre d'une histoire qui reste encore à écrire, celle du syndicalisme des enseignants en Argentine pendant le troisième quart du vingtième siècle. Cette étude fait remonter à la surface un fragment de cet objet d'étude qui devrait s'aborder depuis une approche intégrale, et comme nous l'appliquons dans notre recherche, en explorant les pratiques, discours, transformations et luttes de cette fraction de la classe ouvrière.

## ANEXO I

### ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Nº1 - 26/11/1949

En la ciudad de Tucumán a los 26 días del mes de noviembre de 1949, celebra su primera sesión la Comisión Directiva del Sindicato del Magisterio de Tucumán, que fuera puesto en posesión por el Ministerio de trabajo y Previsión (Oficina de Asuntos Profesionales) en reunión celebrada el 24 del corriente:

**Presidente:** Rosa Vozza de Zapata

**Vicepresidente:** Ana Sánchez de Pascual

**Secretaria:** Aurora Mastolorenzo de Chiacchio

**Prosecretaria:** Aída Aurora López

**Tesorera:** Ericila V. Páez

**Protesorera:** Rosa Amalia Piedrabuena

**Delegada:** Emma Heredia Luna

**Delegada Suplente:** Sara Elvira Núñez de Lezama

**Vocales:** María Alcira Colombres y María Delia Pacheco

Se trató el siguiente orden del día:

1. Se consideró la reorganización del Ex sindicato, llegándose a la siguiente resolución: No habiendo recibido bienes, libros, nómina de afiliados y como la Comisión Provisoria tuvo a su cargo una nueva conscripción de socias y la organización general para llamar a elecciones, se entiende que, en lugar de reorganizar, se ha organizado una nueva entidad a la que se designará con un nombre apropiado.
2. Se puso a consideración el nombre de la nueva entidad, que por unanimidad fue aprobado el de: Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, sigla ATEP.
3. Se nombró una comisión para estudiar los Estatutos de la Entidad formada por: Emma Heredia Luna; Ericila V. Páez.
4. Para gestionar la Personería Gremial y Jurídica se nombró la siguiente comisión: Vozza de zapata, Aurora M de Chiacchio, María A. Colombres, Aída A. López, María D. Pacheco.
5. Se estableció que la cuota mensual del asociado sea la misma de la inscripción y que las nuevas afiliaciones se recibirán en Avenida Avellaneda 315.
6. Se resolvió cursar nota a la Biblioteca Sarmiento solicitando permiso para celebrar sesiones en dicho local.

Se levanta la sesión.



## **ACTA N° 77, 18/03/1954**

1. Se da lectura al acta anterior [...]
2. El Presidente dio lectura de las notas elevadas al Presidente de la Nación pidiendo la equiparación de sueldos y la Presidente del Partido Peronista Masculino y Femenino en adhesión a los candidatos peronistas. Al mismo tiempo se informó de las gestiones realizadas para conseguir audiencia con el Contralmirante Tesaire. EL Presidente hizo moción para hacer una rifa pro edificio propio.
3. Se hace necesario un fichero de todos los asociados.
4. Se aprueba la compra de un diccionario.
5. Se pide presupuesto para la compra de afiliados.
6. Se aprueba el balance presentado por la tesorera María Teres Agüero, hasta el 28 de febrero de 1954:

Caja 3.910

Banco Provincial Cuenta Corriente: 25.399'30

Gastos Generales: 645'90

Depósitos en garantía: 1.500

Sueldos: 900

Muebles y útiles: 18.932'60

Cuota de afiliados: 3.598

Capital Social: 43.334'90

Total: 46.932'90

En este balance no van incluidas las cuotas correspondientes al mes de febrero.

### **Copia de la nota enviada al Excelentísimo Sr. Presidente de la República**

San Miguel de Tucumán, 15 de marzo de 1954,

La CD de la ATEP tiene el honor de dirigirse a S.E. el Sr. Presidente de la Nación General Juan Perón, con el más alto respeto y se permite expresarle que velando por los intereses de este gremio numeroso que agrupa a más de 3.200 afiliados se ha propuesto hacer conocer el problema económico que afecta al magisterio de esta Provincia, tratando de promover una opinión favorable de las altas autoridades educacionales en busca de soluciones que satisfagan el anhelo y las aspiraciones de los maestros provinciales tucumanos.

Esta CD considera que nada más oportuno llegar ante el primer educador de la Patria, el Sr. Presidente de la Nación, por cuanto tiene la absoluta confianza de ser oída y la convicción de que S.E. en un acto más de los muchos que su sabia y justicialista obra de gobierno ha producido en beneficio de todos los trabajadores, ha de resolver también problema que afecta a este gremio.

Este petitorio lo hacemos Excmo. Sr. Con el previo permiso y consentimiento de S.E. el Sr. Gobernador de la Provincia, D. Luis Cruz y al mismo tiempo va este pedido en apoyo de las gestiones realizadas por el primer mandatario tucumano ante V.E. en el

sentido de transferir a la Nación las escuelas provinciales ubicadas en zonas desfavorables, como asimismo la transferencia a la Nación de los 5° y 6° grados provinciales que funcionan en las escuelas nacionales.

EL magisterio provincial se encuentra abocado, desde mucho años atrás, al problema de una economía difícil por la exigua remuneración que percibe y que tiene las siguientes derivaciones:

- a) Sueldos escasos que hacen difícil la economía del hogar.
- b) Mayores dificultades, todavía, para aquellos maestros que viajan a la campaña y que, en consecuencia, tienen mayores erogaciones.
- c) Notoria diferencia de sueldos con los maestros nacionales que tienen un mejor escalafón y mayor remuneración por costo de vida.

Esta diferencia Excmo. Sr. Presidente, se produce entre maestros nacionales y provinciales que ejecutan idénticas tareas y trabajan con igual responsabilidad.

No escapará al elevadísimo conocimiento de S.E. y a sus nobles sentimientos de justicia, que una circunstancia de tal naturaleza provoca una situación de menoscabo en la moral de los educadores tucumanos y por qué no decirlo, también en el orden material, puesto que no hay retribución digna de las condiciones económicas y sociales a que alude el 2° Plan Quinquenal en su Capítulo IVG. II.

Por lo expresado, esta CD en su nombre y de los afiliados que agrupa, aspira a la equiparación de sueldos con los maestros nacionales, anhelo que hacen llegar a S.E. y que tienen profunda fe en la favorable acogida que le dispense.

Hacemos propicia la oportunidad para reiterar la adhesión total a la obra gigantesca y patriótica que cumple desde la primera magistratura como asimismo la absoluta identidad con la causa justicialista de la Nueva Argentina y la decisión de las maestras tucumanas de realizar todo lo que esté a nuestro alcance en la Reforma Cultural en que Ud. Está empeñado.

Con el respeto debido saludamos al Excmo. Sr. Presidente de la Nación con la más distinguida consideración.

**Respuesta enviada por la CD al Sr. Presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, Contralmirante D. Alberto Tesaire**

San Miguel de Tucumán, 26 de marzo de 1954.

Al Sr. Presidente

De la Agronomía Tucumana de Educadores Provinciales

D. Horacio Valverdi

S./ despacho

De mi mayor consideración,

En nombre del Sr. Presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, Contralmirante D. Alberto Tesaire, tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente con el fin de agradecer los elogiosos conceptos vertidos en su nota del 19 del corriente y con respecto al pedido de equiparación de sueldos cúpleme el informarle que el mismo ha sido girado al Excmo. Sr. Presidente de la República, General Juan Perón.

Sin otro particular, aprovecho la circunstancia para expresarle las seguridades de mi particular distinción.

Fdo.: Manuel Rodríguez González (Interventor)

**De la secretaría privada del presidente de la Nación**

Juan A. Mollo saluda muy atentamente al Sr. Presidente de ATEP, Profesor Don Horacio Valverdi y al acusar recibo de su carta del día 15, dirigida al Excmo. Sr. Presidente, se complace en hacerle saber que la misma ha sido girada a la Gobernación de Tucumán, a los efectos de su consideración.

Con tal motivo estima propicia la oportunidad para formular sus mejores votos por su ventura personal.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1954.

## ACTA N° 147, 28/06/1958

En Aguilares, realizan la sesión que tuvo carácter informativo y de recepción de sugerencias para el mejor logro de la futura acción gremial. Se entonó la Canción Patria.

1. Que se dé una noción somera de las finalidades de la Agremiación, que la satisfizo Cipriano Rivero, destacando que el magisterio debe unirse y lograr por ese medio el triunfo de sus ideales.
2. La colega Herminia Bustos, hizo llegar a la CD los mejores anhelos.
3. Que se gestione por intermedio a la vía gremial, de que el Consejo de Educación, toda vez que provea de útiles a las escuelas, se encargue él mismo de hacerlo llegar a su destino, evitando ese largo y molesto peregrinaje que tal provisión provocan.
4. Que se interese a las autoridades correspondientes, tendiente a lograr el cambio de sistemas de pago, evitando el molesto ir y venir de las boletas actuales. Que se haga efectivo el pago por medio de planillas al modo de las usadas en las escuelas Laínez.
5. Interesar a las autoridades, tendiente a corregir el sistema usado en la fecha por la licencia por informe ya que los certificados otorgados por médicos de la campaña son aceptados por el término de quince días. Procurar que sean válidos por 30 días.
6. Que se amplíe la licencia por fallecimiento de familiar, al menos por 10 días.
7. Que se gestione la encuadración de las distintas enfermedades en los artículos respectivos del régimen de licencia.
8. Que se solicite el envío de cartillas, con el régimen de licencia imperante, a las escuelas.
9. Por intermedio de la Sra. Núñez se recoge el deseo de que se gestione el régimen jubilatorio más favorable al agente que se retire. Que se jubile al maestro con el máximo de cómputo, y que sea un salario móvil, teniendo en cuenta la carestía de la vida.
10. La Srta. de Bulacio, abordó el tema de la irradiación cultural, proponiendo que se efectúen actos en escuelas de los pueblos, solicitando la colaboración de profesionales de distintas ramas en el orden cultural.
11. La Srta. David, en representación de un grupo de colegas formula las siguientes sugerencias:
  - a) Solicitar la pronta integración del Consejo de Educación
  - b) Que se le dé al magisterio el derecho de elegir al presidente y dos vocales.
  - c) Que una vocalía será representada por un maestro del sud de la provincia.
  - d) Propiciar la reforma de la ley de educación común en vigencia, dando injerencia en tal reforma al propio maestro.
  - e) Que se constituyan por zona tribunales de ética, para juzgar y sancionar al maestro que incurra en faltas, contradiciendo la conducta que un educacionista debe observar.
  - f) Que se gestione para lograr que la sección archivo e informes del Consejo esté en manos de maestros.

- g) Que se imponga un emblema o distintivo para la agremiación.
- h) Que se edita la propia Revista del magisterio provincial, y que cada maestro haga su aporte literario.
- i) Que se luche por concretar la casa del maestro para cuyo fin, manifestó que hará llegar como punto de partida para tal objetivo, la suma de --- pesos, fruto de la contribución de los colegas del sud, a la CD. Informa será depositada a nombre de ATEP en el Banco Provincia.
- j) Que los libros donados por un profesional de la localidad, sean destinados para la Biblioteca de la Agremiación.

12. Ante el pedido de aclaración formulado por el Sr. Manuel Aldonate, que si la asamblea era o mejor expresado tenía carácter deliberativo o informativo. Arancibia responde que ella es de mera información y de recepción de sugerencias. Aclarada tal situación, se siguió con la recepción de iniciativas. No obstante haber aclarado el concepto de mera recepción e información de la Asamblea, el Sr. Bulacio objetó algunos de los anhelos enunciados por la Srta. David, a la que se sumó Aldonate.

13. Abordado el tema “Reconocimiento de viaje por transporte y residencias” se destacó que aún no se liquidó a la gran mayoría de colegas, que merecen ser pagados el transporte y residencia del año 1955. Se pidió se gestione el pago no efectuado, destacando el Sr. Bulacio, que existe una planilla adicional n° 18, que por circunstancias ignoradas, nunca llega a destino. Se solicitó se gestione también la reglamentación del reconocimiento del pago de transporte y residencia del 56 y 57, lo mismo del año en curso. Se solicita que se estudie la publicación y clasificación real de cada escuela, para evitar una falsa apreciación y calificación. El Sr. Rivero invitó a los interesados que hagan llegar sugerencias y un verdadero plan para lograr la calificación de las escuelas, para ser llevado a las autoridades respectivas.

14. Que se gestione el nombramiento de la maestras por parte del HCE para que salga del estado de ad-honorem en que se encuentran las colegas que trabajan en la Escuela de Santa Anta. Interesar también para que se les pague los servicios prestado.

15. Para dar a conocer la acción cumplida por la actual CD hasta la fecha, habló el presidente quien expuso en forma clara la postura del gremio hasta la fecha. Leyó la nota presentada al gobernador, cámara de senadores, procurando concretar la reivindicación social y económica del magisterio de que el consejo sea integrado por maestros capaces e idóneos ante la ley.

Al terminar la reseña de la labor cumplida mocionó el Sr. Aldonate, para que se enviara copia de la presentación de la nota de la CD a las autoridades sobre la integración del Consejo a todas las escuelas para hacer con ello una encuesta; pero la Sra. [ilegible] abogó para que se [ilegible] a la CD en tal misión.

Ante un pedido de informe del estado financiero de la entidad en la actualidad, fue invitada a una corta aclaración la Srta. Mustafá, para que diga el motivo por el cual no se le descontaba la cuota sindical al maestro, que expresó que aún ella misma ignora el motivo por el cual no se hace efectivo tal descuento. La misma Srta. Mustafá solicitó al Sr. Presidente para que diga si acaso hubo fraude en el manejo de fondos de la entidad durante su gestión, contestando el señor Arancibia que ya no se debe hablar sobre tal asunto, ya que toda la rendición de cuentas fue aprobada en su oportunidad por los delegados. Aclarando porqué no se hizo efectiva la cuota sindical, explicó el secretario

gremial Bulacio que si ello se debía a la falta de autorización por parte del agente. Que es necesario llenar la ficha de afiliación en la cual se autoriza al descuento.

Aclara también sobre el mismo tema el Sr. Rivero, de que, según le informaran en Contaduría, se debe a que falta el personal necesario para hacer tal descuento.

Sugiere Muñoz que se solvente la designación de dos empleados dentro del consejo, para que hagan el trabajo de descuento de la cuota sindical.

16. Mociónó Aldonate, de que la agremiación reanude contacto con la Confederación de Educadores Provinciales al cual está afiliada. Lo que responde Arancibia diciendo que el magisterio tucumano inició un movimiento nacional para superar al maestro en sus distintos aspectos. Que se invitará al Sr. Aldonate, para que informe los objetivos de tal entidad.

Resumiendo la labor de la CD, el presidente exhortó a la unidad y firmeza del gremio. Que cada maestro lleve su ficha de afiliada. Que ya se llamará al delegado departamental, para instruirla en sus funciones.

Interrogado sobre qué actitud tomaría el gremio en caso de no cumplirse la ley de educación, por la designación de autoridades, respondió Arancibia que la CD y el gremio sabrán hacer cumplir la ley y que las circunstancias del caso, será la que aconseje la medida.

Exhortan de una vez más para que el magisterio sea un gremio fuerte y unido.

Se levanta la sesión.

## **ACTA N° 46, 14/11/1962**

Informe sobre la marcha del paro de actividades; el presidente informa que las cifras registradas son considerables.

Visto que los delegados no cumplen con una disposición de la última asamblea, la CD resuelve conminar a los delegados escolares a los efectos que comuniquen por nota al gremio, los casos de inconducta de sus afiliados.

Partido demócrata cristiano; el presidente da lectura a la nota que dicha entidad envió al ministro del interior en la que se hace alusión, entre otros puntos, a la grave situación del magisterio tucumano.

CGT; se da lectura a la nota que esta entidad enviara al gremio, en la que solidarizándose con los justos reclamos del gremio, ofrecen su tribuna para el día 16 del corriente.- La CD resuelve aceptar, para que se haga uso de la palabra en esa ocasión.

Alumnos de la Escuela Normal solicitan la sede para efectuar [ilegible] en las que pondrán a consideración el conocimiento del presupuesto para Educación; ante tan loable gesto de solidaridad y comprensión hacia la docencia y la escuela pública, la CD resuelve acceder a tal medido.

Se presenta un recurso de amparo ante el tribunal del Trabajo.

Solicitar la reincorporación de la Sra. de Moreno Campos.

Se levanta la sesión.

## **ACTA N° 134 28/06/1966 P. 120-121**

El Sr. Arancibia anuncia que se va a tratar las novedades producidas en el día de la fecha e inmediatamente pasa a informar que en nombre del general Otero, nuevo gobernador de Tucumán, ATEP fue invitado a una entrevista a las 11 horas.

Directivos del gremio se constituyeron en la Casa de Gobierno, donde se reunieron también otros gremios. El general Otero fue sumamente breve en su exposición.

Señaló que el ejército se vio obligado a tomar la responsabilidad de encaminar al país por la senda que corresponde. Destacó que se respetaría el derecho de los gremios y que quiere que las actividades de los mismos se muevan dentro de la ley. El derecho de huelga va a ser respetado.

El problema que nos aflige no puede ser solucionado de inmediato por estar cerrados los bancos, pero una vez salvada esa situación se arbitrarán inmediatamente el pago de sueldos.

Todos los gremios presentes prometieron su apoyo al nuevo gobierno siempre que se cumplan sus palabras. ATEP manifestó que los maestros somos contrarios al cierre de escuelas públicas, pero las circunstancias por todos conocidas nos obligan a hacerlo.

Señala el Sr. Arancibia que el trato que se nos brindó fue sumamente amable y deferencial, sin presión de ninguna naturaleza.

ATEP señaló en la oportunidad que teníamos convocada una Asamblea para mañana 29. Se nos pidió que esperáramos hasta las 18 horas del día de hoy, puesto que se vería si será posible realizarla. A la hora indicada el Sr. Arancibia se hizo presente concediéndole la autorización correspondiente.

Después de la entrevista con el General Otero ATEP considera conveniente levantar la medida de fuerza y así se lo comunicó a la mayor brevedad al mayor Santillán. Esta medida tomada por los directivos se pone a consideración de la CD, la que es aprobada por unanimidad. Arancibia informa que también se le informó a la presidenta del Consejo de Educación la resolución del gremio de levantar el paro. Se levanta la sesión.



## **ASAMBLEA N° 75, 11/06/1971**

Asistencia de 139 delegados

Arancibia inicia la sesión refiriéndose a las notas enviadas al gobernador de la provincia y presidente del Consejo de Educación, responsabilizando a ambos de la situación actual del magisterio provincial.

Aclara la postura que asumirá el maestro después del movimiento, en lo que se refiere a la recuperación del tiempo perdido y señala la acción futura de la Federación de Padres.

Alude a los decretos nacionales que autorizan a las provincias a incrementar los índices según las posibilidades locales.

Compara la escala de sueldos de los empleados policiales que superan ampliamente los posibles incrementos de sueldos de los maestros lo que provoca la reacción de la asamblea.

Da lectura a la nota enviada al consejo de educación para que deje sin efecto la medida sobre desfile escolar el 8 de julio debido a la precaria situación económica de la provincia.

Se refiere luego a los paros de la semana, en que se notó la acción de las delegadas para que éste tuviera éxito.

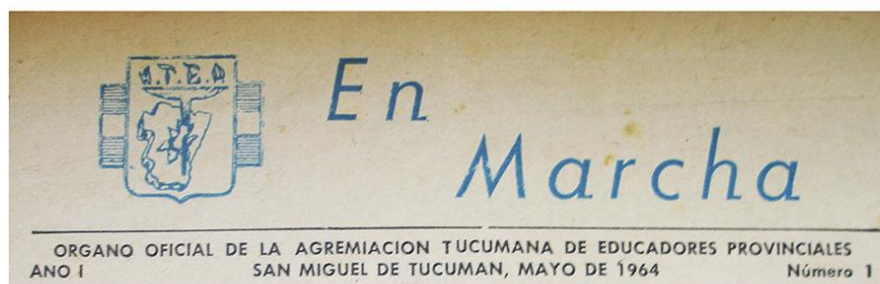
Señala que visitaron varias escuelas y que el paro en el orden nacional fue realmente extraordinario ya que superó los cálculos más optimistas.

Destaca que ATEP solicitará al Acuerdo de Nucleamientos que trate de determinar un plan de lucha.

Cede la palabra a la asamblea para que adopte las nuevas medidas de fuerza. La delegada de la escuela Miguel Lillo mociona un paro por tiempo indeterminado. Después de las precisiones de Arancibia, llamando a la reflexión y señalando la conveniencia de proceder en forma orgánica, se resuelve por gran mayoría un paro por 72 horas (martes, miércoles y jueves).

## ANEXO II

### *ATEP en Marcha:*





# Firme Decisión de la Docencia

## Aprobó un Plan en Pro de sus Derechos

En el congreso realizado por CTERA en la ciudad de Santa Fe se ha analizado detenidamente la situación por la que atraviesa el magisterio en todo el país, aprobándose en la oportunidad un programa de reclamaciones objetivo, concreto y en directa relación con los problemas que se vienen debatiendo en el ámbito educacional y sobre la base de los cuales se ha logrado la más amplia unificación del movimiento gremial docente nacional.

Como lo hemos afirmado en más de una oportunidad, los maestros no reclamamos absolutamente nada que pueda significar ni una negación ni un agrietamiento del Pacto Social, sino sencillamente la vigencia plena, total, de leyes anteriores a ese acuerdo y que, arbitrariamente, fueran suspendidas en algunos aspectos sumamente importantes en relación con nuestra condición profesional. En materia jubilatoria, lo cual es una de las cuestiones que en estos momentos se encuentra en discusión, no pedimos sino que se restituya a la ley 14.473 su artículo 52, suspendido por el gobierno militar; y que, en cuanto se refiere al régimen salarial, que se respete el régimen establecido por el Estatuto del Docente. Es decir, los maestros estamos empeñados en lograr que se afiancen las instituciones republicanas por medio del funcionamiento integral de las leyes nacionales. Sobre el particular, CTERA en el orden nacional, y ATEP en el provincial, hemos realizado gestiones ante las autoridades educacionales, del gobierno, de la Legislatura, del Congreso de la Nación; y, a pesar de que en todos esos ámbitos se reconoció la justicia de nuestros planteamientos, hasta estos momentos no se han dictado las medidas que corresponden para satisfacer nuestras justas y legítimas aspiraciones. En Tucumán, por ejemplo, se ha coincidido con ATEP que nada justifica que se siga descontando a los maestros el aporte del 14 % para jubilaciones, que es el más alto que rige en el país, pero, y a pesar de las promesas, no se ha dictado la medida que reboje, ni tampoco las que corresponden para devolver a los docentes el régimen previsional establecido por el Estatuto del Docente de la provincia. En lo que hace a la escuela pública, tampoco se han adoptado todas las providencias necesarias para asegurar el normal aprovisionamiento de útiles y elementos de trabajo, al extremo que hasta se carece de planillas y demás papelería burocrática.

Es necesario, en consecuencia, señalar la necesidad de que los problemas que estén afectando a la docencia sean tratados en el plano de realizaciones inmediatas porque todos ellos tienen una incidencia decisiva en la vida de la educación pública. Nada justifica, a esta altura del proceso histórico, el mantenimiento de condiciones que pueden traducir un menoscabo a la función que tiene asignada la escuela pública en la dura tarea de la liberación nacional y en su condición de formadora de valores útiles e imprescindibles en todo proceso de desarrollo, de cambio y de transformación. El magisterio ha dado muchas pruebas de su responsabilidad frente a los momentos que vive nuestro país, tratando sistemáticamente de ser factor positivo en lograr la plenitud de la recuperación institucional y el mantenimiento del gran proceso abierto al retomar el pueblo la conducción de los destinos nacionales.



SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Agosto de 1974

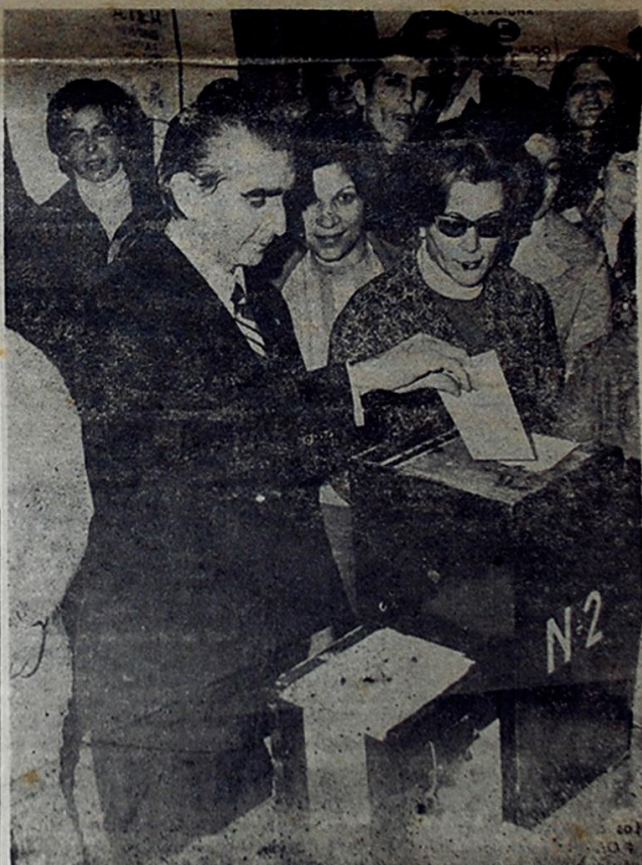
Director: FRANCISCO ISAURO ARANCIBIA

Nº 6

ORGANO OFICIAL DE LA AGREMIA ION TUCUMANA DE EDUCADORES  
PROVINCIALES (A T E P) — PERSONERIA GREMIAL 518

CONGRESO 295

TELEFONOS: 17.145 - 28.076



El presidente de ATEP, Francisco Isauro Arancibia, vota en los comicios en los que resultó reelecto para un nuevo periodo de acción gremial



# Por un Retiro con Justicia

## Nada Justifica Postergar los Derechos Previsionales

Se encuentra a consideración de la Legislatura de la provincia el proyecto de ley por el cual se restituyen los derechos previsionales a los docentes provinciales, suspendidos en forma arbitraria y a través de una resolución inconsulta y antiprogresista por uno de los gobiernos locales del régimen militar reemplazado el 25 de mayo de 1973. De acuerdo a informaciones inobjectables, dicho proyecto —que ya debió ser tratado y aprobado, toda vez que cuenta con el apoyo público de todos los sectores legislativos—, será considerado en breve.

Cabe destacar, además, que las provincias de Córdoba y la de Santiago del Estero, ya han resuelto favorablemente el problema, lo mismo que anteriormente lo hicieron otras provincias. Asimismo, es de suponer que también en el orden nacional la situación va a ofrecer un cambio, por cuanto no hay razones lógicas para mantener la situación, desgraciadamente heredada por el gobierno constitucional como resultado de la política social antiprogresista que caracterizó a su régimen anterior.

Al fundamentar nuestra reclamación, ATEP planteó el problema con toda claridad. La jubilación de los 25 años de servicios sin límite de edad y con el 82 por ciento móvil, fue un acto de justicia y el resultado de estudios serios y detenidos, y no una improvisación ni un capricho gremial. Fue, asimismo, una necesidad fundamental de la escuela pública. La discusión parlamentaria del problema aportó antecedentes decisivos e irrefutables en el establecimiento de los principios característicos del derecho previsional de la docencia, ya que se basaron en la opinión de investigadores, estudiosos y científicos, que analizaron la cuestión desde todos los puntos de vista, incluyendo al relacionado con el del desgaste psíquico que produce el ejercicio de la docencia, así como el deterioro general de la salud física.

La conquista tendió, además, a producir un necesario estado de permanente renovación de los planteles educadores. Con la jubilación en esos términos, ya no había razones, ni justificativos, para prolongar la presencia en las aulas de docentes que habían llegado al límite de su capacidad física e intelectual. Al suspenderse el 82 por ciento móvil y convertirlo en un monto equivalente a porcentajes sobre mejores sueldos, y en momentos de agudos procesos inflacionarios y, sobre todo, de permanente y abultado encarecimiento del costo de vida, resultó que las jubilaciones no alcanzaban para cubrir las mínimas necesidades del hogar. La consecuencia fue de que los docentes trataran de evitar su jubilación hasta más allá de toda posibilidad de resistencia y que, en consecuencia, la escuela se mantuviera en un proceso de no renovación de sus valores humanos. Esto, por supuesto, no benefició ni beneficia a la educación argentina, que se está privando del esfuerzo, de la inteligencia y de la capacidad creadora de los nuevos grandes núcleos docentes, tanto que el ingreso generalmente está reservado a docentes que superan la edad juvenil. Este aspecto no ha sido valorado suficientemente por quienes han tenido en sus manos el desarrollo de la política previsional docente; menos por los técnicos de presupuestos, que imponen medidas sobre la base de los números concretos, y no sobre las realidades y necesidades nacionales. Porque



S. M. Tucumán, Setiembre-Octubre de 1974

Director: FRANCISCO ISAURO ARANCIBIA

Nº 7

ORGANO OFICIAL DE LA AGREMIAION TUCUMANA DE EDUCADORES  
PROVINCIALES (A T E P) — PERSONERIA GREMIAL 518

CONGRESO 295

TELEFONOS: 17.145-28.076



El Presidente de ATEP, Francisco Isauro Arancibia, usa de la palabra durante la reunión de camaradería efectuada con motivo de la celebración del Día del Maestro, y a la que asistió una gran cantidad de docentes provinciales y de las demás jurisdicciones y estamentos universitarios

## Protesta ATEP por un Doble Descuento Social

La Agrregación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) dio conocer una declaración protestando enérgicamente por haberse repetido en el

ago de los haberes de octubre, el descuento para el subsidio de salud a los sueldos de los maestros afiliados a la obra social del gremio.

al problema de la educación, en el aspecto previsional, o en cualquiera de los demás, no se lo debe medir con la cinta métrica del debe y el haber, del déficit y del superávit, pues se trata del manejo de valores imponderables, trascendentes y que traducen la realización de procesos creadores fundamentales en la vida de la Nación y de sus provincias. Tenemos, entonces, la seguridad de que la Legislatura de Tucumán no demorará más la resolución por la cual se dejen sin efecto las medidas retrógradas adoptadas por el gobierno militar y que han condenado a la miseria a muchos maestros y a la escuela pública a la privación del aporte escolar

Destaca ATEP que ese doble descuento se ha registrado a pesar de las múltiples gestiones realizadas por las autoridades del gremio ante las autoridades correspondientes, a objeto de que el hecho, ocurrido ya en relación con los sueldos de setiembre, no se repitiera. De inmediato, se realizaron las presentaciones del caso ante las autoridades gubernativas, las que informaron a ATEP que se han adoptado las providencias para que al abonarse los sueldos de noviembre dicho doble descuento no vuelva a practicarse.



## ¡Esta es una Conquista de ATEP!

La labor desarrollada por ATEP para lograr la plena vigencia de la ley de equiparación para los maestros provinciales ha sido larga, incansable y firme. Un gobierno recalcitrante ultramontado y paleontológico en materia de ideas progresistas y de política cultural sana y honesta, como fuera el gobierno de Celestino Gelsi, sabotó abierta y desfachadamente la magnífica conquista lograda por ATEP con el concurso unitario de todos los maestros provinciales. Posteriores intervenciones, también reaccionarias y enemigas de la educación y del magisterio, postergaron en forma ineficaz que esta ley, que gozaban todas las provincias, beneficiara a los docentes de Tucumán.

Pero ATEP, con el apoyo de más del 90 por ciento del magisterio activo de la provincia, no desmayó en su prédica, y ahora puede anunciar que a partir del 1º del corriente se beneficia con la escala de sueldos que publicamos a continuación. Esta conquista es prueba concluyente sobre la necesidad de mantener siempre la acción energética en procura de las conquistas económicas y sociales y de la necesidad de que el gremio pase por encima de todos los grupos que, al servicio de intereses que no entramos a discutir, carecen de inquietudes por los verdaderos y reales problemas del maestro y de la escuela.

Esta, repetimos, es una conquista de ATEP. Pero como ATEP no detiene sus marchas, está de nuevo en la acción para que se logre la inmediata aplicación del índice 315 y los posteriores que se consiga para todo el magisterio nacional. A todos los maestros de la provincia invitamos, pues, a reforzar su acción gremial a través de ATEP para seguir logrando las conquistas a que tienen derecho los maestros.

Antigüedad	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D
<b>DIRECTORES</b>				
Hasta 2 años .....	10.725.-	12.485.-	14.245.-	17.765.-
De 2 a 5 años .....	12.045.-	13.805.-	15.565.-	19.085.-
De 5 a 10 años .....	13.365.-	15.125.-	16.885.-	20.405.-
De 10 a 15 años .....	14.685.-	16.445.-	18.205.-	21.725.-
De 15 a 20 años .....	16.005.-	17.765.-	19.525.-	23.045.-
Más de 20 años .....	17.765.-	19.525.-	21.285.-	24.805.-
<b>MAESTROS DE INSTRUCCION Y DE MANUALIDADES</b>				
Hasta 2 años .....	8.250.-	9.515.-	10.780.-	13.310.-
De 2 a 5 años .....	9.178.75	10.463.75	11.728.75	14.258.75
De 5 a 10 años .....	10.147.50	11.412.50	12.677.50	15.207.50
De 10 a 15 años .....	11.096.25	12.361.25	13.626.25	16.156.25
De 15 a 20 años .....	12.045.-	13.310.-	14.575.-	17.105.-
Más de 20 años .....	13.310.-	14.575.-	15.840.-	18.370.-

### MAESTROS ESPECIALES

Antigüedad	10 hs.	11 hs.	12 hs.	10 hs.	11 hs.	12 hs.	10 hs.	11 hs.	12 hs.	10 hs.	11 hs.	12 hr.
Hasta 2 años	6.600.-	7.287.50	7.975.-	7.535.-	8.222.50	8.910.-	8.470.-	9.157.50	9.845.-	10.340.-	11.027.50	11.715.-
De 2.5 "	7.301.25	7.988.75	8.676.25	8.236.-	8.923.50	9.611.-	9.171.25	9.859.-	10.546.50	11.041.25	11.728.75	12.416.25
" 5-10 "	8.002.50	8.690.-	9.377.50	8.937.-	9.625.-	10.312.50	9.872.50	10.560.-	11.247.50	11.742.50	12.430.-	13.117.50
" 10-15 "	8.703.75	9.391.25	10.078.75	9.638.75	10.326.25	11.013.75	10.573.75	11.261.25	11.948.75	12.443.75	13.131.25	13.818.75
" 15-20 "	9.405.-	10.092.50	10.780.-	10.340.-	11.027.50	11.715.-	11.275.-	11.962.50	12.650.-	13.145.-	13.832.50	14.520.-
Más de 20 "	10.340.-	11.027.50	10.780.75	11.275.-	11.962.50	12.650.-	12.210.-	12.897.50	13.585.-	14.080.-	14.767.50	15.455.-

Se determina de la siguiente forma: ubicarse en la planilla de sueldos para maestros de instrucción y a la suma que corresponde a su antigüedad y zona, agregarle las siguientes cantidades: Jardín de Infantes: 4 puntos o sea \$ 1.100.-; Escuela Hospital: 6 puntos o sea \$ 1.850.-; Escuelas diferenciales en general: 8 puntos o sea \$ 2.200.-.

## ATEP apoyó al gremio azucarero en la reclamación de derechos

En una asamblea realizada por la Agrupación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), se resolvió el apoyo amplio, solidario y activo con los trabajadores azucareros en conflicto, reclamándose la satisfacción de las reivindicaciones gremiales contenidas en la programática inmediata que viene sosteniendo FOTIA y, asimismo, se dispuso expresar el público reclamo docente de medidas que signifiquen el cese de la intervención que pesa sobre la central azucarera.

Al iniciarse la asamblea, usó de la palabra el presidente de ATEP, don Francisco Isaura Arancibia, quien manifestó que la comisión directiva había convocado a la asamblea para tratar la situación gremial azucarera, por entender que el problema que afecta a ese sector de trabajadores es una cuestión que interesa y atañe a todos los sectores del trabajo y al pueblo de la provincia. Analizó seguidamente

la problemática azucarera, destacando las luchas obreras en procura del mejoramiento social y económico de los trabajadores, quienes no han llegado hasta la fecha a tener una real participación de las grandes utilidades de la explotación azucarera, como lo revelan las condiciones en que se debaten, ya sea en cuanto a salario, como a vivienda, educación, atención de la salud, etc. Destacó que para la docencia, el problema de los trabajadores azucareros es aún más directo, por cuanto de las condiciones en que se desenvuelven corresponde la posibilidad de aprovechar los esfuerzos del magisterio en procura de la educación y el mejoramiento espiritual de la población infantil, castigada por los flagelos de la desnutrición, de la deserción escolar y de la mortalidad. Puso de relieve posteriormente la naturaleza de las reclamaciones actuales de FOTIA que consideró de estricta justicia, ya que las zafra-

azucareras vienen arrojando ganancias fabulosas que no se vuelcan siquiera en mínima parte para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Es innegable también, dijo, que es una medida de sana política social satisfacer el reclamo de un obrero y medio por mil recursos de caña, ya que lo contrario es ahondar la situación de paria y de golondrina que pesa sobre los obreros del surco, víctimas de una marginación que es una ofensa a la dignidad humana. Es identificación con los problemas y las necesidades de Tucumán el pedido de FOTIA de acrecentamiento del parque industrial azucarero y, por lo menos, el funcionamiento del Ingenio Esperanza, como es interés de la Nación lograr que CONASA sea la gran empresa estatal nacional capaz de realizar las experiencias que nos conduzcan definitivamente a la socialización total de la industria azucarera. Recalcó, más adelante, el papel de

la educación en el medio social y las grandes dificultades con que tropieza se originan precisamente en la marginación social y económica de los trabajadores, tanto de fábrica como de surco. Señaló, que las conquistas que logran los trabajadores azucareros repercutirán en todo el complejo económico de la provincia y significarán una reactivación cuya necesidad se hace sentir desde 1966, en que se aplicó la política de arrasamiento de las fuentes de trabajo azucareras.

Luego se generalizó la discusión en torno al problema, resolviéndose finalmente la medida que daría consignada más arriba, aclarándose, además, que el personal de cada escuela patrocinará reuniones en los lugares en que están instaladas las escuelas con los sindicatos locales, centros vecinales y toda institución de bien público, a los efectos de considerar la inmediata organización de una solidaridad activa, con cese de actividades si fuese necesario, en apoyo de los trabajadores azucareros.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

### Fuentes inéditas

Archivo ATEP:

- Libros de actas de reunión de la comisión directiva:  
Tomo I, acta N°1 (26/11/1949) – acta N° 59 (29/03/1953), folios 1-86;  
Tomo II, acta N° 60 (07/04/1953) – acta N° 180 (25/06/1960), folios 1-288;  
Tomo III, acta N° 1 (23/08/1960) – acta N° 90 (02/03/1964), folios 1-300;  
Tomo IV, acta N° 91 (02/05/1964) – acta N° 195 (17/06/1968), folios 1-300
- Libro de actas de reunión de asambleas ordinarias y extraordinarias de delegados sindicales:  
Tomo I, acta N° 1 (25/08/1962) – acta N° 113 (18/11/1975), folios 1-313
- ATEP: Memoria y balance de 1973. Periodo comprendido entre 01/04/1972 - 31/03/1973

Archivo de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán:

- Diario de sesiones de la honorable cámara de diputados  
Primer período, gobernadores Carlos Domínguez, Fernando P. Riera y Luis Cruz: 24/05/1946-04/03/1955  
Segundo período, gobernadores Celestino Gelsi y Lázaro J. N. Barbieri: 01/05/1958-28/09/1966  
Tercer período, gobernadores Óscar E. Sarrulle y Amado N. Juri: 19/02/1971-24/03/1976

Archivo del Senado de la Nación Argentina

- Diario de sesiones de la Cámara de senadores del Congreso de la Nación Argentina: Sesiones ordinarias, 1974

### Censos, estadísticas y publicaciones oficiales

- *Argentina: la educación en cifras 1958-1967*, Secretaría de Estado de Cultura y Educación, Poder Ejecutivo Nacional
- *Argentina: la educación en cifras, 1961-1970*. Ministerio de Cultura y Educación, Poder Ejecutivo Nacional
- *Argentina: la educación en cifras, 1963-1972*. Ministerio de Cultura y Educación, Poder Ejecutivo Nacional
- Censo nacional de población, 1960
- *Estadísticas de la educación: establecimientos, alumnos y docentes por dependencia, repartición y jurisdicción, 1964-1973*. Ministerio de Cultura y Educación, República Argentina
- *Estadísticas de la educación: comunicados para la prensa*. Departamento de estadística, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1974
- *Estadísticas de la educación: comunicados para la prensa*. Departamento de estadística, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1976
- *Estadísticas de la educación: comunicados para la prensa*. Departamento de estadística, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1977
- *Estadísticas de la educación: comunicados para la prensa*. Departamento de estadística, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1978

- *La enseñanza en la República Argentina: datos estadísticos al 30 de junio de 1951*. Ministerio de educación de la Nación, Buenos Aires, 1952
- “Perón habla a los docentes”, *Boletín de comunicaciones del Ministerio de Educación de la Nación*, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, n° 297, 1953

### **Documentos educativos**

- FORADORI, Américo, *Informe Final. Sobre las actividades profesionales, sociales y culturales del seminario sobre planificación y finanza escolar*. Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza- CAMYP, Buenos Aires, 1964
- *Informe final sobre las actividades profesionales, sociales y culturales del seminario sobre planificación y finanza escolar*. CMOPE-CAMYP, 1964
- *La Educación*. División de educación, Organización de Estados Americanos, 1958-1960
- *Revista de Educación*. Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, 1958
- *Revista de la Agrupación del Docente Argentino*. ADA, Buenos Aires, 1953
- *Seminario sobre planeamiento integral de la educación*. Centro nacional de documentación e información educativa, Ministerio de Educación y Justicia, Buenos Aires, 1963

### **Publicaciones sindicales y de organizaciones políticas**

- *ATEP en Marcha*: mayo 1964, noviembre 1964, octubre 1970, agosto 1974, septiembre-octubre 1974
- *CGT de los ARGENTINOS. Por una patria Justa, Libre y Soberana, La Patria Socialista*, 1968
- *Educación popular*, mayo-junio 1971; marzo-abril 1972; mayo-julio 1973; mayo-julio 1974; mayo-julio 1975
- *La tiza*, SADOP: julio 1997, agosto 2005
- *Nuestra Palabra*. Órgano del Partido Comunista, 1968-1975
- *Órgano oficial de la CGT-A*: N°1 mayo 1968 – N° 55 febrero 1970
- *Propósitos*, Buenos Aires, enero 1972
- *Revista de la Agrupación del Docente Argentino*, Buenos Aires, 1953
- *SADOP y los argentinos, 1936-1989*. SADOP, Buenos Aires, 1995

### **Diarios provinciales**

- Diario *El Litoral*, Santa Fe, 1949-1957
- Diario *La Gaceta*, Tucumán, 1949-1976
- Diario *Noticias*, Tucumán, 1973-1975

### **Diarios nacionales**

- Diario *Clarín*, Buenos Aires, 1949
- Diario *Correo de la tarde*, Buenos Aires, 1962
- Diario *La Nación*, Buenos Aires, 1969-1975
- Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 1974-1975
- Diario *La Prensa*, Buenos Aires, 1961-1973



## Revistas

- *Análisis*, Buenos Aires, julio 1969-enero 1972
- *Confirmado*, Buenos Aires, diciembre 1975-febrero 1977
- *Contorno*, Buenos Aires, 1954-1959
- *Cuadernos de Crisis*, Buenos Aires, diciembre 1975
- *Cuestionario*, Buenos Aires, septiembre 1975-junio 1976
- *Histonium para el maestro*, Buenos Aires, abril 1969-septiembre 1971
- *Nueva Plana*, Buenos Aires, octubre 1972-marzo 1973
- *Nuevo Confirmado*, Buenos Aires, agosto 1973
- *Nuevos Aires*, Buenos Aires, sept./oct./nov. 1971
- *Panorama*, Buenos Aires, 1974
- *Periscopio*, Buenos Aires, septiembre 1969-noviembre 1969
- *Primera Plana*, Buenos Aires, 1965-1976
- *Pulso*, mayo 1972

## Entrevistas

- **Amalia Arancibia**, hermana de Francisco I. Arancibia, docente Laínez y, en el momento de la entrevista, responsable de la Biblioteca pública de Monteros, 09/08/2009, Monteros
- **Gladis Arancibia**, hermana de Francisco I. Arancibia y militante de ATEP, 27/10/2008, San Miguel de Tucumán
- **Italia Arancibia**, hermana de Francisco I. Arancibia, docente provincial y miembro de la Comisión Directiva de ATEP hasta el golpe de 1976, 04/11/2008 y 09/08/2009, San Miguel de Tucumán-Monteros
- **Gerardo Bavio**, intendente de Salta durante el Operativo Independencia y militante de Montoneros, 22/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Pablo Benito Brito**, dirigente de FOTIA y antiguo vocal de la dirección, 24/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **José Luis Bussi**, hijo de Antonio D. Bussi y miembro de Fuerza Republicana. Ha ocupado cargos públicos en distintas instancias políticas. 17/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Ernesto Antonio Camaño**, detenido-desaparecido durante el Operativo Independencia, era secretario general de obreros del surco de la industria azucarera en el ingenio Santa Lucía. 29/11/2006, Monteros
- **Juan Chocobar**, miembro de la Unión de Estudiantes Secundarios y detenido durante el Operativo Independencia, 29/11/2006, Monteros
- **Juan Ferrante**, docente universitario y sacerdote perteneciente a la corriente de la teología de la liberación, 22/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Manuel Ferreyra**, secretario personal de Francisco I. Arancibia y gerente de ATEP en el momento de realizarse la entrevista, 27/10/2008, San Miguel de Tucumán
- **Valentín Mario González**, secuestrado durante el Operativo Independencia, militante del gremio del ingenio Santa Lucía, Monteros, 28/11/2006
- **Marta Gómez**, militante de Madres de Plaza de Mayo, 09/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Amancio Evangelista Guzmán**, médico cirujano, jefe del servicio de guardia del hospital de Monteros durante el Operativo Independencia, 01/11/2006, San Miguel de Tucumán



- **Marta Jódar**, maestra de educación infantil. A la edad de 16 años vivió la desaparición forzada de su padre, dirigente gremial de la empresa de refrescos en la que trabajaba. 20/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Julio Juárez**, repartidor de diarios y secretario general del comité capital de Tucumán durante el Operativo Independencia, 14/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Pedro Domingo Luna**, empleado administrativo de FOTIA, 23/10/2006, San Miguel de Tucumán
- **Jorge Maciel**, periodista y miembro de Fuerza Republicana, 16/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Héctor Manfredo**, miembro de la dirección del Partido Comunista en Tucumán, 27/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **María Angélica Mazzamuto**, docente retira y antigua militante del Peronismo de Base, secuestrada junto con su marido durante el Operativo Independencia, 18/11/2006, San Miguel de Tucumán
- **Aurora Teresa Racedo de Silberstein**, miembro de la comisión directiva de ATEP hasta el golpe de 1976. 12/08/2009, San Miguel de Tucumán
- **Carlos Mariano Zamorano**, abogado tucumano especialista en Derechos Humanos, Buenos Aires, 13/12/2006

## Bibliografía citada y consultada

AA.VV., “Reforma educativa y luchas docentes en América Latina”, *Educación Social*, Vol. 25, N° 89, 2004, pp. 1251-1274

AA.VV., *De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina, 1776-1990*. Edilab, Buenos Aires, 2002

ACHA, Omar, *Las huelgas bancarias de Perón a Frondizi (1945-1962): contribución a la historia de las clases sociales en la Argentina*. Ediciones CCC, Buenos Aires, 2008

ACHA, Omar, “Trabajo y delito en las empleadas domésticas durante el primer peronismo: repensar las nociones de lucha y conciencia de clase”. Disponible en: [http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/trabajadoresperonismo\\_acha.pdf](http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/trabajadoresperonismo_acha.pdf) (Consultado el 01/07/2015)

ACHA, Omar, “Notas sobre la evolución cuantitativa de la afiliación en la Acción Católica Argentina (1931-1960)”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/acha.pdf> (Consultado el 28/10/2010)

ACRI, Martín, “Las asociaciones y gremios docentes de la Argentina. La situación laboral, la organización y las primeras luchas (1881-1930)”, Tesis de Maestría, FLACSO-Argentina, 2012. Disponible en: <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4519/2/TFLACSO-2012MAA.pdf> (Consultado el 07/07/2015)

ACRI, Martín (Comp.), *Conflictos pedagógicos, lucha y organización de los docentes en Argentina, 1881-1973*. Barcos Ediciones, Buenos Aires, 2012

ADAMOVSKEY, Ezequiel, “El régimen peronista y la Confederación General de Profesionales: orígenes intelectuales e itinerario de un proyecto frustrado (1953-1955)”, *Desarrollo Económico*, Vol. 46, N° 182, julio-septiembre, 2006

AGUILAR, Susana, *Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento. FEB 50 años*. FEB, La Plata, 2010

ALLIAUD, Andrea, *Los maestros y su historia. Los orígenes del magisterio argentino*. Granica, Buenos Aires, 2007

ALTAMIRANO, Carlos, *Arturo Frondizi o el hombre de ideas como político*. FCE, Buenos Aires, 1998

ALTHUSSER, Louis, *Ideología y aparatos ideológicos de Estado*. Nueva visión, Buenos Aires, 1974. Disponible en: [http://www.ucm.es/info/eurotheo/e\\_books/althusser/index.html](http://www.ucm.es/info/eurotheo/e_books/althusser/index.html) (Consultado el 28/03/2012)

ÁLVAREZ, Beatriz, “La evolución de la desigualdad en los ingresos en Tucumán (1895-1914)”. Disponible en:

<http://www.fcs.edu.uy/archivos/B.%20%20C3%81lvarez,%20La%20evoluci%C3%B3n%20de%20la%20desigualdad%20de%20ingresos%20en%20Tucum%C3%A1n%20%281895-1914%29.pdf> (Consultado el 01/06/2012)

ÁLVAREZ, Beatriz y CORREA DEZA, María Florencia, “La movilidad social en Tucumán, Argentina, 1869-1895”, *América latina Historia económica*, N° 1, 2013, pp.126-157

ANZORENA, Óscar, *Tiempo de violencia y utopía, 1955-1975*. Contrapunto, Buenos Aires, 1988

ARÁOZ, Ernesto M., *Vida y obra del doctor Patrón Costas. Cincuenta años de vida política argentina vistos desde Salta*. Mercatali, Buenos Aires, 1966

ASCOLANI, Adrián, “¿Apóstoles laico, burocracia estatal o sindicalista. Dilemas y prácticas del gremialismo docente en Argentina (1916/1943)?”, *Anuario de la SAHE*, n° 2, 1998-1999, pp. 87-102

BABICH, Mariano, *4 de junio de 1943: la carta que apresuró “la revolución”*. Dirple Ediciones, Buenos Aires, 1997

BADER, Melina Lazarte, “Docencia y participación sindical. Testimonios de mujeres tucumanas”, *IX Encuentro Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina-Los usos de la memoria y la Historia oral*. Disponible en: <http://www.historiaoralargentina.org/attachments/article/eho2009/Mundodeltrabajo/Lazarte%20Bader-Melina.pdf> (Consultado el 20/05/2015)

BALÁN, Jorge, “Una cuestión regional en Argentina. Burguesías provinciales y mercado nacional en el desarrollo agro-exportador”, *Desarrollo Económico*, Vol. 18, N° 69, 1978, pp. 49-87

BALÁN, Jorge, “Migraciones, mano de obra y formación de un proletariado rural en Tucumán, Argentina, 1870-1914”, *Demografía y economía*, N° 2, 1976, pp. 201-234  
BALVÉ, Beba C. y BALVÉ, Beatriz S. *El '69. Huelga política de masas. Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo*. Ediciones Razón y Revolución, Buenos Aires, 2005

BARBIERI DE GUARDIA, Marta, “Políticas oficiales, educación y género: el Instituto Técnico y la Escuela Sarmiento de Tucumán hacia los años del primer peronismo”, BONANO, Luis Marcos, *Estudios de historia social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX*, Vol. II. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2001

BARBIERI DE GUARDIA, Marta, “Reforma y representaciones colectivas: sus proyecciones en el movimiento estudiantil tucumano a comienzos de la década de 1940”, BONANO, Luis Marcos, *Estudios de historia social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX* (Vol. I). Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1999.

BARRY, Carolina, “El Partido Peronista Femenino: la gestación política y legal”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, diciembre 2007. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/12382> (Consultado el 05 abril 2011)

BEN ALTABEF, Norma E, *Educación Moralización y Control Social*. Mimeo, Tucumán, 2005

BEN ALTABEF, Norma E., “La letra de la reglamentación y las voces de la práctica en las escuelas de Tucumán en la segunda mitad del XIX”, XIV Jornadas Interescuelas de Historia, Mendoza, 2013

BERNETTI, Jorge Luis y PUIGGRÓS, Adriana, *Peronismo: cultura política y educación (1945-1955)*. Galerna, Buenos Aires, 1993

BERROTARÁN, Patricia y Bonet, María Teresa, “Opiniones, interrogantes y certezas: el peronismo bajo el prisma de los intelectuales”, BESSE, Juan y KAWABATA, Alejandro, *Grafiás del 55. Otros repartos entre recuerdo y olvido*. Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, 1997

BERROTARÁN, Patricia y POZZI, Pablo (Comp.), *Estudios inconformistas sobre la clase obrera argentina*. Ediciones Letra Buena. Buenos Aires, 1994

BIANCHI, Susana, “Iglesia católica y peronismo: la cuestión de la enseñanza religiosa (1946-1955)”, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*; Vol. 3 N°2, Julio-Diciembre, 1992. Disponible en: [http://www.tau.ac.il/eial/III\\_2/bianchi.htm](http://www.tau.ac.il/eial/III_2/bianchi.htm) (Consultado el 02/11/2010)

BIANCHI, Susana y SANCHÍS, Norma, *El partido peronista femenino*. Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1988

BIRGIN, Alejandra y DUSSEL, Inés, “Rol y trabajo docente”, *Formación docente, Aportes para el debate curricular*, p. 5. Disponible en: [http://www.opech.cl/bibliografico/Doc\\_Docente/S\\_Rol\\_y\\_trabajo\\_docente\\_Birgin-Dussel.pdf](http://www.opech.cl/bibliografico/Doc_Docente/S_Rol_y_trabajo_docente_Birgin-Dussel.pdf) (Consultado el 15/03/2015)

BISSO, Andrés, *Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial*. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2005

BLISS, Horacio W., *Evolución económica del Tucumán*. Facultad de Ciencias Económicas-UNT, Tucumán, 1972

BOLSI Alfredo, “Población, azúcar e industria rural en Tucumán, Argentina”, *Geographicalia*, N° 38, 2000. Disponible en: <http://www.unizar.es/geografia/geographicalia/bolsi.pdf> (Consultado el 28/10/2010)

BOLSI, Alfredo y PUCCI, Roberto, “Evolución de los problemas de la agroindustria del azúcar”, BOLSI, Alfredo y CAPONIO, Cecilia, *Problemas agrarios del Noroeste*

argentino (contribuciones para su inventario). Instituto de Estudios Geográficos-Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1997

BOURDÉ, Guy, "L'Etat-patron et les luttes des cheminots en Argentine (1947-1967)". *Le mouvement social*, N° 121, 1982, pp. 7-43

BOURDÉ, Guy, "La clase obrera argentina (1929-1969)", Tesis doctoral inédita, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1982

BOURDIEU, Pierre, "La démission de l'Etat", en: BOURDIEU, Pierre (Dir.), *La misère du monde*. Éditions du Seuil, París, 1993

BOZZA, Juan Alberto Domingo, "La voluntad organizada. La CGT de Los Argentinos, una experiencia de radicalización sindical", *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, N° 9, 2009, pp. 179-208. Disponible en: [http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/12431/Documento\\_completo.pdf?sequence=1](http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/12431/Documento_completo.pdf?sequence=1) (Consultado el 20/05/2015)

BRAVO, Héctor Félix, *Sarmiento, pedagogo social*. EUDEBA, Buenos Aires, 1965

BRAVO, María Celia, "Las representaciones en torno a la agroindustria y el proteccionismo en la Argentina, La cuestión azucarera en la década de 1920, *Revista digital de la escuela de historia*, N° 2, 2008, pp. 37-69

BRAVO, María Celia, "Poder provincial, dinámica regional y Estado nacional. El norte argentino entre 1852 – 1880", *Travesía, Revista de Historia Económica y Social*, Vol. 1, N° 3-4, 1999-2000, pp. 149–175

BRAVO, María Celia, "El campesinado tucumano: de labradores a cañeros", GELMAN, Jorge; GARAVAGLIA, Juan Carlos y ZEBERIO, Blanca, *Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX*. La Colmena, Buenos Aires, 1999

BRAVO, María Celia y GUTIÉRREZ, Florencia, "La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje estatal (1928-1949)", *H-industria*, N° 14, 2014, pp. 153-185

BRENNAN, James, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*. Sudamericana, Buenos Aires, 1996

BRIEZA, Hernán, *John W. Cooke: el peronismo revolucionario*. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006

CAMPLI, Daniel, "Contrastes cotidianos. Los ingenios del norte argentino como complejos socioculturales, 1870-1930", *Varia Historia*, Vol. 25, N° 41, 2009, pp. 245-267

CAMPI, Daniel, “Las provincias del Norte. Economía y sociedad”, en: LOBATO, Mirta (Dir.), *La Argentina Conservadora, 1880- 1916. Nueva Historia Argentina*, tomo V. Sudamericana, Buenos Aires, 2000

CAMPI, Daniel, “Notas sobre la gestación del mercado de trabajo en Tucumán (1800-1870)”, GELMAN, Jorge; GARAVAGLIA, Juan Carlos y ZEBERIO, Blanca, *Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX*. La Colmena, Buenos Aires, 1999

CAMPI, Daniel y BRAVO, María Celia, “Aproximación a la historia de Tucumán en el siglo XX. Una propuesta de interpretación” en: ORQUERA, Fabiola, *Ese ardiente jardín de la república*. Alción, Córdoba, 2010

CAMPI, Daniel y KINDGARD, Adriana, “La política azucarera argentina en las décadas de 1920 y 1930 y la cuestión de la 'justicia distributiva' “, *III Congreso Brasileiro de Historia Económica*, 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 1999. Disponible: [www.economia.unam.mx/amhe/memoria/mesat5/Daniel%20CAMPI%20y%20Adriana%20KINDGARD.pdf](http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/mesat5/Daniel%20CAMPI%20y%20Adriana%20KINDGARD.pdf) (Consultado el 12/10/2010)

CAMPI, Daniel y RICHARD JORBA, Rodolfo, “Las producciones regionales extrapampeanas”, BONAUDO, Marta (Dir.), *Liberalismo, Estado y Orden burgués (1852 – 1880)*. Nueva Historia Argentina, tomo IV. Sudamericana, Buenos Aires, 1999

CANTÓN, Darío y JORRAT, Jorge Raúl, “El voto peronista en 1973: distribución; crecimiento marzo-setiembre y bases ocupacionales”, *Desarrollo Económico*, Vol. 20, N° 77, abril-junio 1980, pp. 71-92

CARRERA, Nicolás Íñigo, “La clase obrera argentina a comienzos de los '30. Sistema institucional., partidos y clase: apuntes para una lectura crítica”, ponencia presentada en las *Jornadas a 40 años del Cordobazo: ciento treinta años de historia de las luchas de la clase obrera en Argentina, 1878-2008*, Córdoba, 27 y 28 de mayo de 2009. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/icarrera1.pdf> (Consultado el 28/10/2010)

CARRIZO, Gabriel, “El sindicalismo durante el primer peronismo en el interior del país. El caso del sindicato de obreros y empleados de YPF de Comodoro Rivadavia”, *Revista Pilquen*, Vol. 16, N° 2, 2013. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/spilquen/v16n2/v16n2a03.pdf> (Consultado el 15/03/2015)

CARUSO, Marcelo, “Fuentes y espacios del pensamiento pedagógico del primer peronismo. Los discursos pedagógicos del nacionalismo y de la izquierda (1943-1949)”. Informe final de investigación-Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1993

CASAL, Horacio Néstor, *La revolución del 43*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1971

CASTILLO, Christian y RAIMUNDO, Marcelo, *El 69 platense. Luchas obreras, conflictos estudiantiles y militancia de izquierda en La Plata, Berisso y Ensenada durante la Revolución Argentina*. ESE, Buenos Aires, 2012. Disponible en: <http://estudiosociologicos.org/portal/el-69-platense/> (Consultado el 23/03/2014)

CASTILLO, Hugo F; TULCHIN, Joseph S. y FALQUEVERT, Jacqueline, “Développement capitaliste et structures sociales des régions en Argentine (1880-1930)”, *Annales: Histoire, Sciences Sociales*, N° 6, 1986, pp. 1359-1384. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/27583434> (Consultado el 28/03/2009)

CAVAROZZI, Marcelo, “Populismos y ‘partidos de clase media’ “, *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 39, N°1, enero-marzo, 1977, pp.119-154

CONTRERAS, Gustavo Nicolás, “La organización sindical del personal de la administración pública nacional durante el primer gobierno peronista (1946-1955). Acuerdo, conflictos y disputas”, *Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-1976)*, 4-6 de noviembre de 2010. Disponible en: <http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD2/Contreras.pdf> (Consultado el 15/05/2015)

CONTRERAS DOMINGO, José, *La autonomía del profesorado*. Ediciones Morata, Madrid, 2001

CORREA, Antonio, *Geografía general de la Provincia de Tucumán. Conteniendo todos los últimos datos oficiales*. UNT, Buenos Aires, 1927

CRENZEL, Emilio, *El tucumanazo (1969-1974)*. Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1991.

DE LA TORRE, Carlos (h), *Historia de Tucumán*. Plus Ultra, Buenos Aires, 1987

DE RIZ, Liliana, *Concertación, estado y sindicatos en la Argentina contemporánea*. Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1987

DE RIZ, Liliana; CAVAROZZI, Marcelo y FELDMAN, Jorge, *Concertación, estado y sindicatos en la Argentina contemporánea*. CEDES, Buenos Aires, 1987

DE SANTAMARÍA, Estela B.; MORENO, María A. y SETTI, Enrique J., “El área jurisdiccional del Tucumán, su representación cartográfica y sus derroteros”, *Cuadernos de Humanitas*, N° 27, 1968, pp. 9-44

DEL CAMPO, Hugo, *Sindicalismo y peronismo: los comienzos de un vínculo perdurable*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2005

DEL CARRIL, Bonifacio, *Crónica interna de la revolución libertadora*. Emecé Editores, Buenos Aires, 1959

DI TELLA, Torcuato, *Clases sociales y estructuras políticas*. Paidós, Buenos Aires, 1974



DÍAZ ARAUJO, Enrique, *El GOU en la revolución de 1943 (una experiencia militarista en la Argentina)*. Instituto de Ciencias Políticas, Mendoza, 1970

DONAIRE, Ricardo, “El reclutamiento de los docente en Argentina: una aproximación a partir de la ocupación de sus cónyuges”, *Educ. Social.*, Vol. 34, N° 122, 2013, pp. 121-138. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/es/v34n122/v34n122a07.pdf> (Consultado el 20/05/2015)

DONAIRE, Ricardo, *Los docentes en el siglo XXI, ¿empobrecidos o proletarizados?* Siglo XXI, Buenos Aires, 2012

DONAIRE, Ricardo, “¿Desaparición o difusión de la 'identidad de clase trabajadora'? Reflexiones a partir del análisis de elementos de percepción de clase entre los docentes”, *Conflicto Social*, N° 1, 2009, pp. 135-167

DONAIRE, Ricardo, *La clase social de los docentes. Un recorrido histórico en Argentina desde la colonia hasta nuestros días*. Instituto de investigaciones pedagógicas “Marina Vilte”, Buenos Aires, 2007.

DOYON, Louise M., *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2006

DOYON, Louise, “La organización del movimiento sindical peronista”, *Desarrollo Económico*, N° 94, 1984, pp. 203-234

DUARTE DE PERÓN, Eva, *Discursos completos, 1946-1948*, Tomo I. Editorial Megafón, Buenos Aires, 1985

DUARTE DE PERÓN, Eva, *Clases y escritos completos*, Tomo III. Editorial Megafón, Buenos Aires, 1987

DUFOUR DE ORTEGA, Ana Luisa y MAZZEI DE MARTÍNEZ, Stella, “Conflictos docentes (1919-1972)”, Roig, Arturo y Satlari, María Cristina, *Mendoza, identidad, educación y ciencias*. Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, 2007

FANDOS, Cecilia y FERNÁNDEZ MURGA, Patricia, “Composición ocupacional de los compradores de tierras. Tucumán, 1800-1850”, *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, N° 13, 2000. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/185/18501313.pdf> (Consultado el 23/10/2010)

FEINMANN, José Pablo, *Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina*, tomo I. Planeta, Buenos Aires, 2010

FILMUS, Daniel y FRIGIERO, Graciela, *Educación, autoritarismo y democracia*. Miño y Dávila, Buenos Aires, 1988



FIORUCCI, Flavia, “Neither Warriors nor Prophets: Peronist and Antiperonist Intellectuals, 1945-1956”, tesis doctoral inédita, Institute of Latin American Studies, University of London, Londres, 2002

FRANCO, Marina, *Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y 'subversión', 1973-1976*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2012

GAMBINI, Hugo, *Arturo Frondizi*. Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 2006

GARCÍA, Daniel Alejandro, “Isauro, el Familia, la Escuelita y la interpretación autoritaria de los proyectos educativos populares”, RODRÍGUEZ, Lidia, *Educación popular en la historia reciente en Argentina y América Latina*. APPEAL, Buenos Aires, 2013, pp.173-189. Disponible en: <http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/UNIDAD%2014%20-%20Educaci%C3%B3n%20Popular.pdf> (Consultado el 04/07/2015)

GARCÍA, I. Alicia y RIVAS, Ana I., “Provincia de Tucumán: características de su hidrografía”. Disponible en: <http://ecaths1.s3.amazonaws.com/geografiadetucuman/1514926265.HIDROGRAFIA2012.doc> (Consultado el 13/06/2015)

GARCÍA BASALO, Javier, “La planificación ferroviaria argentina en el siglo XIX. Un problema historiográfico pendiente”, *XX Jornadas de Historia Económica*, Asociación Argentina de Historia Económica, Mar del Plata, 2006

GARCÍA LUPO, Rogelio, *Mercenarios y monopolios en la Argentina de Onganía a Lanusse. 1966-1971*. Achával Solo, Buenos Aires, 1971

GARCÍA SEBASTIANI, Marcela Alejandra, “La oposición política al peronismo. Los partidos políticos en Argentina entre 1943 y 1951”. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1998. Disponible en: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0043101.pdf> (Consultado el 29/03/2014)

GARZÓN ROGÉ, Mariana, “El primer peronismo desde el interior del país. Reflexiones a partir de una experiencia de investigación”, *Estudios Sociales*, N° 46, 2014, pp. 279-29

GERMANI, Gino, “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos”, *Desarrollo Económico*, Vol. 13, N° 51, 1973, pp. 435-488

GERMANI, Gino, *Política y Sociedad en una época de transición*. Paidós, Buenos Aires, 1971

GINDIN, Julián (Comp.), *Pensar las prácticas sindicales docentes*. Herramienta-AMSAFE-AGMER-ADOSAC, Buenos Aires, Rosario, 2011

GIMÉNEZ ZAPIOLA, Marcos, *El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina (hasta 1930)*. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1975

GIRBAL-BLACHA, Noemí M., ““Economía azucarera tucumana, empresarios y crédito en tiempo del Estado peronista (1946-1955)”. En: MÁCOR, Darío y TCACH, César, *La invención del peronismo al interior del país*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003

GIRBAL-BLACHA, Noemí M., “Azúcar, poder político y propuestas de concertación para el Noroeste argentino en los años '20”, *Desarrollo Económico*, Vol. 34, N° 133, 1994, pp. 107-122

GIRBAL-BLACHA, Noemí, “Estado, modernización azucarera y comportamiento empresario en la Argentina (19876-1914). Expansión y concentración de una economía regional”, *Anuario de estudios americanos*, N° 45, 1988, pp. 383-417

GOLDAR, Ernesto, *John William Cooke y el peronismo revolucionario*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985

GRAMSCI, Antonio, *Cuadernos de la cárcel*, Tomo I. Ediciones Era, Puebla, 1999

GREENBERG, Daniel J., “Sugar depression and agrarian revolt: the argentine radical party and the Tucumán cañeros’ strike of 1927”, *HAHR*, Vol. 67, N° 2, 1987, pp. 301-327. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2515025> (Consultado el 23/01/2010).

GROUSSAC, Paul et al., *Memoria histórica y descriptiva de la provincia de Tucumán*. Imprenta Biedam, Buenos Aires, 1882. Disponible en: <http://ia700303.us.archive.org/12/items/memoriahistorica00grouggoog/memoriahistorica00grouggoog.pdf> (Consultado el 23/10/2010)

GUDELEVICIUS, Mariana, “La protesta gremial docente contra el proyecto educativo de la 'Revolución Argentina’”, *Archivos de Ciencia de la Educación*, N° 5, 2011, pp. 117-129. Disponible en: [http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art\\_revistas/pr.5432/pr.5432.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5432/pr.5432.pdf) (Consultado el 10/05/2015)

GUDELEVICIUS, Mariana, “La actuación política de los docentes primarios durante la “Revolución Argentina”. Un análisis sobre características y alcances de la protesta gremial entre 1968 y 1972”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, marzo 2011. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/61103> (Consultado el 04/04/2011)

GUDELEVICIUS, Mariana, “Participación y movilización docente durante la Revolución Argentina”, Primeras jornadas de historia reciente del NOA. Disponible en: <http://www.historiaoralargentina.org/attachments/article/1erasjhrnoa/2.1%20GUDELEVICIUS.pdf> (Consultado el 22/10/2012)

GUTIÉRREZ, Florencia y LICHTMAJER, Leandro, “Apuntes para una microhistoria del mundo azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del ingenio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949)”, *Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)*, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2014

GUTIÉRREZ, Florencia y RUBINSTEIN, Gustavo, *El primer peronismo en Tucumán. Avances y nuevas perspectivas*. EDUNT, Tucumán, 2012

GUTIÉRREZ, Leandro y ROMERO, Luis Alberto, *Sectores populares. Cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*. Sudamericana, Buenos Aires, 1995

GUY, Donna J., “El azúcar y la política de recursos naturales: el estado argentino y las provincias del noroeste, 1870-1930”, en: CAMPI, Daniel (Comp.), *Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina II*. Universidad Nacional de Jujuy-Universidad Nacional de Tucumán, Jujuy, 1992

GUY, Donna J., “The rural working class in Nineteenth-century Argentina: forced plantation labor in Tucumán”, *Latin American Research Review*, Vol. 13, Nº 1, 1978, pp. 135-145

GUY, Donna J., “Tucumán sugar politics and the generation of Eighty”, *The Americas*, Vol. 32, Nº 4, 1976, pp. 566-584. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/979832> (Consultado el 27/01/2011)

HALPERÍN DONGUI, Tulio, *Revolución y guerra*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972

HOGGART, Richard, *La cultura obrera en la sociedad de masas*. Grijalbo, México, 1990

IZQUIERDO, Roberto, “La clase obrera y el segundo gobierno peronista. El caso de la huelga del tabaco de 1954”, “Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-1976)”, 4-6 de noviembre de 2010. Disponible en: <http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD2/Izquierdo.pdf> (Consultado el 15/05/2015).

JAMES, Daniel, *Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1990

JAMES, Daniel, “October 17th and 18th, 1945: Mass Protest, Peronism and the Argentine Working Class”, *Journal of Social History*, Vol. 21, Nº. 3, 1988, pp. 441-461

JAURÈS, Jean: “Lettre aux instituteurs et institutrices”, *La Dépêche de Toulouse*, 15/01/1888. Disponible en: [http://www.vie-publique.fr/documentsvp/lettre\\_jaures.shtml](http://www.vie-publique.fr/documentsvp/lettre_jaures.shtml) (Consultado el 29/03/2015)

JAURETCHE, Arturo, *El retorno al coloniaje. De Prebisch a Krieger Vasena*. Ediciones del mar dulce, Buenos Aires, 1969

KIM, Junyoung Verónica, “Desarticulando el 'mito blanco': inmigración coreana en Buenos Aires e imaginarios nacionales”, *Revista de crítica literaria latinoamericana*, Nº 71, 2010, pp. 169-193

KOTLER, Rubén Isidoro, “La alianza obrero estudiantil como respuesta a la dictadura de 1966 en la periferia argentina. El caso de Tucumán”, *Clio, Revista de pesquisa histórica*, N° 132. Disponible en: <http://www.revista.ufpe.br/revistaclio/index.php/revista/article/viewFile/360/197> (Consultado el 10/06/2015)

LABOURDETTE, Lorenzo L., “Dinámica del sindicalismo docente bonaerense en los años '70 y '80: de la “fragmentación democrática” a la “centralización burocrática””, *Razón y Revolución*, N° 28, 2015

LABOURDETTE, Lorenzo L., “Dinámica y organización del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires: 1970-1973”, III Seminario Nacional de la Red ESTRADO Argentina, Buenos Aires, septiembre 2015

LAMAS, Raúl (Dir.), *Así cayó Perón, Crónica del movimiento revolucionario triunfante*. Editorial Lamas, Buenos Aires, 1955

LAZARTE BADER, Melina, “Docencia y participación sindical. Testimonios de mujeres tucumanas”, IX Encuentro Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina, Buenos Aires, 2009. Disponible en: <http://www.historiaoralargentina.org/attachments/article/eho2009/Mundodeltrabajo/Lazararte%20Bader-Melina.pdf> (Consultado el 20/05/2015)

LENIS, María, “Estrategias corporativas frente a la primera crisis de sobreproducción azucarera en Tucumán (Argentina): de la regulación de la comercialización a la regulación de la producción, 1895-1904”, *América Latina en la Historia Económica*, N° 37, 2012, pp. 181-207

LENIS, María, “El proteccionismo en retirada. Las dificultades del Centro Azucarero Argentino (1912-1923)”, *Población y Sociedad*, N° 14-15, 2007-2008, pp. 71-104

LENIS, María y MOYANO, Daniel, “Las corporaciones empresarias: la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Centro Azucarero Argentino (CAA). La legitimación del espacio empresarial, 1894-1904”, X° Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Rosario, 2006. Edición en CD-ROM

LITTLE, Walter, “Electoral Aspects of Peronism, 1946-1954”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 15, N°. 3, agosto 1973, pp.267-284

LLAIRÓ, María Monserrat, *Frondizi: un nuevo modelo de inserción internacional*. EUDEBA, Buenos Aires, 2003

LUKÁCS, Georg, *Historia y conciencia de clase*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970. Disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/lukacs/1923/hcc.pdf> (Consultado el 15/03/2015)

LUNA, Félix, *Breve historia de la sociedad argentina*. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2009

LUQUE COLOMBRES, Carlos A., *Patrón Costas en la historia*. SEPA, Córdoba, 1991

MACKINNON, Moira, *Los años formativos del partido peronista (1946-1955)*. Instituto Di Tella-Siglo XXI, Buenos Aires, 2002

MACOR, Darío, “Radicales, demoprogresistas y antipersonalistas: oficialismo y oposición en la Santa Fe de entreguerras”. Disponible en: <http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/viewFile/98954/146847> (Consultado el 22/03/2015)

MÁCOR, Darío y TCACH, César (Eds.), *La invención del peronismo en el interior del país*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003

MANNOCCIII, Cintia, “Huelga de maestros en 1912. En contra del Estado educador y del docente servil”, *Anuario SAHE*, VOL. 14, N° 1, 2013. Disponible en: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/article/view/3040/pdf> (Consultado el 10/05/2015)

MANZANAL, Mabel, “El primer ferrocarril a Tucumán (discutiendo las razones que explican su construcción”, *Población y Sociedad*, N° 8/9, 2000-2001, pp. 1-45

MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan, “Señores de indios y pastores de almas. Encomenderos y frailes en el Tucumán del S. XVII”, *Revista Proyecto NOA*, N° 1, 1992, pp. 37-75

MARTÍNEZ, Françoise, “Vivre ensemble. Le rôle de l'école libérale dans la construction d'une citoyenneté du XXème siècle”, *Lazos*, N° 7, 2005, pp. 29-42

MARTÍNEZ TRUCCO, Amelia Bettina, *Acción gremial del magisterio de Santa Fe. Su trayectoria y aporte a la construcción del sistema educativo*. Universidad del Litoral, Santa Fe, 2004.

MARX, Karl, “Glosas marginales al programa del partido obrero alemán”, 1875. Disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm> (Consultado el 29/03/2015).

MELON PIRRO, Julio César, *El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del 55*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009

MELON PIRRO, Julio César, “Los números del ‘Recuento’. El primer test electoral del peronismo en la proscripción”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Melon1.pdf> (Consultado el 12/11/2010)

MIATELLO, Roberto A., “Migraciones de población de la provincia de Catamarca en el período 1947-1970”, *Revista geográfica*, N° 79, 1974, pp. 177-218

MIRA DELLI-ZOTTI, Guillermo, “Genealogía de la violencia argentina de los años 70”, HAOL, N.20, otoño 2009, pp. 49-59

MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan Carlos, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1984

NASSIF, Silvia, *Tucumanazos. Una huella histórica de luchas populares, 1969-1972*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2012

NASSIF, Silvia G., “Conflictividad social en la provincia de Tucumán durante la 'Revolución Argentina'. El 'Quintazo' o 'segundo tucumanazo' de 1972”, *Páginas-Revista digital de la escuela de historia de la UNR*, N° 7, 2012, pp. 73-104

NASSIF, Silvia G., “Conflictos sociales protagonizados por obreros y estudiantes en Tucumán durante 1970”, *Conflicto Social*, N° 5, 2011, pp. 175-200. Disponible en: [http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/05/10\\_nassif.pdf](http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/05/10_nassif.pdf) (Consultado el 15/05/2015)

NATERA Rivas, Juan José y BATISTA, Ana Ester, “Los cambios en el uso del suelo en el agro de Tucumán (1960-1990)”, en: BOLSI, Alfredo (Dir.), *Problemas agrarios del Noroeste argentino (contribuciones para su inventario)*. Instituto de Estudios Geográficos, Facultad de Filosofía y Letras-UNT, Tucumán, 1997

NAVARRO, Marysa, “Evita”, en: TORRE, Juan Carlos, *Nueva historia Argentina*, Tomo VIII. Sudamericana, Buenos Aires, 2002

NIGRO, Juan Carlos, *La Lucha de los Maestros*. Editorial Confederación de Maestros, Buenos Aires, 1984

O'DONNELL, Guillermo, *Modernización y autoritarismo*. Paidós, Buenos Aires, 1972

ORQUERA, Fabiola (Coord.), *Ese ardiente jardín de la república. Formación y desarticulación de un “campo” cultural: Tucumán, 1880-1975*. Alción, Córdoba, 2010

ORTIZ DE D'ARTERIO, Julia P., “Noroeste Argentino: migraciones de nativos”, *Breves contribuciones del IEG*, Vol. 1, N°4, 1987

PÁEZ DE LA TORRE, Carlos (h), *Historia de Tucumán*. Plus Ultra, Buenos Aires, 1987

PALERMO, Silvana, “Actores e instituciones en la construcción de los ferrocarriles del Estado (1862 – 1916)”, *Vº Coloquio de Historia de Empresas “Investigaciones en curso en la historiografía argentina”*, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2007

PALERMO, Vicente, “El siglo peronista”, *Punto de Vista*, n° 89, 2007. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/palermo3.pdf> (Consultado el 28/10/2010)



PARRA, Graciana, “El ‘reformismo social’ conservador tucumano: el partido “Bandera Blanca” (1927– 1934)”, Tesis de licenciatura inédita, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2006

PAROLO, María Paula, “Categorías ocupacionales y actores económicos. Los sectores mercantiles en Tucumán (1800-1870)”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’*, N° 27, 2005. Disponible en: [http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S052497672005000100003&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S052497672005000100003&script=sci_arttext) (Consultado el 12/05/2015)

PAROLO, María Paula, “Estructura socio-ocupacional en Tucumán. Una aproximación a partir del censo de 1812”, *Población y sociedad*, N° 3, 1995, pp.35-61. Disponible en: <http://www.poblacionysociedad.org.ar/archivos/3/P&S-V3-Parolo.pdf> (Consultado el 12/05/2015)

PATERLINI DE KOCH, Olga, *Pueblos azucareros de Tucumán*. Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Tucumán, 1987

PAVETTI, Óscar Américo, “Azúcar y Estado en la década de 1960”, en: BONANO, Luis Marcos, *Estudios de Historia Social de Tucumán. Educación y política en los siglos XIX y XX*, Vol. II. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2001

PEÑA, Milcíades, *Masas, caudillos y elites*. Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1971

PERALTA RAMOS, Mónica, *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. FCE, Buenos Aires, 2007

PILIPONSKY, Esteban, “De las calles a las urnas. Movimiento obrero, izquierdas y laboristas en Tucumán durante la campaña electoral de 1946”, *Coordenadas, Revista de Historia local y regional*, N°2, 2014, pp. 118-145

PILIPONSKY, Esteban, “¿Sindicatos fuertes con poder de negociación débil? Análisis del sindicalismo tucumano previo al surgimiento del peronismo”, *Acontracorriente*, Vol. 10, N°1, 2012, p. 310-333

PITA GONZÁLEZ, Alexandra, “La internacionalización del magisterio americano: propuestas educativas y tensiones políticas”, *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, Vol. 13, N° 17, 2011, pp. 237-262. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/869/86922615010.pdf> (Consultado el 07/07/2015)

PLOTKIN, Mariano, *Mañana es San Perón*. Ariel, Buenos Aires, 1993

POTASH, Robert, *El ejército y la política en la Argentina, 1928-1945*. Sudamericana, Buenos Aires, 1971

PUCCI, Roberto, “Pasado y presente de la universidad tucumana”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pucci.pdf> (Consultado el 15/05/2015)

PUCCI, Roberto, *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966*. Ediciones del Pago Chico, Buenos Aires, 2007

PUCCI, Roberto, “La población y el auge azucarero en Tucumán”, *Breves contribuciones del IEG*, N° 7, 1992

PUIGGRÓS, Adriana, *Dictaduras y utopías en la historia reciente de la educación argentina (1955-1983)*, *Historia de la Educación Argentina*, tomo VIII. Galerna, Buenos Aires, 1997

RAMÍREZ, Ana Julia, “La protesta en la provincia de Tucumán, 1965-1969”. Disponible en: [http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/2j\\_ramirez.pdf](http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/2j_ramirez.pdf) (Consultado el 20/05/2012)

REBUELTO, Emilio, “Historia del desarrollo de los ferrocarriles argentinos”, SHICKENDANTZ, E y REBUELTO, E, *Los ferrocarriles en Argentina*. Fundación Museo Ferroviario, Buenos Aires, 1994

RECALDE, Aritz, *El pensamiento de John William Cooke en las cartas a Perón, 1956-1966*. Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2009

REIN, Raanan, “El primer peronismo sin Perón: la Unión Popular durante la Revolución Libertadora”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Rein.pdf> (Consultado el 03/12/2010)

REIN, Raanan; BARRY, Carolina; ACHA, Omar y QUIROGA, Nicolás, *Los estudios sobre el primer peronismo. Aproximaciones desde el siglo XXI*. Instituto cultural de la provincia de Buenos Aires, La Plata, 2010

ROCK, David, *La construcción del Estado y los movimientos políticos en la Argentina, 1860-1916*. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006

ROCK, David, *El Radicalismo Argentino, 1890-1930*. Amorrortu, Buenos Aires, 1997

RODRÍGUEZ, Laura Graciela, “Iglesia y educación en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX”, *Cadernos de História da Educação*, Vol. 14, N°1, 2015, pp. 263-278. Disponible en: <http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/32125/17341> (Consultado el 06/11/2015)

RODRÍGUEZ, Laura Graciela, “Funcionarios y políticas educativas en Argentina (1976-1983)”, *Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación*, N° 4, junio 2015, pp.62-85. Disponible en: <http://www.historiadelaeducacion.cl/> (Consultado el 17/06/2015)

RODRÍGUEZ, Laura Graciela, “Los católicos y la educación en el tercer peronismo (1973-1973)”, *Anuario SAHE*, Vol. 14, N° 2, 2013. Disponible en: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/article/view/2715/pdf> (Consultado el 20/05/2015)



RODRÍGUEZ, Laura Graciela, *Civiles y militares en la última dictadura. Funcionarios y políticas educativas en la provincia de Buenos Aires (1976-1983)*, Prohistoria, Rosario, 2012

RODRÍGUEZ, María Soledad, “Formas de organización y lucha de los trabajadores de la educación en Argentina, durante el peronismo (1943-1955)”, en: Acri, Martín (Comp.), *Conflictos pedagógicos, lucha y organización de los docentes en Argentina, 1881-1973*. Barcos Ediciones, Buenos Aires, 2012, pp. 179-217.

RODRÍGUEZ LAMAS, Daniel, *Rawson/Ramírez/Farrell*. CEAL, Buenos Aires, 1983.

ROMERO, José Luis, *Las ideas políticas en la Argentina*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1956

ROMERO, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina, 1916-1999*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007

ROMERO, Luis Alberto, “El apogeo de la sociedad de masas”, *Efedeportes*, N° 50, 2002. Disponible en: <http://www.efdeportes.com/efd50/romero1.htm> (Consultado el 23/02/2010)

ROSENZVAIG, Eduardo, *La oruga sobre el pizarrón*. Colihue, Buenos Aires, 2006.

ROSENZVAIG, Eduardo, “Mitología y utopismo del azúcar”, *Anuario Antropología*, N° 29, 1992, pp. 377-396

ROUQUIÉ, Alain, *Á l'ombre des dictateurs. La démocratie en Amérique latine*. Albin Michel, París, 2010

RUBINSTEIN, Gustavo, *Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo tucumano*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2006

RUBINSTEIN, Gustavo, “El estado peronista y la sindicalización de los trabajadores azucareros”. En: MÁCOR, Darío y TCACH, César, *La invención del peronismo al interior del país*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003

RUBINSTEIN, Gustavo, “Evolución de los salarios de los obreros azucareros durante el primer peronismo (1946-1949)” 5° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo-ASET, 2001. Disponible en: <http://www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/RUBINSTEIN.PDF> (Consultado el 13 de abril de 2011)

SÁENZ QUESADA, María, *La libertadora: 1955-1958*. Sudamericana, Buenos Aires, 2007

SALVARREY, Leandro, “CTERA: un largo camino de lucha hacia la unidad sindical”, en: Acri, Martín (Comp.), *Conflictos pedagógicos, lucha y organización de los docentes en Argentina, 1881-1973*. Barcos Ediciones, Buenos Aires, 2012, pp. 217-247.

SÁNCHEZ ROMÁN, José Antonio, *La dulce crisis: estado, empresarios e industria azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914)*. CSIC-EEHA-Diputación de Sevilla, 2005

SÁNCHEZ ROMÁN, José Antonio, “La industria azucarera en Argentina (1860-1914). El mercado interno en una economía exportadora”, *Revista de Indas*, Vol. 65, N° 233, pp. 147-172

SÁNCHEZ SORONDO, Marcelo, *Libertades prestadas. La Argentina del tiempo perdido*. Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 1970

SANDOVAL, Alicia T., *La revolución de 1943: políticas y conflictos rurales*. Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1988

SANJURJO, María Ester, “La educación y la oferta de mano obra en Argentina”, *Desarrollo Económico*, Vol. 2, N° 3, 1962, pp. 99-117

SANTAMARÍA, Daniel J., “Estado, industria azucarera y conflicto social en Tucumán durante el segundo gobierno radical (1922-28)”, *Revista de Indias*, N° 175, 1985, pp. 161-180

SARMIENTO, Domingo Faustino, *De la educación popular* [1ª edición, Imprenta Julio Benín, Santiago, 1849]. En: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/de-la-educacion-popular--0/> (Consultado el 26/04/2015)

SCHNEIDER, Alejandro, *Los compañeros: izquierda, trabajadores y peronismo en la Argentina, 1950-1973*. Imago Mundi, Buenos Aires, 2005

SCHLEH, Emilio, *Composición legal sobre el azúcar. Leyes, decretos, resoluciones sobre el régimen de la industria, desde el 1 de junio de 1946 al 31 de diciembre de 1947*. Ferrari Hnos., Buenos Aires, 1947

SCHULMAN, José Ernesto, *La Rioja que resiste. Educación y lucha de clases. Historia del sindicalismo docente*. AMP Ediciones, La Rioja, 2002

SCHVARZER, Jorge y GÓMEZ, Teresita, *La primera gran empresa de los argentinos. El ferrocarril del Oeste (1854 – 1862)*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006

SENÉN GONZÁLEZ, Santiago y TORRE, Juan Carlos, *Ejército y sindicatos. Los 60 días de Lonardi*. Editorial Galerna, Buenos Aires, 1969

SIDICARO, Ricardo, *La política desde arriba. Las ideas del diario La Nación, 1909-1989*. Sudamericana, Buenos Aires, 2003

SOLARI, Manuel H., *Historia de la educación argentina*. Paidós, Buenos Aires, 1981 (1ª edición de 1949)

SPINELLI, María Stela, “La desperonización. Una política de amplio alcance (1955-1958)”. Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf> (Consultado el 28/10/2010).

SUAYTER, María Adela, “Historia de la educación pública en Tucumán: 1880-1945”, OSSANA, Edgardo y ARTIEDA, Teresa (Comps.), *La educación en las provincias y territorios nacionales (1885-1945)*. Galerna, Buenos Aires, 2001

SUAYTER, María A.; FERREYRA DE VIZGARRA, María E.; DEL VALLE FERREYRA, Alba Noemí, “Historia de la educación pública en Tucumán, 1945-1985”, PUIGGRÓS, Adriana (Coord.), *Historia de la educación en la Argentina*, Vol. VII. Editorial Galerna, Buenos Aires, 1997

SWEENEYS, Ernest S., *Robustiano Patrón Costas: una leyenda argentina*. Emecé Editores, Buenos Aires, 1998

TABOADA, María Estela y LOBO, Héctor Ángel, *Los dueños de la zafra. Vida y trabajo en un ingenio azucarero*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1996

TAIRE, Juan Octaviano, *Azúcar para el monopolio*. Ediciones del Pago Chico, Buenos Aires, 2006

TARONCHER, Miguel Ángel, *La caída de Illia: la trama oculta del poder mediático*. Vergara, Buenos Aires, 2009

TCACH, César, “El enigma peronista: la lucha por su interpretación”, *Historia Social*, N°. 43, 2002, pp. 129-139

TCACH, César y MACOR, Darío, *La invención del peronismo en el interior del país II*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2013

TCACH, César y MACOR, Darío, *La invención del peronismo en el interior del país*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003

TCACH, César y RODRÍGUEZ, Celso, *Arturo Illia: un sueño breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966*. Edhasa, Buenos Aires, 2006

TEDESCO, Juan Carlos, *Educación y sociedad en la Argentina (1880-1900)*. Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1970

THOMAS, Jean Baptiste, “Insubordination ouvrière en Argentine (1973-1976). Contribution à l'élaboration d'un 'cinquième récit' des années 1970”, Tesis doctoral inédita, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2014

THOMPSON, E. P., *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Crítica, Barcelona, 1989

THOMPSON, E.P., *Agenda para una historia social radical*. Crítica, Barcelona, 2000

TÍO VALLEJO, Constanza, “El integrismo católico argentino: principio, propuestas y proyecciones tucumanas de la ley de enseñanza religiosa de 1947”, BONANO, Luis Marcos y PUCCI, Roberto (Comp.), *Autoritarismo y dictadura en Tucumán. Estudios sobre cultura, política y educación*. Catálogos, Buenos Aires, 2009

TORRE, Juan Carlos, *Nueva historia Argentina*, Tomo VIII. Sudamericana, Buenos Aires, 2002

TORRE, Juan Carlos, *La vieja guardia sindical y Perón*. Sudamericana, Buenos Aires, 1990

TORRE, Juan Carlos, *El proceso político interno de los sindicatos en Argentina*. Instituto Torcuato di Tella- CIS, Buenos Aires, 1974

TOSCANO, Diego Esteban, “Luchas y resistencias contra los intentos de reforma del Estatuto Docente. El caso de la provincia de Tucumán”, XVII Jornadas Argentinas de Historia de la Educación, Tucumán, 2012

ULLIVARRI, María, “La miseria del hogar como discurso público. Estrategias obreras en épocas de crisis. Tucumán durante los primeros años treinta”, *Anos 90*, Vol. 19, N° 36, 2012, pp. 339-365

ULLIVARRI, María, “Sindicatos en la 'capital del azúcar'. Organización y lucha en el mundo del trabajo de la provincia de Tucumán (Argentina), 1930-1943”, *Historia Agraria*, N° 55, 2011, pp. 101-133

ULLIVARRI, María, “Trabajadores, sindicatos y política en Tucumán”, Tesis doctoral inédita, Universidad de Buenos Aires, 2010

ULLIVARRI, María, “Política, antifascismo y movimiento obrero. Tucumán 1935-1936”, *Población y sociedad*, Vol. 16, 2009, pp. 283-316. Disponible en: <http://www.poblacionysociedad.org.ar/archivos/16/P&S-V16-Ulivarri.pdf> (Consultado el 13/04/2015)

ULLIVARRI, María, “El Partido en su laberinto. La Federación Socialista Tucumana, 1931-1937”, *Historia Regional*, N° 26, 2008, 99. 137-164

VÁZQUEZ, Silvia Andrea, “Las identidades laborales de los docentes y la acción político-sindical”, VII Seminario Redestrado-Nuevas regulaciones en América Latina, Buenos Aires, 3-5 de julio de 2008. Disponible en: [http://www.fae.ufmg.br/estrado/cdrom\\_seminario\\_2008/textos/ponencias/Ponencia%20Silvia%20Vazquez.pdf](http://www.fae.ufmg.br/estrado/cdrom_seminario_2008/textos/ponencias/Ponencia%20Silvia%20Vazquez.pdf) (Consultado el 20/05/2015)

VÁZQUEZ, Silvia Andrea; BALDUZZI, Juan, *De apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente, 1957-1973*. Ediciones CTERA, Buenos Aires, 2000

WAISMAN, Carlos H., *Modernización y legitimación: la incorporación de la clase obrera al sistema político*. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1980

WIÑAR, David, L., “Aspectos sociales del desarrollo educativo argentino, 1900-1970”, *Revista del Centro de Estudios Educativos*, Vol. 4, Nº 4, 1974, pp. 9-35

WELLHOFER, E. Spencer, “Peronism in Argentina: The Social Base of the First Regime, 1946-1955”, *The Journal of Developing Areas*, Vol. 11, Nº. 3, abril 1977, pp. 335-356

ZANATTA, Loris, *Perón y el mito de la Nación católica*. Sudamericana, Buenos Aires, 1999

ZINK, Mirta; DI LISCIA, María Herminia: “Gestar una ciudadanía política. La incorporación de las mujeres al Estado peronista, apoyos y resistencias (1945-1955)”, BRAVO, María Celia; GIL LOZABI, Fernanda y PITA, Valeria Silvina: *Historias de luchas, resistencias y representaciones. Mujeres en la Argentina, siglos XIX y XX*. EDUNT, Tucumán, 2008